CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
12 JUN. 2024
RECIBIDO
Firma: Hora: 10:24

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO
Periodo anual de Sesiones 2023 – 2024

Señor Presidente:

Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento:

El **Proyecto de Ley 7752/2023-PE**, Ley que delega en el Poder Ejecutivo a facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

El presente dictamen fue aprobado por **MAYORÍA** en la Vigesimoquinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, de fecha 11 de junio de 2024, con el voto a favor de los congresistas: Moyano Delgado, Martha Lupe; Aguinaga Recuenco, Alejandro Aurelio; Castillo Rivas, Eduardo Enrique; Ventura Ángel, Héctor José; Juárez Gallegos, Carmen Patricia; Camones Soriano, Lady Mercedes; Salhuana Cavides, Eduardo; Alva Prieto, María del Carmen; Gonzales Delgado, Diana Carolina; Elías Ávalos, José Luis; Marticorena Mendoza, Jorge Alfonso (con reserva); Muñante Barrios, Alejandro (con reserva); Burgos Oliveros, Juan Bartolomé (con reserva); con el voto en contra de los congresistas: Cerrón Rojas, Waldemar José; Taipe Coronado, María Elizabeth; Reymundo Mercado, Edgard Cornelio; Cutipa Ccama, Víctor Raúl; con el voto en abstención de los congresistas: Paredes Gonzales, Alex Antonio; Tacuri Valdivia, Germán Adolfo; Espinoza Vargas, Jhaec Darwin; Aragón Carreño, Luis Ángel.

I. SITUACIÓN PROCESAL

El Proyecto de ley **7752/2023-PE**, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional, fue presentado al Congreso de la República el 03 de mayo de 2024 y decretado a la Comisión de Constitución y Reglamento en la misma fecha como única comisión dictaminadora.

II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Teniendo como referencia el año 2000 a la fecha, se ha delegado facultades para legislar al Poder Ejecutivo en distintas materias, oportunidades y periodos parlamentarios, tal como se detalla en el cuadro siguiente.

Cuadro 1
Delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por período parlamentario (2000-2024)

Proyecto	Presentación	Aprobación	Ley	Sumilla	Plazo
Periodo Parlamentario 2000-2001					
1247/2000-PE	17/01/2001	24/01/2001	27426	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de inspecciones en el trabajo y de defensa del Trabajador	30 días calendario
1251/2000-PE	18/01/2001	22/02/2001	27434	Ley que delega facultades legislativas en materia tributaria al Poder Ejecutivo al amparo del Artículo 104° de la Constitución Política del Perú.	60 días útiles
Periodo Parlamentario 2001-2006					
5154/2002-PE	7/01/2003	8/01/2003	27913	Ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo para legislar en materia de terrorismo	30 días hábiles
8068/2003-PE	1/09/2003	25/09/2003	28079	Ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria	90 dias hábiles
10812/2003-PE	14/06/2004	24/06/2004	28269	Ley que delega facultades legislativas en materia procesal penal al Poder Ejecutivo al amparo del articulo 104 de la Constitución	30 dias útiles
13816/2005-PE	3/10/2005	17/11/2005	28636	Ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo ara que dicte el nuevo Código de Justicia Militar Policial	35 días calendario
Periodo Parlamentario 2006-2011					
715/2006-PE	24/11/2006	14/12/2006	28932	Ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria	90 días calendario

1237/2006-PE	21/04/2007	26/04/2007	29009	Ley que otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso	60 días hábiles
1979/2007-PE	12/12/2007	14/12/2007	29157	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento	180 días calendario
3908/2009-PE	13/03/2010	10/06/2010	29548	Ley que otorga facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia Militar-Policial, el uso de la fuerza y normas procesales y penitenciarias relacionadas a militares y policías procesados o condenados	60 días hábiles
Periodo Parlamentario 2011-2016					
625/2011-PE	12/12/2011	22/12/2011	29815	Deléguese en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de minería ilegal	120 días calendario
1091/2011-PE	7/05/2012	31/05/2012	29884	Ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, aduanera y de delitos tributarios y aduaneros	45 días calendario
01380/2012-PE	6/08/2012	9/08/2012	29915	Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional del Sector Interior y de Defensa Nacional	90 días calendario
2417/2012-PE	26/06/2013	16/07/2013	30073	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud	120 días calendario
4562/2014-PE	02/06/2015	18/06/2015	30335	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en	90 días calendario

				materia administrativa, económica y financiera	
4569/2014-PE	08/06/2015	18/06/2015	30336	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado	90 días calendario
Periodo Parlamentario 2016-2021					
228/2016-PE	8/09/2016	29/09/2016	30506	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.	90 días calendario
2791/2017-PE	2/05/2018	19/06/2018	30823	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado	60 días calendario
2849/2017-PE	11/05/2018	17/05/2018	30776	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios	60 días calendario
4895/2020-PE	26/03/2020	26/03/2020	31011	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19	45 días calendario
5326/2020-PE	22/05/2020	23/05/2020	31020	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios	7 días calendario

				y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19	
Periodo Parlamentario 2021-2026					
0583/2021-PE	27/10/2021	27/12/2021	31380	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales	90 días calendario
3941/2022-PE	10/01/2023	28/02/2023	31696	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del estado	90 días calendario
5632/2023-PE	28/07/2023	20/09/2023	31880	Ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-niño global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia.	90 días calendario

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2023-2024.

III. OPINIONES SOLICITADAS Y RECIBIDAS

3.1. Opiniones solicitadas

Mediante los Oficios del 1582-2023-2024-CCR/CR al 1670-2023-2024-CCR/CR se solicitó opinión a las distintas Comisiones Ordinarias del Congreso de la República, entidades públicas, especialistas y a sectores involucrados con las materias solicitadas en el proyecto de ley. A continuación se muestra el detalle:

Cuadro 2
Opiniones solicitadas sobre el Proyecto de Ley 7752/2023-PE

Oficio N°	Entidad	Nombre	Fecha de envío	Respuesta
1582-2023-2024-CCR/CR	Comisión Agraria	Cruz María Zeta Chunga	09/05/2024	-

1583-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología	Carlos Javier Zeballos Madariaga	09/05/2024	04/06/2024
1584-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Comercio Exterior y Turismo	Hamlet Echevarría Rodríguez	09/05/2024	30/05/2024
1585-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural	Segundo Héctor Acuña Peralta	09/05/2024	16/05/2024
1586-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos	Wilson Soto Palacios	09/05/2024	22/05/2024
1587-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado	Alejandro Enrique Cavero Alva	09/05/2024	30/05/2024
1588-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas	Patricia Rosa Chirinos Venegas	09/05/2024	04/06/2024
1589-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia	César Manuel Revilla Villanueva	09/05/2024	06/06/2024
1590-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Educación, Juventud y Deporte	José María Balcázar Zelada	09/05/2024	-
1591-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Energía y Minas	Segundo Teodomiro Quiroz Barboza	09/05/2024	24/05/2024
1592-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Fiscalización y Contraloría	Segundo Toribio Montalvo Cubas	09/05/2024	-
1593-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad	Yorel Kira Alcarraz Agüero	09/05/2024	27/05/2024
1594-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Inteligencia	José Ernesto Cueto Aservi	09/05/2024	29/05/2024

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

1595-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Justicia	Américo Gonza Castillo	09/05/2024	-
1596-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Mujer y Familia	María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez	09/05/2024	29/05/2024
1597-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República	José Enrique Jerí Oré	09/05/2024	-
1598-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas	Jorge Alberto Morante Figari	09/05/2024	05/06/2024
1599-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología	Ruth Luque Ibarra	09/05/2024	04/06/2024
1600-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Relaciones Exteriores	Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco	09/05/2024	04/06//2024
1601-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Salud y Población	Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros	09/05/2024	29/05/2024
1602-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Trabajo y Seguridad Social	Pasión Neomias Dávila Atanacio	09/05/2024	-
1603-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Transportes y Comunicaciones	Eduardo Salhuana Cavides	09/05/2024	29/05/2024
1604-2023-2024-CCR/CR	Comisión de Vivienda y Construcción	María Antonieta Agüero Gutiérrez	09/05/2024	-
1605-2023-2024-CCR/CR	Asociación de Bancos del Perú - ASBANC	Martín Naranjo Landerer	09/05/2024	-
1606-2023-2024-CCR/CR	Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX	Alonso Rey Bustamante	09/05/2024	29/05/2024
1607-2023-2024-CCR/CR	Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú - AGAP	Gabriel Amaro Alzamora	09/05/2024	24/05/2024

1608-2023-2024-CCR/CR	Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional - AFIN	Leonie Roca Voto Bernales	09/05/2024	23/05/2024
1609-2023-2024-CCR/CR	Sociedad Nacional de Pesquería - SNP	Eduardo Ferreyros Kuppers	09/05/2024	-
1610-2023-2024-CCR/CR	Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos del Perú - ALAFARPE	Diego Hovispo Mendizábal	09/05/2024	-
1611-2023-2024-CCR/CR	Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía	Víctor Gobitz Colchado	09/05/2024	-
1612-2023-2024-CCR/CR	Asociación de Exportadores - ADEX	Juan Pérez Alván	09/05/2024	-
1613-2023-2024-CCR/CR	Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO	Jorge Alberto Zapata Ríos	09/05/2024	-
1614-2023-2024-CCR/CR	Cámara de Comercio de Lima - CCL	Roberto de la Tore Aguayo	09/05/2024	03/06/2024
1615-2023-2024-CCR/CR	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI	Alberto Villanueva Eslava	09/05/2024	24/05/2024
1616-2023-2024-CCR/CR	Asociación de Seguridad Privada del Perú - ASEPRI	Alice Mirella Velásquez Castro	09/05/2024	-
1617-2023-2024-CCR/CR	Colegio de Abogados de Lima - CAL	Raúl Canelo Rabanal	09/05/2024	-
1618-2023-2024-CCR/CR	Especialista en Derecho Constitucional. Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento	Enrique Ghersi Silva	09/05/2024	-
1619-2023-2024-CCR/CR	Especialista en Derecho Constitucional. Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento	Jorge Luis Cáceres Arce	09/05/2024	-

1620-2023-2024-CCR/CR	Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento	Arsenio Oré Guardia	09/05/2024	04/06/2024
1648-2023-2024-CCR/CR	Poder Judicial del Perú	Javier Arévalo Vela	17/05/5024	-
1649-2023-2024-CCR/CR	Fiscalía de la Nación	Juan Carlos Villena Campana	17/05/5024	-
1650-2023-2024-CCR/CR	Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRÁN	Verónica Zambrano Copello	17/05/5024	22/05/2024
1651-2023-2024-CCR/CR	Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL	Rafael Eduardo Muente Schwarz	17/05/2024	24/05/2024 27/05/2024
1652-2023-2024-CCR/CR	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS	Mauro Orlando Gutiérrez Martínez	17/05/2024	29/05/2024
1653-2023-2024-CCR/CR	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas - OSINERGMIN	Omar Franco Chambergo Rodríguez	17/05/2024	03/06/2024
1655-2023-2024-CCR/CR	Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú - ASEI	José Espantoso Salom	20/05/2024	29/05/2024
1656-2023-2024-CCR/CR	Asociación Peruana de Energías Renovables - SPR	Brendan Oviedo Doyle	20/05/2024	27/05/2024
1669-2023-2024-CCR/CR	Procapitales	Andrés Kuan-Veng	03/06/2024	-
1670-2023-2024-CCR/CR	Asociación de Sociedad Administradoras de Fondos de Inversión (ASAFI)	Joaquín Brignardello Barreda	03/06/2024	-

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2023-2024

3.2. Opiniones recibidas

A la fecha del presente dictamen, se recibieron las siguientes respuestas:

3.2.1. Comisiones Ordinarias del Congreso de la República

Cuadro 3
Opiniones recibidas – Comisiones Ordinarias

Oficio N°	Entidad	Nombre	Respuesta
00644-2023-2024-CCIT-CR	Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología	Carlos Javier Zeballos Madariaga	04/06/2024
0439–2023 -2024-CCEYT-HER-CR	Comisión de Comercio Exterior y Turismo	Hamlet Echevarría Rodríguez	30/05/2024
1595-2023-2024-CCPC/CR	Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural	Segundo Héctor Acuña Peralta	16/05/2024
506-2023-2024/CODECO-CR	Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos	Wilson Soto Palacios	22/05/2024
1345-2023-2024/CDRGLMGE-ACA-CR	Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado	Alejandro Enrique Cavero Alva	30/05/2024
2612-2023-2024/CDNOIDALCD-CR(Reg.2321)	Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas	Patricia Rosa Chirinos Venegas	04/06/2024
2033-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR	Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia	César Manuel Revilla Villanueva	06/06/2024
1480-2023-2024-CEM/CR	Comisión de Energía y Minas	Segundo Teodomiro Quiroz Barboza	24/05/2024

1347-2023-2024/ CISPCD/CR	Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad	Yorel Kira Alcarraz Aguero	27/05/2024
145-2023-2024-CI-CR	Comisión de Inteligencia	José Ernesto Cueto Aservi	29/05/2024
1052-2022-2023-CMF/CR	Comisión de Mujer y Familia	María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez	29/05/2024
0825-2023-2025-CPMPEC/CR	Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas	Jorge Alberto Morante Figari	05/06/2024
3023-CPAAAAE-CR	Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología	Ruth Luque Ibarra	04/06/2024
666-2023-2024-CRREE-AAR	Comisión de Relaciones Exteriores	Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco	04/06/2024
CSP/2023-2024-CR	Comisión de Salud y Población	Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros	29/05/2024
1667-2023-2024/CTC-CR	Comisión de Transportes y Comunicaciones	Eduardo Salhuana Cavides	29/05/2024
.2470-2023-2024-CJDDHH/CR	Comisión de Justicia y Derechos Humanos	Américo Gonza Castillo	11/06/2024
798-2023-2024-CMMFCPHC-HMPL-CR	Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y control del Programa Hambre Cero)	Hilda Marleny Portero López	11/06/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2023-2024

3.2.2. Instituciones y sectores involucrados

Cuadro 4
Opiniones recibidas – Instituciones y sectores

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

Oficio N°	Entidad	Nombre	Respuesta
122-2024-DE-COMEXPERU	Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX	Alonso Rey Bustamante	29/05/2024
CARTAN°066/2024	Asociación de Gremios Productores Ágrarios del Perú - AGAP	Gabriel Amaro Alzamora	24/05/2024
023.06.2024/DNPACG	Cámara de Comercio de Lima - CCL	Roberto de la Tore Aguayo	03/06/2024
000111-2024-PRE/INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI	Alberto Villanueva Eslava	24/05/2024
0206 -20 2 4 -PD -OSITRAN	Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRÁN	Verónica Zambrano Copello	22/05/2024
00168-PE/2024 00171-PE/2024	Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL	Rafael Eduardo Muente Schwarz	24/05/2024 27/05/2024
00212-2024-SUNASS-GG	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS	Mauro Orlando Gutiérrez Martínez	29/05/2024
193-2024-OS/PRES	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas - OSINERGMIN	Omar Franco Chambergo Rodríguez	03/06/2024
141-2024/INSTITUCIONAL-ASEI	Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú - ASEI	José Espantoso Salom	29/05/2024
SPR-39-2024	Asociación Peruana de Energías Renovables - SPR	Brendan Oviedo Doyle	27/05/2024

PE-SGPL-013-2024	Sociedad Peruana de Gas Licuado	Jovan Pastor	27/05/2024
S/N	Asociación Latinoamericana de Internet	Pablo Nieto D.	04/06/2024
20-2024-SPH/P	Sociedad Peruana de Hidrocarburos	Felipe Cantuarias Salaverry	05/06/2024
218-2024-SIN-GG	Sociedad Nacional de Industrias	Antonio Castillo Garay	11/06/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2023-2024

3.2.3. Especialistas y miembros del Consejo Consultivo de la Comisión

Cuadro 5
Opiniones recibidas – Especialistas

Oficio N°	Entidad	Nombre	Fecha de envio	Respuesta
S/N	Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento	Arsenio Oré Guardia	09/05/2024	04/06/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2023-2024

3.2.4. Opiniones ciudadanas

A la fecha de redacción del presente apartado, sobre el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, consta en la web del Congreso de la República[1] las siguientes opiniones ciudadanas:

Cuadro 6

[1] El detalle con el contenido de cada una de las opiniones puede ser revisado en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/5632

Opiniones ciudadanas

Nombre	Sentido de la opinión	Fecha
CONFEDERACIÓN INTERSECTORIAL DE TRABAJADORES ESTATALES DEL PERÚ	En contra de otorgar facultades sobre negociación colectiva	15/05/2024 20/05/2024 21/5/2024
SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE CHANCHAMAYO	En contra de otorgar facultades sobre negociación colectiva	24/05/2024
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL DEL PERÚ – CONFEMIN PERÚ	En contra de otorgar facultades sobre pequeña minería y minería artesanal	28/05/2024
SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA – SITRAMUN SEC	En contra de otorgar facultades sobre negociación colectiva	05/06/2024
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LORETO - FETRAMUN	En contra de otorgar facultades sobre negociación colectiva	05/06/2024
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - FENTENAPU	En contra de la modificación del Decreto Legislativo N°98 – Ley de creación de la Empresa Nacional de Puertos	05/06/2024
SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DEL PERÚ	En contra de otorgar facultades sobre negociación colectiva	06/06/2024

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2023-2024

3.3. Mesa Técnicas

Los días 21, 22 y 23 de mayo de 2024 se llevaron a cabo mesas técnicas de trabajo con la participación de representantes y funcionarios de distintos ministerios y entidades públicas, así como de asesores de grupos parlamentarios, de despachos parlamentarios y el equipo técnico de la Comisión de Constitución y Reglamento,

con la finalidad de recibir la exposición y sustentación detallada de cada una de las materias y submaterias contenidas en el proyecto de ley 7752/2023-PE, lo que permitió conocer de manera más precisa los objetivos que persiguen cada una de ellas así como la absolución de consultas sobre las mismas.

Dichas mesas técnicas se llevaron a cabo de acuerdo con el siguiente cronograma:

Cuadro 7
Mesa Técnicas

Fecha: martes 21.05.24

MATERIA	SECTOR	SUBMATERIA
	TURNO MAÑANA (10:00 – 13:00)	
3.1 En materia de fortalecimiento y simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público – privada, y gestión de servicios públicos.	Ministerio de Economía y Finanzas	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
	Ministerio del Ambiente	3.1.7, 3.1.8,
	Ministerio de Relaciones Exteriores	3.1.9, 3.1.10, 3.1.11
	Ministerio de Cultura	3.1.23, 3.1.24, 3.1.25, 3.1.26
	TURNO TARDE (14:30 – 18:00)	
	Ministerio de Cultura	3.1.27, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.30, 3.1.31, 3.1.32
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.1.12
	Ministerio de Energía y Minas	3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20
	Ministerio de Educación	3.1.16, 3.1.43, 3.1.44, 3.1.45

Fecha: miércoles 22.05.24

MATERIA	SECTOR	SUBMATERIA
	TURNO MAÑANA (10:00 – 13:00)	
3.1 En materia de fortalecimiento y simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público – privada, y gestión de servicios públicos.	Ministerio de Salud	3.1.21, 3.1.22, 3.1.50, 3.1.51
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	3.1.33, 3.1.34, 3.1.35
	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3.1.36, 3.1.37, 3.1.38
	Ministerio de la Producción	3.1.39, 3.1.40, 3.1.41, 3.1.42, 3.1.49

	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	3.1.46, 3.1.47
	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	3.1.48
	TURNO TARDE (14:30 – 18:00)	
	Presidencia del Consejo de Ministros	3.1.52, 3.1.53, 3.1.54, 3.1.55, 3.1.56, 3.1.57, 3.1.58, 3.1.59
MATERIA	**SECTOR**	**SUBMATERIA**
3.2 En materia de mejora de la calidad dela inversión pública	Ministerio de Economía y Finanzas	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5
	Ministerio de Defensa	3.2.6
	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	3.2.7
	Presidencia del Consejo de Ministros	3.2.8
3.3 En materia de fortalecimiento de la actividad empresarialdel Estado	Ministerio de Economía y Finanzas	3.3.1, 3.3.2

Fecha: jueves 23.05.24

MATERIA	**SECTOR**	**SUBMATERIA**
	TURNO MANANA (10:00 – 13:00)	
3.4 En materia de reducción de costos de transacción	Ministerio de Economía y Finanzas	3.4.1, 3.4.2
	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.4.3, 3.4.4
3.5 En materia de acceso y competencia en servicios financieros	Ministerio de Economía y Finanzas	3.5.1, 3.5.2, 3.5.3
	Ministerio de Desarrollo Agrarioy Riego	3.5.4
3.6 En materia de equilibrio fiscal	Ministerio de Economía y Finanzas	3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7
3.7 En materia tributaria	Ministerio de Economía y Finanzas	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3
MATERIA	**TURNO TARDE (14:30 – 18:00)**	
3.8 Política criminológica y penitenciaria	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	3.8.1
	Ministerio de Justicia yDerechos Humanos	3.8.2, 3.8.3, 3.8.4,3.8.6, 3.8.7
	Ministerio de Cultura	3.8.5
	Ministerio del Interior	3.8.3, 3.8.7

	Presidencia del Consejo de Ministros	3.8.8
3.9 Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3.9.1, 3.9.2
3.10 En materia de seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	3.10.1
	Ministerio de Relaciones Exteriores	3.10.2
	Ministerio de Defensa	3.10.3, 3.10.4, 3.10.5
	Presidencia del Consejo de Ministros	3.10.6, 3.10.7, 3.10.8

3.4. Invitación a ministros de Estado

La Comisión de Constitución y Reglamento en su vigesimotercera sesión ordinaria llevada a cabo el martes 28 de mayo de 2024, recibió la participación presencial del Presidente del Consejo de Ministros y de los ministros que se detallan en el cuadro 8, con la finalidad de sustentar el pedido de facultades para legislar contenida en el proyecto de ley7950/2023-CR así como para absolver las interrogantes de los congresistas integrantes de la Comisión.

Cuadro 8
Exposición de ministros

	Ministro	Sector
1	Gustavo Lino Adrianzén Olaya	Presidente del Consejo de Ministros
2	Rómulo Mucho Mamani	Energía y Minas
3	José Berley Arista Arbildo	Economía y Finanzas
4	Ángel Manuel Manero Campos	Desarrollo Agrario y Riego
5	Eduardo Melchor Arana Ysa	Justicia y Derechos Humanos
		Relaciones Exteriores (e)
6	Walter Enrique Astudillo Chávez	Defensa

7	Morgan Niccolo Quero Gaime	Educación
8	César Henry Vásquez Sánchez	Salud
9	Sergio González Guerrero	Producción
10	Raúl Pérez Reyes Espejo	Transportes y Comunicaciones
11	Hania Pérez De Cuéllar Lubienska	Vivienda, Construcción y Saneamiento
12	Ángela Teresa Hernández Cajo	Mujer y Poblaciones Vulnerables
13	Juan Carlos Castro Vargas	Ambiente
14	Leslie Carol Urteaga Peña	Cultura
15	Julio Javier Demartini Montes	Desarrollo e Inclusión Social

Elaboración: Comisión de constitución y reglamento 2023-2024.

IV. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El presente pedido de facultades para legislar, que representa el tercero en lo que va del actual gobierno de la señora presidenta de la República Dina Ercilia Boluarte Zegarra, contiene 10 materias y 105 submaterias orientadas, conforme se deprende de la sumilla del proyecto de ley 7752/2023-PE, hacia la reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional, los cuales se detallan en el cuadro 9 que se visualiza a continuación:

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

Proyecto de Ley N°7752/2023-PE	
LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL	
N°	**MATERIA**
1	**FORTALECIMIENTO, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA EN MATERIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y PÚBLICO-PRIVADA, Y GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**
1.1	Simplificación de procedimientos administrativos de actividades productivas y generación sostenible de empleos formales, para lo cual se aplicará el silencio administrativo positivo.
1.2	Modificar el DL N° 1183 (implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera) para que SUNAT cree, mejore y recuperar estos centros.
1.3	Establecer medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada, conforme a: A) Promover la estandarización y la simplificación administrativa. B) Mejorar la planificación, adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos y liberación de interferencias. C) Ampliar el plazo máximo de entrega en administración al sector privado establecido en la Ley del Sistema Portuario Nacional. D) Garantizar la seguridad y estabilidad jurídica para el fomento de la inversión privada.
1.4	Actualizar y sistematizar la normativa para la promoción de la inversión privada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.
1.5	Establecer medidas de simplificación y mejora de los procesos de promoción de la inversión que impulsen proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) en sus diferentes fases.
1.6	Establecer un marco normativo especial para atender los procedimientos administrativos sancionadores de la Superintendencia del Mercado de Valores.
1.7	Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, con incidencia en la Ley N° 30327.
1.8	Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, con principal incidencia en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
1.9	En materia migratoria, con especial incidencia en el DL N° 1350, para complementar las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
1.10	En materia de selección, funciones y potestad de sanción sobre los Traductores Públicos Juramentados, a fin de fortalecer la gestión de traducciones oficiales.
1.11	Modificar plazos de los procesos administrativos de licencias, autorizaciones y derechos de uso de vía y área acuática para la ejecución de proyectos.
1.12	Modificar el DL N° 1071, que norma el arbitraje, a efectos de fortalecer el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (RENACE).
1.13	Aprobar mejoras regulatorias en la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica con el objetivo de contar con energía eléctrica a menor costo y menos contaminante.
1.14	Modificar el artículo 2 de la Ley N°31992, Ley de Fomento del Hidrógeno Verde para promover el desarrollo del hidrogeno verde.
1.15	Promover el desarrollo de la infraestructura petroquímica para implementar plantas petroquímicas que incluyan la producción de urea y fertilizantes.
1.16	Modificar Arts. 8, 9, 14, 15, y 18 de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural para acelerar la ejecución de proyectos de electrificación rural.
1.17	Fortalecimiento de la masificación del gas natural, creando un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado que nivele los precios finales.
1.18	Fortalecimiento del proceso de masificación de gas natural en las regiones que no son parte de una concesión, para que más hogares tengan acceso.
1.19	Modificar la Ley N° 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la actividad minera, para optimizar la remediación de pasivos ambientales mineros a cargo del Estado.
1.20	Ordenar y fortalecer el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, reestructurando su proceso de formalización.
1.21	Derogar la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N°28588, para incorporar al SIS a mayores de 17 años en situación de extrema pobreza.
1.22	Derogar la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N°29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud.
1.23	Modificar literal d.4) del art. 7 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, como requisito para expedir licencias de funcionamiento en monumentos históricos.
1.24	Establecer el Diagnóstico Arqueológico de Superficie como medida opcional al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

1.25	Facultar al MINCUL para crear una nómina de especialistas que realicen acciones de identificación de pueblos indígenas u originarios, para promover inversiones.
1.26	Establecer un marco normativo que permita la prestación de servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles de gobierno.
1.27	Autorizar al MINCUL la aprobación de tarifas diferenciadas para promover la visita a bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y museos públicos.
1.28	Regular el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, a efectos de facilitar la inversión pública o privada, y facilitar la conservación, restauración y su puesta en valor.
1.29	Reforzar las acciones y establecer medidas especiales para la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad.
1.30	Establecer una norma para promover que la atención de las entidades públicas sea en idioma local para los hablantes de lenguas indígenas u originarias.
1.31	Establecer estímulos económicos (aprobados por DU 022-2019) para incentivar la investigación en arqueología y otros relacionados a bienes de patrimonio cultural inmueble y mueble; y, la investigación sobre las artes, libro y la lectura.
1.32	Regular el marco normativo para promover el sector artístico y creativo, que permita la promoción y posicionamiento de los artistas y creadores.
1.33	Establecer medidas para promover el despliegue de los servicios públicos de telecomunicaciones de quinta generación (5G) o superior, a fin de que el MTC establezca un mecanismo especial para el otorgamiento de concesiones.
1.34	Modificar el art. 4° del DL N° 98, Ley de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A., a fin de que la Junta General de Accionistas establezca su domicilio legal; así como, eliminar cualquier Ley expresa para su disolución.
1.35	Garantizar la continuidad del transporte que se presta en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.
1.36	Establecer disposiciones especiales en materia de habilitaciones urbanas y de edificación para optimizar y dinamizar el desarrollo de procesos administrativos.
1.37	Marco normativo para la adecuación progresiva de los prestadores de servicios de saneamiento, precisando condiciones de plazos máximos de adecuación, predictibilidad respecto al instrumento de gestión ambiental y otros.
1.38	Establecer disposiciones para promover el desarrollo de la construcción, a través de tecnologías constructivas no convencionales.

1.39	Fortalecer y modernizar la gestión del Instituto del Mar del Perú — IMARPE.
1.40	Modificar la Ley N°30063, Ley de Creación del SANIPES, a fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano.
1.41	Modificar arts. 5, 7, 8, 9, 11 y 13 e incorporar la Quinta Disposición Complementaria Final en el DL N° 1199, que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales, a fin de establecer las condiciones habilitantes y promover su desarrollo.
1.42	Derogar la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, a fin de unificar los requisitos para que las empresas accedan y permanezcan en el REMYPE.
1.43	Modificar el artículo 24-A de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, a fin de modificar las etapas del procedimiento de licenciamiento e incorporar la etapa de evaluación de requisitos de admisibilidad.
1.44	Establecer medidas de simplificación administrativa al marco normativo de saneamiento físico legal de inmuebles del sector educación.
1.45	Aprobar la Nueva Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y derogación de la Ley N° 28036, a fin de fortalecer el marco regulatorio del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN).
1.46	Modificar el artículo 3 de la Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período de 10 años.
1.47	Disponer la prórroga del mandato de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua, de sus Comités de Administración Temporal y de los otros órganos de similar denominación.
1.48	Fortalecer la gestión de los servicios públicos de protección social ante emergencias; dirigidas a la atención temporal extraordinaria de nuevos usuarios, incluyendo a la población migrante y refugiada; el adelanto en la entrega de bienes o servicios, la exoneración temporal de condiciones, la ampliación de beneficios dirigidos a poblaciones vulnerables; la habilitación para que el MIDIS, en el marco de sus competencias, determine la instancia que se encargue de gestionar la entrega de transferencias monetarias en situaciones de emergencia, y su alcance.
1.49	Modificar el numeral 4.6 del art. 4 y la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, referidos a la nómina de especialistas para ejercer las funciones de revisión de estudios de impacto ambiental y supervisión y/o acompañamiento de la línea base y opiniones técnicas, según corresponda.
1.50	Permitir afiliar a la IAFAS SIS, bajo el Régimen de Financiamiento Subsidiado, a todas las personas residentes en el Perú y peruanos residentes en el exterior que se encuentren en el territorio nacional y, que no cuenten con ningún seguro de salud, al margen del NSE.
1.51	Fortalecer la regulación sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en el Perú.

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

1.52	Modificar la Segunda Disposición Complementaria Final y Transitoria del DL N° 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas para incorporar la obligatoriedad de la opinión previa de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como condición, para obtener la autorización para que las entidades del Poder Ejecutivo puedan interponer la demanda contenciosa administrativa ante resoluciones que emita INDECOPI, así como eliminar el requisito de que dicha autorización sea aprobada en el Consejo de Ministros.
1.53	Modificar la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para i) establecer las definiciones y alcance de los mecanismos de participación de la ciudadanía como parte de los derechos inherentes a la persona; ii) establecer el marco normativo que regule la gestión integral de los mecanismos de participación de la ciudadanía; así como, iii) precisar la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para establecer los mecanismos de participación de la ciudadanía, los roles y responsabilidades de las entidades involucradas y el procedimiento para su ejercicio.
1.54	Establecer el marco normativo para la mejora del servicio público, garantizando el correcto funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración Pública — ENAP, a través del fortalecimiento de las capacidades.
1.55	Establecer el marco normativo para la mejora del servicio público, a través de la optimización del régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
1.56	Modificar el DL N°1565, que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria para: i) Precisar los efectos ante el incumplimiento de no haber efectuado un ACR, ii) Fortalecer el rol de los actores y su articulación con el ecosistema de calidad regulatoria, iii) Restringir los supuestos de excepciones para la aplicación de los instrumentos de calidad regulatoria, iv) Fortalecer los mecanismos de trasparencia de la información que se genera en el ciclo regulatorio; y, v) Fortalecer el rol de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria.
1.57	Faculter al OSIPTEL para el uso de herramientas tecnológicas en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras y acceso a información de datos personales y metadata.
1.58	Modificar el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el objetivo de ampliar el plazo de 15 días hábiles con el que cuentan los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado a un plazo de 30 días hábiles, como una excepción al plazo general establecido en dicha norma para la resolución de los recursos de reconsideración.
1.59	Modificar la Ley No 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, para establecer medidas de articulación y coordinación de los organismos reguladores.
2	**MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**
2.1	Fortalecer el diseño del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) para garantizar su finalidad y asegurar mejores niveles de calidad en la inversión pública.
2.2	Regular las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones para su alineamiento al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

2.3	Ampliar el plazo de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica.
2.4	Modificar el DL N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de cumplir un rol orientador, así como optimizar la gestión de la inversión pública.
2.5	Establecer medidas para agilizar la reactivación de obras públicas paralizadas mediante la modificación de la Ley N° 31589, a fin de utilizar un Procedimiento Especial de Selección para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas.
2.6	Modificar el art. 17 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), sobre la participación de las FFAA y la PNP en la Gestión del Riesgo de Desastres.
2.7	Modificar el DL N° 1274, DL que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país - "AGUA +".
2.8	Se autoriza a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico aliado al Hub Portuario de Chancay, utilizando el procedimiento establecido en la Ley N° 31841 y su Reglamento, para la generación de una cartera de inversiones estratégicas, que incluya inversiones con montos menores a 200 millones de soles.
3	**FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO**
3.1	Modificar el DL N° 206 y el Decreto Ley N° 25694, para fortalecer institucionalmente a COFIDE, a través del fomento de la participación de inversionistas institucionales en su capital social y la optimización de su gobierno corporativo.
3.2	Aprobar medidas que permitan cumplir con el rol subsidiario del Estado y mejorar la eficiencia de las empresas públicas mediante una supervisión y monitore estratégico.
4	**REDUCCIÓN DE COSTOS DE TRANSACCIÓN**
4.1	Establecer medidas para facilitar la suscripción de los contratos en materia de contratación pública.
4.2	Modificar el literal a) del artículo 2 del DL N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, a fin de fomentar las compras corporativas obligatorias que gestiona dicha entidad.
4.3	Modificar el artículo 2014 del Código Civil, a efectos de brindar protección al tercero registral que contrata confiando en la información publicitada en los asientos registrales.

4.4	Modificar los artículos 2033, 2037,2038, 2040 y 2042 del Código Civil, a efectos de simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional.
5	**ACCESO Y COMPETENCIA EN SERVICIOS FINANCIEROS**
5.1	Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, para autorizar la reducción del capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN) que prestan servicios a las empresas supervisadas por la SBS y con ello fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero de valores; y en lo referente a límites operativos de concentración, con la finalidad de fomentar el otorgamiento de financiamientos por parte de las empresas del sistema financiero a través de límites operativos de concentración alineados a los estándares internacionales y particularidades del sistema financiero nacional.
5.2	Modificar el DL N° 862, Ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras, con la finalidad de fortalecer la regulación y supervisión de los fondos de inversión y de las sociedades que los administran.
5.3	Modificar la Ley N° 29440, Ley de los Sistemas de Pago y de Liquidación de Valores, con el objetivo de fomentar la competencia y la innovación en el sistema nacional de pagos, así como de fortalecer las atribuciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); y modificar el DL N° 1455, DL que crea el Programa "Reactiva Perú", con la finalidad de asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, para establecer los mecanismos de administración de cartera de créditos con garantía del Gobierno Nacional de una empresa del sistema financiero que ha sido sometida a un proceso de intervención, disolución y liquidación por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
5.4	Fortalecer el Fondo AGROPERÚ, mejorando las condiciones de acceso a los servicios financieros agrarios de acuerdo con: 1. Modificación del art. 2 del DU N° 027- 2009, DU que dicta medidas extraordinarias en beneficio de la actividad agraria. Esta modificación permitirá: A) Otorgar financiamiento directo. B) Otorgar garantías. C) Proporcionar servicios de extensión agraria. D) Fomentar la adopción de seguros agrarios implementados por el FOGASA. 2. Modificación del numeral 3.1 del DU N° 027-2009, DU que dicta medidas extraordinarias en beneficio de la actividad agraria, permitiendo que COFIDE, también pueda administrar los recursos del Fondo AGROPERÚ a través de fideicomisos.
6	**EQUILIBRIO FISCAL**
6.1	Establecer una reducción gradual del déficit fiscal y de la deuda pública, y un crecimiento prudente del gasto público, a través de la modificación de la Ley N° 31541.
6.2	Fortalecer la gestión fiscal subnacional modificando las disposiciones establecidas por el DL N° 1275 y DL N° 955; estableciendo disposiciones para la optimización del proceso de distribución de recursos determinados; y modificando las disposiciones que regulan el Catastro Fiscal, regulados por el DL N°1557 y su vinculación al Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM).
6.3	Modificar el DL N° 1436, DL Marco de la Administración Financiera del Sector Público, a fin de consolidar la integración intersistémica y extrasistémica de los procesos de la Administración Financiera del Sector Público a través de una gestión centralizada del Sistema Integrado de la Administración Financiera de los Recursos Públicos.
6.4	Consolidar el marco normativo vigente a fin de fortalecer la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, así como regular sobre la asignación y utilización eficientes de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, la planilla única del sector público, la incorporación del proceso de planificación de recursos humanos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos al ámbito de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, y, otros aspectos relacionados con la gestión fiscal de los recursos humanos, en el marco de la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal.
6.5	Establecer disposiciones para la negociación colectiva en el Sector Público, que considere la capacidad financiera del Estado y garantice un manejo fiscal sostenible; así como, asegure que las medidas que se aprueben en los diversos niveles de negociación sean transversales a todos los trabajadores.
6.6	Establecer disposiciones para la implementación progresiva del tránsito al régimen del servicio civil en coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme a los principios de equilibrio y programación presupuestaria.
6.7	Actualizar el DL N° 1441, DL del Sistema Nacional de Tesorería y el DL N° 1437, DL del Sistema Nacional de Endeudamiento Público para: (i) dotar de autonomía a la Gestión de Riesgos Fiscales; (ii) actualizar los aspectos operativos y reglas para la Gestión de Tesorería, la homogenización de conceptos relacionados con la constitución de fondos y/o fideicomisos, entre otras mejoras; y, (iii) optimizar la gestión de la recuperación de las honras de aval, a través de la implementación de mecanismos para la recuperación de créditos u obligaciones impagas, honradas por el Gobierno Nacional, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y otras normas con rango de Ley.
7	**TRIBUTARIA**
7.1	1. Regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, para lo cual se propone: a) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. B) Modificar la Ley N° 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. C) Modificar la Ley N° 29774, Ley que complementa la normativa sobre la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, a fin de reducir el monto aplicable a la importación de bienes de bajo valor, así como dictar las disposiciones necesarias que permitan su adecuada recaudación y control. 2. Perfeccionar el tratamiento tributario de las empresas de menor tamaño. 3. Perfeccionamiento del Sistema Tributario.

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

8	**POLÍTICA CRIMINOLÓGICA Y PENITENCIARIA**
8.1	Modificar el Código Penal, aprobado por el DL N° 635, con la finalidad de optimizar el marco legal que tipifica la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual y el chantaje sexual, considerando en estas conductas al uso de la tecnología digital.
8.2	Fortalecer la seguridad en el ámbito penitenciario, regulando las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones e internet en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales desde el interior de establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.
8.3	Modificar la Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), con la finalidad de optimizar su funcionamiento en relación con la gestión de las políticas públicas que buscan comprender, prevenir, controlar, reducir y sancionar la criminalidad.
8.4	Modificar el Decreto Legislativo N° 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de dotar de mayor celeridad la conducción y toma de decisiones vinculadas a la gestión e implementación de la política criminológica y penitenciaria.
8.5	Modificar los artículos 108, 108-C y 200 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, con el fin de introducir circunstancias agravantes, en caso la víctima sea una persona defensora indígena.
8.6	Modificar el Decreto Legislativo N° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a efectos de adoptar enfoques, mecanismos, medidas y recursos legales que optimicen la intervención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, además de establecer medidas para asegurar la efectiva y progresiva implementación del Código a nivel nacional.
8.7	Modificar la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, y normas conexas, con el propósito de ampliar su alcance para abarcar todas las formas de delincuencia organizada, incluyendo las modalidades emergentes, que operan en nuestro territorio nacional, así como para establecer agravantes especiales y fortalecer el Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO) y demás herramientas que permitan hacer frente de manera más efectiva a la amenaza que representan este fenómeno criminal para la seguridad pública.
8.8	Dotar de mayor protección a los titulares del derecho de autor en relación a la reproducción, distribución, comunicación pública o difusión no autorizada de las obras, y sus formas agravadas.
9	**DESARROLLO URBANO, HABILITACIÓN URBANA Y DE SUELOS, ACCESO A VIVIENDAS Y PARA LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL TERMINAL PORTUARIO DE CHANCAY**
9.1	Modificar la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, con el fin de impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados, así como la implementación de los instrumentos de gestión del suelo, impulsando el cierre de brechas en vivienda e infraestructura urbana para fortalecer la planificación de las ciudades y centros poblados.
9.2	Autorizar que se establezcan disposiciones sobre la declaración de necesidad pública e interés nacional, la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del terminal portuario de Chancay, y establecer disposiciones especiales por su construcción y funcionamiento.
10	**SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN EL ÁMBITO DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD DIGITAL**
10.1	Modificar el Decreto Legislativo N° 1095, a efectos de regular la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno.
10.2	Establecer el marco normativo para la implementación de la interoperabilidad entre las entidades competentes en materia migratoria, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad y defensa nacional.
10.3	Dictar medidas orientadas a garantizar la intangibilidad de los predios e inmuebles de propiedad, afectados en uso, reservados para fines de Defensa Nacional y en posesión de las Instituciones Armadas, que han sido destinados para fines de Seguridad y Defensa Nacional y cumplimiento de sus fines institucionales, en todo el territorio nacional, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de independencia, soberanía e integridad territorial de la República, así como su participación en el desarrollo económico social y en la defensa civil.
10.4	Crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), como entidad pública encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de los componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) en todo el territorio nacional con autonomía administrativa, técnica, funcional, financiera y económica, a fin de fortalecer el Sistema en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional.
10.5	Modificar las normas de organización de las Fuerzas Armadas con el objeto de incluir la competencia en ciberdefensa, así como precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional de cada una de ellas.
10.6	Establecer reglas para el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en las redes de telecomunicaciones, así como en el otorgamiento de la numeración, a fin de evitar comunicaciones fraudulentas contra los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.
10.7	Regular el procedimiento de identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales a efectos de asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada entidad pública competente.
10.8	Modificar el Decreto Legislativo N° 1182, DL que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a efectos de permitir que el Sistema de pueda Inteligencia Nacional en el ámbito de la seguridad y defensa nacional, también acceder a la localización, geolocalización o rastreo de equipos de comunicación.

El plazo que solicita el Poder Ejecutivo para legislar en las materias y submaterias antes referidas es de noventa (90) días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la ley autoritativa.

Cabe anotar que, los sectores ministeriales involucrados con los temas materia de delegación son:

- Presidencia del Consejo de Ministros
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Defensa
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Producción
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- Ministerio del Ambiente
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

V. MARCO NORMATIVO

a. Constitución Política del Perú

Artículo 101. [...]
Son atribuciones de la Comisión Permanente:
[...]
2. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue.

No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes autoritativas de delegación de facultades al Poder Ejecutivo, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.
[...]

Artículo 104. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente.
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.

Artículo 125. Son atribuciones del Consejo de Ministros:
[...]
2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.
[...].

b. Reglamento del Congreso de la República

Función de Control Político
Artículo 5. La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

Variantes del procedimiento legislativo
Artículo 72. Mediante el procedimiento legislativo se persigue aprobar leyes de carácter general y resoluciones legislativas, las mismas que pueden ser:
[...]
e) Leyes autoritativas de legislación delegada;
[...]

Requisitos especiales
Artículo 76. La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales:
[...]
d) Las proposiciones de ley autoritativa de legislación delegada deben precisar la materia específica de la delegación y el plazo de la autorización. No puede proponerse ley autoritativa de legislación delegada en materias relativas a reforma de la Constitución, aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, ni la Ley de Presupuesto ni de la Cuenta General de la República.
[...]

Procedimiento de control sobre la legislación delegada
Artículo 90. El Congreso ejerce control sobre los Decretos Legislativos que expide el Presidente de la República en uso de las facultades legislativas a que se refiere el artículo 104 de la Constitución Política, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El Presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los decretos legislativos que dicta en uso de las facultades legislativas, dentro de los tres días posteriores a su publicación.
b) Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el Presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto legislativo y a más tardar el primer día útil siguiente, el Presidente del Congreso envía el expediente a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso o a la que señale la ley autoritativa, para su estudio.

c) La Comisión informante presenta dictamen, obligatoriamente, en un plazo no mayor de 10 días. En el caso que el o los decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su derogación o su modificación para subsanar el exceso o la contravención, sin perjuicio de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de ministros.

VI. ANÁLISIS TÉCNICO

6.1. Parámetros constitucionales considerados para atender la solicitud de delegación

Los criterios que esta Comisión ha considerado en el análisis del pedido del Poder Ejecutivo para legislar se circunscriben a la naturaleza extraordinaria de la delegación de facultades y los límites constitucionales que establecen los artículos 101 y 104 de la Carta Magna.

En relación con la naturaleza extraordinaria, la potestad de legislar del Poder Ejecutivo con normas con rango de ley es excepcional y debe responder a situaciones concretas y necesarias que justifiquen la delegación. Ello en función a las atribuciones que la Constitución Política del Estado ha otorgado, por regla general, al Congreso de la República para legislar.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 107 de la Constitución Política, el Ejecutivo está facultado para presentar iniciativas legislativas, las mismas que si son enviadas con carácter de urgencia tienen preferencia del Congreso de conformidad con el artículo 105 de la Carta Magna. Por lo que el camino para presentar iniciativas de ley debe ser la regla y la solicitud de facultades la excepción, pues el debate parlamentario, en el que pueden participar los señores congresistas, contribuye a una mejor deliberación en el seno del Congreso de la República.

De otro lado, se ha considerado los límites constitucionales, sean estos formales, materiales o temporales:

a. Límite formal: Este límite refiere a que toda delegación de facultades legislativas debe realizarse a través de ley autoritativa como formalidad especifica, ello al ser expresión normativa derivada del parlamento y teniendo en consideración las prohibiciones que se derivan de los artículos 101 y 104 de la Constitución Política del Perú, a partir de los cuales no se pueden delegar materias que versen sobre temas que involucren reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto o ley de la cuenta general de la República.

b. Límite temporal: Está constituido por la limitación temporal en la que debe ejercerse dicha delegación, la que, si bien no está reglada o limitada en la Constitución, esta debe ejercerse bajo estricta razonabilidad y proporcionalidad.

c. Limite material: Dicho límite refiere a la indicación específica de la materia que se delega, la que según refiere el Tribunal Constitucional:

> *"[...] se encuentra cumplida con la mención o indicación de la materia específica que se ha delegado, la cual puede estar referida a una o varias áreas del derecho. La Constitución no impone la obligación de desarrollar o exponer de manera detallada o minuciosa el contenido que se debe incluir en el decreto legislativo, puesto que una exigencia de esa naturaleza convertiría en innecesaria la existencia misma de la delegación de facultades y la expedición del decreto legislativo. [...] En cambio, lo que sí proscribe la Constitución es el uso de fórmulas manifiestamente generales, indefinidas o imprecisas."*[2]

Siguiendo dicha línea interpretativa, aquellas materias solicitadas por el Poder Ejecutivo que no se refieran a materia específica o que no se puedan desprender de su exposición de motivos dicha especificidad, no serán delegadas.

---

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00007-2020-PI/TC. Fundamento jurídico 14 y 15. Disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/00007-2020-AI.pdf

Como un criterio adicional, esta Comisión tendrá en consideración si las materias sobre las cuales se solicita facultades para legislar, cuentan con iniciativas legislativas presentadas por los señores congresistas de la República o incluso por el propio Poder Ejecutivo, casos en los cuales se dará prioridad a la continuidad del trámite legislativo en el seno del Parlamento nacional.

Finalmente, se ha considerado que aquellas materias que por su naturaleza requiera de un amplio debate en el Parlamento con la participación de los sectores involucrados, se debe tramitar vía proyecto de ley, para lo cual el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que le confiere los artículos 105 y 107 de la Constitución Política, puede presentar las iniciativas legislativas correspondientes.

En tal sentido, habiendo delimitado los criterios a seguir para el presente pedido de facultades para legislar, pasamos al análisis específico de cada una de las materias y submaterias.

VII. Análisis específico de la constitucionalidad y pertinencia de las materias solicitadas en el Proyecto de Ley 5632/2023-PE

Pedido de facultades en materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos

La presente materia contiene a su vez 59 submaterias, las cuales se analizan a continuación de manera individualizada.

3.1.1. Simplificar procedimientos administrativos relacionados a las actividades productivas y la generación sostenible de empleos formales, a través de la aplicación del silencio administrativo positivo para promover la competitividad y el crecimiento sostenible.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

En la exposición de motivos del proyecto de ley presentando por el Ejecutivo se sostiene que el incumplimiento de plazos se presenta como problema público para la atención de procedimientos administrativos con silencio administrativo negativo (en adelante SAN). Y resulta indispensables para las inversiones en diversas actividades económicas y para la operatividad empresarial, así como para evitar los desincentivos para invertir y crecer, lo que deteriora la productividad, la competitividad y la creación de empleos[3].

Sostienen que para el Foro Económico Mundial el Perú se encuentra dentro de los quince países con carga burocrática, lo que significa un obstáculo al crecimiento de actividades productivas, que se manifiesta, por ejemplo, en la no atención de trámites con SAN. Agregan, que ello justifica que se emita con una norma con rango de ley con la finalidad de dotar un fundamento legal especial que coexista con la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. Por lo que solicitan que se habilite por la delegación de facultades modificar el SAN a silencio administrativo positivo (en adelante SAP) para los procedimientos administrativos críticos vinculados a la operatividad empresarial que no comprometan el interés público[4].

El Ejecutivo propone establecer lineamientos y criterios objetivos, de conformidad a la naturaleza de la actividad económica, tamaño de la empresa, inversión u operación, objeto del trámite por el agente del sector privado solicitante, sus procedimientos administrativos sujetos a evaluación previa, cuenten con silencia administrativo positivo (SAP). Se manifiesta que la medida es necesaria para reactivar la economía y promover las actividades empresariales que impulsen la competitividad y el crecimiento económico, crear puestos de trabajo formales[5].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, y la interpretación vinculante establecida en materia financiera y tributaria del

---

[3] P.L. 07752-2024-PE, p. 5. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[4] P.L. 07752-2024-PE, p. 5. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[5] P.L. 07752-2024-PE, p. 5. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

Tribunal Constitucional, la modificación de leyes relativas a temas tributarios pueden ser delegadas, y advirtiéndose que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta submateria.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La propuesta para el otorgamiento de delegación de facultades se basa en que se busca mejorar las actividades productivas, en ese sentido se plantea complementar el artículo 34 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, referido precisar, a puntualizar, el término de impacto significativo. Se busca establecer criterios, lineamientos, que precisen los bienes públicos de interés a fin de determinar la procedencia del silencio administrativo positivo (SAP).

Sobre la problemática que se pretende solucionar, señala el Ejecutivo que el incumplimiento de plazos legales para la atención de procedimientos administrativos con silencio administrativo negativo impacta negativamente sobre la operatividad empresarial y la realización de inversiones en diversas actividades económicas y de todo tamaño de empresas, generando desincentivos para invertir y crecer, deteriorando la productividad, la competitividad y la capacidad de crear empleos. Ello se debe al vacío normativo que existe en el artículo 34 de la Ley 27444, donde, la propuesta de delegación de facultades, consiste en incluir criterios objetivos en una norma con rango de ley para aplicar silencio administrativo positivo[6].

Plantea el Ejecutivo, que el impacto que se tendrá con esta delegación de facultades es contribuir a promover el desarrollo de actividades empresariales impulsando inversiones, competitividad y crecimiento, con el fin de crear puestos de trabajo formales a nivel nacional y de forma descentralizada.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, en relación a la presente submateria señalan que la solicitud

[6] Anexo 2, submateria 3.1.1, p. 1. Presentado por Rafael Vera Tudela Wither, Director de la Dirección de Eficiencia Normativa, Productividad y Competencia, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

de delegación de facultades solicita establecer lineamientos y criterios objetivos de forma técnica, según la naturaleza de la actividad económica específica, y/ o el tamaño de empresa, de inversión u operación objeto del trámite por el agente del sector privado solicitante, cuyos procedimientos administrativos sujetos a evaluación previa cuenten con silencio administrativo positivo. Y, la Comisión de Economía, concluye, que dado que dicha medida es importante para reactivar la economía y las inversiones de los sectores, la Comisión considera pertinente brindar las facultades sobre el presente numeral[7].

Sobre el silencio administrativo negativo el Tribunal Constitucional en su uniforme jurisprudencia ha interpretado el silencio administrativo negativo como un mecanismo de combatir la demora de la administración en cumplir con su deber de resolver, por lo que, *per se*, no se trata de un acto desestimatorio, sino uno de cuya pretensión es, una vez operado, el administrado tenga expedito su derecho para acudir a la vía judicial (Véase AV. Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos. Ara Editores. Pág. 71 a 73)[8].
De ahí que, como regla general, los procedimientos que inicie el administrado se encuentran sujetos al silencio administrativo negativo cuando verse, por ejemplo, sobre el sistema financiero (artículo 34.1. de la Ley 27444), considerándose para tal fines que el plazo máximo del procedimiento administrativo no puede exceder de 30 días contados desde el inicio del procedimiento. En esta misma línea, de conformidad al artículo 188°, numeral 188.3, de la Ley 27444, los efectos del silencio administrativo negativo tienen por objeto habilitar al administrado para que interponga los recursos impugnativos y las acciones judiciales pertinentes (como es el caso); por ello, aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la Administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que el asunto haya sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional, o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos[9].

---

[7] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 12.

[8] STC 03246-2003-AA/TC, de fecha 5 de enero de 2004, FJ. 3. En https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/03246-2003-AA.html

[9] STC 03246-2003-AA/TC, de fecha 5 de enero de 2004, FJ. 2. En https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/03246-2003-AA.html

El silencio administrativo se explica desde una doble dimensión: desde el administrado y desde la administración. Desde la perspectiva del administrado como una forma de racionalizar temporalmente el procedimiento administrativo, por más que no exista respuesta de la administración, no significa que el administrado va esperar eternamente el pronunciamiento de la administración, sino, ante la omisión o renuencia de la administración de pronunciarse sobre las pretensiones dentro del plazo legal, opera la resolución ficta denegatoria, habilitándose, según corresponda a interponer los recursos impugnatorio o acudir a la vía judicial para cuestionar la decisión ficta en la que ha incurrido la administración. Por lo que el silencio administrativo negativo se convierte en una garantía del debido proceso en su dimensión de su racionalización temporal, en el sentido de no convertirse en un proceso de nunca acabar, de tener un inicio claro y un final desconocido. En tal sentido, desde la perspectiva del administrado, el silencio administrativo negativo es un privilegio del administrado frente a la demora de la administración, se concibe como una ficción de efectos procesales en beneficio del administrado para permitirle acceder a los recursos o la impugnación judicial de las decisiones de la administración[10].

Desde la perspectiva de la administración, el silencio administrativo negativo se manifiesta como el deber de la administración de pronunciarse sobre las peticiones de los administrados y no ligarlos, atarlos indefinidamente a su pronunciamiento expreso. Como regla, la administración debería pronunciarse sobre las peticiones del administrado dentro del plazo legalmente establecido. Sin embargo, dentro del ordenamiento jurídico se contempla que la administración, omita o se mantenga renuente a emitir resolución expresa, y frente al derecho de petición y de acceso a la justicia, emerge el deber de respetar los plazos en que se ha configurado el procedimiento, de tal modo, si la administración decide no pronunciarse dentro del plazo concedido por la ley, opera el silencio administrativo negativo como expresión del deber de la administración de no sujetar indefinidamente al administrado ante su competencia, y habilitar la interposición de recursos impugnatorios o demanda judicial, según corresponda. Se comprende como un supuesto de pasividad u omisión de la administración, comprendida como inactividad formal, para resolver los recursos, de tal modo, que la inercia de la administración no implica necesariamente que el

---

[10] STC 3129-2019-PA/TC, de fecha 26 de noviembre del 2020, FJ 7. En https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/03129-2019-AA%20Interlocutoria.htm#:~:text=El%20silencio%20administrativo%20constituye%20un,petici%C3%B3n%20o%20su%20recurso%20administrativo.

administrado debe esperar indefinidamente el pronunciamiento expreso, sino para ello, se habilita el silencio administrativo negativo[11], para que el administrativo acuda a las siguientes instancias.

El silencio administrativo negativo habilita al administrado la interposición de los recursos y acciones judiciales (artículo 183.3. de la Ley 27444) y por este silencio se agota la vía administrativa (artículo 218.2.b), y genera actuaciones que se impugnan en el proceso contencioso administrativo, como son el silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración pública (artículo 4.2. de la Ley 27584), y el artículo 17, inciso 3 (segundo párrafo) de la Ley 27584, establece que cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de las entidades distinta del silencio administrativo negativo, no se computará plazo para interponer la demanda.

El silencio administrativo negativo en conexión con el sistema financiero también procede, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha establecido que *ante la omisión del Tribunal Fiscal de resolver el recurso de apelación en los plazos previstos en el artículo 150 del Código Tributario. En relación a ello, el artículo 157 de este cuerpo normativo no prevé como una actuación impugnable el silencio administrativo negativo. Sin embargo, resultaría inadmisible en términos constitucionales exigir al deudor tributario esperar de manera indefinida que el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre su apelación, y en esa medida, no aplicar el silencio administrativo negativo para habilitar al administrado la interposición de las acciones judiciales pertinentes, resultaría vulneratorio del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en su manifestación de derecho de acceso a la justicia. Entonces, de conformidad con el artículo 188.3 de la Ley 27444 (actualmente, el artículo 199.3 de su TUO), de aplicación supletoria conforme a la Norma IX del Código Tributario, si el Tribunal Fiscal no resolviera dentro del pazo de ley la apelación interpuesta por el deudor tributario, este puede acogerse al silencio administrativo negativo dando por agotada la vía administrativa*[12].

---

[11] STC 3129-2019-PA/TC, de fecha 26 de noviembre del 2020, FJ 6. En https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/03129-2019-AA%20Interlocutoria.htm#:~:text=El%20silencio%20administrativo%20constituye%20un,petici%C3%B3n%20o%20su%20recurso%20administrativo.

[12] STC 3129-2019-PA/TC, de fecha 26 de noviembre del 2020, FJ 10. En https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/03129-2019-

En esta línea, el silencio administrativo negativo se configura como garantía del administrado, como un privilegio frente a la demora de la administración, su finalidad se enmarca dentro del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva y busca no ligar al administrado de modo indefinido al procedimiento.

El silencio administrativo negativo se concibe como una ficción de efectos procesales en beneficio del administrado para permitirle acceder a los recursos o la impugnación judicial de las decisiones de la administración, evita que la administración cuando actúa con pasividad u omisión por su inercia, que el administrado deba esperar indefinidamente el pronunciamiento expreso. Para ello se habilita el silencio administrativo negativo, para interponer los recursos o acciones judiciales ante la inactividad de la administración. Y si el peticionante no obtiene una respuesta favorable de la administración, por el silencia administrativo negativo debe de continuar con el trámite correspondiente.

De otro lado, el silencio administrativo positivo tiene una naturaleza distinta del silencio administrativo negativo, en el sentido que los efectos que se producen por el silencio administrativo positivo son similares a si la administración hubiese resuelto de manera favorable lo peticionado por el administrado, en razón a ello, los supuestos de su concesión son excepcionales y deben estar debidamente detallados y expresamente tipificados los supuestos en los que procede.

El silencio administrativo positivo frente a la inacción de la administración, opera como si la administración habría resuelto favorablemente la petición del administrado, por lo que puede pasar a ejecutar lo decidido, por ejemplo, en materia económica, no tendría que esperar a que la administración se pronuncie expresamente, agotar las instancias del procedimiento administrativo o esperar la respuesta definitiva de las instancias judiciales para realizar inversiones, operaciones económicas, empresariales, etc.

Entonces, cabe preguntarnos si el silencio administrativo negativo impacta en la ralentización de la operatividad empresarial, en la realización de inversiones en diversas áreas económicas de todo tipo de tamaño de empresas, desincentiva la inversión, el crecimiento, la competitividad y la capacidad de creación de empleos en la economía

---

AA%20Interlocutoria.htm#:~:text=El%20silencio%20administrativo%20constituye%20un,petici%C3%B3n%20o%20su%20recurso%20administrativo.

peruana. Y tal como se ha expuesto, el silencio administrativo negativo se concibe como una decisión negativa de la administración frente a lo peticionado, claro está, mediante una resolución ficta denegatoria, y el administrado al haber recibido una repuesta negativa, aun se trate de una resolución ficta, tiene que continuar con la interposición de los recursos administrativos correspondientes o acudir a la vía judicial para acceder a lo peticionado, con lo que se posterga o pospone la petición para la operatividad empresarial o realización de inversiones.

De otro lado, el silencio administrativo positivo, frente a la inacción de la administración, reconoce a favor del peticionante que los recursos presentados se estimen como si hubiesen sido resueltos favorablemente, lo que genera un impacto favorable en las actividades económicas, ya que el administrado no tendría que esperar a agotar los recursos y las instancias administrativas y judiciales para realizar actividades productivas, inversiones, operatividad empresarial.

Conclusión
Este aspecto solicitado se encuentra justificado para la delegación de facultades en sus términos.

3.1.2. Modificar el Decreto Legislativo N° 1183, Decreto Legislativo que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera, para establecer competencias que le permitan a la SUNAT crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF).

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
El Ejecutivo solicita delegación de facultades para que se permita a la SUNAT crear, mejorar, ampliar y recuperar los Cetros de Atención en Frontera (en adelante CAF). Sostiene su solicitud que en la actualidad, por ejemplo, la capacidad del CAF Santa Rosa ha sido superada debido al aumento del flujo de personas (turistas) y medios de transporte, sostienen, que se hace necesaria la realización de cambios y ampliaciones en su

infraestructura que faciliten brindar servicios modernos y de calidad en un tiempo menor posible[13].

Identifican inconvenientes como los siguientes, largas colas para ingresar al centro de atención fronteriza, demoras en la atención, desincentivando la afluencia de turistas de Chile para visitar la ciudad de Tacna, merma en los ingresos económicos por turismo y demora en la atención de vehículos con carga de importación[14].

Sostienen también, que se justifica el pedido de delegación de facultades en que la SUNAT no tiene la competencia para realizar ampliaciones y mejores, en tanto existe un vacio legal, el Ministerio de Relaciones Exteriores así como tampoco la SUNAT ostentan la competencia para realizar esta clase de proyectos de inversión pública[15].

De tal modo, de conformidad a lo estipulado por el artículo 4, inc. c) del Decreto Legislativo 1183, la SUNAT solo tiene competencias para mantener y operar los CAF, en tanto por disposición del artículo 3 del Decreto Legislativo 11883 el Ministerio de Relaciones Exteriores pude únicamente crear estos CAF.

En esta dirección, expuesta la problemática, referida a que no cuentan tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la SUNAT las competencias para realizar ampliaciones y mejoras, proponen para la delegación de facultades modificar el Decreto Legislativo 1183, a fin de desarrollar un tratamiento integral sobre los CAF, en base a un conocimiento técnico operativo y su experiencia. De tal modo, su propuesta para la delegación de facultades consiste en la asignación de competencias a la SUNAT para crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF) y dotas de precisiones normativas de carácter presupuestario para el cumplimiento de las acciones indicadas[16].

---

[13] P.L. 07752-2024-PE, p. 5. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[14] P.L. 07752-2024-PE, p. 5. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[15] P.L. 07752-2024-PE, p. 5. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[16] P.L. 07752-2024-PE, p. 6. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas a esta materia puede ser delegadas, y se advierte además que en el extremo solicitado no se modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta submateria.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El Ejecutivo solicita delegación de facultades para ampliar y mejorar los Centros de Atención en Frontera, exponiendo como problemática que la capacidad de del CAF de Tacna ha superado por el flujo de turistas y medios de transporte. Sostienen que se hace necesario realizar modificaciones y ampliaciones en su infraestructura para dotar de calidad un servicio moderno en menor tiempo. Sostiene el Ejecutivo que existe un vacio normativo, en tanto la normatividad actual del Ministerio de Relaciones Exteriores tienen a su cargo la creación de los CAF y la SUNAT tiene a su cargo la competencia de mantener y administrar su infraestructura; sin embargo, en base a la experiencia técnica de la SUNAT para ampliar y mejorar los CAF sostienen que es necesario asignar a la SUNAT competencias de creación, mejoras, ampliación y recuperación de los CAF, así como realizar otras intervenciones para su adecuado funcionamiento[17].

Sostienen los representantes del Ejecutivo que los resultados que esperan obtener por estas atribuciones concedidas a la SUNAT, se reflejará en la optimización de flujo de personas, mercancías y medios de transporte[18].

Mediante la delegación de facultades se solicita que la administración de los CAF, que engloba las competencias de mejora y ampliación, pase a ser parte de las competencias que tiene la SUNAT, para tal efecto se propone modificar los artículos 3 y 4, inc. c), del Decreto Legislativo 1183.

---

[17] Anexo 2, submateria 3.1.2. Presentado por Israel Hugo Infantas Barbachán, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[18] Anexo 2, submateria 3.1.2. Presentado por Israel Hugo Infantas Barbachán, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, en relación a la presente submateria señala que ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la SUNAT tienen la facultad para implementar esta clase de proyectos de inversión pública, por lo que consideran necesario modificar el Decreto Legislativo 1183, para desarrollar de modo integral los Centros de Atención en Frontera, siguiente un criterio técnico, operativo y con la experiencia, por lo que se podría asignar a la SUNAT competencias para crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF) y realizar precisiones normativas presupuestarias para cumplir la acciones indicadas, en tal sentido, concluye la Comisión de Economía que ha venido estudiante el tema, y considera oportuno las mejoras planteadas y pertinente brindar las facultades sobre el presente numeral[19].

En el presente punto, resulta relevante si dentro de las competencias señaladas por la Constitución y las leyes de desarrollo sobre la materia, corresponde que el Ministerio de Relaciones Exteriores como órgano del Estado que forma parte de las relaciones internacionales acceda que la SUNAT realice las competencias de mejorar y ampliar los CAF, y si este acceso afecta las atribuciones al Ministerio de Relaciones Exteriores. Veamos que dice la Constitución y la ley sobre la materia.

La Constitución en el artículo 44, segundo párrafo, dispone que es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

En esta dirección, de conformidad al artículo 14 de la Ley 29778 dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano rector del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza encargado de determinar las normas y procedimientos relacionados con la finalidad del sistema. Preside el Ministro de Relaciones Exteriores el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (artículo 17 de la Ley

[19] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 13.

29778), Consejo que tiene como función la máxima instancia multisectorial encargada de formular, conducir y evaluar la política de Estado en materia de desarrollo de fronteras e integración fronteriza, así como promover, coordinar y evaluar su cumplimiento, en concordancia con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú (artículo 16 de la Ley 29778).

Asimismo, la Decisión 502 de la Comunidad Andina sobre Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF)[20] tienen como finalidad facilitar el comercio internacional, regional y los flujos migratorios y vehiculares sin repetir los pasos. En las zonas fronterizas también tenemos los Centros de Atención de Frontera que tienen también las mismas funciones de facilitar el comercio internacional, regional y los flujos migratorios y vehiculares.

Ahora bien, los Centros de Atención de Frontera, como el propio nombre lo indica, son centros que facilitan el flujo de personas, de vehículos y mercaderías que no inciden sobre competencias migratorias o de integración de fronteras.

Con el modelo actual, si se requiere realizar mejoras o ampliaciones la SUNAT, por convenio realizado, tiene que hacer una transferencia de partida presupuestal a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste realice las mejoras o ampliaciones, tal como se advierte por ejemplo de la Resolución Superintendencia N° 000290-2022/SUNAT, de fecha 24 de diciembre de 2022 por la cual, a fin de financiar diversos componentes de los Proyectos de Inversión: Centro de Atención en Frontera – CENAF Santa Rosa, Centro de Atención en Frontera – CENAF Iñapari y Centro de Atención en Frontera - CEBAF Eje Vial 02, de acuerdo al Informe (OPR) Nº OPR 071/2022, emitido por la Oficina de Programación y Presupuesto del MRE, se resuelve Autorizar las Transferencias Financieras del Pliego 057: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria a favor del Pliego 008: Ministerio de Relaciones Exteriores, por el importe S/ 85 994 562,83 (Ochenta y cinco millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y dos y 83/100 soles), en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, para el

[20] Decisión 52 de la Comunidad ANDINA. En https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/3AE26A3EF38C866E05257BFF006B7959/$FILE/DEC502.pdf

financiamiento de los diversos componentes de los proyectos y el costo del Control Concurrente[21].

En tal sentido, con la delegación de facultades solicitada no será necesario que se realice esta transferencia financiera y sería la SUNAT la que realice directamente esas mejoras y ampliaciones, según las consideraciones técnicas, para facilitar el comercio internacional, regional y los flujos migratorios y vehiculares.

Conclusión:
La presente submateria corresponde otorgar las facultades legislativas, con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 1183, Decreto Legislativo que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera, para establecer competencias que le permitan a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF)".

[21] SUNAT, resolución de Superintendencia N° 000290-2022/SUNAT, de fecha 24 de diciembre de 2022. En https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2022/290-2022.pdf

3.1.3. Establecer medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada, conforme a lo siguiente:

a) Promover la estandarización y la simplificación administrativa, así como optimizar los plazos, requisitos y procedimientos de evaluación para la obtención de títulos habilitantes y demás requerimientos de cualquier naturaleza, cuya tramitación esté a cargo de entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, que resulten necesarios para el desarrollo de proyectos. Asimismo, optimizar plazos vinculados al seguimiento de proyectos.

b) Mejorar la planificación, adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos y liberación de interferencias, a través de la incorporación de programas de resarcimiento complementario para mitigar los aspectos sociales; exoneración de responsabilidad a los funcionarios y servidores públicos que participan en los procedimientos de adquisición anticipada y/o expropiación de predios; aprovechamiento de la plusvalía inmobiliaria; adquisición y expropiación de predios en bloque; habilitación para realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio en áreas de uso público; así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos.

c) Ampliar el plazo máximo de entrega en administración al sector privado establecido en la Ley del Sistema Portuario Nacional.

d) Garantizar la seguridad y estabilidad jurídica para el fomento de la inversión privada.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Para la solicitud de facultades legislativas, el Ejecutivo plantea que ante los desafíos que enfrentan los proyectos de infraestructura, los mismos que se dan por dificultades en el cumplimiento de requisitos y la tramitación de títulos habilitantes, así como la regulación contradictoria en los diferentes niveles de gobierno, procedimientos discordantes, desactualizados o arbitrariedades en la emisión de los títulos, así como la deficiente

adquisición de terrenos, liberación de interferencias, lo que genera retrasos en el cronograma de obras y sobrecostos[22].

Sostienen que a fin de optimizar los requisitos, plazos y procedimientos para obtener títulos habilitantes requieren de una norma con rango de ley, ya que se involucra varios sectores, como transportes, saneamiento, energía, electricidad, portuario, etc. Asimismo, sobre la adquisición de terrenos y liberación de interferencias, plantean modificar el Decreto Legislativo 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dictar otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, para resolver la problemática predial e impulsar la seguridad y la estabilidad de las inversiones[23].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas a esta materia pueden ser delegadas, y se advierte además que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta submateria.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La delegación de facultades solicitada para el impulso de la inversión pública, privada y público privada se basa en que existen retrasos en los cronogramas de obras y sobrecostos en los proyectos de infraestructura, generados por la deficiente adquisición de terrenos y liberación de interferencias. Afirman que se presentan múltiples dificultades en el cumplimiento de requisitos y en la tramitación de títulos habilitantes. La necesidad de la intervención normativa, señalan que se justifica en que en la actualidad se tiene una regulación insuficiente para resolver la problemática de obtener terrenos y liberar interferencias, de modo célere y eficiente. Asimismo, señala el Ejecutivo, para la obtención de títulos habilitantes y otros requisitos para el avance de proyectos, existe una regulación contradictoria en los distintos niveles de gobierno, se exigen requisitos innecesarios,

---

[22] P.L. 07752-2024-PE, p. 7. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[23] P.L. 07752-2024-PE, p. 7. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

procedimientos administrativos disímiles, desactualizados[24]. Sostienen que la medida, por la delegación de facultades, beneficiaría a proyectos afectados por un monto de inversión de S/. 20 mil millones, que incluye la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez por un monto de 9 mil millones y la nueva carreta central con una inversión de S/. 24 mil millones[25], y las medidas se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro público[26].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, sobre la presente submateria señala que en el marco de la reactivación económica, consideran adecuadas las acciones de mejora administrativa y de trámites para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada. Por lo que, la Comisión Economía, considera pertinente brindar las facultades sobre el presente numeral[27].

La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización del Estado (en adelante Comisión de Descentralización), a través del Informe de Opinión sobre la viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), de fecha 28 de mayo del 2024, aprobado por mayoría, se pronuncia y sobre la presente submateria indicando que en la exposición de motivos las modificaciones solicitadas son necesarias ante los "persistentes desafíos que enfrentan los proyectos de infraestructura", especialmente para cumplir requisitos y tramitación de títulos habilitantes, la contradicción regulatoria entre los diferentes niveles de gobierno, la arbitrariedad de la emisión de títulos

---

[24] Anexo 2, submateria 3.1.3. Presentado por Lenin Mayorga Elías, Director de Política de Inversión Privada, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[25] Anexo 2, submateria 3.1.3. Presentado por Lenin Mayorga Elías, Director de Política de Inversión Privada, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[26] Anexo 2, submateria 3.1.3. Presentado por Lenin Mayorga Elías, Director de Política de Inversión Privada, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[27] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 13.

y exigibilidad de requisitos, así como la deficiente adquisición de terrenos, generando sobre costos y retrasos en la ejecución de proyectos, y para enfrentar esta situación pretenden optimizar los requisitos, plazos y procedimientos a fin de impulsar el avance en la obtención de títulos habilitantes y otros requisitos para el desarrollo de proyectos de infraestructura, para lo que proponen modificar el Decreto Legislativo 1192 y otros que permita la ejecución de obras de infraestructura, o que comprende también establecer medidas para impulsar la seguridad y estabilidad jurídica de las inversiones, sin embrago, indica la Comisión de Descentralización, no precisan cuáles se refiere ni de qué modo buscaría impulsarse dicho eje[28].

En relación con el análisis de constitucionalidad y pertinencia de la materia solicitada, precisa la Comisión de Descentralización que no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de las facultades solicitadas. Con relación a la pertinencia, considerando el contexto de la reactivación económica, señala la Comisión que es oportuno adoptar medidas de simplificación normativa que destraben proyectos de infraestructura mediante la estandarización administrativa, optimización de plazos, requisitos y procedimientos de evaluación de títulos habilitantes. En tal sentido, agrega la Comisión de Descentralización que es imprescindible que las entidades del gobierno nacional, regional y local realicen coordinaciones entre ellos para simplificar requisitos y requerimientos exigidos para la obtención de títulos habilitantes que permitan la ejecución de proyectos de inversión, el desarrollo de actividades económica, donde la seguridad y estabilidad jurídica es una consecuencia directa de la implementación de dichas medidas[29].

Y concluye la Comisión de Descentralización sobre la presente propuesta, que se encuentra justificada para la delegación de facultades[30].

---

[28] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p. 4. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

[29] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p. 4. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

[30] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL

De otro lado, la Comisión de Transportes y Comunicaciones (en adelante Comisión de Transportes), mediante Oficio 1667-2023-2024/CTC-CR, de fecha 29 de mayo de 2024, comunica que las materias solicitadas en el Proyecto de Ley 7752/2023-CR que están vinculadas a su Comisión son el punto 3.1.3.[c]): Establecer medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada...[31]. Punto sobre el cual, afirma que la materia incluida en el numeral 3.1.3.[c] (ampliar el plazo máximo de entrega en administración al sector privado establecido en la Ley del Sistema Portuario Nacional) tiene relación con los Proyectos de Ley 7141/2023-CR[32] y 7188/2023-CR[33], y sobre los mismos ha recaído un dictamen con texto sustitutorio que propone modificar los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 27943, Ley del Sistema Nacional Portuario, a fin de fomentar el desarrollo portuario, mejorar las condiciones en la administración e inversiones de la infraestructura portuaria, resaltando que el dictamen se encuentra en debate en el Pleno del Congreso de la República[34].

De tal modo, sobre el presente punto 3.1.3. [c]) referido a ampliar el plazo máximo de entrega en administración al sector privado establecido en la Ley del Sistema Portuario Nacional existen los Proyectos de Ley 7141/2023-CR y 7188/2023-CR, y en atención a que la presente materia es objeto de debate y análisis en el Parlamento, se debe de dar prioridad a la actividad legislativa encaminada sobre la presente submateria, por lo que en este extremo no corresponde otorgar la delegación de facultades.

Procedamos a analizar las demás submaterias. La solicitud de delegación de facultades del Ejecutivo se basa en la necesidad de los retrasos en los cronogramas de obras y los sobre

---

7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p. 5. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

[31] Comisión de Transportes y Comunicaciones, Oficio 1667-2023-2024/CTC-CR, de fecha 29 de mayo de 2024, p. 2. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMzEz/pdf

[32] Proyecto de Ley 7141/2023-CR. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7141

[33] Proyecto de Ley 7188/2023-CR. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7188

[34] Comisión de Transportes y Comunicaciones, Oficio 1667-2023-2024/CTC-CR, de fecha 29 de mayo de 2024, p. 2. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMzEz/pdf

costos de los proyectos de infraestructura por dificultades en el cumplimiento de los requisitos y os tramites de títulos habilitantes, que están referidos a la obtención de terrenos, liberación de interferencias; así como, la regulación contradictoria en los diferentes niveles del gobierno central, regional y local y los procedimientos disímiles o desfasados en la emisión de los títulos.

En esta dirección, los proyectos de infraestructura no solo exigen reglas claras otorgadas por el ordenamiento jurídico constitucional y legal, sino, que no se encuentren sujetos trabas o barreras burocráticas, y los trámites y los procedimientos que se realicen en su implementación agilicen la ejecución del proyecto, permitiendo que se realicen, por ejemplo, la adquisición de los terrenos, se otorguen los títulos necesarios y se cumplan con los cronogramas de obra.

El incumplimiento de estos requisitos impacta desfavorablemente en los proyectos de infraestructura, ya que hasta que se adquieran los terrenos que deberían de estar disponibles para el proyecto, se realicen los trámites en los diferentes niveles de gobierno, que en más de las veces difieren unos de otros, con requisitos distintos en cada nivel; y, no se permita el acceso a los títulos, los proyectos finalmente no cumplen con los cronogramas establecidos, se retrasa la entrega de la obra, se generan sobre costos en los proyectos y los beneficiarios del proyecto de infraestructura, que en última instancia son los ciudadanos, no ven cuando acceder a dicha infraestructura.

Conclusión

En el extremo solicitado de la presente submateria corresponde otorgar las facultades solicitadas, con el siguiente texto sustitutorio:

"Establecer medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada, conforme a lo siguiente:

a) Promover la estandarización y la simplificación administrativa, así como optimizar los plazos, requisitos y procedimientos de evaluación para la obtención de títulos habilitantes y demás requerimientos de cualquier naturaleza, cuya tramitación esté a cargo de entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, que resulten necesarios para el desarrollo de proyectos. Asimismo, optimizar plazos vinculados al seguimiento de proyectos.

b) Mejorar la planificación, adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos y liberación de interferencias, a través de la incorporación de programas de resarcimiento complementario para mitigar los aspectos sociales; aprovechamiento de la plusvalía inmobiliaria; adquisición y expropiación de predios en bloque; habilitación para realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio en áreas de uso público; así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos.
c) Garantizar la seguridad y estabilidad jurídica para el fomento de la inversión privada".

3.1.4. Actualizar y sistematizar la normativa para la promoción de la inversión privada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos; a fin de regular su alcance, marco institucional y mejora de procesos, garantizando la eficiencia y la predictibilidad en el desarrollo de cada una de las fases; e incorporar actividades de alto interés social o para la prevención y atención de emergencias, que atiendan necesidades de la población, que actualmente no se consideran inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La solicitud de facultades del Ejecutivo sobre la presente submateria pretende actualizar y sistematizar las normas sobre la inversión privada mediante el mecanismo de obras por impuestos (en adelante OxI). Señala el Ejecutivo que busca optimizar la Ley 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con la participación del Sector Privado. Afirman que el mecanismo de OxI es una herramienta importante para el desarrollo de proyectos de inversión, garantiza la entrega adecuada y oportuna de infraestructura. Sin embargo, indican que la Ley 29230 ha sufrido diversas modificaciones, haciendo dispersa sus disposiciones dificultando su aplicación[35].

[35] P.L. 07752-2024-PE, p. 7. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

El Ejecutivo afirma que la propuesta normativa tiene como finalidad ampliar el alcance del mecanismo de OxI para dar respuesta a las necesidades urgentes de la población con acciones inmediatas y continuas, especialmente en la provisión de servicios sociales, la prevención y atención de emergencias decretadas por el Ejecutivo[36].

Solicitan la delegación de facultades para incorporar los principios que rigen el mecanismo, precisar las entidades intervinientes en el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo, precisando sus competencias (Entidades públicas titulares de proyectos, DGPPIP, Proinversión y Contraloría General de la República). Asimismo, establecer reglas más claras con relación a los distintos tipos de proyectos que se desarrollan (inversiones y actividades), incorporar de manera orgánica las fases del mecanismo, incorporar disposiciones específicas para el desarrollo de IOARR y Actividades, que difieren en el tratamiento de proyectos de inversión. También pretenden uniformizar el empleo de conceptos o términos y sus respectivas definiciones, actualizar las referencias a normas, entidades o unidades orgánicas y uniformizar el concepto de certificados para reconocimiento de inversión (CIPRL y CIPGN)[37].

En la mesa técnica realizada el día 21 de mayo de 2024 se sostuvo que mediante OxI se desarrollan proyectos de inversión, IOARR, IOARR de Emergencia, actividades de operación y mantenimiento y actividades de construcción de viviendas rurales, y se pretende que se autorice a las entidades públicas de Gobierno Nacional y a los Gobiernos Regionales desarrollar actividades para la provisión de servicios sociales, la prevención y la atención de emergencias, que no se consideran inversiones en el marco del Invierte.pe[38].

---

[36] P.L. 07752-2024-PE, p. 7. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[37] Diapositivas presentadas por Lenin Mayorga Elías, Director de Política de Inversión Privada, Ministerio de Economía y Finanzas, sub materia 3.1.4, mesa técnica de fecha 21 de mayo de 2024. En https://docs.google.com/presentation/d/1L2DzB5A8WBPpYGnPrflA1IftbhucThFP/edit#slide=id.p1

[38] Diapositivas presentadas por Lenin Mayorga Elías, Director de Política de Inversión Privada, Ministerio de Economía y Finanzas, sub materia 3.1.4, mesa técnica de fecha 21 de mayo de 2024. En https://docs.google.com/presentation/d/1L2DzB5A8WBPpYGnPrflA1IftbhucThFP/edit#slide=id.p1

En tal sentido, propone el Ejecutivo incorporar las siguientes actividades para ser ejecutadas mediante Oxl[39]:

- Se propone incorporar las siguientes actividades a ser ejecutadas mediante Oxl:
  1. Atención de emergencias mediante la contratación de maquinaria pesada,.
  2. Campañas de vacunación y prevención de enfermedades epidemiológicas
  3. Campañas de lucha contra la anemia infantil.
  4. Conservación de la biodiversidad.
  5. Construcción de viviendas rurales en zonas de friaje y heladas.
  6. Implementación de escuelas modulares.
  7. Implementación de ollas comunes.
  8. Implementación de albergues temporales.
  9. Servicios de bata blanca, bata gris, bata verde en sector Salud.
  10. Servicios de telesalud, telemedicina y módulos productivos en Tambos.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas a esta submateria pueden ser delegadas, y se advierte además que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en el extremo solicitado.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El Ejecutivo justifica la solicitud de delegación de facultades de la presente submateria en que la Ley 29230, ley que regula el mecanismo de Oxl, ha devenido en un conjunto de disposiciones desordenadas, desactualizada y que las necesidades sociales que requieren ser atendidas no obtienen una respuesta inmediata para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La solicitud de delegación de facultades solicitada, señala el Ejecutivo, permitirá atender otros problemas y sectores vinculados con la normativa de Oxl,

[39] Diapositivas presentadas por Lenin Mayorga Elías, Director de Política de Inversión Privada, Ministerio de Economía y Finanzas, sub materia 3.1.4, mesa técnica de fecha 21 de mayo de 2024. En https://docs.google.com/presentation/d/1L2DzB5A8WBPpYGnPrfIA1IftbhucThFP/edit#slide=id.p1

incluyendo la supervisión de proyectos, ejecución conjunta y operatividad en la emisión de los CIPRL[40].

Afirma el Ejecutivo que se requiere optimizar y consolidar la Ley 29230 a fin de promover la inversión privada en infraestructura y servicios públicos, incluyendo, con la propuesta de delegación, la ampliación al desarrollo de actividades sociales y atención de emergencias. Sostienen que por el mecanismo de Oxl se han desarrollado 522 proyectos por un total de S/. 7, 558 millones, beneficiando a 22 millones de personas, emitiéndose certificados de reconocimiento de inversión por S/ 5,302 millones a las empresas privadas, acreditándose el alcance y número de proyectos ejecutados por el mecanismo de Oxl[41].

El primer párrafo del artículo 1 de la Ley N° 29230 en su artículo 1 señala que el objetivo de la presente ley es impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR), las IOARR de Estado de Emergencia Nacional y el mantenimiento de infraestructura que hubiera sido ejecutada bajo la presente Ley u otra modalidad, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, en relación a la presente submateria señala que la última modificación de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, fue publicada el 04 mayo 2023 mediante la Ley 31735. Sin embargo, si bien la Comisión de Economía considera que la iniciativa es acertada, no se especifica al detalle el referido al ordenamiento y optimización que desean realizar en el marco del pedido de facultades. En ese sentido,

---

[40] Anexo 2, submateria 3.1.4, p. 2. Presentado por Lenin Mayorga Elias, Director de Politica de Inversión Privada, Ministerio de Economia y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[41] Anexo 2, submateria 3.1.4, p. 2. Presentado por Lenin Mayorga Elias, Director de Politica de Inversión Privada, Ministerio de Economia y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

las modificaciones correspondientes deben ser debatidas en el Congreso de la República, por lo que no corresponderia delegar las facultades en esta materia [42]

Asimismo, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización del Estado (en adelante Comisión de Descentralización), a través del Informe de Opinión sobre la viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), de fecha 28 de mayo del 2024, aprobado por mayoria, sobre la presente submateria ha precisado que la propuesta de modificación legislativa es facultar que el mecanismo de obras por impuestos se aplique a la provisión de servicios públicos y que la normativa de dicho mecanismo es dispersa, por lo que se solicitan facultades legislativas para ordenarla y realizar precisiones[43].

Sobre el análisis de constitucionalidad y pertinencia de la materia solicitada la Comisión de Descentralización no encuentra impedimento constitucional para la delegación solicitada, superando el test de constitucionalidad y sobre la pertinencia, la Comisión de Descentralización indica que ante las ineficiencias en las capacidades del Estado peruano para proveer servicios públicos, ampliar el mecanismo de obras por impuestos para estos servicios es una alternativa de gestión pública potencialmente favorable[44].

Sin embargo, la Comisión de Descentralización opina que el pedido de facultades en esta materia no es suficientemente específico respecto a las modificatorias legislativas que el Poder Ejecutivo desea realizar. Se recuerda que el artículo 104 de la Constitución señala que la facultad de delegar se otorga "sobre la materia específica". Por lo que concluye, que

---

[42] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 14.

[43] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p. 5. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

[44] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p. 5. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

se recomienda solicitar al Poder Ejecutivo mayor especificidad respecto a las modificatorias esperadas en esta materia[45].

En la presente submateria, dada la importancia y el impacto del mecanismo por Oxl en las inversiones públicas, en la infraestructura pública, en el desarrollo de actividades sociales y el impacto que tiene en la población, en especial en la población más vulnerable, se hace necesario un análisis y estudio en mesas técnicas, en un debate desde los diversos sectores involucrados, lo que amerita que por el impacto social, económico, político, se analice por diversos sectores, especialistas, que presenten sus opiniones, se apertura el debate y se socialice la propuestas en los diversos sectores involucrados, y no solo se considere los puntos de vistas técnicos presentado por el Ejecutivo. En tal sentido, dada la trascendencia y el impacto en la nación del mecanismo de obra por impuestos, se debe tramitar vía proyecto de Ley.

Conclusión
Esta solicitud debe ser canalizada a través de un Proyecto de Ley.

[45] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p. 5. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

3.1.5. Establecer medidas de simplificación y mejora de los procesos de promoción de la inversión que impulsen y dinamicen el desarrollo de proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) en sus diferentes fases, con la finalidad de promover las inversiones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Dichas medidas comprenden los siguientes temas:

a) Fortalecer el rol de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, durante las fases del desarrollo de las APP, comprendiendo, pero sin limitarse, a la emisión de opinión sobre aspectos de ejecución contractual o frente a controversias, constituirse en sujeto activo para la tramitación de los procesos de adquisición y expropiación de terrenos, así como para la liberación de interferencias y otras que resulten necesarias para optimizar su participación.

b) Regular medidas de mejora y simplificación de procesos y competencias para asegurar la oportuna adjudicación, desarrollo y ejecución de proyectos.

c) Incorporar disposiciones para la implementación del modelo de gestión integral de proyectos a través de los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP), así como medidas complementarias para garantizar y promover su adecuado funcionamiento y operativización.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

En el Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo en el que solicitan la delegación de facultades se sostiene que el desarrollo de proyectos de APP tiene una problemática referida al índice de retraso en el desarrollo, gestión y ejecución de proyectos de inversión en la modalidad de APP y PA, lo que no contribuye con reducir la brecha de infraestructura pública. Para lo cual, sostienen, que se requiere optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP)[46].

Justifican el pedido de facultades de la presente submateria, afirmando que las medidas propuestas buscan impulsar y dinamizar el desarrollo de proyectos de APP y PA, regulados

[46] P.L. 07752-2024-PE, p. 8. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

en el Decreto Legislativo N° 1362 y normas complementarias, bajo el enfoque de que los proyectos de APP y PA son instrumentos que ayudan a la reactivación económica y el cierre de brechas de infraestructura[47].

En esta línea, sostienen que los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP) cumplen un rol estratégico en el fortalecimiento de la gobernanza, la mejora en la gestión de los proyectos de APP, aseguran la disponibilidad de infraestructura pública y la efectiva prestación de los servicios públicos, beneficiando a los usuarios y la población en general. Solicitan delegación de facultades para establecer medidas dirigidas a la implementación efectiva de los OEGEP, garantizando y promoviendo su funcionamiento y operatividad adecuada, de conformidad al Decreto Legislativo N° 1543 y su Reglamento D.S. N° 211-2022-EF, sin que implique que las competencias de las entidades públicas titulares de los proyectos, se redistribuya, reasigne o modifique[48].

La delegación de facultades sobre la presente submateria, comprende también el impulso de medidas destinadas a fortalecer el rol de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN, en las fases del desarrollo de las APP, a la emisión de opinión sobre la ejecución contractual, frente a controversias adoptar un rol de sujeto activo en la tramitación de procesos de adquisición y expropiación de terrenos, en la liberación de interferencias, asimismo, plantean regular medidas de mejora y simplificación de procesos y competencias para la oportuna adjudicación, desarrollo y ejecución de proyectos bajo la modalidad de APP y PA[49].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas a esta submateria pueden ser delegadas, y se advierte además que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no

---

[47] P.L. 07752-2024-PE, p. 8. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[48] P.L. 07752-2024-PE, p. 9. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[49] P.L. 07752-2024-PE, p. 9. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en el extremo solicitado.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El Ejecutivo sostiene que la demora en el desarrollo, gestión y ejecución de proyectos de inversión bajo las modalidades de APP y PA no permite la reducción de la brecha de infraestructura. Por el contrario, la simplificación y mejora de los procesos contenidos en la normativa de promoción de la inversión, impulsa y dinamiza el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de APP y PA[50].

En esta dirección, sostienen que las medidas que proponen buscan optimizar los procesos que se aplican a las APP y PA, busca impulsar la adjudicación de la cartera de proyectos de PROINVERSIÓN del 2024 al 2026, que incluye 49 proyectos de APP y PA por montos ascendentes a US$ 17,576 millones, asimismo, indican que estas medidas mejorarán el desarrollo, gestión y ejecución de las APP, mediante la implementación efectiva de los OEGEP, facilitando destrabar la ejecución de los principales proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) para el periodo 2022-2025, con una cartera priorizada de inversión de S/. 146,622 millones[51].

El Ejecutivo expone como problema, que los retrasos en los cronogramas de obras y sobrecostos en los proyectos de infraestructura generan deficiente adquisición de terrenos y liberación de interferencias, para lo cual plantean como medidas[52]:

---

[50] Anexo 2, submateria 3.1.5, p.2. Presentado por Lenin Mayorga Elias, Director de Política de Inversión Privada, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[51] Anexo 2, submateria 3.1.5, p. 2. Presentado por Lenin Mayorga Elías, Director de Política de Inversión Privada, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[52] Diapositivas presentadas por Lenin Mayorga Elías, Director de Política de Inversión Privada, Ministerio de Economía y Finanzas, sub materia 3.1.5, mesa técnica de fecha 21 de mayo de 2024. En https://docs.google.com/presentation/d/1L2DzB5A8WBPpYGnPrfIA1IftbhucThFP/edit#slide=id.p1

Medidas
• Incorporar programas de resarcimiento para mitigar aspectos sociales en proyectos APP o de Obra Pública declarados de seguridad nacional o necesidad pública.
• Exonerar de responsabilidad a los funcionarios y servidores que participan en procedimientos de adquisición anticipada y/o expropiación de predios, en los casos en los que la adquisición y/o expropiación de inmuebles se haya iniciado desde la factibilidad del Proyecto.
• Aprovechamiento de la plusvalía inmobiliaria.
• Adquisición y expropiación de predios en bloque en aquellas áreas del proyecto conformadas por inmuebles conexos cuando exista un alto interés para el Estado en desarrollar infraestructura priorizada.
• Habilitación para realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio para regularizar a favor del Estado inmuebles de uso público.
• Reducir el plazo del procedimiento de adquisición y establecer reglas especiales.
• Establecer que la liberación de interferencias pueda iniciarse con la aprobación de los estudios de factibilidad. Los trabajos podrán iniciarse con la aprobación del CIRA o PMA.

La implementación de estas medidas beneficiarán proyectos importantes afectados con los retrasos en los cronogramas de obras y sobrecostos en los proyectos de infraestructura, como la Linea 2 del Metro de Lima, con un monto de inversión S/ 20 mil millones, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con un monto de inversión de S/ 9 mil millones y la Nueva Carretera Central, con un monto de inversión de S/ 24 mil millones[53].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, en referencia a la presente submateria considera que las acciones comprendidas están plenamente identificadas y al ser de carácter de mejora y simplificación de procesos se encuentran en la línea de reactivación económica y dinamismo de las inversiones. En tal sentido,

[53] Diapositivas presentadas por Lenin Mayorga Elías, Director de Política de Inversión Privada, Ministerio de Economía y Finanzas, sub materia 3.1.5, mesa técnica de fecha 21 de mayo de 2024. En https://docs.google.com/presentation/d/1L2DzB5A8WBPpYGnPrfIA1IftbhucThFP/edit#slide=id.p1

considera, la Comisión de Economía, pertinente brindar las facultades sobre el presente numeral[54].

De otro lado, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización del Estado (en adelante la Comisión de Descentralización), a través del Informe de Opinión sobre la viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), de fecha 28 de mayo del 2024, aprobado por mayoría, en la presente submateria ha analizado cada uno de los incisos de la presente submateria en los siguientes términos:

a) Fortalecer el rol de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, durante las fases del desarrollo de las APP, comprendiendo, pero sin limitarse, a la emisión de opinión sobre aspectos de ejecución contractual o frente a controversias, constituirse en sujeto activo para la tramitación de los procesos de adquisición y expropiación de terrenos, así como para la liberación de interferencias y otras que resulten necesarias para optimizar su participación.

Sobre el punto a) referido a fortalecer el rol de la agencia de promoción de la inversión privada, durante las fases del desarrollo de las APP, la Comisión de Descentralización señala que no tiene impedimentos constitucionales. Sobre la pertinencia se indica, conforme a la exposición de motivos presentados por el Ejecutivo, busca impulsar y dinamizar el desarrollo de proyectos de APP y proyectos en activo para cerrar brechas de infraestructura y reactivación económica, así, la Comisión de Descentralización señala que concuerda con el análisis teniendo en cuenta el estancamiento de la economía, la materia solicitada es específica, pero hace notar la Comisión de Descentralización sobre la materia solicitada que señala "comprendiendo, pero sin limitarse", para finalmente concluir, que recomienda otorgar facultades delegadas en este punto en las materias que sí han sido especificadas[55].

---

[54] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 14.

[55] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p. 6. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

En esta dirección, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada promueve la incorporación de inversión en servicios públicos y obras públicas de infraestructura sobre la base de iniciativas públicas y privadas de competencia nacional, asimismo, orienta y canaliza los problemas que enfrentan los inversionistas en la ejecución de las inversiones y operaciones suscitados en los contratos suscritos y derivados de los procesos de promoción[56].

PROINVERSIÓN busca mejoras de los procesos contenidos en la normativa de promoción de la inversión, impulsa y dinamiza el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de APP y PA, tanto de la exposición de motivos como de la información presentada por el Ejecutivo en la presente submateria, con la solicitud de delegación de facultades se busca optimizar los procesos que se aplican a las APP y PA, por lo que en este extremo corresponde que se otorgue las facultades delegadas.

b) Regular medidas de mejora y simplificación de procesos y competencias para asegurar la oportuna adjudicación, desarrollo y ejecución de proyectos.
Sobre el presente punto, si bien la Comisión de Descentralización no encuentra impedimento constitucional para delegación de facultades, en tanto no propone regular materia indelegables, y supera el test de constitucionalidad. Concluye que ante el poco detalle brindado en la exposición de motivos, recomienda solicitar al Poder Ejecutivo mayor especificidad respecto a las modificatorias esperadas en esta materia[57].

Los representantes técnicos del Ejecutivo en las mesa técnicas realizadas el día 21 de mayo de 2024 con la Comisión de Constitución y Reglamento indicaron que buscan incorporar programas de resarcimiento para mitigar aspectos sociales en los proyectos APP o de obra pública vinculados a la seguridad nacional, exonerar de responsabilidad a los funcionarios y servidores que participan en la adquisición anticipada o expropiación de predios cuando se han iniciado desde la factibilidad del proyecto, la habilitación de

[56] Cuenta General de la República. Agencia de Promoción de la Inversión Privada. PROINVERSIÓN. 2016, p. 802. En https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/2016/PROINVERSION_2016_tomo2.pdf

[57] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p. 7. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio y la liberación de interferencias se inicie con la aprobación de estudios de factibilidad, las mismas que beneficiarán proyectos como la línea del Metro de Lima, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez y la nueva carretera central, obras que serán de beneficio a la población.

Considerando el impacto que se busca lograr con las implementaciones normativas específicas que solicita el Ejecutivo, corresponde que se otorgue la delegación de facultades, en este punto.

c) Incorporar disposiciones para la implementación del modelo de gestión integral de proyectos a través de los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP), así como medidas complementarias para garantizar y promover su adecuado funcionamiento y operativización.

Sobre el presente punto la Comisión de Descentralización advierte también que la materia solicitada no tiene incompatibilidades con la Constitución, superando el test de constitucionalidad. Sobre la pertinencia, a fin de reactivar la inversión privada, se considera que es pertinente el pedido de facultades legislativas para las medidas propuestas, por lo que concluye que es viable y pertinente la delegación de facultades legislativas en esta materia[58].

La solicitud de delegación de facultades en la presente submateria busca la implementación efectiva de la OEGEP a fin de promover su funcionamiento y operativización. La OEGEP es un instrumento que tiene como finalidad fortalecer la mejora de la gestión de los proyectos, asegurar la disponibilidad de la infraestructura pública y la efectiva prestación de servicios, aspectos que inciden favorablemente en los procesos aplicable a las APP y PA y el desarrollo, gestión y ejecución de las APP, así como también favorece y permite destrabar proyectos priorizados en el plan nacional de infraestructura sostenible para la competitividad, el mismo no solo impacta en proyectos de gran inversión sino son favorables para la ciudadanía la puesta en servicio de los proyectos, por lo que corresponde que se delegue las facultades solicitadas en este punto.

---

[58] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p. 8. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

Conclusión
En la presente submateria corresponde se otorgue facultades solicitadas en sus términos.

3.1.6. Establecer un marco normativo especial para la atención de los recursos administrativos presentados en los procedimientos administrativos sancionadores de la Superintendencia del Mercado de Valores que disponga la fijación de plazos distintos a los de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en función al grado de complejidad de la materia.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
Se solicita delegación de facultades en la presente submateria a fin de establecer plazos especiales para la atención de los recursos administrativos interpuestos en el Mercado de Valores. La delegación de facultades solicitada se basa en que se requiere establecer un régimen especial diferente al establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) a fin de atender los recursos administrativos interpuestos en los procedimientos sancionadores ante la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante SMV). Afirman que los plazos especiales permitirán resolver con fundamentos y evaluación más rigurosos, promoviendo que los administrados, para interponer recursos de apelación o demanda contencioso administrativa ante el Poder Judicial, cuenten con menos incentivos[59].

La delegación de facultades pretende alinear los plazos de la Superintendencia de Mercado de Valores con los plazos de otros organismos como INDECOPI, OEFA, SUNAT y Contraloría General de la República, en tanto tienen plazos más extensos dada la complejidad de las materias que conocen, promoviendo una eficiente justicia administrativa y administración efectiva, por lo que proponen variar los plazos de atención de los recursos administrativos presentados ante la SMV[60].

---

[59] P.L. 07752-2024-PE, p. 9. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[60] P.L. 07752-2024-PE, p. 9. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas a esta submateria pueden ser delegadas, y se advierte además que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en la submateria solicitada.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La medida que se pretende implementar por la delegación de facultades solicitada en la presente submateria trata sobre incorporar un plazo especial para la atención de los recursos administrativos interpuestos en el procedimiento sancionador de la Superintendencia del Mercado de Valores, fijando un plazo diferente a los estipulados en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dada la complejidad de las peticiones que resuelven[61].

Señalan que la problemática que se busca solucionar con la delegación de facultades solicitada es reducir los motivos para interponer los recursos de apelación o demanda contencioso administrativa ante el Poder Judicial. Para lo cual, requieren un régimen especial para la atención de los recursos administrativos en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos ante la Superintendencia del Mercado de Valores. De tal modo, sostienen, que el impacto que obtendrán es adecuar la complejidad analítica y probatoria de los casos que resuelve la SMV, en tanto en la actualidad si bien resuelven los recursos con los niveles deseados, sin embargo, se han presentado dificultades para resolverlos dentro de los plazos máximos dispuestos por las normas del procedimiento administrativo general[62].

En el caso de la SUNAT los plazos que se cuenta para presentar un recurso de reclamación difieren de los dispuestos por las disposiciones del procedimiento administrativo general.

---

[61] Anexo 2, submateria 3.1.6, p. 3. Presentado por Oscar Orcón Hinojosa, Director de Sistema Financiero y Mercado de Capitales, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[62] Anexo 2, submateria 3.1.6, p. 3. Presentado por Oscar Orcón Hinojosa, Director de Sistema Financiero y Mercado de Capitales, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

Asimismo, los plazos que tiene la SUNAT para responder el recurso de reclamación difieren del procedimiento administrativo general, así tenemos[63]:

Acto reclamado	Plazo para resolver
Orden de pago, sin pago previo (excepción):	90 días hábiles.
Resolución ficta denegatoria de solicitudes de devolución:	2 meses.
Resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución:	9 meses.
Resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia:	12 meses.
Para los siguientes actos, se incluye el plazo probatorio para resolverlo (tiempo para que la Sunat ofrezca pruebas como documentos, pericias e inspección). Este plazo es contado desde la fecha en que se presenta el recurso:	
Resolución de determinación o multa:	9 meses.
Orden de pago, con pago previo:	9 meses.
Resolución ficta sobre recursos no contenciosos vinculados a la determinación de la obligación tributaria:	9 meses.
Resolución de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos o cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan:	20 días hábiles.
Actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria:	9 meses.
Resoluciones que determinen la pérdida del fraccionamiento de carácter general o particular:	9 meses.

Nota: SUNAT, 21 de mayo de 2023.

[63] SUNAT, plazos para presentar un recurso de reclamación ante la SUNAT. En https://www.gob.pe/8282-plazos-para-presentar-un-recurso-de-reclamacion-ante-la-sunat

En el caso de INDECOPI, el plazo que tienen los órganos resolutivos que conforman la estructura orgánica funcional del INDECOPI es de 120 días hábiles, conforme dispone la Decimocuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 27809, así en comparación con las disposiciones del procedimiento administrativo general tenemos[64]:

Texto Único de Procedimientos Administrativos – INDECOPI

Aprobado por Resolución Nº 000053-2020-PRE/INDECOPI

Instancias de resolución de recursos

	Reconsideración	**Apelación**
Autoridad competente	Director de Derecho de Autor	Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi
Plazo máximo de presentación	Procede dentro de los quince (15) días de Notificada la Resolución (****)	Procede dentro de los quince (15) días de Notificada la Resolución (****)
Plazo máximo de respuesta	Plazo para resolver el recurso: Treinta (30) días hábiles (***) (*****)	Plazo para resolver el recurso: Ciento ochenta (180) días hábiles (***) (******)

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, sobre la presente submateria señala que se solicita facultades para la atención de los recursos administrativos interpuestos ante Superintendencia del Mercado de Valores - SMV en los procedimientos administrativos sancionadores a su cargo, y dada que la medida propuesta se encuentra identificada específicamente y redundará en la mejora administrativa de la SMV, la Comisión de Economía considera pertinente brindar las facultades sobre el presente numeral[65]

---

[64] En https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/7472/ANEXO%20R.000053-2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y

[65] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 15.

En la presente submateria, se observa que los plazos para atender los recursos administrativos en el procedimiento administrativo general difieren de los plazos para atender los recursos interpuestos ante los órganos resolutivos de INDECOPI, y la diferenciación se explica por un criterio de especialidad, es decir, el procedimiento administrativo general está diseñado para atender los recursos planteados ante las entidades públicas, buscan garantizar la actuación idónea y la protección de intereses generales, desde su iniciación, instrucción y finalización.

La regulación de procedimientos especiales se configura para atender las peticiones de los administrados en temas concretos y que son de competencia de determinados órganos del Estado, y que requieren de un tratamiento y estudio especializado, por lo que, a diferencia del general, la atención de los recursos toma un mayor tiempo en su conocimiento, análisis y resolución.

En tal sentido, la materia específica que conocen y resuelven determinados órganos de la administración exige que se diferencie el plazo para atender los recursos de los administrados. Así, la SMV investiga las denuncias de los administrados frente al incumplimiento de dispositivos de su competencia y que se exigen a las entidades bajo su supervisión, lo que incluye a las sociedades agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos mutuos o fondos de inversión y empresas administradoras de fondos colectivos[66]. En esta dirección, la Superintendencia de Mercado de Valores, de conformidad al artículo 1 del Decreto Ley N°26126, Texto Único concordado de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y promoción. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal, constituyendo un pliego presupuestario. Rige su funcionamiento de acuerdo con las disposiciones que contiene la presente Ley y su reglamento de organización y

[66] Superintendencia del Mercado de Valores, Resolución de Superintendencia N° 00006-2012-SMV/01, publicado el 16/04/2012. En https://www.smv.gob.pe/ServicioConsultaNormas/frm_SIL_Detallev1.aspx?data=418E7666FABE5B38F1FE51AE2F097E0D3C02636ECE7B1A62AF4B23178E

funciones, de conformidad al artículo 1 del Decreto Ley N°26126, Texto Único concordado de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.

Entre las funciones referidas a la materia solicitada, tenemos que en el procedimiento administrativo sancionador se garantiza el derecho a que el expediente administrativo contenga todas las actuaciones y documentos generados durante su tramitación; se informe al investigado anticipadamente cuando el expediente se encuentre expedito para resolver, a fin de que ejerza los medios de defensa reconocidos en la LPAG ante los órganos sancionadores o, en su caso, ante el órgano que resuelve la apelación, pudiendo solicitar el uso de la palabra de considerarlo necesario[67].

Así tenemos, que dadas las competencias específicas, la calidad de los sujetos y las materias que son de competencia de la SMV, en términos de equidad con los otros organismos que resuelven peticiones específicas categorizadas en términos de complejidad media y alta, a diferencia de la atención de los intereses generales comunes por el procedimiento administrativo general, se justifica un tratamiento especializado, el mismo que se debe ver reflejado también en la atención a los recursos presentados los administrados dentro de un plazo razonable y el debido proceso.

Conclusión
La submateria solicitada se encuentra justificada para la delegación de facultades. Se propone el siguiente texto sustitutorio:

"Establecer un marco normativo especial para la atención de los recursos administrativos presentados en los procedimientos administrativos sancionadores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que disponga la fijación de plazos distintos a los de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para la atención de los recursos interpuestos ante la SMV, en función al grado de complejidad de la materia, respetando el principio de razonabilidad y proporcionalidad así como el debido proceso en la atención de los recursos".

---

[67] Superintendencia del Mercado de Valores, Resolución de Superintendencia N° 00006-2012-SMV/01, publicado el 16/04/2012. En https://www.smv.gob.pe/ServicioConsultaNormas/frm_SIL_Detallev1.aspx?data=418E7666FABE5B38F1FE51AE2F097E0D3C02636ECE7B1A62AF4B23178E

3.1.7. Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, con principal incidencia en la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

En la solicitud de delegación de facultades sobre la presente submateria, el Ejecutivo sostiene que la ley limita los títulos habilitantes, generando pérdida de inversiones, lo que impacta desfavorablemente en el desarrollo del país, el cierre de brechas, carreteras, hospitales, aeropuertos, saneamiento, electrificación, proyectos de productos extractivos que incluye proyectos mineros. Sostienen, los proyectos una vez que obtienen la Certificación Ambiental, los titulares deben de gestionar licencias, autorizaciones y otros requerimientos para su ejecución, impidiendo que se realicen de modo paralelo[68].

Sostienen que cuando realizan el acompañamiento de línea, se formulan recomendaciones u observaciones reiterativas en la evaluación del estudio ambiental, a pesar de ser considerados, por lo que se incurre en costos negativos para el Estado, a los titulares, toda vez que no tiene una naturaleza vinculante. Para enfrentar esta problemática, proponen optimizar los procesos y procedimientos de IntegrAmbiente de modo que los proyectos de inversión tramiten de manera simultánea los títulos habilitantes, de modo paralelo se realice la evaluación de impacto ambiental, además de integrar otros títulos habilitantes a la certificación ambiental por su naturaleza y los que no son compatibles se evalúen de modo paralelo[69].

Los resultados que esperan obtener, afirman, reducirán el tiempo para el inicio de la ejecución de proyectos de inversión, reactivado la economía, contribuirá con la ejecución

[68] P.L. 07752-2024-PE, p. 10. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[69] P.L. 07752-2024-PE, p. 10. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

oportuna de proyectos de inversión sin mermar la calidad técnica de estudios ambientales. Asimismo, señalan que estos resultados coincide con los objetivos de la Política Nacional del Ambiente sobre la gobernanza ambiental, que al 30.03.2024, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) tiene en evaluación 106 proyectos de inversión, los que representan una inversión total aproximada de 14 mil millones de dólares, de los cuales 55 proyectos que representan 13 190 millones de dólares corresponden a los sectores agricultura, minería, hidrocarburos y electricidad; y, 51 proyectos que representan 810 millones de dólares corresponden a proyectos de infraestructura como transportes y gestión de residuos sólidos, entre otros. Además, señalan, que se esperan nuevos proyectos mineros por montos de 6 700 millones de dólares y de APP por montos mayores a 25 000 millones de dólares, proyectos que impulsarán la economía nacional[70].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los articulos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas a esta submateria pueden ser delegadas, y se advierte además que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en el extremo solicitado.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La propuesta de delegación de facultades sobre la submateria presenta como problemática que existen demoras en los procedimientos de evaluación de instrumentos de gestión ambiental por el alcance restringido de aplicación de la Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente). Señalan que la Certificación Ambiental Global se aplica a los estudios de impacto ambiental detallado (EIA-d) a cargo del SENACE y se excluye a la declaración de impacto ambiental (DIA) y a los estudios de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd) tramitados ante otras autoridades ambientales. Sostienen, que ello no permite utilizar el mecanismo IntegrAmbiente para evaluar los DIA y EIA-sd así como tampoco el otorgamiento de títulos habilitantes asociados estos instrumentos. Afirman que si se permitiría utilizar el IntegrAmbiente para evaluar DIA y EIA-sd sería más rápido y no debería

[70] P.L. 07752-2024-PE, p. 11. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

seguir el procedimiento ordinario de evaluación ambiental, lo que hace que el plazo legal sea excedido[71].

En esta misma situación, agregan, se encuentran títulos habilitantes sujetos a la certificación ambiental y que no se encuentran contemplados en el IntegrAmbiente, en dicha situación se encuentran 14 títulos habilitantes y se podrían incluir más títulos habilitantes, de tal modo, en caso de ser evaluados en el marco de la certificación global se otorgarían automáticamente por la entidad competente, en base al cronograma de estudio ambiental y su vigencia[72]. Así como, agregan, falta de alineación del plazo de obtención de la certificación ambiental global (150 días ampliable a 180 días hábiles) con el plazo de evaluación EIA-d (120 días hábiles), esta falta de alineación no incentiva a los titulares de proyectos utilizar el mecanismo de IntegrAmbiente, que tiene un procedimiento más corto[73]. También exponen como problemática la demora en la emisión de opiniones por parte de los Opinantes Técnicos y las deficiencias en el acompañamiento de Línea Base. En relación a la demora en la emisión de opiniones, advierten retraso en la emisión de las opiniones técnicas vinculantes y afirman que en la ley no se ha previsto que el titular del proyecto pueda solicitar las opiniones técnicas emitidas oportunamente y que si contienen observaciones las mismas deben ser levantadas por el titular, lo que no les facilita levantar las observaciones. Sobre la deficiencia en el acompañamiento de Línea Base, exponen que SENACE acompaña al titular al campo haciendo recomendaciones para elaborar la línea base y cuando se presenta el estudio ambiental se realizan observaciones sobre lo visto en el campo desvirtuando el acompañamiento, para lo cual plantean otorgar efecto vinculante a este acompañamiento. Así, manifiestan, con el efecto vinculante del acompañamiento se

[71] Anexo 2, submateria 3.1.7, p. 4. Presentado por Héctor Daniel Benitez Castro, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[72] Anexo 2, submateria 3.1.7, p. 4. Presentado por Héctor Daniel Benitez Castro, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[73] Anexo 2, submateria 3.1.7, p. 4. Presentado por Héctor Daniel Benitez Castro, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

optimizará la elaboración del estudio ambiental, se reducirán las observaciones hechas por las autoridades competentes en la evaluación ambiental[74].

Justifican la solicitud de delegación de facultades en la deficiencia normativa de la Ley N° 30327, señalan, que además de SENACE existen otras autoridades ambientales que aprueban Estudios de Impacto Ambiental Detallados no estando considerados, así como estudios ambientales que tampoco se han considerado en la ley. Y que IntegrAmbiente se creó para promover que los titulares en un solo procedimiento obtengan su Certificación Ambiental y 14 títulos habilitantes, objetivo que no se ha cumplido, así como, señalan, que existen títulos habilitantes que no están considerados en el proceso de certificación ambiental global y que SENACE los emite cuando no es objeto de su creación[75].

El Ejecutivo sostiene que el impacto que esperan alcanzar con la delegación de facultades solicitada en la presente submateria es incentivar la generación de inversiones, mejorar la economía del país, incrementar el trabajo y la mano de obra local directa e indirecta, se ejecutarán de modo oportuno y célere los proyectos de inversión para cerrar brechas de carreteras, hospitales, aeropuertos, saneamiento, electrificación, proyectos productivos extractivos, así mismo agregan, que reducirán el tiempo para el inicio de ejecución de proyectos de inversión, mejorarán la calidad de vida en beneficio de todos los peruanos, de especial de las poblaciones vulnerables. Y el impacto cuantitativo esperan lograr una inversión de 14 mil millones de dólares, de los cuales 55 proyectos representan a 13 190 millones de dólares que corresponden a sectores agricultura, minería, hidrocarburos y electricidad y 51 proyectos que representan 810 millones de dólares correspondientes a infraestructura como transportes y gestión de residuos sólidos. También, sostienen que esperan proyectos mineros nuevos por montos de 6 700 millones de dólares y de APP por montos mayores a 25 000 millones de dólares[76].

---

[74] Anexo 2, submateria 3.1.7, p. 4. Presentado por Héctor Daniel Benitez Castro, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[75] Anexo 2, submateria 3.1.7, p. 4. Presentado por Héctor Daniel Benitez Castro, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[76] Anexo 2, submateria 3.1.7, p. 4. Presentado por Héctor Daniel Benitez Castro, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

La certificación ambiental está configurada como un instrumento previo a los proyectos de inversión, la lógica que explica su otorgamiento previo es garantizar que el proyecto que se va a ejecutar tendrá un impacto mínimo en el medio ambiente. En la certificación ambiental se establecen los lineamientos a seguir, se establecen los deberes, requisitos que se debe de contar, la certificación ambiental es la carta de autorización de un proyecto que asegura que el impacto negativo que tendrá sobre el medio ambiente no es significativo, de tal modo, la certificación ambiental está diseñada para que los proyectos de inversión no se ejecuten sino se cuenta con el mismo, de tal modo que si no se obtiene este certificado las autoridades nacionales, regionales, locales, sectoriales no autorizarán, habilitarán la ejecución de proyectos sino se cuenta con la certificación ambiental.

Si bien con la delegación de facultades se pretende justificar que se realicen de modo paralelo los estudios; sin embargo, la importancia del estudio de impacto ambiental para asegurar que las inversiones no generen efectos nocivos e imposibles de reparar al medio ambiente, exige que se cuente con el certificado previamente como condición indispensable para dar la viabilidad al proyecto de inversión.

Conclusión
Por las consideraciones expuestas no corresponde que se otorgue la delegación solicitada en esta submateria.

3.1.8. Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, con principal incidencia en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
En la presente submateria el Ejecutivo solicita delegación de facultades para optimizar los procesos y criterios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA), regulado por la Ley N° 27446, a fin de cumplir los plazos legales, así como la ley requiere ser actualizada, para que genere predictibilidad y seguridad jurídica y celeridad en el impacto ambiental para la ejecución oportuna de los proyectos de investigación[77].

[77] P.L. 07752-2024-PE, p. 11. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

Sostiene el Ejecutivo, que los proyectos de investigación que buscan el desarrollo sostenible y el cierre de brechas no se ejecutan en tiempos razonables porque existe demora excesiva en la tramitología, agregan, que por la antigüedad de la norma, el inicio de la ejecución de los proyectos es tardío, no se cumple con los plazos y no se contribuye con la reactivación económica, con el cierre de brechas y el desarrollo sostenible[78].

Asimismo, afirman que los cambios normativos solicitados en la delegación de facultades en la presente submateria no desnaturalizará la calidad técnica de los estudios ambientales, el mismo que se hará en concordancia con los objetivos de la Política Nacional del Ambiente sobre la gobernanza ambiental. Consideran que al 30 de marzo del 2024, el SENACE tiene en evaluación 106 proyectos de inversión, que representan una inversión de aproximadamente 14 mil millones de dólares, de los cuales 55 proyectos que representan 13 190 millones de dólares se refieren a sectores de agricultura, minería, hidrocarburos y electricidad; y, 51 proyectos que representan 810 millones de dólares corresponden a proyectos de infraestructura como transportes y gestión de residuos sólidos, entre otros[79].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas a esta submateria pueden ser delegadas, y se advierte además que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en la submateria solicitada.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El Ejecutivo presenta como problemática la admisibilidad y demoras en las opiniones técnicas. Refieren, que sobre los plazos de admisibilidad de solicitudes de certificación y demoras de opinión técnica, se han abordado en la modificación del Reglamento de la Ley N° 27446; sin embargo, buscan elevar su estándar de exigibilidad al rango de ley. La problemática que plantean comprende: la demora en la gestión integral de permisos en el contexto de la Certificación Ambiental (ya que se exige certificación ambiental para otorgar

[78] P.L. 07752-2024-PE, p. 11. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[79] P.L. 07752-2024-PE, p. 13. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

permisos, licencias, autorizaciones a pesar que no es indispensable para otorgar estos títulos habilitantes), vacíos normativos y falta de uniformización de plazos en el procedimiento de evaluación ambiental (en tanto los reglamentos de protección ambiental no comprenden plazos para emitir opiniones técnicas y si los contemplan han generado demoras, lo que genera que el otorgamiento de la certificación ambiental demore de 2 a 4 años); y, falta de coordinación y articulación que conlleva a múltiples informaciones complementarias (porque como no se llevan coordinaciones entre los titulares, las autoridades ambientales y los opinantes técnicos, los titulares envían información complementaria lo que genera retraso), sobre este último punto proponen autorizar la entrega anticipada de posibles observaciones, de tal modo los titulares presenten el levantamiento cuando reciban el informe consolidado de observaciones[80].

Sostienen que la necesidad de intervención normativa se justifica por la deficiencia y vacíos normativos que se presentan en la Ley N° 27446, en tanto dicha norma es del 2001; así como también, para optimizar y modernizar procesos y mejorar la articulación de los actores del SEIA. En tanto, en la citada norma, afirman, que no se consideran las condiciones actuales de los procesos de evaluación ambiental, los cambios en los entornos, la interacción entre los actores del SEIA, el dinamismo de los proyectos de inversión, la existencia de criterios y procedimientos no uniformes, que han generado que los estudios de impacto ambiental que deberían aprobarse en 120 días se aprueban en 3 o 4 años, lo que no impulsa la reactivación económica así como tampoco el cierre de brechas con desarrollo sostenible[81].

El impacto que pretenden alcanzar, refieren, generarán inversiones, mejorarán la economía e incrementarán el trabajo y mano de obra local directos e indirectos, disminuirán los plazos de ejecución de proyectos al emitirse la certificación ambiental en los plazos señalados por la ley, lo que permitirá ejecutar oportunamente los proyectos de inversión para el cierre de brechas, reduciendo el tiempo para la ejecución de proyectos de inversión. De tal modo, afirman, que el cambio normativo solicitado en la delegación de facultades en la presente

---

[80] Anexo 2, submateria 3.1.7, p. 6. Presentado por Héctor Daniel Benitez Castro, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[81] Anexo 2, submateria 3.1.7, p. 6. Presentado por Héctor Daniel Benitez Castro, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

submateria, contribuirá con la ejecución oportuna de proyectos de inversión sin afectar la calidad técnica de los estudios ambientales e implicará una evaluación por SENACE de 106 proyectos de inversión que significan una inversión total aproximada de 14 mil millones de dólares[82].

La delegación de facultades solicitada no precisa en qué consiste el cambio normativo, cuáles serían las normas que establecerían referido a la evaluación del impacto ambiental, en la exposición de motivos se señala resulta necesario optimizar los procesos y criterios del SEIA que conlleven al cumplimiento de plazos legales, para luego agregar que la ley necesita ser actualizada para que genere predictibilidad, seguridad jurídica y celeridad en la evaluación del impacto ambiental. Sin embargo, no se especifica en qué cosiste la actualización y que modificaciones se realizarían para, por ejemplo, se cumplan los plazos legales.

De otro lado, tratándose una propuesta delegación de facultades que pretende hacer modificaciones sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo requiere de una iniciativa legislativa que permita que se presenten opiniones, se apertura el debate y se socialice las propuestas en los diversos sectores involucrados, y no solo se considere los puntos de vistas técnicos presentado por el Ejecutivo.

Conclusión
Por las consideraciones expuestas, se considera no otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en este extremo.

3.1.9. Fortalecer el marco normativo en materia migratoria, con especial incidencia en el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, a efectos de complementar las atribuciones en materia migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando la seguridad jurídica y el acceso al procedimiento de regularización migratoria de las calidades migratorias bajo su competencia.

[82] Anexo 2, submateria 3.1.7, p. 6. Presentado por Héctor Daniel Benitez Castro, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Se solicita delegación de facultades en la presente submateria a fin de implementar procedimientos de regularización migratoria, como ampliar los plazos de permanencia de extranjeros que tienen calidad migratoria y el fortalecimiento del reconocimiento del carné de identidad como documento oficial de identificación para extranjeros. Sustentan su solicitud de delegación de facultades en que la normativa migratoria vigente no faculta expresamente la exoneración de visas mediante decisiones unilaterales. Afirman, que requieren contar con una cobertura normativa para implementar y regular reglamentariamente procedimientos de regularización normativa[83].

Señalan que el Ministerio de Relaciones Exteriores (en adelante MRE) otorga calidades migratorias a ciudadanos extranjeros que ingresan al país en cumplimiento de funciones por encargo de su gobierno u organismos internacionales, así como a expertos o voluntarios que vienen a realizar actividades de asistencia social, humanitaria, entre otros, en el contexto de la cooperación internacional; también otorga calidades migratorias a quienes realizan actividades de intereses para el Estado peruano o son invitados a eventos oficiales, periodistas, personal técnico y artístico que ayudan a visibilizar al Perú. Refieren, que los extranjeros presentan inconvenientes cuando se exceden del plazo de permanencia otorgado, en tanto no pueden acceder a un procedimiento de regularización, y la alternativa que les queda es salir del país, pagar la multa impuesta por Migraciones y volver a ingresar. Y plantean, a fin de que los extranjeros accedan a dicho procedimiento, requieren la delegación de facultades para establecer la atribución del MRE para realizar el procedimiento de regularización, en tanto la legislación vigente no lo estipula. Lo que incluye otorgar al MRE la potestad sancionadora, a efectos de poder imponer la multa que corresponda[84].

Sobre el carné de identidad que expide el MRE, sostienen, que presenta problemas para su reconocimiento ante instituciones públicas y privadas, por ello solicitan modificar el numeral 15.1 del Decreto Legislativo N° 1350 y señalar el nombre asignado a este

---

[83] P.L. 07752-2024-PE, p. 13. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[84] P.L. 07752-2024-PE, p. 13. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

documento oficial e incorporar un artículo donde se brinde la definición, sus características y efectos jurídicos[85].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

De conformidad a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas en el extremo solicitado pueden ser delegadas, y se advierte además que lo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades de la submateria solicitada.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El Ejecutivo presenta como problemática para la solicitud de delegación de facultades en la presente submateria que el MRE no tiene la atribución de implementar procedimientos de regularización migratoria, en lo referente a las calidades migratorias de turista y negocio no se reconoce la exoneración de visas mediante decisión unilateral del Estado. Sobre el carné de identidad de los extranjeros, refieren, presenta inconvenientes para ser reconocido en instituciones públicas y privadas. Agregan, la legislación migratoria actual no faculta al MRE para acceder gratuitamente a base de datos y registros de otras entidades sobre nacionales y extranjeros y otro problema indican es la desarticulación entre la política migratoria interna y la exterior. La necesidad de la intervención normativa, identifica el Ejecutivo como deficiencia[86].

Con la presente solicitud de delegación de facultades se busca beneficiar la situación migratoria de extranjeros que tienen la calidad migratoria por intermedio de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, de tal modo, que se presenten condiciones adecuadas para que a pesar de su condición migratoria no tengan, por ejemplo, que salir del país y volver a ingresar. De otro lado, el carné de identidad para extranjeros permite que puedan acceder a servicios civiles, comerciales, administrativos, judiciales, entre otros.

---

[85] P.L. 07752-2024-PE, p. 13. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[86] Anexo 2, submateria 3.1.9, p. 10. Presentado por Antonio Pedro Miranda Sisniegas, Ministro Consejero, Ministerio de Relaciones Exteriores. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

De tal modo, con la presente solicitud de facultades se pretende alcanzar una política nacional migratoria coherente, en concordancia con la política exterior, gestando el desarrollo nacional y fortalece las relaciones internacionales del Perú.

Conclusión
En base a las consideraciones expuestas, la submateria solicitada se encuentra justificada para la delegación de facultades. Se propone el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, a fin de complementar las atribuciones en materia migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando la seguridad jurídica y el acceso al procedimiento de regularización migratoria de las calidades migratorias bajo su competencia".

3.1.10. Establecer disposiciones en materia de selección, ratificación, funciones y potestad sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, a fin de fortalecer la gestión del servicio de traducciones oficiales.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
El Ejecutivo en la Exposición de Motivos de la presente submateria señala que el Decreto Ley N° 18093, de 6 de enero de 1970, creó el cargo de traductor público para documentos de servicio y uso de particulares, se modificó por el Decreto Legislativo N° 712, sin embargo, consideran que se legisló de modo insuficiente lo referido a la gestión del servicio de traducciones oficiales a cargo de traductores públicos juramentados[87].

Agregan, la delegación de facultades impactará favorablemente en la gestión del servicio de traducciones oficiales, mejorando tiempos de atención, calidad, costos, seguridad jurídica, asimismo, indica, la ley actual no regula los requisitos, condiciones del proceso de

[87] P.L. 07752-2024-PE, p. 14. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

selección y ratificación de las funciones y potestades sancionadoras sobre los traductores públicos juramentados[88].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

De conformidad a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas en el extremo solicitado pueden ser delegadas, y se advierte además que lo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades del extremo solicitado.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El Ejecutivo plantea como problemática que en la actualidad el Decreto Ley N° 18093, del 6 de enero de 1970, modificado por el Decreto Legislativo N° 712, del 7 de noviembre de 1991, legisla de modo insuficiente la gestión del servicio de traducciones oficiales a cargo de los traductores públicos juramentados, en tal sentido, buscan actualizar la normativa sobre la materia, adecuando a los dispositivos entre otros a la Ley 27444, a fin de mejorar tiempos de atención, costos de las traducciones. Agregan además, la delegación para actualizar la normativa generará mayor seguridad jurídica y mandatos legales sobre las funciones, procesos de selección y ratificación y adecuada acción de fiscalización y sanción, considerando que hace catorce años no se realiza proceso de selección para nombrar nuevos traductores públicos juramentados. La necesidad de intervención de la norma, el Ejecutivo señala que se trata de una deficiencia normativa, y que el impacto que pretenden lograr es organizar los procesos de selección y ratificación[89].

La solicitud de delegación de facultades sostiene que con la ampliación del número de traductores públicos juramentados se beneficiará a los usuarios, permitirá disminuir plazos, costos. Asimismo, con la modificación del Decreto Legislativo N° 712 se regulará la potestad sancionadora a los traductores públicos juramentados, tipificando las conductas indebidas y las sanciones correspondientes. La solicitud de delegación impactará favorablemente en

---

[88] P.L. 07752-2024-PE, p. 14. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[89] Anexo 2, submateria 3.1.9, p. 10. Presentado por Antonio Pedro Miranda Sisniegas, Ministro Consejero, Ministerio de Relaciones Exteriores. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

el servicio, aumentará el número, se fiscalizará su labor y se disminuirá los plazos de atención, reduciendo los costos de traducción oficial.

De este modo, la función que desempeñan los traductores públicos juramentados coadyuvan a acceder a traducciones oficiales con validez legal para ser presentadas ante las autoridades, organismo públicos o entidades privadas, prestando el servicio con la debida oportunidad y con la posibilidad de elegir, para tal efecto de debe contar con el número suficiente de traductores públicos juramentados, debidamente fiscalizados. Asimismo, el procedimiento de control y fiscalización sobre los traductores públicos juramentados debe contener reglas claras para realizar el procedimiento sancionador correspondiente.

Conclusión
En base a las consideraciones expuestas, la submateria solicitada se encuentra justificada para la delegación de facultades en sus términos.

3.1.11. Modificar los plazos de los procedimientos administrativos de licencias, autorizaciones y derechos de uso de vía y área acuática para la ejecución de proyectos, estableciendo disposiciones para disminuir los plazos para el pronunciamiento, en el caso de expedientes reingresados.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
Afirma el Ejecutivo, la solicitud de delegación de facultades en la presente submateria tiene como objetivo la emisión en un plazo razonable de las licencias de construcción cuando el expediente de solicitud ha sido revisado más de una oportunidad, en los casos de licencias que otorgan las municipalidades, las autorizaciones y derechos de uso de vía emitidas por PROVIAS y del área acuática de DICAPI, con el fin de evitar que se retrase el inicio de la ejecución de la obra y se afecte su inicio[90].

Señalan que el plazo máximo de dictamen es de 30 días hábiles, de conformidad a los TUPA de la Municipalidad de Lima (para la concesión de licencias de construcción),

[90] P.L. 07752-2024-PE, p. 14. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

PROVIAS NACIONAL (para el uso de derechos de vía) y DICAPI (para el uso de derechos de área acuática). Plazo que se aplica a los expedientes observados y que han reingresado en más de una oportunidad, y en ocasiones se extiende por un plazo mayor. En tal sentido, agregan, que estas instituciones ya conocen la solicitud y la naturaleza de la intervención por lo que sostienen que el plazo debería reducirse para permitir un proceso más ágil y el inicio de la obrase realice dentro del plazo[91]. Proponen modificar el trámite establecido en los TUPA de Municipalidad de Lima, PROVIAS NACIONAL, y DICAPI y para realizar estas modificaciones solicitan la delegación de facultades para reformar el artículo 39 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General de la Ley N° 27444 en un plazo menor para emitir dictámenes[92].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

De conformidad a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas en la submateria solicitada pueden ser delegadas, y se advierte además que lo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en la presente submateria.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El Ejecutivo sostiene como problemática de la presente submateria para la solicitud de delegación de facultades que existen demoras en la obtención de licencias, autorizaciones, derechos de uso de vía y área acuática para ejecutar proyectos. Y la necesidad de intervención normativa, sostienen, que se trata de un vacío normativo, en tanto las normas que regulan el procedimiento de otorgamiento de licencias, derechos de uso de vías y del área acuática, no señalan un plazo específico para la solicitud de expedientes reingresados[93].

---

[91] P.L. 07752-2024-PE, p. 14. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[92] P.L. 07752-2024-PE, p. 14. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[93] Anexo 2, submateria 3.1.11, p. 12. Presentado por Humberto Velásquez Guevara, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Relaciones Exteriores. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

En tal sentido, proponen, disminuir los plazos de pronunciamiento a 10 días hábiles para expedientes reingresados, lo que permitirá, indican, agilizar el inicio de ejecución de las obras de los proyectos de inversión pública.

La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización del Estado, mediante Informe de Opinión de fecha 28 de mayo del 2024, aprobado por mayoría, se pronuncia sobre la viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE) y sobre la presente submateria señala lo siguiente[94].

La materia solicitada no forma parte de aquellas establecidas como indelegables según el numeral 2 del artículo 101 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. En este sentido, supera el test de constitucionalidad. Respecto de la pertinencia, la Comisión de Descentralización coincide en la necesidad de recortar los plazos de evaluación de los expedientes reingresados, precisamente porque estos suponen la subsanación de ajustes previamente observados por la entidad. En ese sentido, carece de razonabilidad que los plazos previstos para su evaluación se equiparen o igualen a aquellos previstos para que la entidad conozca la solicitud formulada y el fundamento que la sostiene[95].

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Descentralización estima imprescindible que, en aras de la mejora regulatoria, la simplificación administrativa y, sobre todo, de la promoción de la inversión, el Ejecutivo no solo establezca un plazo diferenciado para la evaluación de los expedientes reingresados, sino que sujete su aprobación a silencio administrativo positivo, en la medida en que no colisione con los parámetros establecidos por el artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General[96].

---

[94] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

[95] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL 7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p. 11. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

[96] Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (PL

A fin de resolver dentro de un plazo razonable los expedientes que han sido revisados y que se ha detectado algunas omisiones y se han observado para ser subsanado, debe tener un tratamiento diferente de los expedientes que solicitan su calificación, en tanto se trata de una situación distinta, diferente a la calificación del expediente. En esta dirección, tratándose de expediente que han sido revisados o que se tiene que subsanar las observaciones detectadas, corresponde que se realice un procedimiento distinto y diferente al de la calificación. Así, para los expedientes que ya fueron materia de revisión y se detectó alguna observación el plazo debe ser diferente al plazo de calificación, por lo que se justifica establecer un plazo diferenciado para la revisión de la observaciones de expedientes reingresados.

Conclusión
En base a las consideraciones expuestas, la submateria solicitada se encuentra justificada para la delegación de facultades en sus términos.

3.1.12. Modificar el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, a efectos de fortalecer el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (RENACE).

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
Respecto a la presente submateria, el Ejecutivo solicita delegación de facultades presentando como problemática que el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (en adelante RENACE), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no es obligatoria la inscripción de Árbitros y Centros de Arbitraje. Afirman, RENACE no cumple con su finalidad de combatir la inseguridad jurídica, el descrédito del arbitraje, la proliferación de centros de arbitraje creados sin rigurosidad. Plantean como propuestas disponer la obligatoriedad del registro, de tal modo, agregan que todo árbitro debe inscribirse para prestar sus servicios en el sistema arbitral, con lo que se coadyuvará a la seguridad jurídica a las controversias se diluciden mediante el arbitraje[97].

7752/2023-PE), aprobado por mayoría en la décimo octava sesión ordinaria, realizada el 28 de mayo de 2024, p.11. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxMjAy/pdf

[97] P.L. 07752-2024-PE, p. 15. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

En esta dirección, agregan la propuesta no genera gasto público al tesoro público, e tanto la función de registro ya es desarrollada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que al fortalecer el sistema arbitral promoverán la seguridad jurídica y el arbitraje cumplirá su función constitucional de mecanismo alternativo de solución de conflictos[98].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

En concordancia con los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de la ley relativa a la presente submateria solicitada puede ser delegada, y se advierte además que lo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en el extremo solicitado.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Para la delegación de facultades en la presente submateria el Ejecutivo presenta como problemática que con posterioridad a la emisión del Decreto Urgencia N° 020-2020 que suprimió la OSCE y crea el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje (RENACE) a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, afirman que uno de los problemas desde su vigencia es la no obligatoriedad de la inscripción, lo que ha generado inseguridad jurídica, descrédito del arbitraje, proliferación de centros de arbitraje sin rigurosidad con casos de corrupción. Afirman que su propuesta tiene como fin disponer la obligatoriedad del registro, por lo que todo operador del sistema arbitral debe inscribirse, salvo las contrataciones del Estado, si desea prestar sus servicios en el sistema arbitral[99].

Indican que la necesidad normativa se trata modificar el Decreto de Urgencia 020-2020 a fin de que estén obligados a inscribirse en el RENACE los Centros de arbitraje y árbitros. El impacto de la delegación de facultades es contar con un Registro Nacional de arbitrajes y árbitros para su autorización y acreditación, señalan que en la actualidad el registro se realiza de modo voluntario, siendo ellos los responsables de la información que se registra.

---

[98] P.L. 07752-2024-PE, p. 15. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[99] Anexo 2, submateria 3.1.12, p. 13. Presentado por July Janet Hipólito Espejo, Directora de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

Asimismo, agregan que a la fecha tiene la siguiente cantidad de inscripciones, pero que la misma no refleja el total de árbitros y Centros de arbitraje[100]:

Centros de Arbitraje y Árbitros registrados en el RENACE	
Centros de Arbitraje	*Árbitros*
233	3225

La solicitud de delegación de oportunidades busca dotar de un marco normativo que garantice el adecuado desarrollo de los procesos arbitrales, permitirá la administración eficiente de los procesos arbitrales, mejorará la calidad del servicio y la percepción de los ciudadanos, posicionará al arbitraje como un mecanismo eficaz, rápido, ágil y económico, descongestionará despachos judiciales, y solucionará la problemática que no se exige a las instituciones arbitrales a estar acreditadas o cumplir con determinados requisitos para administrar arbitrajes, incluyendo las controversias donde el Estado peruano es parte.
En la Exposición de Motivos de la delegación de facultades de la presente submateria se indica que todo árbitro debe inscribirse en el RENACE para prestar sus servicios en el sistema arbitral, condición que se ratifica en el anexo 2 presentado por los funcionarios de Ministerio de Justicia[101].

Asimismo, en la presentación del ministro de Justicia en la vigesimotercera sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, invitación a Ministros de estado, se hizo énfasis en la condición del registro como obligatorio con fines de acreditación de los Centros de arbitraje y los árbitros, tal como se puede evidenciar también de las diapositivas presentadas, donde se indica que la inscripción obligatoria se realiza con fines de acreditación[102]. Así, en dichas diapositivas se indica que la propuesta del D.L. consiste en

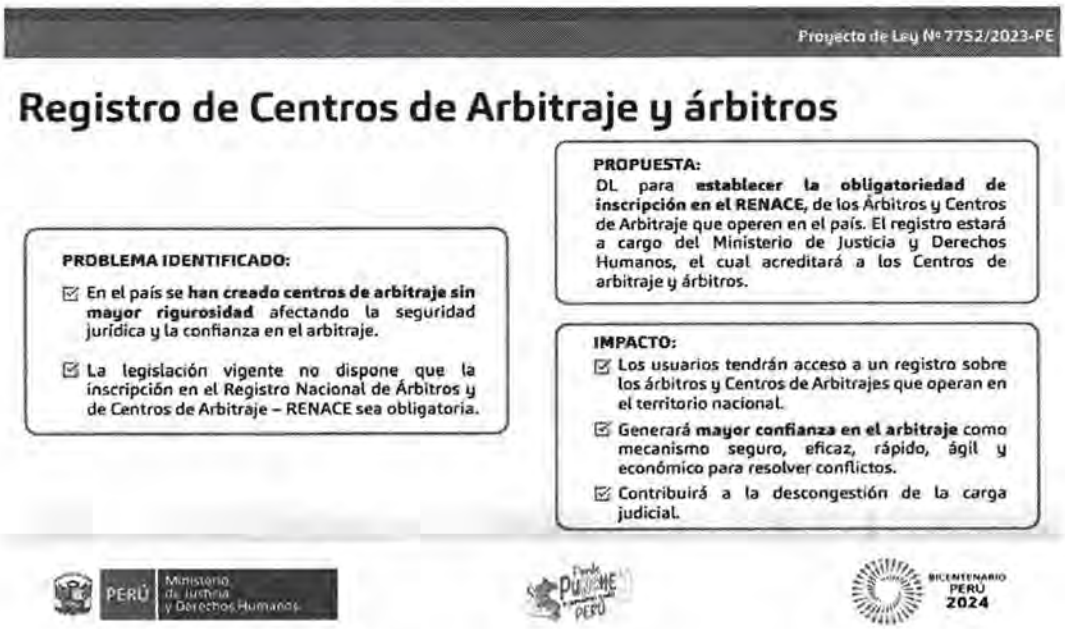
---

[100] Anexo 2, submateria 3.1.12, p. 13. Presentado por July Janet Hipólito Espejo, Directora de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[101] Anexo 2, submateria 3.1.12, p. 13. Presentado por July Janet Hipólito Espejo, Directora de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[102] Ministro Eduardo Melchor Arana Ysa, MINJUS, Diapositiva sobre Proyecto de Ley N° 7752/2023-PE. Propuestas de Decretos Legislativos del Ministerio de Derechos Humanos, Vigesimotercera

establecer la obligatoriedad de inscripción en el RENACE, que estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cuál acreditará a los Centros de arbitraje y árbitros. En dichas diapositivas se expresa[103]:



De otro lado, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, mediante opinión sobre la submateria precisa que en el proyecto de ley no se sustenta la necesidad de generar la obligación de la inscripción

---

sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, invitación a Ministros de estado, 28 de mayo de 2024, 8va. Diapositiva. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/minjus_fac.pdf

[103] Ministro Eduardo Melchor Arana Ysa, MINJUS, Diapositiva sobre Proyecto de Ley N° 7752/2023-PE. Propuestas de Decretos Legislativos del Ministerio de Derechos Humanos, Vigesimotercera sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, invitación a Ministros de estado, 28 de mayo de 2024, 8va. Diapositiva. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/minjus_fac.pdf

en el registro, por lo que esta disposición significaría un costo de cumplimiento para la ciudadanía que no parece haber sido considerado. Y, debe tenerse en cuenta la existencia de un Registro Nacional de Árbitros, administrado por el OSCE que en la Ley General de Contrataciones Públicas — recientemente aprobado por el Congreso a propósito del proyecto de ley 5472/2022- PE, propuesto por el Poder Ejecutivo— ha sido objeto de eliminación.

Asimismo, la Comisión de Descentralización, concluye que de lo expuesto se recomienda no otorgar las facultades de legislar en la materia señalada, dado que no se trata de una disposición que coadyuve a la reactivación económica, ni a la simplificación y calidad regulatoria.

La solicitud de facultades en esta submateria busca contar con un registro actualizado de los Centros de arbitraje y árbitros para dotar de seguridad mediante la publicidad oficial de los que presentan el servicio arbitral, con fines de acreditación, y considerando la preocupación de la Comisión de Descentralización el mismo debe de ser gratuito.

En esta dirección, la inscripción obligatoria que se solicita en la presente delegación de facultades debe tener como único fin acreditar a los Centros de arbitraje y árbitros, con fines de seguridad juridica de identificar los Centros de arbitraje y árbitros, lo que va en la línea de la exposición del Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la vigesimotercera sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, invitación a Ministros de estado[104] y no colocar requisitos adicionales para la presentación del servicio arbitral, en tanto que la misma facultad no ha sido solicitada de modo expreso y diferenciado en el pedido de delegación de facultades.

Conclusión

En base a las consideraciones expuestas, la submateria solicitada se encuentra justificada para la delegación de facultades. Se propone el siguiente texto sustitutorio:

---

[104] Ministro Eduardo Melchor Arana Ysa, MINJUS, Diapositiva sobre Proyecto de Ley N° 7752/2023-PE. Propuestas de Decretos Legislativos del Ministerio de Derechos Humanos, Vigesimotercera sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, invitación a Ministros de estado, 28 de mayo de 2024, 8va. Diapositiva. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/minjus_fac.pdf

"Modificar el Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, a efectos de fortalecer el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (RENACE), disponiendo con fines de acreditación e información pública la obligatoriedad de la inscripción de los Cetros de arbitraje y árbitros en el RENACE sin costo alguno y sin generar mayores requisitos para la prestación del servicio arbitral".

3.1.13. Aprobar mejoras regulatorias en la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica con el objetivo de incrementar la competencia en la actividad de generación de energía eléctrica y promover una mayor inversión en nuevas fuentes de generación de energía eléctrica para el suministro de los usuarios regulados, a fin de contar con energía eléctrica a menor costo y menos contaminante, lo que contribuirá a reducir las tarifas eléctricas de los usuarios regulados.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La Exposición de Motivos de la solicitud de delegación de facultades presentada por el Ejecutivo sobre la presente submateria señala que ha identificado como problema público la elevación continua en el país del costo de la energía eléctrica afectando a 8.7 millones de usuarios que representan 34.8 millones de personas aproximadamente afectando la economía nacional y familiar, en especial de recursos económico bajos. Señalan que Osinergmin ha advertido el incremento sostenido del costo unitario de la tarifa eléctrica[105].

Para tal efecto, proponen modificar la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, a fin de incrementar la competencia en la generación de energía eléctrica, reducir los costos y promover mayor inversión en nuevas fuentes de generación de energía eléctrica renovable no convencional para el suministro de servicio público de electricidad, menos contaminante y ambientalmente sostenible. Señalan que las alternativas de mejora regulatoria para el mejor desempeño del subsector electricidad requieren ser implementadas mediante normas con fuerza de ley, para tal efecto OSINERGMIN presentó al MINEM la propuesta de modificación a la Ley N° 28832, asimismo, dispusieron la publicación de la propuesta de iniciativa legislativa "Ley que modifica la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación

[105] P.L. 07752-2024-PE, p. 15. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

Eléctrica", con su respectiva Exposición de Motivos en el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas. Es así que la propuesta legislativa fue aprobada por el Consejo de Ministros y presentada al Congreso el 24 de marzo del 2023, con la denominación de Proyecto de Ley N° 4565/2022-PE. Agrega, la iniciativa legislativa presentada obedece al déficit de generación eléctrica a bajo costo y barreras de ingreso de inversionistas con tecnologías de generación eficiente a bajo costo, de esto modo, afirman, si no se toma medidas oportunas se tendría un posible incremento de las tarifas que pagan los usuarios en los próximos años[106].

Indican que el Proyecto de Ley N° 4565/2022-PE cuenta con la exoneración del AIR Ex Ante, al mismo se acumularon los Proyectos de Ley N° 2139/2021-CR, 3662/2022-CR, 4748/2022-PE, y se emitió el Dictamen N° 30, aprobado en mayoría, donde identificaron como problema público que las tarifas reguladas más altas en América Latina las tiene el Perú, causada por la exigencia de contratar la provisión de electricidad en la modalidad de *full requirement* (obligaciones de venta conjunta de potencia firme y de energía). Así como, por carecer de diversificación de la matriz energética, al no aprovecharse los recursos renovables del país. En esta dirección las propuestas normativas que plantean consiste: *(i) promover la competencia en el segmento de generación y promover las inversiones de RER, (ii) brindar predictibilidad a las licitaciones que deben efectuar las empresas distribuidoras y promover precios de generación más eficientes, (iii) promover el desarrollo de generación RER en sistemas aislados y establecer un operador en estos sistemas cuando haya más de un operador*[107].

Y agregan, que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República del Perú coincide con el Proyecto de Ley propuesto, en tanto, señalan, busca reducir la facturación de energía eléctrica mediante apertura de participación de la energía RER no convencionales en las licitaciones de suministro de energía eléctrica, beneficiando a cientos de familias a nivel nacional, utilizando energía limpia y sostenible[108].

---

[106] P.L. 07752-2024-PE, p. 17. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[107] P.L. 07752-2024-PE, p. 17. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[108] P.L. 07752-2024-PE, p. 18. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

En concordancia con los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de la ley relativa a la presente submateria solicitada puede ser delegada, y se advierte además que lo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en la submateria solicitada.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En la problemática que presenta el Ejecutivo para solicitar delegación de facultades en la presente submateria, señala que existe el riesgo de incremento de tarifas eléctricas de aproximadamente 34.8 millones de usuarios a nivel nacional en los próximos años y el alto riesgo de llegar al límite de la generación eléctrica eficiente (bajo costo y ambientalmente sostenible), así como el incremento del uso de combustibles fósiles de alto costo y alta contaminación. Afirman, que la necesidad de intervención normativa consiste en modificar la Ley 28832, ya que la presente ley obliga a contratar potencia y energía de manera conjunta, limitando la participación de centrales de generación solar o eólica, indican además, que el precio a nivel de generación (PNG) se incrementará progresivamente en los próximos años, ocasionando que los precios que pagan todos los usuarios regulados por la actividad de generación se elevarán hasta en un 20%, elevación que no se produciría si se aprueba el Proyecto de Ley[109].

En esta dirección, el impacto que proponen alcanzar es incrementar la competencia en la actividad de generación de energía eléctrica, establecer una mayor predictibilidad en las licitaciones de suministro, reducir las tarifas eléctricas, facilitar la construcción de nuevas centrales de generación de electricidad y promover una mayor participación de energías renovables en los sistemas aislados[110].

---

[109] Anexo 2, submateria 3.1.13, p. 15. Presentado por David Arias Díaz, Director de Estudios y Promoción Eléctrica del Viceministerio de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[110] Anexo 2, submateria 3.1.13, p. 15. Presentado por David Arias Díaz, Director de Estudios y Promoción Eléctrica del Viceministerio de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República (en adelante Comisión de Energía y Minas), mediante Oficio N° 1480-2023-2024-CEM/CR, de fecha 23 de mayo de 2024, emitió opinión sobre el Proyecto de Ley N° 7752/2023 respecto de los numerales 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17,3.1.18, 3.1.19 y 3.1. 20 del artículo 3, referidos a la especialidad y materias que competen a la Comisión de Energía y Minas.

Sobre la presente submateria 3.1.13 la Comisión de Energía y Minas en el análisis de la pertinencia de la submateria solicitada señala que el 9 de junio del 2023 aprobó con texto sustitutorio la "Ley que modifica la Ley 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, a fin de garantizar el abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico y promover la diversificación de la matriz energética", recaído en el Proyecto de Ley 4565/2022-PE "Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica", presentado por el Poder Ejecutivo el 24 de marzo de 2023 y otros. Asimismo agrega que a la fecha la Comisión de Economía y Finanzas tiene pendiente la expedición del dictamen relativo al Proyecto de Ley 4565/2022-PE "Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica", presentado por el Poder Ejecutivo el 24 de marzo de 2023[111].

Sin embargo, mediante Oficio 1331-2023-2024-CEM/CR de fecha 30 de abril de 2024, la Comisión de Energía y Minas solicitó se exonere a la Comisión de Economía y Finanzas de la emisión de su dictamen, conforme al artículo 77 del Reglamento del Congreso de la República. Y de conformidad, al artículo 73 del Reglamento del Congreso, sobre las etapas del procedimiento legislativo, están pendientes las etapas de debate, aprobación y promulgación[112].

En relación al Dictamen y su texto sustitutorio en el Dictamen de la Comisión de Energía y Minas se señala que en América Latina el Perú paga una de las tarifas reguladas más altas, causada por la obligatoriedad contratar la provisión de electricidad en la modalidad de *full requirement*, asimismo, por no diversificar la matriz energética, en tanto no se aprovecha

[111] Comisión de Energía y Minas, Oficio N° 1480-2023-2024-CEM/CR, Opinión del Proyecto de Ley No. 7752/2023-PE, de fecha 23 de mayo del 2024, p. 3. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Nzcw/pdf

[112] Comisión de Energía y Minas, Oficio N° 1480-2023-2024-CEM/CR, Opinión del Proyecto de Ley No. 7752/2023-PE, de fecha 23 de mayo del 2024, p. 3. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Nzcw/pdf

los recursos renovables existentes en el Perú, con la regulación se busca optimizar la contratación de los distribuidores de potencia y energía eléctrica, y promover la diversificación de la matriz energética[113].

Agrega el Informe de opinión de la Comisión de Energía y Minas que en las páginas 28 y 44 se indican las alternativas de solución ante la problemática planteada, así plantean *promover la competencia en el segmento de generación y facilitar el desarrollo de inversiones con recursos energéticos renovables; brindar predictibilidad a las licitaciones que deben efectuar las empresas distribuidoras y promover precios de generación más eficientes; y, promover el desarrollo de generación renovable en sistemas aislados y establecer el operador de sistemas aislados con más de un generador*[114].

Y en relación al análisis de necesidad y viabilidad se indica en el Informe de la Comisión de Energía y Minas que en las páginas 49 y 50 del Dictamen se precisan las mismas, donde se señala que "*La Comisión de Energía y Minas estima adecuada la recomendación de modificar (...) ya que permitirá a los distribuidores a realizar contrataciones de potencia y energía eléctrica de los sistemas aislados, en las nuevas modalidades de contratación alternativas al de contratación full requirement, además promoverá la diversificación de la matriz energética...*". Y sobre la oportunidad de implementar la norma, indica la Comisión de Energía y Minas que "*a agosto del 2022, el Ministerio de Energía y Minas, había iniciado el proceso de reformulación de la Ley 28832, para implementar a corto plazo las recomendaciones de la Comisión Multisectorial para la Reforma del Subsector Electricidad, la misma que buscaría la promoción de energías renovables no convencionales en zonas aisladas, además, la implementación de diversos esquemas para la mejora en las licitaciones para el suministro de electricidad, así como, la separación de compras para el suministro eléctrico por potencia y energía*" [115].

---

[113] Comisión de Energía y Minas, Oficio N° 1480-2023-2024-CEM/CR, Opinión del Proyecto de Ley No. 7752/2023-PE, de fecha 23 de mayo del 2024, p. 3. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Nzcw/pdf

[114] Comisión de Energía y Minas, Oficio N° 1480-2023-2024-CEM/CR, Opinión del Proyecto de Ley No. 7752/2023-PE, de fecha 23 de mayo del 2024, p. 4. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Nzcw/pdf

[115] Comisión de Energía y Minas, Oficio N° 1480-2023-2024-CEM/CR, Opinión del Proyecto de Ley No. 7752/2023-PE, de fecha 23 de mayo del 2024, p. 4. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Nzcw/pdf

Por lo que la Comisión de Energía y Minas concluye que no considera viable la delegación de facultades en la presente submateria, en tanto "no aprecia en la fórmula legal ni en la exposición de motivos el sustento para modificar la Ley 28832, Ley para asegurar desarrollo de la generación eléctrica". Asimismo, agrega, del análisis hecho las "mejoras regulatorias" a que se refiere el Ejecutivo en su pedido se subsumiría integrante al Texto Sustitutorio "Ley que modifica la Ley 28832", aprobado en la Comisión de Energía y Minas, está pendiente de debate y aprobación del Pleno, no resultando pertinente la delegación de facultades en la presente submateria[116].

En tal sentido, el Congreso, en el ejercicio de sus funciones constitucionales de legislar, de conformidad al artículo 4 del Reglamento del Congreso y los artículos 102.1 y 105 de la Constitución, ha aprobado en mayoría el Dictamen con texto sustitutorio de la "Ley que modifica la Ley 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica", a fin de garantizar el abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico y promover la diversificación de la matriz energética, texto sustitutorio que subsume la solicitud de delegación de facultades presentadas por el Ejecutivo en la presente submateria, por lo que el Parlamento al asumir competencias legislativas en el presente extremo solicitado, corresponde que el Parlamento, en pleno ejercicio de sus facultades legislativas, continúe con el debate, aprobación y promulgación, y no se delegue la presente submateria solicitada.

En tal sentido, al estar el Congreso de la República desarrollando su función legislativa sobre la presente submateria solicitada, conforme lo estipula el artículo 105 de la Constitución y el artículo 4 del Reglamento del Congreso, por lo que corresponde que no se otorgue la facultad solicitada, en tanto el Dictamen emitido por la Comisión de Energía y Minas contiene la submateria objeto de delegación de facultades, y está pendiente de debate y aprobación del Pleno.

Conclusión

Por las consideraciones expuestas no corresponde que se otorgue la delegación solicitada.

---

[116] Comisión de Energía y Minas, Oficio N° 1480-2023-2024-CEM/CR, Opinión del Proyecto de Ley No. 7752/2023-PE, de fecha 23 de mayo del 2024, p. 4. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Nzcw/pdf

3.1.14. Modificar el artículo 2 de la Ley N° 31992, Ley de Fomento del Hidrógeno Verde para promover el desarrollo del hidrogeno verde.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Sobre la presente submateria, el Ejecutivo en la Exposición de Motivos manifiesta que la Ley N° 31992 define que "el hidrógeno verde es un vector energético producido con tecnologías de baja emisión de gases de efecto invernadero". Sostienen que dicha definición es incoherente, en tanto apertura la producción de hidrógeno mediante recursos fósiles y tecnologías de captura de carbono, los mismos que se asocian a la denominación de hidrogeno azul. Agregan, la inconsistencia contenida en la ley apertura la producción de hidrógeno mediante recursos fósiles, manteniendo la dependencia energética en los hidrocarburos e intensificando la disminución de reservas nacionales de gas natural, y promueven el uso de tecnologías de producción de hidrogeno maduras que no requieren mayor incentivo. Asimismo, señalan el riesgo del almacenamiento o disposición de C02 capturado, ya que si falla, aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente[117].

El Ejecutivo plantea como solución precisar la definición de hidrógeno verde en los términos de "vector energético producido mediante la electrólisis del agua usando electricidad generada a partir de fuentes de energías renovables, fomentando la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero", en tanto esta definición es más concordante con la establecida por organismos internacionales como IRENA que define al hidrógeno verde como "aquel producido a partir de las energías renovables por electrólisis del agua" [118].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

---

[117] P.L. 07752-2024-PE, p. 18. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[118] P.L. 07752-2024-PE, p. 19. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

En concordancia con los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de la ley relativa a la presente submateria solicitada puede ser delegada, y se advierte además que lo solicitado no modifican leyes orgánicas, así como no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en el extremo solicitado.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En la solicitud de delegación de facultades sobre la presente submateria presentan como problemática que la ambigüedad de la definición del hidrógeno verde contenida en la ley mantiene la dependencia energética hacia los hidrocarburos, intensifica la reducción de reservas nacionales de gas natural y promueve el uso de tecnologías de producción de hidrógeno maduras que no exigen mayor incentivo así como el riesgo en el almacenamiento o disposición de C02. De tal modo, sostienen, la definición de hidrógeno verde en la Ley N° 31992 permite la producción de hidrógeno mediante recursos fósiles, tecnologías de captura de carbono azul, las mismas que están asociadas a la denominación de hidrógeno azul y no verde[119].

Sobre la necesidad de intervención normativa señalan que se trata de deficiencia normativa, en tanto el hidrógeno verde corresponde al vector energético gestado por electrólisis del agua usando electricidad generada de fuentes de energías renovables; y el impacto que tendría en el sector, indican, que fomentará mayor seguridad energética y menor dependencia de la importación de combustibles fósiles y permitirá la implementación de proyectos de generación eólica y solar[120].

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, mediante Oficio N° 1480-2023-2024-CEM/CR, de fecha 23 de mayo de 2024, emitió opinión sobre la presente submateria, y en el acápite B. análisis de la pertinencia de la materia solicitada, en b.3) sobre la pertinencia de la medida solicitada, señalan que la *Ley 31992, Ley de Fomento del Hidrógeno verde, se publicó en el Diario Oficial el 23 de marzo de 2024, el Ministerio de*

[119] Anexo 2, submateria 3.1.14, p. 16. Presentado por José Neil Meza Segura, Director General de Eficiencia Energética del Viceministerio de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[120] Anexo 2, submateria 3.1.14, p. 16. Presentado por José Neil Meza Segura, Director General de Eficiencia Energética del Viceministerio de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

energía y Minas señala en su exposición de motivos que hidrógeno verde "es aquel producido a partir de las energías renovables por electrólisis del agua". Es decir, observa que la definición de hidrógeno verde contenida en el artículo 2 de la Ley 31992 debe ser corregida. Y de conformidad con la Política Energética Nacional al año 2040 y la Ley Marco sobre Cambio Climático, tienen como objetivos nacionales alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía. Asimismo en la doctrina y normativa internacional, se tiene que el hidrógeno para ser considerado renovable o verde, debe proceder de fuentes renovables. Es decir, no derivado de fósiles, tales como la energía eólica, energía solar (térmica y fotovoltaica) y energía geotérmica, mareomotriz, undimotriz, energía hidráulica, procedente de biomasa, gases de plantas de depuración, biogas, biometano, entre otros[121].

En esta dirección, en la búsqueda del uso de energías limpias y renovables, que promueven el uso de energías que se reponen antes de lo que pueden consumirse, generan un impacto ambiental bajo, se presentan como alterativas al uso de las energías que son no renovables; estas últimas, promueven la emisión de gases contaminantes, el calentamiento global y contribuyen a producir efecto invernadero.

La energía limpia que se asocia al hidrógeno verde tiene como característica su procedencia en fuentes renovables y con emisiones de C02 en cero, se distancia de fuentes de energía como el carbón y el petróleo. En tal sentido, el hidrógeno verde al excluir la producción de hidrógeno mediante recursos fósiles, esta característica debe estar reflejada en la ley, toda vez que la producción de hidrógeno verde obedece a las energías renovables por electrólisis de agua y que no demanden combustibles fósiles, por lo que corresponde hacer la precisión normativa en la Ley N° 31992, en el artículo 2, extremo que solo ha sido pedido en la solicitud de delegación de facultades que ha realizado el Ejecutivo.

En esta dirección, considerando que el Ejecutivo ha solicitado como delegación de facultades modificar el artículo 2 de la Ley N° 31992, sobre la definición de hidrógeno verde, solo en dicho extremo se concederá la delegación de facultades.

---

[121] Comisión de Energía y Minas, Oficio N° 1480-2023-2024-CEM/CR, Opinión del Proyecto de Ley No. 7752/2023-PE, de fecha 23 de mayo del 2024, p. 7. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Nzcw/pdf

Conclusión
En base a las consideraciones expuestas, la submateria solicitada se encuentra justificada para la delegación de facultades en sus términos.

3.1.15. Promover el desarrollo de la infraestructura petroquímica nacional para la implementación y operación de Plantas Petroquímicas que incluyan la producción de urea y fertilizantes.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Ejecutivo señala a través de la exposición de motivos y mesas técnicas llevadas a cabo que, en el Perú hay una ausencia de infraestructura petroquímica dedicada a la producción de fertilizantes (úrea, nitrato de amonio, entre otros), por otro lado, en el contexto del cambio climático, se tiene un incremento en la demanda de fertilizantes a fin de mejorar la eficiencia productiva de los campos de cultivo, lo que se refleja en un alto riesgo de seguridad alimentaria nacional. Cabe precisar que los fertilizantes utilizados localmente son importados, lo que nos hace dependientes ante las fluctuaciones del mercado internacional, trayendo consigo un impacto inmediato en la estructura de costos de las actividades que conforman la cadena de valor de la agricultura, y ello a su vez, en la canasta básica familiar.

Existen iniciativas privadas para desarrollar Plantas Petroquímicas en el Perú a fin de producir fertilizantes. Cabe precisar que los montos de inversión de los proyectos petroquímicos de tal naturaleza ascienden a valores superiores de los 2000 millones de dólares, con un tiempo de construcción que oscilan entre 3 y 5 años sin contar con los periodos de permisología (ambientales, municipales, seguridad industrial, entre otros)

Las inversiones petroquímicas, se deben sujetar a los tiempos que demora la obtención de los permisos (EIA, PEA, CIRA, licencias municipales, Registro de Hidrocarburos, entre otros) que implica la implementación de una Planta petroquímica de tal magnitud, son demasiado extensos, lo que desalienta las inversiones por el alto riesgo de ser paralizados.

En tal sentido, el MINEM pretende a través de iniciativas legislativas impulsar medidas que alienten la inversión privada para la construcción de Plantas Petroquímicas, a partir del uso del

gas natural, priorizando la producción de fertilizantes en beneficio de la agricultura nacional, con lo cual se contribuirá en fortalecer la seguridad alimentaria nacional, con la posibilidad de producir explosivos (nitrato de amonio), y con ello se estima dinamizar actividades económicas promotoras de desarrollo, como es la Minería, entre otras, que contribuirán en una reactivación económica sostenible del país.

La iniciativa se concretará en medidas de fomento de la inversión promoción y desarrollo de la industria petroquímica, para la producción de fertilizantes.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

La orientación que contiene la propuesta de delegación de facultades legislativas en materia de promoción de la inversión privadas en Plantas Petroquímicas, es una iniciativa legal específica que se inserta dentro del catálogo de normas que el Estado viene implementando a través de Proinversión con la finalidad de priorizar la inversión distinta al financiamiento con recursos públicos de obras costosas y riesgosas para el erario nacional.

Esta facultad solicitada no afecta las competencias de las municipalidades; debiendo advertirse que las medidas propuestas son iguales a las medidas establecidas a los Proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad - PNIC.

El análisis de la propuesta permite advertir que ésta no versa sobre reforma constitucional, tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto ni la ley de la Cuenta General. Asimismo, cumple con lo establecido en los artículos 101 y 104 de la Constitución, superando el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La materia solicitada en este literal, bajo análisis concuerda con la pertinencia de las medidas propuestas, sustentándolo en que esta iniciativa legal que promueve la inversión privada en materia de infraestructura petroquímica en el país, en definitiva, pretende dar solución a un problema que se origina en la tramitación ante el gobierno local, regional y nacional respecto a las autorizaciones y permisos requeridos para la construcción y funcionamiento de las plantas petroquímicas en un tiempo razonable, permitiendo al inversionista preveer el acopio de recursos técnicos y operativos, mientras se va desarrollando la construcción de la precitada planta.

Asimismo, respecto a los trámites administrativos relacionados a la aprobación de solicitudes de licencias municipales para construcción de una obra, cabe precisar que este es un proceso que por su naturaleza demanda tiempos laxos para su aprobación, mientras tanto los inversionistas se encuentran impedidos para iniciar la construcción del proyecto, la misma que tiene incidencia en cuanto a los plazos establecidos en el cronograma de obras y la operación comercial del proyecto.

En ese sentido, lo que se propone en este proyecto normativo, es una excepcionalidad temporal para que los inversionistas puedan iniciar la construcción de una Planta Petroquímica, incluso cuando el procedimiento de su aprobación se encuentre en trámite ante la autoridad municipal competente, hecho que en lo absoluto lesiona el Principio de Legalidad.

Finalmente es prudente mencionar que, sobre el particular, ya existe antecedente, como el que fue dado en el Decreto de Urgencia N° 018-2019, en el cual se exceptuó de las licencias de habilitación urbana o de edificación previstas en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, para la ejecución de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, los cuales fueron regularizados posteriormente ante las municipalidades correspondientes.

Por tales razones se considera que la delegación de facultad en este extremo, coadyuvará en el desarrollo de la industria petroquímica nacional para la producción de fertilizante; y contribuirá con el desarrollo del país.

Para iniciar la construcción de una Planta Petroquímica se necesitará la validación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, y a su vez, contar previamente con los estudios y requisitos formales para la obtención de la licencia de construcción y funcionamiento. Cabe puntualizar que se autoriza el extremo referido a agilizar la permisología, exceptuando la obligatoriedad de obtener previa a la construcción, las licencias municipales y otros permisos requeridos, todo ello sujeto a regularización en el plazo de hasta 30 meses. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas tendrá el plazo de 6 meses para aprobar la ubicación del área donde se realizará la construcción de la planta petroquímica, este plazo será contado a partir de presentada la solicitud del trámite.

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado para la delegación de facultades. Por tanto, esta Comisión considera otorgar las facultades solicitadas en los mismos términos del texto presentado por el Poder Ejecutivo.

3.1.16. Modificar los artículos 8, 9, 14, 15 y 18 de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural, y artículos conexos para acelerar la ejecución de proyectos de electrificación rural.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo en su exposición de motivos del proyecto de ley de la materia de estudio, manifiesta tener como objetivo acelerar el acceso de la población rural a la energía eléctrica, y pretende solucionar la problemática al tratar de resolver el cierre de brechas y el difícil acceso al servicio público de electricidad por parte de los pobladores ubicados en las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país, cuya baja cobertura en electrificación rural ubica al Perú en los últimos lugares en el ámbito de la región latinoamericana.

En relación a dicha situación el Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Electrificación Rural que permitiría llegar a una cobertura de electrificación rural del 96% al año 2026, siendo actualmente la cobertura a nivel nacional del 85,8% (hasta fines del año 2023), documento que se encuentra a cargo de la elaboración y evaluación continua por parte de la Dirección General de Electrificación Rural -DGER del Ministerio de Energía y Minas.

En ese contexto, con relación al uso productivo de la electricidad la Ley prevé que excepcionalmente se disponga del 1% de los recursos para la Electrificación previsto en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo, lo que conlleva a limitaciones para el correcto y eficiente desempeño del fin propuesto.

A través del Decreto Legislativo N° 1207 se modificó al artículo 15 de la Ley N° 28749, Ley general de electrificación rural (en adelante, LGER), de tal forma que se estableció que, para la ejecución de proyectos de distribución considerados como Sistemas Eléctricos Rurales (en adelante, SER), se presentará una Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA).

No obstante, el artículo 15 de la LGER constituye un impedimento legal para promover la aprobación de una Resolución Ministerial de este tipo. Por lo que, existe la necesidad de emitir una norma con rango legal que elimine este impedimento y precise que los proyectos de distribución calificados como SER no requieren de la aprobación de ningún estudio ambiental.

Bajo este orden de ideas, la propuesta normativa modifica el artículo 15 de la LGER con el fin de establecer que los proyectos de distribución calificados como SER no requieren de la obtención de la certificación ambiental. De igual modo, la propuesta indica que, para este tipo de proyectos, se debe cumplir con los lineamientos de gestión ambiental que apruebe el Ministerio de Energía y Minas.

De manera paralela, el proyecto normativo también comprende la modificación del numeral 15.2 del artículo 15 de la LGER con la finalidad de otorgar predictibilidad respecto al tratamiento que se les dará a los proyectos de generación y transmisión calificados como SER. Por lo que, para este tipo de proyectos, la obligación de obtener la certificación ambiental es establecida de conformidad con la normativa que regula el SEIA.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación propuesta puede ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Sobre este punto, esta comisión concuerda con la modificación de los artículos 8, 9, 14, 15 y 18 de la ley N°28749, Ley General de Electrificación Rural, el sustento fáctico que apoya la dación de esta norma legal regulatoria tiende a simplificar el procedimiento de aprobación de proyectos de generación y transmisión eléctrica en zonas del ámbito rural, a efectos de que el impacto ambiental sea estudiado, revisado y aprobado por las instancias ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

Intrínsecamente es una norma desreguladora que se justifica, por cuanto acelera la aprobación de los proyectos de generación y distribución eléctrica en las zonas marginales del país interviniendo en una problemática que requiere atención dada la brecha de acceso a la energía eléctrica el alto costo en zonas rural, como son los pequeños centros poblados o caseríos afincados en las zonas rurales de la nación, conllevando a la mejora de la calidad de vida y el

desarrollo económico, puesto que la normativa actual impone requisitos desproporcionados y costosos, que retrasan la implementación de proyectos esenciales de electrificación.

En tal sentido, esta comisión considera viable la propuesta normativa de delegación de facultades en lo que respecta a la modificación en la ley 28749, Ley General de Electrificación Rural con la finalidad de acelerar la ejecución de proyectos de electrificación rural.

Conclusión

Este aspecto solicitado, se encuentra justificado para la delegación de facultades. Por tanto, se mantiene en sus términos el texto presentado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley estudiado.

3.1.17. Fortalecimiento de la masificación del gas natural, creando un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado que nivele los precios finales para los usuarios regulados del servicio de distribución por red de ductos a nivel nacional.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo sustenta la medida propuesta donde considera que es urgente y necesario la creación de un Mecanismo de Compensación que le permitiría acelerar el acceso al gas natural a una mayor cantidad de usuarios a nivel nacional, cerrando las brechas de infraestructura y promoviendo la realización de inversiones en las regiones del interior del país.

Se propone dictar una norma con rango de ley de creación del mencionado Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural, el cual sería financiado por un recargo al servicio de transporte de gas natural por ductos y no irrogará gastos al tesoro público, cuya finalidad es nivelar los precios finales para los usuarios del servicio de distribución de gas natural por red de ductos a nivel nacional, lo cual permitirá masificar el gas natural en beneficio de toda la población y de esta manera reducir la importación de GLP y la contaminación ambiental.

El mencionado recargo se aplicará a las empresas concesionarias del servicio de distribución y a los consumidores independientes, en su condición de usuarios de las empresas que realizan el servicio de transporte de gas natural por ductos.

En el caso de las empresas concesionarias del servicio de distribución de gas natural que adquieren el servicio de transporte, el recargo que se le aplique es trasladado al precio final del gas natural que se establece en el recibo de todos sus usuarios finales, conforme lo establece la normativa vigente (Passthrough).

El recargo que seria pagado por los generadores eléctricos, como consumidores independientes, es compensado mediante un cargo a ser incluido en el peaje del sistema principal de transmisión eléctrica. Esta compensación debe ser regulada por el Osinergmin según lo que disponga el reglamento, sin afectar el equilibrio económico financiero de los contratos APP vigentes en transmisión eléctrica.

En ese sentido, se manifiesta que siendo necesario que el beneficio del mecanismo de compensación se aplique a todos los usuarios regulados del servicio de distribución de gas natural a nivel nacional.



Las regiones que cuentan con GNV son las siguientes: Piura, Lambayeque, Áncash, La Libertad, Lima y Callao, Junín, Ica, Cusco.

A si mismo tenemos los precios del GNV en algunas regiones, Piura S/ 1.84, Lambayeque S/ 2.05, Áncash S/ 2.3, La Libertad S/ 2.58, Lima y Callao S/ 1.7, Junín S/ 2.59, Ica S/ 2.03 Cusco S/ 2.35; de lo que concluimos que no tienen los mismos precios que se ofrecen al usuario final.Por ello la propuesta normativa busca que dichos precios se regularicen a nivel nacional. La exposición de motivos incide en que en los contratos de APP contienen una cláusula de

equilibrio económico financiero, mediante la cual las partes declaran que a la fecha de suscripción sus derechos y obligaciones se encuentran en equilibrio.

Dicha cláusula establece también que, ante la ruptura del equilibrio económico financiero, su restablecimiento puede ser invocado por cualquiera de las partes, únicamente cuando este se vea afectado debido al cambio de leyes y disposiciones aplicables, en la medida que se presenten variaciones significativas en los ingresos o costos del proyecto, a fin de compensar a la parte afectada (ya sea que se trate del concedente o del concesionario).

Por tal motivo, se realizó el análisis del impacto económico financiero teniendo en consideración lo siguiente:

El referido análisis se realizó para la Concesión de Ica y la Concesión Norte dado que son las únicas concesiones que cuentan con condiciones específicas de regulación del equilibrio económico financiero (variación de ingresos o costos de operación y mantenimiento de manera tal que la diferencia entre dichas variables durante un periodo de 12 meses consecutivos o más varíen en un equivalente a más del 10%.

Luego del análisis efectuado, y bajo los supuestos empleados, se determinó que, con la aplicación del Mecanismo de Compensación para el Acceso al Gas Natural, no existe ruptura del equilibrio económico financiero para la Concesión de la Región Ica y de la Concesión Norte bajo los supuestos establecidos en los respectivos contratos de concesión.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

La propuesta legislativa no contiene disposiciones que versen sobre reforma constitucional, tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto ni ley de la cuenta general. En efecto, trata una materia en forma específica y por lo tanto no contraviene los artículos. 101 y 104 de la Constitución del Estado.

Esta iniciativa tiene un antecedente legislativo que creó un mecanismo de compensación que determinó que los usuarios finales de la energía eléctrica producida por la represa del Mantaro, asumirán a través de sus facturas de luz, un porcentaje del costo del gaseoducto del gas de Camisea.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En lo que respecta al presente extremo de la solicitud de delegación de facultades, de la exposición de motivos y la información proporcionada por el ejecutivo, tenemos que con este

pedido se crearía un sobre costo de la energía eléctrica que consumen los ciudadanos a fin de compensar a las empresas concesionarias del gas de Camisea, para que se implemente la infraestructura necesaria a fin de que el combustible sea distribuido a mayor número de usuarios a costa de los consumidores de electricidad. La decisión implica imponer un sobre costo a todos los usuarios de electricidad, con el objeto de no incurrir en incumplimiento contractuales con los concesionarios del gas natural.

Cabe mencionar que el ejecutivo, a través de PROINVERSIÓN ha intentado promover un proyecto de gas natural en las ciudades altoandinas, pero no generó el interés suficiente en los privados. Asimismo, a la fecha dicha entidad está promoviendo la Concesión Sur Oeste.

Por ello el diseño de APP para la distribución de gas natural por red de ductos en las regiones fuera de Lima e Ica es un desafío para el ejecutivo, ya que no existe interés para solicitar una Concesión por parte de los privados, por ello surge la necesidad de impulsar la propuesta normativa que crea el Mecanismo de Compensación y así lograr la masificación.

En esta comisión se ha analizado la materia solicitada, que busca el fortalecimiento de la masificación del gas natural, creando un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado que nivele los precios finales para los usuarios regulados del servicio de distribución por red de ductos a nivel nacional, encontrando que coinciden en la materia con el dictamen 679/2021-PE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA IMPULSAR LA MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL, el cual se encuentra en cuarto intermedio en la Comisión de Energía y Minas, este dictamen se encuentra para su debate desde el 2 de mayo del 2024, luego que la autógrafa haya sido observada por la presidente el 04 de diciembre del 2023. Por lo expuesto sugerimos que debería seguir su procedimiento legislativo regular al interior del Congreso, para mayor profundidad en el análisis, y así pueda obtener un consenso que respalde su aprobación en esta materia.

Conclusión

Habiéndose advertido que, se encuentra en trámite legislativo el Proyecto de Ley 679/2021-PE, el cual versa sobre la misma materia solicitada por el Poder Ejecutivo e inclusive de autoría del propio Ejecutivo, esta Comisión considera no otorgar facultades en el presente extremo y que este tema continué su trámite, debate y votación en el fuero parlamentario, lo que además garantiza un debate plural con la participación de todos los congresistas y sectores involucrados.

3.1.18. Fortalecimiento del proceso de masificación de gas natural en las regiones que no son parte de una concesión, para que más hogares puedan acceder al gas natural.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El MINEM, como Administrador del FISE, en vista que fueron declaradas desiertas las convocatorias públicas para la ejecución del proyecto "Masificación del Uso de Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali" (Proyecto Siete Regiones), en aplicación del marco legal que regula el FISE, viene impulsando proyectos de masificación de gas natural bajo la figura del abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), regulada en el Decreto Supremo N° 063-2005-EM, para lo cual se encuentra tramitando licitaciones para contar con empresas contratistas para la construcción de instalaciones de GNC y/o GNL y redes de gas natural, encargadas de la construcción de la infraestructura de los proyectos. A la fecha, se ha otorgado la buena pro y suscrito el contrato de la licitación del proyecto de masificación en la región Huancavelica; además se ha convocado licitaciones para el proyecto de la región de Cusco (Cusco y Quillabamba).

La mencionada circunstancia requiere la dación de una norma con rango de ley debido a que se busca incluir un nuevo destino de los recursos del FISE, como es el financiamiento de la operación y mantenimiento (OPEX) de los proyectos de masificación de gas natural que viene licitando el FISE en las regiones que no son parte de una concesión de distribución de gas natural, lo que implica la modificación de la Ley FISE. Cabe anotar que el artículo 6 de la Ley FISE señala que el FISE tiene carácter intangible y sus recursos se destinan única y exclusivamente a los fines a que se refiere dicha norma en su artículo 5.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables, reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República, por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En lo que respecta al presente extremo de la solicitud de delegación de facultades, se tiene que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) se crea con la Ley N° 29852 en abril del año 2012, con el propósito de llevar energía menos contaminante a poblaciones más vulnerables en todo el país; vale decir, su destino es proveer una compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos como rurales.

La Masificación del Uso de Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali" se encuentra ralentizada debido a la falta de interés del sector privado por presentarse como postores en las actos públicos convocados, lo que ha forzado al MINEM a intervenir tramitando licitaciones para contar con empresas contratistas para la construcción de instalaciones de GNC y/o GNL y redes de gas natural, encargadas de la construcción de la infraestructura de los proyectos.

En esta comisión hemos podido recabar información en las técnicas, así como de la exposición de motivos, teniendo que este proyecto normativo es una alternativa legal que puede solucionar el acceso al gas natural a las regiones que no cuenten con dicho servicio, principalmente las regiones del sur del país

En ese sentido, esta comisión considera viable la atención del pedido de delegación de facultades en lo que respecta a la modificación del artículo 5 de la Ley 29852, Fise. Es por ello que, se estima pertinente la delegación de facultades.

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado, en parte, para la delegación de facultades, por lo que se propone el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el numeral 5.5. del artículo 5 de la Ley 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, para promover el fortalecimiento del proceso de masificación de gas natural en las regiones que no son parte de una concesión, para que más hogares puedan acceder al gas natural".[122]

[122] En la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2024, recogiendo el aporte del congresista Diana Carolina Gonzales Delgado, se está modificando este punto, con un texto sustitutorio que hace más precisa la facultad delegada, en mérito que con esta medida se permitirá promover el fortalecimiento del uso del gas natural en las regiones que no son parte de una concesión a la fecha de la presente ley.

3.1.19. Modificar la Ley N° 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, para optimizar la remediación de pasivos ambientales mineros a cargo del Estado.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo en su exposición de motivos en función a la debida tutela del interés público, la tarea de remediación de aquellos pasivos de alto y muy alto riesgo, cuyos responsables de la remediación (generador, responsable legal o remediador voluntario) no pueden ser identificados o no asumen su responsabilidad; destinándose para este fin recursos públicos que son otorgados anualmente por el Estado al MINEM con fines de transferencia a la empresa estatal Activos Mineros.

Asimismo, la normativa no establece diferenciación entre las responsabilidades y sanciones en la ejecución de la remediación de pasivos ambientales mineros entre el responsable y la intervención del Estado, retrasando la tarea de remediación por parte del Estado

En efecto, la Ley N° 28271, no ha logrado los objetivos esperados para remediar los pasivos ambientales a nivel nacional, debido a que, existen limitaciones para la actuación del Estado ya que se establecen exigencias idénticas a las que deben cumplir el sector privado, sin tomar en cuenta que el Estado debe transitar por requerimientos presupuestales anuales, normas de inversión pública y de contrataciones estatales que retrasan su accionar.

Asimismo, se ha identificado que los mecanismos de remediación voluntaria no están dando los resultados esperados, se advierte que se tiene un número importante de derechos de reaprovechamiento otorgados que no ha cumplido con la obligación de presentar sus instrumentos de gestión ambiental, sin embargo, dicho incumplimiento no genera la extinción del derecho, por lo que se considera conveniente incluir causales de extinción en una norma con rango de ley.

Así, con las modificaciones propuestas se pretende, incentivar la remediación voluntaria, optimizar la intervención del Estado en la remediación de los pasivos a su cargo, mejorando el

uso de recursos públicos que se destinan a dicha remediación y reduciendo los impactos ambientales que vienen generando los pasivos.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República), por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Según lo recabado en esta comisión de la exposición de motivos y mesas técnicas, en la actualidad existen 6128 pasivos ambientales mineros, con un valor de remediación de $2,000 millones. Con la modificación propuesta por el ejecutivo se busca que el Estado tenga facilidades administrativas para la intervención inmediata y así prevenir consecuencias mayores al medio ambiente, salud y seguridad de la población. Los mecanismos que se plantean utilizar son incentivos y facilidades administrativas para promover la remediación voluntaria del sector privado, a su vez establecer causales, sanciones y multas por los incumplimientos de las obligaciones de la no remediación de pasivos ambientales mineros, así como también establecer precisiones respecto a la responsabilidad ambiental del Estado cuando éste asume de acuerdo al interés público, la remediación de los pasivos ambientales.

La propuesta de norma legal tiene un objetivo muy definido respecto a la remediación de los pasivos mineros que corren a cargo del Estado y que debido a los trámites administrativos y presupuestales necesarios de realizar impiden que la acción de mitigación se realice en forma oportuna, por lo que es importante conceder al Poder Ejecutivo la facultad solicitada para que mediante una norma con rango de Ley, pueda obtener la rapidez de los procesos de remediación de los pasivos mineros a su cargo en forma eficiente y adecuada.

En ese sentido, consideramos que se encuentra justificado establecer un régimen especial a la responsabilidad administrativa del Estado, la cual debe ser diferenciada a la que corresponde a un generador o a un remediador voluntario, toda vez que el Estado orienta su actividad a una finalidad pública.

También consideramos justificado que se generen incentivos para los remediadores voluntarios, para lo cual deben considerarse criterios de simplificación administrativa que

permitan un mayor número de gestión privada de los pasivos ambientales mineros, considerando que el financiamiento por parte del Estado y los fondos del fideicomiso ambiental son limitados.

Por lo mencionado, se estima pertinente la delegación de facultades para modificar los artículos 5, 10 y 13 de la ley N° 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera.

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado para la delegación de facultades, pero se debe acotar el contenido a fin de cumplir con el requisito constitucional de materia específica; en tal sentido, se propone el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar los artículos 5, 10 y 13 de la Ley N° 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, para optimizar la remediación de pasivos ambientales mineros a cargo del Estado.

3.1.20. Ordenar y fortalecer el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, reestructurando el proceso de formalización a través del fortalecimiento y mejora de la calidad regulatoria.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El proceso de formalización minera integral de la Pequeña Minería y Minería Artesanal creado por el Decreto Legislativo N° 1293 se encuentra a cargo de las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Energia y Minas de los Gobiernos Regionales, las que a su vez, tienen a cargo la evaluación de los requisitos para la formalización y otorgan la autorización de inicio/reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio a los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera-REINFO.

Este proceso vigente desde el año 2017, conforme su norma de creación tuvo inicialmente una vigencia de treinta y seis (36) meses; posteriormente, con la Ley N° 31007, mediante su primera disposición complementaria final se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo del proceso de formalización minera integral establecido en el Decreto Legislativo N° 1293.

Posteriormente, la Ley N° 31388, Ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral estableciendo que culmina el 31 de diciembre de 2024.

La naturaleza del proceso de formalización minera integral de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, es excepcional, porque regulariza actividades en curso y es temporal considerando que culmina el 31 de diciembre de 2024; asimismo, no constituye la única vía para obtener la autorización para el desarrollo de las mencionadas actividades, en el mencionado estrato, ya que existe la posibilidad de obtener la autorización para iniciar actividades de exploración, explotación o de beneficio de minerales para pequeña minería y minería artesanal siguiendo los trámites y procedimientos establecidos en la Ley N° 27651 y sus disposiciones reglamentarias y el Reglamento de Procedimientos Mineros aprobado por Decreto Supremo N° 020-2020-EM.

Por consiguiente, la propuesta recoge medidas para su ordenamiento y fortalecimiento del proceso de formalización minera, planteando:

- Asignación de manera temporal, al Ministerio de Energía y Minas, de las competencias y funciones en materia de formalización minera, que a la fecha se encuentran a cargo de las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales, conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 1293.

- Creación de un único proceso para ordenar y regular las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, lo que comprende: transparentar y sistematizar la información de los sujetos del proceso, autorizaciones y plantas de beneficio; promoción de la asociatividad en el desarrollo de la actividad minera, la comercialización que permita la trazabilidad de los minerales que provengan de esta actividad; y establecer una regulación específica para Madre de Dios.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República), por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Sobre este punto, la comisión recoge la propuesta que tomará medidas para su ordenamiento y fortalecimiento del proceso de formalización minera, en la que se plantea temporalmente, asignar al Ministerio de Energía y Minas las responsabilidades y funciones relacionadas con la formalización minera actualmente a cargo de las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales, según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1293.

Establecer un proceso unificado para regular y ordenar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, que abarca la transparencia y sistematización de información de los participantes, autorizaciones y plantas de beneficio; fomento de la colaboración en la actividad minera, la comercialización para rastrear los minerales, y la introducción de una regulación específica para Madre de Dios.

La propuesta busca reestructurar el proceso de formalización a través de una mejora en la calidad regulatoria, sin costos adicionales para los mineros en proceso de formalización. Se espera que aumente la formalización en la pequeña minería y minería artesanal, ordenando la actividad en todos sus aspectos y reduciendo la minería ilegal. Esto requerirá cambios normativos en las responsabilidades del MINEM, en el REINFO y en las competencias de las Direcciones o Gerencias regionales de los Gobiernos regionales.

Bajo lo expuesto, esta comisión ha analizado la materia solicitada, que versa sobre el pedido de la delegación de facultades legislativas con la finalidad de ordenar y fortalecer el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, encontrando que coinciden en la materia con el proyecto de ley 7462/2023-CR, Proyecto de ley que modifica el decreto legislativo N° 1293, decreto legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en materia de prórroga de la vigencia del proceso de formalización minera integral y elaboración del plan para la culminación del proceso de formalización, enviado a la comisión de energía y minas con fecha 05 de abril del 2024.

Por lo expuesto sugerimos que debería seguir su procedimiento regular al interior del Congreso a fin de garantizar un amplio debate en el Parlamento con la participación de todos los congresistas y los sectores involucrados.

Conclusión

Habiéndose advertido que, se encuentra en trámite legislativo el Proyecto de Ley 7462/2023-CR, el cual versa sobre la misma materia solicitada por el Poder Ejecutivo, esta Comisión considera no otorgar facultades en el presente extremo y que este tema continué su trámite,

debate y votación en el fuero parlamentario, lo que además garantiza un debate plural con la participación de todos los congresistas y sectores involucrados.

3.1.21. Derogar la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 28588 Ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura arquitectónica y no arquitectónica de los centros educativos a cargo del Ministerio de Educación.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El ejecutivo manifiesta que bajo el Plan de Seguro "SIS para todos" del régimen de financiamiento subsidiado, a todas las personas residentes en el territorio nacional – como los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y los miembros de las rondas campesinas y nativas y comités de autodefensa - que no cuenten con ningún seguro de salud, independientemente de su clasificación socioeconómica, se garantiza la cobertura gratuita del PEAS; adicionalmente, dentro de lo establecido por el Decreto de Urgencia No 046-2021, modificado por el Decreto de Urgencia N° 078- 2021, cuyas disposiciones han sido prorrogadas por la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, cuentan con la cobertura del PEAS más planes complementarios al PEAS (Prestaciones Administrativas, LEAC y el Listado de Enfermedades Raras y Huérfanas), hasta el 31 de diciembre del año 2024. No requiere financiamiento del presupuesto público.

La norma se fundamenta técnicamente en que la población sobre la que se dispone regular la incorporación al SIS ya está afiliada y recibe la cobertura como tal en la actualidad.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Esta comisión coincide con el Poder Ejecutivo en priorizar acciones para la Derogación de la Segunda Disposición Final de la Ley N° 28588 Ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura arquitectónica y no arquitectónica de los centros educativos a cargo del Ministerio de Educación.

Debido a que no existe la necesidad de reglamentar, pues con los DU 046-2021, modificado por el Decreto de Urgencia N° 078-2021 cuyas disposiciones han sido prorrogadas por la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.

Con la pertinencia de la medida propuesta debido a que el Plan Seguro "SIS para todos" abarca a todas las personas residentes en el territorio nacional. Ello en razón a que la población sobre la que se dispone reglamentar la incorporación al SIS ya se encuentra cubierta, en caso no contase con ningún tipo de seguro, puede afiliarse al SIS, ya sea cualquier ciudadano nacional o extranjeros que se encuentren viviendo legalmente en nuestro territorio.

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado para la delegación de facultades. Por tanto, esta Comisión considera otorgar las facultades solicitadas en los mismos términos del texto presentado por el Poder Ejecutivo.

3.1.22. Derogar la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La norma derogatoria se sustenta en que: *"En la actualidad, a través del Decreto de Urgencia N° 017-2019 y el Decreto de Urgencia No 046-2021, modificado por el Decreto de Urgencia N° 078- 2021, cuyas disposiciones han sido prorrogadas por la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, los residentes en el país cuentan con la cobertura del PEAS más planes complementarios al PEAS (Prestaciones Administrativas, LEAC y el*

Listado de Enfermedades Raras y Huérfanas), hasta el 31 de diciembre del año 2024. La Ley 29761 resulta más acotada respecto de derechos adquiridos que son irreversibles para los afiliados a la fecha. Asimismo, regula el régimen semicontributivo que en los hechos cada vez cuenta con menos afiliados dada la normativa vigente para la afiliación bajo el régimen subsidiado con un alcance universal."

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Según lo expuesto por el Ejecutivo ante esta comisión, ha indicado que no se aprobó el reglamento de la mencionada norma, a pesar de haberse prepublicado mediante la Resolución N° 194-2013. Asegura que este gobierno ha implementado nuevas normas (las cuales no están especificadas) que han dejado sin efecto la Ley 29761, eliminando el régimen semicontributivo y trasladando a todos al régimen subsidiado. No obstante, el régimen semicontributivo del SIS, en el que el plan es financiado parcialmente por los asegurados y el Estado, aún no ha sido formalmente eliminado. Este régimen está destinado a trabajadores independientes y de microempresas, como el SIS Emprendedor y el SIS Microempresas, ambos subsidiados debido a sus bajos aportes.

Por otro lado consideramos que si la ley 29761 ha caído en desuso, esta solicitud debe ser canalizada a través de un proyecto de ley que garantice un amplio debate en el Parlamento con la participación de todos los congresistas y los sectores involucrados.

Conclusión

No se recomienda la delegación de facultades en este extremo. Esta solicitud debe ser canalizada a través de un proyecto de ley.

3.1.23 Modificar el literal d.4) del artículo 7 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en el extremo de la autorización del Ministerio de Cultura como requisito para la expedición de licencias de funcionamiento en monumentos históricos.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo en la exposición de motivos[123] manifiesta la necesidad de legislar sobre esta materia para modificar el literal d.4) del artículo 7 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.

En lo que respecta a la autorización sectorial del Ministerio de Cultura - MINCUL, esta fue modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1271.

En la exposición motivos el MINCUL advierte que dicha revisión y evaluación de solicitudes resulta similar a la revisión efectuada por las municipalidades para la expedición de licencias de funcionamiento, puesto que recae en la verificación de los usos, giros o actividades comerciales aprobados por las normas ediles, por lo que sería posible que dicha revisión solo lo haga la municipalidad.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

[123] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 32

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Esta comisión coincide con el Poder Ejecutivo en simplificar los trámites administrativos que realizan los administrados que requieren licencias de funcionamiento en monumentos históricos, esto con la finalidad de evitar la doble carga administrativa y burocrática que tienen similar revisión del proceso en los dos niveles de gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el gobierno local, que, conforme se advierte del análisis de la exposición de motivos, evitará un doble trámite por parte del ciudadano y la demora en la atención para emprender un giro comercial; por lo tanto dicha revisión solo lo hará la municipalidad.

Actualmente, esta duplicidad de autorización genera costos adicionales a los dueños de los monumentos históricos, así como a quienes lo administran o utilizan, tanto en tiempo como en dinero.



Cuadro elaborado por el MINCUL

Conclusión:

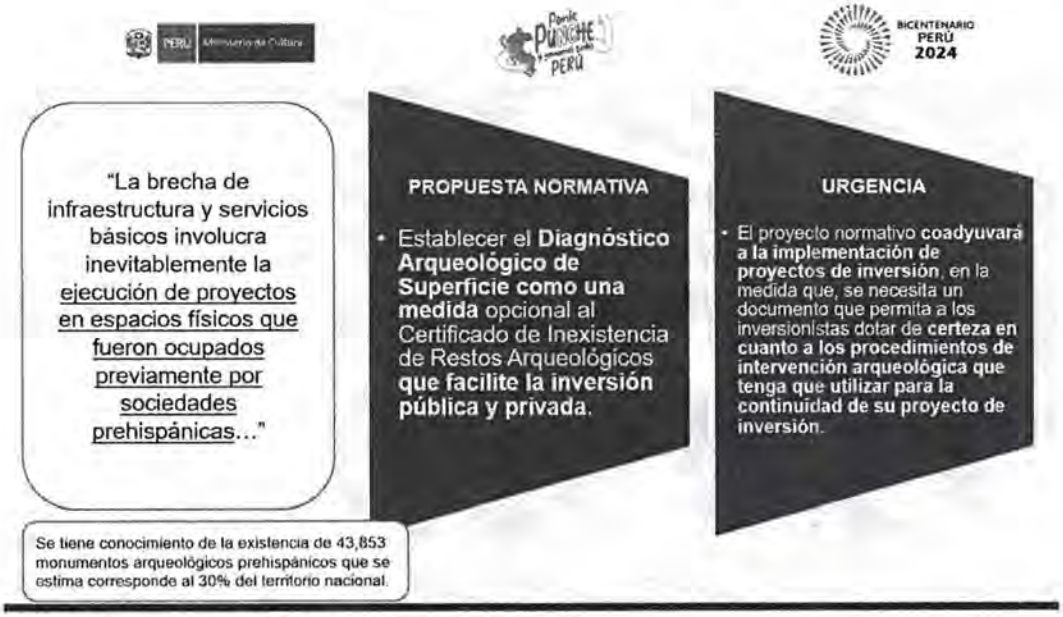
Por las consideraciones antes expuestas, esta comisión encuentra justificado otorgar facultades legislativas sobre esta materia al Poder Ejecutivo en sus mismos términos:

3.1.24 Establecer el Diagnóstico Arqueológico de Superficie como una medida opcional al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que facilite la inversión pública y privada.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
El Poder Ejecutivo en la exposición de motivos[124] manifiesta que en la actualidad no existe una planificación integral de los proyectos de inversión pública, lo que impide el avance de las obras.

La medida tiene como finalidad complementar el diagnóstico arqueológico de superficie como un documento que permita el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada. Este documento se circunscribe a un espacio definido por coordenadas geográficas georreferenciadas, y es realizado por un profesional en arqueología.

[124] Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 33



Cuadro elaborado por el MINCUL

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, articulos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Respecto a la afirmación del MINCUL en el primer punto de la exposición de motivos señalan, "que no existe una planificación integral de los proyectos de inversión pública"; debemos precisar que sí existe un instrumento estatal oficial elaborado por el Ministerio

de Economía y finanzas (INVIERTE.PE) para el proceso de identificación, formulación y evaluación de un proyecto de inversión pública (PIP), que tiene como principal objetivo cerrar brechas prioritarias a través de la inversión pública que debe estar vinculada a una meta establecida en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la entidad a la que pertenece[125].

En el marco del desarrollo de la mesa técnica realizada el 21 de mayo de 2024 en las instalaciones del Congreso de la República, los funcionarios del Ministerio de Cultura encabezado por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Haydee Victoria Rosas Chávez, afirmaron que, establecer el diagnóstico arqueológico de superficie (DAS) es una medida opcional al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y que de ninguna manera se pretende desaparecer el certificado en mención que es un candado para proteger y garantizar la permanencia del patrimonio cultural de nuestro país.



Cuadro elaborado por el MINCUL

[125]Cfr. Identificación, Formulación y Evaluación de un Proyecto de Inversión Pública (PIP). /https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/Guia_Instructiva/1_Identificacion_Formulacioon_y_Evaluacion_de_un_Proyecto_de_Inversion_Publica.pdf

Con esta medida, el Ejecutivo podrá destrabar las obras que se encuentran paralizadas y pendientes de atención por falta de capacidad logística y de personal del MINCUL para atender las solicitudes del CIRA.

Conclusión:
Por las consideraciones antes expuestas, esta comisión encuentra justificado otorgar facultades legislativas sobre esta materia al Poder Ejecutivo en sus mismos términos.

3.1.25 Facultar al Ministerio de Cultura para crear una nómina de especialistas encargados de realizar acciones de identificación de pueblos indígenas u originarios, en el marco de la promoción de las inversiones, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo en la exposición de motivos[126] manifiesta lo siguiente: el decreto legislativo facultará al Ministerio de Cultura contar con una nómina de especialistas, calificados para la identificación de pueblos indígenas u originarios en el marco de sus competencias, lo que permitirá fortalecer la información de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, en el marco de la función establecida en el Decreto Legislativo N° 1360 y los procesos de consulta a su cargo.

Asimismo, esta medida habilitará al Ministerio de Cultura para aprobar, a través de una norma sectorial, los criterios y requisitos específicos para la inscripción, calificación y clasificación de los profesionales que integrarán dicha nómina, así como los procedimientos para la contratación, a través de un proceso de selección, designación y ejecución de las tareas que se encomienden.

El trabajo de identificación de pueblos indígenas u originarios se viene realizando con personal contratado por órdenes de servicio. Pero al existir una prohibición legal de la contratación de servicios recurrentes, además que los productos presentados por estos

[126] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 34

profesionales todavía deben ser revisados por personal CAS del MINCUL, generando un doble trabajo y demora en la emisión de los informes de identificación.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Respecto de facultar al Ministerio de Cultura para contratar una nómina de especialistas que se encarguen de la identificación de pueblos indígenas u originarios en el marco de sus competencias, para fortalecer la información de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI), en el marco de la función establecida en el Decreto Legislativo Nº 1360[127], Decreto Legislativo que precisa funciones exclusivas del Ministerio de Cultura y los procesos de consulta a su cargo, cabe señalar que la presente norma no es aplicable para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial que habitan en el territorio nacional, previsto en la Ley Nº 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

Del análisis de la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, podemos colegir lo siguiente: esta comisión no encuentra un sustento técnico que establezca el número

[127] Cfr. Decreto Legislativo Nº 1360, "CUARTA. - Del reconocimiento de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial
La presente norma no es de aplicación en el procedimiento de reconocimiento previsto en la Ley Nº 28736, para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial que habitan en el territorio nacional."

de funcionarios a contratar, asimismo, tampoco se establece documentariamente los criterios y requisitos específicos para la clasificación de los profesionales que integrarán dicha nómina, así como los procedimientos para la contratación y el proceso de selección, como también un manual de roles y funciones elaborado por el área de recursos humanos del MINCUL.

Además, por la exposición de motivos se ha tomado conocimiento que dichos especialistas ya se encuentran laborando actualmente en el MINCUL mediante órdenes de servicio. En esta misma exposición se alude a que el pedido se da debido a la existencia de una prohibición legal de contratación de servicios recurrentes, y que, además, los productos presentados por estos profesionales crean una restricción porque sus trabajos para ser aprobados todavía deben ser revisados por personal CAS del MINCUL, lo cual genera un doble trabajo y retraso para la entrega del informe final para la incorporación de información a la (B.D.P.I).

Asimismo, esta comisión encuentra una incoherencia entre la posible reducción de los plazos de los procesos de consulta previa para procurar la inversión, frente a lo que pueda ser el resultado de esta para dar consentimiento a las empresas extractivas privadas, o a los proyectos de inversión en materia de servicios públicos del Estado, los cuales también deben pasar por consulta previa, siempre que se superpongan sobre territorios de pueblos indígenas u originarios, tal como se dejó establecido en la sentencia de Acción Popular N°29126-2018[128] impulsada por las organizaciones de los pueblos indígenas u originarios, resolución que garantizando el derecho de la consulta previa sin exclusiones; como también en la sentencia de vista de resolución número treinta y nueve[129], de Utcubamba, del nueve de marzo de dos mil veintidós, recaída en el EXPEDIENTE: 00102-2020-0-0107-SP-CI-0, el Poder Judicial ordena a la minera Afrodita realizar consulta previa al pueblo Awajún, reconociendo el derecho a la consulta previa y que este es protegible por el proceso de amparo.

---

[128] Cfr. Sentencia de Acción Popular N°29126-2018
/https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2768158/Resoluci%C3%B3n%20.pdf

[129] Cfr. Resolución número treinta y nueve de la Sala Civil de la Provincia de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, ha emitido la sentencia en segunda y última instancia
https://drive.google.com/file/d/17Helc9rLwSC_SgT0gfDa2xim8AmXT55H/view

Entonces, la reducción o celeridad de plazos para el proceso de consulta previa, no necesariamente garantiza la inversión pública o privada que a la vista de los antecedentes y sentencias citadas en el presente documento no han sido favorables para dar consentimiento, porque con la sola posibilidad de que se produzca un cambio en la situación jurídica o derechos colectivos con la construcción de infraestructura que para la óptica común pueden parecer beneficiosa, para los pueblos podrían generar impactos que afectan su institucionalidad ancestral y cosmovisión del buen vivir en armonía entre el hombre y naturaleza, por lo que las sentencias ordenan que, antes de cualquier intervención dentro de las tierras y territorios de los pueblos indígenas, sí se justifica la consulta previa, libre e informada conforme a la línea del derecho internacional del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, ratificado por nuestro país.

Entonces, querer asegurar la contratación de una nómina de personal con la intención de acelerar el trabajo de la Consulta Previa para actualizar la Base de datos de Pueblos Indígenas (BDPI), no asegura necesariamente el consentimiento de los pueblos para el impulso de proyectos de inversión a cargo del Ministerio de Energía y Minas y de las entidades públicas encargadas de proyectos de inversión en servicios públicos.

Conclusión:
Al tratarse de una materia que involucra derechos fundamentales, se considera que el Poder Ejecutivo en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa conferida por el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, presente un proyecto de ley al respecto, a fin de que sea debatido ampliamente en el Congreso de la República con la participación plural de todos los señores congresistas y de los sectores involucrados con la presente temática.

En tal sentido, esta Comisión considera no otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en la presente materia.

3.1.26 Establecer un marco normativo que permita la prestación de servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles de gobierno, contemplando acciones de garantía, respeto y valoración de la diversidad cultural que permita construir una ciudadanía intercultural.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Ministerio de Cultura en su exposición de motivos[130] señala que el Perú, se constituye como uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. Esta diversidad cultural y lingüística plantea un desafío significativo en la prestación de servicios adecuados, lo que justifica una intervención estatal orientada por un enfoque intercultural.

El 32.3% de la población con lengua materna indígena se encuentra en situación de pobreza, casi duplicando el 17% de aquellos cuya lengua materna es el castellano.

El III Censo de Comunidades Nativas 2017 reveló que, el 67% de las comunidades indígenas no cuenta con establecimientos de salud adecuados.

Estos datos reflejan la urgente necesidad de políticas públicas que no solo reconozcan la diversidad cultural y lingüística del Perú, sino que se establezcan normas de rango legal que implementen soluciones específicas que aseguren el acceso intercultural y equitativo a servicios públicos.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

[130] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 35

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El Poder Ejecutivo en la ampliación y precisión de su exposición de motivos ante la Mesa Técnica realizada el 21 de mayo de 2024 en las instalaciones del Congreso de la República, los funcionarios del Ministerio de Cultura encabezado por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales Haydee Victoria Rosas Chávez, solicitaron una medida especifica que establezca las competencias de diferentes actores en interculturalidad y promoción de la diversidad que consiste en el enfoque intersectorial que señala que la política intercultural depende de una eficiente coordinación y cooperación intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria, la misma que es necesaria fomentar y desarrollar en todos los niveles de gobierno. Respecto a este punto debemos señalar que ya existe un instrumento de política nacional para la transversalización del enfoque intercultural, elaborado por la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del MINCUL, en tanto queda solo aplicación.

Según este instrumento de gestión el Viceministerio de Interculturalidad es el ente encargado de desarrollar el plan de implementación de la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural. Asimismo, el Viceministerio esta encargada de propiciar espacios de articulación intersectoriales con todos los niveles de gobierno para el seguimiento y monitoreo de la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural.

Referente al planteamiento del Ejecutivo que busca una ley que refuerce la capacidad del Ministerio de Cultura para dirigir temas de interculturalidad, que permita que los grupos vulnerables tengan acceso a servicios públicos y protejan sus derechos a la vida, la salud, la educación, entre otros, permitiendo combatir la discriminación sistemática que sufren históricamente estas comunidades. Respecto a este otro punto, debemos señalar que estos derechos son parte de los derechos fundamentales protegidos en la Constitución Política vigente, que específicamente están señalados en el "artículo 2. Toda persona tiene derecho: literal 1. a la vida (...); literal 2. A no ser discriminado por motivo de origen, raza (...); Literal 19. A su identidad étnica y cultural (...). Asimismo, de los derechos sociales y económicos, articulo 7. Todos tienen derecho a la protección de su salud (...); y los artículos 13 y 14 que define a la educación como el fundamento del desarrollo integral de la persona humana.

Por otro lado, se señala una urgente necesidad de políticas públicas que no solo reconozcan la diversidad cultural y lingüística del Perú, sino que se establezcan normas de rango legal que implementen soluciones específicas que aseguren el acceso intercultural y equitativo a servicios públicos. Respecto a esto debemos señalar que existe una Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2030[131], publicado en Julio 2021, la Base legal está diseñada y formulada en el marco de las funciones exclusivas del Ministerio de Cultura como ente rector en materia de pueblos indígenas u originarios y de su área programática de acción sobre pluralidad étnica y cultural de la Nación. (...) Se trata de un conjunto de normas nacionales e internacionales que el Estado peruano ha ratificado y que constituyen la base para el establecimiento de los objetivos prioritarios, los lineamientos y los servicios comprendidos en la (PNPI) (...).

Conclusión:
Al tratarse de una materia que involucra derechos fundamentales, se considera que el Poder Ejecutivo en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa conferida por el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, presente un proyecto de ley al respecto, a fin de que sea debatido ampliamente en el Congreso de la República con la participación plural de todos los señores congresistas y de los sectores involucrados con la presente temática.

En tal sentido, esta Comisión considera no otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en la presente materia.

3.1.27 Autorizar al Ministerio de Cultura la aprobación de tarifas diferenciadas para promover la visita a bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y museos públicos. La promoción de la visita tendrá especial énfasis en los Sitios del Patrimonio Mundial que por sus características únicas son gestionadas exclusivamente por el Ministerio de Cultura.

[131] Cfr. Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2030.
https://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2021/07/resoluciones-ministeriales/rm180-2021-dm-mc-anexo.pdf

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La exposición de motivos[132] del Ministerio de Cultura cita los datos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2022, que revela que solo un 8% de la población visitó un monumento arqueológico ese año. Este descenso es más pronunciado entre la población rural y aquellos de estratos socioeconómicos más bajos, quienes citan la falta de recursos económicos como una barrera principal para el acceso a estos derechos culturales.

En efecto, la población urbana muestra un mayor acceso a estos lugares en comparación con la rural (población urbana: 11% y población rural: 5%). Según grupo de edad, el grupo etario que más asiste es el de 14 a 29 años, en contraste del grupo de 65 a más años. En el caso de la diferencia según sexo, solo en vista a los monumentos históricos las mujeres participan más que los hombres (Ministerio de Cultura, 2020).



Cuadro elaborado por el MINCUL

[132] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 37

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De acuerda a la estadística proporcionada por el Ministerio de Cultura, es alarmante la inasistencia de los ciudadanos a los museos públicos y monumentos arqueológicos lo cual se sustenta en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2022, que indica que solo un 8% de la población visitó un monumento arqueológico ese año.

Ante esta necesidad pública esta comisión considera que es necesario otorgar facultades para la emisión de una norma con rango de Ley que establezca tarifas diferenciadas para el ingreso gratuito a museos de sitio, centros culturales y monumentos históricos, para otros grupos aparte de los que ya gozan de beneficios por norma, esto con la finalidad de valorar nuestro patrimonio cultural.

Y en esa línea aprovechar los eventos internacionales como la APEC para mostrar al mundo nuestro legado histórico y el patrimonio cultural de nuestro país.
De esta manera asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos culturales e históricos lo cual ayudara a fortalecer el orgullo nacional y amor a nuestra patria.

Conclusión:
Por las consideraciones antes expuestas, esta comisión encuentra justificado otorgar facultades legislativas sobre esta materia al Poder Ejecutivo en sus mismos términos:

3.1.28 Regular el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, a efectos de facilitar la inversión público o privada, y facilitar la conservación, restauración y su puesta en valor.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Ministerio de Cultura en la exposición de motivos[133] señala que existe a la fecha más de 26 mil bienes inmuebles arqueológicos sin saneamiento físico legal, siendo esta una restricción para la inversión pública y privada, dicho proceso de saneamiento viene siendo trabado por las dificultades en el cumplimiento de requisitos, así como en la falta de identificación de algunos propietarios.

Cabe precisar que, a la fecha solo se cuenta con un aproximado de 406 bienes inmuebles arqueológicos saneados. Por lo que se mantiene una brecha de 99.9% en bienes inmuebles prehispánicos declarados patrimonio cultural de la nación sin servicios.

El objetivo es el saneamiento físico legal para facilitar la inversión pública y privada y que de oficio se inscriba la carga cultural de la zona arqueológica quedando dicho bien en calidad de saneado, que evite las invasiones y asentamientos humanos en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

[133] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 38

Por tanto, luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Esta comisión debe señalar que si bien el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, señala que la conservación, protección y la puesta en valor de todo el patrimonio cultural están a cargo y protegidas por el Estado, este tiene al Ministerio de Cultura como ente rector sobre la materia, que solicita al Congreso de la República delegación de facultades, argumentando que el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas, permitirá el avance de las inversiones, contribuyendo al desarrollo de la población.
Asimismo, según información del MINCUL existen a la fecha más de 26 mil bienes inmuebles arqueológicos sin saneamiento físico legal, siendo esta una restricción para la inversión pública y privada.

Si bien el saneamiento físico legal regular continuará su trámite correspondiente y, aunque el saneamiento automático señala que solo abarca el área donde está el monumento, para nuestra Comisión es preocupante que el acto administrativo pretende imponer esta medida señalando, que, aunque la propiedad de la superficie tenga titularidad pública o privada. Asimismo, que el propietario del predio, estaría obligado a aceptar la declaratoria, tal como se muestra en el siguiente cuadro de la exposición de motivos entregado por el MINCUL[134].

[134] Cfr. Ley Nº 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: "Artículo 21.- Obligaciones de los propietarios
Los propietarios particulares de bienes muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación tienen la obligación de:
[...]
d) Consentir la ejecución de obras de restauración, reconstrucción o revalorización del bien mueble o inmueble, por parte del Instituto Nacional de Cultura, cuando fueren indispensables para garantizar la preservación óptima del mismo."

Ante esta propuesta, la comisión debe advertir lo siguiente, que si ya, la ley 28296 en su literal d) del artículo 21 señala las obligaciones del propietario a consentir la ejecución de obras, entonces, frete a esto solo sería necesario que el MINCUL como ente rector haga cumplir la norma; asimismo, esta comisión debe señalar que si bien existe la necesidad de una normativa para acelerar el proceso de saneamiento para facilitar la inversión pública, esta se tornaría compleja tomando en cuenta que muchas de estas zonas y bienes inmuebles arqueológicos prehispánicos se encuentran dentro o son parte de propiedad privada y habitada por posesionarios (Asentamientos Humanos, Asociaciones de Vivienda, Comunidades, etc.), encontrándose muchos de estas en procesos de litigios judicializados entre privados y el Estado.

Necesidad de la intervención normativa (deficiencia o vacío normativo)
En ese sentido, el saneamiento físico legal automático propuesto, es el acto administrativo a cargo del Ministerio de Cultura recaído en resolución ministerial, mediante el cual, una zona arqueológica se declara apta para su puesta en valor, aunque la propiedad de la superficie tenga titularidad pública o privada. Para ello se prevé declarar una zona arqueológica apta para ser puesta en valor mediante una Resolución Ministerial, con lo cual el propietario del predio sobre el que se encuentra la zona arqueológica, está obligado a aceptar la declaratoria de "apta para ser puesta en valor" de la zona arqueológica que se encuentra en su propiedad, en el marco de lo previsto en el inciso d) del artículo 21 de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Entonces, al existir una judicialización del tema en cuestión, al delegar facultades estaríamos colisionando con el principio constitucional de prohibición de avocamiento indebido, que está prohibida por la Constitución Política vigente que señala lo siguiente:
"Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[...]
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. [...] ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución [...]".

Asimismo, sobre el tema, existe pronunciamiento del Tribunal Constitucional, "Sentencia 595/2021 EXP. N.° 00514-2021-PA/TC LIMA [135]

[...]

Segundo: *El principio constitucional de prohibición de avocamiento indebido cuyo enunciado es "ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones", [...]*

supone por su propia naturaleza que se desplace al juez del juzgamiento de una determinada causa y que en su lugar el proceso se resuelva por una autoridad distinta cualquiera que sea su clase [...]".

"Tercero: *[...] Jurisprudencia Constitucional N° 003-2005-PT/TC [...] que señala: "Por lo que el avocamiento es un significado constitucionalmente prohibido, consiste en el desplazamiento del juzgamiento de un caso o controversia que es competencia del Poder Judicial [...], por lo que, en efecto, la independencia judicial no sólo exige la ausencia de vínculos de sujeción o de imposición de directivas políticas por parte de los otros poderes públicos o sociales; [...]".*

Por su parte, respecto a este tema, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, en referencia al OFICIO N° 1585-2023-2024 CCR/CR, elevó una opinión respecto al Proyecto de Ley N 7752/2023-PE, mediante Oficio N° 1595-2023-2024-CCPC/CR, de fecha 16 de mayo de 2024, dirigido a la Señora Congresista MARTHA LUPE MOYANO DELGADO Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento Congreso de la República en los siguientes términos:

"3.1.28 Regular el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, a efectos de facilitar la inversión público o privada, y facilitar la conservación, restauración y su puesta en valor: INVIABLE

Se considera inviable este extremo. en la medida en que el Congreso viene legislando en la materia. Es así, a modo de ejemplo, que las Comisiones de Cultura y Patrimonio Cultural, así como la Comisión de Descentralización han aprobado el Dictamen recaído en los proyectos de Ley 3154/2022-CR y saneamiento 4013/2022-CR, con la finalidad, precisamente de promover el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles prehispánicos. En el caso de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, dicho

[135] Cfr. Sentencia 595/2021 EXP. N.° 00514-2021-PA/TC LIMA
/https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/00514-2021-AA.pdf

dictamen fue aprobado recientemente, esto es, con fecha 6 de mayo de 2024, en la Décima Tercera Sesión Ordinaria del periodo anual de sesiones 2023-2024.
Por su parte, la Comisión de Vivienda y Construcción, con fecha 4 de julio de 2022, aprobó por unanimidad el Dictamen recaído en el proyecto de ley 960/2021-CR, que busca fortalecer la recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal.
Dicho dictamen contó, además, con opiniones favorables del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Como puede apreciarse, ya el Congreso de la República se encuentra legislando sobre esta materia, las cuales se encuentran solo pendientes de su aprobación en el Pleno, por lo que no resulta pertinente la delegación de facultades solicitada en este extremo."

Por lo tanto, el pedido del Ejecutivo para regular el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas declaradas patrimonio cultural no sería viable por los argumentos expuestos, tanto por esta Comisión y por el sustento de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural así como de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República que han aprobado dictamen recaído en proyectos de Ley sobre la materia.

Conclusión:
Al tratarse de una materia que se viene debatiendo en comisiones ordinarias del Parlamento Nacional, se considera dar prioridad a la continuidad del trámite legislativo, lo que garantiza un amplio debate en el Congreso de la República con la participación plural de todos los señores congresistas y de los sectores involucrados con la presente temática.

En tal sentido, esta Comisión considera no otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en la presente materia.[136]

[136] En la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2024, recogiendo el aporte del congresista Eduardo Castillo Rivas, se está delegando este punto, con un texto sustitutorio que hace más precisa la facultad delegada, en mérito que con esta medida se permitirá regular el saneamiento físico legal automático para promover la inversión pública o privada y la conservación de nuestro patrimonio cultural. Asimismo, se ha previsto que la norma no incluye la modificación o distorsión de competencia municipal alguna.

3.1.29 Reforzar las acciones y establecer medidas especiales para la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad, administración o competencia del Ministerio de Cultura a nivel nacional.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El ministerio de Cultura en su exposición de motivos[137] señala que en la actualidad existen constantes hechos de invasiones y asentamientos humanos producto del tráfico de terrenos que afectan los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
A la fecha se han registrado 846 denuncias por invasión de terrenos, los cuales se dividen en: 651 asentamientos precarios, 85 denuncias por lotización, 60 denuncias por ampliación de asentamiento y 50 denuncias por edificaciones precarias.

La continuación de la recuperación extrajudicial de la propiedad, administración o competencia del Ministerio de Cultura sobre un predio y/o bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, se acredite con la partida registral y/o resolución de declaratoria y/o plano de delimitación aprobado o cualquier otro documento o comunicación emitida por el MINCUL, que sustente su condición cultural; independientemente de que el predio y/o bien inmueble se encuentre o no inscrito en el Registro de Predios, en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP o en el Sistema de Información Geográfica de Arqueología-SIGDA.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

[137] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 39

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Politica, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De acuerdo con el análisis del cuadro de propuesta normativa donde se plantea solucionar la problemática ante los constantes hechos de invasiones y tráfico de terrenos que terminan constituyendo asentamientos humanos y asociaciones de vivienda entre otros usos, que finalmente terminan afectando los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los cuales según exposición de motivos del MINCUL se encuentran clasificados de la siguiente manera:
"846 denuncias registrados por invasión de terrenos, divididos en: 651 asentamientos precarios; 85 denuncias por lotización; 60 denuncias por ampliación de asentamiento y 50 denuncias por edificaciones precarias".

Por lo que el presente proyecto plantea un procedimiento célere para la recuperación extrajudicial, con la actuación inmediata de la Policía Nacional del Perú (plazo de 48 horas) y el gobierno local en donde se encuentre el bien cultural afectado. Que la recuperación extrajudicial de la propiedad de un predio y/o bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, se acredite con la partida registral, con resolución de declaratoria y/o plano de delimitación aprobado o cualquier otro documento o comunicación emitida por el MINCUL.

Sobre el análisis de la exposición de motivos esta comisión considera que al tratarse de una inminente conflictividad social entre el Estado y grupos de ciudadanos que muchas veces son víctimas de estafas por parte de traficantes de tierras que venden propiedades del Estado que están en zonas arqueológicas o consideradas patrimonio

cultural, ocasionando litigios en sedes judiciales, procesos a los cuales ninguna autoridad puede interferir o avocarse, tal como lo establece el siguiente mandato constitucional:

"Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
[...]
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. [...] ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución [...]".

Finalmente, se recomienda al Poder Ejecutivo pueda presentar un proyecto de ley sobre la materia para que esta se debata ampliamente dentro del Congresos de la República.

Conclusión:
Al tratarse de una materia compleja que involucra conflictividad social con casos que se encuentran judicializados, se considera que el Poder Ejecutivo en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa conferida por el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, presente un proyecto de ley al respecto, a fin de que sea debatido ampliamente en el Congreso de la República con la participación plural de todos los señores congresistas y de los sectores involucrados con la presente temática.

En tal sentido, esta Comisión considera no otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en la presente materia.

3.1.30 Establecer un marco normativo para promover que la atención de las entidades públicas se brinde en el idioma local para los hablantes de lenguas indígenas u originarias, en ámbitos con predominancia lingüística.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

En su exposición de motivos[138] el Ministerio de Cultura solicita facultades para emitir un decreto legislativo que promueva la atención eficiente a hablantes de lenguas indígenas u originarias en los tres niveles de Estado, de acuerdo con la información del Mapa Etnolingüístico del Perú.

Los puestos de atención directa al público serán ocupados por personal bilingüe (lengua indígena-castellano).
La norma tiene como propósito la reasignación y rotación del personal bilingüe (lengua indígena-castellano) a través de mecanismos como la modificación del lugar de prestación de servicios o rotación del personal CAS, figuras reguladas en el marco normativo vigente.

Excepcionalmente, cuando las entidades públicas vayan a convocar a personal, podrán priorizar la contratación de personal bilingüe para los puestos de atención directa a la población.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

[138] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 40

El pedido pretende establecer la obligación de los tres poderes del Estado, así como a los órganos constitucionalmente autónomos[139] (Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, JNE, ONPE, entre otros) cuenten con personal bilingüe[140] (lengua indígena-castellano) conforme al Mapa Etnolingüístico del Perú aprobado por el MINCUL y para atender ello proponen la reasignación o rotación de servidores públicos bilingües, asimismo las entidades públicas, excepcionalmente priorizarán la contratación de personal bilingüe exclusivamente para brindar atención directa al público. Esto con el fin de promover el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú[141].

Esta Comisión después de analizada la propuesta, señala que esta resulta inviable puesto que su implementación se ampara en la reasignación y rotación de servidores de las entidades públicas, si bien el artículo 76 del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, reconoce ocho (8) acciones de desplazamiento aplicables a los servidores que integran la Carrera Administrativa entre ellas la reasignación, que consiste en la acción administrativa para el desplazamiento definitivo de un servidor nombrado del régimen del Decreto Legislativo N° 276 de una entidad pública a otra, que de acuerdo al artículo 79 del Reglamento y el numeral 3.3.3 del Manual Normativo de Personal N° 002-92-PCM, la reasignación solo será posible en tanto exista en la entidad de destino una plaza vacante y presupuestada con el mismo grupo ocupacional, nivel de carrera y categoría remunerativa. Y que, para dicho efecto, las entidades públicas deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en la Ley N° 28411, en materia de gestión de personal, así como de las leyes presupuestales vigentes, esto con la finalidad de no vulnerar los principios de equilibrio presupuestario[142]. Por lo tanto, al estar este tema ligado al derecho laboral que está en la línea de los derechos fundamentales y además

---

[139] Cfr. Órganos Constitucionalmente Autónomos /http://portal.apci.gob.pe/descentralizacion/atach/directorio__UO__CTI__Organismos_Autonomos.pdf

[140] Cfr. Registro Nacional de Servidores Públicos Bilingües – RENASERBI, creado por la Ley N° 29735. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3453491/DS%20008-2022-MC%20-%20ANEXO.pdf.pdf

[141] Cfr. LEY Nº 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, /https://museos.cultura.pe/sites/default/files/item/archivo/Ley%20Lenguas%20Originarias%20%28Ley%2029735%29.pdf

[142] Cfr. ¿En qué casos procede la reasignación del personal? [Informe 000052-2022-Servir-GPGSC]

consideramos que con la sola reasignación y rotación del personal de los estamentos públicos no se aseguraría la sostenibilidad del servicio que se pretende brindar a los administrados.

Conclusión
Al tratarse de una materia q involucra derechos fundamentales, se considera que el Poder Ejecutivo en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa, conferida por el artículo 107 de la Constitución Política del Estado presente un proyecto de ley al respecto, a fin de que sea debatido ampliamente en el Congreso de la República con la participación plural de todos los señores congresistas y de los sectores involucrados con la presente temática.

En tal sentido, esta Comisión considera no otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en la presente materia.

3.1.31 Establecer estímulos económicos para incentivar la investigación en arqueología y otros ámbitos culturales relacionados a bienes de patrimonio cultural inmueble y mueble; y, la investigación sobre las artes, sobre la industria audiovisual y cinematográfica, y, sobre el libro y la lectura; con cargo a los estímulos económicos aprobados por Decreto de Urgencia 022-2019.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
En su exposición de motivos[143] el Ministerio de Cultura señala que, en la actualidad, existe una relegada actividad relacionada a la investigación en artes, libro, cine, arqueología y otros ámbitos culturales.
De esta forma, el presente proyecto pretende modificar la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia N° 022-2019[144] Decreto de Urgencia que promueve la actividad Cinematográfica y Audiovisual, para autorizar al Ministerio de Cultura el otorgamiento de Estímulos Económicos también a favor de promover e incentivar nuevos conocimientos en torno a los bienes inmuebles como las zonas

[143] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 42
[144] Cfr. Decreto de Urgencia N° 022-2019, https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1834839-1

arqueológicas y/o monumentos, entre otros; y, propiciar el acceso a la cultura y fomentar su desarrollo y difusión.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La ley de Creación del Ministerio de Cultura establece como una de sus funciones la promoción de la investigación; sobre este primer punto, en la actualidad la investigación arqueológica se sostiene en base al financiamiento de entidades internacionales privadas, y que a la fecha se ha identificado más de 26 mil zonas arqueológicas, casi todas sin financiamiento económico.

En relación al segundo punto, los estímulos económicos relacionados a la industria audiovisual y cinematográfica, y, sobre el libro y la lectura estas ya se encuentra en estudio dentro del Congreso de la República, plasmadas en las siguientes iniciativas legislativas: 3258/2022-CR, 5206/2022-CR, 5903/2023-CR, 8112/2023-CR, 6291/2023-CR, 6684/2023-CR y 7697/2023-CR, que proponen crear mecanismos de incentivos para el fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual; asimismo, ya se encuentra publicada la Ley 31893, Ley de medidas estratégicas y disposiciones económicas y tributarias para el fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y la lectura, información que se desprende del OFICIO N° 1595-2023-2024-CCPC/CR de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, dirigida a esta Comisión.

Entonces por lo expuesto esta comisión considera necesario que para establecer los estímulos económicos que promuevan la investigación arqueológica y otros ámbitos culturales relacionados a bienes de patrimonio cultural inmueble o/y mueble, que carecen de financiamiento y para que se corrija el desbalance territorial de incentivos es necesario este tema se debata en el parlamento nacional.

Conclusión:
Al tratarse de una materia que se viene debatiendo en comisiones ordinarias del Parlamento Nacional, se considera dar prioridad a la continuidad del trámite legislativo, lo que además garantiza un amplio debate en el Congreso de la República con la participación plural de todos los señores congresistas y de los sectores involucrados con la presente temática.

En tal sentido, esta Comisión considera no otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en la presente materia.

3.1.32 Regular el marco normativo para promover el sector artístico y creativo, considerando mecanismos de promoción y posicionamiento de los artistas y creadores.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
En su exposición de motivos[145] el Ministerio de Cultura considera prioritario la necesidad de elaborar una ley de promoción artística con la finalidad de brindar las mejores opciones de desarrollo de los artistas.
Asimismo, como información referencial, se tiene de la revisión de la información con la que cuenta RENTOCA[146] se advierte que 4027 personas declararon que no contaban con un seguro de salud; y, 20328 trabajadores culturales.

[145] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 43
[146] Cfr. Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes – RENTOCA https://www.infoartes.pe/rentoca/#:~:text=El%20RENTOCA%20es%20una%20herramienta,p%C3%BAblicos%20del%20Ministerio%20de%20Cultural.

Resulta importante resaltar que el sector cultural atraviesa un punto crítico generado a partir del COVID19, el cual también fue expuesto en la "Mesa de Trabajo EscuchArte[147]", la cual tenía como objeto proponer medidas y estrategias para el fortalecimiento, reactivación y operatividad del sector artístico.

En ese sentido, a fin de atender algunas de las problemáticas que el sector ha manifestado a través de aquella Mesa Técnica y otros documentos de trabajo, se ha propuesto este proyecto legislativo que promueve el sector artístico y cultural, impulsando la visibilidad de los autores y artistas, reconociendo su labor creativa.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

A través del estudio de la exposición de motivos planteado por el Ejecutivo, el empleo y los ingresos de las industrias culturales y creativas del Perú han sido afectadas gravemente. La cifra indica que el mercado laboral de la cultura colapsó a inicios de la emergencia sanitaria y la emergencia nacional.

En ese sentido, a fin de atender estos problemas que atraviesan los artistas por falta de la promoción del sector artístico y cultural, que impulse la visibilidad de los autores

[147]Cfr. EscuchArte RM 000297-2023 – MC /https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4944946/RM%20000297-2023%20-%20MC.pdf?v=1691416120

y artistas, reconociendo su labor creativa, y entendiéndose que para el desarrollo de esta propuesta será necesario destinar presupuesto público; esta Comisión recomienda que se impulse el debate y aprobación de las distintas iniciativas legislativas que se encuentran en trámite en el Parlamento, tales como los proyectos de ley: 3258/2022-CR, 5206/2022-CR, 5903/2023-CR, 8112/2023-CR, 6291/2023-CR, 6684/2023-CR y 7697/2023-CR.

Conclusión:
Al tratarse de una materia que se viene debatiendo en comisiones ordinarias del Parlamento Nacional, se considera dar prioridad a la continuidad del trámite legislativo, lo que garantiza un amplio debate en el Congreso de la República con la participación plural de todos los señores congresistas y de los sectores involucrados con la presente temática.

En tal sentido, esta Comisión considera no otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en la presente materia

3.1.33. Establecer medidas para promover el despliegue de los servicios públicos de telecomunicaciones que utilicen tecnología de quinta generación (5G) o superior, a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establezca un mecanismo especial para el otorgamiento de concesiones con asignación de espectro radioeléctrico sujeto al cumplimiento de compromisos de inversión en atención al valor de dicho recurso natural.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo argumenta que el Perú está rezagado en la asignación de espectro 5G con respecto a Europa y América Latina, siendo que países como Chile, Brasil, México, Uruguay y Argentina ya han asignado espectro en cantidades suficientes para un despliegue óptimo de 5G. Si bien en el Perú la implementación del 5G inició en el 2021, al Tercer Trimestre del 2023, tan solo once (11) provincias del país tienen coberturas parciales 5G, con asignaciones no óptimas que resultan en bajas velocidades respecto a lo que ofrece esta tecnología, toda vez que, conforme a la GSMA (2019) se requieren asignaciones a partir de 80-100 MHz en bandas medias para optimizar los servicios 5G.

Habida cuenta de lo señalado, los plazos prolongados de asignación de espectro 5G en el Perú mediante concurso público (que van de 2 a 4 años aproximadamente), retrasarían su óptimo y oportuno despliegue para la prestación de servicios de telecomunicaciones en el sector industrial, así como en otros sectores tales como salud, eléctrico, financiero, entre otros, retrasando con ello los beneficios económicos (contribución al PBI) y la competitividad del país frente a otros países de la región.

La propuesta está destinada a facultar al MTC a aprobar un régimen que contemple medidas especiales y facultativas para la promoción de los servicios de quinta generación (5G) y superiores, que regulen mecanismos alternos y céleres para la asignación de espectro radioeléctrico.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

El espectro radioeléctrico en territorio nacional se encuentra administrativamente en la competencia del Sector Transportes y Comunicaciones y su relevancia no interfiere en lo más mínimo con las normas constitucionales ni versa sobre reforma constitucional, tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto ni ley de la cuenta general. Es una materia específica.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

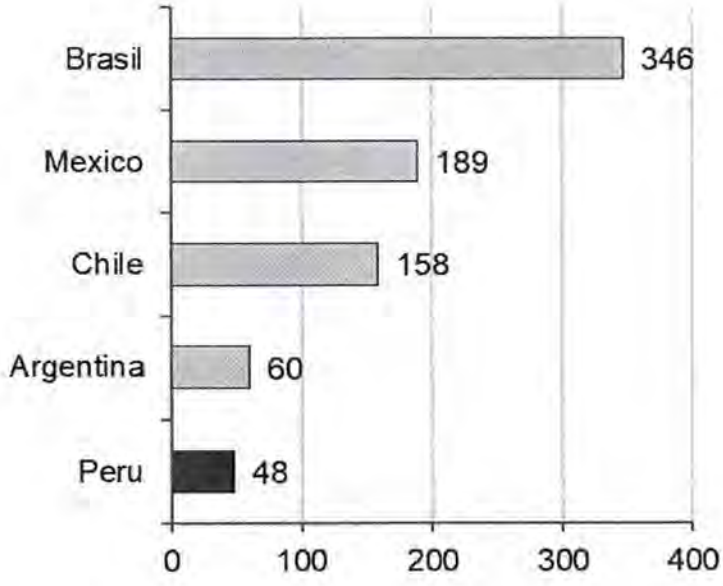
Al respecto, y conforme se tiene de la exposición de motivos y mesas técnicas y con la finalidad de promover el despliegue de los servicios públicos de telecomunicaciones que utilicen tecnología de quinta generación (5G) o superior se considera necesario se le otorguen facultades para legislar considerando que, según los datos recibidos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Perú está atrasado en la asignación de espectro radioeléctrico (ERE) para servicios públicos de telecomunicaciones mediante tecnología 5G. En comparación con países de Europa y América Latina, donde se han realizado concursos para asignar espectro 5G en los últimos años (como Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y República Dominicana), Perú se encuentra rezagado.

Tabla: Año de adjudicación de los países, para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones mediante tecnología 5G

País	Cantidad de espectro Asignado	Año de adjudicación
Argentina	250 MHz	2023
Brasil	300MHz	2021
Chile	150MHz	2021
Colombia	320MHz	2023
Uruguay	300MHz	2023
República Dominicana	140MHz	2021

Esta situación coloca a Perú en una posición desventajosa a nivel internacional en términos de disponibilidad de espectro 5G, y también lo sitúa como el país con la velocidad de descarga 5G más baja en la región.

Gráfico: Velocidad de descarga 5G (Mbps) en países de la región a junio de 2023



Fuente: Opensignal. Elaboración: DGPRC-MTC.

Tal es así que para finales del 2023, tan solo 30 distritos de los 1891 distritos a nivel nacional cuentan con cobertura parcial de 5G en el país, lo que representa el 1.5% de distritos del país.

Asimismo, de acuerdo con el marco vigente, el otorgamiento de nuevas concesiones con asignación de ERE requiere necesariamente del mecanismo del concurso público, el cual puede durar un promedio de 2 a 4 años en realizarse a través de los procesos regulares de promoción de la inversión privada.

Estos plazos resultan en exceso prolongados, y retrasarían el óptimo y oportuno despliegue de la tecnología 5G en el país para la prestación de servicios de telecomunicaciones en distintos sectores, tales como educación, salud, eléctrico, financiero, entre otros; retrasando los beneficios económicos (contribución al PBI) que derivan de ello y la competitividad del país frente a otros países de la región.

Para abordar la problemática identificada, se necesita un mecanismo que permita otorgar concesiones de espectro radioeléctrico de manera directa y expedita a los operadores para el despliegue de tecnologías 5G o superiores. Sin embargo, el marco actual de la Ley de Telecomunicaciones no permite establecer compromisos de inversión en este proceso debido al valor del recurso natural involucrado.

En ese sentido, esta comisión considera prudente incorporar una modificación al artículo 58 del Decreto Legislativo N° 702 (marco vigente de la Ley de Telecomunicaciones), a fin de implementar un mecanismo de asignación directa de espectro radioeléctrico a empresas operadoras para servicios de 5G o superiores. Las empresas deberán cumplir con obligaciones económicas para cerrar brechas de acceso a servicios de telecomunicaciones. Se suscribirán nuevos contratos de concesión vinculados al espectro asignado, renunciando a contratos previos si es necesario. En caso de escasez de espectro, se realizará un concurso público siguiendo las reglas de promoción de inversión privada.

Conclusión

Este aspecto solicitado, se encuentra justificado para la delegación de facultades. Por tanto, esta Comisión considera otorgar las facultades solicitadas en los mismos términos del texto presentado por el Poder Ejecutivo.

3.1.34. Modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 98, Ley de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A., a fin de permitir que la Junta General de Accionistas, máximo órgano de la empresa, pueda establecer el domicilio legal de ésta; así como, eliminar la necesidad de promulgar una Ley expresa para su disolución.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

De la exposición de motivos y de las mesas técnicas se desprende la necesidad que la Junta General de Accionistas de esta empresa pública pueda estar facultada para establecer por acuerdo mayoritario, el lugar del domicilio de la empresa, así como decidir sobre la disolución de la misma.

Tenemos también que la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A.-ENAPU, es una Empresa Estatal bajo el ámbito de FONAFE, en la cual éste es titular del cien por ciento de sus acciones, en representación del Estado.

ENAPU adopta la forma de Sociedad Anónima, regulada por la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

La Ley General de Sociedades reconoce a la Junta General de Accionistas como el órgano supremo de la sociedad, disponiendo que los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el quórum correspondiente (en el caso de ENAPU, FONAFE detenta el 100% de acciones), deciden por la mayoría que establece esta ley los asuntos propios.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Es fácil observar que la propuesta de ley solicitada no contraviene preceptos constitucionales, ni constituye una propuesta de reforma constitucional, o de reforma de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto ni ley de la cuenta general. La materia versa específicamente sobre parte del funcionamiento y extinción de una estructura orgánica creada por el propio Estado, dentro del marco de las normas legales del régimen empresarial público, con lo cual se cumple con lo que dispone el artículo 104 de la Constitución.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En los propios términos planteados por el Ejecutivo en el desarrollo de la exposición de motivos, considerando que la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A -ENAPU, fue creada por una norma con rango de Ley y en efecto el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 98 establece que su domicilio reside en la provincia constitucional del Callao.

Considerando además que actualmente de las 35 empresas del consorcio FONAFE, todas empresas nacionales, solo ENAPU y el Banco de la Nación son las únicas empresas que necesitan ley o Decreto Supremo para poder modificar su domicilio o para proceder con la disolución. La Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A. (ENAPU) es una empresa pública peruana que se formó en 1970 con el propósito de administrar, operar y desarrollar los muelles y terminales portuarios en el país.

Su misión es atender la demanda de servicios portuarios a través de la administración, operación y mantenimiento de los terminales portuarios y otros servicios relacionados en el ámbito acuático, contribuyendo así a la competitividad del comercio exterior.

Esta empresa es una Empresa Estatal bajo FONAFE, con el cien por ciento de sus acciones pertenecientes al Estado a través de FONAFE. ENAPU tiene la estructura de una Sociedad Anónima, regulada por la Ley General de Sociedades N° 26887.

Según la Ley General de Sociedades, la Junta General de Accionistas es considerada el órgano máximo de la sociedad. Sin embargo, en el caso de ENAPU, FONAFE no puede tomar decisiones que correspondan a los accionistas, como fijar la sede social o decidir su disolución, ya que el domicilio social de ENAPU está establecido en el Decreto Legislativo N° 98 en la Provincia Constitucional del Callao.

Como parte del análisis se está tomando en cuenta que ENAPU no viene realizando actividades operativas en el Callao, por lo que se ve en la necesidad de cambiar de domicilio y poder ubicarlo donde se encuentren realizando mayores actividades.

Dado que ENAPU opera siete puertos en Perú: Salaverry, Ilo, Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado, Huacho y Supe, vale la pena analizar cuál de estas ciudades será de mayor actividad para determinar el domicilio, es relevante explorar opciones para ajustar su ubicación legal. Aquí hay algunas consideraciones adicionales:

Si ENAPU viene operando en diversas ciudades a lo largo del territorio peruano, vale la pena analizar y evaluar un nuevo domicilio que refleje mejor su actividad real.

Para modificar aspectos como el domicilio social o la disolución de ENAPU, se requeriría una norma de rango legal para ajustar el Decreto Legislativo N° 98. Esto permitiría a FONAFE, como accionista, actualizar el domicilio de la empresa a través de la Junta General de Accionistas. En cuanto a la disolución de empresas como ENAPU, el Reglamento de la Ley de FONAFE establece que dicha disolución debía ser autorizada por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Considerando el artículo 10 del Reglamento de la Ley 27170, aprobado mediante Decreto Supremo N° 072-2000-EF, establece lo siguiente:

(...)

r) Disponer la disolución y liquidación de empresas del Estado. Tratándose de Empresas Financieras del Estado, será necesaria la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, conforme a lo establecido en las normas correspondientes" (*)

Además el artículo 35 del Reglamento de la Ley N° 27170, aprobado mediante Decreto Supremo N° 072-2000-EF, establece lo siguiente:

La transformación, fusión, escisión y cualquier otra forma de reorganización societaria, así como la disolución y liquidación de las empresas se perfecciona por acuerdo de la Junta General de Accionistas.

Por tales motivos, al tratarse de un tema específico esta Comisión considera que es de necesidad dar la facultad solicitada ya que ayudará a un mejor desarrollo de sus actividades.

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado por la delegación de facultades, pero limitado a permitir que la Junta General de Accionistas pueda establecer el domicilio legal de ésta; por lo que se propone el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo 98, Ley de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A., a fin de permitir que la Junta General de Accionistas, máximo órgano de la empresa, pueda establecer el domicilio legal de ésta".

3.1.35. Garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

De la exposición de motivos y mesas técnicas llevadas a cabo sé tiene que el Poder Ejecutivo requiere facultades legislativas para que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a fin preservar la continuidad de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en los Contratos de Concesión de los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao (SIT).

La Ley autorizaría a la ATU para que suscriba acuerdos vía trato directo, contratos de concesión de los corredores complementarios. Consideran los proponentes que así, la ATU sería la responsable de sustentar, mediante un análisis costo beneficio, la conveniencia de los acuerdos que adopte, para lo cual evaluará las alternativas de solución a las controversias en trámite y la posibilidad de éxito, prefiriendo aquellas que garanticen la continuidad del servicio y la implementación de soluciones en un plazo razonable. Estas operaciones estarían supervisadas por la Contraloría General.

Además, se indica que los referidos acuerdos serían suscritos por las instancias competentes de la ATU y su presidente ejecutivo.

Asimismo, sostienen que con la ley solicitada darían una solución integral y sostenible a la problemática de los proyectos de Corredores Complementarios, por lo que se ha previsto la aprobación de medidas que autoricen a la ATU para negociar y acordar modificaciones a los referidos Contratos de Concesión de los Corredores Complementarios, garantizando la continuidad del servicio, el Valor por Dinero y la sostenibilidad económica y financiera de dichos contratos. Para dichos efectos, la ATU sustenta, luego de un análisis costo beneficio de escenarios, que la opción elegida y plasmada en la propuesta de modificación contractual es la más beneficiosa para los intereses del Estado y de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

Como parte de las modificaciones contractuales propuestas, las partes podrán redistribuir riesgos y adecuar parámetros económico-financieros, entre otros aspectos, con la finalidad de alcanzar el equilibrio económico financiero del respectivo contrato.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República), por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Según el análisis realizado en esta comisión, tenemos que a mediados de Julio del año 2023, las empresas Concesionarias de los 4 Corredores Complementarios emplazaron al Concedente (ATU) para resolver vía Trato Directo (con Amigable Componedor), el pago de una indemnización de S/491,067,403.75 en total por incumplimientos contractuales atribuibles al Concedente.

En el marco de dichas negociaciones se suscribieron Acuerdos de Trato Directo en las siguientes materias:

Acuerdos económicos: el Concedente se comprometió a pagar al Concesionario los siguientes montos por concepto de indemnización como consecuencia de sus incumplimientos contractuales y normativos.

Acuerdos Operativos: se acordó que los concesionarios utilizarían parte del dinero recibido por concepto de indemnización para reparar, repotenciar y/o adquirir buses y con ello, incrementar la capacidad de oferta dentro de sus corredores viales y con ello cumplir sus obligaciones contractuales.

Sin embargo, dichos acuerdos no han podido ser cumplidos en atención a la opinión vertida por el equipo de Promoción de la inversión Privada del MEF mediante Informe N° 261-2023-EF/68.0, el cual refiere dentro de su análisis que, los Contratos de Concesión al tratarse de Contratos Administrativos, los acuerdos que se adopten como consecuencia del Trato Directo, deben contar en todo momento con una alternativa legalmente viable, es decir, con una alternativa válida derivada de la ley aplicable o en el contrato suscrito entre el Concedente y Concesionario.

La propuesta de Ministerio de Economía y Finanzas MEF señala que se debe emitir una adenda para poder reconocer el pago indemnizatorio.

En tal sentido se manifiesta que se modificaría la Ley de creación de la ATU, precisando en su artículo 6 -Funciones de la ATU-, entre otras, la función de adoptar acuerdos de pago de obligaciones derivadas de acuerdos de trato directo, arbitrajes y/u otros mecanismos de solución de controversias, establecidos en los contratos que suscriba.

Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que las facultades solicitadas son viables, toda vez que es una necesidad garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado por la delegación de facultades limitado al cumplimiento de términos contractuales o a modificaciones por acuerdo de partes. En tal sentido, se propone el siguiente texto sustitutorio:

"Garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, sin afectar términos contractuales, salvo acuerdo de partes".

3.1.36 Establecer disposiciones especiales en materia de habilitaciones urbanas y de edificación para optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos sobre la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y otros actos administrativos que las complementen, de manera simplificada, ágil, eficaz y eficiente.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo argumenta este pedido de facultades en la exposición de motivos del proyecto de ley materia de análisis, señalando que, el proyecto normativo tiene por objetivo optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos simplificados, ágiles, eficaces y eficientes para la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y otros actos administrativos que las complementen; toda vez que se ha identificado retrasos o demora de los trámites de dichos procedimientos por parte de los gobiernos locales. Señalan que la propuesta normativa permitirá la óptima ejecución y el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de toda la cadena logística, humana y económica conexa; desarrollando entre los principales aspectos, la creación de nuevos actores que intervendrán en las habilitaciones urbanas y de edificaciones.

La propuesta de nuevos Actores, como son el Órgano Técnico Revisor, que es parte del órgano colegiado, y tienen como función revisar en única y última instancia administrativa los dictámenes vinculantes emitidos por los Revisores Urbanos; y, el Inspector Privado de Obra, que tiene como función verificar la correcta ejecución de las obras, reportar a la

municipalidad y al colegio profesional; no son adscritos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sino estos profesionales serán pertenecientes a los Colegios Profesionales, por tanto ambos actores no requerirán financiamiento adicional del tesoro público. Por no formar parte de la estructura y funcionamiento del estado, no requerirán tampoco opinión previa de la Secretaría de Gestión Pública.

Asimismo, en el análisis de impactos cuantitativos y cualitativos de la norma se verifica que la propuesta normativa no irrogará gasto adicional alguno al Tesoro Público, toda vez que sus disposiciones están orientadas a regular los procedimientos de emisión de licencias de habilitación urbana, de edificación y de todos los actos administrativos que las complementen; la ejecución, supervisión y fiscalización de las obras autorizadas; los roles, funciones y competencias de los distintos actores que intervienen en dichos procedimientos; la documentación y demás documentación que se requiere para la tramitación de estos procedimiento, así como los actos administrativos que se emiten al final.[148]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Politica, artículos 101 y 104, entre otros; se establece como una de las causales de indelegabilidad el que la propuesta recaiga en modificaciones constitucionales, de leyes orgánicas, tratados internacionales, Ley de presupuesto o la Ley de la Cuenta General de la República.

Asimismo, en el marco de la delegación de facultades en materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos, el Poder Ejecutivo propone optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos simplificados, ágiles, eficaces y eficientes para la obtención de licencias de habilitación urbana, de edificación y otros actos administrativos que las complemente; y con ello la creación de dos actores los cuales son el órgano técnico revisor y el inspector privado de obra, actores que pertenecerán a Colegios Profesionales y no formarán parte de la estructura y funcionamiento del Estado; sin embargo, ello **colisiona** con el numeral 1.2 del artículo 86 de la Ley 27972, Ley Orgánica

[148] Se recoge el sustento puntualizado en la exposición de motivos, comprendido en la página 49 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

de Municipalidades[149], el cual señala que es una **función específica y exclusiva de las municipalidades provinciales el flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de licencias y permisos en el ámbito de su jurisdicción**; y a manera de enfatizar en el tipo de licencia específica, de conformidad con lo señalado, en el numeral 9 del artículo 4 de la Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificación[150], precisa que las municipalidades provinciales son competentes en el marco de la aprobación de proyectos de habilitación urbana y de edificación, ello con arreglo a lo contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Por los motivos expuestos, la flexibilización y simplificación de los procedimientos de otorgamiento de licencias de habilitación urbana y de edificaciones estarían comprendidas dentro de las facultades de las municipalidades provinciales.

Por tanto, y después de un análisis hecho a la fórmula legal, así como a la exposición de motivos que la sustenta, esta Comisión considera que en este aspecto, no se supera el control de constitucionalidad. [151]

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Respecto a la pertinencia de la medida, si bien existe necesidad de dinamizar y optimizar el desarrollo de procedimientos administrativos, esta es una función exclusiva de las municipalidades provinciales, por tal motivo no cabe mayor análisis de pertinencia.

Esquema presentado por el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, en mesas técnicas

[149] Artículo 86, de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/ - /detallenorma/H845702

[150] Numeral 9 del artículo 4 de la Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificación: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/ - /detallenorma/H950686

[151] Se recoge el sustento puntualizado en la exposición de motivos, comprendido en la página 49 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

Anexo N°2
Aspectos a puntualizar en las Mesas Técnicas

Submateria	Problemática que se pretende solucionar	Necesidad de la intervención normativa (deficiencia o vacío normativo)	Impacto cualitativo y/o cuantitativo que tendrá la regulación en el sector	¿Involucra financiamiento y/o habilitación presupuestaria?
3.1.36 **Regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones**	**Problemática:** Demora o retraso en la obtención de las licencias de habilitación urbana y edificación. **Causas:** • Exigencia de requisitos y cobros adicionales. • Creación de nuevos procedimientos. • Aplicación inadecuada de las herramientas jurídicas. • Deficiente capacidad técnica de funcionarios y servidores municipales. • Intervención de actores no previstos en la normativa. • Incumplimiento de las normas urbanísticas y/o edificatorias por los Revisores Urbanos.	Se requiere con urgencia reactivar la economía del país para optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos simplificados, ágiles, eficaces y eficientes para la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y otros actos administrativos que las complementen. Asimismo, se necesita incentivar al sector privado a desarrollar proyectos de inversión del sector construcción e inmobiliario, evitando la paralización y/o retraso de sus actividades. De esta manera la propuesta busca suprimir las barreras burocráticas y las dilataciones de plazo en los procedimientos administrativos.	**Impactos:** Reducción de costos y tiempos en los proyectos inmobiliarios; con lo cual se persigue: ➢ Evitar barreras existentes a favor de los administrados para optimizar tiempos y costos. ➢ Incentivar e incrementar la inversión privada inmobiliaria, formal generando predictibilidad. ➢ Simplificar y acelerar los procedimientos administrativos de las licencias.	El Proyecto Normativo: **NO REQUIERE RECURSOS ADICIONALES AL TESORO PÚBLICO Y A LO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**

Conclusión

Al recaer sobre una de las materias indelegables señaladas por los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en función a que la propuesta normativa interviene en competencias específicas y exclusivas de las municipalidades provinciales, otorgadas mediante la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, no supera el control de constitucionalidad y por consiguiente se recomienda no delegar facultades al Poder Ejecutivo en este extremo.[152]

[152] En la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2024, recogiendo el aporte de la congresista Patricia Juárez, se está delegando este punto, con un texto sustitutorio que hace más precisa la facultad delegada, con la indicación expresa de que se respeten las competencias exclusivas de los gobiernos locales, conforme a su ley orgánica. El sustento de esta delegación consiste en la necesidad de tener un nuevo marco normativo que establezca disposiciones en materia de habilitaciones urbanas y de edificación, a fin de salvaguardar el derecho del administrado a edificar, contando con la optimización de los plazos para el inicio de las obras; sin embargo, esto no exime a las municipalidades de emitir la licencia correspondiente.

3.1.37 Optimizar el marco normativo para la adecuación progresiva de los prestadores de servicios de saneamiento, precisando las condiciones a cumplir en relación al plazo máximo de adecuación establecido, predictibilidad respecto al instrumento de gestión ambiental aplicable y medidas complementarias de simplificación, promoción e impulso integral de la adecuación progresiva.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo señala que el Decreto Legislativo N° 1285 mediante su artículo 4 estableció un plazo para la adecuación progresiva de los vertimientos del sector saneamiento no mayor de 9 años, el cual vence el 10 de agosto del 2026. Al respecto, faltando 2 años para cumplir el plazo antes indicado, de un universo de 1271 prestadores de servicios de saneamiento (PSS) solo el 26.9% ha obtenido el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) pertinente, encontrándose en condiciones aptas para solicitar y tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la Autorización de Vertimiento respectiva, y posteriormente ejecutar la obra.

Mediante la propuesta normativa se pretende precisar que el plazo previsto en el referido artículo 4 del Decreto Legislativo 1285 corresponde al plazo límite para poder presentar el IGA ante la autoridad competente, siendo que la ejecución de la obra y el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental se logra conforme a lo que establezca el IGA aprobado. Señalan que, para ello, también se establecerá predictibilidad respecto al tipo de IGA que corresponda a cada proyecto o intervención según su naturaleza, capacidad, entre otros aspectos que se desarrollarán en la propuesta normativa.

Además, se propone incorporar otras medidas, tales como incentivos para la adecuación, con programas de inversión focalizados, de transferencias condicionadas; así como, la promoción de la economía circular y el reúso de las aguas residuales, como parte esencial del pacto nacional por la economía circular, y de cara a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) del 2030, que promueven, entre otros, la reducción del vertimiento, así como otras medidas para el abordaje integral de esta problemática.[153]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

La presente propuesta no transgrede los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, puesto que no contiene materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República, conforme lo establece el artículo 104 y el numeral 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú de 1993.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El artículo 79 de la Ley 29338, Ley de Recursos de Hídricos, el cual versa sobre el vertimiento de agua residual, ha sido modificado mediante el Decreto Legislativo 1285, Decreto que además establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos a los instrumentos de gestión ambiental; desarrollando en su artículo 4 la adecuación progresiva de los vertimientos del sector saneamiento.

El numeral 4.1 del mencionado artículo 4 del Decreto Legislativo 1285, establece un plazo no mayor de nueve años para que los prestadores de servicios de saneamiento logren la adecuación progresiva respecto a todo lo establecido en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos.

Asimismo, el Reglamento de los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 1285, aprobado mediante Decreto Supremo 010-2017-VIVIENDA, el cual fue modificado posteriormente mediante Decreto Supremo 009-2021-VIVIENDA, señala en sus considerandos que se estableció un plazo no mayor de nueve (09) años para la adecuación progresiva de los prestadores de servicios de saneamiento, a lo establecido en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, con la finalidad de que progresivamente se de cumplimiento a las normas ambientales y sanitarias vigentes.

Al respecto, el numeral 12.1 del artículo 12 del precitado Reglamento, señala lo siguiente:

[153] Se recoge el sustento puntualizado en la exposición de motivos, comprendido en las páginas 49 y 50 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

> *"[...] El proceso de adecuación progresiva culmina en un plazo máximo de nueve (09) años, según corresponda, el cual se cuenta a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento [...]".*

Contando con este marco normativo vigente, **el Poder Ejecutivo ha expresado que se requiere una mayor precisión en el citado Decreto Legislativos para mayor interpretación en función al plazo señalado de nueve (09) años**; asimismo ha enfatizado que con ello se otorgará mayor predictibilidad y fecha cierta respecto a la obligación de adecuarse, siendo que la fecha de aprobación del referido instrumento está condicionada a los plazos y términos de la administración y no recae sobre el administrado, por lo que aparentemente podría contemplarse como un condicionamiento de fecha de implementación de las obras. En función a ello, ha señalado específicamente lo siguiente:

> *"[...] Mediante la propuesta normativa se pretende precisar que el plazo previsto en el referido artículo 4 del Decreto Legislativo 1285 corresponde al plazo límite para poder presentar el IGA ante la autoridad competente, siendo que la ejecución de la obra y el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental se logra conforme a lo que establezca el IGA aprobado [...]".*

Por otra parte, **el Poder Ejecutivo también solicita que se incorporen medidas adicionales**, enfatizando que existe la necesidad de incorporar incentivos para fomentar la adecuación progresiva de los prestadores de servicios de saneamiento precisando explícitamente que:

> *"[...] se propone incorporar otras medidas, tales como **incentivos** para la adecuación, con programas de inversión focalizados, de transferencias condicionadas; así como, la promoción de la economía circular y el reúso de las aguas residuales [...]"*

Respecto a ese extremo de la propuesta, no se puede observar con claridad qué tipo de incentivos desean establecer, cómo se desarrollarían, ni la magnitud de ellos, pues se podría entender que tales transferencias condicionadas podrían estar ligadas por ejemplo

a transferencias de partidas, sin embargo, cabe precisar que el artículo 80 de la Constitución Política señala lo siguiente:

> *"[...] Los créditos suplementarios, habilitaciones y **transferencias de partidas** se tramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario, **se tramitan ante la Comisión Permanente** [...]".*

Asimismo, es menester mencionar que el artículo 46.1 del Decreto Legislativo 1440, Decreto del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que:

> *"[...] 46.1 **Constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional**: los Créditos Suplementarios y las **Transferencias de Partidas**, los que son aprobados mediante Ley:*
>
> *[...]*
>
> *2. **Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos** [...]".*

Asimismo, respecto a los incentivos señalados, en la mesa técnica realizada con los representantes del Poder Ejecutivo, se dio a entender que dichos incentivos son de carácter tributario. Por los motivos esbozados referentes al extremo señalado de la submateria, esta Comisión considera que ello debería verse con mayor debate en el Congreso de la República, ya que si bien es cierto, existe la necesidad de promover la implementación de medidas complementarias que ayuden a impulsar tecnologías alternativas con menor inversión e intervención; la propuesta no supera el principio de especificidad exigido, debido a que existe mayor imprecisión en la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo en ese extremo.

Esquema presentado por el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, en mesas técnicas

Anexo N° 2
Aspectos a puntualizar en las Mesas Técnicas

Submateria	Problemática que se pretende solucionar	Necesidad de la intervención normativa (deficiencia o vacío normativo)	Impacto cualitativo y/o cuantitativo que tendrá la regulación en el sector	¿Involucra financiamiento y/o habilitación presupuestaria?
3.1.37 Fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios	Bajo cumplimiento de los estándares de calidad ambiental por parte de los prestadores de servicios de saneamiento	Se requiere optmizar la normativa optimizar el marco normativo para la adecuación progresiva de los prestadores de servicios de saneamiento, precisando las condiciones a cumplir en relación al plazo máximo de adecuación establecido, predictibilidad respecto al instrumento de gestión ambiental aplicable y medidas complementarias de simplificación, promoción e impulso integral de la adecuación progresiva	831 Prestadores de Servicios de Saneamiento que benefician a 18 993 018 de usuarios	No

Conclusión

Respecto al pedido de precisión en torno al plazo para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), lo solicitado se encuentra justificado en la delegación de facultades debido a que el hecho de no señalar de manera precisa que el plazo rige para la presentación del IGA; ha ocasionado una interpretación errónea; asimismo, respecto al pedido de incorporar otras medidas, tales como incentivos para la adecuación, con programas de inversión focalizados, de transferencias condicionadas, entre otras; ello no supera el principio de especificidad exigido, debido a que existe imprecisión en la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo en ese extremo, por lo que esta Comisión considera que no es viable en este apartado la propuesta planteada; asimismo, en virtud del artículo 107 de la Constitución Política, el Poder Ejecutivo puede presentar una propuesta legislativa respecto a la submateria, la cuál será analizada y debatida en el Pleno del Congreso de la República como máxima instancia deliberativa; por ello esta Comisión no delega facultades en el extremo mencionado, recomendando al Poder Ejecutivo canalizar a través de un proyecto de ley la propuesta. Por tales motivos, se propone el siguiente **texto sustitutorio**:

"Modificar el artículo 4 del Decreto Legislativo 1285, Decreto que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos de Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos a los instrumentos de gestión ambiental; para realizar precisiones respecto a la aplicación del plazo límite para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y la autorización de vertimiento, ante la autoridad competente".

3.1.38. Establecer disposiciones para promover el desarrollo de la construcción, a través de tecnologías constructivas no convencionales.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo en su exposición de motivos sustenta que, la brecha (cualitativa y cuantitativa) del sector construcción, que genera un déficit de infraestructura, tiene como una de sus causas el uso de pocos materiales y productos de la construcción (concreto y bloques de albañilería, esencialmente) así como de insuficientes o inadecuados procedimientos constructivos (lentos o riesgosos).

En la actualidad no se cuentan con medidas que fortalezcan y faciliten la utilización de tecnologías alternativas y/o sistemas, y/o materiales constructivos no convencionales (SCNC), que propicien no sólo la reducción de la vulnerabilidad sino además el desarrollo del sector construcción.

Asimismo, señalan que no se cuentan con reglas técnicas y legales que doten de predictibilidad al proceso para la utilización de sistemas constructivos no convencionales, lo que hace que el procedimiento sea engorroso, además de generar altos sobrecostos en aquellos interesados en gestionar inversiones en estas tecnologías constructivas no convencionales; generando el desincentivo en los administrados que proponen innovaciones tecnológicas para la mejora en la infraestructura, específicamente en construcción y saneamiento.

Cabe precisar que las tecnologías constructivas no convencionales ofrecen ventajas como la reducción de costos y en la reducción de los tiempos de construcción, entre otros.

Por ejemplo, la construcción modular prefabricada implica la fabricación de componentes de edificios en fábricas y su posterior ensamblaje en el lugar de construcción, lo cual permite una mayor eficiencia en la utilización de materiales y una reducción en los residuos de construcción.

A pesar de las ventajas, la adopción de tecnologías constructivas no convencionales aún enfrenta algunos desafíos, como la resistencia a la innovación, la necesidad de estándares

de calidad y seguridad, y la falta de regulaciones específicas en algunos países como el Perú.[154]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a esta materia pueden ser delegables, por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Conforme a lo señalado por el Poder Ejecutivo en su Anexo Nº 2, presentado en las mesas técnicas:

> *"Se requiere actualizar la regulación nacional dirigida a habilitar el uso de tecnologías constructivas no convencionales y materiales de bajo impacto ambiental. La normativa actual data del año 1971"*[155]

Cabe resaltar que actualmente, la única norma que brinda un marco legal al uso de sistemas constructivos no convencionales es el Decreto Supremo 010-71-VI, el cual dispone en su artículo 1, que "las personas naturales o jurídicas que posean o representen sistemas de prefabricación de viviendas de construcción no convencional, cualquiera sea su naturaleza, deberán obtener previamente a su utilización, en cualquier lugar de la República, la aprobación y autorización del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento"[156]

Respecto a la problemática actual, de la Exposición de Motivos y del desarrollo de las Mesas Técnicas realizadas con representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ha podido avizorar que, no existe en la actualidad un marco normativo con rango de ley que promueva la utilización de tecnología no convencional para la construcción, más que el Decreto Supremo 010-71-VI.

---

[154] Se recoge el sustento puntualizado en la exposición de motivos, comprendido en las páginas 50 y 51 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

[155] Planteado en el Anexo Nº 2 de los aspectos a puntualizar en las Mesas Técnicas, referente a la submateria 3.1.38, e incluido en la sección de "necesidad de la intervención normativa (deficiencia o vacío normativo)"

[156] Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 010-71-VI

Asimismo, existe confusión en cuando a las funciones previstas para evaluar la idoneidad en el uso de los sistemas constructivos no convencionales, lo que conlleva a desarrollar procesos excesivamente largos, engorrosos y burocráticos, viéndose afectados los proponentes de estas nuevas tecnologías en la construcción,

El Poder Ejecutivo en su Exposición de motivos, señala lo siguiente:

> *"En la actualidad no se cuentan con medidas que fortalezcan y faciliten la utilización de tecnologías alternativas y/o sistemas, y/o materiales constructivos no convencionales (SCNC), que propicien no sólo la reducción de la vulnerabilidad sino además el desarrollo del sector construcción".*[157]

En el marco a lo expuesto, y bajo la examinación de la fórmula legal propuesta, esta Comisión concuerda con el pedido de delegación de facultades legislativas en la materia objeto de análisis.

Esquema presentado por el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, en mesas técnicas

[157] Exposición de motivos, comprendido en las páginas 50 y 51 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

Anexo N° 2
Aspectos a puntualizar en las Mesas Técnicas

Proyecto de Decreto Legislativo que establece disposiciones para promover el desarrollo de la construcción, a través de tecnologías constructivas y no convencionales de tecnologías constructivas no convencionales

Submateria	Problemática que se pretende solucionar	Necesidad de la intervención normativa (deficiencia o vacío normativo)	Impacto cualitativo y/o cuantitativo que tendrá la regulación en el sector	¿Involucra financiamiento y/o habilitación presupuestaria?
3.1.38 Fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión privada, público-privada y gestión de servicios públicos	La autorización de uso en el país de las tecnologías y sistemas constructivos no convencionales requiere de un procedimiento administrativo predecible y ágil.	Se requiere actualizar la regulación nacional dirigida a habilitar el uso de tecnologías constructivas no convencionales y materiales de bajo impacto ambiental. La normativa actual data del año 1971.	Promover la innovación e inversión privada en el sector construcción que asegure la ejecución de edificaciones a un menor costo y en menores tiempos, sin disminuir la seguridad y funcionabilidad de las mismas. Fomentar la implementación de servicios de calidad en la construcción.	No

Conclusión

En este aspecto, la propuesta se encuentra justificada para la delegación de facultades con el siguiente **texto sustitutorio**:

"Modificar el artículo 8 de la Ley 30156, Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, artículo que desarrolla las funciones generales del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a fin de otorgar a este sector la función de establecer disposiciones para promover el desarrollo de la construcción, a través de tecnologías constructivas no convencionales".

3.1.39 Fortalecer y modernizar la gestión del Instituto del Mar del Perú – IMARPE.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo busca dotar al IMARPE de una nueva Ley que promueva una verdadera modernización de la Entidad.

Señalan que el marco legal Institucional vigente no cuenta con un análisis mínimo que justifique una reorganización institucional, tampoco cuenta con la opinión, ni de especialistas en gestión de instituciones públicas científicas, ni con el parecer del personal científico del IMARPE.

No reconoce la función rectora del IMARPE en el país, en el campo de las ciencias acuáticas y pesqueras, como sí lo hacen las leyes de otros institutos públicos de investigación del país.

No vislumbra, ni enfatiza funciones futuras que promuevan el estudio de grandes problemas de la agenda internacional en materia de las ciencias acuáticas y del mar (biodiversidad y genómica, biotecnología, enfoque ecosistémico, variabilidad ambiental y cambio climático, contaminación de los ambientes acuáticos, pesca ilegal, pesca fantasma, etc.). lo cual redunda en el beneficio a la comunidad pesquera nacional y a la sociedad en su conjunto.

No promueve y menos reconoce el rol importante que tiene el IMARPE actualmente en la formación de profesionales de las ciencias del mar, a través del desarrollo de tesis de pre y pos grado, teniendo en cuenta que es la única institución del país que en esos campos desarrolla investigaciones permanentemente desde hace 6 décadas, y puede convertirse en una entidad promotora complementaria a las instituciones educativas en la formación de recursos humanos de calidad y con altos niveles de competitividad.

Reduce el ámbito geográfico del Instituto solo al mar peruano, soslayando la importancia de los intereses del Perú en la altamar y en la Antártida, ámbitos en los que actualmente el IMARPE realiza investigaciones científicas, y que deben explícitamente ser promovidas.

Conforma el Consejo Directivo del instituto, con entidades cuyo ámbito funcional no incluye las ciencias del mar (el mayor porcentaje de la actividad del instituto), así como con personas independientes que no ejercen representatividad de organizaciones públicas o privadas; por lo tanto, sin la obligación de la rendición de cuentas, que van a recibir información muy sensible para la toma de decisiones por parte del PRODUCE y otras entidades del Estado.

El Poder Ejecutivo también menciona que dicho marco legal vigente, no advierte la necesidad de implementar mecanismos para la captación de recursos financieros complementarios mediante la oferta de servicios especializados, como sí lo hacen las leyes de otros institutos públicos de investigación; no promueve mecanismos para una mejora remunerativa ante el trabajo especializado y de riesgo del personal científico y técnico del IMARPE, como sí lo hace la reciente ley de un instituto público de investigación.

Incluye funciones referidas a investigaciones tecnológicas sobre preservación a bordo y del desembarque, que en los años 80 ya fueron transferidas al ITP, y por tanto ya no realiza el IMARPE.

No fortalece a la institución en su estructura organizacional, para un mejor cumplimiento de sus fines y misión institucional, ya que desaparece la instancia necesaria de coordinación multidisciplinaria de la investigación como es la Dirección Científica, y concentra toda la toma de decisiones en una sola instancia: la Presidencia Ejecutiva. Esta situación ya se ha experimentado temporalmente en el año 2020, demostrando que complica la gestión óptima de la institución. Esto va contra una tendencia en la evolución institucional, desde su creación, hacia la diversificación de la toma de decisiones; que ha demostrado en la práctica que la gestión óptima de la generación de conocimiento científico en IMARPE se basa en tres pilares: una de dirección general y representación, otra de coordinación científica multidisciplinaria para la gestión de la generación del conocimiento y otra de coordinación de la gestión administrativa.

Asimismo, en su fundamento técnico señalan lo siguiente: Los recursos que habitan los ecosistemas acuáticos tienen límites para su explotación ya que, si bien son renovables, también son potencialmente agotables. Las malas o débiles prácticas de gestión pueden conllevar a incurrir en sobrepesca y poner en riesgo la sobrevivencia del recurso, así como su disponibilidad para la pesca, poniendo en peligro, a su vez, la actividad económica en el sector pesquero. Por este motivo la FAO, organismo de Naciones Unidas aprobó el Código de Conducta para la Pesca Responsable (CPR-FAO, 1995), recomendando que los Estados deberían establecer medidas de gestión u ordenamiento de sus pesquerías en base a la información científica más fidedigna disponible, obtenida a partir de investigaciones serias y responsables que tengan como objetivo evaluar el estado de los recursos pesqueros y el análisis de los posibles efectos

que dichas medidas puedan tener para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos.

Han mencionado en la propuesta que, en la actualidad el Perú, como el resto del mundo, se enfrenta a nuevos desafíos que afectan al estado de los ecosistemas marinos y continentales: los recursos naturales varían en su abundancia y están amenazados por el cambio climático, la destrucción de hábitats, la contaminación, las actividades pesqueras no sostenibles y destructivas, la pesca ilegal, la acidificación y el calentamiento de los océanos, los cambios de las corrientes, la disminución de los niveles de oxígeno en el mar, entre otros y por consiguiente a la sociedad desde el punto de vista de sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.

En tal sentido, señalan que el rol que debe cumplir el Instituto del Mar del Perú – IMARPE en el futuro, en relación con el avance de la ciencia y tecnología, las nuevas demandas de investigación, la temática que recogen las agendas nacionales e internacionales respecto a los recursos pesqueros y su sostenibilidad, resulta necesario y oportuno dotar a la entidad de un nuevo dispositivo que fortalezca su funcionamiento, considerando las nuevas funciones que viene ejecutando y prevé ejecutar la institución.[158]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República), por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Mediante el Decreto Legislativo 095, se dio la Ley del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, asimismo, debido a la necesidad de contar con una normativa actualizada, el

[158] Se recoge el sustento puntualizado en la exposición de motivos, comprendido en las páginas 51 y 52 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

Decreto de Urgencia 015-2020 modificó una serie de articulados del precitado Decreto Legislativo.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, mediante la presente propuesta de delegación de facultades, señala que aún persisten deficiencias entorno a la normativa que regula al IMARPE.

En la exposición de motivos también se señala que la legislación vigente no fortalece a la institución en su estructura organizacional, está desfasado, al incluir funciones que ya no son de su competencia, señalando lo siguiente:

> *"Incluye funciones referidas a investigaciones tecnológicas sobre preservación a bordo y del desembarque, que en los años 80 ya fueron transferidas al ITP, y por tanto ya no realiza el IMARPE".* [159]

Acotado a lo antes mencionado, el Poder Ejecutivo solicita facultades para emitir:

> *"[...] una nueva Ley que promueva una verdadera modernización de la Entidad:*
>
> *El marco legal Institucional vigente no cuenta con un análisis mínimo que justifique una reorganización institucional, tampoco cuenta con la opinión, ni de especialistas en gestión de instituciones públicas científicas, ni con el parecer del personal científico del IMARPE [...]"*

Por tal motivo, el Poder Ejecutivo solicita facultades para derogar el Decreto Legislativo 95 y sus modificatorias; y emitir una nueva normativa que fortalezca la organización del IMARPE, sus capacidades institucionales, operativas, financieras mediante la oferta de servicios especializados, así como permitir un rol activo en programas de investigación científica en el Perú y dentro del ámbito geográfico comprendidos en altamar y la Antártida; y fortalecer la formación de profesionales en estas ciencias, promoviendo la participación con entidades educativas públicas y privadas.

En cuanto a la pertinencia de la propuesta, si bien existe la necesidad de regular y fortalecer al Instituto del Mar del Perú – IMARPE, se ha podido identificar que

[159] Exposición de motivos, páginas 51 y 56 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

actualmente existe una propuesta legislativa en el Congreso de la República que guarda similitud con el objeto de la propuesta del Poder Ejecutivo; la cual recae en el proyecto de ley 1129/2021-CR[160] que se encuentra en trámite en la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, dicho proyecto busca promover el fortalecimiento estratégico y sostenible del Instituto del Mar del Perú.

Asimismo, también se ha podido observar que esta submateria respecto a IMARPE no está relacionada directamente con las materias que han sido planteadas como principal objetivo para abordar en la delegación de facultades presentadas por el Poder Ejecutivo, las cuales son: reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional; por tal motivo, y en base a que el fortalecimiento del IMARPE implica grandes cambios en su estructura organizacional, esta Comisión considera que dicha medida amerita un amplio debate en el Pleno del Congreso de la República.

En tal sentido, por los motivos expuestos, esta Comisión considera que el proyecto de ley 1129/2021-CR tramitado ante el Congreso, debe continuar con el trámite respectivo a fin de debatirse ampliamente en una sesión plenaria; asimismo, se recomienda al Poder Ejecutivo canalizar su solicitud mediante proyecto de ley, dejando la posibilidad de ser acumulado a los de similar materia.

Esquema presentado por el Ministerio de la Producción, en mesas técnicas

[160] Proyecto de ley 1129/2021-CR, que promueve el fortalecimiento estratégico y sostenible del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, de autoría del congresista José Ernesto Cueto Aservi: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTEyOTE=/pdf

ANEXO 2:

Aspectos a puntualizar en las Mesas Técnicas

Submateria	Problemática que se pretende solucionar	Necesidad de la intervención normativa (deficiencia o vacío normativo)	Impacto cualitativo y/o cuantitativo que tendrá la regulación en el sector	¿Involucra financiamiento y/o habilitación presupuestaria?
3.1.39	Se requiere adecuar las competencias funcionales y la estructura orgánica en relación con el avance de la ciencia y tecnología, las nuevas demandas de investigación, la temática que recogen las agendas nacionales e internacionales respecto a los recursos pesqueros y su sostenibilidad; reforzando la investigación especializada y en apoyo a la seguridad alimentaria.	Asignar al Instituto del Mar del Perú – IMARPE, responsabilidades funcionales que permitan, como entidad especializada en ciencia, tecnología e innovación en pesquerías y acuicultura, realizar estudios relacionados con: Sustento de los intereses nacionales y su sostenibilidad en el dominio marítimo; así como, en los ámbitos de: - Antártida; - Alta mar; - Fondos marinos. Investigaciones de alta gama en: - Diversidad genética; - Basura marina; - Pesca ilegal, fantasma; - Biotecnología acuática; - Enfoque ecosistémico. Precisar competencias para: - Órgano rector de las investigaciones pesqueras y acuícolas; - Transferencia de tecnología para formación de profesionales.	El fortalecimiento institucional es de importancia estratégica, ya que el aporte de las bases científicas contribuye al ingreso de divisas, la creación de fuentes de trabajo y el logro de la seguridad alimentaria. La iniciativa legislativa está orientada a permitir al IMARPE alcanzar el más alto desarrollo científico y tecnológico, en procura de la explotación racional de los recursos pesqueros y producción acuícola del país.	No

Conclusión

Esta materia solicitada se encuentra canalizada a través del **Proyecto de Ley 1129/2021-CR**, ante el Congreso de la República, el cual se encuentra en estudio en la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, por lo que este colegiado concluye con dar prioridad al trámite legislativo del proyecto de ley mencionado, a fin de garantizar un amplio debate en el seno del Parlamento con la participación de todos los señores congresistas y los sectores involucrados; sumado a ello, el Poder Ejecutivo, en concordancia con el artículo 107 de la Constitución Política, puede presentar una propuesta legislativa adicional al respecto.

En tal sentido, esta Comisión considera no otorgar facultades al Poder Ejecutivo en este extremo.

3.1.40 Modificar la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), a fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder ejecutivo precisa que, según el Ministerio de Producción, el Perú captura, en promedio, más de 5.5 millones de toneladas de recursos hidrobiológicos al año, lo que representa el 7.1 % de la pesca mundial, esta situación nos coloca como la tercera potencia pesquera, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por otro lado, se señala que la actividad acuícola proyecta convertirse en uno de los motores de crecimiento del país en el marco del Plan Nacional de Competitividad y alcanzar no menos del 15% del PBI pesquero en los próximos cinco años.

De acuerdo con cifras del INEI, en el año 2023, la mayor caída en el índice de producción nacional lo registró el sector pesca, el cual presentó una caída del 19.75%, siendo consecuencia de las condiciones climáticas adversas por la ocurrencia del Fenómeno El Niño costero presentadas desde diciembre de 2022.

Así, en dicho año, la cosecha de recursos hidrobiológicos de la acuicultura presentó una disminución, en términos de volumen, del 32.8% (46,173 TM) respecto al año 2022. Este desempeño negativo obedece entre otros factores a una competitividad limitada en el sector, en un escenario climatológico adverso.

La modificación de Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), permitirá la implementación del análisis de riesgo y optimizar la gestión en los procesos relacionados al otorgamiento de certificaciones y/o habilitaciones, así como la priorización en la fiscalización estableciéndose intervenciones según niveles de riesgo (canal verde, amarillo y rojo) lo cual contribuirá a generar confiabilidad, transparencia y competitividad, en el marco del fortalecimiento, optimización de recursos y mejora continua de los procesos asociados.

Señalan también que actualmente, los pequeños productores acuícolas tienen limitado acceso a certificaciones/habilitaciones sanitarias que garanticen la sanidad e inocuidad de los recursos o productos hidrobiológicos, por lo que es necesario establecer la implementación progresiva de los Principios Generales de Higiene y Buenas Prácticas de Manufactura, lo cual contribuirá a su inclusión en el mercado productivo, cumpliendo

las exigencias sanitarias, ello significa la optimización y simplificación de los procedimientos administrativos.

Asimismo, la actual estructura organizacional y funcional de SANIPES, pese a ser una organización altamente especializada, tiene un diseño que dificulta cumplir la misión institucional al no estar alineada a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 de la PCM. Es preciso señalar que la estructura de la entidad debe estar orientada a garantizar la sanidad e inocuidad, así como la promoción de la competitividad en el mercado nacional e internacional y seguridad jurídica.

En la misma línea, se tiene la necesidad de visibilizar a la autoridad sanitaria nacional como una organización con competencia técnica, confiable y eficiente, que a su vez sea referente a nivel nacional y para las autoridades sanitarias de los países de destino.

En razón de ello es requerido alinear al SANIPES con la política de modernización vigente, con un enfoque orientado a la creación de valor público en beneficio del ciudadano, así como los destinatarios de los bienes y servicios otorgados por la institución, generando un impacto positivo en toda la cadena productiva pesquera y acuícola, considerando procesos adaptativos rápidos al entorno en un contexto en el que dicha cadena se encuentra en permanente evolución y cambio por factores económicos, sociales, así como ambientales.

Por otro lado, existe una brecha de productores pesqueros y acuícolas, principalmente pequeños, que no cumplen o no cuentan con los medios suficientes para acceder al mercado de manera competitiva. En esta línea, también es necesario fortalecer dentro de las competencias de la entidad, a la acuicultura como actividad productiva con el mismo nivel y alcances que la actividad pesquera alineándose a la política general de acuicultura, permitiendo así no solo visibilizar la actividad acuícola sino implementando acciones que impulsen la competitividad en esta cadena productiva.

En adición a lo señalado, es necesario advertir que en la normatividad vigente que regula la creación y funcionamiento del SANIPES, así como los servicios de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola, no se incluye como objeto de ley, la garantía de la sanidad hidrobiológica. Adicionalmente, las funciones actuales están restringidas a los

piensos siendo necesario incorporar los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura.[161]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República), por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De la fórmula legal así como de la exposición de motivos de la presente propuesta, se avizora que el Poder Ejecutivo solicita facultades para modificar la Ley 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), respecto a:

- La implementación para la gestión de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) asociados al consumo de productos hidrobiológicos.
- Permitir que los productores pesqueros y acuícolas de categoría AREL, accedan a títulos habilitantes.
- Vincular el Análisis de Riesgo, a la emisión de títulos habilitantes y procesos de

Respecto al primer pedido de modificación, la pertinencia de establecer un sistema de control para la gestión de Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA) asociadas al consumo de productos hidrobiológicos va en función a que dichos productos pueden ser vectores de enfermedades si no se manejan adecuadamente, un sistema de prevención, vigilancia y control ayuda a reducir la incidencia de ETA's, protegiendo la salud de los consumidores.

La OMS considera que la vigilancia y el control de las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son elementos cruciales en el plan de acción del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). En Perú, entre 2014 y 2018, se reportaron 234 brotes de ETA a nivel nacional mediante el sistema SIEpi-BROTES del Centro Nacional de

[161] Se recoge el sustento puntualizado en la exposición de motivos, comprendido en las páginas 53, 54 y 55 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC MINSA), siendo 47 brotes anuales, 6,098 personas afectadas, 1,311 hospitalizados y 29 defunciones[162], asimismo, SANIPES atendió 126 alertas sanitarias en los últimos 4 años, el 88 % corresponden a Programas Sociales.

Tabla 1.Número de brotes, afectados, hospitalizados y defunciones de ETA, Perú 2019*

Departamento	N° Brotes	% Brotes	N° Enfermos	% Enfermos	N° Hospitalizados	% Hospitalizados	N° Defunciones	Tasa Letalidad
Lambayeque	4	18.2	102	14.0	85	39.7	1	1.0
Tumbes	3	13.6	35	4.8	2	0.9	0	0.0
Apurimac	2	9.1	50	6.9	31	14.5	0	0.0
Cajamarca	2	9.1	27	3.7	19	8.9	0	0.0
Huánuco	2	9.1	19	2.6	7	3.3	1	5.3
Lima	2	9.1	98	13.4	1	0.5	0	0.0
Amazonas	1	4.5	53	7.3	53	24.8	0	0.0
Callao	1	4.5	8	1.1	0	0.0	0	0.0
Cusco	1	4.5	269	36.9	12	5.6	0	0.0
Ica	1	4.5	10	1.4	0	0.0	0	0.0
Junín	1	4.5	4	0.5	3	1.4	1	25.0
Madre De Dios	1	4.5	43	5.9	1	0.5	0	0.0
Moquegua	1	4.5	11	1.5	0	0.0	0	0.0
Total	**22**	**100.0**	**729**	**100.0**	**214**	**100.0**	**3**	**0.4**

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. * Hasta la SE 15 - 2019

El manejo de vigilancia, control y prevención de las ETA's asociadas a productos hidrobiológicos no cuenta con un sistema de comunicación oportuna hacia SANIPES, que permita gestionar la rastreabilidad y acciones inmediatas de los actores relacionados en salvaguarda de la salud pública.[163]

Asimismo, es necesario pronunciarse al respecto, debido a que la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos puede dañar gravemente la reputación de la industria acuícola, afectando tanto el mercado local como las exportaciones, por ende

[162] Información recogida del Boletín Epidemiológico del Perú 2019, del Ministerio de Salud: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2019/15.pdf

[163] Información recogida en el debate realizado en las Mesas Técnicas de fecha 22 de mayo del 2024

se debe, se debe detectar tempranamente la contaminación de dichos productos, permitiendo tomar acciones rápidas para prevenir brotes de enfermedades.

Del segundo pedido de modificación, respecto a la pertinencia de que los productores pesqueros y acuícolas de categoría AREL, accedan a títulos habilitantes, se puede señalar que en el Perú, los productores pesqueros y acuícolas han presentado dificultades para consolidarse y crecer de manera sostenida[164], y además han mostrado una baja diversificación y sofisticación de productos. Este pedido de modificación está muy ligado al primer pedido, debido a que el cultivo de especies hidrobiológicas necesitan principalmente de buenos servicios de sanidad, medio ambiente, certificaciones, capacitaciones y asistencia técnica, enfrentándonos como país a un gran déficit respecto a lo antes mencionado, ya que no se encuentran desarrolladas estas necesidades asociadas a dichos cultivos, tanto es así que existe una necesidad de brindar a los productores principalmente los de categoría AREL, a poder acceder a títulos habilitantes, esto contribuirá a garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos o productos hidrobiológicos, promoviendo la competitividad de los actores a nivel nacional e internacional.

Nro. de Centros Acuícolas	Con habilitación sanitaria	%
3230	800	24.77%

Fuente: PESEM 2024-2030 Produce

Cuadro extraído de la página 54 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

Del tercer pedido de modificación, respecto a vincular el título habilitante conjuntamente con el Análisis de Riesgo, esto se condice con los puntos anteriores toda vez que al solicitar el Análisis de Riesgo para los títulos habilitantes o procesos de fiscalización, promueve a que los productores pesqueros y acuícolas lo realicen, generando un gran impacto positivo en la cadena productiva pesquera y acuícola.

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo señala lo siguiente:

[164] Según lo señalado en el Plan Esratégico SectorialMultianual PESEM (2024-2030): https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6124481/5412736-pesem-al-2030-vf.pdf?v=1711712532

"[…] existe una brecha de productores pesqueros y acuícolas, principalmente pequeños, que no cumplen o no cuentan con los medios suficientes para acceder al mercado de manera competitiva. En esta línea, también es necesario fortalecer dentro de las competencias de la entidad, a la acuicultura como actividad productiva con el mismo nivel y alcances que la actividad pesquera alineándose a la política general de acuicultura […]".[165]

Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que las facultades solicitadas son viables, toda vez que es una necesidad latente que enfrenta el país.

ANEXO 2:

Aspectos a puntualizar en las Mesas Técnicas

Submateria	Problemática que se pretende solucionar	Necesidad de la intervención normativa (deficiencia o vacío normativo)	Impacto cualitativo y/o cuantitativo que tendrá la regulación en el sector	¿Involucra financiamiento y/o habilitación presupuestaria?
3.1.40.	Respecto a la inocuidad alimentaria, según la Organización Panamericana de la Salud – OPS[1], se estima que en la región de las Américas cada año 77 millones de personas padecen enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) y más de 9,000 mueren. Del total de enfermos, 31 millones son niños menores de 5 años de los cuales mueren más de 2000. También sostiene que las ETA son prevenibles y es posible contribuir a evitarlas, principalmente con acciones del Estado en todos sus niveles. Es importante señalar que SANIPES atendió en los últimos cuatro años un total de 126 notificaciones sanitarias a nivel nacional e internacional, que permitieron investigar la posible presencia de contaminantes que pudieran ocasionar una ETA y/o intoxicación alimentaria. El 86 % de estas alertas corresponden a Programas Sociales, como es el caso Qali Warma. Actualmente, el manejo de vigilancia, control y prevención de las ETAS referidos al consumo de productos hidrobiológicos, no cuenta con un sistema de comunicación oportuna hacia SANIPES, que permita gestionar la rastreabilidad y acciones inmediatas de los actores relacionados en salvaguarda de la salud pública. Respecto a los productos veterinarios y la alimentación de los recursos hidrobiológicos de uso en la acuicultura, SANIPES tiene contemplado en su objeto solamente a los piensos (alimentos procesados), sin embargo, en la actualidad también se utilizan organismos vivos (micro crustáceos, algas, entre otros) que se requiere tengan un sistema de vigilancia y control que garanticen su sanidad. Así mismo, la gestión de la sanidad e inocuidad no incorpora en la actualidad el enfoque de análisis de riesgo en los procesos de emisión de	**Necesidad normativa para el fortalecimiento en materia de prevención, vigilancia y control de ETA asociadas al consumo de productos hidrobiológicos.** Actualmente la Ley N° 30063: • No ha previsto la implementación de un sistema para la prevención, vigilancia y control de ETAS asociadas al consumo de productos hidrobiológicos, así como el uso de productos veterinarios. **Necesidad normativa para la aplicación del análisis de riesgo** • Establece que SANIPES autoriza o deniega el ingreso al territorio nacional de recursos y productos materia de sus competencias previo análisis de riesgo (AR), sin embargo, no establece que el AR debe aplicarse también para la emisión de títulos habilitantes (certificaciones, habilitaciones) y los procesos de fiscalización. • Por otro lado, no se cuenta con normas ni instrumental regulatorio que determinen la gestión del riesgo en puestos fronterizos. Es preciso señalar que el AR es una metodología sistemática, estructurada y reconocida internacionalmente que genera información relevante para la toma de decisiones sobre la generación de normativas o adopción de medidas en respuesta a un riesgo determinado en inocuidad y sanidad. **Necesidad normativa en materia de simplificación administrativa**	La actualización de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) permitirá: Impactos cualitativos • Optimizar y simplificar los procedimientos administrativos en la cadena productiva de los recursos y productos hidrobiológicos, y fortalecer la vigilancia y fiscalización con un enfoque de análisis de riesgo. • Mejorar la gestión de los servicios de SANIPES a fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura; mejorando el estatus sanitario del país y promoviendo la competitividad de los actores involucrados en la cadena alimentaria a nivel nacional e internacional. • La realización de cambios sistémicos orientados a mejorar la salud proporcionará más alimentos inocuos, un elemento esencial para permitir el desarrollo del ser humano a largo plazo y un requisito previo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). • Implementar el enfoque de análisis de riesgo y optimizar la gestión en los procesos relacionados al otorgamiento de certificaciones y/o habilitaciones, así como la priorización en la fiscalización estableciéndose intervenciones según niveles de riesgo (canal verde, amarillo y rojo) lo cual contribuirá a generar confiabilidad, transparencia y competitividad, en el marco del fortalecimiento, optimización de recursos y mejora continua de los procesos asociados. Impactos cuantitativos: La modificación de la norma, impactará de manera positiva en los siguientes beneficiarios:	No

[1]Extraído de Organización Panamericana de la Salud: https://www.paho.org/es/noticias/7-6-2022-panafosa-alerta-que-enfermedades-transmitidas-por-alimentos-pueden-ser#:~:text=Se%20estima%20que%20en%20la,es%20posible%20contribuir%20a%20evitarlas

[165] Obtenido de la Exposición de Motivos del proyecto de ley 7752/2023-CR, página 55

Submateria	Problemática que se pretende solucionar	Necesidad de la intervención normativa (deficiencia o vacío normativo)	Impacto cualitativo y/o cuantitativo que tendrá la regulación en el sector	¿Involucra financiamiento y/o habilitación presupuestaria?
	certificaciones ni de fiscalización, lo cual genera mayores tiempos y costos de tramitación de estos por parte de los administrados representadas principalmente por 22,670 infraestructuras habilitadas. Es importante señalar que en la actualidad SANIPES no cuenta con presencia permanente en los puestos de control fronterizo, atendiéndose solo a pedido de parte. Adicionalmente, de los 3,155 centros acuícolas que corresponden a las categorías AMYGE Y AMYPE solamente 780 (25%) cuentan con habilitación sanitaria limitando su acceso al mercado de manera competitiva, así como con un riesgo incrementado hacia el consumidor. Por otro lado, más de 9,000 productores acuícolas de la categoría de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), establecidos principalmente en las regiones de la Amazonía peruana (Amazonas 17.5%, Huánuco 14.1%, Loreto 11.6%) no cuentan con un título habilitante de carácter sanitario al que puedan acceder por lo que tienen acceso al mercado de manera competitiva. Es importante señalar que de los 13,100 centros acuícolas registradas en el catastro acuícola nacional el 76% corresponde a la categoría AREL.	• Se requiere que, en todos los procedimientos administrativos relacionados con inocuidad y sanidad, se elimine toda complejidad o formalidad innecesaria en el marco de la normativa de simplificación administrativa y modernización del Estado. **Necesidad de promoción de los actores pesqueros y acuícolas, priorizando la categoría AREL** • Los pequeños productores acuícolas, conforme a la normativa vigente, no cuentan con habilitación sanitaria limitando su acceso al mercado de manera competitiva, así como con un riesgo incrementado hacia el consumidor.	• 120 mil empleos estimados en acuicultura (44,400 puestos directos y 75,600 puestos indirectos) en 13,100 unidades productivas acuícolas (Produce, 2024) • 400 mil empleos estimados en pesca (más de 90 mil puestos directos y 300 mil puestos indirectos) en toda la cadena productiva (Produce 2022) • A nivel de fiscalizaciones, se facilitará que las más de 22,000 acciones de inspección, que en promedio se realizan anualmente, reduzcan en más de 30% el tiempo total, generando también reducción de costos administrativos tanto para la industria como para el Estado. • Perú se posicionará y alineará a la metodología de las autoridades sanitarias como Unión Europea y Estados Unidos, lo cual a su vez generará una mayor apertura comercial a las más de 5.5 millones de TM de recursos hidrobiológicos que el país captura (2023). • Reducción de hasta un 30% del tiempo de tramitación de las más 30 mil certificaciones y habilitaciones, que en promedio se emiten anualmente. • Optimización y/o eliminación de algunos procedimientos, facilitando a su vez los procesos de comercio exterior, considerando que más de 21 mil certificados están orientados a la exportación, más de 4 mil a la importación de productos hidrobiológicos y más de 22 mil habilitaciones. • Esto beneficiará de manera directa a más de 9,000 acuicultores de la categoría AREL, principalmente de las regiones de la Amazonía (Amazonas 17.5%, Huánuco 14.1%, Loreto 11.6%) Contribuir a garantizar la inocuidad de productos hidrobiológicos en el país a los más de 34 millones de consumidores potenciales, relevando la población usuaria de programas sociales, que solo en el caso de Qali Warma alcanza a más de 4 millones de estudiantes y más de 1 millón de usuarios de comedores populares y ollas comunes a nivel nacional.	

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado para la delegación de facultades. Por lo que se recomienda otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en los mismos términos solicitado por el Poder Ejecutivo.

3.1.41 Modificar los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 13 e incorporar la Quinta Disposición Complementaria Final en el Decreto Legislativo Nº 1199, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales, a fin de establecer las condiciones habilitantes para el impulso de la inversión privada y pública en infraestructura productiva industrial.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo en su exposición de motivos señala que, se requiere la modificación del Decreto Legislativo 1199, considerando que, a la fecha, se cuenta con el primer parque industrial de relevancia nacional (Parque Industrial Ancón) en proceso de implementación a través del mecanismo de proyectos en activos, el cual forma parte de la cartera de PROINVERSION; cabe precisar que, también se cuenta con tres (3) iniciativas de parques industriales privados en proceso de incorporación al Sistema Nacional de Parques Industriales (SNPI); requiriéndose además incorporar otras tipologías de espacios donde se desarrollan actividades industriales, entre ellas zonas industriales, áreas industriales, polígonos industriales, centros industriales, entre otros, que complementen y consoliden el SNPI.

La modificación normativa propuesta está centrada en la actualización de los componentes del SNPI, así como definir y actualizar las condiciones para la ejecución de parques industriales, además, el desarrollo de los beneficios que el SNPI establece para las iniciativas de parques industriales en el país, ello con el objetivo de facilitar la inversión tanto pública como privada en este tipo de infraestructura productiva.

Señalan que la propuesta modificatoria, se encuentra alineada a la realidad del sector industrial del país y permitirá incorporar además de los parques industriales, las zonas industriales, centros de desarrollo Industrial, polígonos industriales, complejos industriales, conglomerados, áreas, espacios industriales y clústeres; viabilizará la gestión e implementación de proyectos de desarrollo de infraestructura industrial por los diferentes niveles de gobierno que cuenten con las capacidades y recursos necesarios para su ejecución (generación de las condiciones como la accesibilidad, el saneamiento de los predios, dotación de los servicios básicos a través de los entes competentes y habilitación de lotes industriales).

Asimismo, señalan también que incluirá una serie de condiciones habilitantes que fomentarán la inversión privada en estos espacios habilitados para el desarrollo industrial, en los cuales puedan coexistir la micro, pequeña, mediana y gran industria, formando una sinergia productiva.

Esta propuesta presenta un modelo de administración centralizada que señalan que garantizará el funcionamiento de los tipos de espacios con actividades industriales. Dicho modelo priorizará la gestión privada de dichas áreas componentes del SNPI.

Así también, el Poder Ejecutivo precisa que actualmente la participación de la industria manufacturera en el Producto Bruto Interno (PBI) representa el 12%, cifra poco alentadora con el proceso de industrialización del país, la propuesta busca revertir la tendencia decreciente experimentada como país en los últimos 10 años, y que el 94.2% del total de las empresas manufactureras del país son microempresas y el 4.7% representan las pequeñas empresas.[166]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República), por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En cuanto a la pertinencia de la propuesta, si bien es cierto que existe la necesidad de viabilizar e implementar los espacios industriales, modificando el Decreto Legislativo 1199, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales; se ha podido observar que actualmente existe una propuesta legislativa en el Congreso de la República recaída en el **proyecto de ley 4474/2022-CR**[167], proyecto que busca optimizar el Sistema Nacional de Parque Industriales con participación de Gobiernos Regionales y Municipales, proponiendo modificar una serie de artículos del Decreto Legislativo 1199, dicho proyecto de ley se encuentra decretado a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas; por lo que habiendo un proyecto de ley en trámite dentro del Congreso de la República con similar materia y objetivo,

[166] Se recoge el sustento puntualizado en la exposición de motivos, comprendido en las páginas 55 y 56 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

[167] Proyecto de ley 4474/2022-CR: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/ODM3OTM=/pdf

esta Comisión considera que una medida de esta naturaleza requiere de un amplio debate en el seno del Pleno del Congreso de la República.

Asimismo, se advierte también que la propuesta del Poder Ejecutivo tiene por objeto incorporar a gran escala los parques industriales, las zonas industriales, centros de desarrollo industrial, polígonos industriales, complejos industriales, conglomerados, áreas, espacios industriales para viabilizar la gestión e implementación de proyectos de desarrollo de infraestructura industria por los diferentes niveles de gobierno que cuenten con las capacitaciones y recursos necesarios para su ejecución[168]; aunado a que como parte del debate en las Mesas Técnicas realizadas para este proyecto de ley, se pudo advertir que, se estima dotar de ciertos beneficios a los parques que no se encuentren dentro del sistema, tales como exoneraciones respecto a impuesto a la renta, a la exportación de bienes producidos en las instalaciones de los parques industriales, tasas arancelarias a las importaciones y maquinaria, entre otros beneficios tributarios. En virtud a ello, y sin desconocer que existe la necesidad latente de fortalecer el Sistema Nacional de parques Industriales, esta Comisión considera que la submateria solicitada merece ser debatida de manera amplia, debido al gran impacto que generará la propuesta en el país.

Por tales razones, este colegiado considera que el proyecto de ley 4474/22-CR tramitado ante el Congreso, debe continuar con el trámite respectivo a fin de debatirse ampliamente en una sesión plenaria; asimismo, se recomienda al Poder Ejecutivo canalizar su solicitud mediante proyecto de ley ordinario, dejando la posibilidad de ser acumulado a los de similar materia.

[168] Dato proporcionado en la exposición de motivos del proyecto de ley 775272023-CR

ANEXO 2:

Aspectos a puntualizar en las Mesas Técnicas

Submateria	Problemática que se pretende solucionar	Necesidad de la intervención normativa (deficiencia o vacío normativo)	Impacto cualitativo y/o cuantitativo que tendrá la regulación en el sector	¿Involucra financiamiento y/o habilitación presupuestaria?
3.1.41.	Actualmente, no existe ningún parque industrial que funcione en el marco del Sistema Nacional de Parques Industriales. Solo funcionan proyectos inmobiliarios industriales que corresponden al sector privado; y, espacios industriales que constituyen zonas, áreas industriales, polígonos, sectores, entre otros. Estos últimos no necesariamente son parques industriales; sin embargo, se requiere que sean incorporados al sistema, a fin de incentivar su desarrollo. En tal sentido, dado que los resultados de aplicar la normativa vigente sobre parques industriales no han sido los esperados; resulta necesario crear nuevas estrategias a través de la modificación del Decreto Legislativo N° 1199.	Se requiere la modificación del DL 1199, considerando que, a la fecha, se cuenta con el primer parque industrial de relevancia nacional, pero aún no se ha construido, (Parque Industrial Ancón) y se encuentra en proceso de implementación a través del mecanismo de proyectos en activos. Asimismo, se cuenta con tres (03) iniciativas de parques industriales privados en proceso de incorporación al Sistema Nacional de Parques Industriales (SNPI); requiriéndose además, incorporar otras tipologías de espacios donde se desarrollan actividades industriales, entre ellas zonas industriales, áreas industriales, polígonos industriales, centros industriales, entre otros, que complementen y consoliden el Sistema Nacional de Parques Industriales. Cabe precisar que, actualmente la participación de la industria manufacturera en el PBI representa el 12% cifra poco alentadora con el proceso de industrialización del país, la propuesta busca revertir la tendencia decreciente experimentada como país en los últimos 10 años, y que el 94.2% del total de las empresas manufactureras del país son microempresas y el 4.7% representan las pequeñas empresas.	Los impactos de la modificatoria propuesta, están dados con la finalidad de viabilizar la gestión e implementación de estos proyectos por los diferentes niveles de gobierno que cuenten con las capacidades y recursos necesarios para su ejecución (generación de las condiciones como la accesibilidad, el saneamiento de los predios, dotación de los servicios básicos a través de los entes competentes y habilitación de lotes industriales). Asimismo, incluye una serie de condiciones habilitantes que fomenten la inversión privada: habilitadores de espacios para el desarrollo industrial, adquisición de lotes industriales e instalación de plantas dentro de los espacios debidamente habilitados para el desarrollo de las actividades manufactureras, en los cuales puedan coexistir la micro, pequeña, mediana y gran industria, formando una sinergia productiva.	No

Conclusión

Se ha podido advertir que la materia solicitada se encuentra canalizada mediante el Proyecto de Ley 4474/22-CR presentado ante el Congreso de la República, Proyecto que se encuentra decretado a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, razón por lo que se concluye priorizar a dicho Proyecto de Ley, con el fin de garantizar un amplio debate entre los señores congresistas en el seno del Parlamento, así como también, debatir la propuesta con los sectores involucrados; aunado a ello, el Poder Ejecutivo, en concordancia con el artículo 107 de la Constitución Política, puede presentar una propuesta legislativa adicional respecto a la materia.

3.1.42 Derogar la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, a fin de unificar los requisitos para que las empresas accedan y permanezcan en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo, mediante su exposición de motivos señala que a través del artículo 11 de la Ley N° 30056, (publicada el 03.07.2013), se modificó el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2008-TR, estableciéndose como único parámetro para la caracterización y/o medición de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), el nivel de sus ventas, eliminándose el parámetro de número de trabajadores, que se mantuvo vigente con el Decreto Legislativo N° 1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente.

A la fecha, se encuentra vigente el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que consolida la Ley N° 28015, Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa y sus modificaciones realizadas mediante el Decreto Legislativo N° 1086, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente y la Ley N° 30056 (Ley MYPE).

Asimismo, el Poder Ejecutivo señala que no obstante, el cambio realizado a través de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30056 dispuso que: "Las empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen por los requisitos de acogimiento al régimen de las micro y pequeñas empresas regulados en el Decreto Legislativo 1086".

Si se tiene en consideración que de conformidad con el numeral 2 del artículo 64 del Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Reglamento de la Ley MYPE, se ha previsto que la inscripción en el REMYPE, tiene por finalidad "Autorizar el acogimiento de la micro y pequeña empresa a los beneficios que le correspondan conforme a la Ley y el presente Reglamento (...)", las MYPE al momento de inscribirse al REMYPE,

dependiendo de su fecha de constitución, serán evaluadas bajo un doble estándar: i) Las empresas constituidas hasta el 03.07.2013, su inscripción en el REMYPE dependerá del nivel de ventas y trabajadores; y ii) Las empresas constituidas a partir del 04.07.2013, su inscripción en el REMYPE dependerá exclusivamente del nivel de ventas.

El doble estándar considerado a través de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30056 afecta al segmento empresarial MYPE, que representa a más del 99% de las empresas a nivel nacional. Este tratamiento desigual, no solo es contrario a lo establecido en la nueva caracterización de la MYPE a partir de la Ley N° 30056, sino que además complica innecesariamente la administración del citado registro.

Adicionalmente, señalan que esta situación resulta incompatible con la dinámica de la gestión empresarial. Ello se evidencia a través del siguiente ejemplo: Dos empresas A, constituida el 2010, y B, constituida el 2014, por razones de campaña, temporada, etc., lo cual es muy frecuente, decidieran contratar trabajadores a tiempo parcial, y debido a que el costo laboral es menor en estos casos, decidieran contratar a quince (15) trabajadores, como consecuencia del doble estándar se darían consecuencias diferentes frente a una misma medida o estrategia empresarial. La Empresa A, constituida el 2010, sería excluida del REMYPE, y queda sujeta al cambio de sus beneficios, generándose contingencias no previstas y mayores costos laborales, pues habría superado el número máximo de diez (10) trabajadores, mientras que la empresa B, constituida el 2014, se mantendría en el REMYPE, y seguiría siendo beneficiaria de los derechos de la Ley MYPE, pues, por la fecha de constitución, no le es aplicable el parámetro de trabajadores.

Sostienen que este doble estándar, afecta innecesariamente la productividad y competitividad de las empresas, pues ante el mayor costo laboral por el cambio de régimen, se verían obligadas5 a reducir personal y perdiendo competitividad ante sus pares, exponiéndose con ello a una eventual salida del mercado o incursionar en la informalidad empresarial y/o laboral.

Teniendo en consideración que el segmento empresarial MYPE representaba el año 2012 el 99.3% del tejido empresarial (es decir, 1 338 252 empresas), y como tales constituidas al 2013 es decir sujetas a ser medidas en función del nivel de ventas y el

número de sus trabajadores, mientras que al 2021 las MYPE representaban al 99.4% (es decir, 2 118 293 empresas). Si tomamos como referencia estos datos, sin considerar la mortalidad empresarial, podríamos inferir, para efectos de establecer una aproximación para determinar a las potenciales MYPE que accederían al REMYPE, según su fecha de constitución, podríamos establecer que 780,041 MYPE estarían constituidas después del 2013, es decir sujetas a ser medidas en función a su nivel de ventas, facilitando el acceso al REMYPE de un número mayor de empresas.[169]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República), por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El artículo 11 de la Ley 30056 modificó los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Especial; una de las modificaciones más relevantes es la eliminación del estándar de número de trabajadores, quedando como único estándar el nivel de las ventas anuales.

Sin embargo, en la Ley 30056, también se estableció la Disposición Complementaria Transitoria Tercera, la cual está redactada de la siguiente manera:

> *"[...] Las empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen por los requisitos de acogimiento al régimen de las micro y pequeñas empresas regulados en el Decreto Legislativo 1086 [...].*

Cabe preguntarse entonces si esta Disposición Complementaria Transitoria finalmente ha sido beneficiosa para las Mype, o si muy por el contrario, ha sido desventajosa para

[169] Se recoge el sustento puntualizado en la exposición de motivos, comprendido en las páginas 56, 57 y 58 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

todas aquellas empresas constituidas hasta antes de la promulgación de la norma modificatoria, que vendría a ser el tres de julio del año dos mil trece.

En ese caso, tocaría analizar si se estaría restando importancia a los principios de igualdad toda vez que las leyes no deben crear desigualdades entre distintos grupos de empresas.

Cabe señalar que el doble estandar afecta una parte del sector empresarial, toda vez que existe un trato diferenciado entre las empresas constituidas antes del 13 de julio de 2013 y las constituidas con fecha posterior, pese a que obtienen los mismos ingresos en función a sus ventas, lo cual genera desigualdad de oportunidades al no poder acceder a los beneficios que cuentan las MYPE, por su propia naturaleza de ser micro y pequeña empresa.

Es oportuno señalar también que, respecto al concepto de coexistir bajo un marco de igualdad entre las empresas, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 16 de la Sentencia 04709-2008-AA, señala lo siguiente:

> *"[...] Al respecto, siguiendo el mandato de la Constitución, las empresas deben actuar en igualdad (artículo 2°, inciso 2) dentro de una situación de lirbe competencia 8artículo 61°), por lo que el Estado debe facilitar su ejercicio dentro de los marcos constitucionales y legales. De la competencia en libertad se deriva el mencionado acceso al mercado, y la capacidad del agente económco para actuar dentro de él, reconociéndose la suficiente libertad de autodeterminación para competir conforme a las propias condiciones y variables económicas impuestas por la ley de la oferta y la demanda[...]"*[170]

Respecto a la diferenciación entre agentes, esta no es permitida por nuestra Constitución cuando no se justifique en criterios objetivos y razonables, en virtud a ello, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 7 de la sentencia recaída en el Expediente 0015-2010-PI/TC, precisa que:

---

[170] Tribunal Constitucional, Sentencia 4709-2008-AA, fundamento 16, página 5: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/04709-2008-AA Resolucion.pdf

> *"[...] en más de una ocasión se ha enfatizado, y, en buena medida, el juicio común permite advertir, el derecho a la igualdad no consagra llanamente la prohibición de diferenciación, sino la prohibición de diferenciación constitucionalmente injustificada, es decir, aquélla que no se sostiene en criterios objetivos o razonables. Lo que es tanto como sostener que la diferenciación que la Constitución juzga inválida, es aquélla que no supera el denominado test de igualdad, y que, en razón de ello, debe ser considerada como un trato discriminatorio[...]'.*

Es preciso mencionar que la Ley 30056, que modifica diversos artículos del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Especial, nació a raíz de dos propuestas legislativas recaídas en los proyectos de ley 2316/2012-CR [171]y 02387/2012-PE[172], que tenían como objetivo entre otras cosas, el impulsar medidas para el desarrollo productivo empresarial y el fomento para la inversión priva. Es oportuno acotar que en la génesis de esta norma, no se establecía ninguna disposición respecto a empresas constituidas con antelación; asimismo, en el dictamen aprobado en Comisión con fecha 26 de junio de 2013, tampoco se establece sustento respecto a la incorporación de la Dispocisión Complementaria objeto de análisis, siendo imposible poder saber la finalidad de esta, más que el perjuicio que ha podido causar a las empresas inscritas con anterioridad a su promulgación.

Por las razones esbozadas, esta Comisión considera que las facultades solicitadas son viables.

---

[171] Proyecto de ley 02316/2012-CR:
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/ee63f6be2f45cefb05257b80005cc06c/$FILE/PL02316040613.pdf

[172] Proyecto de ley 02387/2012-PE:
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/14d7509da8c7b74c05257b900075b6eb/$FILE/PL02387200613.pdf

ANEXO 2:

Aspectos a puntualizar en las Mesas Técnicas

Submateria	Problemática que se pretende solucionar	Necesidad de la intervención normativa (deficiencia o vacío normativo)	Impacto cualitativo y/o cuantitativo que tendrá la regulación en el sector	¿Involucra financiamiento y/o habilitación presupuestaria?
3.1.42.	A la fecha existe un doble estándar para la calificación de las MYPE y su inscripción en el REMYPE. a) La inscripción de las empresas constituidas hasta el 03.07.2013 depende de dos características concurrentes: (i) nivel de ventas, y (ii) número de trabajadores (D.L. 1086). b) La inscripción de las empresas constituidas a partir del 04.07.2013 depende exclusivamente del nivel de ventas (Ley N° 30056). Este doble estándar afecta al segmento empresarial MYPE, que representa a más del 99% de las empresas a nivel nacional, por introducir un tratamiento desigual a una misma categoría de empresas.	Resulta necesaria la derogación de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30056, a fin de eliminar el doble estándar para la calificación de las MYPE y su inscripción en el REMYPE, estableciendo como único parámetro para su caracterización el nivel de sus ventas.	a) La derogatoria propuesta beneficiará a las MYPE, toda vez que su calificación e inscripción en el REMYPE dependerá de un único criterio (nivel de ventas), no viéndose expuesta a eventuales incumplimientos por la dinámica y gestión empresarial. b) Simplificará los parámetros de medición de las MYPE y, en consecuencia, agilizará la administración del REMYPE, reduciendo sus costos operativos, dado que se enfocará en una sola característica para evaluarlas.	No

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado para la delegación de facultades. Por tanto, se mantiene en sus términos el texto presentado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley estudiado.

3.1.43 Modificar el artículo 24-A de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, a fin de modificar las etapas del procedimiento de licenciamiento e incorporar la etapa de evaluación de requisitos de admisibilidad, previo a la etapa de evaluación integral; así como modificar el plazo del procedimiento de licenciamiento.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La Ley N° 30512 actualmente establece un proceso de licenciamiento para Instituciones Educativas Superiores (IES) y Entidades Educativas Superiores (EES) que consta de dos

etapas: una evaluación integral y una etapa resolutiva. Este proceso tiene una duración de 120 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud.[173]

Desde 2022, se ha implementado una evaluación conjunta de la admisibilidad de los documentos presentados y su contenido relacionado con el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Esta evaluación conjunta ha resultado en un desgaste del tiempo disponible para el manejo de los expedientes de licenciamiento, lo que ha generado la necesidad de incrementar los recursos humanos y financieros.[174]

Esta evaluación conjunta implica que todos los expedientes se tramiten de acuerdo con el marco normativo vigente, que incluye visitas de verificación presencial. Estas visitas generan un costo adicional en términos de personal contratado y personal CAS. Es importante mencionar que esta actividad se lleva a cabo incluso en aquellos expedientes que presentan omisiones de documentos obligatorios. En otras palabras, a menos que se identifique un problema de improcedencia en las solicitudes, se requiere la evaluación y contratación de personal para expedientes que serán considerados inadmisibles. En este sentido, es relevante señalar que el 75% de los expedientes evaluados, que equivale a 74 expedientes recibidos, han presentado observaciones relacionadas con documentos de admisibilidad, considerando documentos que dependen de otras entidades o documentos declarativos.[175]

En el contexto actual, se observan varios escenarios: (i) los administrados a menudo carecen de información intermedia sobre los documentos que no presentaron, ya sea por omisión involuntaria o no, y que deben corregir para demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad; (ii) el periodo para la evaluación de los expedientes suele extenderse debido a un periodo insuficiente para el levantamiento de observaciones, ya que el administrado debe rectificar la información observada según los criterios de cumplimiento, así como modificar los documentos que no presentó, para mantener la coherencia y consistencia requerida por la norma.[176]

---

[173] De la exposición de motivos del punto 3.1.43 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[174] Ibídem
[175] Ibídem
[176] De la exposición de motivos del punto 3.1.43 del proyecto de ley 7752/2023-PE

Además, las modificaciones que realice el administrado deben estar sujetas a una planificación anual. Por ejemplo, si se requiere un Plan de Cumplimiento que tiene un periodo de hasta dos años para las instituciones públicas o de hasta un año para las instituciones privadas, se deberá realizar una tercera evaluación de todos los documentos, los cuales deben ser ajustados a la fecha de presentación. Esto implica que el procedimiento de licenciamiento tendría una duración de más de dos años. En este escenario se encuentra el 100% de los expedientes ingresados por adecuación, que equivale a 95 expedientes.[177]

Por otro lado, con respecto al plazo del procedimiento de licenciamiento de IES y EES, se evidencia una limitación en el periodo de 120 días hábiles para la atención de los expedientes, ya que el marco normativo vigente dispone que se deben evaluar tanto los requisitos de admisibilidad como las condiciones básicas de calidad y, una vez subsanadas las observaciones, se debe realizar una segunda evaluación, lo cual implica que el periodo del procedimiento de licenciamiento sea mayor al establecido en la normativa vigente, con el fin de que los administrados logren su licenciamiento institucional respetando el debido procedimiento de todas las etapas de forma preclusiva.[178]

Por lo tanto, resulta oportuno y pertinente modificar el plazo del procedimiento de licenciamiento de IES y EES de 120 días hábiles a 200 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. Más precisamente, corresponde establecer un periodo específico para la etapa de admisibilidad y la evaluación de la información presentada, así como disponer de plazos diferenciados para finalizar con la evaluación de admisibilidad antes de iniciar con la evaluación de las condiciones básicas de calidad.[179]

En este sentido, es necesario modificar el artículo 24-A de la Ley N° 30512, referente al plazo y etapas del procedimiento de licenciamiento de IES y EES, para simplificar dicho procedimiento y lograr una mayor eficiencia en los resultados.[180]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

---

[177] Ibidem
[178] Ibidem
[179] De la exposición de motivos del punto 3.1.43 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[180] Ibidem

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas de educación pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De acuerdo a la exposición de motivos del presente proyecto de ley desde el año 2022 la evaluación conjunta de la admisibilidad de la prestación de documentos y su contenido vinculado al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad supone un desgaste del periodo útil para la atención de los expedientes de licenciamiento, lo cual genera la necesidad de contar con la mayor cantidad de recursos humanos y financieros.[181]
Asimismo, de dicha exposición de motivos se manifiesta que, respecto del plazo de procedimiento de licenciamiento de Institutos y Escuelas de Educación Superior, evidencia una limitación en el periodo de 120 días hábiles para la atención de los expedientes, debido a que el marco normativo vigente dispone que se deben evaluar tanto los requisitos de admisibilidad como las condiciones básicas de calidad, y luego una vez subsanadas dichas observaciones se deben realizar por segunda vez dicha evaluación lo que conlleva que el procedimiento sea mayor al establecido en la normativa vigente, a fin de lograr que los administrados logren su licenciamiento institucional habiéndose respectado el debido procedimiento en todas las etapas de forma preclusiva.[182]

Por Oficio 1093-2024-MINEDU/DM de fecha 27 de mayo de 2024, suscrito por el ministro de Educación Morgan Niccolo Quero donde se levantan las observaciones de formuladas

[181] Del anexo del MINEDU suscrito por Daniel Cáceres Watanabe especialista DIFOID y Maria Olinda Moloche Gilardi directora de formación En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf
[182] Ibidem.

en la Mesa Técnica de la "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional" sobre el sustento de la propuesta de modificación del artículo 24 – A de la Ley 320512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes; así como a las observaciones a la propuesta de la Nueva Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y derogación de la Ley 28036, en donde se adjunta copia del Oficio 01522-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD, el Informe N°00574-2024-MINEDU/VGMP-DIGEDD-DIFOID y anexo, remitidos por la Dirección General de Desarrollo Docente; así como el Oficio 00694-2024-MINEDU/VGMP-DIGEBR y el Informe N°00247-2024-MINEDU/VGMP-DIGBR-DEFID y anexo, de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación.[183]

De ahí que, en el análisis del Informe 00574-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID de fecha 27 de mayo de 2024, suscrito por Maria Olinda Moloche Gilardi se detalle que:
Los institutos y escuelas de educación superior pedagógica afrontan distintos problemas al afrontar el procedimiento de licenciamiento con relación al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad con relación a la gestión institucional, presupuestal, de recurso humano e infraestructura, y entre ellos especialmente:

- Una alta rotación del personal directivo y del personal jerárquico, de los institutos o Escuelas de Educación Superior de gestión pública que repercute en el procedimiento de licenciamiento.
- Las observaciones de corte presupuestal pero que dependen de la participación de la Dirección Regional de Educación o del Gobierno Regional, por cuanto los plazos de la dación de dichos documentos, no se encuentra dentro de las funciones proyectados por el Instituto o Escuela de Educación Superior. Asimismo, no se pueden atender por la misma falta de presupuesto los servicios educacionales complementarios básicos (medico, psicopedagógico, social y de seguridad y vigilancia) por lo que estos deben ser gestionados ante los respectivos gobiernos regionales, cuyo procedimiento ocupa un plazo no previsto dentro de su propio plan de cumplimiento, asumiendo que el Estado debe brindar dichos servicios cada año.

[183] Del anexo del MINEDU suscrito por Daniel Cáceres Watanabe especialista DIFOID y Maria Olinda Moloche Gilardi directora de formación En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf

- También no se cumplen en el tiempo oportuno los procesos de encargatura y contratos docentes en el tiempo oportuno o antes del inicio del año académico, por no encontrarse profesores que tengan el perfil idóneo según la regulación vigente, pues los docentes prefieren laborar en la Educación Básica Regular por las mejores remuneraciones que se cuentan en dicho nivel.
- De la misma forma se encontraron casos en los cuales la infraestructura requieren de intervención de mediano y largo plazo desde el Gobierno Regional o desde otras fuentes de financiamiento.
- Concluye que para los institutos y escuelas de educación superior es necesario contar con un plazo mayor a 120 días hábiles para que puedan cumplirse con las condiciones básicas de calidad, pues el contexto requiere para este tipo de servicio educativo gestionar ante los Gobiernos Regionales y las Direcciones Regionales de Educación la subsanación de aspectos involucrados a la gestión del recurso humano sobre el personal del servicio educacional complementario básico, la contratación oportuna de docentes y la habilitación de recursos para la infraestructura en los temas relacionados al mantenimiento y reconstrucción.[184]

Por lo que deben tomarse en cuenta estos argumentos en relación a la escasa capacidad de coordinación del sector Educación del Poder Ejecutivo con los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Economía y Finanzas para poder dar solución oportuna y eficiente a esta problemática. Asimismo, en tanto el ente rector formule en un periodo razonable propuestas y soluciones en el marco normativo para su cumplimiento de manera eficiente sobre los problemas de gestión pública, económica, educativa y social que engloban los temas que detalla el análisis del informe citado, se permite delegar la facultad de modificar el artículo 24-A de la Ley 30512, Ley de los Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes para:

- Modificar las etapas del procedimiento de licenciamiento e incorporar la etapa de evaluación de requisitos de admisibilidad, previo a la etapa de evaluación integral.
- Ampliar el plazo hasta un máximo de 200 días hábiles para que los institutos y escuelas de educación superior puedan cumplir con las condiciones básicas de

[184] Del anexo del MINEDU suscrito por Daniel Cáceres Watanabe especialista DIFOID y Maria Olinda Moloche Gilardi directora de formación En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf

calidad requeridas en el marco de lo exigido dentro del procedimiento de licenciamiento.[185]

Conclusión

Este aspecto solicitado e incorporando la modificación propuesta, se encuentra justificado el pedido solicitado para la delegación de facultades legislativas con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el artículo 24-A de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, a fin de modificar las etapas del procedimiento de licenciamiento e incorporar la etapa de evaluación de requisitos de admisibilidad, previo a la etapa de evaluación integral; así como modificar el plazo del procedimiento de licenciamiento, hasta por un plazo máximo de 200 días hábiles."

3.1.44 Establecer medidas de simplificación administrativa al marco normativo de saneamiento físico legal de inmuebles del sector educación destinados a instituciones educativas públicas, a fin que se mejore y agilice el procedimiento actual.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Ministerio de Educación, según el artículo 79 de la LGE, es la entidad gubernamental encargada de establecer, dirigir y coordinar las políticas de educación, recreación y deporte en Perú, en línea con las políticas generales del Estado. Una de sus funciones clave, según el artículo 80, es liderar la gestión para aumentar la inversión en educación y consolidar el presupuesto nacional de educación, así como los planes de inversión e infraestructura educativa.[186]

[185] Del anexo del MINEDU suscrito por Daniel Cáceres Watanabe especialista DIFOID y Maria Olinda Moloche Gilardi directora de formación En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf

[186] De la exposición de motivos del punto 3.1.44 del proyecto de ley 7752/2023-PE

El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública establece principios, normas y procedimientos para el proceso de modernización de la gestión pública. Este proceso implica la selección y uso de medios orientados a la creación de valor público en una actividad o servicio específico a cargo de las entidades públicas. En este caso, el valor público en la prestación del servicio educativo por parte del Estado (MINEDU) se ve reforzado por una disminución de la brecha de infraestructura. Esto será posible proporcionando al MINEDU los dispositivos legales adecuados que le permitan regularizar los derechos reales (propiedad y/o uso) que ejerce sobre los terrenos e inmuebles ocupados por Instituciones Educativas. De esta manera, se logra satisfacer las necesidades y expectativas generando beneficios para la sociedad.[187]

El "Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025" - PNIE del Ministerio de Educación, aprobado por la Resolución Ministerial N° 153- 2017-MINEDU, es el instrumento central de planificación de infraestructura educativa en Perú hasta 2025. Este plan presenta una estrategia para cerrar la brecha de infraestructura educativa pública para los servicios de Educación Básica, Educación Técnico-Productiva y Educación Superior Pedagógica y Tecnológica. Su objetivo principal es contribuir a la satisfacción del servicio educativo, mejorando su condición, capacidad, gestión y sostenibilidad para avanzar hacia una educación de calidad para todos.[188]

En relación con el Objetivo 01 del PNIE, el Ministerio de Educación (MINEDU) identificó que la brecha de infraestructura educativa pública en 2017 ascendía a S/ 72,747.00 MM (setenta y dos mil setecientos cuarenta y siete millones de soles) para reducir el riesgo estructural y proporcionar las condiciones mínimas requeridas para que el servicio educativo se preste en una infraestructura adecuada.[189]

A partir de esto, la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN) de la Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) del MINEDU ha actualizado el cálculo de la brecha de infraestructura educativa asociada al primer objetivo estratégico del PNIE, que se incrementó de S/72 747 millones a S/ 174,603 millones al 26 de diciembre de 2023, asociada a 55,135 locales educativos (99.6% de los 55,358 LL.EE.). Esta situación se ha

[187] De la exposición de motivos del punto 3.1.44 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[188] ibídem
[189] De la exposición de motivos del punto 3.1.44 del proyecto de ley 7752/2023-PE

agravado con la exposición de la infraestructura a eventos de desastres naturales en el marco del Fenómeno El Niño (FEN).[190]

El Ministerio de Educación (MINEDU) está enfocado en estrategias que permitan contar con una infraestructura educativa segura y funcional, para brindar un servicio educativo de calidad. Para ello, es esencial un procedimiento de saneamiento más rápido que otorgue seguridad jurídica sobre los derechos que el MINEDU tiene sobre los predios e inmuebles ocupados por las instituciones educativas. Esto permitirá la ejecución de proyectos de inversión.[191]

El problema público subyacente es proporcionar al MINEDU un procedimiento de saneamiento más rápido, que permita el reconocimiento de derechos reales a favor del MINEDU, lo que permitirá la ejecución de proyectos de inversión para reducir la brecha de infraestructura educativa existente a nivel nacional.[192]

Es crucial identificar la brecha de infraestructura educativa, ya que permite asignar fondos públicos a la prestación efectiva de servicios y a la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Las inversiones se priorizan de acuerdo a los criterios definidos por el sector educativo.[193]

Para determinar cuantitativamente las instituciones educativas que cuentan con saneamiento físico legal, se utilizan como fuentes de información el Sistema de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), y el Sistema de Gestión de Bienes Inmuebles (SGBI) a cargo de la Dirección de Saneamiento de Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario - DISAFIL. Según ESCALE, de las 55,358 IE a nivel nacional, 29,186 (53% del total) cuentan con predios o inmuebles con saneamiento físico legal, mientras que 26,172 (47% del total) tienen predios o inmuebles sin saneamiento físico legal.[194]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

---

[190] Ibídem
[191] Ibídem
[192] Ibídem
[193] De la exposición de motivos del punto 3.1.44 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[194] ibídem

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas de educación pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La presente solicitud de delegación de facultades tiene como objeto modificar la Ley 31318, Ley que regula el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles del sector educación destinados a instituciones públicas educativas públicas, estableciendo dispositivos para facilitar su aplicación por parte de las entidades que ejercen competencias para que optimicen, mejoren y agilicen el procedimiento de saneamiento físico legal de los bienes inmuebles estatales destinados a instituciones educativas públicas, en favor del Ministerio de Educación hasta su inscripción en los Registros Públicos. Por lo cual, se podrán realizar en dichos bienes inmuebles la ejecución de inversiones entre ellas; proyectos de inversión para la construcción, ampliación, remodelación y rehabilitación de instituciones educativas, por lo que se incidirá en la reducción de la brecha de infraestructura educativa del país, en beneficio de la población quien recibirá una educación de calidad.[195]

Asimismo, se consolidara como finalidad lograr la mejora y perfeccionamiento del procedimiento de saneamiento físico legal, lo cual facilitará la inscripción registral de los predios inmuebles ocupados por las instituciones educativas a favor del MINEDU, apuntalándose un procedimiento más ágil y con menor costo que habilitará efectivamente la regularización de la realidad física como: la ubicación, área, linderos, medidas perimétricas, fabricas, entre otras área, linderos, medidas perimétricas, fabricas, entre otras y jurídicas de las instituciones educativas por parte del Ministerio de Educación y de las Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces.

[195] Del anexo del MINEDU suscrito Tania Francisca Macedo Pacherres. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf

De ese modo, el saneamiento físico legal de los predios e inmuebles ocupados por las Instituciones Educativas, permitirá que se ejecuten en parte inversiones en materia educativa, lo que coadyuvará a la reducción de la brecha de infraestructura educativa.[196]

El Ministerio de Educación cuantifico que la brecha de infraestructura pública hasta el año 2017 ascendía a la suma de S/. 72,747.00 Millones de soles para disminuir el riesgo estructural y brindar condiciones mínimas requeridas para que el servicio educativo se exprese en una infraestructura adecuada. Se mencionó en dicha mesa técnica que la infraestructura educativa como el conjunto de predios, espacios, edificaciones, mobiliario para la prestación del servicio educativo de acuerdo a la normatividad vigente. De la misma forma precisaron que una infraestructura de calidad tiene los siguientes atributos; debe ser segura, funcional e integrada al territorio. A partir de ello, la Dirección de Planificación de Inversiones de la Dirección General de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación ha realizado la actualización del cálculo de brecha de infraestructura educativa a la cifra de 174,603 millones al 26 de diciembre de 2023, asociada a 55135 locales que representan al 99.6% de los 55358 del total de locales educativos situación que se agravo con la exposición de dicha infraestructura debido al Fenómeno del Niño.[197]
Actualmente hay 30939 locales en alto riesgo de colapso, con deficiencias de acceso a los servicios básicos lo que conlleva disfuncionalidad de dicha infraestructura educativa y por ende la posibilidad de interrupción de servicios educativas ante un siniestro causado por un desastre natural, entre ellos

- 20,203 locales educativos no tienen acceso al servicio de agua potable.
- 15,880 locales educativos no tienen acceso al servicio de desagüe.
- 6581, locales educativos no tienen acceso al servicio de electricidad.
- 10377 locales educativos no tienen acceso al servicio de internet.[198]

Además de los 30939 locales educativos en alto riesgo de colapso, se evidencia con la problemática de falta de accesibilidad para las personas con discapacidad, pues 24,203 que poseen más de un piso solo 58 de estos locales cuentan con ascensor operativo, 29919, no tiene acceso rampas, y 29155 no cuentan con inodoros habilitados para personas con discapacidad. Asimismo, 27897 locales educativos se encuentran en riesgo muy alto y

[196] De la exposición de motivos del punto 3.1.44 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[197] De la exposición de motivos del punto 3.1.44 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[198] ibídem

alto ante sismos y tsunamis de acuerdo al estudio publicado en diciembre de 2023 por la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres (ODENAGED)[199]
Dicha brecha como lo relata la exposición de motivos es significativa por lo que el Ministerio de Educación debe elaborar y efectuar acciones le permitan contar con una infraestructura educativa que permita otorgar un servicio educativo de calidad, en cada uno de los predios e inmuebles ocupados, permitiéndoles a su vez la ejecución de proyectos de inversión. Es indispensable atender las 26172 instituciones educativas que se encuentran sin saneamiento físico legal según la data que proporciona el Sistema de Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE.[200]

De acuerdo a la solicitud de delegación de facultades y a los puntos expuestos y hechos llegar por el Sector en la Mesa Técnica sobre este proyecto de ley realizada entre los días 21 al 23 de mayo del presente, se plantea modificar la Ley 31318, Ley que regula el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles del Sector Educación destinados a Instituciones Educativas públicas en los artículos 3, 7 y 9 de la siguiente manera:

Modificar el 3.1. del artículo 3 de la Ley 31318, en relación al régimen de notificación de los actos de saneamiento físico legal estableciendo como regla general, la notificación personal y en vía subsidiaria en caso de imposibilidad de la notificación personal, la notificación mediante publicación, en un solo diario, el oficial punto 3.1.51. relación con los proyectos de ley 7288/2023, La propuesta normativa materia de análisis busca modificar la Ley N° 31318 para establecer la notificación personal como regla general en el régimen de notificaciones y publicaciones. En caso de imposibilidad de notificación personal, se propone la notificación mediante publicación en un solo diario, ya sea el diario oficial El Peruano u otro diario del lugar de ubicación del bien, a elección de la entidad que ejecute el saneamiento físico legal. Esta propuesta está en línea con la prelación regulada en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Además, esta prelación también está incorporada en el procedimiento especial de saneamiento físico legal previsto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema

---

[199] ibídem
[200] Del anexo del MINEDU suscrito Tania Francisca Macedo Pacherres. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf

Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA.[201]

Se plantea asimismo modificar el numeral 3.2. del artículo 3 de la Ley a fin de estipular que el plazo para la oposición de las personas y entidades que se consideren afectadas con el acto de saneamiento físico legal se compute desde la notificación o publicación según corresponda. [202]

Asimismo, la propuesta también busca modificar el artículo 7 de la Ley 31318 para variar la oportunidad en que se debe determinar la existencia de procesos judiciales que cuestionen la propiedad o posesión del Estado, sobre el predio del inmueble materia de saneamiento físico legal. Cabe advertir que la existencia de un proceso judicial de este tipo impide la ejecución del procedimiento de saneamiento físico legal hasta que dicho proceso concluya y se conozca su resultado, dado que una posibilidad de conclusión puede ser la extinción del derecho a favor del Estado. Actualmente, los procesos judiciales que deben ser tomados en cuenta para no iniciar el saneamiento físico legal son los que han sido notificados a la entidad saneadora hasta un día antes de la publicación de la Ley, es decir el 5 de agosto de 2021. Lo que conlleva a que deba modificarse este error de la ley y estipularse que la notificación de los procesos judiciales que cuestionan el derecho o posesión del Estado, puede ser hasta un día antes de la notificación o publicación o presentación del título ante el Registro de precios. [203]

Adicionalmente, la propuesta legislativa propone la modificación del artículo 9 de la ley para extender el plazo de vigencia de la Ley actualmente de cinco años a diez años a partir de su entrada en vigencia con la finalidad de seguir reduciendo la brecha de infraestructura educativa del país.[204]

---

[201] Del anexo del MINEDU suscrito Tania Francisca Macedo Pacherres. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf
[202] Del anexo del MINEDU suscrito Tania Francisca Macedo Pacherres. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf
[203] Del anexo del MINEDU suscrito Tania Francisca Macedo Pacherres. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf
[204] Del anexo del MINEDU suscrito Tania Francisca Macedo Pacherres. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf

Finalmente, se propone una disposición única complementaria final para que el Ministerio de Educación lleve a cabo la adecuación del Reglamento a la Ley, incorporando las modificaciones planteadas en un plazo máximo de 30 días hábiles.[205]

Conclusión

Este aspecto solicitado e incorporando las modificaciones propuestas, se encuentra justificado el pedido solicitado para la delegación de facultades legislativas con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar los artículos 3, 7, 9 e incluir una única Disposición Complementaria Final en la Ley 31318, Ley que regula el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles del Sector Educación destinados a instituciones públicas, para establecer medidas de simplificación administrativa que mejoren y agilicen el procedimiento actual del marco normativo de saneamiento físico legal de inmuebles del sector educación en relación a las instituciones educativas públicas."

3.1.45	**Aprobar la Nueva Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y derogación de la Ley N° 28036, a fin de fortalecer el marco regulatorio del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) y promover la mejora de la prestación de los servicios públicos para la práctica del deporte en beneficio de la población en general.**

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Ley N° 28036, establecida en 2003 para fomentar el deporte, ha experimentado múltiples cambios a lo largo de los años. Sin embargo, aún enfrenta retos para una gestión eficaz de la promoción deportiva, particularmente en relación con el rol del Instituto Peruano del

[205] Del anexo del MINEDU suscrito Tania Francisca Macedo Pacherres. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf

Deporte. Además, ciertas leyes asociadas, como la Ley del Deportista de Alto Nivel y la Ley N° 29825, aún carecen de una reglamentación adecuada.[206]

En febrero de 2024, la Agencia Mundial Antidopaje señaló disposiciones en la Ley N° 28036 que no cumplen con las normas antidopaje del CONAD. Se otorgó a Perú hasta el 29 de mayo de 2024 para ajustar su legislación a los estándares internacionales. El incumplimiento de estas normas podría resultar en severas repercusiones para el deporte peruano, incluyendo la posible prohibición de ser sede de eventos deportivos a nivel regional, continental y mundial.[207]

La **Ley N° 31224** modificó la Ley N° 28036 para declarar que el Instituto Peruano del Deporte es una entidad pública vinculada al Ministerio de Educación y que tiene la dirección del Sistema Deportivo Nacional. Mientras tanto, el Ministerio de Educación es la autoridad rectora en temas de deporte, actividad física, educación física y recreación. A pesar de estas definiciones, el Sistema Deportivo Nacional aún no está en funcionamiento debido a la falta de regulación y a la confusión sobre las responsabilidades de los gobiernos locales y regionales.[208]

Finalmente, el **Decreto Supremo N° 014-2022-MINEDU** aprobó la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física, que tiene como objetivos prioritarios:

(i) **OP.1** Fomentar la práctica regular de la actividad física, recreación y deporte recreativo en todas las edades;

(ii) **OP.2** Fomentar habilidades educativas para un estilo de vida activo y saludable en estudiantes de todas las etapas, niveles y modalidades educativas;

(iii) **OP3.** Desarrollar habilidades profesionales en los profesores de educación física y otros mediadores de aprendizajes deportivos;

(iv) **OP.4** Mejorar el rendimiento exitoso de deportistas de alta competencia en torneos internacionales.[209]

---

[206] De la exposición de motivos del punto 3.1.45 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[207] Ibídem
[208] Ibídem
[209] De la exposición de motivos del punto 3.1.45 del proyecto de ley 7752/2023-PE

La Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física - PARDEF ha establecido en estos momentos 18 lineamientos, como estrategias o medios para alcanzar las finalidades propuestas; con al menos 22 servicios prestados a la población y a los deportistas que pertenecen a la federación. De la misma forma, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 014-2022-MINEDU, establece lo siguiente:

> *"3.1. El Ministerio de Educación conduce la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física (PARDEF) y la implementan progresivamente las direcciones generales del Ministerio de Educación, sus organismos adscritos o las que hagan sus veces, responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y proveedores de los servicios de la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física (PARDEF), están a cargo de la implementación y ejecución de la misma.*
>
> *3.3. Las entidades del Estado responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y proveedores de los servicios de la Política Nacional de Actividad Física, Deporte y Educación Física - PARDEF, están a cargo de la implementación y ejecución de la misma, conforme a su autonomía y competencias. Para tal efecto, se realizan los arreglos y adecuaciones organizacionales que se requieran para la implementación de los servicios identificados y otras intervenciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Actividad Física, Deporte y Educación Física - PARDEF. Las actividades operativas y medidas se implementan en el marco de las competencias y responsabilidades que correspondan a las entidades involucradas.*
>
> *3.4. Del mismo modo se realizan las modificatorias en los programas presupuestales relacionados a la política, en el marco de la normativa vigente."*

Según la Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Presupuestal 0101: "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas" (2018), se identificó que la asignación de recursos no se alineaba con los objetivos del programa. Esto se debía a que la programación se basaba en la asignación histórica, en lugar de considerar la brecha de provisión de bienes y servicios y los costos asociados al desarrollo de las actividades.[210]

En 2018, este programa representó el 47% del presupuesto total de la División Funcional de Deportes. Sin incluir los proyectos de inversión, el 55% del presupuesto se destinó al acceso y desarrollo deportivo de alta competencia (un grupo objetivo reducido), mientras que solo el 23% se destinó a la masificación deportiva. Para garantizar un uso adecuado de estos recursos y una mayor formalidad en la dirección de las federaciones, en 2018 se publicó la Ley N° 30832, que modificó la Ley 28036 (Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte). Una de sus principales modificaciones es el Artículo 71-A, que establece que el 40% de las subvenciones otorgadas deben usarse "de forma obligatoria y directa a favor de actividades del deportista".[211]

Esto resalta la necesidad de fortalecer las capacidades de los organismos públicos y privados que forman parte del SISDEN, para tener una gestión estructurada e integrada que beneficie el desarrollo de la actividad física, recreativa y deportiva en los diferentes niveles de gobierno.[212]

En cuanto a la infraestructura deportiva, el IPD administra alrededor de 260 infraestructuras a nivel nacional. Estas no solo son de alta competencia, sino que también incluyen pequeños complejos o lozas para la recreación que deberían ser administradas por los gobiernos locales. La mayoría de las inversiones realizadas por los gobiernos regionales no cuentan con convenios vigentes o los proyectos no han sido liquidados. Por lo tanto, se requiere considerar la transferencia de competencia a los Gobiernos Regionales, lo que implicaría transferir predios y mejorar las infraestructuras existentes.[213]

La Ley 28036, en su Artículo 14, establece que el IPD cuenta con consejos regionales compuestos por seis miembros: un presidente designado por el Presidente del IPD, a

---

[210] De la exposición de motivos del punto 3.1.45 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[211] Ibidem
[212] Ibidem
[213] Ibidem

propuesta del presidente del gobierno regional, un miembro elegido por las ligas deportivas de la región o departamentales, un miembro elegido por las municipalidades provinciales, un miembro elegido por las municipalidades distritales, un miembro de la gerencia, dirección o área que tenga competencia en materia deportiva regional, en representación del gobierno regional, y un miembro representante de las universidades e institutos superiores de la región.[214]

Las funciones del Consejo Regional del Deporte incluyen el reconocimiento de organizaciones deportivas, la supervisión de sus elecciones, la propuesta de convenios internacionales al Instituto Peruano del Deporte (IPD), la entrega de distinciones a deportistas destacados y el apoyo a representantes regionales en eventos nacionales e internacionales. De la exposición de motivos del punto 3.1.44 del proyecto de ley 7752/2023-PE[215]

El Presidente del Consejo Regional del Deporte tiene funciones similares a las del Presidente del IPD, aplicables a su jurisdicción, según lo establecido por la ley y su reglamento. El IPD, a través de sus Consejos Regionales, brinda asistencia técnica a las municipalidades para el desarrollo de planes y programas de promoción deportiva, recreativa y de educación física, según el artículo 17 de la Ley 28036. La Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que los gobiernos regionales deben formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación. Sin embargo, el IPD parece superponerse en el rol de desarrollo deportivo regional.[216]

La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es responsabilidad del gobierno local normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación. Sin embargo, el IPD implementa Academias Municipales, lo que parece generar una duplicidad y superposición de roles en la gestión del deporte.[217]

En cuanto al presupuesto, el Programa Presupuestal 0101 (PP 0101): "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana", es el que

[214] Ibidem
[215] De la exposición de motivos del punto 3.1.45 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[216] De la exposición de motivos del punto 3.1.45 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[217] De la exposición de motivos del punto 3.1.45 del proyecto de ley 7752/2023-PE

tiene el mayor presupuesto de la división funcional de deporte. El IPD es responsable de su ejecución en los tres niveles de gobierno. En 2022, se asignó un total de S/ 2 485 060 583, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1,645,300,010, siendo el mayor presupuesto asignado a los gobiernos locales, quienes ejecutaron únicamente el 65.30% de los recursos asignados. De acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Comparativo entre el presupuesto asignado y ejecutado

Año 2022	Asignado	Ejecutado	% Ejecución
Nacional	107,490,047	99,805,051	94.3
Regional	118,720,610	72,906,883	61.4
Local	2,258,849,926	1,472,588,076	65.3

Fuente: Consulta amigable MEF al 31-12-2022

Para el año 2023, la ejecución en el Presupuesto Público 0101 al mes de noviembre llegó al 71 57%, dejando de ejecutar recursos del tesoro público del 27.2% (sin certificar), y con más de 136 millones devueltos al tesoro público, lo cual necesariamente conlleva que se hace necesario un mejor monitoreo de la ejecución del PP101, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2: Ejecución presupuestal

Año 2023	Asignado	Ejecutado	%Ejecución
Nacional	122,416,843	113,566,036	92.8
Regional	1,576,341,461	1,103,084,415	70.0
Local	87,649,338	65,353,294	74.6

Fuente: Consulta amigable MEF al 31-12-2023

En vista de lo expuesto y en el contexto de fortalecimiento, simplificación y mejora regulatoria en lo que respecta a la inversión pública, privada y público-privada, así como la gestión de servicios públicos, se sugiere la creación de una nueva ley que promueva y desarrolle el deporte. Esta permitiría la implementación de las políticas nacionales actuales, la actualización del PP 0101 y la conformidad con las normas internacionales para aumentar

la competitividad deportiva a nivel nacional e internacional, todo en beneficio de la población del país.[218]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas de educación y el deporte pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis no se supera efectivamente el control de constitucionalidad, pues no se logra justificar plenamente si existe o no afectación a los artículos de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, debido a la propuesta de creación del Sistema Deportivo Nacional – SISDEN, así como de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Educación a través de Freddy Omar Gonzales, dicha institución determina que:

Frente al problema que la Ley 28036 mantiene aspectos deficitarios de una regulación que veinte años después se muestra en general insuficiente y en algunas materias inadecuadas para dar respuesta a la realidad actual del sector deportivo y a las demandas de la población.

Por lo que se requiere a partir de deficiencias o vacíos normativos las siguientes intervenciones normativas:

- Deficiente delimitación de la función pública respecto de las organizaciones deportivas privadas.
- Se requiere reestructuración del sistema de administración de justicia deportiva.

[218] De la exposición de motivos del punto 3.1.45 del proyecto de ley 7752/2023-PE

- Se requiere establecer un marco normativo coordinado y articulado con el movimiento internacional que permita que favorezca la igualdad entre hombres y mujeres en las distintas modalidades y especialidades deportivas.
- Se requiere un marco normativo para los deportistas profesionales y de alto rendimiento, que les permita continuar su formación para un retiro digno.
- Se requiere generar condiciones para la participación del sector privado, que presten servicios deportivos en la promoción y desarrollo de la actividad física el deporte.

De acuerdo a la información proporcionada por Nathaly Montoya Avilés Directora de la Dirección de Educación Física y Deporte –DEFID, MINEDU, dicha institución señala que:

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha observado la Ley 28036 considerando que no satisface los requisitos de independencia operativa establecidos en el artículo 20.5.1 del Código Mundial Antidopaje.

Por lo que de acuerdo a esta entidad se requiere la siguiente intervención normativa:

- La AMA ha otorgado al Estado Peruano hasta el 29 de mayo de 2024 como plazo para la adecuación de su marco normativo.
- La Comisión Nacional Antidopaje como un órgano adscrito al Instituto Peruano del Deporte (IPD) no garantiza la independencia operativa de la ONAD con el gobierno peruano.
- Requieren la modificación del marco normativo vigente que regula el Sistema Deportivo Nacional, ello con la finalidad de que su regulación sea acorde a lo establecido en el Código Mundial Antidopaje. [219]

Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada por Freddy Omar Gonzales del MINEDU dicha institución señala como problema:

- Que el Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) no es un sistema funcional creado en el marco de la LOPE, por lo que solo es nominativo y en 20 años el IPDE no logro reglamentar ni operar.

---

[219] Del Ministerio de Educación a través de Freddy Omar Gonzales, En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njc5/pdf

De esa manera la entidad propone que se le delegue facultades para:

- Crear el SISDEN en el marco del artículo 43 al artículo 45 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pues los sistemas funcionales se crean por Ley y tienen por finalidad el cumplimiento de las políticas públicas con la participación de todas o varias entidades del Estado siendo su ente rector el encargado técnico y normativo.

- La falta de un sistema funcional genera duplicidad en la prestación de servicios relacionados con el objetivo estratégico del sector educación "Mejorar el desempeño de la en la práctica de la actividad física, recreación y deporte de la población", brindados por MINEDU, IPD, Gobiernos Regionales y Locales.

De la misma forma, de acuerdo a la información proporcionada por Freddy Omar Gonzales López del MINEDU:

- No funcionan los Consejos Regionales del Deporte a cargo del IPD porque las competencias corresponden a los gobiernos regionales en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Así de esa manera la entidad propone como necesidad de intervención normativa:

- Fortalecer la gestión del deporte en las regiones bajo el liderazgo de los gobiernos regionales, lo que implica la administración directa de la infraestructura deportiva, así como la implementación de los Planes Regionales del Deporte.
- La infraestructura que administra el IPD (260) no es solo de alta competencia, sino que tiene complejos deportivos que deberían ser administrados por los gobiernos regionales y locales. La mayor parte de las inversiones efectuadas por los gobiernos regionales en los predios del Instituto Peruano del Deporte no cuentan con convenios vigentes o los proyectos no han sido liquidados.
- En el aspecto presupuestal para la promoción de la práctica deportiva y mantenimiento de la infraestructura lo constituye el programa presupuestal 0101 siendo los gobiernos regionales y locales a quienes se les asigna mayores recursos y no al IPD.
- En el año 2023, la ejecución de al mes de diciembre del programa presupuestal 0101 al mes de diciembre llegó al 71.57%, no ejecutándose recursos del tesoro público por 27.2% sin certificar y con más de 136 millones de soles devueltos al tesoro público.

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

De acuerdo al Oficio 1345-2023-2024/CDRGLMGE-ACA-CR suscrito por el congresista Alejandro Cavero Alva presidente de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales, y Modernización de la Gestión del Estado de fecha 30 de mayo de 2024 se adjunta el informe de opinión sobre viabilidad de facultades al Poder Ejecutivo en el cual sobre el punto materia de análisis recomienda otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en esta materia.

Esta Comisión viendo la problemática planteada por el Ministerio de Educación y la intervención normativa que requiere recomienda no delegar facultades por cuanto no se puede llegar a determinar de manera concisa y clara a partir de la exposición de motivos, si los puntos determinados como intervención normativa que conlleva esta delegación podría dar lugar a conflictos con las competencias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, al tratarse de un tema especializado que, implica el debate social de diversos actores sociales, sectores y niveles de gobierno; esta Comisión considera que lo más adecuado es que esta propuesta sea canalizada a través de un proyecto de ley que implique un estudio y debate más profundo al interior del Congreso de la República escuchando especialistas tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Por lo tanto, no es pertinente que sea tramitado a través de una delegación de facultades.

Conclusión:
No se delegará facultades en este extremo. Esta solicitud debe ser canalizada a través de un proyecto de ley y debe ser determinada de una forma más precisa, para permitir un amplio debate con diversos actores sociales, sectores, y niveles de gobierno en el Pleno del Congreso de la República.[220]

[220] En la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2024, recogiendo el aporte del congresista Eduardo Castillo Rivas, se está delegando este punto facultades específicas, con un texto sustitutorio que hace más precisa la facultad delegada, en donde se modifican algunos artículos y se derogan otros para que en mérito que con esta medida se cumplirá con las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Código Mundial Antidopaje vigente de la Agencia Mundial Antidopaje – World Anti Doping Agency (WADA-AMA)"

3.1.46. Modificar el artículo 3 de la Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional por un período de 10 años, con la finalidad de permitir la investigación y producción de OVM, la edición génica y otras técnicas modernas de biotecnología, lo cual contribuirá a la sostenibilidad de la agricultura y lograr mejores resultados ante los efectos del cambio climático.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La escasez y el aumento de precios de los productos agrícolas en el mercado internacional se deben a factores como el cambio climático, las crisis económicas regionales y los conflictos internacionales. El Perú, que depende de estos productos, podría beneficiarse de la producción nacional de los mismos, asegurando el suministro de insumos y productos para la población y la industria ganadera.[221]

Existen nuevas variedades de cultivos como la canola, soya, caña de azúcar y alfalfa que son más productivas y eficientes. Estos cultivos, resistentes a plagas y enfermedades, así como a condiciones abióticas, podrían adaptarse a las condiciones peruanas y satisfacer la demanda interna.[222]

La agricultura requiere de innovaciones tecnológicas para garantizar su sostenibilidad y competitividad. Los Organismos Vivos Modificados (OVM) son un ejemplo de estas innovaciones, ya que permiten la provisión de alimentos y forrajes para la seguridad alimentaria de los peruanos y el desarrollo de la industria nacional. Sin embargo, la Ley N° 29811, que establece una moratoria al ingreso y producción de OVM en el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2035, ha limitado su uso.[223]

[221] De la exposición de motivos del punto 3.1.46 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[222] Ibidem
[223] Ibidem

La no utilización de los OVM en el país debido a esta moratoria ha tenido un impacto negativo en la productividad agraria nacional y en los productores agrarios. Por ejemplo, en 2017, la rentabilidad perdida por la moratoria ascendió a 3,129 millones de soles, unos 956.88 millones de dólares.[224]

Por lo tanto, se propone modificar el artículo 3 de la Ley N° 29811, incorporando los numerales 4 y 5, que permitirían la producción de OVM destinados únicamente a la alimentación animal de las especies no originarias del Perú y la investigación y producción de OVM derivados de la edición génica y otras técnicas modernas de la biotecnología. Esta medida contribuiría a la sostenibilidad de la agricultura y a lograr mejores resultados ante los efectos del cambio climático.[225]

La propuesta se financiará con los recursos propios de los órganos institucionales involucrados del INIA, en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto y las demás disposiciones legales vigentes, garantizando que la medida no generará gastos adicionales para el Estado.[226]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas agrarios pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

[224] De la exposición de motivos del punto 3.1.45 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[225] De la exposición de motivos del punto 3.1.46 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[226] De la exposición de motivos del punto 3.1.46 del proyecto de ley 7752/2023-PE

De la problemática que se pretende abordar:

El agro peruano enfrenta desafíos significativos que afectan su sostenibilidad y competitividad. Entre estos se encuentran[227]:

- **Escasez de materias primas**: La crisis económica, el cambio climático y los conflictos internacionales han afectado la producción y disponibilidad de commodities en el mercado internacional, aumentando sus precios.

- **Dependencia de importaciones**: El Perú depende de la importación de alimentos y forrajes destinados a la alimentación animal, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y el desarrollo de la industria nacional.

- **Bajos rendimientos agrícolas**: Los pequeños y medianos agricultores enfrentan bajos rendimientos y productividad debido a plagas, enfermedades condiciones abióticas adversas.[228]

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego expresa que como necesidad de la intervención normativa:

- **Limitación de la producción interna**: La actual norma impide a los agricultores peruanos utilizar cultivos genéticamente modificados, lo cual limita su capacidad para mejorar la productividad y la rentabilidad. La introducción de una nueva norma podría permitir el uso de estos cultivos, beneficiando directamente a los agricultores y aumentando la producción interna. [229]

---

[227] De las respuestas a las consultas formuladas en la mesa técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento de la Sesión del 22 de mayo de 2024 remitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y el Anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Christian Alejandro Garay Torres, Jorge Enrique Alcántara Delgado y Jorge Juan Ganoza Roncal

[228] Del Anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Christian Alejandro Garay Torres, en:

[229] Respuestas a las consultas formuladas en la mesa técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento de la Sesión del 22 de mayo de 2024 remitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El Anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Christian Alejandro Garay Torres, Jorge Enrique Alcántara Delgado y Jorge Juan Ganoza Roncal

- **Desaprovechamiento de tecnologías avanzadas**: Existen cultivos genéticamente modificados en el mercado internacional que son más productivos y resistentes a las plagas y condiciones adversas. Permitir la producción de estos cultivos en Perú podría mejorar significativamente la competitividad de los agricultores peruanos.[230]
- **Vulnerabilidad de la seguridad alimentaria**. La dependencia de importaciones de alimentos genéticamente modificados para ganado expone al país a riesgos en caso de crisis internacionales o variaciones de precios. Una normativa que permita la producción local de estos alimentos podría asegurar una provisión más estable y confiable, mitigando los riesgos asociados y mejorando la seguridad alimentaria. [231]

Del impacto cualitativo y cuantitativo que tendrá la regulación en el sector:

La implementación de esta modificación normativa busca tener los siguientes impactos cualitativos:

- **Aumento de ingresos para los productores**: Se mejora la productividad y la calidad de los cultivos puede traducirse en mayores rendimientos y por lo tanto, mayores ingresos para los agricultores.[232]
- **Reducción de los costos de producción**: El uso de cultivos resistentes a plagas y enfermedades podría disminuir la necesidad de pesticidas y fertilizantes, reduciendo los costos de producción.[233]
- **Desarrollo económico local**: La adopción de nuevas tecnologías agrícolas puede impulsar la innovación, crear empleo en industrias relacionadas y estimular el crecimiento económico en zonas rurales.[234]

---

[230] Ibídem
[231] Ibídem
[232] Respuestas a las consultas formuladas en la mesa técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento de la Sesión del 22 de mayo de 2024 remitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Christian Alejandro Garay Torres, Jorge Enrique Alcántara Delgado y Jorge Juan Ganoza Roncal
[233] Respuestas a las consultas formuladas en la mesa técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento de la Sesión del 22 de mayo de 2024 remitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Christian Alejandro Garay Torres, Jorge Enrique Alcántara Delgado y Jorge Juan Ganoza Roncal
[234] Ibídem

- **Reducción de la vulnerabilidad alimentaria**: la capacidad de producir localmente alimentos para ganado genéticamente modificados reduce la dependencia de importaciones y asegura la provisión estable protegiendo al país de crisis internacionales y fluctuaciones de precios.[235]
- **Aumento de la competitividad internacional**: La producción de variedades de cultivos no originarias del Perú, incluyendo aquellas útiles para la industria textil y flores, permitirá al país acceder a mercados internacionales, diversificar su producción agrícola y generar productos de alto valor añadido.[236]

Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se desarrollarán ciertos protocolos que garanticen el marco vigente:
El Instituto Nacional de Innovación Agraria –INIA propone que el instrumento normativo a ser tomado como referencia será el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología (PCB), del cual el Perú es parte, y por ello es de obligatorio cumplimiento. Bajo ese protocolo se analizara y aplicará al movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de todos los organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana.[237]

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología busca proteger la diversidad biológica frente a los riesgos potenciales que presentan los organismos vivos modificados que resultan de la aplicación de la tecnología moderna, estableciendo un procedimiento de acuerdo fundamentado previo, (El procedimiento de acuerdo fundamentado previo o AFP está dirigido a garantizar que antes de que se pueda importar a un país por primera vez un Organismos Vivos Modificados destinado a ser introducido deliberadamente en el medio ambiente, la parte de importación: a) sea notificada de la importación propuesta; b) reciba información completa sobre Organismos Vivos Modificados y el uso que se le pueda dar, c) tenga la oportunidad de evaluar los riesgos asociados con ese organismo vivo modificado y pueda decidir o no si permitirá su importación.[238]) para garantizar que los países cuenten

---

[235] Ibídem
[236] Ibídem
[237] De las respuestas a las consultas formuladas en la mesa técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento de la Sesión del 22 de mayo de 2024 remitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
[238] Fuente: https://bch.cbd. Int/help/topics/es/The advance Informed Agreement procedure.html

con la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas antes de aprobar la importación de tales organismos a su territorio.[239]

En el mismo sentido el Instituto nacional de Innovación Agraria en su búsqueda de evitar o minimizar un posible efecto adverso sobre la biodiversidad local plantea seguir algunos procedimientos:

1. Procedimientos para establecer acuerdos fundamentados previos: Implementar procesos de análisis previos con la parte solicitante que gestiona una propuesta de expediente para autorización, a fin de determinar si con la información previamente obtenida es factible asumir un determinado nivel de riesgo a la biodiversidad local, el ambiente, la salud humana y animal. Este análisis se realizará antes de emitir la autorización respectiva.[240]
2. Clasificación de los organismos resultantes de la edición génica de acuerdo con su uso: Se identifican tres usos, cuyo procedimiento de evaluación no tendrá los mismos requerimientos ni procedimientos. Estos usos son: i) introducción deliberada en el medio ambiente, ii) utilización directa como alimento humano o animal para procesamiento; y iii) uso confinado.[241]
3. Evaluación de riesgo: La evaluación del riesgo es una parte esencial a ser implementada en nuestros procesos de regulación y control. En esta etapa se deben evaluar los posibles efectos adversos que pudieran producir los organismos obtenidos a través del uso de la edición génica o de otras técnicas modernas de biotecnología sobre el ambiente, la salud humana, y animal, a fin de poder determinar la magnitud del riesgo y la probabilidad de que los efectos adversos ocurran en la realidad.[242]

---

[239] De las respuestas a las consultas formuladas en la mesa técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento de la Sesión del 22 de mayo de 2024 remitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego el Anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Christian Alejandro Garay Torres, Jorge Enrique Alcántara Delgado y Jorge Juan Ganoza Roncal

[240] De las respuestas a las consultas formuladas en la mesa técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento de la Sesión del 22 de mayo de 2024 remitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Christian Alejandro Garay Torres, Jorge Enrique Alcántara Delgado y Jorge Juan Ganoza Roncal

[241] De las respuestas a las consultas formuladas en la mesa técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento de la Sesión del 22 de mayo de 2024 remitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego el Anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Christian Alejandro Garay Torres, Jorge Enrique Alcántara Delgado y Jorge Juan Ganoza Roncal

[242] Ibidem

4. Gestión del riesgo: Como resultado de la etapa de evaluación de riesgo se deberá determinar un plan o estrategia a fin de regular, gestionar y controlar los riesgos que han sido previamente identificados, a fin de prevenir cualquier efecto adverso sobre la salud, la biodiversidad o el ambiente.[243]
5. Responsabilidad y Compensación: Se implementará un procedimiento dirigido a contar con un mecanismo armonizado de responsabilidad y compensación, frente a posibles conductas ilegales, las cuales deben de ser sancionadas según los elementos infractores que sean definidos y tipificados en el reglamento que proseguiría a redactarse, de ser aprobado el pedido de facultades formulado.[244]

Todos estos protocolos se encuentran debidamente regulados dentro de las disposiciones contenidas en el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología, a la fecha constituido por 173 partes entre ellas el Perú.[245]

De otro lado la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos mediante Oficio 506-2023-2024-CODECO-CR suscrito por su presidente Wilson Soto Palacios de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, remite opinión señalando que el Proyecto de Ley 7752/2023-PE pretende dejar sin efecto la moratoria al ingreso de semillas transgénicas a nuestro territorio, en donde señala que los cultivos transgénicos son ampliamente cuestionados por sus implicancias, como el uso de herbicidas altamente tóxicos, la dependencia que se genera a los agricultores con respecto de los dueños de las semillas, la afectación de la imagen y posicionamiento internacional del Perú como agroexportador de productos de alta calidad, orgánicos y libre de transgénicos, y que el país no está preparados para la liberación de este tipo de semillas en nuestros campos de cultivo. Por esas y otras razones se sorprende que el Poder Ejecutivo haya cambiado de opinión y muestra su desacuerdo con delegar facultades para dicho fin.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología hace llegar su opinión aprobada en la vigésima cuarta sesión ordinaria semipresencial

[243] Ibídem
[244] Ibídem
[245] Ibídem

de fecha 4 de junio de 2024 y suscrita por su presidenta Ruth Luque Ibarra, en la que expresa sobre este punto materia de análisis que no deben delegarse facultades.

Del cambio legislativo:
Se plantea modificar el artículo 3 de la Ley 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años, la cual fue ampliada por la Ley 31111, que amplio dicha moratoria hasta el año 2035, incorporando los numerales 4 y 5, a fin de permitir la investigación y producción de organismos vivos modificados (OVM) destinados a la alimentación animal de especies no originarias del Perú, el Poder Ejecutivo plantea una redacción como la siguiente:

Ley 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años.

Se incorporan los numerales 4 y 5 al artículo 3 de la Ley 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años, en los siguientes términos:

"**Artículo 3. Exclusión de la Ley**

Se excluyen de la aplicación de esta Ley:

1. Los organismos vivos modificados (OVM) destinados al uso en espacio confinado para fines de investigación.

2. Los organismos vivos modificados (OVM) usados como productos farmacéuticos y veterinarios que se rigen por los tratados internacionales de los cuales el país es parte y normas especiales.

3. Los organismos vivos modificados (OVM) y/o sus productos derivados importados, para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento.

4. La producción de organismos vivos modificados (OVM) de las especies no originarias del Perú, destinados únicamente a la alimentación animal e industrias no alimentarias.

5. La investigación y producción de organismos vivos modificados (OVM) derivados de la edición génica y otras técnicas modernas de la biotecnología que no impliquen la combinación nueva de material genético o la transferencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante.

Los organismos vivos modificados (OVM) excluidos de la moratoria, están sujetos al análisis de riesgos previo a la autorización de su uso y a la aplicación de medidas para la evaluación, gestión y comunicación de riesgo, de conformidad con el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica), el Codex Alimentarius relacionados a los "Alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos", la Ley 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, su Reglamento y demás reglamentos sectoriales correspondientes."

Por Carta N° 122-2024/DE/COMEXPERU de fecha 29 de mayo de 2024 suscrita por su Jessica Luna Cárdenas su Directora Ejecutiva sobre este punto señala que esta moratoria habría causado serios perjuicios a la productividad agraria nacional por limitar la posibilidad de acceder a una biotecnología que la ciencia mayoritaria ha dispuesto que no genera daños a la salud ni al medio ambiente.

En ese sentido, esta comisión considera viable con modificaciones la atención del pedido de delegación de facultades en lo que respecta a modificar el artículo 3 de la Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional por un período de 10 años, con la finalidad de permitir la investigación y producción de OVM, la edición génica y otras técnicas modernas de biotecnología, lo cual contribuirá a la sostenibilidad de la agricultura y lograr mejores resultados ante los efectos del cambio climático, en virtud de los impactos positivos cualitativos y cuantitativos que esta medida puede representar para el desarrollo del agro en el Perú

Conclusión:

Este aspecto solicitado se encuentra justificado, aunque debe ser acotado para la delegación de facultades, por lo que se propone el siguiente texto sustitutorio:[246]

"Incorporar los numerales 4 y 5 al artículo 3 de la Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional por un período de 10 años, con la finalidad de permitir la producción de organismos vivos modificados (OVM) de las especies no originarias del Perú destinados únicamente a la alimentación animal e industrias no alimentarias, y a la investigación y producción de organismos vivos modificados (OVM), derivados de la edición génica y otras técnicas modernas de biotecnología, que no impliquen la combinación nueva de material genético o la transferencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante. lo cual contribuirá a la sostenibilidad de la agricultura y lograr mejores resultados ante los efectos del cambio climático".

3.1.47 Disponer la prórroga del mandato de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua, de sus Comités de Administración Temporal y de los otros órganos de similar denominación establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, hasta el 31 de diciembre de 2025.

[246] En la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2024, recogiendo el aporte del congresista Héctor Ventura Angel, se está delegando en este punto una facultad especifica, con un texto sustitutorio que precisa la facultad delegada, quien explica que debe modificarse el punto 2.1.28 en el Texto Sustitutorio del predictamen, pues es pertinente precisar que hay variedades y razas de especies (como en caso del maíz y algodón) de los cuales el Perú no es centro de origen y sí podrían ingresar para su producción en el país. De quedar el texto sin la precisión, ni los productores ni los centros de investigación podrían trabajar con maíz amarillo duro ni algodón. Por ello, es importante precisar en la formula normativa que la producción se autoriza para aquellas variedades o razas introducidas (no oriundas), puesto que el principal producto con el que se busca trabajar es el maíz amarillo duro que actualmente entra al país vía importación mientras nuestros productores no pueden cultivarlo.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos[247]

Mediante Resolución Ministerial N° 118-2020-MIDAGRI de fecha 14.05.2020, en el marco de la Ley N° 30157 y su Reglamento, se aprobó el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios con vigencia de cinco años, con posibilidad de extensión. Este programa se centra en el fortalecimiento institucional, el desarrollo tecnológico y la innovación, la mejora de la calidad de los servicios y la asistencia técnica especializada. La continuidad de este programa es crucial para mantener la recaudación económica y las tarifas del agua necesarias para financiar las operaciones, el mantenimiento y el desarrollo de la infraestructura hidráulica. Esto, a su vez, mejorará el suministro público de agua, beneficiando directamente a la actividad agraria en el marco de la Política Nacional Agraria 2021-2030.[248]

Sin embargo, el proceso de renovación de los consejos directivos no ha tenido resultados positivos oportunos, lo que ha llevado a la necesidad de emitir normas complementarias para facilitar el proceso electoral. Con un proceso electoral bajo la Ley N° 31801, se espera obtener mejores resultados, ya que se han establecido nuevas reglas que simplifican el proceso electoral, con lo que las organizaciones de usuarios de agua tendrán su vigencia de poder oportunamente, lo que permitirá continuar con el desarrollo de las actividades enmarcadas en la Política Nacional Agraria 2021-2030.[249]

En Perú, hay un total de 13,990 organizaciones de usuarios de agua, tanto reconocidas como no reconocidas. De estas, 128 son Juntas de Usuarios, 1,664 son Comisiones de Usuarios y 12,198 son Comités de Usuarios. Entre las 9,756 organizaciones reconocidas a nivel nacional, 128 son juntas de usuarios, 1,421 son comisiones de usuarios y 8,207 son comités de usuarios, representando a un total de 732,375 usuarios de agua. En cuanto a las organizaciones que tienen personalidad jurídica y que, por lo tanto, deben tener a sus consejos directivos registrados ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), hay 1,155 comisiones y 2,336 comités de usuarios con personalidad jurídica. Por lo tanto, 266 comisiones y 5,871 comités de usuarios no tienen personalidad jurídica, pero sí reconocimiento administrativo.[250]

---

[247] De la Exposición de Motivos sobre esta materia del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[248] De la exposición de motivos del punto 3.1.47 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[249] De la exposición de motivos del punto 3.1.47 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[250] De la exposición de motivos del punto 3.1.47 del proyecto de ley 7752/2023-PE

Además, es importante destacar que las organizaciones de usuarios de agua debieron llevar a cabo sus procesos electorales en 2020, desde junio hasta noviembre. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 y la declaración del estado de emergencia nacional, las reuniones, como las asambleas generales y otras sesiones, se vieron limitadas, por lo que las juntas de usuarios no pudieron renovar a sus consejos directivos en 2020. Por lo tanto, a través de una norma excepcional y urgente, se dictaron disposiciones para que las organizaciones de usuarios de agua mantengan su representatividad, otorgándoles la continuidad de los mandatos de los consejos directivos durante todo el año 2021. Al mismo tiempo, se dictaron normas complementarias que regularon el proceso electoral extraordinario para que, a través de elecciones democráticas, renueven a sus directivos hasta el 31.12.2021. La norma clave es la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 143-2020 (publicado el 29.12.2020).

> **CUARTA**.- Regulación extraordinaria para las organizaciones de usuarios de agua durante el año 2021. Por excepción, autorizase a la Autoridad Nacional del Agua para que, en un plazo no mayor a seis (06) meses, contado desde el 01 de junio del año 2021, convoque a un proceso electoral extraordinario de las organizaciones de usuarios de agua, de renovación de sus consejos directivos para el periodo 2021-2024; en consecuencia dispóngase la continuidad del mandato de los consejos directivos de las citadas organizaciones, de sus Comités de Administración Temporal y de los otros órganos de similar denominación establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, hasta el día hábil siguiente de notificado el resultado de la elección por el comité electoral o el comité de impugnaciones, según corresponda. El nuevo consejo directivo sujeta su periodo de mandato al plazo que quede por transcurrir de los cuatro (04) años originalmente previstos en la Ley N° 30157, Ley de las organizaciones de usuarios de agua. Para los citados efectos, por el sólo mérito del presente dispositivo, la Administración Local de Agua de la Autoridad Nacional del Agua comunica mediante oficio la continuidad de los mandatos de los consejos directivos, Comités de Administración Temporal y otros similares de las organizaciones de usuarios de agua: i) a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, respecto de Juntas, Comisiones y Comités de usuarios para su respectiva inscripción; ii) a las comisiones y comités de usuarios de agua que no cuentan con partida registral en la SUNARP.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego mediante Decreto Supremo, aprueba las disposiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Es preciso indicar que, el citado decreto de urgencia se complementa con lo dispuesto en la Ley N° 30157 y su Reglamento, precisándose en el numeral 36.3 del artículo 36 del Reglamento que, "En los casos en los que habiéndose convocado a elección de consejo directivo no se obtuviere resultado válido, se continuarán realizando nuevas convocatorias hasta obtener un consejo directivo válidamente elegido. En estos casos el consejo directivo asumirá sus funciones en forma inmediata y sujetará su periodo de mandato al plazo que quede por transcurrir de los cuatro (4) años originalmente previstos".

Según el artículo 57 del Reglamento, en su numeral 57.2, se establece que si una elección de consejo directivo no produce un resultado válido, se realizarán nuevas convocatorias hasta lograr un consejo directivo. En estos casos, el consejo directivo asumirá sus funciones de inmediato y su mandato estará sujeto al tiempo restante de los cuatro años originalmente previstos.[251]

Además, es importante mencionar que el decreto de urgencia citado garantizó la continuidad del mandato de los consejos directivos, teniendo en cuenta que su vigencia era solo hasta el 31.12.2020. Esto se hizo para evitar que las organizaciones de usuarios de agua quedaran sin liderazgo y pudieran llevar a cabo su proceso electoral en el contexto de la emergencia sanitaria.[252]

En este sentido, se emitieron normas complementarias para el desarrollo del proceso electoral de las organizaciones de usuarios de agua para la elección de los consejos directivos para el periodo 2021-2024. El proceso electoral que se llevó a cabo en 2021 se desarrolló de acuerdo con las disposiciones establecidas en los siguientes decretos supremos y resoluciones jefaturales: Decretos Supremos N° 003-2021-MIDAGRI (26.02.2021), 008-2021-MIDAGRI (29.04.2021), 015-2021-MIDAGRI (09.07.2021) y Resoluciones Jefaturales N° 039-2021-ANA (28.02.2021),

[251] De la exposición de motivos del punto 3.1.47 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[252] De la exposición de motivos del punto 3.1.47 del proyecto de ley 7752/2023-PE

068-2021-ANA (25.03.2021), 117-2021-ANA (03.06.2021), 145-2021-ANA (15.07.2021), 162-2021-ANA (27.07.2021), 200-2021-ANA (20.10.2021).[253]

Además, se promulgó la Ley Nº 31345 (publicado el 17.08.2021) que modificó el artículo 8 de la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua LOUA, el cual quedó redactado conforme al tenor literal siguiente:

> **"Artículo 8. Quórum**.
>
> La elección de los Consejos Directivos de las Organizaciones de Usuarios de Agua, se realiza en acto electoral descentralizado, el cual requiere la participación de más del 35% de los electores que integran el padrón electoral aprobado por la respectiva Administración Local de Agua, caso contrario, el comité electoral convoca a un segundo acto electoral que requiere como mínimo la participación del 25% de los electores que integran el referido padrón. De no existir resultado válido, convoca a un tercer acto electoral y cuantos otros sean necesarios, hasta obtener un resultado válido, para lo cual basta la participación del 20% de electores" Nº 019-2021-MIDAGRI que modifica el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 003-2021-MIDAGRI.
>
> A consecuencia de esta modificación, fue necesario emitir el Decreto Supremo Nº 019-2021- MIDAGRI (17.09.2021) para modificar el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 003- 2021-MIDAGRI y que guarde coherencia con este nuevo texto normativo. Proceso electoral desarrollado en el año 2022 Con Decreto Supremo N° 026-2021-MIDAGRI (publicado el 31.12.2021) se modificó el Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua, teniéndose para el proceso electoral desarrollado en el año 2022 las normas complementarias siguientes: Decretos Supremos N° Resoluciones Jefaturales N° 026-2021-MIDAGRI (31.12.2021) 003-2022-ANA (06.01.2022) 026-2022-ANA (27.01.2022) 091-2022-ANA (28.03.2022) 131-2022-ANA (06.05.2022) 016-2022-MIDAGRI (07.10.2022) 314-2022-ANA (11.10.2022).

[253] De la exposición de motivos del punto 3.1.47 del proyecto de ley 7752/2023-PE

Proceso electoral desarrollado en el año 2023."

Para las organizaciones de usuarios de agua que no pudieron elegir a sus consejos directivos antes del 31.12.2022, se promulgó el Decreto Supremo N° 002-2023-MIDAGRI (publicado el 21.03.2023). Este decreto establece las pautas para el desarrollo de un proceso electoral complementario para la elección de los respectivos consejos directivos. Además, se emitió la Resolución Jefatural N° 0095-2023-ANA (23.03.2023), que establece las directrices para el desarrollo de acciones democráticas para la elección de los consejos directivos.[254]

En cuanto a la recaudación de la tarifa de agua y la retribución económica de todas las juntas de usuarios a nivel nacional, los datos son los siguientes:

Recaudación de la tarifa de agua: S/ 135,057,903.77 en 2022 y S/ 125,913,010.07 en 2023. Recaudación de la retribución económica: S/ 16,526,862.06 en 2022 y S/ 16,877,796.76 en 2023.[255]

Se observa que la recaudación de la tarifa de agua, que financia diversas actividades de las juntas de usuarios, como la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, ha disminuido en 2023. Esto podría afectar la distribución del recurso hídrico por parte de los operadores de la infraestructura hidráulica, lo que resultaría en el incumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica (POMDIH).[256]

Además, según la normativa vigente, el año 2024 es un año electoral, ya que debe llevarse a cabo el proceso electoral de renovación de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua para el período 2025-2028. Sin embargo, aproximadamente el 85% de las juntas de usuarios no ha considerado un presupuesto en su POMDIH para las actividades de desarrollo del proceso electoral para el período 2025-2029, el cual es aprobado por la Administración Local de Agua mediante resolución administrativa.[257]

---

[254] De la exposición de motivos del punto 3.1.47 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[255] Ibidem
[256] De la exposición de motivos del punto 3.1.47 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[257] De la exposición de motivos del punto 3.1.47 del proyecto de ley 7752/2023-PE

Finalmente, el proceso de reglamentación de la Ley N° 31801, que regula las Organizaciones de Usuarios de Agua para el Fortalecimiento de su participación en la Gestión Multisectorial de los Recursos Hídricos, se ha llevado a cabo en el marco de la consulta pública de la manera siguiente:

a) Elaboración del Primer Borrador de Reglamento. Se habilitó el formulario en línea: https://forms.office.com/r/0H6NuKKPYh, a fin de recabar aportes de las organizaciones de usuarios de agua, elaborándose el Primer Borrador de Reglamento.
b) Elaboración del Segundo Borrador de Reglamento Una vez obtenido el Primer Borrador de Reglamento, se realizaron acciones para poder promover que las juntas de usuarios, entre otros actores, realicen sus aportes a fin obtener un Segundo Borrador de Reglamento, desarrollándose 18 talleres descentralizados dirigidos a todas las juntas de usuarios a nivel nacional y usuarios no agrarios. Con los aportes recogidos en estos talleres, se elaboró el Segundo Borrador de Reglamento.
c) Elaboración del Tercer Borrador de Reglamento Una vez obtenido el Segundo Borrador de Reglamento, se desarrollaron dos talleres nacionales en la ciudad de Lima, convocándose a los presidentes de las juntas de usuarios y representantes de usuarios de agua no agrarios, así como entidades estatales relacionadas a la Ley N° 31801. A sugerencia de las juntas de usuarios, la metodología utilizada consistió en que todos los participantes analicen en plenaria el Segundo Borrador de Reglamento. Al culminar el Segundo Taller Nacional, las juntas de usuarios eligieron en Plenaria a 25 representantes de juntas de usuarios según los departamentos del Perú para que continúen con la siguiente etapa de evaluación de aportes del Tercer Borrador de Reglamento y formen parte del Grupo de Trabajo Multisectorial.
d) Elaboración y Publicación de la Versión Preliminar de Reglamento Una vez obtenido el Tercer Borrador de Reglamento, se reunió el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado por los representantes de juntas de usuarios, representantes de los usuarios de agua no agrarios y entidades involucradas a la Ley N° 31801. La metodología empleada consistió en que los participantes se encargaron de analizar y discutir los aportes contenidos en el Tercer Borrador de Reglamento, validando su pertinencia técnica-legal para ser incluidos en la versión preliminar. Habiéndose culminado las reuniones del

Grupo de Trabajo Multisectorial, se obtuvo la Versión Preliminar de Reglamento, la que se elevó al MIDAGRI para su publicación. Mediante Resolución Ministerial N° 0379-2023-MIDAGRI publicada el 10.11.2023 en el diario oficial El Peruano, se dispone la publicación del "Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31801, Ley que regula las Organizaciones de Usuarios de Agua para el Fortalecimiento de su participación en la Gestión Multisectorial de los Recursos Hídricos, del referido Reglamento y de su Exposición de Motivos", por un plazo de quince (15) días calendario contado a partir del día hábil siguiente de la publicación, siendo éste el día lunes 13.11.2023 y culminando el día 27.11.2023, a fin de recibir aportes virtuales del público en general, habilitándose el link siguiente: https://forms.office.com/r/95VJ7N58s0. Se procedió a recepcionar, consolidar y sistematizar los comentarios, aportes, recomendaciones y sugerencias recibidas a la versión preliminar del Reglamento.

e) Elaboración de Versión Final de Proyecto De Reglamento Luego de la publicación de la Versión Preliminar de Reglamento y la consolidación de aportes correspondientes, se realizó un Tercer Taller Nacional en diciembre del 2023, contándose con la participación de representantes de las juntas de usuarios, usuarios de agua no agrarios y entidades estatales relacionadas con los alcances de la Ley N° 31801. De acuerdo a la metodología del taller, se expuso en plenaria cada uno de los artículos haciendo referencia a los aportes virtuales recibidos, se analizó la pertinencia de los mismos y se planteó la redacción final de cada artículo con los aportes recibidos en la plenaria, llegándose al consenso de los participantes, y analizándose que lo propuesto no se contraponga con otras normas.

f) Con Oficio N° 0001-2024-ANA-J de fecha 03.01.2024 se remitió al MIDAGRI el Proyecto de Reglamento de la Ley N° 31801 para conocimiento y fines, posteriormente se obtuvo la conformidad de todas las entidades estatales involucradas con el proceso de Reglamentación, en lo correspondiente a sus atribuciones. Finalmente, con Oficio N° 0153- 2024-ANA-J de fecha 29.02.2024 se remite al MIDAGRI el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31801 "Ley que regula las organizaciones de usuarios de agua para el fortalecimiento de su participación en la gestión multisectorial de los recursos hídricos" para su conformidad y continuación del procedimiento que corresponde a la Reglamentación de la Ley N° 31801 en el marco del

Reglamento de Mejora de Calidad Regulatoria y lineamientos para Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante) aprobado con Decreto Supremo N° 063-2021-PCM.

g) En cumplimiento a lo señalado por el citado Decreto Supremo, el proyecto de Reglamento ya se encuentra registrado en el Aplicativo informático AIR Ex Ante con toda la documentación requerida, administrado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el cual se ingresó la información requerida por el AIR Ex Ante para su posterior revisión por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria. [258]

Es importante resaltar que la entrada en vigencia de la Ley N° 31801 y su Reglamento implicará un proceso inicial y permanente de difusión, sensibilización y capacitación a todos los usuarios a nivel nacional, con un proceso de adecuación de las organizaciones de usuarios de agua a la nueva normatividad.[259]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas agrarios y de riego pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De la problemática que se pretende solucionar, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego propone la continuidad del programa de fortalecimiento de las Juntas de Usuarios. No dejar caer en acefalía a las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), en las que recaerían al no poder lograr el quorum que establece la Ley 30157, colocando en riesgo la cobranza de

[258] De la exposición de motivos del punto 3.1.47 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[259] De la Exposición de Motivos sobre esta materia del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

la tarifa de agua y la retribución económica, la falta de previsión de las Organizaciones de Usuarios de Agua para el financiamiento de su proceso electoral, asegurar la participación de la ONPE como supervisor para brindar asistencia técnica, y el cumplimiento del mandato de cuatro años de los consejos directivos de las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA).[260]

Sobre la necesidad de la intervención normativa, este sector del Poder Ejecutivo señala que la ley vigente dejará de ser aplicable a la entrada en vigencia de la nueva norma, por lo que es necesario una norma con rango legal que garantice el fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones de usuarios de agua con la finalidad de que no se vean afectadas sus labores de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica bajo su administración, a fin de seguir brindando el servicio público de suministro de agua a sus usuarios[261].

Del impacto cualitativo y cuantitativo es un problema social, económico y de gestión de la infraestructura hidráulica, en la medida que afecta de a la población de bajos recursos económicos que tienen como principal actividad económica la agricultura familiar y seguridad alimentaria, la recaudación de la tarifa del agua y retribución económica por el uso del agua puede verse afectada, así como la titularidad y responsabilidad por parte de las organizaciones de usuarios de agua respecto al manejo de la cosa pública.[262]

La afectación de la cobranza de tarifa de agua como consecuencia de no prorrogar los mandatos de los consejos directivos ocasionaría que la organización de usuarios de agua puede verse afectada, así como al titularidad y responsabilidad por parte de las organizaciones de usuarios de agua respecto al manejo de la cosa pública.[263]

---

[260] De las respuestas a las consultas formuladas en la mesa técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento de la Sesión del 22 de mayo de 2024 remitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y del anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Ronald Valencia Manchego y Alonso Zapata Cornejo. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg0/pdf

[261] Del anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Ronald Valencia Manchego y Alonso Zapata Cornejo. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg0/pdf

[262] Del anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Ronald Valencia Manchego y Alonso Zapata Cornejo. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg0/pdf

[263] Del anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Ronald Valencia Manchego y Alonso Zapata Cornejo. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg0/pdf

El programa de fortalecimiento de las juntas de usuarios se vería afectado, debido a que al no tenerse continuidad de los consejos directivos ni la vigencia de poder correspondiente, las juntas de usuarios no podrían asumir los compromisos que acarrea el programa.[264]
En relación al aspecto e impacto cuantitativo, se adjunta como data que los afectados serían 732375 usuarios de agua, 9756 organizaciones de usuarios de agua, a nivel nacional correspondiendo a 128 juntas de usuarios, 1421 comisiones de usuarios, y 8207 comités de usuarios.[265] Los costos respecto a la cobranza de tarifa de agua en el año 2023 fue de S/. 125,913,010.07 y una retribución económica de 16,877,796, 76 montos que pueden verse disminuidos en el año 2024. Hay 128 juntas de usuarios que puede ser fortalecidas a través del fortalecimiento de las Juntas Usuarios.[266]

En consecuencia de no intervenirse legislativamente, el mandato de los actuales consejos directivos culminaría el 31 de diciembre de 2024, en consecuencia, a partir de 1 de enero de 2025 estas organizaciones quedarían por mandato de la Ley 30157 (aún vigente) las Organizaciones de Usuarios de Agua quedarán sin capacidad de tomar decisiones, convenios, poniéndose en riesgo sus labores de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica bajo su administración, así como la continuidad del servicio público de suministro de agua a sus usuarios lo cual determina un daño enorme a la agricultura nacional. [267]

Asimismo, los ciudadanos Américo Valderrama Peña, con documento nacional de identidad 18009618, presidente de la Junta Nacional de Organización de Usuarios de Agua del Perú, Benito Saavedra Marrero con documento nacional de identidad 18854028, presidente de la Junta de Usuarios del sector hidráulico menor Chicama, Armando Dextre Requena con documento nacional de identidad 15683441, presidente

---

[264] Del anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Ronald Valencia Manchego y Alonso Zapata Cornejo. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg0/pdf
[265] Del anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Ronald Valencia Manchego y Alonso Zapata Cornejo. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg0/pdf
[266] Del anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Ronald Valencia Manchego y Alonso Zapata Cornejo. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg0/pdf
[267] Del anexo 02 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas suscrito por Ronald Valencia Manchego y Alonso Zapata Cornejo. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg0/pdf

de la Junta de Usuarios de Valle de Pativilca, y Orlando Manrique Guerra con documento nacional de identidad 29528932, entregan a la Comisión de Constitución una Ayuda Memoria en la cual solicitan que se respete el plazo de los actuales consejos directivos conforme a la ley 3015, así como estamos a puertas de la implementación de la Ley 31801 y su reglamento, que conlleva al cambio de las estructuras y adecuación de las organizaciones de usuarios de agua, por lo que consideran viable la solicitud que dispone la prórroga del mandato de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de aguas, de los Comités de Administración Temporal y de los otros órganos de similar denominación establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esta Comisión recomienda aprobar este aspecto así solicitado en el punto de la materia asi solicitado para la delegación de facultades, a fin de evitar consecuencias funestas para las organizaciones de usuarios de agua, las que devendrían en incapaces para la toma de decisiones y firma de documentos y convenios, deviniendo en la interrupción de sus labores de operación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas bajo su jurisdicción, por lo que el servicio de suministro de agua se detendría en detrimento de la actividad agrícola del país.

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado para la delegación de facultades. Por tanto, se mantiene en sus términos el texto presentado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley estudiado.

3.1.48 Establecer el marco normativo para fortalecer la gestión de los servicios públicos de protección social ante emergencias, mediante su adaptación, de manera preventiva, para garantizar su continuidad operativa, a través de la identificación de las acciones a cargo de las entidades públicas prestadoras de servicios de protección social y de las entidades rectoras y/o conductoras de emergencias; acciones de colaboración intersectorial e intergubernamental; habilitación de acciones orientadas al rediseño de modelos operacionales de los servicios, el diseño de nuevos servicios o intervenciones, el diseño o rediseño de servicios e intervenciones dirigidas a la atención temporal extraordinaria de nuevos usuarios, incluyendo a la población migrante y refugiada; el adelanto en la entrega de bienes o servicios, la exoneración temporal de condicionalidades, la ampliación de beneficios dirigidos a poblaciones vulnerables; el intercambio de información nominal y el acceso a plataformas de información; la habilitación para que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de sus competencias, determine la instancia que se encargue de gestionar la entrega de transferencias monetarias en situaciones de emergencia, y su alcance; así como modificar el artículo 8 de la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para precisar su función en el marco de la adaptación de los servicios públicos de protección social.

Del problema público:

Varios estudios y evaluaciones han revelado que la reacción inicial del Estado peruano ante situaciones de emergencia ha sido rápida, aunque enfrenta importantes retos en su implementación para atender a toda la población vulnerable y afectada. Estos desafíos incluyen la activación o modificación de intervenciones para situaciones de emergencia sin protocolos o lineamientos preestablecidos, la asignación y mantenimiento de roles de las entidades responsables de la preparación y respuesta, el intercambio rápido de información durante la emergencia

y la implementación de mecanismos presupuestarios para la respuesta ante una emergencia.[268]

En otras palabras, el Estado peruano carece de un marco normativo que aborde de manera integral la continuidad de los servicios de protección social en situaciones de emergencia distintas a los desastres naturales, como las sanitarias, alimentarias o conflictos sociales. La atención en estos casos se ha llevado a cabo a través de normativas de urgencia y emergencia principalmente sectoriales. Por lo tanto, cuando se abordan los servicios de protección social en situaciones de emergencia, nos encontramos con un arreglo institucional fragmentado.[269]

Por lo tanto, se identifica como un problema público la falta de adaptación de los servicios públicos de protección social para garantizar su continuidad en situaciones de emergencia. Esto indica que hay un asunto pendiente de atención por parte del Estado que afecta directamente a la población, especialmente a aquellos en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella. Es decir, la falta de adaptación de los servicios públicos de protección social, dado que las entidades proveedoras de servicios necesitan un marco que facilite su adaptación progresiva y preventiva.[270]

En este contexto, es importante recordar que el MIDIS se encarga de la protección social de las poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono, y desde esa perspectiva tiene la función de supervisar y evaluar el impacto de las políticas y programas sociales a nivel intergubernamental. Por lo tanto, se identifica que, como parte de las acciones de mejora continua que forman parte del proceso de modernización de la gestión pública, es necesario que dicho Ministerio cuente con un marco legal claro que le permita emitir las orientaciones necesarias para el proceso de adaptación de dichos servicios públicos de protección social, ya que la falta de continuidad de los mismos en situaciones de emergencia tiene un impacto negativo en la población en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella.[271]

---

[268] De la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[269] De la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[270] Ibídem.
[271] De la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

Por lo tanto, se propone una solución normativa a este problema público, mediante la incorporación de un literal que autorice al Poder Ejecutivo a establecer disposiciones que promuevan y faciliten condiciones para el proceso de adaptación de los servicios públicos de protección social ante emergencias, con el fin de asegurar que, frente al impacto de una emergencia, las personas afectadas no caigan o agraven su situación de pobreza.[272]

Estas disposiciones incluyen la identificación de las acciones a cargo de las entidades públicas que prestan servicios de protección social y de las entidades rectoras y/o conductoras de emergencias; acciones de colaboración intersectorial e intergubernamental; habilitación de acciones orientadas al rediseño de modelos operacionales de los servicios, el diseño de nuevos servicios o intervenciones, el diseño o rediseño de servicios e intervenciones dirigidas a la atención temporal extraordinaria de nuevos usuarios, incluyendo a la población migrante y refugiada; el adelanto en la entrega de bienes o servicios, la exoneración temporal de condicionalidades, la ampliación de beneficios dirigidos a poblaciones vulnerables; el intercambio de información nominal y el acceso a plataformas de información; la habilitación para la determinación de la instancia del MIDIS encargada de gestionar la entrega de transferencias monetarias en situaciones de emergencia, y su alcance; así como la modificación del artículo 8 de la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para precisar su función en el marco de la adaptación de los servicios públicos de protección social.[273]

Con esto, se busca garantizar que los servicios públicos orientados a la protección social, al estar adaptados, mantengan su continuidad operativa ante una emergencia, de modo que se asegure que las personas afectadas continúen recibiendo dichos servicios, para evitar que caigan en pobreza o agraven dicha situación.[274]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

---

[272] ibídem
[273] De la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[274] Ibídem

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas de desarrollo e inclusión social pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

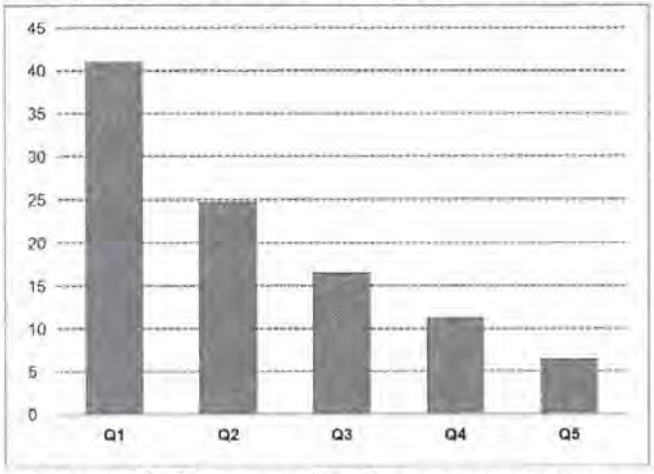
Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad. [275]

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Análisis de la necesidad de la propuesta: Según los datos recogidos por la Encuesta Nacional de Hogares, el 40.8% de los individuos pertenecientes al primer quintil de ingresos (es decir, los individuos con los ingresos más bajos) reportaron haber experimentado adversidades debido a fenómenos como sequías, inundaciones, plagas, entre otros. Esto contrasta notablemente con el 5.3% de los individuos que se encuentran en el quinto quintil de ingresos (es decir, los individuos con los ingresos más altos) que reportaron haber sido afectados por las mismas circunstancias.[276]

[275] Ibidem
[276] Idea de la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

Incidencia de choques por quintil de ingresos, Perú (2022)
En los últimos 12 meses, ¿se ha visto su hogar afectado por robos, asalto, sequías, tormentas, plagas o inundaciones?



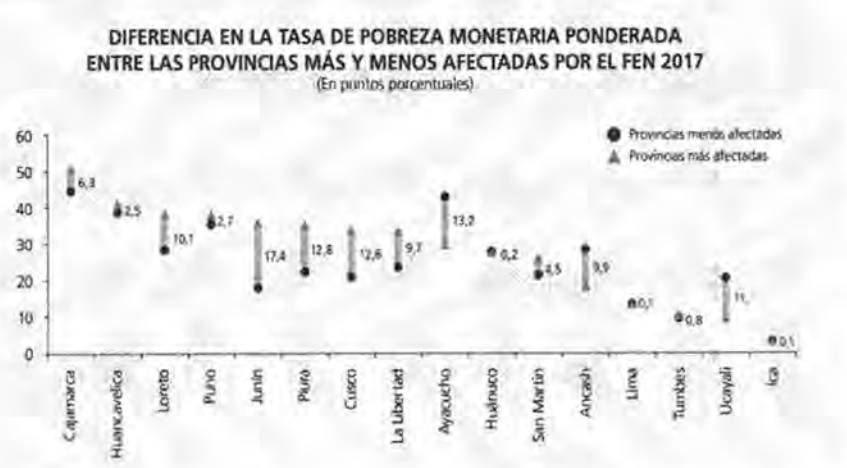
Porcentaje de ocurrencias de choques por hogar
Fuente: INEI-ENAHO 2022 [277]

En otras palabras, las personas más pobres son las más afectadas por los choques. Los individuos pobres y vulnerables son desproporcionadamente afectados por los desastres, ya que sus medios de vida dependen de activos menos diversificados y más vulnerables; su consumo se encuentra más cerca de los niveles de subsistencia; carecen de ahorros para amortiguar el impacto de las crisis; su salud y educación están en mayor riesgo; y pueden requerir más tiempo para recuperarse. Cuando los pobres son afectados, la proporción de riqueza que pierden es de dos a tres veces mayor que en el caso de las personas no pobres.[278]

Un estudio adicional del Banco Central de Reserva de diciembre de 2023, que examina la relación entre la vulnerabilidad de las personas frente al Fenómeno El Niño (FEN) y la situación de pobreza, indica que las personas que viven en

[277] Cuadro obtenido de la Exposición de motivos del punto 3.1.48 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[278] Idea de la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

provincias más afectadas por el FEN tienen una mayor probabilidad de ser pobres en el año siguiente, en comparación con las menos o no afectadas. De hecho, se descubrió que en las regiones de la costa norte más impactadas por el FEN, la tasa de pobreza era, en promedio, 10 puntos porcentuales mayor que en las regiones menos afectadas. Esta evidencia demuestra que los choques son, de hecho, un factor explicativo de la exclusión social que genera pobreza.[279]



Cuadro de la Exposición de Motivos del punto 3.1.48 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE[280]

Es importante destacar, por ejemplo, la reciente crisis de la COVID-19 que subrayó la necesidad de asegurar que todos los sistemas de protección social sean adaptativos y capaces de responder rápidamente al impacto de diversos tipos de choques. No podemos olvidar que Perú es altamente susceptible a terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra (huaycos) que afectan significativamente la infraestructura y las condiciones de vida de su población; pero

[279] Idea de la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[280] Cuadro de la Exposición de Motivos del punto 3.1.48 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

también a diferentes tipos de conflictos sociales, epidemias, plagas y una serie de riesgos sociales.[281]

En este contexto, Perú necesita urgentemente una regulación sobre los servicios públicos relacionados con la protección social en situaciones de emergencia, para asegurar que las personas no empeoren su situación de pobreza o caigan en ella. Aunque el MIDIS tiene la facultad de regular sobre el tema, dado que esto implica la rectoría de varios sectores y la participación de los gobiernos regionales y locales, se considera necesario precisar el marco legal, con el fin de definir el alcance del MIDIS en el marco de su rectoría.[282]

Esto, junto con la regulación que se presenta, permitirá la adopción rápida y urgente de decisiones, ya que incluye a varios sectores y niveles de gobierno. Además, debe servir para mejorar la identificación del riesgo y la población afectada, la preparación, la reconstrucción resiliente y la protección financiera; con el objetivo de garantizar un mayor impacto en la promoción de la resiliencia y recuperación frente a eventos adversos como: eventos naturales, crisis alimentarias, epidemias, conflictos y otras situaciones de fragilidad.[283]

Como se puede ver, un objetivo importante de un marco de protección social es resolver la fragmentación de la preparación y activar y verificar el desarrollo de los requisitos legales y operativos para la preparación de la respuesta. Además, una regulación que sea estable para estos esfuerzos permite la sostenibilidad y la operación continua de estas acciones. Además, se busca definir la función del MIDIS en el marco de la adaptación de los servicios públicos de protección social ante emergencias, de acuerdo a las competencias que ya le define su propia ley de creación.[284]

De acuerdo a la ayuda memoria del numeral 3.1.48 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social suscrita por Milenka Eslava Diaz, esta materia busca un marco

[281] Idea de la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[282] Tomado de la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[283] Como lo explica la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[284] Idea de la Exposición de Motivos 3.1.48. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

especial con rango de ley que integre la acción del Estado bajo un enfoque preventivo que asegure la continuidad de los servicios de prestación social durante una situación de emergencia, evitando que se afecte su plena prestación o continuidad. De ese modo busca que se establezcan acciones para cuando así corresponda enfrenten a una emergencia, la adaptación implica los siguientes aspectos de acuerdo a la que establece la ley autoritativa:

- Rediseño de modelos operacionales de los servicios de prestación social
- Diseño de nuevos servicios
- Adelanto en la entrega de bienes o servicios
- Exoneración temporal de condicionalidades.
- Diseño y rediseño de servicios e intervenciones dirigidas a la atención temporal extraordinaria de nuevos usuarios, incluyendo población migrante y refugiada.
- Ampliación de beneficios dirigidos a poblaciones vulnerables.
- Mecanismos de colaboración.

De acuerdo a lo que afirma el Ministerio de Inclusión y Desarrollo social en la ayuda memoria descrita línea arriba, el Proyecto de Ley considera criterios mínimos para determinar cuando se activa alguna de las estas acciones, sin perjuicio que la normativa complementaria lo desarrolle a mayor detalle, señalando de manera directa que la responsabilidad de las entidades se mantiene respecto de la entrega de bienes y servicios, lo cual no afecta el control frente los gastos que se incurra.[285]

En esta ayuda memoria que el Sector ha hecho llegar, se señala la complejidad de la delegación solicitada cuando se dice que: "Recoge el concepto amplio de protección social ante emergencia, permitiendo ampliar de manera temporal y extraordinaria la cobertura de los Servicios de Prestación Social a otros usuarios no solo a los pobres, sino en general a cualquier afectado. Además deja establecido que mediante norma complementaria se regularan los criterios de dicha ampliación. Asimismo, dentro de este ambicioso pedido de delegación de facultades se busca fortalecer el rol del MIDIS como orientador y articulador del proceso de adaptación de los servicios de prestación social, pues además deja en claro que la operación y

[285] Ayuda Memoria del numeral 3.1.48 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social suscrita por Milenka Eslava Diaz En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg1/pdf

adaptación de estos servicios de prestación social corresponde a cada sector conforme a sus competencias. De ahí que el proyecto de ley pretenda modificar la Ley de Organización y Funciones del MIDIS precisando como sus funciones generales "el orientar la acción multisectorial de la adaptación de los servicios públicos de protección social a cargo de otras entidades, de manera preventiva para su actuación ante emergencia, lo que incluiría entre otros la emisión de lineamientos que coadyuven al desarrollo de la materia delegada.[286]

Además dicha ayuda memoria, señala que como parte de la preparación de una emergencia, las entidades públicas, a cargo de los servicios de prestación social intercambien información nominal de los usuarios o beneficiarios de dichos servicios, exonerándolos de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. De la misma forma, se busca establecer que las entidades a cargo de organizar la acción del Estado en el marco de las emergencias (SINAGERD, CENEPRED; MININTER, etc., compartan información antes, durante y después de la emergencia con las entidades prestadoras de Servicios de Prestación Social, pudiendo disponer el uso compartido de sistemas o plataformas incluyendo aquellas que contienen información nominal. [287]

A su vez, demanda de los rectores de sistemas administrativos, cuyas competencias y funciones se determinan por ley, que, cuando así corresponda, incorporen en sus regulaciones supuestos especiales que brinden mayor flexibilidad a las entidades a cargo de servicios de prestación social para incorporar sus adaptaciones en caso de una emergencia en su marco estratégico, operativo y financiero. Lo que debe guardar concordancia con lo que señala la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en cuanto a que los entes rectores de sistemas administrativos "implementan acciones que contribuyan a la eficiencia y la simplificación de los sistemas administrativos bajo su competencia, para lo cual revisan periódicamente

[286] Tomado de la Ayuda Memoria del numeral 3.1.48 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social suscrita por Milenka Eslava Diaz En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg1/pdf
[287] Como lo señala la Ayuda Memoria del numeral 3.1.48 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social suscrita por Milenka Eslava Diaz En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg1/pdf

sus regulaciones a fin de determinar el efecto y los costos de su aplicación en la gestión pública, considerando la heterogeneidad institucional del Estado."[288]

Por Oficio 1347-2023-2024/CISPCD/CR de fecha 27 de mayo de 2024, de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad suscrito por su presidenta Yorel Kira Alcarraz Agüero considera que en este punto la solicitud de delegación de facultades es viable.

Esta Comisión viendo la problemática planteada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la intervención normativa que requiere recomienda no delegar facultades por cuanto no se puede llegar a determinar de manera concisa y clara a partir de la exposición de motivos, si los puntos determinados como intervención normativa que conlleva esta delegación podrían dar lugar a conflictos con las competencias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y otros sectores, al tratarse de un tema especializado que, implica el debate social de diversos actores sociales, sectores e incluso niveles de gobierno; así como involucra habilitaciones presupuestales y exoneración de algunas condicionalidades, de ese modo esta Comisión considera que lo más adecuado es que esta propuesta sea canalizada a través de un proyecto de ley que implique un estudio y debate más profundo al interior del Congreso de la República escuchando especialistas tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Por lo tanto, no es pertinente que sea tramitado a través de una delegación de facultades.

Conclusión:
No se delegará facultades en este extremo. Esta solicitud debe ser canalizada a través de un proyecto de ley y debe ser determinada de una forma más precisa, para permitir un amplio debate con diversos actores sociales, sectores, y niveles de gobierno en el Pleno del Congreso de la República.[289]

---

[288] De acuerdo a Ayuda Memoria del numeral 3.1.48 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social suscrita por Milenka Eslava Diaz En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg1/pdf

[289] Este pedido tiene su justificación en que la respuesta estatal ante los diversos tipos de emergencias ha resultado al inicio, rápida, pero con grandes problemas en la implementación para atender a toda la población afectada, para activar intervenciones o modificar las mismas para la situación de emergencia sin protocolos o lineamientos preestablecidos, o problemas para asignar y mantener los roles de las entidades responsables

3.1.49 Modificar el numeral 4.6 del artículo 4 y la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, referidos a la nómina de especialistas para ejercer las funciones de revisión de estudios de impacto ambiental y supervisión y/o acompañamiento de la línea base y opiniones técnicas, según corresponda, a fin de fortalecer, agilizar y reducir los tiempos de evaluación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La propuesta normativa busca actualizar el artículo 4 y la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, que promueve las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, debido a su regulación sobre las listas de especialistas en temas ambientales.[290]

---

de la preparación y la respuesta, así como para intercambiar la información de manera rápida durante la emergencia o implementar mecanismos presupuestarios para la respuesta ante una emergencia.

Por estas razones, resulta razonable otorgar estas facultades que se refiere a diversas habilitaciones para que pueda llevar a cabo:

- Acciones de prevención y de colaboración entre los diversos sectores involucrados; y hacer intercambio de información entre sectores y plataformas,
- Rediseñar el modelo de los servicios o crear nuevos servicios temporales y extraordinarios, inclusive para refugiados y migrantes, así como adelantar la entrega de bienes y servicios,
- También para que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social determine la instancia que se encargue de la entrega de transferencias monetarias en situaciones de emergencia,
- Y que pueda modificarse la ley del MIDIS para precisar su función referida a la adaptación de los servicios públicos de protección social.

[290] De la exposición de motivos 3.1.49. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

El objetivo es permitir al Ministerio de la Producción formar su propio grupo de expertos para fortalecer sus capacidades operativas en la revisión de estudios de impacto ambiental y la emisión de opiniones técnicas. Esto facilitará y acelerará el desarrollo de proyectos de inversión, promoviendo la inversión privada y público-privada y la gestión de servicios públicos ambientales.[291]

La aprobación de los estudios ambientales es un requisito previo para la ejecución de proyectos de inversión, proporcionando seguridad jurídica para la continuidad de las operaciones económicas.[292]

A abril de 2024, el Ministerio de la Producción tiene en trámite 203 expedientes de gestión ambiental para el sector pesquero, con una inversión declarada de 650 millones de soles, y 179 expedientes para el sector industrial, con una inversión declarada de 42 millones de soles.[293]

Aunque el Ministerio de la Producción cuenta con un equipo de profesionales especializados, se necesita reforzar su capacidad operativa para acelerar la evaluación de los estudios ambientales y agilizar la evaluación ambiental de los proyectos de inversión en los sectores pesquero e industrial.[294]

Facultar al Ministerio de la Producción para crear su propia lista de especialistas, al igual que otros sectores con funciones ambientales similares, fortalecerá y agilizará los procedimientos de evaluación ambiental, reduciendo los tiempos de evaluación de los procedimientos administrativos ambientales.[295]

La creación de la lista de especialistas del Ministerio de la Producción es viable y oportuna, ya que requiere la modificación de la Ley N° 30327 para incluir al Ministerio

---

[291] De la exposición de motivos 3.1.49. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[292] Ibidem
[293] Ibidem
[294] Ibidem
[295] De la exposición de motivos 3.1.49. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

de la Producción en la lista de entidades autorizadas para tener listas de especialistas.[296]

En 2024, se están tomando medidas para acelerar la evaluación de los proyectos de inversión en los sectores pesquero e industrial, con el fin de atender oportunamente las solicitudes de evaluación de estudios de impacto ambiental y cumplir con los plazos reglamentarios. Por lo tanto, es necesario contar con una lista de especialistas para optimizar el reclutamiento de especialistas, mejorar la modalidad de contratación y evitar interrupciones en los plazos contractuales.[297]

Tener una lista de profesionales calificados permite realizar adecuadamente las funciones de revisión, evaluación y atención de expedientes de la línea base, emitir opiniones técnicas, entre otros, acelerando los tiempos de atención para proporcionar una respuesta oportuna y legal a las diversas solicitudes presentadas, permitiendo así el desarrollo de inversiones en las actividades pesqueras e industriales.[298]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia de promoción de inversiones pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De acuerdo al Anexo 2 remitido por PRODUCE por Lutgardo Sana, la aprobación de los estudios ambientales constituye el paso previo para la ejecución de los proyectos de inversión, ya que es una condición necesaria para que puedan solicitar los títulos

[296] De la exposición de motivos 3.1.49. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[297] De la exposición de motivos 3.1.49. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[298] De la exposición de motivos 3.1.49. del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

habilitantes respectivos para que se brinde seguridad jurídica para la continuidad de las operaciones de las actividades económicas.[299]

En el periodo que abarca el 2018 al 2023, se aprobaron 584 expedientes de instrumentos de gestión ambiental del sector industria, cuyos montos de inversión declarados ascienden a 12.3 mil millones de soles aproximadamente. En el mes de mayo de 2024 en el Ministerio de la Producción se cuenta con 203 expedientes de instrumentos de gestión ambiental cuyos montos de inversión declarados ascienden a un total estimado de 650 millones de soles.[300]

La atención de los estudios ambientales requiere de un refuerzo en la capacidad operativa a fin de agilizar su capacidad de respuesta a la evaluación de los estudios ambientales y brindarle mayor celeridad a la evaluación ambiental de los proyectos de inversión en los sectores de pesca e industria. Para evitar mayores demoras por cuestiones de capacidad operativa y lograr el cumplimiento de los procesos que involucran el tramite de los estudios ambientales de proyectos de inversión, es necesario contar con una nomina de especialistas que permita optimizar el reclutamiento de especialistas en la materia, mejorar la modalidad de contratación y evitar intermitencias en los plazos contractuales renovaciones para disminuir la alta rotación de personal lo cual contribuye al fortalecimiento y simplificación en materia de inversión privada.[301]

Dentro del impacto cualitativo y cuantitativo que esta solicitud de delegación de facultades se puede apreciar que podría fortalecer el proceso de reclutamiento de los profesionales especializados a cargo de la evaluación de los estudios ambientales, contribuiría al destrabe de inversiones a través de la oportuna atención de los estudios

---

[299] Como lo señala el Anexo 2 de Produce sobre el punto 3.49 remitido por PRODUCE por Lutgardo Sana En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njgz/pdf

[300] Como lo señala el Anexo 2 de Produce sobre el punto 3.49 remitido por PRODUCE por Lutgardo Sana https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njgz/pdf

[301] Como lo señala el Anexo 2 de Produce sobre el punto 3.49 remitido por PRODUCE por Lutgardo Sana https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njgz/pdf

ambientales, y la reducción de plazos de los procedimientos de evaluación ambiental.[302]

La propuesta busca modificar el artículo cuarto y la cuarta disposición complementaria final de la Ley 30327, Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, con lo cual se facultaría al Ministerio de la Producción a crear su propia nomina de especialistas buscando reforzar con ellos sus capacidades operativas vinculadas a la revisión de estudios de impacto ambiental y la emisión de opiniones técnicas, lo que coadyuva a dinamizar e impulsar el desarrollo de proyectos de inversión y promover la inversión privada y publico privada y la gestión de servicios públicos ambientales.[303]

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología hace llegar su opinión aprobada en la vigésima cuarta sesión ordinaria semipresencial de fecha 4 de junio de 2024 y suscrita por su presidenta Ruth Luque Ibarra, en la que expresa sobre este punto materia de análisis que podría delegarse facultades con las limitaciones expresadas en su informe.

De la exposición de motivos sobre esta materia, no se ha precisado como se asegura la integridad y rigurosidad de los estudios de impacto ambiental en este sector mientras se reducen los tiempos de evaluación, de la misma manera en dicha exposición de motivos no se han descrito cuales son los criterios que se utilizan o que se utilizaran para seleccionar a los especialistas que revisaran y supervisaran los estudios de impacto ambiental, por lo que esta Comisión viendo la problemática planteada por PRODUCE y la intervención normativa que requiere recomienda no delegar facultades al tratarse de un tema especializado que implica el debate social de diversos actores sociales, y sectores, de este modo esta Comisión considera que lo más adecuado es que esta propuesta sea canalizada a través de un proyecto de ley que implique un estudio y debate más profundo al interior del Congreso de la República escuchando

[302] De acuerdo al Anexo 2 de Produce sobre el punto 3.49 remitido por PRODUCE por Lutgardo Sana https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njgz/pdf

[303] Como lo señala el Anexo 2 de Produce sobre el punto 3.49 remitido por PRODUCE por Lutgardo Sana https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njgz/pdf

especialistas tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Por lo tanto, no es pertinente que sea tramitado a través de una delegación de facultades.

Conclusión:
No se delegará facultades en este extremo. Esta solicitud debe ser canalizada a través de un proyecto de ley y debe ser determinada de una forma más precisa, para permitir un amplio debate con diversos actores sociales, sectores, y niveles de gobierno en el Pleno del Congreso de la República.

3.1.50 Permitir afiliar a la IAFAS SIS, bajo el Régimen de Financiamiento Subsidiado, independientemente de la clasificación socioeconómica, a todas las personas residentes en el Perú y a todos los peruanos residentes en el exterior que se encuentren en el territorio nacional y, que no cuenten con ningún seguro de salud, brindándoles la cobertura gratuita del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud – PEAS y Planes Complementarios a cargo de la IAFAS SIS, así como la cobertura del listado de enfermedades de alto costo, el listado de enfermedades raras y huérfanas y procedimientos de alto costo a cargo de la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento de Salud Fondo Intangible Solidario de Salud – IAFAS FISSAL.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Decreto Legislativo, por su naturaleza duradera, es esencial ya que reconoce los derechos que los miembros han obtenido y que no pueden ser revocados. Esto está en línea con la política continua de Aseguramiento Universal en Salud, que ya se está implementando en la práctica con la financiación de los servicios de salud bajo los Decretos de Urgencia N° 017-2019, 046-2021 y 078-2021, según lo establecido en las Leyes de Presupuesto Público desde 2022 hasta ahora.[304]

En términos de su impacto cuantitativo, beneficiará a casi 26 millones de miembros de la IAFAS SIS a enero de 2024. Este decreto fortalecerá el Aseguramiento en Salud en nuestro país al garantizar la continuidad y permanencia en el tiempo para el acceso a los servicios de salud para sus miembros.[305]

En otras palabras, este Decreto Legislativo es un paso importante para garantizar que los derechos de los miembros sean respetados y protegidos a largo plazo. Al hacerlo, se asegura que los servicios de salud sean accesibles y continuos para todos los miembros, lo que refuerza el compromiso del país con la salud universal. Esto es especialmente relevante dado que el número de miembros beneficiados es considerable, llegando a casi 26 millones a enero de 2024. Por lo tanto, este decreto no solo tiene un impacto significativo en el presente, sino que también tiene implicaciones a largo plazo para el futuro de la salud en nuestro país.[306]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, articulos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia de salud pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad.

---

[304] De la Exposición de Motivos del punto 3.1.50 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[305] De la Exposición de Motivos del punto 3.1.50 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[306] De la Exposición de Motivos del punto 3.1.50 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De lo remitido por el anexo 2 del sector salud en donde puntualiza dicho sector como problema que se pretende solucionar que actualmente solo por Decreto de Urgencia (017-2019, 046-2021 y 078-2021), y anualmente a través de la Ley de Presupuesto Público se viene dando continuidad al acceso al PEAS y planes complementarios a los peruanos que se encuentren en el territorio nacional y a los extranjeros residentes en el país, lo que no resulta congruente con la política de aseguramiento universal del país. [307]

En el mismo anexo remitido por el Ministerio de Salud se manifiesta que son mas de 25 millones de personas afiliadas al SIS, a quienes se les reconocerá de manera permanente su derecho en la dimensión de acceso al PEAS y planes complementarios.[308]

A su vez el Ministerio de Salud señala que las disposiciones que autorizan la afiliación al SIS para el acceso al PEAS y a los planes complementarios están contenidas en Decretos de Urgencia que tienen carácter temporal cuya vigencia ha sido sucesivamente prorrogada por lo que configuran derechos adquiridos que deben reconocerse en norma de carácter permanente.[309]

Mediante Opinión Consultiva 02-2023-2024-CMF/CR de la Comisión de Mujer y Familia se señala sobre el punto 3.1.50 que en es esencial y pertinente dada su naturaleza permanente y su objetivo de reconocer y proteger los derechos irrevocables de los afiliados.

La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República por Oficio 2023-CSP/2023-2024-CR de fecha 29 de mayo de 2024 suscrito por su presidenta Nelcy

[307] Del anexo 2 del Ministerio de Salud sobre esta materia. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njgw/pdf
[308] Del anexo 2 del Ministerio de Salud sobre esta materia. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njgw/pdf
[309] Del anexo 2 del Ministerio de Salud sobre esta materia En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njgw/pdf

Heidinger Ballesteros emite opinión sobre este punto en donde expresa a través de su Opinión Consultiva 02-2023-2024-CSP-CR; de manera literal lo siguiente:
"En la actualidad, conforme a la normatividad legal vigente, toda persona de nacionalidad peruana residente o no residente en el territorio nacional se encuentra afiliada a un régimen de aseguramiento en saluda con una cobertura PEAS y planes complementarios independientemente de su clasificación socioeconómica y siempre que no cuente con ningún seguro de salud o se encuentre en situación de latencia o carencia, hasta el 31 de diciembre de 2024.
Recientemente el 9 de mayo de 2024, derivada de un dictamen aprobado por la Comisión de Salud y Población y refrendado por el Pleno del Congreso, ha sido publicada la Ley 32016, Ley que modifica la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, para incorporar al Seguro Integral de Salud (SIS) a los peruanos residentes en el exterior y ha dispuesto que el Poder Ejecutivo dentro del plazo de 30 días calendario, contados desde su entrada en vigor, adecue el Reglamento de la Ley 29344 citada, a fin de que después de ese termino se haga plenamente efectiva. (...)
"[310]

En atención a las razones señaladas, esta Comisión considera que no corresponde que el Congreso de la República delegue las facultades solicitadas en este punto, al haberse atendido el problema público por el Congreso de la República mediante la Ley 32016, Ley que modifica la Ley 29344, Ley marco de aseguramiento universal en salud para incorporar al seguro integral de salud (SIS) para incorporar al seguro integral de salud a los peruanos residentes en el exterior.

Conclusión:
Por lo tanto, no es pertinente que sea tramitado a través de una delegación de facultades al haberse atendido este problema público por el Pleno del Congreso de la República, en consecuencia no se delegará facultades en este extremo.

3.1.51 Fortalecer la regulación sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en el Perú.

310 He
02

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

A nivel global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la campaña para una cobertura de salud universal demandan que los pacientes tengan acceso a productos médicos eficientes, seguros y de calidad garantizada. En Perú, se ha logrado una cobertura de seguro de salud del 97.7%, lo que significa que más de 35.4 millones de personas están aseguradas.[311]

Un componente crucial para una atención de salud integral es el acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos eficaces, seguros, de alta calidad y oportunos, así como a productos sanitarios. Es responsabilidad del estado regular, supervisar y promover estos productos.[312]

Como parte del acceso a estos productos, es esencial tener una oferta suficiente en el mercado nacional. Para ello, se necesita un mayor número de estos productos autorizados por la Autoridad Nacional de Medicamentos (ANM) en nuestro país.[313]

Los sistemas regulatorios robustos de los productos médicos son un elemento esencial para el buen funcionamiento de los sistemas de salud y juegan un papel importante en la mejora del acceso y, finalmente, en la consecución de la cobertura de salud universal.[314]

Establecer y mantener sistemas regulatorios maduros requiere recursos adecuados, incluyendo personal capacitado y competente y una inversión económica

[311] De la Exposición de Motivos del punto 3.1.51 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[312] Ibidem
[313] Ibidem
[314] Ibidem

significativa. Por lo tanto, es necesario buscar estrategias que permitan optimizar el uso de los recursos.[315]

La globalización de los mercados, el avance de las tecnologías sanitarias, la rápida evolución de la ciencia regulatoria y la creciente complejidad de las cadenas de suministro han demostrado a los reguladores la importancia de la cooperación internacional para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia o el rendimiento de los productos utilizados localmente.[316]

Dada la magnitud y la complejidad de la supervisión regulatoria necesaria para enfrentar estos desafíos, es esencial que las Agencias Reguladoras Nacionales (ARN) consideren formas mejoradas, innovadoras y más eficientes de colaboración. Esto permitirá hacer el mejor uso posible de los recursos y conocimientos técnicos disponibles, evitar la duplicación y concentrar sus esfuerzos y recursos regulatorios donde más se necesiten.[317]

La adopción de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones es una forma más inteligente y eficiente de regular los productos médicos en el mundo actual. Se insta a los países a desarrollar y aplicar estrategias que refuercen sus sistemas regulatorios de acuerdo con las buenas prácticas, incluyendo la cooperación y convergencia regulatoria, así como la adopción de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones.[318]

Todos los interesados, incluyendo pacientes, consumidores, industria, gobiernos nacionales, donantes y socios internacionales para el desarrollo, se benefician de la adopción de decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones, ya que facilita y acelera el acceso a productos médicos eficaces, seguros y de calidad garantizada.[319]

---

[315] Ibidem
[316] Ibidem
[317] De la Exposición de Motivos del punto 3.1.51 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[318] Ibidem
[319] De la Exposición de Motivos del punto 3.1.51 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

En Perú, los medicamentos se venden a través de establecimientos farmacéuticos, que actualmente son alrededor de 34,107. De estos, 4,915 (14.1%) son droguerías y 191 (0.6%) son laboratorios. Estos establecimientos pueden solicitar un registro sanitario, que autoriza al titular a fabricar, importar, almacenar, distribuir, comercializar, promocionar, dispensar, vender o usar los productos, según las condiciones establecidas por la normativa vigente.[320]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia de salud pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De la problemática hecha llegar por el Ministerio de Salud se señala que con esta medida se busca resolver el problema del limitado acceso de la población a productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos sanitarios en el mercado farmacéutico nacional, a través de la simplificación y optimización de los proceso administrativos para el otorgamiento de autorizaciones sanitarias, registro, control y vigilancia de los mismos, y de los establecimientos farmacéuticos.[321]

---

[320] Ibidem

[321] Del Anexo 2 proporcionado por el Ministerio de Salud sobre aspectos técnicos a puntualizar en las mesas técnicas, suscrito por cuatro funcionarios del sector. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njgw/pdf

En el mismo documento se especifica que como impacto cualitativo y cuantitativo que tendrá la regulación en el sector se detalla que, la implementación de este proyecto de ley impactará directamente en la disminución de hasta 50% en el tiempo de atención de las solicitudes de autorizaciones sanitarias y en el fortalecimiento de las acciones de control y vigilancia sanitaria en los productos en el mercado nacional. De la misma forma se incrementará la oferta de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos sanitarios provenientes de países de alta vigilancia sanitaria y de aquellas de agencias regulatorias reconocidas por la OMS y con quienes se establezca mecanismos de confianza regulatoria.[322]

Por Carta N° 122-2024/DE/COMEXPERU de fecha 29 de mayo de 2024 suscrita por su Jessica Luna Cárdenas su Directora Ejecutiva sobre este punto señala que si bien de la exposición de motivos se refiere a la necesidad de agilizar los procesos de autorizaciones sanitarias de los medicamentos, a fin de que accedan al mercado más rápido, esto pasa también por convertir a las agencias sanitarias en órganos de nivel 4 de la OMS, por lo que en esta parte debería considerarse convertir a DIGESA y DIGEMID en organismos públicos, adscritos al Sector Salud, pero dotándolas de practicas de buen gobierno, que sus autoridades respondan a un perfil técnico y sean designadas por concurso público.

La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República por Oficio 2023-CSP/2023-2024-CR de fecha 29 de mayo de 2024 suscrito por su presidenta Nelcy Heidinger Ballesteros emite opinión sobre este punto en donde expresa a través de su Opinión Consultiva 02-2023-2024-CSP-CR; de manera literal lo siguiente:

"4.4.4. Fortalecer la regulación sanitaria de los productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios en el Perú.

Esta Comisión (Salud y Población) considera que las medidas que se aprobarían tendientes al fortalecimiento de la regulación sanitaria no se encuentran debidamente detalladas.

---

[322] Del Anexo 2 proporcionado por el Ministerio de Salud sobre aspectos técnicos a puntualizar en las mesas técnicas, suscrito por cuatro funcionarios del sector. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njgw/pdf

Sin embargo, la Comisión estima que, de manera general, NO correspondería que se delegue las facultades solicitadas en este punto, debido a que recientemente el problema público ha sido atendido y está en vías de completarse a través de las siguientes medidas.

- Entrada en vigor de la Ley 32033, Ley que garantiza y promueve el acceso y uso de los medicamentos genéricos en Denominación común Internacional DCI y fortalece la regulación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos en beneficio de los pacientes y usuarios.
- Debate y aprobación en el Pleno del Congreso del dictamen aprobado por la Comisión de Salud y Población, recaído en los proyectos de ley 1880/2021-CR, 2273/2021-CR y 4995/2022-CR que propone la Ley que establece medidas para facilitar el acceso a medicamentos, productos biológicos, y dispositivos médicos registrados en países de alta vigilancia sanitaria destinados al tratamiento de enfermedades raras o huérfanas y canceres de bajo y alto costo."

En atención a las razones señaladas, esta Comisión considera que no corresponde que el Congreso de la República delegue las facultades solicitadas en este punto, al haberse atendido el problema público por el Congreso de la República mediante la entrada en vigor de la Ley 32033, Ley que garantiza y promueve el acceso y uso de los medicamentos genéricos en Denominación común Internacional DCI y fortalece la regulación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos en beneficio de los pacientes y usuarios, y el debate y aprobación en el Pleno del Congreso del dictamen aprobado por la Comisión de Salud y Población, recaído en los proyectos de ley 1880/2021-CR, 2273/2021-CR y 4995/2022-CR que propone la Ley que establece medidas para facilitar el acceso a medicamentos, productos biológicos, y dispositivos médicos registrados en países de alta vigilancia sanitaria destinados al tratamiento de enfermedades raras o huérfanas y canceres de bajo y alto costo.

Conclusión:
Por lo tanto, no es pertinente que sea tramitado a través de una delegación de facultades al haberse atendido este problema público por el Pleno del Congreso de la República, en consecuencia no se delegará facultades en este extremo.

3.1.52. Modificar la Segunda Disposición Complementaria Final y Transitoria del Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas para incorporar la obligatoriedad de la opinión previa de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como condición, para obtener la autorización para que las entidades del Poder

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

En la actualidad, la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ratificado por el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, prevé la generación de un informe técnico por parte de la Secretaria de Gestión Pública. Este informe es un requisito previo para que las entidades del Poder Ejecutivo puedan presentar una demanda contenciosa administrativa en respuesta a las resoluciones emitidas por la Sala en relación con la eliminación de barreras burocráticas del INDECOPI. En otras palabras, el objetivo de la disposición propuesta es elevar a nivel de ley lo que ya se ha establecido a través de la reglamentación.[323]

Por otro lado, según el TUO de la Ley N° 27584, los plazos para presentar la demanda contenciosa administrativa son de caducidad. Esto significa que una vez transcurrido el plazo para su presentación (3 meses), se producirá la pérdida del derecho y de la acción correspondiente a favor de la entidad para solicitar que el Poder Judicial examine la validez de la emisión de un acto administrativo que emita, en este caso, el INDECOPI. Dado que el plazo que regula la normativa procedimental es corto, se requiere, en aplicación del principio de oportunidad, un trámite simplificado que se

[323] De la Exposición de motivos del punto 3.1.52 del proyecto de ley 7752/2023-PE

realice dentro del Poder Ejecutivo para poder autorizar a la entidad a presentar la demanda contenciosa administrativa. Para ello, se propone eliminar la condición de que sea aprobada en el Consejo de Ministros, manteniendo la condición de que sea autorizada, expresamente, por la máxima autoridad de la entidad. De esta manera, se garantizaría la posición sectorial del Poder Ejecutivo sobre un tema que, considera, le afecta directamente, especialmente si para que se dé la autorización también se requerirá la opinión de la PCM, a través de la SGP.[324]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia de gestión pública pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De acuerdo a la problemática que se pretende solucionar por la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, considera que de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativa, es de tres meses plazo de caducidad, el cual es un plazo corto para poder tomar las medidas necesarias, por lo que existe un nivel de inseguridad en relación a la presentación de la misma por la gran cantidad de competencias y funciones que realizan los distintos órganos del Poder Ejecutivo.[325]

---

[324] De la Exposición de motivos del punto 3.1.52 del proyecto de ley 7752/2023-PE

[325] Del anexo 2 sobre aspectos a puntualizar en las mesas técnicas presentado por la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf

Además, se indica el impacto cualitativo y/o cuantitativo que la regulación tendrá en el sector si se aprueba la medida propuesta por Decreto Legislativo. La entidad del Poder Ejecutivo que impulsa la acción se comprometerá a presentar ante la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad de la cual depende jerárquicamente la Secretaría de Gestión Pública, la solicitud de autorización para presentar una demanda contenciosa administrativa contra las resoluciones en materia de eliminación de barreras burocráticas. Esta solicitud debe presentarse en un plazo no menor a 60 días antes del vencimiento del plazo para la presentación de cada demanda, de acuerdo a lo estipulado en cada caso por el Texto Único Ordenado de la Ley 27584. Esta Ley, que regula el proceso contencioso administrativo, fue aprobada por el Decreto Supremo N° 011-2019-JUS. Esta medida busca garantizar que las instancias competentes para el análisis y atención de la solicitud puedan desarrollar el procedimiento, llevando a cabo las acciones pertinentes dentro de plazos razonables para la toma de una decisión.[326]

A su vez la Secretaria de Gestión Pública de la PCM indica que en aplicación del principio de oportunidad se requiere contar con un trámite simplificado para formalizar la autorización a la entidad del Poder Ejecutivo para interponer una demanda contencioso administrativa y se reemplaza la exigencia de la autorización aprobada por Consejo de Ministros reemplazándola por un informe técnico de la Secretaria de Gestión Pública.[327]

Por Carta N° 122-2024/DE/COMEXPERU de fecha 29 de mayo de 2024 suscrita por su Jessica Luna Cárdenas su Directora Ejecutiva sobre este punto señala que no están de acuerdo con eliminar el requisito de contar con la autorización del Consejo de Ministros para interponer la demanda contencioso administrativa. Considera adecuado mantener el marco legal y que este no se modifique.

---

[326] De la idea del anexo 2 sobre aspectos a puntualizar en las mesas técnicas presentado por la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf

[327] Literal de del anexo 2 sobre aspectos a puntualizar en las mesas técnicas presentado por la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

De acuerdo al Oficio 1345-2023-2024/CDRGLMGE-ACA-CR suscrito por el congresista Alejandro Cavero Alva presidente de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales, y Modernización de la Gestión del Estado de fecha 30 de mayo de 2024 se adjunta el informe de opinión sobre viabilidad de facultades al Poder Ejecutivo en el cual sobre el punto materia de análisis recomienda que no es pertinente otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en esta materia, por cuanto la flexibilización de los requisitos para la presentación de una acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial en contra de la Sala que declare la inaplicación de una o más barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad facilitaría que las entidades del Poder Ejecutivo, a sola decisión de su titular, pueda cuestionar las decisiones del INDECOPI, además de suponer un retroceso a los esfuerzos que se han llevado a cabo en los últimos cinco años en materia de mejora regulatoria, así como en el fortalecimiento del sistema de eliminación de barreras burocráticas, pues esta propuesta del Poder Ejecutivo debilitaría el sistema en pro de la permanencia de barreras burocráticas ya declaradas ilegales o carentes de razonabilidad.

De acuerdo al Oficio 000111-2024-PRE/INDECOPI de fecha 23 de mayo de 2024, suscrito por Alberto Villanueva Eslava presidente ejecutivo de Indecopi, quien adjunta el Informe N°000342-2024-OAJ/INDECOPI de Olga Carolina Combe Jeanneau, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien refiere en los puntos 2.10 y 2.11 de dicho informe sobre la solicitud de delegación de facultades del numeral 3.1.52 del Proyecto de Ley 772/2023-PE que:

"2.10 Al respecto corresponde señalar que el artículo 24 del mencionado Reglamento de Organización y Funciones, establece que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es el órgano resolutivo con autonomía técnica y funcional encargada de aplicar las normas que reglan el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y las empresa; velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa u otras normas legales que regulan el ámbito de su competencia, y para conocer en segunda instancia administrativa los actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones materiales, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.

2.11. Atendiendo a ello, con el Informe 000040-2024-CEB/INDECOPI, el Secretario Técnico de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas señala:

- "(...) el proyecto de ley flexibiliza al Ejecutivo para cuestionar lo ya establecido por el propio Ejecutivo, lo que pueda prolongarse por determinados años en sede judicial hasta la eliminación definitiva de las barreras burocráticas ilegales – irrazonables, en perjuicio de las empresas y ciudadanos, que durante este periodo de tiempo soportarán la imposición de dichas medidas.
- A su vez, se propone eliminar un mecanismo de trabajo horizontal entidad- entidad para encontrar soluciones frente a barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, pues no solo es factible un escenario de eliminación voluntaria de la barrera burocrática, sino un supuesto de modificaciones en disposiciones administrativas para que se adecuen al marco legal o parámetros de razonabilidad.
- Con ello, se consigue tutelar los derechos de los agentes económicos y ciudadanos con la pronta y oportuna eliminación de regulaciones del Ejecutivo ya declaradas ilegales o irrazonables por dos instancias del Indecopi, frente al tiempo que podría durar un proceso judicial añadido.
- Con el proyecto de Ley 7752/2023-PE se eliminará el mecanismo actual de coordinación dentro del mismo Ejecutivo respecto a la eliminación (o modificación) oportuna y voluntaria de una barrera burocrática ilegal, arbitraria o desproporcionada, en beneficio de la competitividad, la simplificación administrativa y del desarrollo de actividades económicas.
- La propuesta legislativa pretende reducir el estándar actual para que el Ejecutivo pueda interponer demandas contencioso-administrativas y, por ende, se mantenga la imposición de barreras burocráticas que otra entidad del mismo Poder del Estado (el Indecopi) las ha identificado como ilegales o irrazonables, hasta su resolución en vía judicial.

Como se señala claramente en las conclusiones del Informe 00040-2024-CEB/INDECOPI de fecha 15 de mayo de 2024, del Secretario Técnico de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas:

1. El Proyecto de Ley N° 7752/2023-PE se plantea eliminar la autorización del Consejo de Ministros para la interposición de demandas contencioso-administrativas por parte del Poder Ejecutivo, en materia de barreras burocráticas. Asimismo, como sustituto, plantea la opinión favorable de la Secretaria Pública de la PCM.
2. Con el Proyecto de Ley 7752/2023-PE se eliminará el mecanismo actual dentro del propio Ejecutivo respecto a la eliminación o modificación oportuna y voluntaria de

una barrera burocrática ilegal, arbitraria o desproporcionada, lo cual incidirá en beneficio de la competitividad, la simplificación administrativa y del desarrollo de actividades económicas.

3. La propuesta legislativa pretende reducir el estándar actual para que el Poder Ejecutivo pueda interponer demandas contencioso-administrativas y, por ende, se mantenga la imposición de barreras burocráticas que otra entidad del mismo Poder del Estado como lo es el INDECOPI, las ha identificado como ilegales o irrazonables, hasta su resolución en la vía judicial.

   De este modo en virtud de los argumentos esgrimidos por INDECOPI que detalla cómo es que el Poder Ejecutivo busca reducir el estándar actual entre sus entidades, dejándose de lado un mecanismo de eliminación o modificación voluntaria que permite dejar sin efecto una barrera burocrática ilegal, arbitraria o desproporcionada y de ese modo incidiéndose negativamente en la competitividad, la simplificación administrativa y el desarrollo de actividades económicas, es que esta Comisión considera que lo más adecuado que esta propuesta sea canalizada a través de un proyecto de ley que implique un estudio y debate más profundo al interior del Congreso de la República escuchando especialistas tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Por lo tanto, no es pertinente que sea tramitado a través de una delegación de facultades.

Conclusión:
No se delegará facultades en este extremo. Esta solicitud debe ser canalizada a través de un proyecto de ley, para permitir un amplio debate con diversos actores sociales, sectores, y niveles de gobierno en el Pleno del Congreso de la República.

3.1.53.	**Modificar la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para i) establecer las definiciones y alcance de los mecanismos de participación de la ciudadanía como parte de los derechos inherentes a la persona; ii) establecer el marco normativo que regule la gestión integral de los mecanismos de participación de la ciudadanía; así como, iii) precisar la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para establecer los mecanismos de participación de la ciudadanía, los roles y responsabilidades de las entidades involucradas y el procedimiento para su ejercicio; a fin de contribuir con la mejora de la calidad de los bienes y servicios que brinda el Estado, asegurando la participación de las entidades y empresas públicas y privadas que forman parte de la cadena de valor desde la mirada de las personas en el territorio**

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El artículo 48, numeral 48.2, inciso 7) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, asigna a la Presidencia del Consejo de Ministros la responsabilidad de establecer los procedimientos para la recepción de quejas y otros mecanismos de participación ciudadana, incluyendo reclamos.[328]

No obstante, la ley no especifica qué se entiende por mecanismos de participación ciudadana ni su alcance. Además, regula varios conceptos como queja por defectos de tramitación, queja administrativa, reclamos, denuncias, petición, entre otros.[329]

Aunque la Ley N° 27444 menciona los reclamos, peticiones y quejas que puede presentar la ciudadanía, no se regula de manera integral desde una perspectiva estatal, lo que lleva a que cada entidad determine cómo manejarlos, generando incluso múltiples normativas (sobre-regulación). Esto dificulta conocer y tener información precisa sobre las necesidades y expectativas de las personas (naturales y jurídicas) para fortalecer las capacidades del Estado para atender eficazmente las demandas ciudadanas, teniendo en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, como indica la Política General de Gobierno.[330]

Además, las entidades utilizan términos como reclamos, quejas, sugerencias, felicitaciones, entre otros, de manera diferenciada según el tipo de servicios que ofrecen, lo que genera confusión en la ciudadanía. Además, los mismos términos se

[328] De la Exposición de motivos del punto 3.1.53 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[329] Ibidem
[330] Ibidem

aplican de manera diferente para el sector privado, lo cual no está en línea con las prácticas internacionales que promueven la tendencia a proporcionar un único canal para la comunicación entre la ciudadanía y el Estado.[331]

Esta situación limita el acceso de las personas a ejercer su derecho de petición, ya que el ciudadano común no distingue si se trata de una denuncia, queja o reclamo; lo que espera es que su derecho sea atendido de manera eficaz, oportuna y transparente por el Estado.[332]

Es importante mencionar que el derecho de petición es un derecho fundamental que forma parte de los derechos inherentes a la persona humana y tiene gran importancia en el ámbito de la participación ciudadana, no solo en peticiones administrativas.[333]

Una de las críticas recurrentes de las personas hacia el Estado es que este no funciona de la manera y a la velocidad que requieren sus necesidades y expectativas (preocupación constante del Estado). Por lo tanto, es necesario mejorar el marco normativo desde la perspectiva de las personas con el fin de mejorar la eficiencia, productividad y calidad de los bienes y servicios que se brindan a las personas naturales y jurídicas, como parte del proceso de modernización de la gestión pública, en aras de construir un Estado al servicio del ciudadano. Por lo tanto, todas las peticiones de las personas deben integrarse a través de un solo canal de atención (reclamos, quejas, sugerencias, felicitaciones y similares), lo que permitirá al Estado monitorear e identificar los principales problemas del país para trabajar en ellos de manera integral y oportuna.[334]

De esta manera, se uniformará el uso de términos para que las "peticiones", en general, comprendan los reclamos, quejas, sugerencias, felicitaciones, entre otros, como mecanismo de participación ciudadana.[335]

---

[331] De la Exposición de motivos del punto 3.1.53 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[332] Ibidem
[333] Ibidem
[334] De la Exposición de motivos del punto 3.1.53 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[335] Ibidem

A su vez, es necesario fortalecer las competencias de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, para establecer los mecanismos de participación ciudadana, los roles y responsabilidades de las entidades involucradas y el procedimiento para su ejercicio, considerando que ejerce la coordinación de las políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial del Poder Ejecutivo y la coordinación de las relaciones con los demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la sociedad civil.[336]

Es necesario señalar que, a nivel internacional, el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda ofrecen a la ciudadanía canales unificados que permiten a la ciudadanía presentar retroalimentación ciudadana ("contáctanos", "danos tu feedback") o insatisfacción ("ayúdanos a mejorar", "reporta un problema") con respecto a los servicios que ha recibido de las entidades del Estado. De la misma manera, en Colombia, Chile, México y España se han implementado sistemas unificados a través de los cuales se reciben las comunicaciones ciudadanas (quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones).[337]

Considerando lo anterior, es necesario una legislación que modifique las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta acción no viola ningún principio constitucional y propone medidas para mejorar la eficiencia de la administración pública en beneficio de los ciudadanos.[338]

Por lo tanto, se trata de una legislación que definirá y expandirá el alcance de los mecanismos de participación ciudadana, unificando las solicitudes de las personas a través de un solo canal de atención, para lograr una administración pública eficiente y oportuna. Esto contribuirá a la resolución de problemas públicos, asi como al diseño y provisión de bienes y servicios con estándares de calidad adecuados, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las personas. Esto consolidará un Estado eficiente, transparente, moderno y descentralizado con

[336] Ibidem
[337] De la Exposición de motivos del punto 3.1.53 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[338] De la Exposición de motivos del punto 3.1.53 del proyecto de ley 7752/2023-PE

un marco legal que promueva la inversión, la mejora continua y la eliminación de barreras para acceder a los servicios, reduciendo los espacios de corrupción. Esto está en línea con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 y con la legislación vigente referida a la mejora de la calidad de la prestación de bienes y servicios.[339]

La implementación de esta medida se financiará con el presupuesto institucional de las entidades involucradas. El beneficio que genera una medida como la propuesta es perfectamente tangible en términos de reducción de costos y eficiencia para el Estado, ya que se establece una gestión integral de las solicitudes de los ciudadanos a través de un solo canal de atención que permitirá optimizar los procesos asociados a la prestación de servicios y bienes.[340]

Esta medida generará un impacto inmediato en beneficio de los ciudadanos, ya que reducirá significativamente los costos de transacción que las personas deben asumir para solicitar la atención de sus solicitudes (reclamos, quejas, denuncias, sugerencias, entre otros). A través de un único punto de contacto, de manera fácil, podrán ejercer su derecho para que este sea atendido de manera eficaz, oportuna y transparente por el Estado. Es decir, al conocer de manera integral los problemas que afectan a los ciudadanos en la interacción con el Estado a través de un único canal de atención, se dispondrá de los elementos que permitan agilizar y desbloquear las acciones para resolver dichos problemas mediante la provisión de servicios de calidad.[341]

La medida propuesta permitirá que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, tenga acceso a todas las solicitudes de las personas a través de un solo canal de atención y pueda así tener un conocimiento integral y sistemático de las necesidades de las personas que requieren atención. De acuerdo con las competencias que le han sido otorgadas en el literal e) del artículo 14 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública y en el literal n) del artículo 71 del Texto Integrado del ROF de la

[339] De la Exposición de motivos del punto 3.1.53 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[340] De la Exposición de motivos del punto 3.1.53 del proyecto de ley 7752/2023-PE
[341] De la Exposición de motivos del punto 3.1.53 del proyecto de ley 7752/2023-PE

PCM, podrá intervenir e influir para que las entidades públicas adopten las acciones pertinentes para optimizar y mejorar su gestión interna con el fin de proporcionar servicios adecuados a los ciudadanos, respondiendo a las solicitudes de las personas de manera oportuna, evitando que se genere una mayor insatisfacción en el ciudadano por la falta de respuesta o solución del problema o por una respuesta o solución tardía[342]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia de gestión pública pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

De la problemática citada por la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se señala la ineficiente gestión del Estado en la provisión de bienes y servicios que no responden a las necesidades y expectativas de las personas. Lo cual, a su vez, genera desconfianza en la administración pública desde la mirada de las personas (naturales y jurídicas) por la poca predictibilidad en las reglas de juego, cargas administrativas, burocráticas y costos que son asumidos por los administrados[343].

En esa línea las distintas entidades vienen recibiendo diariamente quejas, reclamos, y otros, por parte de los ciudadanos insatisfechos respecto de los servicios que reciben del Estado, esta información es de suma importancia para incorporar mejoras en los

[342] De la Exposición de motivos del punto 3.1.53 del proyecto de ley 7752/2023-PE

[343] Del anexo 2 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf

servicios a la vez de conocer que entidades son las más reclamadas y poder tomar acción desde la Presidencia de Consejo de Ministros.[344]
También relata la misma Secretaria de Gestión Pública que el problema es que los procesos para incorporar la participación ciudadana son poco claros y están desarticulados entre sí, pues cada entidad define sus propias normas, procedimientos, plataformas, diferenciando la queja del reclamo y las demás peticiones generando confusión en el ciudadano), con un sistema incapaz de centralizar y proporcionar información que facilite la implementación de medidas del Estado respecto de los ciudadanos que se encuentran en el país como en el extranjero, generando desconfianza y la convicción de que hacer una petición en este país, es muchas veces una pérdida de tiempo.[345]

Esta medida, de impacto cualitativo, beneficia a los ciudadanos tanto en el país como en el extranjero. Al reducir significativamente los costos de transacción que las personas deben asumir para solicitar la atención de sus solicitudes (reclamos, quejas, denuncias, sugerencias y otros), a través de un único punto de contacto, podrán ejercer su derecho para que sea atendido de manera eficaz, oportuna y transparente por el Estado. Al conocer de manera integral los problemas que enfrenta la ciudadanía en la interacción con el Estado a través de un único canal de atención, se dispondrá de los elementos necesarios para agilizar y desbloquear las acciones para resolver dichos problemas mediante la provisión de servicios de calidad.

La medida propuesta permitirá que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, tenga acceso a todas las solicitudes de las personas a través de un solo canal de atención y pueda así tener un conocimiento integral y sistemático de las necesidades de las personas que requieren atención. De acuerdo con las competencias que le han sido otorgadas en el literal e) del artículo 14 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, así como en el literal n) del artículo 71 del texto integrado del Reglamento de

[344] Del anexo 2 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf
[345] Del anexo 2 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf

Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, podrá intervenir e influir para que las entidades públicas adopten las acciones pertinentes para optimizar y mejorar su gestión interna con el fin de proporcionar servicios adecuados a los ciudadanos, respondiendo a las solicitudes de las personas de manera oportuna, evitando que se genere una mayor insatisfacción en el ciudadano por la falta de respuesta o solución del problema o por una respuesta o solución tardía.[346]

La medida sugerida para la Secretaría de Gestión Pública permite una disminución de costos y una mayor eficiencia para el Estado, ya que se establece una gestión unificada que resultará en: incremento de la productividad, eficiencia y calidad de los servicios orientados a individuos y entidades, teniendo en cuenta sus características socioculturales que pueden estar vinculadas a sectores productivos; disminución de las cargas administrativas, mayor confianza y transparencia en la relación entre el Estado y el ciudadano, ya que integra todos los mecanismos de participación ciudadana; reduce los costos operativos para las entidades y los ciudadanos, ya que la gestión integral de las solicitudes será centralizada en la PCM.[347]

De acuerdo a la Secretaria de Gestión Pública, de acuerdo inciso 7 del numeral 48.2 del artículo 48 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (DECRETO SUPREMO N.° 004-2019-JUS TUO Artículo 57.2 numeral 8) estipula que la Presidencia del Consejo de Ministros tiene como una de sus competencias establecer los mecanismos para la recepción de quejas y otros mecanismos de participación de la ciudadanía.[348]

Pero dicha norma, de acuerdo a lo señalado por PCM no define que debe entenderse por mecanismos de participación de la ciudadanía ni su alcance, asimismo regula

---

[346] Del anexo 2 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf

[347] Del anexo 2 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf

[348] Del anexo 2 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf

diversos conceptos como son la queja por defectos de tramitación, queja administrativa, reclamos, denuncias, petición, entre otros.[349]

Para la Secretaria de Gestión Pública de la PCM la medida propuesta es utilizar un único canal para la comunicación entre la ciudadanía y el Estado, puesto que para dicho sector las entidades utilizan de manera diferenciada los términos de reclamos, quejas, sugerencias, felicitaciones entre otra, de manera diferenciada según el tipo de servicios que brindan. Para la PCM, la medida propuesta contempla un mecanismo valioso para la administración pública que permita escuchar a las personas naturales o jurídicas para identificar o mejorar el diseño y mejores políticas e intervenciones públicas.[350]

De acuerdo al Oficio 1345-2023-2024/CDRGLMGE-ACA-CR suscrito por el congresista Alejandro Cavero Alva presidente de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales, y Modernización de la Gestión del Estado de fecha 30 de mayo de 2024 se adjunta el informe de opinión sobre viabilidad de facultades al Poder Ejecutivo en el cual sobre el punto materia de análisis recomienda que es pertinente otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en esta materia siempre que este referida a quejas, reclamos, y otros similares en el marco de participación ciudadana.

Por Informe 00088/DPRC/2024 de OSIPTEL de fecha 22 de mayor de 2024 suscrito por Marco Antonio Vílchez Román Director de Políticas Regulatorias y Competencia se señala que se considera pertinente no incorporar en el proyecto de ley la disposición asociada a la modificación de la Ley General del Procedimiento Administrativo de este punto materia de análisis para establecer mecanismos de participación de la ciudadanía en materia de gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública, puesto que el marco jurídico vigente ya contempla disposiciones normativas asociadas a dicha materia.

---

[349] Literal del anexo 2 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf

[350] Literal del anexo 2 aspectos a puntualizar en las mesas técnicas de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njg2/pdf

Por Informe 00081-2024-SUNASS-OAJ suscrito por Edwin Paca Palao jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNASS y otros funcionarios de la misma institución se concluye sobre este punto materia de análisis que no se requiere establece por ley la creación de un canal de atención único para que la presidencia del Consejo de Ministros pueda ejercer adecuadamente sus funciones dado que dicho objetivo se puede lograr sobre la base de las facultades que ostentan actualmente en la PCM.

Sin embargo, debemos comentar que la PCM al buscar fortalecer las competencias de la PCM en las participaciones, y canalizar todos los reclamos, quejas, sugerencias, y otros a través de un único canal, puede vulnerar información reservada que cautela cada entidad pública, y de la misma forma el nivel de transparencia de cada entidad podría ser manejado discrecionalmente por un solo sector de la administración pública. Por lo que esta Comisión considera que lo más adecuado que esta propuesta sea canalizada a través de un proyecto de ley que implique un estudio y debate más profundo al interior del Congreso de la República escuchando especialistas tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Por lo tanto, no es pertinente que sea tramitado a través de una delegación de facultades.

Conclusión

Se considera no delegar facultades en este extremo. Esta solicitud debe ser canalizada a través de un proyecto de ley, para permitir un amplio debate con diversos actores sociales, sectores, y niveles de gobierno en el Pleno del Congreso de la República.

3.1.54 Establecer el marco normativo para la mejora del servicio público, garantizando el correcto funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP, a través del fortalecimiento de las capacidades de las personas que prestan servicios al Estado, estableciendo las disposiciones necesarias para cumplir con su misión institucional y permitiendo la mejora del servicio público prestado por los servidores capacitados

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Decreto Supremo N° 079-2012-PCM dio origen a la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), una entidad subordinada a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, cuya misión es brindar formación a líderes y capacitación al servicio civil peruano en áreas de administración y gestión pública.[351]

La Ley Universitaria N° 30220 establece los criterios para el funcionamiento y la organización que son característicos de una universidad, pero que no necesariamente se aplican a una entidad de la Administración Pública como la ENAP. Por lo tanto, es imprescindible definir un marco legal que permita a la ENAP organizar cursos de posgrado, tal como lo exige la Ley Universitaria.[352]

Además, las actividades académicas de la ENAP son relevantes para toda la Administración Pública, ya que la función administrativa se realiza en todos los organismos públicos, independientemente de la regulación especifica de cada carrera profesional.[353]

El desafío que se pretende abordar es proporcionar claridad, a través de una norma de rango legal, sobre las competencias de la ENAP en relación con sus actividades, de manera que estas lleguen a todas las personas que desempeñan una función administrativa o a cualquier ciudadano interesado en desempeñar una función pública.[354]

Asimismo, se busca establecer un marco legal genérico dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que institucionalice los cursos de inducción y acceso a la función pública requeridos por las diversas entidades de la Administración Pública.[355]

---

[351] De la exposición de motivos del punto 3.1.54 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE.
[352] Ibidem
[353] Ibidem
[354] De la exposición de motivos del punto 3.1.54 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE.
[355] Ibidem

Los recursos necesarios para implementar la propuesta normativa ya están incluidos en el presupuesto institucional de SERVIR. Finalmente, esta iniciativa legislativa tiene como objetivo incorporar en la legislación nacional un nuevo marco normativo para fortalecer la Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP, permitiendo que las actividades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los servidores públicos y de la ciudadanía interesada en acceder a la función pública, cuenten con un marco legal adecuado y se pueda contar con servidores y ciudadanos debidamente formados y capacitados para el trabajo en entidades de la Administración Pública, todo lo cual está en línea con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada por el Decreto Supremo N° 103-2022-PCM.[356]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia de gestión pública pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La problemática que se pretende solucionar es la falta de un marco legal claro que permita a la ENAP cumplir con el mandato de la Ley Universitaria N° 30220, de organizar cursos de posgrado, y que defina sus competencias respecto a sus actividades. Esto es crucial para que las actividades de la ENAP alcancen a todas las

[356] De la exposición de motivos del punto 3.1.54 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE.

personas que desempeñan una función administrativa o a cualquier ciudadano interesado en desempeñar una función pública.[357]

La urgencia de la regulación radica en la necesidad de generar un marco legal genérico dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que institucionalice los cursos de inducción y acceso a la función pública requeridos por las diversas entidades de la Administración Pública.[358]

El impacto de esta regulación será significativo en el sector correspondiente, ya que permitirá el fortalecimiento de la ENAP y asegurará que las actividades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los servidores públicos y de la ciudadania interesada en acceder a la función pública, cuenten con un marco legal adecuado. Esto permitirá contar con servidores y ciudadanos debidamente formados y capacitados para el trabajo en entidades de la Administración Pública.

Los recursos para implementar la propuesta normativa ya están incluidos en el presupuesto institucional de SERVIR, por lo que no se requerirán recursos adicionales.[359]

De acuerdo al Oficio 1345-2023-2024/CDRGLMGE-ACA-CR suscrito por el congresista Alejandro Cavero Alva presidente de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales, y Modernización de la Gestión del Estado de fecha 30 de mayo de 2024 se adjunta el informe de opinión sobre viabilidad de facultades al Poder Ejecutivo en el cual sobre el punto materia de análisis recomienda que es pertinente otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en esta materia pues es necesario fortalecer la labor de la Escuela Nacional de Administración Pública -ENAP, esto significa generar el marco normativo que le permita potenciar las capacidades de los servidores públicos en materias intrinsecas a la gestión pública. Así como, a los

[357] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.54 suscrito por el presidente ejecutivo de SERVIR Guillermo Steve Valdivieso Payva.
[358] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.54 suscrito por el presidente ejecutivo de SERVIR Guillermo Steve Valdivieso Payva.
[359] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.54 suscrito por el presidente ejecutivo de SERVIR Guillermo Steve Valdivieso Payva.

ciudadanos para su formación y capacitación en el trabajo de entidades de la administración pública.

Como lo señala la presidencia ejecutiva de SERVIR, a través del documento suscrito por Guillermo Steve Valdivieso Payva, la propuesta tendrá un impacto positivo en la calidad de la formación para el servicio civil al permitir que todo aquel que labora para el Estado o que también desee incorporarse a la administración pública como servidor civil, pueda acceder sin discriminación a alguna capacitación de muy alta calidad. [360] Igualmente, habrá un impacto positivo a generar un marco legal claro para el acceso calidad y certificación de estudios de maestría y doctorado, desde una institución pública distinta a la universidad pero altamente especializada. Los impactos descritos, al favorecer y fortalecer el desarrollo de capacidades de los servidores civiles, incidirán positivamente en la gestión de los servicios públicos que brindan las entidades en beneficio de la ciudadanía. [361]

Esta Comisión recomienda aprobar este aspecto así solicitado en el punto de la materia así solicitado para la delegación de facultades por el alto impacto positivo en el desarrollo de capacidades de los servidores civiles, que a su vez fortalecerán la gestión de los servicios públicos que se brindan a la ciudadanía.

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado, aunque debe ser acotado para la delegación de facultades, por lo que se propone el siguiente texto sustitutorio:

"Establecer, regular y modificar el marco normativo que habilite, garantice, y autorice el correcto funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP ampliando su ámbito de alcance para el fortalecimiento de las capacidades de las personas que prestan servicios al Estado y a la ciudadanía dentro del marco de competencias de ENAP, estableciendo las disposiciones necesarias para cumplir con

[360] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.54 suscrito por el presidente ejecutivo de SERVIR Guillermo Steve Valdivieso Payva.
[361] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.54 suscrito por el presidente ejecutivo de SERVIR Guillermo Steve Valdivieso Payva.

su misión institucional y permitiendo la mejora del servicio público prestado por los servidores capacitados".

3.1.55 Establecer el marco normativo para la mejora del servicio público, a través de la optimización del régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, garantizando la idoneidad y la actuación independiente e imparcial de la secretaría técnica del procedimiento administrativo disciplinario, el debido procedimiento y la predictibilidad en la aplicación de las medidas disciplinarias.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Según lo estipulado en el artículo 92 de la Ley N° 30057, el secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario es nombrado por resolución del jefe de la entidad y está subordinado a la oficina de recursos humanos de la entidad o su equivalente. Preferentemente, el secretario técnico es un abogado.[362]

Esta disposición plantea un desafío para la independencia e imparcialidad del Secretario Técnico del procedimiento administrativo disciplinario, ya que está subordinado a órganos superiores de la Entidad. Esto podría generar riesgos, como la

[362] De la Exposición de motivos sobre el punto 3.1.55 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

posibilidad de que las denuncias contra las autoridades actuales no se tramiten adecuadamente o con la rapidez necesaria, o incluso podrían ser archivadas.[363]

Por lo tanto, para asegurar la imparcialidad en su desempeño general, es esencial otorgar independencia funcional y administrativa al secretario técnico, evitando cualquier acto o circunstancia que pueda comprometer la autonomía en el cumplimiento de sus funciones.[364]

Además, para garantizar la supervisión de los principios jurídicos aplicables y la legalidad de los actos realizados en el procedimiento administrativo disciplinario, se considera necesario establecer un marco normativo que estipule que el secretario técnico debe tener un título en derecho.[365]

Por otro lado, la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil ha observado una gran cantidad de procedimientos administrativos disciplinarios que han incurrido en vicios de nulidad, por violación al debido procedimiento y a los derechos de los servidores públicos. También ha identificado que existe un gran número de procedimientos administrativos disciplinarios que han sido declarados prescritos por el citado Tribunal, debido a la demora de las autoridades en la tramitación de los procedimientos.[366]

De hecho, según el Sistema de Gestión de Expedientes (SGE) del Tribunal, las nulidades declaradas desde el año 2019 hasta la fecha, representan un cuarenta y siete por ciento (47%) del total de expedientes correspondientes al régimen disciplinario, durante el referido periodo.[367]

Por lo tanto, es necesario establecer un marco normativo que permita garantizar el ejercicio oportuno de la potestad disciplinaria de las entidades públicas, y así evitar la impunidad originada por la prescripción de dicha potestad.[368]

---

[363] Ibidem
[364] Ibidem
[365] Ibidem
[366] Ibidem
[367] De la Exposición de motivos sobre el punto 3.1.55 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[368] Ibidem

Además, se considera imperativo aprobar el marco normativo que contribuya al respeto del principio del debido procedimiento administrativo en la tramitación y procesamiento de las faltas disciplinarias cometidas en el marco del régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, garantizando la predictibilidad en la aplicación de las medidas disciplinarias, a través de una correcta graduación de las sanciones a imponer.[369]

En atención a lo anteriormente expuesto, se beneficiará a los operadores que participan en el procedimiento administrativo disciplinario, a los servidores públicos inmersos en investigaciones y a la ciudadanía en general por el adecuado ejercicio de la potestad disciplinaria.

En cuanto al financiamiento, se precisa que se realizará con los recursos de cada entidad, a través de una implementación progresiva de la Ley, en el marco de las etapas de formulación y programación presupuestaria.[370]

Finalmente, la presente iniciativa legislativa se orienta a incorporar en el ordenamiento jurídico nacional, un nuevo marco normativo para garantizar la idoneidad, independencia técnica y funcional de los secretarios técnicos de los procedimientos administrativos disciplinarios, el debido procedimiento administrativo disciplinario y la predictibilidad en la aplicación de las medidas disciplinarias a imponer, todo lo cual se alinea con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada por Decreto Supremo N° 103-2022-PCM.[371]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia de gestión pública pueden ser delegables, siempre

[369] Ibidem
[370] Ibidem
[371] Ibidem

y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La necesidad de intervención regulatoria que se solicita surge de varios problemas identificados en el procedimiento administrativo disciplinario, tal como se describe en los párrafos proporcionados entre ellos:
La independencia e imparcialidad del Secretario Técnico, actualmente, el Secretario Técnico está subordinado a órganos superiores de la entidad, lo que puede comprometer su independencia e imparcialidad. Esto podría resultar en una tramitación inadecuada de las denuncias, especialmente contra las autoridades actuales.
Los vicios de nulidad y prescripción de procedimientos, la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil ha observado una gran cantidad de procedimientos administrativos disciplinarios con vicios de nulidad y prescripciones. Estos problemas se deben a la contravención al debido procedimiento y a la demora en la tramitación de los procedimientos.[372]

Para abordar estos problemas, se propone una serie de medidas regulatorias entre ellas: la de establecer un marco normativo que garantice la independencia funcional y administrativa del Secretario Técnico, la de requerir que el Secretario Técnico tenga un título en derecho para garantizar la vigilancia de los principios jurídicos aplicables y la legalidad de los actos realizados en el procedimiento, el establecer un marco normativo que permita el ejercicio oportuno de la potestad disciplinaria de las entidades públicas, evitando la impunidad originada por la prescripción de dicha potestad. La de aprobar

[372] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.55 suscrito por el presidente ejecutivo de SERVIR Guillermo Steve Valdivieso Payva.

un marco normativo que garantice el respeto del principio del debido procedimiento administrativo en la tramitación y procesamiento de las faltas disciplinarias.[373]

Estas medidas regulatorias tendrán un impacto significativo en el sector, beneficiando a los operadores que participan en el procedimiento administrativo disciplinario, a los servidores públicos inmersos en investigaciones y a la ciudadanía en general. Además, se alinean con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.[374]

Finalmente, la iniciativa legislativa busca incorporar en el ordenamiento jurídico nacional un nuevo marco normativo para garantizar la idoneidad, independencia técnica y funcional de los secretarios técnicos de los procedimientos administrativos disciplinarios, el debido procedimiento administrativo disciplinario y la predictibilidad en la aplicación de las medidas disciplinarias a imponer. Esto contribuirá a la eficacia y eficiencia del procedimiento administrativo disciplinario y al fortalecimiento del estado de derecho.[375]

De acuerdo al Oficio 1345-2023-2024/CDRGLMGE-ACA-CR suscrito por el congresista Alejandro Cavero Alva presidente de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales, y Modernización de la Gestión del Estado de fecha 30 de mayo de 2024 se adjunta el informe de opinión sobre viabilidad de facultades al Poder Ejecutivo en el cual sobre el punto materia de análisis recomienda que es pertinente otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en esta materia, aunque señala de manera oportuna que sobre esta materia existen iniciativas legislativas sobre este punto. Aunque para esta Comisión es importante señalar que lo que se debe abordar es la problemática del secretario técnico, y mejorar las condiciones de independencia e imparcialidad del mismo dentro del procedimiento administrativo disciplinario.

Sobre este tema en la Comisión de Presupuesto recientemente con fecha 29 de mayo de 2024, se aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley 6008/2023-CR sobre

---

[373] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.55 suscrito por el presidente ejecutivo de SERVIR Guillermo Steve Valdivieso Payva.
[374] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.55 suscrito por el presidente ejecutivo de SERVIR Guillermo Steve Valdivieso Payva.
[375] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.55 suscrito por el presidente ejecutivo de SERVIR Guillermo Steve Valdivieso Payva.

la Ley que modifica la ley 30057, Ley del Servicio Civil, para establecer las funciones de apoyo del secretario técnico a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, tanto en la fase instructiva y en la fase sancionadora, en atención sobre todo a esta última razón señalada, esta Comisión considera que no corresponde que el Congreso de la República delegue las facultades solicitadas en este punto, al tramitarse la solución del problema público por el Congreso de la República mediante este proyecto de ley.

Conclusión

Por lo tanto, no es pertinente que la presente materia sea tramitada a través de una delegación de facultades al encontrarse en trámite este problema público por el procedimiento legislativo del proyecto de ley 6008/2023-CR en el Pleno del Congreso de la República, en consecuencia no se delegará facultades en este extremo.

3.1.56 Modificar el Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria para: i) precisar los efectos ante el incumplimiento de no haber efectuado un Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), ii) fortalecer el rol de los actores y su articulación con el ecosistema de calidad regulatoria, iii) restringir los supuestos de excepciones para la aplicación de los instrumentos de calidad regulatoria, iv) fortalecer los mecanismos de trasparencia de la información que se genera en el ciclo regulatorio, y, v) fortalecer el rol de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La propuesta normativa es esencial y oportuna para abordar la necesidad de perfeccionar y armonizar el marco normativo para mejorar la calidad regulatoria. Esto promoverá una cultura de gestión gubernamental centrada en el ciudadano, donde la Administración Pública utiliza la regulación como un instrumento para lograr un objetivo de política pública. Esta decisión de regular se basa en evidencia, racionalidad, evaluación de impactos y efectos potenciales, y cargas administrativas, respaldada por la participación integral de las partes interesadas. El objetivo es generar y facilitar el

desarrollo integral y sostenible, el bienestar social y el fortalecimiento del buen gobierno.[376]

La mayoría de los países de la OCDE han adoptado programas de reforma regulatoria, que contienen una serie de instrumentos e instituciones que están integrados y se apoyan mutuamente. La característica más común de los programas de reforma regulatoria en los países de la OCDE es la obligación de consultar a las partes afectadas sobre las propuestas de regulación, redactar regulaciones en un lenguaje sencillo y aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio, que incluye la exigencia de considerar alternativas de regulación.[377]

En las últimas dos décadas, se ha logrado un perfeccionamiento progresivo y una mejora de las políticas de reforma regulatoria. Se ha desarrollado una tendencia casi universal hacia un mayor rigor y una cobertura más amplia de la mejora regulatoria. En los países avanzados en esta reforma, los esfuerzos se han centrado en el desarrollo de estrategias para integrar mejor los diversos requisitos de calidad en la elaboración de políticas. En este contexto, se reconoce la eficacia de las políticas de calidad regulatoria, destacando una relación clara entre la adopción de procesos de mejores prácticas regulatorias y mejores resultados económicos. La evidencia de ello es que la reforma de la calidad regulatoria se está adoptando en cada vez más países.[378]

Nuestro país optó por la implementación del ACR Stock como primer instrumento de mejora de la calidad regulatoria, siendo necesario continuar con la implementación de otros instrumentos que fortalezcan este proceso. Estos instrumentos coadyuvantes de la Mejora de Calidad Regulatoria del Perú son: el AIR Ex Ante, la consulta pública, la Agenda Temprana, entre otros.[379]

Para fortalecer la mejora de la calidad regulatoria y siguiendo las buenas prácticas internacionales, se ha generado un marco institucional bien diseñado para gestionar, coordinar, articular y facilitar la reforma regulatoria. Además, los criterios, requisitos e

[376] De la Exposición de motivos sobre el punto 3.1.56 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[377] Ibidem
[378] Ibidem
[379] De la Exposición de motivos sobre el punto 3.1.56 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE

instrumentos de la Mejora de la Calidad Regulatoria del Perú son claramente coherentes con las mejores prácticas internacionales y su introducción gradual y continua corresponde a la capacidad técnica y administrativa de su aplicación de forma sostenible.[380]

En este sentido, es necesario avanzar en medidas que fortalezcan la gobernanza y la adecuada implementación en las entidades de la Administración Pública. Entre los impactos cualitativos y cuantitativos, se menciona que la aplicación de la propuesta normativa no genera gastos adicionales en el Presupuesto del Sector Público, ya que sus disposiciones no tienen carácter presupuestario. Por el contrario, genera beneficios ya que lo que se busca, en el marco de la modernización de la gestión pública, es a través de la modificación del Decreto Legislativo N.° 1565 que permita fortalecer la gobernanza, los roles de los actores involucrados, y fortalecer la aplicación de los instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria. Esto asegurará la idoneidad y la calidad del contenido de las intervenciones normativas que adopten las entidades del Poder Ejecutivo, basándose en evidencia, con procesos transparentes y participativos, sin generar sobrecostos a las empresas y ciudadanos, entendiendo la regulación como un medio para alcanzar un objetivo de política pública.[381]

En el Perú, el proceso de mejora regulatoria se inició a mediados de 2017 con un proceso de reforma integral de los procedimientos administrativos a cargo de las entidades del Poder Ejecutivo a través de la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria. El objetivo era: i) Eliminar procedimientos administrativos ilegales o innecesarios, ii) eliminar y simplificar requisitos, iii) determinar los costos de las cargas administrativas generadas, iv) contar con una línea base para la determinación de metas de reducción de cargas administrativas y v) sistematizar todos los procedimientos administrativos a cargo de las entidades del Poder Ejecutivo.[382]

El proceso de implementación del Análisis de Calidad Regulatoria del Stock de procedimientos administrativos vigentes tuvo una duración de 2 años que inició en junio de 2017 y culminó en junio de 2019. Como resultado del proceso se obtuvo lo siguiente:

---

[380] Ibidem
[381] Ibidem
[382] Ibidem

el 73% de los procedimientos eliminados impactan en la micro, mediana y pequeña empresa; la eliminación impacta en 4 millones de solicitudes realizadas por personas naturales, empresas (micro, mediana y pequeña empresa), organizaciones sin fines de lucro y otros; se eliminaron 275 requisitos y se simplificaron 783 requisitos; las entidades del Poder Ejecutivo han establecido una línea de base de los costos que generan las cargas administrativas lo que permitirá simplificar más los procedimientos administrativos en los siguientes ciclos de revisión.

Las cargas administrativas son los costos soportados por las empresas, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, como resultado de las actividades administrativas realizadas para cumplir con las obligaciones de información incluidas en la regulación.[383]

En el contexto del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), se llevó a cabo un esfuerzo significativo para medir y reducir las cargas administrativas asociadas con los procedimientos administrativos. Como resultado, la carga administrativa de los procedimientos administrativos evaluados se redujo en aproximadamente S/. 286.3 millones de nuevos soles, debido a la eliminación del 30% (734) de los procedimientos administrativos revisados y de 275 requisitos. Además, se simplificaron 738 requisitos.[384]

La principal contribución del enfoque de mejora de la calidad regulatoria en Perú es que no se enfoca únicamente en los impactos que la regulación puede tener en la economía. En cambio, apunta a un análisis más integral con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible que garantice la defensa de los derechos humanos y la dignidad en todo el territorio nacional.[385]

Desde una perspectiva económica, la regulación se basa en la existencia de una deficiencia significativa del mercado que surge de las economías de escala y alcance de la producción, las imperfecciones de la información en las transacciones de mercado, la existencia de mercados incompletos y externalidades, y los efectos

[383] De la Exposición de motivos sobre el punto 3.1.56 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[384] Ibidem
[385] Ibidem

resultantes de la distribución de ingresos y riqueza. Las deficiencias del mercado son más pronunciadas en los países en desarrollo, por lo tanto, la regulación pública es relevante y más pronunciada en estos países.[386]

La principal contribución del enfoque de mejora de la calidad regulatoria en Perú es que no se enfoca únicamente en los impactos que la regulación puede tener en la economía. En cambio, apunta a un análisis más integral con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible que garantice la defensa de los derechos humanos y la dignidad en todo el territorio nacional.[387]

Por lo tanto, el proyecto normativo no incorpora ni modifica reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique una variación de costos en su cumplimiento por parte de empresas, ciudadanos o sociedad civil, que limite la concesión o reconocimiento de derechos para el desarrollo óptimo de actividades económicas y sociales que contribuyen al desarrollo integral, sostenible y al bienestar social.[388]

En cuanto al impacto de la entrada en vigor de la norma, se propone la modificación del Decreto Legislativo 1565, Ley que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria.[389]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia de gestión pública pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

[386] Ibidem
[387] Ibidem
[388] De la Exposición de motivos sobre el punto 3.1.56 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE
[389] Ibidem

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La propuesta normativa busca mejorar y armonizar el marco regulatorio, promoviendo una gestión gubernamental centrada en el ciudadano. La regulación se utiliza como un instrumento para alcanzar objetivos de política pública, basándose en evidencia, racionalidad y evaluación de impactos y efectos.[390]

Los países de la OCDE han adoptado programas de reforma regulatoria que incluyen la consulta a las partes afectadas, la redacción de regulaciones en lenguaje sencillo y la consideración de alternativas de regulación. En las últimas dos décadas, se ha perfeccionado la reforma regulatoria, con una tendencia hacia un mayor rigor y una cobertura más amplia.[391]

En Perú, se ha implementado el ACR Stock como primer instrumento de mejora de la calidad regulatoria, y se planea continuar con la implementación de otros instrumentos como el AIR Ex Ante, la consulta pública y la Agenda Temprana.[392]

La aplicación de la propuesta normativa no genera gastos adicionales en el Presupuesto del Sector Público, sino que genera beneficios al fortalecer la gobernanza y la aplicación de los instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria.[393]

El proceso de mejora regulatoria en Perú comenzó a mediados de 2017 con una reforma integral de los procedimientos administrativos. Como resultado, se eliminaron

[390] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.56 suscrito por la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
[391] Ibidem
[392] Ibidem
[393] Del anexo 2 sobre el punto 3.1.56 suscrito por la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

y simplificaron requisitos, se determinaron los costos de las cargas administrativas y se sistematizaron todos los procedimientos administrativos.[394]

Las cargas administrativas son los costos soportados por empresas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para cumplir con las obligaciones de información incluidas en la regulación. Como resultado del Análisis de Calidad Regulatoria, la carga administrativa se redujo en aproximadamente S/. 286.3 millones nuevos soles.[395]

El enfoque de la mejora de la calidad regulatoria en Perú no se centra exclusivamente en los impactos económicos de la regulación, sino que busca un desarrollo sostenible que garantiza la defensa de los derechos de las personas y de su dignidad en todo el territorio nacional. La regulación es especialmente relevante en países en desarrollo, donde las deficiencias del mercado son más pronunciadas[396]

La mejora de la calidad regulatoria del Perú es claramente coherente con las mejores prácticas internacionales y su introducción gradual y continua, y corresponden a la capacidad técnica y administrativa de su aplicación de forma sostenible . En ese sentido, se requiere avanzar en medidas que fortalezcan la gobernanza y la adecuada implementación en las entidades de la administración pública. [397]

Por Informe 00081-2024-SUNASS-OAJ suscrito por Edwin Paca Palao jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNASS y otros funcionarios de la misma institución se concluye sobre este punto materia de análisis que respecto a la modificación del Decreto Legislativo 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, se debe señalar la problemática identificada que permita evaluar si los objetivos propuestos efectivamente permitirán mejorar y armonizar el marco normativo de calidad regulatoria, teniendo en cuenta los avances alcanzados, de manera particular la experiencia de los organismos reguladores de la materia.

---

[394] Ibidem
[395] Ibidem
[396] Ibidem
[397] Ibidem

Por Informe 00088/DPRC/2024 de OSIPTEL de fecha 22 de mayo de 2024 suscrito por Marco Antonio Vílchez Román Director de Políticas Regulatorias y Competencia se señala que con respecto a la modificación del Decreto Legislativo 1565 que plantea el numeral de este punto materia de análisis, no corresponde incluir en los alcances de esta disposición normativa a los organismos reguladores dada su naturaleza técnica, así como de la independencia funcional y autonomía.

De acuerdo al Oficio 1345-2023-2024/CDRGLMGE-ACA-CR suscrito por el congresista Alejandro Cavero Alva presidente de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales, y Modernización de la Gestión del Estado de fecha 30 de mayo de 2024 se adjunta el informe de opinión sobre viabilidad de facultades al Poder Ejecutivo en el cual sobre el punto materia de análisis recomienda que no es pertinente otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en esta materia, por cuanto sobre la referida materia se han presentado diversos proyectos de ley:

- El proyecto de Ley 6415/2023-CR, Ley de Mejora Normativa y Simplificación Administrativa en los Gobiernos Regionales y Locales, derivado a la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales y Modernización de la Gestión del Estado.
- El proyecto de Ley 6665/2023-CR, proyecto de Ley que articula la Política Integral de Mejora Regulatoria, derivado a la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales y Modernización de la Gestión del Estado.
- El proyecto de Ley 4057/2023-CR, Ley que modifica y eleva a rango de ley el Decreto Legislativo 1203 que crea el Sistema Único de Tramites (SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos y servicios prestado en exclusividad para, uniformizar e implementar los tramites documentarios en la administración pública, derivado a la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales y Modernización de la Gestión del Estado.
- El proyecto de Ley 7814/2023-CR, Ley de creación de la Autoridad Nacional de Mejora Regulatoria, derivado a la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales y Modernización de la Gestión del Estado.

  Estos proyectos de ley han sido analizados y acumulados en el dictamen aprobado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, en su décima séptima sesión ordinaria de fecha 14 de mayor de 2024, cuyo dictamen propone la aprobación de la Ley

Nacional de Mejora Regulatoria, incorporando una regulación integral y sistémica de la calidad regulatoria aplicables a los tres niveles de gobierno. [398]

En atención a estos argumentos, esta Comisión considera que no corresponde que el Congreso de la República delegue las facultades solicitadas en este punto, al tramitarse la solución del problema público por el Congreso de la República mediante estos proyectos de ley.

Conclusión

Por lo tanto, no es pertinente que la presente materia sea tramitada a través de una delegación de facultades al encontrarse en trámite este problema público por el procedimiento legislativo de los proyectos arriba señalados en el Pleno del Congreso de la República, por lo que en consecuencia no se delegará facultades en este extremo.

3.1.57. Facultar al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) para el uso de herramientas tecnológicas en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras y acceso a información de datos personales y metadata, a fin de garantizar que los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones puedan contar con la prestación continua del servicio contratado.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

[398] Oficio 1345-2023-2024/CDRGLMGE-ACA-CR suscrito por el congresista Alejandro Cavero Alva presidente de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales, y Modernización de la Gestión del Estado de fecha 30 de mayo de 2024 se adjunta el informe de opinión sobre viabilidad de facultades al Poder Ejecutivo en el cual sobre el punto materia de análisis.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones, el OSIPTEL se encarga de regular el comportamiento de las empresas operadoras así como las relaciones de dichas empresas entre sí, de garantizar la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario y de regular el equilibrio de las tarifas, pero para poder cumplir cabalmente con sus funciones; en particular, la función reguladora, supervisora. Fiscalizadora uy sancionadora y la atención de reclamos de usuarios, requieren modificaciones a la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, cuyo objetivo era definir y delimitar las facultades del OSIPTEL.

El sustento que ha realizado PCM, para justificar la necesidad de la propuesta, radica en la intención de corregir la asimetría de la información entre las empresas operadoras y el regulador, respecto al cumplimiento de sus obligaciones de cara a garantizar que los usuarios cuenten con una adecuada prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. Asimismo, señaló que existe un constante cuestionamiento de las empresas operadoras ante instancias superiores sobre las decisiones que adopta el regulador, a pesar de que, conforme a los pronunciamientos de las autoridades competentes, estas se encuentran de acuerdo con ley.

En específico, la delegación solicitada persigue la modificación de la Ley N° 27336 para incluir un artículo que contenga la la disposición correspondiente al uso de herramientas informáticas para la fiscalización, precisando que se salvaguarda las disposiciones de la Ley de protección de datos personales.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Corresponde ahora evaluar la viabilidad constitucional de la facultad solicitada. Sobre este punto, se debe tomar en cuenta lo establecido en los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, que ha señalado cuáles son las materias que no son delegables, ni a la Comisión Permanente ni al Poder Ejecutivo para la emisión de legislación delegada.

Al respecto, se recuerda además lo descrito en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha previsto lo siguiente:

> "[...] Así, por ejemplo, el artículo 104.º de la Constitución se refiere a la ley autoritativa, mediante la cual el Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar a través de Decretos Legislativos. Dicha ley tiene dos elementos indispensables: la materia específica a delegar y el plazo determinado para ejercer la delegación. A su turno, conforme a los artículos 104.º y 101.º, inciso 4.º, de la Constitución, el Congreso de la República no puede delegar al Poder Ejecutivo las materias relativas a reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República. [...][399]" [Énfasis agregado]

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República), por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Se reconoce la existencia de una problemática que consiste en la asimetría de la información entre las empresas operadoras y el regulador respecto al cumplimiento de sus obligaciones, a fin de garantizar que los usuarios tengan una adecuada protección de los servicios. No obstante, corresponde ahora analizar la necesidad de la intervención regulatoria que solicita el Poder Ejecutivo.

Al respecto, se debe advertir la existencia del Proyecto de Ley 3752/2022-CR, Ley que modifica la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel, para fortalecer las facultades de decomiso de bienes vinculados a la infracción administrativa y dicta otras medidas.

El referido proyecto de ley se encuentra con dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos, en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el lunes 30 de octubre

[399] Fundamento 16 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 047-2004-AI/TC.

de 2023; encontrándose además en el Orden del Día[400] como se aprecia en el siguiente cuadro:

— PROYECTO DE LEY N° 03752/2022-CR

Periodo Parlamentario	Legislatura	Fecha de Presentación	Proponente
2021-2026	Primera Legislatura Ordinaria 2022	12/12/2022	Congreso

Título
LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 27336, LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES — OSIPTEL

Sumilla
PROPONE MODIFICA LA LEY N° 27336, LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES — OSIPTEL.

Observaciones
- -

Autor Principal	Coautores	Adherentes
• Yarrow Lumbreras, Norma Martina	• Bazán Calderón, Diego Alonso Fernando • Arruriz Dulanto, Yessica Rossell • Williams Zapata, José Daniel Ver más...	- -

Grupo Parlamentario	Comisiones	Último Estado
Avanza País - Partido de Integración Social	• Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos	Orden del Día (Seguimientos)

Cabe destacar que, en el referido dictamen ya se incluye un artículo en la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel, que persigue la misma finalidad que ha sido presentada por el Poder Ejecutivo en el presente Proyecto de Ley, como se aprecia a continuación:

> **Artículo 2. Incorporación de los artículos 6-A y 15-A y de la disposición final tercera a la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-Osiptel.**
> Se incorporan los artículos 6-A. y 15-A y la disposición final tercera a la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-Osiptel, con la siguiente redacción:
>
> > "Artículo 6-A. Datos personales para fines de fiscalización de los servicios públicos de telecomunicaciones.

[400] Como se aprecia de la página web del Congreso de la República. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3752

> El Osiptel puede solicitar a las empresas operadoras, bajo los alcances del artículo 14 de la Ley 29733, Ley de protección de datos personales, la remisión de información de datos personales relacionada a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.
> La información requerida es remitida por las empresas operadoras a través de mecanismos informáticos automatizados, mediante canales seguros de comunicación, de acuerdo con los plazos y términos que defina el Osiptel, garantizando el derecho fundamental de protección de los datos personales. Las empresas operadoras tienen la obligación de resguardar dicha información por un periodo mínimo de tres años, salvo que mediante normativa específica se haya previsto un plazo distinto".

En tal sentido, al analizar la urgencia y necesidad de delegar esta materia en específico, se aprecia que no sería necesario hacerlo; por cuanto, existe un proyecto de ley, con dictamen favorable *ad portas* de ser debatido y votado en el pleno que cumpliría la misma finalidad que, la emisión de decretos legislativos por parte el Poder Ejecutivo y de una manera más célere.

Adicionalmente, se tiene la opinión de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura, contenida en la AFIN N° 140 - 2024 Lima, 23 de mayo del 2024[401], en la que se concluyó que una norma que permita a OSIPTEL el acceso irrestricto, permanente y en línea a todos los sistemas de operación de red, sistemas comerciales, bases de datos y plataformas de las operadoras de telecomunicaciones y a la información de datos personales de los clientes, sin ninguna limitación, bajo los criterios que el propio OSIPTEL defina, es una medida desproporcionada y pone en peligro el modelo de gestión de cada empresa. Añade que la propuesta pretende permitir el acceso irrestricto a información que se encuentra protegida por derechos constitucionales, tales como el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales, por lo que de aprobarse se estaría vulnerando los referidos derechos de todos los peruanos.

Conclusión

[401] Esta información se encuentra disponible en la web del Congreso de la República: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5NzY5/pdf

De todo lo expuesto se advierte que, no es necesario el otorgamiento de facultades en esta materia, por cuanto ya existe un Proyecto de Ley 3752/2022-CR, que constituye una vía igualmente satisfactoria y más rápida para solucionar la problemática advertida. En tal sentido, esta Comisión concluye que NO se debe brindar las facultades solicitadas en este extremo.

3.1.58. Modificar el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el objetivo de ampliar el plazo de 15 días hábiles con el que cuentan los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado a un plazo de 30 días hábiles, como una excepción al plazo general establecido en dicha norma para la resolución de los recursos de reconsideración.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Mediante Ley N° 31603, se modificó el artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), en la que se redujo el plazo del recurso de reconsideración de 30 días hábiles a 15 días hábiles para todas del sector público. De acuerdo con lo indicado en la exposición de motivos y lo presentado en las sucesivas reuniones de trabajo que esta Comisión sostuvo con los sectores con fechas 21,22 y 23 de mayo de 2024, se ha manifestado que, esta medida fue desacertada porque no se consideró la naturaleza y funcionamiento de los Consejos Directivos y de los órganos colegiados de las distintas entidades públicas y la distinta complejidad de las causas que conocen.

La propuesta consiste en la modificación del artículo 207.2 del artículo 207 de la LPAG, a fin de ampliar el plazo de 15 días hábiles a 30 días hábiles, como una excepción al plazo general de resolución de los recursos de reconsideración por parte de los órganos colegiados de las entidades públicas.

Con la finalidad de sustentar la propuesta, en la exposición de motivos, se señala que, los Consejos Directivos y órganos colegiados no ejercen sus funciones de manera continua o permanente, sino que sesionan de manera periódica, por lo que el plazo de 15 días hábiles resulta insuficiente; además, estos colegiados, a efectos de resolver los recursos, requieren opiniones técnicas de sus órganos de línea y asesoramiento que, requieren de un plazo razonable para evaluar y analizar temáticas especializadas.

Asimismo, se ha señalado que, este plazo tan breve tampoco resulta concordante con las obligaciones establecidas en la Ley, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas y los principios del procedimiento administrativo y la necesidad de una audiencia pública exigidos por la Ley N° 27444. Finalmente, refieren que la medida a adoptarse permitirá salvaguardar la calidad de las decisiones de los órganos colegiados.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Corresponde ahora evaluar la viabilidad constitucional de la facultad solicitada. Sobre este punto, se debe tomar en cuenta lo establecido en los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, que ha señalado cuáles son las materias que no son delegables, ni a la Comisión Permanente ni al Poder Ejecutivo para la emisión de legislación delegada.

Al respecto, se recuerda además lo descrito en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha previsto que el artículo 104 de la Constitución establece los límites que, a su vez, el Poder Ejecutivo debe observar con ocasión de la expedición legislación ejecutiva delegada. Estos límites, además de los que vienen impuestos explícita o implícitamente por la Constitución, esencialmente están constituidos por aquellos fijados en la ley habilitante y pueden ser: a) Límites temporales, relativa al plazo con que se cuenta con habilitación para legislar; y b) Límites materiales, por lo que la legislación delegada habrá de desarrollar estrictamente las materias identificadas en la ley autoritativa.[402]

[402] Cfr. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de fecha 8 de julio de 2015, recaída en el Expediente 00022-2011-PI/TC. Fundamento Jurídico 13.

De lo descrito se aprecia que, de conformidad con los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República), por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En primer lugar, debemos señalar que, la medida propuesta ha sido correctamente delimitada; por cuanto la intervención normativa consistiría solamente en la modificación del artículo 207.2 del artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General[403].

Esta Comisión considera que es pertinente reestablecer el plazo de 30 días hábiles, porque esta medida tendrá un impacto positivo en la calidad de los pronunciamientos a emitirse, lo cual a su vez, implica:
a) Evitar mayores conflictos con los administrados en la vía judicial o arbitral, porque de tendrá una mejor calidad de decisiones en la resolución de recursos de reconsideración;
b) Como consecuencia de ello, se reducirá el gasto público destinado a la defensa del Estado en dichos procesos,
c) Se mejorará la correcta prestación de los servicios públicos y se optimizará la resolución de recursos en beneficio de los usuarios.

Por lo que, al analizar la pertinencia urgencia y necesidad de delegar esta materia en específico, se aprecia que cumple con los requisitos de pertinencia para ser delegado, por lo que esta Comisión considera viable que se conceda la delegación de facultades, respecto a este extremo.

---

[403] Artículo 207. Recursos Administrativos [...]
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días, con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince (15) días

Conclusión

En conclusión, se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad, con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el objetivo de ampliar el plazo de 15 días hábiles hasta 30 días hábiles, para que los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado, como una excepción al plazo general establecido en dicha norma para la resolución de los recursos de reconsideración."

3.1.59. Modificar la Ley No. 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, para establecer medidas de articulación y coordinación de los organismos reguladores, orientada a la mejora de la gestión regulatoria.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Sobre este punto, en la exposición de motivo, la PCM ha sustentado la necesidad de la delegación de facultades, mencionando solo "medidas de coordinación y articulación" con la finalidad de fortalecer la capacidad de los organismos reguladores para cumplir con su mandato de manera efectiva, garantizando un entorno regulatorio estable y predecible, tanto para inversionistas como para usuarios de servicios públicos. A tal efecto, en la exposición de motivos se propone la modificación de la Ley N° 27332 con el objeto de establecer medidas de articulación, colaboración y coordinación entre los organismos reguladores, mediante los siguientes puntos clave:

- Establecimiento de mecanismos de coordinación
- Definición de objetivos comunes
- Intercambio de información y buenas prácticas
- Evaluación periódica de la gestión regulatoria

No obstante, en las reuniones sostenidas con funcionarios de la PCM y demás ministerios involucrados en la presente solicitud de delegación de facultades, los días 21,22 y 23 de mayo de 2024 y en la información complementaria aportada en la PCM, se ha manifestado la intención de unificar los organismos reguladores. Es más, se ha identificado, que la PCM, ha agregado con posterioridad en el encabezado de la submateria solicitada el siguiente texto: "Modificar la Ley No. 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, para establecer medidas de articulación y coordinación de los organismos reguladores, **mediante su integración en un único organismo regulador multisectorial que integre a los organismos reguladores actuales, para la mejora de la gestión regulatoria".** Y sugieren la creación de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos (SUNASERP) que integraría la regulación de los sectores de energía, minas, telecomunicaciones, transportes y saneamiento.

En esa misma línea, la PCM amplió los argumentos indicando que la OCDE señaló como una problemática la falta de coordinación y coherencia regulatoria, porque existe duplicidad de funciones de los organismos regulador, es (en especial en el caso de OSIPTEL, INDECOPI, PRONATEL, OSITRAN, MTC, OEFA, OSINERMING y SUNAFIL) lo que ha traído como consecuencia la ineficiencia en la gestión de recursos. Asimismo, señalaron que, estas mismas deficiencias han sido advertida por la Contraloría de la República.

Entre los beneficios que PCM señala que podrían surgir de la unificación de los órganos reguladores se han mencionado: a) Eficiencia regulatoria: podría simplificar y agilizar los procesos regulatorios, reducir burocracia; b) Mejora en la supervisión: mejor aplicación de normas y estándares; c) Coordinación intersectorial: Se facilitaría coordinación y colaboración y a una planificación más integral; y finalmente, d) Atracción de Inversión: Una regulación más eficiente y transparente podría mejorar el clima de inversión en los sectores involucrados.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

En este punto, se advierte que la submateria solicitada fue descrita de manera bastante imprecisa y en términos generales en la exposición de motivos, y que han precisado e

incluso cambiado la intención inicial de articular y coordinar a unificar; por lo que esta Comisión considera que, esta solicitud de delegación

Al respecto, es preciso recordar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 00022-2011-PI/TC[404], ha destacado la necesidad de que se precisen las materias delegadas al Poder Ejecutivo, al señalar lo siguiente:

> "20. Dentro de estos límites se encuentra la obligación de especificar la materia sobre la cual recae la delegación. Una infracción a esta exigencia se presenta no solo cuando existe una delegación 'en blanco', sino también cuando se concretan delegaciones legislativas generales, indefinidas o imprecisas. El Tribunal no pretende que el legislador identifique los detalles de aquello que se delega [una situación que comportaría que el legislador desarrolle en sí misma la materia que se pretende delegar y torne con ello innecesaria la delegación misma], pero sí considera necesario, desde el punto de vista del artículo 104 de la Constitución, que se delimite con suficiente claridad los confines de la materia sobre la que se autoriza legislar al Ejecutivo, y que aquello que se ha delegado no caiga dentro de las materias sobre las cuales existe una reserva absoluta de ley." [Énfasis agregado]

La interpretación de la materia delegada debe hacerse de manera estricta y rigurosa, y no de manera extensiva, porque, como se ha explicado la potestad legislativa reside en el Congreso de la República, puesto que es el órgano que representa el pluralismo político, donde los procedimientos legislativos implican labores de estudio y debate, conforme al respeto de los principios democráticos. Siendo dichos debates públicos y a través de los cuales se procura canalizar los proyectos y exteriorizar las posiciones de los distintos sectores de la sociedad.

En tal sentido, se verifica que la presente materia de las facultades solicitadas, si bien no versa sobre reforma constitucional, tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto ni ley de la cuenta general, conforme a lo descrito a los artículos 101 y 104 de

---

[404] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de fecha 8 de julio de 2015, recaída en el Expediente 00022-2011-PI/TC. Fundamento Jurídico 20.

la Constitución; no obstante no se ha cumplido con el requisito de especificidad; por cuanto en la exposición de motivos, la solicitud de facultades en esta materia se ha consignado en términos muy generales.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Ahora bien, si bien se reconoce la necesidad de la intervención regulatoria que se solicita, puesto que, hace falta, a fin de generar seguridad jurídica y predictibilidad, que los órganos reguladores coordinen sus funciones, para que no haya duplicidad entre estas y tampoco contradicciones.

Al respecto, corresponde indicar que los Organismos Reguladores se crearon para garantizar un marco institucional de seguridad y estabilidad en las reglas de juego y la inversión, aislados de los vaivenes políticos. De acuerdo con la OCDE (2016), la autonomía del organismo regulador constituye un requisito fundamental que busca garantizar que las decisiones que éste adopta sean técnicas e imparciales.

La OCDE en el Programa País, documento donde revisa todas las políticas necesarias del Perú para entrar a OCDE) señala expresamente lo siguiente: "los reguladores económicos del Perú son los más avanzados en transparencia y rendición de cuentas: "Los reguladores económicos en Perú cuentan con un alto grado de independencia para ejercer presupuesto y tomar decisiones, y muestran prácticas de transparencia y rendición de cuentas más desarrolladas que los órganos del gobierno central. No obstante, éstos aún dependen del gobierno central para varios asuntos administrativos y de recursos humanos, su carácter independiente garantiza prácticas de rendición de cuentas más profundas, y necesitan adoptar un proceso sistematizado para evaluar los borradores de regulación[405]."

De lo descrito se aprecia, que la OCDE, esto es, la entidad que ha realizado las recomendaciones en materia de gobernanza, y que es la organización a la cual el Perú desea pertenecer, ha resaltado como positiva la independencia de los organismos reguladores en el Perú, pero sugiere la adopción de un proceso sistematizado; no obstante no sugiere la unificación de todos los organismos reguladores.

[405] OSITRÁN. INFORME N° 00071-2024-GAJ-OSITRAN, de fecha 22 de mayo de 2023 https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5NzY4/pdf

Adicionalmente, de acuerdo con lo informado por OSITRÁN. cualquier propuesta normativa que modifique la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores destinada a establecer medidas de articulación y coordinación, deberá contar con la opinión previa de los Organismos Reguladores, ello con la finalidad de garantizar la autonomía que deben mantener en virtud de las funciones que realizan y según lo previsto en el artículo 2 de la citada Ley, hecho que no ha ocurrido respecto de la propuesta normativa contenida en el numeral 3.1.59 del artículo 3 del Proyecto de Ley N° 7752-2023-PE, por lo que sugerimos se evalúe la pertinencia de que se apruebe esta delegación de facultad legislativa al Poder Ejecutivo.

Por otro lado, la propia PCM ha señalado que la presente propuesta de integración de los múltiples sectores regulados bajo una sola entidad reguladora enfrenta riesgo de resistencia, por parte de los actores involucrados, incluidas las empresas de los sectores y los organismos reguladores existentes; por lo que hay una posibilidad de conflictos potenciales. Del mismo modo, han reconocido que, en cuanto a la necesidad de adaptación, la transición hacia un nuevo marco regulatorio podría requerir tiempo y esfuerzo, tanto por parte de la nueva institución como de los sectores regulados.

Asimismo, esta Comisión considera oportuno acoger los argumentos contenidos en el Oficio N° 506-2023-2024/CODECO-CR, de fecha 21 de mayo de 2024[406], emitido por la Comisión de Defensa al Consumidor y Organismos reguladores de los servicios públicos, que concluyó lo siguiente:

- No se aprecia una adecuada sustentación en el proyecto de ley que ponga en evidencia algún problema y demuestre la necesidad de hacer una reforma, que podría estar afectando la autonomia de los organismos reguladores de los servicios públicos, generando una incidencia de carácter político o gubernamental que podria significar un riesgo para el sistema de regulación de los servicios públicos domiciliario.
- Establecer mecanismos para homogenizar la gestión regulatoria de organismos reguladores de los servicios públicos, sin considerar su nivel de especialidad de sus respectivos mercados, podría tener serias implicancias en su adecuado funcionamiento e impactar negativamente sobre su autonomía.

[406] Oficio N° 506-2023-2024/CODECO-CR, de fecha 21 de mayo de 2024. Disponible en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5NzY1/pdf

- El respeto a la independencia de los organismos reguladores es esencial para su correcto funcionamiento y así lo establece la propia Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico – OCDE.

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que, la OCDE, más allá de reconocer que existen reguladores multisectoriales, en ninguna de sus publicaciones ha recomendado al Perú acoger el modelo de regulador multisectorial[407].

En tal sentido, al ser una medida que no es pacífica; esta Comisión considera que, una medida de tal envergadura requiere un mayor estudio de la propuesta, por parte de todos los sectores involucrados. Además, al tratarse de una medida que requerirá años en su implementación, por lo que, tampoco reviste urgencia que justifique la delegación de facultades. En tal sentido, este extremo, esta Comisión considera que no debe concederse el presente pedido de facultades en el presente extremo.

Conclusión

De todo lo expuesto se advierte que, no es pertinente el otorgamiento de facultades en esta materia, por cuanto no se ha explicado en la exposición de motivos con claridad en qué consiste la delegación solicitada y, con la información posteriormente proporcionada, se aprecia una variación de lo originalmente originado; además, al ser una medida que ha generado mucha oposición, por parte de los sectores involucrados, se advierte, que es necesario un mayor estudio y discusión del tema en el Congreso de la República, como Asamblea Nacional.

En tal sentido, esta Comisión concluye que no se debe brindar las facultades solicitadas en este extremo, y que, una medida de esta naturaleza debe ser discutida a través de un Proyecto de Ley.

Pedido de facultades en materia de mejora de la calidad de la inversión pública

[407] Informe de OSINERMING, de fecha 27 de mayo de 2024. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkxOTgw/pdf

3.2.1. Fortalecer el diseño del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) para garantizar su finalidad y asegurar mejores niveles de calidad en la inversión pública.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La problemática advertida consiste en que Si bien se ha venido ejecutando el mencionado fondo con eficiencia, el mismo no alcanza el 100% de ejecución y cada año se presenta una alta demanda de acceso a recursos del fondo. Por tales motivos, se considera necesario flexibilizar la normativa de dicho fondo, a partir de modificar los criterios de asignación, así como fortalecer el rol del Consejo Directivo y dotar de mayores herramientas a la Secretaría Técnica del FIDT.

La propuesta busca modificar diversos artículos del Decreto Legislativo 1435, Decreto Legislativo que establece la implementación y funcionamiento del FIDT, para fortalecer el diseño del FIDT para garantizar su eficiencia y sobre todo asegurar calidad de inversión pública a favor de la población más vulnerable. Estas modificaciones se implementarán en dos ámbitos concretos:

- El primer ámbito busca flexibilizar el financiamiento de proyectos de inversión y estudios que impacten directamente al desarrollo de los territorios, para lo cual se debe precisar el destino de los fondos y mejorar los criterios de asignación, así como realizar precisiones en las obligaciones de los gobiernos regionales y locales.

- El segundo ámbito, busca que el Consejo Directivo cuenta con mayores herramientas para participar en el proceso de selección y no sólo aprobar listas y, a su vez, la Secretaría Técnica pueda no sólo brindar asistencia técnica sino acompañar el proceso de ejecución, y desarrollar acciones que aseguren la calidad de las propuestas.

De manera específica, la propuesta persigue la modificación de los artículos 6, 7, 9, 11 y 12 del Decreto Legislativo Nº 1435, considerando los siguientes alcances:

- **En el Artículo 6**, con relación a la determinación de los servicios públicos objeto de priorización, se propone la posibilidad de que el Consejo Directivo, de manera previa a cada concurso público, previo informe técnico justificatorio de la Secretaría Técnica, pueda participar en la priorización de los referidos servicios. Así, en un escenario fortuito (pandemia, crisis, declaratorias de emergencia, entre otros), el Consejo Directivo tendría facultades para determinar los servicios públicos objeto de priorización, bajo un sustento motivado, resultaría beneficioso para el cumplimiento de la finalidad del Fondo.

- **En el artículo 7**, sobre los criterios de asignación de los recursos del FIDT, se hace mención al termino "Regiones", cuando lo correcto es utilizar el término "departamentos"; y evaluar la posibilidad de incorporar al FIDT medidas sobre Articulación para el Desarrollo que son estrategias de desarrollo territorial.

- **En el artículo 9** referido a las obligaciones de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, establecer medidas que tengan como finalidad que las citadas entidades cumplan con sus obligaciones establecidas en los convenios, lo cual permitirá que los activos generados con la ejecución de las inversiones puedan empezar a prestar los servicios de una manera más célere y por ende de manera oportuna en beneficio de la población.

- **En el artículo 11** referido a las funciones del Consejo Directivo, establecer la prerrogativa de que el Consejo Directivo del FIDT de determinar los servicios públicos objeto de priorización, de manera previa a cada concurso público y previo informe técnico justificatorio de la Secretaría Técnica. Asimismo, corresponde que las metodologías de evaluación sean puestas en consideración del Consejo Directivo dado que va de la mano con la aprobación de los servicios públicos objeto de priorización, en ese sentido la aprobación de ambos es función del Consejo Directivo.

- **En el artículo 12 referido a las funciones de la Secretaría Técnica del FIDT,** corresponde enmarcar dentro de sus funciones la fundamentación que sustente la priorización de los servicios públicos. Así como la metodología de evaluación, a fin de que los miembros del Consejo Directivo en el marco de sus funciones procedan con su evaluación y correspondiente aprobación. Finalmente, asegurar que el cumplimiento de los convenios suscritos sea realizado mediante el acompañamiento a los gobiernos descentralizados, de manera permanente.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

La presente propuesta no transgrede los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, puesto que no contiene materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República; conforme lo establece el artículo 104 y el numeral 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú de 1993. Del mismo modo, se establece con meridiana claridad en qué consisten las modificaciones que se desea introducir al Decreto Legislativo Nº 1435, con la indicación expresa de los artículos que se pretenden modificar; por lo que, la solicitud de delegación de facultades supera también el criterio de especificidad exigido para permitir la legislación delegada.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Se ha identificado que la medida normativa propuesta tiene un impacto en los 25 gobiernos regionales y más de 1900 gobiernos locales, quienes son los destinatarios del fondo.

La propuesta relacionada a la modificación de los artículos 6 y 11 para permitir que el Consejo Directivo, pueda participar en la priorización de los referidos servicios, podría considerarse invasivo, porque el Fondo estaría facultado para priorizar de los servicios públicos, en detrimento de la autonomía de los gobiernos regionales; dado que la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece la autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; en tal sentido,

una interferencia en cuanto a los proyectos y servicios que serán priorizados, lo que estaría a cargo del FIDT.

Cabe destacar que, En tal sentido, esta Comisión considera que una propuesta de esta naturaleza debería ser socializada con los gobiernos regionales y locales y por lo tanto, amerita más estudio y debería ser canalizada mediante un proyecto de ley.

Conclusión

Esta Comisión, considera que, si bien existe una necesidad de legislar, y llenar los vacios y deficiencias normativas, las modificaciones solicitadas deben ser debatidas en el Congreso de la República, considerando las opiniones de todos los sectores involucrados, a fin de contar con una visión global de las modificaciones sobre la estructura en la toma de decisiones, criterios de priorización y forma de distribución de los recursos destinados al FIDT, por lo que no corresponde delegar facultades en esta materia, sino que debería ser canalizada a través de un Proyecto de ley.

3.2.2. Regular las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones para su alineamiento al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La problemática que se pretende solucionar consiste en que las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones (IRI) que estuvieron comprendidas en el PIRCC hasta la fecha de publicación de la Ley N° 31953 (6 de diciembre de 2023), Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, y que no hayan contado con registro Formato Único de Reconstrucción (FUR) aprobado en el Banco de Inversiones del SNPMGI, cumplan con las fases del Ciclo de Inversión del referido Sistema Nacional. Tomando en cuenta que la emisión de la Ley N° 30556 fue una medida excepcional para la atención de la infraestructura pública afectada por las ocurrencias del Fenómeno del Niño.

Se ha establecido que, la medida propuesta resulta necesaria para asegurar el cumplimiento de la calidad de las inversiones, desde la programación de estas, su formulación y evaluación y la ejecución correspondiente, asegurando que las inversiones cumplan con las disposiciones normativas, metodologías y técnicas aprobadas por el DGPMI y los sectores funcionalmente competentes.

De manera específica, la medida propuesta persigue que las IRI que no cuenten con registro FUR aprobado en el Banco de Inversiones, a la fecha de aprobación de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, cumplan con las disposiciones del marco normativo del SNPMGI, con la finalidad de promover la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura, asegurando su calidad.

La propuesta normativa contribuirá al cumplimiento de la calidad de la inversión pública con una mejor información para tomar decisiones de inversión, desde la programación de estas, su formulación y evaluación y la ejecución correspondiente, asegurando que cumplan con las disposiciones normativas, metodologías y técnicas aprobadas por el DGPMI y los sectores funcionalmente competentes.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas de esta materia pueden ser delegables, por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En cuanto a la pertinencia de la propuesta, se debe considerar que esta impactaría en 1,661 IRIs[408], con el siguiente detalle: a nivel de gobierno nacional 632 IRI; a nivel de gobierno regional 87 IRI y a nivel de gobierno local 942 IRI, sin embargo, podrían existir IRIs que no

[408] Según las necesidades potenciales identificadas a través del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) aprobado y vigente al 06 de diciembre del año 2023, compartido por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).

se tienen identificadas en el referido Plan y ser requeridas por las entidades de los tres de niveles de gobierno, las mismas que deben ser evaluadas de mantenerse su necesidad y siempre y cuando cumplan con la normatividad del SNPMGI.

Cuadro
IRIS que no fueron aprobadas por la ARCC a través del FUR, por niveles de gobierno

Nivel de Gobierno	Cantidad	Monto en Millones S/ estimado según PIRCC
Gobierno Nacional	632	4 200
Gobierno Regional	87	388
Gobierno Local	942	943
Total	**1 661**	**5 532**

Fuente: Información extraída del Anexo 01 del Informe N° 81-2023- ARCC/GG/OPP-MDPA, adjunto al Oficio N° D000047-2024-PCM-OGPP.

Asimismo, esta Comisión considera que, la medida propuesta servirá para suplir un vacío normativo, debido a que no existe la obligación prevista para las IRI'S, sobre todo, considerando que han transcurrido más de siete (7) años de la excepcionalidad prevista por la ocurrencia del fenómeno El Niño y que por lo tanto, corresponde que estas intervenciones apliquen las fases del Ciclo de Inversión en el marco del SNPMGI, con la finalidad de velar por la calidad de la prestación del servicio público.

Por tales consideraciones, esta Comisión considera pertinente el otorgamiento de facultades en el presente extremo.

Conclusión

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"Regular las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones (IRI) que estuvieron comprendidas en el PIRCC hasta la fecha de publicación de la Ley 31953 (6 de diciembre de 2023), Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024 y que no hayan contado con registro Formato Único de Reconstrucción (FUR), para su alineamiento al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y cumplan con las fases del ciclo de inversión del referido sistema nacional".

3.2.3. Ampliar el plazo de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La materia solicitada consiste en ampliar el plazo de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica.

Se ha verificado, que las medidas emitidas al amparo del referido Decreto Legislativo y que buscan promover la reactivación económica, han demostrado un impacto significativo y positivo en la ejecución de proyectos de inversión pública; y por ende se considera acertada la ampliación de plazo de medidas existentes que han contribuido positivamente a la ejecución de proyectos de inversión pública.

<u>En cuanto a la ampliación del plazo de las disposiciones sobre licencias de habilitación urbana o de edificación (artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1553).</u>

La medida propuesta generará beneficios orientados a contribuir con el bienestar de la población beneficiaría de la ejecución de las inversiones que se ejecuten en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que beneficiará a 1358 proyectos de inversión a cargo de las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local que cuenten con PIM 2024, por un monto de 1520 millones de

soles y con un monto de inversión actualizado total de 8,348 millones de soles[409], que a la fecha no han iniciado ejecución física de sus inversiones contando con expediente técnico.

Ampliación de plazo de las disposiciones sobre la elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública (artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1553)

Al respecto, se tiene que, la medida solicitada beneficiará a todas las inversiones del gobierno nacional que se ejecutan bajo la opción de "fast track"; proyectos que se ejecutan bajo este mecanismo permite que el diseño de la obra contenida en el expediente técnico y la ejecución física de la misma se realicen de manera paralela.

La propuesta permitiría extender los beneficios del Decreto Legislativo N° 1553, que coadyuvó a incrementar un promedio de 53 de inversiones por año bajo fast track, y con la vigencia de dicho Decreto Legislativo, hasta el cierre de 2023 se incrementó dicho promedio de inversiones a 76 inversiones, y en lo que va del año 2024, aplicaron fast track 16 inversiones; y se ha proyectado llegar a 80 inversiones; por lo que estiman conveniente la ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, con la finalidad de que las entidades puedan seguir utilizando la metodología fast track.

Ampliación de plazo para la elaboración y aprobación de las Metodologías específicas aplicables a las inversiones en marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1553).

Se ha referido que, con la disponibilidad de las metodologías específicas, cuya elaboración se encuentra a cargo de la DGPMI por autorización expresa, las mismas que se encuentran asociadas a las tipologías que tienen mayor impacto en el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios, se busca que los operadores de las Unidades Formuladoras puedan incrementar la calidad de las viabilidades, de manera que las estimaciones de costos, plazos y metas físicas sean más realistas de acuerdo a la complejidad de los proyectos de inversión.

[409] Según información registrada en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, actualizada al 31 de marzo de 2023.

Se ha previsto que de autorizarse la ampliación de plazo en este extremo, se ha previsto que como mínimo se elaborarán once (11) metodologías especificas en las tipologías: establecimientos de salud, a todos los niveles de atención, sistema integrado de transporte, seguridad ciudadana, comisarías, museos, drenaje pluvial, distribución de energía eléctrica, infraestructura de riego, centros de desarrollo integral de la familia, mercado de abastos y de ciencia y tecnología. Por lo que, a efectos de elaborar y aprobar las metodologías específicas conllevan coordinaciones permanentes con la pluralidad de sectores involucrados, resultando necesario que se proceda a la ampliación de plazo.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

La presente propuesta no transgrede los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, puesto que no contiene materias relativas a la reforma constitucional, ni a la aprobación tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República, conforme lo establece el artículo 104 y el numeral 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú de 1993.

Del mismo modo, se establece con meridiana claridad en qué consisten las modificaciones que se desea introducir a la normativa especializada Decreto Legislativo 1553, que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica; por lo que, la solicitud de delegación de facultades supera también el criterio de especificidad exigido para permitir la legislación delegada.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Sobre esta medida, se debe tomar en cuenta la ampliación de la agilización en el tiempo de ejecución de los proyectos de inversión con la ampliación de plazo de facilidades para la obtención de licencias urbanas y de elaboración de estudios ambientales para inversiones "fast-track", e incremento de calidad en la formulación y evaluación de los proyectos de inversión con la metodología.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la precisión con la que se ha solicitado la medida:

Cuadro
Ampliaciones de plazos previstas en esta materia solicitada

Medida	Plazo ampliatorio
Ampliación de plazo de las disposiciones especiales sobre licencias de habilitación urbana o de edificación (articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1553)	31 de diciembre de 2026
Ampliación de plazo de las disposiciones sobre elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública (articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1553)	31 de diciembre de 2026
Ampliación de plazo para la elaboración y aprobación de las Metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1553)	31 de agosto de 2025

Asimismo, se ha verificado que, la medida propuesta no comprende más medidas adicionales a la extensión de plazos en los mencionados artículos del Decreto Legislativo 1553 y, además no involucra financiamiento y/o habilitación presupuestal.

Conclusión

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio

"Modificar los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica, a fin de ampliar los plazos previstos en los referidos artículos".

3.2.4. Modificar el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de orientar estratégicamente a las entidades para el desarrollo de sus inversiones, así como optimizar la gestión de la inversión pública.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Entre las principales medidas a implementar, según la propuesta:

a) Lineamientos de política Nacional de Inversión Pública
b) Modificaciones en el Ciclo de Inversión
c) Inclusión de órganos al SNPMGI

La problemática advertida, consiste en que, actualmente, la inversión pública no cuenta con Lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública, lo que genera inconsistencia en la priorización de recursos.

Asimismo, las evaluaciones muestran la necesidad de mejorar el Ciclo de Inversión del Sistema nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), ya que muchas inversiones no resultan viables. En tal sentido, a fin de combatir la lenta reducción de la brecha de infraestructura tiene como causa, entre otros, la débil capacidad de ejecución de los tres niveles de gobierno, por lo que se propone incluir buenas prácticas y Estructuras de Gestión de Proyectos (EGP) para mejorar esta capacidad.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

La presente propuesta no transgrede los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, puesto que no contiene materias relativas a la reforma constitucional, ni la aprobación tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República, conforme lo establece el articulo 104 y el numeral 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú de 1993.

Del mismo modo, se establece con meridiana claridad en qué consisten las modificaciones que se desea introducir al Decreto Legislativo 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. A criterio de esta comisión es viable la solicitud de delegación de facultades, en este extremo. En este sentido, supera el test de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Como se ha señalado, la problemática a la que se hace referencia en la exposición de motivos consiste en que el ámbito de la inversión pública se carece de lineamientos de política nacional que orienten estratégicamente a las entidades; por cuanto en el párrafo 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 1252 se señala que el Ministerio de Economía y Finanzas, dicta los procedimientos y los lineamientos para la programación multianual de inversiones y el ciclo de inversión. Sobre la base de esta facultad, es pertinente que el Poder Ejecutivo, a través del MEF, realice precisiones acerca de los lineamientos de política nacional acerca de la inversión pública.

Asimismo, en lo referido a la formulación y viabilidad de proyectos, se aprecia en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1252 que "la programación multianual de inversión debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población".

Finalmente, en cuanto a la incorporación de estructuras de gestión de proyectos, se argumenta que esta medida es una buena práctica que merece ser incorporada para dar mayor dinamismo a la reducción de la brecha de infraestructura; por lo que resulta pertinente la delegación de facultades legislativas en esta materia.

Por lo que se concluye, respecto, a la pertinencia, se debe tener en cuenta que, en el marco de la reactivación económica e impulso y optimización de la inversión pública, esta Comisión considera oportunas las acciones planteadas en la presente materia; por un lado, se ha identificado de manera adecuada y especifica de las normas y en el sentido en el que se van a realizar las modificatorias:

a. Lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública: La definición e implementación de los Lineamientos de una Política Nacional de Inversión Pública, constituye el marco orientador para el desarrollo de una visión estratégica de mediano y largo plazo para las inversiones del país.
b. Modificaciones en el Ciclo de Inversión: Para una mayor agilidad y eficiencia en la ejecución de las inversiones, se propone que las entidades primero formulen y viabilicen sus inversiones en base a las brechas prioritarias y posterior a ello se efectúa la programación de estas.

c. Inclusión de Órganos al SNPMGI: En el marco de la implementación de las buenas prácticas de dirección de proyectos en inversión pública, se incluirá a las Estructuras de Gestión de Proyectos (EGP) como un órgano del SNPMGI.

Conclusión

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sobre: a) Lineamientos de una Política Nacional de Inversión Pública, - Modificaciones en el Ciclo de Inversión y, b) Inclusión de órganos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; con la finalidad de orientar estratégicamente a las entidades para el desarrollo de sus inversiones, así como optimizar la gestión de la inversión pública".

3.2.5. Establecer medidas para agilizar la reactivación de obras públicas paralizadas mediante la modificación de la Ley 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, a fin de optimizar sus disposiciones y facultar a las entidades a utilizar un Procedimiento Especial de Selección para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La problemática que se busca resolver consiste en la gran cantidad de obras paralizadas que podrían ser reactivadas; así, es importante tener en cuenta el *"Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2023"* emitido por la CGR, donde se advierte que **1 848 podrían ser reactivadas en el marco de la Ley N° 31589[410]**; sin embargo; de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas, al 18 de marzo

[410] Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas

de 2024, solo 595 obras paralizadas han sido registradas en los inventarios de las Entidades y de estas solo 136 se encuentran priorizadas, a través de la Resolución correspondiente.

Por otro lado, conforme a lo establecido en el Decreto 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, el Proceso de Gestión de Recursos Públicos tienen por finalidad apoyar la gestión de las actividades económicas del Sector Público con los principios de Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal, desarrollando la Gestión de Adquisiciones que permite la obtención de bienes, servicios y obras para el desarrollo de las acciones que permitan cumplir metas de provisión de servicio y logro de resultados de las entidades, siendo su ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Dichos principios se encuentran desarrollados en el artículo 2 del referido el Decreto 1436, en los siguientes términos:

> "Artículo 2.- Principios Adicionalmente a los principios del Derecho Público, en lo que resulte aplicable, la Administración Financiera del Sector Público se rige por los siguientes principios:
>
> [...]
>
> 6. Responsabilidad Fiscal: Consiste en que las políticas públicas se establecen con el compromiso de seguir un manejo fiscal prudente y disciplinado que incluya el estricto cumplimiento del marco macrofiscal, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica.
>
> 7. Sostenibilidad Fiscal: Consiste en preservar la solvencia financiera del Sector Público en el mediano plazo, considerando de forma estricta su capacidad financiera en forma previa a la asunción de obligaciones de cualquier naturaleza que tengan impacto fiscal".

Cabe destacar que, la medida persigue la creación de un procedimiento especial de adjudicación simplificada con reglas especiales y plazos más reducidos a fin de habilitar herramientas adicionales que permitan reactivar aquellas obras que se encuentran paralizadas.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101,104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relacionadas a los temas propuestos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

De igual forma, de la lectura de la materia solicitada y la exposición de motivos, esta Comisión estima que se cumple con el principio de especificidad[411], existiendo una delegación concreta sobre una materia explicada en la iniciativa legislativa presentada.
Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Para analizar la pertinencia, se debe considerar el impacto positivo que tendría, en caso de aprobarse la medida:

- Se facilitará, a través de la implementación de nuevas alternativas de contratación, la culminación de las obras que se encuentra paralizadas, generando impacto positivo en la población beneficiaria de la infraestructura pública,

- Como consecuencia se dinamizará la economía a través de la ejecución de la inversión pública.

- Se promoverá mayores oportunidades de negocio para el mercado de proveedores vinculado al rubro de construcción.

---

[411] Fundamento 16 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N° 047-2004-AI/TC: "[...] Expedida Así, por ejemplo, el artículo 104.° de la Constitución se refiere a la ley autoritativa, mediante la cual el Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar a través de Decretos Legislativos. Dicha ley tiene dos elementos indispensables: la materia especifica a delegar y el plazo determinado *para ejercer la delegación. A su turno, conforme a los artículos 104.º y 101.º, inciso 4.º, de la Constitución, el Congreso de la República no puede delegar al Poder Ejecutivo las materias relativas a reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República. [...]"*

Por otro lado, se debe considerar que, en el marco de la reactivación económica y dinamismo de las inversiones, la solicitud de facultades para que las Entidades utilicen un procedimiento especial de selección, con plazos reducidos, para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas, así como optimizar sus disposiciones, a fin de incentivar el incremento en su aplicación por parte de las Entidades, favorecerá la conclusión de las obras y permitirá brindar el servicio público a su cargo.

La modificación de la Ley 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, para optimizar sus disposiciones, permitirá reactivar las obras públicas paralizadas con avance de ejecución superior al 20%. Esta medida permitirá el destrabe de las obras, que según el Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2023, emitido por la Contraloría General de la República indica al 31 de diciembre de 2023, que existen 2 298 obras públicas paralizadas, de las cuales son ejecutadas bajo aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y bajo la modalidad de administración directa; cuyo saldo de ejecución asciende, aproximadamente a S/. 9 776 millones.

Del mismo reporte, se aprecia que 1 848 permanecen paralizadas pese a que se encontrarían dentro del marco de aplicación de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.

En ese sentido, la Comisión considera pertinente brindar las facultades sobre el presente numeral, pero delimitando en qué consistirán las modificatorias propuestas.

Conclusión

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar la Ley 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, a efectos de establecer y facultar a las entidades a utilizar un procedimiento especial de selección, con plazos reducidos, para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas".

3.2.6. Modificar el articulo 17 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), referido a la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en la Gestión del Riesgo de Desastres.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La problemática solucionar consiste en que el actual texto del artículo 17 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, restringe la participación de las Fuerzas Armadas únicamente en lo referente a los procesos de la preparación y respuesta, por lo que no se cuenta con un marco legal para el empleo de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas en los otros procesos de la Gestión de Riesgo de Desastres.

A criterio de los miembros de las Fuerzas Armadas, tal como lo han señalado, tanto en la exposición de motivos como en las reuniones técnicas sostenidas en el estudio de este proyecto de ley, las Fuerzas Armadas participan en la gestión reactiva (preparación y respuesta) ante las emergencias ocasionadas por desastres según el marco legal vigente (Ley N° 29664); sin embargo, existen muchos casos en los que la obligación de apoyar a los gobiernos regionales y locales, requiere, además la intervención en otros procesos de la gestión reactiva (rehabilitación), gestión prospectiva y gestión correctiva.

Las Fuerzas Armadas disponen de capacidades y recursos para brindar apoyo a los gobiernos regionales, gobiernos locales y sectores del Poder Ejecutivo, si así lo requieren en los demás procesos de gestión de riesgo de desastres, para ello se requiere contar con una normativa que proporcione el fundamento legal para que participen en procesos distintos a los de preparación y respuesta.

La propuesta normativa pretende habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en los demás procesos de la gestión del riesgo de desastres, sobre la gestión prospectiva

y gestión correctiva; a Fin de optimizar el empleo de las capacidades del Estado para prevenir, reducir y/o afrontar situaciones de emergencia o peligro inminente.

Cabe destacar que, con la participación de las Fuerzas Armadas e instituciones científicas del Sector Defensa en todos los procesos que forman parte de la Gestión del Riesgo de Desastres se busca optimizar el empleo de las capacidades del Estado para afrontar situaciones de emergencia, contribuyendo a mejorar la calidad de la inversión pública de los proyectos de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Sectores del Poder Ejecutivo en el marco de la gestión de riesgo de desastres.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a los temas de la delegación propuesta, pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Los gobiernos regionales, gobiernos locales y sectores del Poder Ejecutivo, con la implementación de la propuesta, podrán requerir la participación de las Fuerzas Armadas, considerando las previsiones presupuestales correspondientes, en atención a los procesos de la Gestión de Riesgo de Desastres.

Entre los beneficios que esta medida permitirá implementar por parte de las Fuerzas Armadas, tenemos:

- Descolmatación de canales, quebradas y ríos
- Construcción y/o reforzamiento de defensa ribereñas.
- Mejoramiento de causales del río

- Arborización y reforestación
- Mantenimiento de vías de comunicación
- Instalación de campamentos y módulos de vivienda

Esta Comisión considera oportuno tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, contenidas en el Informe de Opinión sobre viabilidad de delegación de facultades al poder ejecutivo (PL 7752/2023-PE),[412] que han referido que entre los lineamientos de la política nacional de gestión del riesgo de desastres "los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables de desarrollar las acciones de la Gestión del Riesgo de Desastres, con plena observancia del principio de subsidiariedad[413]."

Asimismo, según el numeral 6 del artículo 29-A de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; es función de la Gerencia de Gestión del Riesgo de desastres le corresponde: "ejercer las funciones regionales en materia de defensa civil, así como organizar, supervisar, fiscalizar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los procesos de la gestión del riesgo de desastres, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres".

En este sentido, cabe advertir que la delegación de facultades debe efectuarse de forma tal que no colisione con lo dispuesto en dicha ley orgánica. En tal sentido, a efectos de evitar conflictos de competencias o incidencias en leyes orgánicas; esta Comisión considera necesario recalcar que, los gobiernos regionales, gobiernos locales y sectores del Poder Ejecutivo, podrán requerir la participación de las Fuerzas Armadas, considerando las previsiones presupuestales correspondientes, en atención a los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres. Esto implica que, corresponderá a los gobiernos subnacionales solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas.

[412] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkyNTY3/pdf
[413] Ley 29664, artículo 5, párrafo 5.3, literal h.

Del mismo modo se tiene lo informado por la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos[414] Afroperuanos Ambiente y Ecología, que ha considerado, que sería positiva la participación de las fuerzas armadas para la gestión de riesgo de desastres especialmente frente a situaciones como incendios forestales, ello en coordinación con SERFOR (quien tiene la rectoría en dicha materia), SERNANP y los gobiernos regionales, provinciales y distritales a nivel nacional.

Finalmente, la promulgación de la norma no incurrirá en demanda de recursos adicionales al Tesoro Público, puesto que las intervenciones de las Fuerzas Armadas se financiarán con cargo al presupuesto destinado a la Gestión del riesgo de Desastres de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Sectores del Poder Ejecutivo que requieran la participación de los órganos ejecutores del Ministerio de Defensa. Además, se ha determinado que esta medida no afecta la autonomía política y administrativa de los gobiernos regionales ni locales, no existe otra iniciativa legal sobre la materia

En conclusión, esta Comisión considera que, la propuesta es pertinente; por cuanto se requiere la emisión de un Decreto Legislativo por la necesidad de disponer con mayor celeridad del marco legal para las intervenciones que realizan las Fuerzas Armadas, en los demás procesos de la Gestión de Riesgos de Desastres, ante la eventualidad de presentarse nuevos escenarios y reducir el impacto de desastres. como incendios forestales, ello en coordinación con SERFOR (quien tiene la rectoría en dicha materia), SERNANP y los gobiernos regionales, provinciales y distritales a nivel nacional.

Conclusión

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el artículo 17 de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), referido a la participación de las Fuerzas Armadas en la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo correspondiente a la preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de desastre, de acuerdo con

[414] COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANO, AMBIENTE Y ECOLOGÍA, de fecha de junio de 2024. file:///C:/Users/JUDITH/Downloads/1528216-OFICIO-3023-CPAAAAE-CR-20240604.pdf

sus competencias y en coordinación y apoyo a las autoridades competentes, conforme a las normas del SINAGERD".

3.2.7. Modificar el Decreto Legislativo N° 1274, Decreto Legislativo que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país - "AGUA +", a fin de permitir la aprobación y ejecución de inversiones de optimización, ampliación Marginal, rehabilitación y reposición en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La importancia de la medida propuesta radica en la relación directa que existe entre un adecuado sistema de saneamiento y la salud; ya que según la OMS, 2019, en paises en vías de desarrollo se producen cerca de 842 000 fallecimientos anuales por la ausencia de agua salubre e higiene deficiente, incluyendo 361000 fallecimientos de niños menores de 5 años.

Según estadística del INEI, en el Perú, solo el 76% de la población tiene acceso a agua por red pública y el 22% cuenta con sistemas de saneamientos adecuados en el ámbito rural. Asimismo, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES del INEI el 14 % de niños y niñas menores de 5 años tiene desnutrición crónica, a su vez el 44% de los niños y niñas tienen anemia entre 6 y 36 meses.

Al respecto de esta submateria solicitada, se tiene el Oficio N° 1347-2023-2024/ CISPCD/CR, de fecha 27 de mayo de 2024, de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, mediante el cual, sobre la problemática abordada se ha señalado que: "[...] el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene la responsabilidad del Programa Presupuestal orientado a Resultados para el Desarrollo Infantil Temprano (PPoR DIT) y gestiona la Estrategia de Gestión Territorial "Primero La Infancia", el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el Premio Nacional Sello Municipal, entre otros; además de ejercer la Secretaría Técnica de la CIAS, que en el presente año

aprobó los "Resultados priorizados de la Política Social e Indicadores Emblemáticos al 2030"; políticas e instrumentos que promueven el logro de los resultados del desarrollo infantil temprano, a fin de cerrar las brechas de desigualdad y exclusión social, y la reproducción intergeneracional de la pobreza[415]".

Por tales motivos, el Poder Ejecutivo ha planteado la necesidad de modificar el marco normativo vigente, es el Decreto Legislativo 1274, aprobado en el año 2016, cuya finalidad es reducir el déficit cualitativo de infraestructura y contribuir al acceso al agua segura y saneamiento por parte de las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema, ha quedado desfasado de cara al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante Decreto Legislativo 1252, del año 2017.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

En este punto, se advierte que la submateria solicitada fue descrita de manera bastante imprecisa y en términos generales en la exposición de motivos, y que han precisado e incluso cambiado la intención inicial de articular y coordinar a unificar; por lo que esta Comisión considera que, esta solicitud de delegación

Al respecto, es preciso recordar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 00022-2011-PI/TC[416], ha destacado la necesidad de que se precisen las materias delegadas al Poder Ejecutivo; puesto que se prohibe que se haga una delegación 'en blanco', tampoco se permiten delegaciones legislativas generales, indefinidas o imprecisas, sino que las delegaciones de facultades deben estar planteadas con suficiente claridad.

En tal sentido, se verifica que la presente materia de las facultades solicitadas, si bien no versa sobre reforma constitucional, tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto ni ley de la cuenta general, conforme a lo descrito a los artículos 101 y 104 de la Constitución; no obstante no se ha cumplido con el requisito de especificidad; por cuanto

[415] Oficio N° 1347-2023-2024/ CISPCD/CR, de fecha 27 de mayo de 2024, de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad,
[416] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia de fecha 8 de julio de 2015, recaída en el Expediente 00022-2011-PI/TC. Fundamento Jurídico 20.

en la exposición de motivos, la solicitud de facultades en esta materia se ha consignado en términos muy generales.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En primer lugar, esta Comisión comprende la problemática que se pretende solucionar y la relación entre acceso a agua potable y saneamiento y la mejora de la calidad de vida de las personas; en especial de las personas en situación de vulnerabilidad; así como su relación en el derecho a la salud y la prevención de enfermedades. Asimismo, la relación entre el servicio de agua potable y saneamiento y la salud pública.

Por otro lado, de manera poco precisa en la exposición de motivos se hace referencia a la "modalidad de intervención de FONCODES, a través de Núcleos Ejecutores contribuye a la reactivación y dinamismo de la economía social". Cabe destacar que, se está proponiendo modificar el Decreto Legislativo 1274 para que FONCODES desarrolle acciones de mejora de sistemas de agua y saneamiento en áreas rurales, pero en la exposición de motivos no se ha precisado cuáles son los artículos del referido Decreto Legislativo que se intervendría, y tampoco se ha explicado con claridad en qué sentido se realizarían las modificaciones.

Asimismo, esta Comisión observa que, no se ha sustentado de manera adecuada por qué se requiere que las actuaciones en materia de servicios de agua potable y saneamiento se haga a través de FONCODES. Más aún, si esta Comisión recuerda que, ya con anterioridad, se emitió la Ley N° 31880, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-niño global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia, en cuyo artículo 2.3, se concedió la siguiente facultad:

> "2.3. En materia de infraestructura social y calidad de proyectos
>
> h) Modificar la Ley 31015 —Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores— para que se autorice en forma excepcional al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) llevar a cabo proyectos de inversión e inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición respecto de centros poblados rurales y rurales dispersos que cuenten con una población

> menor o igual a dos mil habitantes y que se ubiquen en distritos con pobreza monetaria mayor o igual al 40 %, con exclusión del supuesto previsto en el literal c) del párrafo 2.3 del artículo 2 de la presente ley. Asimismo, fortalecer el Sistema Nacional de Focalización (Sinafo), mediante la creación del Organismo Técnico Especializado de Focalización e Información Social (OFIS)[417]". [Énfasis agregado].

En ese sentido, se aprecia que, en la exposición de motivos y en las sucesivas reuniones sostenidas durante el estudio de este proyecto de ley, no se ha precisado que cuáles son las razones, por las cuales, pese a que ya se ha había habilitado al "Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) llevar a cabo proyectos de inversión e inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición respecto de centros poblados rurales y rurales dispersos"; ahora se solicita que "FONCODES desarrolle acciones de mejora de sistemas de agua y saneamiento en áreas rurales".

Evidenciándose que existe una previsión contenida en la última delegación de facultades (Ley Nº 31880), destinada a permitir que se realicen obras de saneamiento en zonas rurales y rurales dispersas. Asimismo, el Poder Ejecutivo no ha sustentado las razones por las que la delegación anteriormente otorga no resulta suficiente para que, a través de FONCODES se realicen labores de saneamiento en las zonas rurales, conforme a lo solicitado.

En tal sentido, al analizar la urgencia y necesidad de delegar esta materia en específico, se aprecia que no tampoco se ha sustentado el carácter urgente de la delegación solicitada. Por lo que, esta Comisión considera que, por la falta de precisión y la falta de justificación de la necesidad y la urgencia de la solicitud de delegación, determina que no se le puede considerar una medida pertinente.

Conclusión

De todo lo expuesto se advierte que, no es pertinente el otorgamiento de facultades en esta materia, por cuanto no se ha explicado en la exposición de motivos con claridad en qué

[417] Ley Nº 31880, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-niño global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia, artículo 2.3, literal h). https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTI5ODMz/pdf

consiste la delegación solicitada, ni se ha sustentado el carácter urgente de la misma. En tal sentido, esta Comisión concluye que NO se debe brindar las facultades solicitadas en este extremo, y que, una medida de esta naturaleza debe ser discutida a través de un Proyecto de Ley.[418]

3.2.8.	**Se autoriza a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay, utilizando el procedimiento establecido en la Ley N° 31841 y su Reglamento, para la generación de una cartera de inversiones estratégicas, que incluya inversiones con montos menores a 200 millones de soles.**

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La problemática identificada consiste en la ausencia de liderazgo en cuanto a la coordinación e identificación de inversiones prioritarios y urgentes con los diversos actores involucrados para generar intervenciones simultáneas y condiciones mínimas que permitan garantizar el desarrollo económico y el cierre de brechas de infraestructura en la zona de influencia del corredor logístico del Hub Chancay.

Como consecuencia de la falta de coordinación se corre el riesgo de dispersión y duplicidad de intervenciones, por los múltiples ejecutores (Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, en el mismo territorio.

[418] En la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2024, producto del debate y aporte de los congresistas de la República, se consideró delegar este punto en los términos solicitados por el Poder Ejecutivo; en mérito a que se verifica la necesidad de modificar el Decreto Legislativo N° 1274, Decreto Legislativo que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país - "AGUA +", a fin de permitir la aprobación y ejecución de inversiones de optimización, ampliación Marginal, rehabilitación y reposición en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a efectos de lograr llevar servicios de saneamiento y agua potable a más peruanos, en especial a los más vulnerables en las zonas rurales

Asimismo, se ha evidenciado la ausencia de formulación de inversiones prioritarias y/o de expedientes técnicos que ponen en riesgo las potencialidades y el aprovechamiento de los beneficios económicos y sociales que generaría el Hub Chancay al Estado peruano.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relacionadas a los temas propuestos, pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Al respecto se recuerda que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene facilidades a nivel de rango de ley para la ejecución de inversiones. Está diseñada para optimizar el costo, tiempo, alcance calidad de los proyectos a su cargo. Así, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4 de la referida Ley de creación de la ANIN,[419] en el que se señala que esta tiene competencias en materia de infraestructura sobre los proyectos o programas de inversión a nivel nacional, de los tres niveles de gobierno, que le son asignados o delegados, conforme a la presente ley.

Sin embargo, se ha señalado que, la ANIN, por el momento no puede incidir en la gobernanza y coordinación, liderazgo e identificación de inversiones para su inclusión en infraestructura de la ANIN.

---

[419] **Ley 31841, Ley de creación de la ANIN**
Articulo 4. Competencia de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). La ANIN tiene competencia en materia de infraestructura sobre los proyectos o programas de inversión a nivel nacional, de los tres niveles de gobierno, que le son asignados o delegados, conforme a la presente ley.

Por lo que el Poder Ejecutivo ha señalado que sería necesario darle esas facultades para contar con la habilitación legal que le permita generar las condiciones para el máximo aprovechamiento de los beneficios que generaría al país proyectos como el Hub Chancay.

Cabe destacar que, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) fue creado mediante la ley 31841, publicada el 21 de julio de 2023 y su Reglamento, aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 115-2023-PCM, fue publicado el 11 de octubre de 2023; ambas normas son de muy reciente data; por lo que esta Comisión considera que aun no se han podido medir sus resultados a mediano y largo plazo.

Entre las facilidades que la ley le otorga a la ANIN tenemos que sus plazos de ejecución son menores que el resto de unidades ejecutoras asimismo su nivel de ejecución es más alta y sostenida, lo que la hace idónea para contribuir al desarrollo económico y el cierre de brechas de infraestructura.

Por otro lado, los montos que se indicaron en la Ley de creación de la ANIN, están mencionados en el artículo 6 de la referida norma:

> "**Artículo 6. Proyectos o programas de inversión**
>
> 6.1. La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene a su cargo una cartera de proyectos o programas de inversión en infraestructura que cuenten con montos de inversión iguales o mayores a doscientos millones de soles, que se encuentren en la programación multianual de inversiones vigente y que no tengan ejecución física.
>
> 6.2. Es posible incluir en la cartera a cargo de la ANIN, programas o proyectos de inversión en infraestructura sin ejecución física, cuyo monto de inversión se encuentre entre cuarenta y doscientos millones de soles, solo cuando se trate de intervenciones multisectoriales conjuntas con enfoque de desarrollo territorial y alto impacto económico o social dentro de un determinado ámbito geográfico, o de intervenciones multisectoriales conjuntas que se enmarquen en situaciones de emergencia por desastres naturales, declarada por la autoridad competente".

Esto implica, que el legislador estableció que la ANIN tenía a su proyectos o programas de inversión en infraestructura por montos de inversión iguales o mayores a doscientos millones de soles; además, se ha establecido como excepción monto de inversión se

encuentre entre cuarenta y doscientos millones de soles, solo cuando se trate de intervenciones multisectoriales conjuntas con enfoque de desarrollo territorial y alto impacto económico o social dentro de un determinado ámbito geográfico.

Del mismo modo, el artículo 7 de la referida Ley de creación de la ANIN, ha establecido que: "7.2. En el caso de proyectos o programas de inversión a cargo de los gobiernos regionales o gobiernos locales, su incorporación a la cartera de la ANIN requiere del correspondiente decreto supremo aprobado con el voto favorable del Consejo de Ministros y del respectivo convenio de delegación".

A criterio de esta Comisión, en caso de que, al amparo de las normas descritas, no se pueda incluir a las inversiones ubicadas en la zona de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay; lo que corresponde es que, se dialogue con los gobiernos regionales y locales en cuyos ámbitos se encuentran los proyectos de inversión y a tal efecto es necesario que se evalúen las modificatorias a la Ley 31841, a través de un proyecto de ley que garantice una discusión plural.

Por las consideraciones expuestas, esta Comisión considera que no es pertinente el otorgamiento de facultades en este extremo.

Conclusión

De todo lo expuesto se advierte que, no es pertinente el otorgamiento de facultades en esta materia, por cuanto no se ha explicado en la exposición de motivos con claridad en qué consiste la delegación solicitada, ni se ha sustentado el carácter urgente de la misma. En tal sentido, esta Comisión concluye que NO se debe brindar las facultades solicitadas en este extremo, y que, una medida de esta naturaleza debe ser discutida a través de un Proyecto de Ley.[420]

[420] En la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2024, producto del debate y aporte de los congresistas de la República, se consideró delegar este punto, con un texto sustitutorio que hace más precisa la facultad delegada. Se está concediendo este punto, en mérito que con esta medida se permitirá agrupar las inversiones en una cartera de inversiones estratégicas de la ANIN incluyendo aquellas inversiones con montos menores a 200 millones de soles situadas en la zona de influencia del Hub portuario Chancay, lo que permitirá una mejor priorización de las inversiones de los gobiernos locales y municipales incluidos en dicha zona.

Pedido de facultades en materia de fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado

3.3.1 Modificar el Decreto Legislativo N° 206 y el Decreto Ley N° 25694, con la finalidad de fortalecer institucionalmente a COFIDE, a través del fomento de la participación de inversionistas institucionales en su capital social y la optimización de su gobierno corporativo.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
La iniciativa legislativa propuesta por el Poder Ejecutivo se fundamenta en la necesidad de potenciar la actividad de COFIDE como banco de desarrollo, fortaleciéndolo patrimonialmente, mediante el acceso a nuevos recursos de capital, para mejorar su capacidad operativa y su impacto en el cierre de brechas para el desarrollo.

Es así, que el Poder Ejecutivo plantea como propuesta legislativa la participación de nuevos accionistas minoritarios en COFIDE, lo que permitirá implementar mejores prácticas en dicha institución, alineadas a las de sus nuevos accionistas, los cuales pueden ser: organismos multilaterales o instituciones financieras de reconocido prestigio.

La medida planteada permitirá reforzar la gestión y las operaciones de COFIDE, generando transferencias de conocimiento y el incremento de capacidades internas, a nivel profesional y técnico.

Por otro lado, en cuanto a la mejora del gobierno corporativo, se propone fortalecer las funciones del Directorio y las del presidente del Directorio, estableciendo mecanismos

de participación para los accionistas minoritarios en la gobernanza de COFIDE. Así se asegurará la participación de los directores en los comités de dirección de COFIDE, con la finalidad de optimizar la toma de decisiones estratégicas, la gestión corporativa y la evaluación de oportunidades de negocio, su seguimiento y reporte.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Politica, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas al fortalecimiento de COFIDE pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, las leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la Ley de Presupuesto o la Cuenta General de la República.

En ese sentido, y de la lectura tanto de la fórmula legal y de la exposición de motivos, esta comisión verifica que se pretende modificar el Decreto Legislativo N° 206, Ley del sistema de fomento y apoyo financiero al desarrollo empresarial y el Decreto Ley N° 25694, que adicionan al objeto social de COFIDE la realización de actividades de financiamiento en favor de pequeños empresarios y agricultores. Ambas normas no son leyes orgánicas ni normas relacionadas al marco legal presupuestal, ni tampoco versan sobre tratados internacionales, siendo constitucional su delegación.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada
Esta comisión encuentra pertinente la propuesta de modificación del Decreto Legislativo 206 y la Ley 25694, para optimizar la eficiencia de COFIDE en su misión de ser el motor de desarrollo sostenible del pais a través de la promoción de la competitividad mediante servicios financieros innovadores de alto impacto, brindando soporte a sectores claves para el desarrollo nacional[421].

Es así, que la incorporación de inversionistas minoritarios que tengan la facultad de garantizar la participación de directores en los comités de dirección de COFIDE mejorará las acciones que dicha institución ejerza, elevando su gobierno corporativo a estándares internacionales deseables.

[421] Misión de COFIDE. Visto en: https://www.cofide.com.pe/nosotros.php#nproposito

Por otra parte, de las mesas técnicas que ha tenido la Comisión de Constitución y Reglamento junto a los especialistas de COFIDE y del Ministerio de Economía y Finanzas, un ejemplo de dichos accionistas minoritarios con derecho a voto podría ser el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que actualmente ya tienen acciones en COFIDE pero no tienen derecho de voto.

Ahora bien, con el fin de concordar la fórmula legal propuesta por el Poder Ejecutivo con la exposición de motivos que la justifica, esta comisión considera importante incorporar a la primera que tal fomento de participación de inversionistas institucionales es con participaciones minoritarias en su capital social. Y es que tal como se ha explicado, el pedido de la delegación de facultades no solo se basa en habilitar que los accionistas minoritarios puedan ser organismos internacionales o instituciones financieras reconocidas, sino también que éstas puedan proponer directores para mejorar el gobierno corporativo de COFIDE.

Con esta incorporación se considera viable en este extremo la delegación de facultades solicitada.

Conclusión
Esta comisión encuentra justificada el otorgamiento de facultades legislativas solicitada en el numeral 3.3.1, del inciso 3.3 del artículo 3 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE. De conformidad a las consideraciones antes expuestas, esta comisión propone el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el Decreto Legislativo N° 206, Ley del sistema de fomento y apoyo financiero al desarrollo empresarial, y el Decreto Ley N° 25694, Adicionan al objeto social de COFIDE la realización de actividades de financiamiento en favor de pequeños empresarios y agricultores, con la finalidad de fortalecer institucionalmente a COFIDE, a través del fomento de la participación de inversionistas institucionales con participaciones minoritarias en su capital social y la optimización de su gobierno corporativo."

3.3.2 Aprobar medidas que permitan cumplir con el rol subsidiario del Estado y mejorar la eficiencia de las empresas públicas mediante una supervisión y monitoreo estratégico, alinear la regulación a las buenas prácticas de gobierno corporativo de la OCDE, asi como ordenar y sistematizar las normas de la actividad empresarial del Estado.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Según la exposición de motivos de la iniciativa legislativa examinada, se ha identificado los siguientes problemas en la actividad empresarial del Estado:

a) Existe dispersión de la normativa en la actividad empresarial del Estado, FONAFE incluido.
b) La normativa actual no se encuentra necesariamente alineada a las buenas prácticas de desempeño empresarial y gobernanza corporativa de la OCDE.
c) No existe una unidad centralizada de todas las empresas del Estado.
d) Existe una descontrolada actividad empresarial del Estado, que en algunos casos presentan problemas financieros y de gobernanza.
e) No existen evaluaciones periódicas (anuales) respecto del cumplimiento del rol subsidiario del Estado en la economía.
f) El marco legal vigente no permite que FONAFE tenga un rol activo al momento de monitorear a las empresas.
g) Existe superposición de normas y de actores en cuanto al rol de FONAFE sobre ESSALUD.
h) La actual estructura y organización del FONAFE no permite realizar un trabajo de las dimensiones que demanda la Constitución Política del Perú, respecto de la aplicación del rol subsidiario del Estado en la economía.

Es así, que el Poder Ejecutivo propone como soluciones:

- Crear el sistema funcional de la actividad empresarial del Estado, siendo FONAFE el órgano rector de dicho sistema.
- Fortalecer las capacidades legales y operativas del FONAFE a fin de que pueda cumplir su rol a cabalidad, incorporando un enfoque de resultados. Para tal efecto, se debe aprobar una nueva estructura y organización que le permita darle mayor dinamismo y celeridad a la toma de decisiones.
- Unificar y sistematizar el marco legal que regula la actividad empresarial del Estado, precisando funciones que tengan por finalidad garantizar la vigencia del rol subsidiario del Estado, evaluando periódicamente su cumplimiento, así como supervisar la prestación eficiente de los servicios públicos con alto nivel de calidad.

Bajo lo expuesto, y a criterio del Poder Ejecutivo, con estas medidas se permitirían:

- Mejorar la eficiencia de las empresas públicas, a través de una supervisión y monitoreo estratégico, que facilitará al Estado focalizar los esfuerzos para fortalecer aquellos aspectos que tienen impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, así como en la gestión financiera del Estado.
- Alinear la regulación a las buenas prácticas y principios de gobernanza corporativa de la OCDE, mejorando de esta manera la calidad regulatoria de la actividad empresarial del Estado.
- Unificar las normas, facilitando un mejor y concordado conocimiento de la normativa sobre la materia. Para ello, se derogará la Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y el Decreto Legislativo 1031, Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, a fin de crear un nuevo marco jurídico.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros, así como la jurisprudencia constitucional, la emisión o modificación de las leyes relativas a la creación del sistema funcional de la actividad empresarial del Estado, el fortalecimiento de las capacidades legales y operativas del FONAFE, así como su unificación y sistematización del marco legal que regule la actividad empresarial del Estado, pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, las leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la Ley de Presupuesto o la Cuenta General de la República.

En ese sentido, y de la lectura tanto de la fórmula legal y de la exposición de motivos, esta comisión comprueba que se pretende potenciar el rol subsidiario del Estado en la economía, haciéndola más eficiente. Ahora bien, el parámetro constitucional sobre esta materia es el capítulo económico de la Constitución Política del Perú, es así que encontramos en el artículo 60 del texto constitucional, lo siguiente:

> "Artículo 60.- Pluralismo económico
> El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.
>
> Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal."

De lo expuesto, y entendiendo que el Estado peruano promueve una economía social de mercado, esta comisión considera idóneo que la fórmula legal propuesta por el Poder Ejecutivo proponga aprobar medidas que permitan cumplir con el rol subsidiario del Estado, enmarcándolo en tal limitación constitucional. No obstante, este colegiado considera necesario que dicha limitación vaya de conformidad a todos los límites establecidos en el capítulo económico de la Constitución Política, pues este no solo esgrime la limitación antes señalada, sino también, por ejemplo, a que el Estado solo puede hacer actividad empresarial por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, o respecto al trato igualitario entre empresa pública y privada, entre otras limitaciones.

En ese sentido, se sugiere incorporar en la fórmula legal de la delegación de facultades sobre este acápite, que tal autorización de legislar sobre actividad empresarial del Estado es de conformidad a los límites establecidos por la Constitución Política.

Por otro lado, esta comisión verifica que la emisión de los decretos legislativos de esta índole no estará relacionados a modificaciones de leyes orgánicas, ni normas relacionadas al marco legal presupuestal, ni tampoco versarán sobre tratados internacionales, siendo constitucional su delegación.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad, siempre y cuando se incorpore la recomendación indicada.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Esta comisión comparte la opinión vertida por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, en su informe de fecha 1 de junio de 2024, respecto brindar las facultadas solicitadas sobre esta materia por ser relevante el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado.

Ahora bien, de la revisión de la materia solicitada y de las mesas técnicas que la asesoría de esta comisión ha tenido con los especialistas del Poder Ejecutivo, se justifica la delegación de facultades legislativas, por lo siguiente:

- Permitirá dinamizar y hacer más ágil la dirección y gestión de FONAFE, con una perspectiva de gestión empresarial, teniendo un doble enfoque: cierre de brechas (de calidad y cobertura de servicios) y gestión de riesgos.
- Sobre el fortalecimiento de la gestión de FONAFE, se propone incorporar obligatoriamente la gestión de desempeño basado en resultados en las empresas que se encuentren bajo el ámbito de FONAFE, incorporando una gradualidad en su implementación, empezando por el grupo gerencial, ya que, ello requiere diseñar metas a nivel individual en las empresas.
- Se propondrá una evaluación de desempeño a los miembros del Directorio, quienes deben ser evaluados por los resultados que generan en las empresas, en su calidad de representantes del accionista en cada una de las empresas en las que opera, debiendo orientar sus esfuerzos al cierre de brechas de servicio (calidad y cobertura), con un enfoque de sostenibilidad empresarial y basado en riesgos.
- Los miembros del directorio, en pleno, rendirán cuentas al accionista anualmente, debiendo este último emitir un informe en el que se evalúe el desempeño a nivel individual por cada miembro de directorio, como a nivel colegiado.
- Se alineará las nuevas directrices sobre gobierno corporativo que el OCDE aprobó sobre las empresas públicas. Ello coadyuvara al proceso de adhesión del Perú a la OCDE.

Por las razones antes expuestas, esta comisión considera pertinente la delegación de facultades legislativas sobre la materia examinada. No obstante, es necesario acotar la fórmula legal propuesta por el Poder Ejecutivo a lo indicado en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 7752/2023-PE; así como precisar que leyes se derogarian como consecuencia de la creación del nuevo marco jurídico que se pretende establecer.

Conclusión

Esta comisión encuentra justificada el otorgamiento de facultades legislativas solicitada en el numeral 3.3.2, del inciso 3.3 del artículo 3 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE. Para mejor detalle de la materia delegada, esta comisión propone el siguiente texto sustitutorio:

"Crear un nuevo marco jurídico que ordene, sistematice y optimice la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, fortaleciendo la estructura y gestión del FONAFE, orientado a una supervisión y monitoreo estratégico, con un enfoque de riesgos;

permitiendo incorporar las buenas prácticas de gobierno corporativo de la OCDE, bajo los límites que establece la Constitución Política del Perú para la empresa pública."

Pedido de facultades en materia de reducción de costos de transacción

3.4.1. Establecer medidas para facilitar la suscripción de los contratos en materia de contratación pública.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
La iniciativa legislativa examinada plantea en la exposición de motivos sobre esta materia, de forma muy breve, que a fin de contribuir con la reactivación económica resulta urgente dotar de mecanismos ágiles a los proveedores que les permita contrarrestar la falta de liquidez o línea de crédito, producto de la recesión de los últimos meses. Siendo dicho contexto una evidencia de la necesidad de legislar en favor de los proveedores del Estado, a través de un Decreto Legislativo, dado que constituiría el escenario adecuado para el manejo técnico especializado de la propuesta a instancia del Poder Ejecutivo.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada
Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado puede ser delegable, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, las leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la Ley de Presupuesto o la Cuenta General de la República.

En ese sentido, y de la lectura tanto de la fórmula legal y de la exposición de motivos, esta comisión verifica que se pretende modificar el marco jurídico vigente de contrataciones del Estado. Al respecto, es necesario detallar que no se trata de leyes orgánicas, ni normas relacionadas al marco legal presupuestal, ni tampoco versa sobre tratados internacionales, siendo constitucional su delegación.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Esta comisión ha analizado la materia solicitada, que versa sobre brindar mecanismos agiles a los proveedores del Estado, permitiéndoles contrarrestar la falta de liquidez o línea de crédito, y encuentra que la misma ha sido ya incluida en el Título IV, Procesos de Contratación Pública, del Capítulo III, Ejecución Contractual, del Subcapítulo I, Ejecución Contractual, de los artículos 61, 66, entre otros, de la Ley General de Contratación Públicas[422], que ha aprobado el Pleno del Congreso de la República, con fecha 10 de mayo de 2024, y cuya autógrafa fue enviada al Poder Ejecutivo a los 31 días del mismo mes, venciéndose el plazo para ser observada o promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de junio de 2024.

De esta forma, este colegiado considera que no es pertinente otorgar la delegación de facultades legislativas sobre esta materia, por estar incluido en una Ley que el Congreso de la República ha elaborado y aprobado recientemente y, de conformidad al artículo 108 del texto constitucional, esta en el plazo para ser promulgada u observada por el Poder Ejecutivo.

Conclusión
Por las consideraciones antes expuestas, esta comisión no encuentra justificado otorgar facultades legislativas sobre esta materia al Poder Ejecutivo. En ese sentido, se recomienda **NO OTORGAR** las mismas.

3.4.2. Modificar el literal a) del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, a fin de fomentar las compras corporativas obligatorias que gestiona dicha entidad.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
El proyecto de ley examinado justifica en su exposición de motivos esta materia en la eficiencia en las gestiones para aprobar compras corporativas obligatorias. Es así, que esta medida implica agilizar el proceso de aprobación de compras corporativas obligatorias, reduciendo los tiempos asociados al proceso de aprobación.

[422] La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, en sesión conjunta aprobaron por mayoría el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 5472/2022-PE, 5362/2022-CR, 6475/2023 y 7388/2023-CR, el 30 abril de 2024. Con fecha 10 de mayo de 2024 se debatió y aprobó en el Pleno del Congreso la primera votación y la exoneración de la segunda votación. Posteriormente, con fecha 31 de mayo de 2024 se envió la autógrafa al Poder Ejecutivo, de conformidad al artículo 108 de la Constitución Política.

En el mismo sustento desarrollado en las páginas 116 y 117 de la iniciativa legislativa estudiada, se indica que el artículo 125 de la Constitución Política del Perú y el artículo 16 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, definen las atribuciones del Consejo de Ministros, sin que alguna de las mismas está asociada a una definición de objetos de alguna modalidad de contratación estatal, por lo que la medida propuesta resultaría congruente con dichas disposiciones.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada
Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relacionadas a la central de compras públicas – PERU COMPRAS, puede ser delegable, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, las leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la Ley de Presupuesto o la Cuenta General de la República.

En ese sentido, y de la lectura tanto de la fórmula legal sobre este acápite y de la exposición de motivos, esta comisión verifica que se pretende modificar el literal a) del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, a fin de fomentar las compras corporativas obligatorias que gestiona dicha entidad. Esta propuesta planteada por el Poder Ejecutivo no modifica leyes orgánicas ni normas relacionadas al marco legal presupuestal, ni tampoco versan sobre tratados internacionales, siendo constitucional su delegación.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada
Esta comisión ha analizado la materia solicitada, que versa sobre agilizar el proceso de aprobación de compras corporativas obligatorias que gestiona la Central de Compras Públicas -PERÚ COMPRAS, y advierte que esta ha sido incluida en el Título II, Actores involucrados en el Proceso de Contratación Pública, del Capítulo III, Central de Compras Pública (Perú Compras), de los artículos 20 al 24, de la Ley General de Contratación Públicas[423], que ha aprobado el Pleno del Congreso de la República, con fecha 10 de mayo de 2024, y cuya autógrafa fue enviada al Poder Ejecutivo a los 31

[423] Ídem.

días del mismo mes, venciéndose el plazo para ser observada o promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de junio de 2024.

De esta forma, este colegiado considera que no es pertinente otorgar la delegación de facultades legislativas sobre esta materia, por estar incluido en una Ley que el Congreso de la República ha elaborado y aprobado recientemente y, de conformidad al artículo 108 del texto constitucional, está en el plazo para ser promulgada u observada por el Poder Ejecutivo.

Conclusión
Por las consideraciones antes expuestas, esta comisión no encuentra justificado otorgar facultades legislativas sobre esta materia al Poder Ejecutivo. En ese sentido, se recomienda **NO OTORGAR** las mismas.

3.4.3. Modificar el artículo 2014 del Código Civil, a efectos de brindar protección al tercero registral que contrata confiando en la información publicitada en los asientos registrales.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
El Poder Ejecutivo sustenta esta materia señalando que tiene por objeto evitar los efectos perniciosos en la contratación generados por el texto vigente del artículo 2014 del Código Civil, que con la modificación efectuada por la Ley 30313 al texto primigenio de dicho artículo, extiende los efectos materiales de la publicidad al contenido de los títulos archivados, debilitando la protección que brinda el Registro al tercero registral. Ello en razón a que actualmente para que este sea protegido frente a una eventual anulación, resolución o rescisión del título de su transferente, es imprescindible que la causa de tal invalidez o ineficacia no conste ni en los asientos registrales ni en los títulos archivados que lo sustentan. Dicho de otro modo, actualmente, los efectos materiales de la publicidad se extienden inclusive al contenido de los títulos archivados.

En ese contexto, la propuesta planteada pretende delimitar dichos efectos solo al contenido de los asientos registrales, de manera que, en caso la propuesta prospere, quienes pretendan adquirir algún derecho sobre un bien inmueble o mueble registrado, para que su derecho una vez inscrito en el Registro se mantenga y esté protegido por los alcances de la fe pública registral, solo verificarán los asientos registrales de la partida registral en la que se encuentra inscrito el bien y de los del Registro Personal o del Registro de Mandatos y Poderes, en su caso, ahorrándose los gastos en tiempo y dinero que implica el estudio y evaluación jurídica de los títulos archivados que dieron

mérito a la inscripción del derecho de su transferente y la de los anteriores a él, simplificando el proceso de contratación, reduciendo costos de transacción, recuperando la coherencia del sistema registral y fortaleciendo la fe pública registral.

Asimismo, el Poder Ejecutivo resalta en su exposición de motivo sobre la materia analizada que uno de los efectos de la inscripción en un registro de derechos es la fe pública registral, regulada en el citado artículo 2014, en virtud de la cual quienes adquieren derechos a título oneroso sobre un bien, mantienen su adquisición, aunque resulte que los vendedores no eran realmente los dueños. Ello siempre que el vicio del título de tales vendedores no conste en el Registro. A tales adquirentes protegidos por el Registro se les denomina tercero registral.

Esto solo se realiza con la consagración de la fe pública registral, la cual permite al adquirente que reúne las exigencias previstas normativamente para ser protegido, contratar con la seguridad de mantener su adquisición, incluso si el derecho de su transferente estuviere viciado por alguna causal de nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución, si tales causas no constan en el Registro.

Finalmente, añade que la propuesta planteada, al limitar los efectos materiales de la publicidad al contenido de los asientos registrales, se restablecería la coherencia en la regulación de la publicidad.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101, 104 y otros de la Constitución Política, así como la jurisprudencia constitucional, la modificación del Código Civil puede ser delegable, toda vez que se trata de una ley ordinaria. Ahora bien, siempre y cuando las incorporaciones no modifiquen o colisionen con la Constitución Política, las leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la Ley de Presupuesto o la Cuenta General de la República.

En ese sentido, y de la lectura tanto de la fórmula legal y de la exposición de motivos, esta comisión verifica que se pretende modificar, expresamente, el articulo 2014 del Código Civil, a efectos de proteger al tercero registral que contrata con la información publicitada en el registro. Es así, que, al no contravenir algún artículo de la Constitución Política, ni modificar leyes orgánicas, ni normas relacionadas al marco legal presupuestal, así como tampoco versar sobre tratados internacionales, esta comisión considera que es constitucional su delegación.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este extremo del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada
La propuesta del Poder Ejecutivo en este extremo busca exonerar al tercero registral del procedimiento de revisión de los títulos archivados, con el sustento de:

- Consagrar la fe pública registral para proteger al tercero de buena fe frente a una eventual anulación, resolución o recisión del título de su transferente.
- Reducir los costos de transacción del tercero de buena fe, evitando así el pago a un abogado para que realice la revisión escrupulosa del título archivado.

Esta comisión es de la opinión que si bien es cierto desde un enfoque de reducción de costos de transacción tendría sentido retirar tal exigencia legal, desde un análisis jurídico se estaría desprotegiendo el derecho de propiedad de una persona que ha sido víctima de falsificación de documentos y/o suplantación de identidad, así como se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 0018-2015-PI/TC, ha señalado lo siguiente:

- En una interpretación armónica del derecho de propiedad y del principio de seguridad jurídica, se conlleva a sostener que en los casos en los que fehacientemente el propietario haya sido víctima de falsificación de documentos y/o suplantación de identidad, para la configuración de la buena fe del tercero, será indispensable haber desplegado una conducta diligente y prudente desde la celebración del acto jurídico hasta la inscripción del mismo, además de la observancia, claro está, de los propios requisitos exigidos por el artículo 2014 del Código Civil, en los términos en los que ha sido modificado por la Ley 30313, como por ejemplo, la escrupulosa revisión de los asientos registrales y de los títulos archivados.
- En el ordenamiento jurídico peruano se han expedido normas con la finalidad de dotar de contenido a la diligencia y prudencia exigidas al tercero para la adquisición de bienes cuyo origen está relacionado con ciertas actividades ilícitas, como las que atentan contra la administración pública, las actividades vinculadas a la criminalidad organizada, entre varias otras.

- El artículo 66 del reglamento del Decreto Legislativo 1373, "Decreto Legislativo sobre extinción de dominio", aprobado por el Decreto Supremo 007-2019-JUS, indica lo siguiente:

  "Artículo 66.- Tercero de buena fe
  Tercero de buena fe es aquella persona, natural o jurídica, que no sólo acredita haber obrado con lealtad y probidad, sino que también ha desarrollado un comportamiento diligente y prudente, debiendo reunir los siguientes requisitos:
  66.1. La apariencia del derecho debe ser tal que todas las personas al inspeccionarlo incurrieran en el mismo error.
  66.2. Al adquirir el derecho sobre el bien patrimonial se verificaron todas las condiciones exigidas por leyes, reglamentos u otras normas.
  66.3. Tener la creencia y convicción de que adquirió el bien patrimonial de su legítimo titular y siempre que no concurran las siguientes circunstancias:

  a) Pretender dar al negocio una apariencia de legalidad que no tenga o para encubrir su verdadera naturaleza.
  b) Pretender ocultar o encubrir al verdadero titular del derecho.
  c) Concurran declaraciones falsas respecto al acto o contrato para encubrir el origen, la procedencia, el destino de los bienes patrimoniales o la naturaleza ilícita de estos."

- Que más allá de las exigencias normativas previamente detalladas que son necesarias para la configuración de la buena fe en los términos del artículo 2014 del Código Civil, según se trate de bienes relacionados con los ilícitos a los que se refiere el Decreto Legislativo 1373, corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado también, en diversas resoluciones que ha expedido, algunos criterios para determinar si se ha configurado la buena fe del tercero en cada caso. A continuación, el detalle:
  - Casación 3098-2011-Lima: "(...) la diligencia ordinaria mínima impone al comprador el deber de verificar el estado actual del bien que adquiere y principalmente quien o quienes detentan la posesión del mismo pues en aplicación de lo que dispone el artículo 912 del Código Civil al poseedor de un bien se le reputa propietario mientras no se demuestre lo contrario (...)".
  - Casación 11620-2016-Junín: "(...) Si bien el artículo 2014 del Código Civil precisa que el adquirente es protegido en la medida en que ha incorporado a su patrimonio derechos sustentado en la fe del registro (confianza en la apariencia registral); sin embargo, en la misma línea interpretativa de la Sala de mérito debe considerarse que la buena fe no solo se acredita con revisar los antecedentes registrales o con obtener anticipadamente al negocio

jurídico de compraventa el certificado de gravamen, sino que exige se tenga que indagar sobre la situación real del inmueble, por sobre todo si los que lo transfirieron tienen la capacidad para disponer el derecho, lo cual no ha sucedido en el caso concreto. (...)"

De lo expuesto, esta comisión encuentra que el sustento esgrimido por el Poder Ejecutivo sobre este extremo de la delegación de facultades no contempla lo señalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el expediente 0018-2015-PI/TC, así como las diferentes casaciones de la Corte Suprema, respecto a que el tercero de buena fe debe tener un comportamiento diligente, esto es, revisar, previa y escrupulosamente, el título archivado, con el objeto de tener conocimiento sobre la situación real del inmueble.

De permitir la modificación legislativa solicitada por el Poder Ejecutivo, se estaría flexibilizando el comportamiento diligente que actualmente el Código Civil, bajo el principio de legalidad, le exige al ciudadano al momento de adquirir una propiedad, afectando, notoriamente, el principio de seguridad jurídica y del derecho de propiedad.

Es así, que esta comisión considera que tal modificación debería ser debatida ampliamente al interior del Congreso, para mayor debate, así como pueda obtener un consenso que respalde su aprobación. Por ello, se sugiere al Poder Ejecutivo que presente un proyecto de ley sobre la materia examinada.

Conclusión
Por las consideraciones antes expuestas, esta comisión no encuentra justificado otorgar facultades legislativas sobre esta materia al Poder Ejecutivo. En ese sentido, se recomienda **NO OTORGAR** las mismas.

3.4.4. Modificar los artículos 2033, 2037, 2038, 2040 y 2042 del Código Civil, a efectos de simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
La parte de la exposición de motivos relacionada a la materia examinada indica que los artículos 2033 (Registro Personal), 2037 (Registro de Mandatos y Poderes), 2040

(Registro de Testamentos) y 2042 (Registro de Sucesiones Intestadas) del Código Civil, regulan ante qué oficina registral el administrado presentará el título y, en esa línea, a los terceros les permita conocer donde podrán acceder a la publicidad registral, considerando que no hay un registro único nacional sino distribuido entre las distintas oficinas registrales del país.

En ese contexto, el objeto de la reforma planteada por el Poder Ejecutivo es establecer una regla uniforme sobre el lugar en el cual se extiende las inscripciones en los citados registros a fin de evitar sobrecostos al administrado por la obtención de varias copias de un mismo instrumento notarial, pagos de tasas por la inscripción y, en el caso de la SUNARP, producir duplicidades "legales" inscribiendo la misma información en las distintas oficinas registrales.

La propuesta en mención se sustenta en la interconexión de la información de las partidas registrales entre oficinas, y es que en la actualidad el ciudadano puede acceder a la publicidad registral, por ejemplo, a certificados literales de partidas registrales procedentes de cualquier lugar del país, no solo acudiendo a la oficina registral más cercana, sino también de manera virtual a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL). Tal interconexión también comprende a los registradores públicos, por lo que, por ejemplo, ante la rogatoria de un acto de transferencia en función a una inscripción en el registro personal de otra oficina registral como la sustitución de régimen patrimonial, el registrador de la propiedad puede acceder a dicha información en tiempo real independientemente de la oficina donde se encuentre, sin necesidad de requerir al administrado la previa inscripción, nuevamente, en el registro personal de su oficina, como lo señala el artículo 2033 del Código Civil.

Asimismo, se argumenta sobre esta materia que el artículo 48.1.4 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, prohíbe solicitar al ciudadano información que posea la administración en ejercicio de sus funciones públicas. Por lo tanto, una vez inscrito el acto o derecho inscribible de cualquiera de los registros mencionados, la información y publicidad de los actos inscritos dada la interconexión es de conocimiento en todo el país no obstante la existencia de diversas oficinas registrales, por lo tanto, las disposiciones aludidas quedan decantadas.

De igual manera, se indica que con la modificación de las normas en mención, se busca actualizar el articulado conforme a la realidad del servicio registral y, en segundo lugar, superar la confusión actual de su interpretación, que ha llevado inclusive a apelaciones ante el Tribunal Registral, órgano que, en reiterados pronunciamientos ha dejado establecido por ejemplo, que no es procedente la inscripción del otorgamiento de

testamento en el Registro de Testamentos del lugar de ubicación de los bienes (Resolución N°1684-2021-SUNARP-TR, entre otras).

Finalmente, indica que en el caso del artículo 2038 (Registro de Mandatos y Poderes), su modificación se da como consecuencia de la modificación del artículo 2037, pues la inscripción se efectúa en la oficina registral indicada por el administrado, los alcances de la protección al tercero de buena fe, deben supeditarse a la inscripción independientemente del lugar en la que se realice.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada
Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101, 104 y otros de la Constitución Política, así como la jurisprudencia constitucional, la modificación del Código Civil puede ser delegable, en virtud que se trata de una ley ordinaria. Esto condicionado a que las incorporaciones legales que se pretenden incluir no modifiquen o colisionen con la Constitución Política, las leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la Ley de Presupuesto o la Cuenta General de la República.

En ese sentido, y de la lectura tanto de la fórmula legal y de la exposición de motivos, esta comisión verifica que se pretende modificar, expresamente, los artículos 2033, 2037, 2038, 2040 y 2042 del Código Civil, a efectos de simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional. Es así, que, al no contravenir algún artículo de la Constitución Política, ni modificar leyes orgánicas, ni normas relacionadas al marco legal presupuestal, así como tampoco versa sobre tratados internacionales, esta comisión considera que es constitucional su delegación.
Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este extremo del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada
Durante las mesas técnicas que llevo a cabo la Comisión de Constitución y Reglamento del 20 al 24 de mayo del presente año, para tratar los temas materia de delegación de facultades, los especialistas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, señalaron sobre el literal 3.4.4. lo siguiente:

- Actualmente se tiene como problema: requisitos de territorialidad complejos y duplicados, esto es, inscripciones adicionales en diferentes oficinas; falta de información unificada, habiendo una multiplicidad de inscripciones con costos administrativos; dificultad de acceso a la información, debido a su dispersión, dificultando su acceso y aumentando sus costos; sobrecostos para los

ciudadanos por tener que cubrir el pago de certificaciones y pago de tasas múltiples; ineficiencias en el procedimiento registral por contar con procesos complejos y prolongados; y confusión normativa e incremento de apelaciones por existir un criterio de lugar de la inscripción.

- Ante la problemática descrita el Poder Ejecutivo propone la modificación de los artículos 2033, 2037, 2038, 2040 y 2042 del Código Civil; la creación del índice nacional del Registro de Mandatos y Poderes; interconexión de los registros involucrados a nivel nacional; y el fortalecimiento del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL).
- Los beneficios de la propuesta serían:
  - Simplificación y modernización del sistema registral.
  - Reducción de costos para los ciudadanos.
  - Mejora en la accesibilidad a la información.
  - Aumento de la transparencia.
  - Mayor seguridad jurídica.
  - Unificación de criterios y mejora en la calidad de los pronunciamientos y predictibilidad de decisiones.
- El impacto cualitativo de la propuesta sería: mayor eficiencia administrativa y accesibilidad ampliada y aumento de la transparencia.
- El impacto cuantitativo de la iniciativa legislativa sería: reducción de costos para los ciudadanos (hasta un 75%); ahorro de tiempo en trámites (reducción del 30%); reducción de cargas administrativas en procesos internos (20% menos); incremento del acceso a servicios registrales en línea en los registros involucrados (30% más); prevención de inscripciones múltiples (eliminación del 100%).

De lo expuesto, esta comisión concuerda con la existencia de un problema relacionado a inscripciones adicionales en diferentes oficinas bajo el cumplimiento de requisitos de territorialidad, así como una falta de información unificada estipulado en los artículos materia de modificación, a pesar que en la actualidad SUNARP viene funcionando bajo su plataforma virtual de los registro que custodia, ofreciendo servicios públicos como copias literales de partidas registrales, certificados de registro de inscripción (CRI), entre otros, agilizando la realización de trámites solicitados por el ciudadano.

De esta manera, y teniendo en cuenta que el Código Civil es del año 1984, es necesario una actualización de los artículos antes citados, con el fin de facilitar al ciudadano los servicios relacionados en los artículos 2033, 2037, 2038 2040 y 2042, respecto al

registro de mandatos o representación, así como de los relacionados a derechos de sucesiones.

Ahora bien, esta comisión considera que para los artículos 2037 y 2038 del Código Civil es necesario establecer una progresividad en su unificación de información, pues, de acuerdo a lo mencionado en las mesas técnicas por los especialistas de SUNARP, es imprescindible trabajar primero en la implementación del índice nacional de mandatos y poderes.

Por estos motivos, esta comisión considera pertinente otorgar la delegación de facultades, siempre y cuando se adhiera lo antes descrito a la fórmula legal propuesta por el Poder Ejecutivo.

Conclusión
Esta comisión encuentra justificada el otorgamiento de facultades legislativas solicitada en el numeral 3.4.4, del inciso 3.4 del artículo 3 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE., con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar los artículos 2033, 2037, 2038, 2040 y 2042 del Código Civil, a efectos de simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional, considerando la implementación progresiva para el caso del Registro de Mandatos y Poderes."

Pedido de facultades en materia de acceso y competencia en servicios financieros

3.5.1. Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para autorizar la reducción del capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de

Numerario (ETCAN) que prestan servicios a las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y con ello fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero de valores; y en lo referente a límites operativos de concentración, con la finalidad de fomentar el otorgamiento de financiamientos por parte de las empresas del sistema financiero a través de límites operativos de concentración alineados a los estándares internacionales y particularidades del sistema financiero nacional

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La medida propuesta pretende modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en específico en dos aspectos diferenciados:

En primer lugar, para **autorizar la reducción del capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN)** que prestan servicios a las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

Por otro lado, se pretender modificar los Límites operativos de concentración, En la exposición de motivos y las posteriores reuniones sostenidas, durante el Estudio del proyecto de ley; con la finalidad de adaptarlas a estándares internacionales actuales.

La propuesta busca promover el acceso al financiamiento al contar las empresas del sistema financiero con límites más acordes los estándares internacionales y a las particularidades del sistema financiero nacional. Además, de ello, las entidades financieras tendrán un marco regulatorio de límites más competitivo, a nivel nacional e internacional, contribuyendo a una mejor gestión de riesgo de concentración en resguardo de la solvencia y estabilidad del sistema financiero.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, las acciones a adoptar de acuerdo

a este extremo del pedido de facultades no se encuentran comprendidas dentro de materias indelegables (reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica, Ley de Presupuesto, ni la Ley de Cuenta General de la República), por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Sobre el primer punto, relativo a la **Competencia mercado de Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN)**. Se ha señalado que, en el Perú, actualmente, solo operan dos ETCAN: Hermes Transportes Blindados S.A. y la Compañía de Seguridad Prosegur S.A. Así, cada una de dichas empresas mantienen alrededor del 50% de participación del mercado, por lo que la concentración del mercado de las ETCAN que prestan servicios a las empresas supervisadas por la SBS es elevada, lo cual puede generar ineficiencias productivas debido a la limitada competencia en el sector.

Como consecuencia de esta concentración, los precios fijados por las ETCAN para el transporte y custodia de efectivo influyen en los costos que las empresas del sistema financiero y el Estado incurren para poder movilizar efectivo entre sus diversos canales de atención y para los operativos de pago de los programas de transferencia monetaria de los programas sociales; por lo que resulta necesario autorizar la reducción del capital mínimo requerido a estas empresas.

De esta forma se pretende fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero de valores; y en lo referente a límites operativos de concentración, con la finalidad de fomentar el otorgamiento de financiamientos por parte de las empresas del sistema financiero a través de límites operativos de concentración alineados a los estándares internacionales y particularidades del sistema financiero nacional.

Por otro lado, con respecto a la actualización de estándares; se tiene que, en 2014, el Comité de Basilea emitió el estándar de grandes exposiciones referido a monitorear y limitar la pérdida que un banco internacionalmente activo puede enfrentar de una sola contraparte o de un grupo de contrapartes relacionadas y ha ido implementándose a nivel internacional, el cual resulta menos complejo que los criterios definidos en la legislación peruana; por lo que resulta necesario actualizar esta legislación.

Adicionalmente, se tiene que, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, sobre este punto, en su Informe de fecha 1 de junio de 2024, ha concluido: "En ese sentido, considerando la antigüedad de la legislación vigente y la emisión del referido estándar resulta necesario actualizar la legislación por lo que la Comisión considera pertinente brindar las facultades sobre el presente numeral[424]".

Conclusión

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en los siguientes extremos:

a) Artículo 17, para autorizar la reducción del capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN) que prestan servicios a las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y con ello fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero de valores.

b) Capítulo II del Título II. Límites y prohibiciones, en específico, en lo referente a límites operativos de concentración, con la finalidad de fomentar el otorgamiento de financiamientos por parte de las empresas del sistema financiero a través de límites operativos de concentración alineados a los estándares internacionales y particularidades del sistema financiero nacional".

3.5.2. Modificar el Decreto Legislativo N° 862, Ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras, con la finalidad de fortalecer la regulación y supervisión de los fondos de inversión y de las sociedades que los administran.

[424] INFORME SOBRE MATERIAS ESPECÍFICAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, de fecha 1 de junio de 2024. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo solicita facultades para modificar el Decreto Legislativo N° 862, la propuesta normativa permitirá visibilizar la totalidad de los fondos de inversión que se constituyan en el mercado peruano con el objeto de[425]:

(i) Asegurar que los administradores de los mismos cumplan con parámetros prudenciales mínimos requeridos a los participantes del mercado financiero (patrimonio mínimo, solvencia moral y económica de accionistas, idoneidad de directores, implementación de medidas PLAFT, etc.);

(ii) Lograr la efectiva constitución de un patrimonio autónomo separado de los activos de la sociedad administradora o de terceros,

(iii) Prevenir la desnaturalización de los fondos de inversión con el objeto de que sean vehiculos que emitan principalmente certificados de participación y no instrumentos de deuda; y,

(iv) Fortalecer la transparencia de los fondos de inversión y la protección de los inversionistas.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relacionadas a temas de relacionados al mercado de inversiones pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La medida buscará cubrir un vacío normativo; al respecto si bien se cuenta con información sobre los fondos de inversión públicos que son regulados por la Superintendencia del

[425] Exposición de motivos del PL 7752/2023-PE.

Mercado de Valores (SMV), se carece de visibilidad respecto a los fondos de inversión privados que se constituyen en el mercado peruano, consecuentemente los inversionistas no cuentan con suficiente información y mecanismos de protección y por lo tanto se limita un desarrollo sano del mercado de capitales. Por lo que, esta medida busca corregir la opacidad en el caso de los fondos de inversión privados.

Sobre los fondos de oferta privada, se destaca que, si bien están sujetos a la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 862 y a su Reglamento, no se encuentran, por lo demás, dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Cabe resaltar que tal disposición alcanza a las sociedades administradoras que están constituidas bajo la forma de sociedades anónimas, así como a las personas relacionadas de manera directa o indirecta con el fondo de inversión[426]. Esta situación problemática puede solucionarse a través de la propuesta de delegación del Poder Ejecutivo.

Las medidas propuestas con relación al fortalecimiento de la regulación y supervisión de los fondos de inversión y de las sociedades que administran permitirá obtener esa información además de optimizar la legislación vigente a través de la reducción de arbitrajes regulatorios y la verificación de que los intermediarios financieros que participen en el mercado cumplan con las exigencias de idoneidad y con los parámetros prudenciales que son necesarios para cautelar la integridad del mercado.

Adicionalmente, se tiene la opinión de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, sobre este punto, en su Informe de fecha 1 de junio de 2024, ha concluido: "Dados que las propuestas mejorarán la regulación y supervisión de los fondos de inversión, la Comisión considera pertinente brindar las facultades sobre el presente numeral[427]".

---

[426] ¿CÓMO ACTÚAN LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO PERUANO?" Comisión de Investigación del Equipo de Derecho Mercantil. revistas.pucp.edu.pe › index › actualidadmercantil

[427] INFORME SOBRE MATERIAS ESPECÍFICAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, de fecha 1 de junio de 2024. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

Por tales consideraciones, esta Comisión estima que es viable y pertinente el otorgamiento de facultades respecto a esta submateria.

Conclusión

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el Decreto Legislativo 862, Ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras, con la finalidad de incorporar medidas y procedimientos de regulación y supervisión de los fondos de inversión públicos y privados y de las sociedades que los administran".

3.5.3. Modificar la Ley N° 29440, Ley de los Sistemas de Pago y de Liquidación de Valores, con el objetivo de fomentar la competencia y la innovación en el sistema nacional de pagos, así como de fortalecer las atribuciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para regular los servicios e instrumentos de pago, incluyendo a los Acuerdos y Proveedores de Servicios de Pagos, con la finalidad de mejorar las condiciones y oportunidades para la interoperabilidad de los pagos inmediatos, incluyendo aspectos como las comisiones y tarifas de estos servicios, y facultades adicionales del BCRP para la administración y regulación de plataformas de servicios de pagos minoristas; y modificar el Decreto Legislativo N° 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa "Reactiva Perú", con la finalidad de asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, para establecer los mecanismos de administración de cartera de créditos con garantía del Gobierno Nacional de una empresa del sistema financiero que ha sido sometida a un proceso de intervención, disolución y liquidación por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

A criterio del poder ejecutivo es necesario cubrir un vacío normativo, para lo cual se está proponiendo la modificación de la ley 29440 ley de pagos ley de los sistemas de pagos y de liquidación de valores para realizar los siguientes ajustes:

a) modificar la ley de pagos para acelerar la adopción de innovaciones digitales y mejorar el acceso a estos servicios para favorecer a la población no bancarizada
b) facultar al BCRP para disminuir altos costos e incrementar la interoperabilidad
c) fortalecer el rol del BCRP como ente rector del sistema de pagos permitiéndole administrar y regular plataformas de pagos minoristas para asegurar la liquidación segura y la interoperabilidad de los pagos de bajo valor.

Por otro lado el poder ejecutivo ha identificado otra norma que debería ser objeto de intervención se trata del Decreto Legislativo 1455, mediante el cual se creó el "Programa Reactiva" para limitar los efectos negativos en el patrimonio del BCRP, estableciendo disposiciones claras regulen el procedimiento de pago en casos de incumplimiento por parte de las entidades del sistema financiero, con la finalidad de proteger las garantías a favor del BCRP reduciendo así los riesgos del crédito que afectan el patrimonio del Banco Central.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relacionadas a temas de sistemas de pagos y liquidación de valores pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Al analizar la pertinencia de la medida propuesta se debe tener en cuenta que si bien se cuenta con la Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, que establece una estructura legal para estos sistemas y establece también la rectoría de este sistema por parte del BCRP; es necesario establecer en la normativa una definición más

amplia que tome en cuenta a entidades, proveedores administradores tecnológicos, servicios e instrumentos de pago, así como a otros actores que puedan surgir en el proceso de innovación de servicios de pago. Por tanto, hoy las medidas específicas propuestas de modificación de esta ley están debidamente sustentadas, y, a criterio de esta Comisión son consideradas viables.

Se debe tener en cuenta que las modificaciones propuestas a la Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, porque se orientan a otorgar facultades al Banco Central para enfrentar los retos de bajo acceso a los pagos digitales por parte de la población no bancarizada, costos altos de servicios de pagos y de conectividad, todavía baja interoperabilidad y barreras de acceso; así como a potenciar la regulación sobre acuerdos y proveedores de servicios de pago. Como consecuencia positiva se permitirá que más personas tengan acceso a la bancarización y a la economía formal.

En cuanto, a la modificación del marco legal de creación del Programa Reactiva, asociada a situaciones de intervención de las empresas del sistema financiero permitirán limitar efectos negativos en el patrimonio del Banco Central. Dado que la propuesta fomentará la competencia y la innovación en el sistema nacional de pagos, la Comisión considera pertinente brindar las facultades sobre el presente numeral.

Se debe tener en cuenta que la medida propuesta referida al reforzamiento de las facultades de dicha entidad para fomentar el desarrollo de pagos digitales contribuirá a propiciar el desarrollo y la incorporación más rápida de innovaciones digitales en pagos digitales, qué introduzcan nuevos casos de uso de los pagos digitales y faciliten su acceso.

En lo que corresponde la modificación de la norma de creación del programa reactiva Perú se establecerán precisiones alineadas a la naturaleza de estas operaciones, en las que el BCRP no asumirá ningún riesgo de crédito.

Adicionalmente, se debe considerar la recomendación de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, sobre este punto, en su Informe de fecha 1 de junio de 2024, en el que se concluyó que: "Dado que la propuesta fomentará la competencia y la

innovación en el sistema nacional de pagos, la Comisión considera pertinente brindar las facultades sobre el presente numeral[428]".

Por tales motivos, esta Comisión considera pertinente conceder la delegación sobre este aspecto.

Conclusión

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"a) Modificar, la Ley 29440, Ley de los Sistemas de pagos y de Liquidación de Valores, a fin de:

a.1) Ampliar la definición de los sistemas de pagos y de Liquidación de Valores para incorporar a entidades, proveedores, administradores tecnológicos, servicios e instrumentos de pagos así como a otros actores que puedan surgir en el proceso de innovación de servicios digitales y mejorar el acceso a estos servicios.

a.2) Fortalecer las atribuciones Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para regular medidas orientadas a ampliar el acceso a servicios digitales a la población no bancarizada, reducir costos y mejorar la interoperabilidad.

a.3) Facultar al BCRP para administrar y regular plataformas de pagos minoristas con el fin de garantizar la liquidación segura y la interoperabilidad de los pagos de bajo valor.

b) Modificar el Decreto Legislativo 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa "REACTIVA PERÚ" para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, a fin de establecer los mecanismos de administración de cartera de créditos con garantía del Gobierno Nacional de una empresa del sistema financiero que ha sido sometida a un proceso de intervención, disolución y liquidación por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP".

---

[428] INFORME SOBRE MATERIAS ESPECÍFICAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, de fecha 1 de junio de 2024. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

3.5.4. Fortalecer el Fondo AGROPERÚ, mejorando las condiciones de acceso a los servicios financieros agrarios; de acuerdo con:

1. Modificación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, con el propósito de ampliar el alcance y finalidades del Fondo AGROPERÚ. Esta modificación permitirá al Fondo AGROPERÚ destinar sus recursos de manera más amplia en lo siguiente:

i. Otorgar financiamiento directo.

ii. Otorgar garantias.

iii. Proporcionar servicios de extensión agraria; los cuales, formarán parte de la estructura del financiamiento obtenido por- el pequeño productor agrario organizado y serán asumidos por este.

iv. Fomentar la adopción de seguros agrarios implementados por el FOGASA

Los recursos del Fondo AGROPERÚ podrán ser usados también en gastos operativos para el cumplimiento de sus fines.

2. Modificación del numeral 3.1 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, permitiendo que la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, también pueda administrar los recursos del Fondo AGROPERÚ a través de fideicomisos, a fin de diversificar los operadores financieros para el cumplimiento de los fines del Fondo AGROPERÚ.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 ha revelado áreas críticas que requieren atención en el sector agropecuario. En primer lugar, la disminución en la solicitud de

créditos por parte de los productores agropecuarios, de 13.3% en 2014 a 9.1% en 2022, indica la necesidad de optimizar y promocionar los programas de préstamos. Para revertir esta tendencia, es esencial aumentar la conciencia y la confianza en los productos financieros. Actualmente, el Fondo AGROPERU es el único proveedor de servicios financieros, lo que subraya la necesidad de expandir la oferta a otras instituciones financieras.[429]

Además, la brecha de género en la solicitud de créditos, con solo el 24.2% de las solicitudes provenientes de mujeres productoras, resalta la necesidad de políticas inclusivas y programas de educación financiera específicos.[430]

En segundo lugar, aunque el acceso al crédito es alto entre aquellos que solicitan un crédito, la propiedad y el acceso al crédito están disminuyendo. Esto destaca la importancia de investigar y abordar las barreras al acceso, como la adopción de seguros agrarios. La adquisición de un seguro agropecuario es baja, con un ligero aumento en la cobertura del seguro del 0.5% en 2016 al 1.3% en 2022, lo que indica una oportunidad para innovar y expandir el acceso a los seguros.[431]

Por último, las diferencias regionales en la capacidad de ahorro enfatizan la necesidad de un enfoque territorial en la formulación de productos financieros. Esto implica diseñar soluciones adaptadas a las condiciones económicas y culturales locales para aumentar la productividad de los clientes del sistema financiero que son productores agrarios.[432]

Desde su creación, el Fondo AGROPERÚ ha experimentado varias modificaciones y mejoras, siempre en beneficio del pequeño productor agropecuario. Sin embargo, casi cuatro años después de su reestructuración en 2020, el Fondo necesita un mayor impulso para aumentar su alcance a los pequeños productores. La creación de un Fideicomiso permitirá ofrecer diferentes opciones a los pequeños productores y

[429] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.5.4. del proyecto de ley 7752/2023-PE
[430] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.5.4. del proyecto de ley 7752/2023-PE
[431] Ibidem
[432] Ibidem

proporcionarles los recursos necesarios para sus inversiones o gastos de campaña a través de financiamiento directo o garantías.[433]

Se propone a COFIDE como entidad para administrar el Fideicomiso debido a su experiencia en el sector agrario y su papel como Banco de Desarrollo del Perú. COFIDE ha participado en programas estatales como el FAE AGRO y tiene experiencia en la administración de fondos para el sector forestal y agrario. Además, COFIDE ha demostrado su capacidad para atender programas de reactivación económica en el país y contribuir al desarrollo de varios sectores, incluyendo los maricultores en la bahía de Sechura – Piura y el sector empresarial.[434]

El Sistema Financiero Peruano, compuesto por 51 empresas, atiende a 8 millones de deudores hasta enero de 2024. El sector de agricultura, caza y silvicultura representa el 6.5% de un total de S/ 416,178 millones. Sin embargo, la morosidad en el Fondo AGROPERÚ es del 19.6% en marzo de 2024, lo que sugiere una recuperación del 75% del saldo colocado.[435]

Las colocaciones de créditos dependen de la recuperación del saldo de capital y los intereses generados, menos los gastos operativos. Con S/ 200 millones disponibles para transferir a un fideicomiso para créditos agrarios, se podrían atender a 22,334 créditos en 20 campañas por cada S/ 200 millones de soles, considerando una recuperación de capital del 70%.[436]

Los servicios de extensión agraria pueden ayudar a los agricultores a tomar decisiones informadas sobre la adopción de tecnologías. La adopción de seguros agrícolas puede reducir el riesgo de incumplimiento de la cartera de créditos y mejorar la confianza de las entidades financieras en la viabilidad de los proyectos agropecuarios.[437]

---

[433] Ibidem
[434] Ibidem
[435] Ibidem
[436] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.5.4. del proyecto de ley 7752/2023-PE
[437] Ibidem

Es importante que los créditos otorgados con recursos del FONDO AGROPERÚ cuenten con un seguro agrario cofinanciado, voluntario e individual. Los seguros ofrecen protección frente a diversos riesgos que pueden afectar la producción, contribuyendo a la estabilidad financiera de los pequeños agricultores y permitiéndoles recuperar inversiones en caso de siniestros. De esta manera, los seguros pueden incentivar las colocaciones crediticias en este sector.[438]

En respuesta a los desafíos climáticos y catastróficos que afectan al sector agrícola, el Gobierno ha implementado varias estrategias para otorgar garantías y minimizar el riesgo crediticio. Estas medidas buscan disminuir las pérdidas financieras de los usuarios, respaldar la concesión de créditos en actividades agrícolas consideradas de alto riesgo y fomentar la concesión de créditos. Estas intervenciones han movilizado recursos económicos con el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades agrícolas, evitar la escasez en los mercados nacionales y mantener la seguridad alimentaria del país.[439]

Para estos casos, el Estado promueve la adquisición de seguros agropecuarios, cofinanciados con los usuarios de créditos del sistema financiero, para enfrentar eventos adversos. El objetivo es que este seguro cubra una parte de las pérdidas que, de no tenerlo, el Estado tendría que asumir al financiar a los afectados por estos eventos climáticos para su reactivación económica. Esta medida es parte de un conjunto de estrategias destinadas a fomentar la concesión de créditos y reducir los impactos de eventos adversos en los pequeños productores, que son los más vulnerables. De esta manera, se contribuye a la resiliencia para mantener la seguridad alimentaria en el país y, finalmente, se redistribuye el riesgo y la carga de recuperación entre el sector público y privado.[440]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de

[438] Ibidem
[439] Ibidem
[440] Ibidem

leyes relativas a temas en materia agraria pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 ha identificado brechas significativas en el acceso a servicios de financiamiento y seguros agrarios. La disminución en la solicitud de créditos por productores agropecuarios del 13.3% en 2014 al 9.1% en 2022, indica una necesidad urgente de optimizar y promover los programas de préstamos. Es esencial implementar estrategias para aumentar la conciencia y confianza en los productos financieros para revertir esta tendencia. Actualmente, el Fondo AGROPERU es el único canal de oferta de servicios financieros, lo que resalta la necesidad de expandir esta oferta a otras instituciones financieras. Además, la brecha de género en la solicitud de créditos, con solo el 24.2% de las solicitudes provenientes de mujeres productoras, subraya la necesidad de políticas inclusivas y programas de educación financiera dirigidos a este grupo.[441]

A pesar de que el acceso a crédito parece ser alto entre aquellos que solicitan un crédito, la propiedad y el acceso a crédito están disminuyendo, lo que destaca la importancia de investigar y abordar las barreras subyacentes al acceso. Esto incluye la adopción de seguros agrarios y mecanismos de extensión agraria para revertir esta tendencia. La adquisición de un seguro agropecuario es inusualmente baja, con un modesto aumento en la cobertura del seguro del 0.5% en 2016 al 1.3% en 2022. Esto resalta un área crítica donde se podría innovar y ampliar el acceso y la adopción de seguros, esencial para la protección y sustentabilidad a largo plazo de la agricultura.[442]

---

[441] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.5.4. del proyecto de ley 7752/2023-PE y del anexo 2 del MINAGRI En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk3/pdf

[442] Ibidem

Finalmente, el crecimiento diferencial en la capacidad de ahorro entre regiones (Costa, Sierra y Selva) subraya la necesidad de un enfoque territorial en la formulación de productos financieros. Esto debe abordarse al diseñar soluciones adaptadas a las condiciones económicas y culturales locales, aumentando la productividad de aquellos clientes del sistema financiero que son productores agrarios y requieren servicios de extensión agraria.[443]

Desde su creación, el Fondo AGROPERU ha pasado por modificaciones y mejoras, siempre en beneficio del pequeño productor agropecuario. Sin embargo, casi 4 años después de estos cambios, el Fondo AGROPERU necesita un mayor impulso para aumentar la atención a los pequeños productores. Al continuar solo con una entidad financiera para las colocaciones (AGROBANCO), no se podrá cumplir con el principal objetivo del Fondo, de incluir más productores y atenderlos con recursos para sus campañas agrícolas, ganaderas y forestales.[444]

La creación de un Fideicomiso busca brindar diferentes opciones a los pequeños productores y que obtengan dichos recursos en el tiempo que necesiten para su inversión o cubrir los gastos generados por sus campañas, mediante mecanismos de financiamiento directo o garantias.[445]

Se propone a COFIDE debido a que es una de las empresas estatales que actúa como Banco de Desarrollo del Perú, ofreciendo servicios de fideicomiso y tiene conocimiento del sector agrario. Además, ha participado en programas impulsados por el Estado, como el FAE AGRO, negociando con entidades financieras tales como cajas, EDPYMES y otras supervisadas por la SBS.[446]

Adicionalmente, COFIDE tiene el "know how" de atender los programas de reactivación económica en el país (Reactiva Perú, FAES, Impulso Myperu, etc.). También, COFIDE

---

[443] Ibidem
[444] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.5.4. del proyecto de ley 7752/2023-PE y del anexo 2 del MINAGRI En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk3/pdf
[445] Ibidem
[446] Ibidem

cuenta con experiencia en el sector forestal, por cuanto administra el Fondo para Bionegocios para las PYMES en el sector amazónico del país.[447]

Y, en el caso del sector agrario, administra el Fondo para la Inclusión del Fondo Pequeño Productor Agrario, así como los fideicomisos con los Gobiernos Regionales Amazónicos en virtud a la Ley 30896 y 30712, incluyendo el apoyo al Gobierno Regional de Ucayali a través del FONDESAM Ucayali con el fondo de garantía para el pequeño productor agropecuario de dicha región.[448]

De igual manera, COFIDE también contribuye al desarrollo de los maricultores en la bahía de Sechura – Piura, con el Fondo FONDEMI II apoyando así a PRODUCE y FONDEPES. Por otro lado, COFIDE fortalece el progreso del sector empresarial con el Fondo de Capital Emprendedor e Innovador (FCEI) y el Fondo de Desarrollo Empresarial Rural (FIDER) con el MEF.[449]

Sobre la implementación del mecanismo de garantías del Fondo AGROPERU
Al cierre de enero del 2024, el Sistema Financiero Peruano atiende a 8,0 millones de deudores (8,009,510), y está conformada por 51 empresas, de las cuales 49 son Empresas de Operaciones Múltiples que atiende al 94.2% y 2 empresas de la Banca Estatal que atiende el 5.8%.[450]

Por sectores económicos, el sector de agricultura, caza y silvicultura participa con 6.5% de un total de S/ 416,178 millones. A fin de calcular el número de créditos a otorgar con la medida, se aplican los siguientes supuestos:

La ratio de morosidad en el sistema financiero al cierre de enero 2024 es de 6.7% para el sector de agricultura, caza y silvicultura, sin embargo, el porcentaje de morosidad en el Fondo AGROPERÚ al cierre del mes de marzo 2024 es de 19.6%. En ese sentido

---

[447] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.5.4 del proyecto de ley 7752/2023-PE y del anexo 2 del MINAGRI En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk3/pdf
[448] Ibidem
[449] Ibidem
[450] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.5.4. del proyecto de ley 7752/2023-PE y del anexo 2 del MINAGRI En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk3/pdf

se estima que el porcentaje de recuperación de recursos del Fondo AGROPERÚ en 75% del saldo colocado.[451]

Las colocaciones de créditos, depende de la disponibilidad de recursos provenientes de la recuperación de saldo de capital de los créditos otorgados en cada campaña de atención y lo intereses generados menos los gastos operativos (que para el caso del sector agrícola en promedio es de dos campañas por año) para el Fondo AGROPERÚ.[452]

Las colocaciones al sector agricultura, caza y silvicultura es S/ 15,279 millones de los cuales la Banca Múltiple participa con el 75.4%.[453]

El monto de recursos disponibles del Fondo AGROPERÚ al cierre del mes de febrero 2024 es de S/ 1,170 millones de los cuales se dispondría de S/ 200 millones para transferir a un fideicomiso para las colocaciones de créditos agrarios (provenientes de los recursos disponibles no colocados del Fondo AGROPERÚ) mediante garantías.[454]

La intervención regulatoria es necesaria para abordar las brechas identificadas en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 en relación con el acceso a servicios de financiamiento y seguros agrarios. El público objetivo de esta intervención serán los pequeños productores agrarios que cumplen con las condiciones establecidas en el Decreto Supremo N.° 010-2021-MIDAGRI.[455]

El problema que se pretende solucionar es la disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores agropecuarios, la brecha de género en la solicitud de créditos y la baja adquisición de seguros agropecuarios. La regulación es urgente para revertir estas tendencias y garantizar la continuidad de las actividades agrarias, evitar

[451] Ibidem
[452] Ibidem
[453] Ibidem
[454] Ibidem
[455] Ibidem

el desabastecimiento en los mercados nacionales y mantener la seguridad alimentaria del país.[456]

La intervención tendrá un impacto significativo en el sector agrario. Con recursos disponibles para colocaciones de créditos individuales de S/ 30 mil soles en promedio, se podría atender a 22,334 créditos en 20 campañas por cada S/ 200 millones de soles, considerando una recuperación de capital del 70%.[457]

Los servicios de extensión agraria pueden desempeñar un papel importante en este contexto, ayudando a los agricultores a tomar decisiones informadas sobre la adopción de tecnologías y prácticas nuevas. Los seguros agrarios, por otro lado, ofrecen protección frente a diversos riesgos que pueden afectar la producción, contribuyendo significativamente a la estabilidad financiera de los pequeños agricultores.[458]

En resumen, la intervención regulatoria propuesta busca promover la colocación de créditos y reducir los impactos de eventos adversos en los pequeños productores que tienen mayor vulnerabilidad. Esto contribuirá a la resiliencia para mantener una seguridad alimentaria en el país y redistribuirá el riesgo y la carga de recuperación entre el sector público y privado. Es una medida necesaria y urgente para garantizar la sostenibilidad del sector agrario en el país.[459]

Esta Comisión recomienda aprobar este aspecto así solicitado en el punto de la materia así solicitado para la delegación de facultades por la colocación de créditos y que reducirán los impactos de eventos adversos en los pequeños productores agrarios que tienen mayor vulnerabilidad. A su vez permitirá la resiliencia para mantener una seguridad alimentaria en el país y redistribuirá el riesgo y la carga de recuperación entre el sector público y privado.

Conclusión

---

[456] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.5.4. del proyecto de ley 7752/2023-PE y del anexo 2 del MINAGRI En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk3/pdf
[457] Ibidem
[458] Ibidem
[459] Ibidem

Este aspecto solicitado se encuentra justificado, aunque debe ser acotado para la delegación de facultades, por lo que se propone el siguiente texto sustitutorio:[460]

"Fortalecer el Fondo AGROPERÚ, mejorando las condiciones de acceso a los servicios financieros agrarios; de acuerdo con:

a) Modificar el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias en beneficio de la actividad agraria, para fortalecer el Fondo AGROPERÚ ampliando su alcance y finalidades, destinando sus recursos a:

a.1. Otorgar financiamiento directo.

a.2. Otorgar garantías.

a.3. Proporcionar servicios de extensión agraria; los cuales son parte de la estructura del financiamiento obtenido por el pequeño productor agrario organizado y son asumidos por este.

a.4. Fomentar la adopción de seguros agrarios implementados por el FOGASA.

b) Modificar el numeral 3.1 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, permitiendo que la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. — COFIDE, se le autorice a administrar los recursos del Fondo AGROPERÚ mediante fideicomisos, y lograr la diversificación de los operadores financieros en el cumplimiento de los fines del Fondo AGROPERÚ."

Pedido de facultades en materia de equilibrio fiscal

[460] En la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2024, producto del debate y aporte de los congresistas de la República, se consideró delegar este punto la facultad en sus términos, por cuanto debe dejarse en claro que además de Agrobanco también COFIDE puedan administrar los recursos del Fondo AGROPERÚ a través de fideicomisos, ello para aprovechar al máximo las capacidades y experiencias de ambas instituciones. AGROBANCO, con su enfoque y expertise en el otorgamiento de créditos directos, puede atender de manera efectiva las necesidades de financiamiento de los pequeños productores agrarios organizados; y, por otro lado, COFIDE, con su capacidad para constituir garantías de gobierno nacional, puede respaldar los créditos que otorgan las instituciones del sistema financiero, proporcionando una mayor seguridad y acceso al financiamiento para estos productores.

3.6.1. Establecer una reducción gradual del déficit fiscal y de la deuda pública, y un crecimiento prudente del gasto público, a través de la modificación de la Ley N° 31541.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La medida planteada por el Poder Ejecutivo, persigue realizar una gradual y ordenada reducción del déficit fiscal y la deuda pública, y alcanzar un crecimiento prudente del gasto público, de tal manera que sean consistentes con la recuperación de la actividad económica y la sostenibilidad fiscal.

Se destaca que la reducción significativa del déficit fiscal del 2.8% del PBI en 2023 al 2.0% del PBI en 2024 podría impactar negativamente en la recuperación de la actividad económica del país en el presente año.

El Poder Ejecutivo advierte que la regla fiscal vigente para 2024 prevista en la ley 31541, indica que el déficit fiscal no puede ser mayor a: 2.0% del PBI en 2024, el déficit fiscal de 2023 tuvo un desvío respecto de su regla fiscal para dicho año. Esto implica que para 2024 se necesita realizar un ajuste fiscal de 0.8 puntos porcentuales del PBI para cumplir con el déficit fiscal del 2.0 % del PBI, conforme a las reglas vigentes.

De acuerdo con lo informado, esto plantea un reto muy exigente puesto que el presupuesto del 2024 se encuentra desbalanceado, debido a que los ingresos fiscales proyectados para este año estarían por debajo de los estimados para la formulación del presupuesto. En este contexto cumplir con la regla fiscal vigente requiere un fuerte ajuste fiscal, particularmente en componentes de gasto menos rígido como la inversión pública que podría comprometer seriamente el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos.

Frente a ello con las medidas Propuestas por el ejecutivo se busca contribuir a mantener la estabilidad macroeconómica del país, la cual es una condición esencial para tener crecimiento económico sostenido, generando un impacto hoy en el bienestar de los ciudadanos.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes mencionadas en esta submateria, pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Para analizar la pertinencia de la delegación solicitada; se debe tener en cuenta que el Poder Ejecutivo persigue modificar las reglas fiscales vigentes la cual define que el déficit fiscal no debe ser mayor a 2,0% del PBI en 2024; a 1,5% del PBI en 2025 y a 1,0% del PBI en 2026. Por su parte, la deuda debe ser menor o igual a 30% del PBI como máximo en el año 2032.

No obstante, la coyuntura nacional y global ha generado un impacto negativo en la actividad económica del país, por lo que, el Poder Ejecutivo:

a. Establecer una trayectoria de reducción gradual del déficit fiscal del SPNF al retorno de su regla fiscal de mediano plazo (1,0% del PBI) y de la deuda pública del SPNF (30% del PBI).

b. Establecer un menor límite a la tasa de crecimiento del gasto corriente de tal manera que sea prudente y consistente con preservar la sostenibilidad fiscal. Actualmente, el Decreto Legislativo N° 1276 indica que el crecimiento real del Gasto Corriente del Gobierno General, sin mantenimiento, no puede superar la tasa de crecimiento real anual de largo plazo de la economía, reducida en 1,0 punto porcentual.

En tal sentido, se propone que dicha reducción ya no sea de 1,0 p.p., sino que sea de 1,5 p.p., lo que implicará una menor tasa de crecimiento del gasto corriente. Según el artículo

7 del Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero[461], las modificaciones de las reglas fiscales de manera excepcional deben ser remitidas al Congreso de la República a través de Proyecto de Ley, como se aprecia a continuación:

"Artículo 7. Cláusulas de excepción

> 7.1 Las reglas macrofiscales señaladas en el artículo 6 son de obligatorio cumplimiento y pueden ser modificadas de manera excepcional en los casos de desastre o de choque externo significativos, que afecten los ingresos, o cuando la actividad económica por factores exógenos requiera modificar el resultado económico. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo remite al Congreso de la República el proyecto de ley correspondiente. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas publica, excepcionalmente, en su portal institucional un informe con la actualización de las principales variables macroeconómicas y fiscales del Marco Macroeconómico Multianual por un periodo de cuatro (4) años, que comprende el año para el cual se está elaborando el presupuesto del sector público y al menos los tres (3) años siguientes. En dicho informe se actualiza la información respecto de los literales b), c) y e) del artículo 12. El informe se hace de conocimiento del Consejo de Ministros.
>
> 7.2. La modificación temporal referida en el párrafo precedente debe establecer explícitamente el retorno gradual al conjunto de reglas establecidas en el artículo 6. [...]"

Asimismo, el Consejo Fiscal indica que la modificación de las reglas fiscales se considera una buena práctica, pero debe de incorporarse como parte del proceso al Parlamento[462]. En ese sentido, las modificaciones correspondientes, requieren ser canalizadas, mediante un Proyecto de Ley y debe ser debatidas en el Congreso de la República. En tal sentido, coincidiendo con lo recomendado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e

---

[461] Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero. Artículo 7.

[462] OECD (2023), "OECD Best Practices for Parliaments in Budgeting". Disponible en: https://read.oecdilibrary.org/governance/oecd-best-practices-for-parliaments-in-budgeting_33109e15-en#page4

Inteligencia Financiera, de fecha 1 de junio de 2024[463], por lo que NO correspondería delegar las facultades en esta materia.

Conclusión

De todo lo expuesto se advierte que, no es pertinente el otorgamiento de facultades en esta materia, dado que se advierte, que es necesario un mayor estudio y discusión del tema en el Congreso de la República, como Asamblea Nacional. En tal sentido, esta Comisión concluye que NO se debe brindar las facultades solicitadas en este extremo, y que, una medida de esta naturaleza debe ser discutida a través de un Proyecto de Ley

3.6.2. Fortalecer la gestión fiscal subnacional modificando las disposiciones establecidas por el Decreto Legislativo N° 1275 y Decreto Legislativo N° 955; estableciendo disposiciones para la optimización del proceso de distribución de recursos determinados; y modificando las disposiciones que regulan el Catastro Fiscal, regulados por el Decreto Legislativo N°1557 y su vinculación al Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM), a fin de mejorar la gestión de los ingresos locales.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
Se ha identificado como problemática que el decreto legislativo 1275 no ha establecido un límite en el endeudamiento de los gobiernos subnacionales que están exceptuados del cumplimiento de la regla fiscal cuándo presentan una calificación crediticia.

Las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales se regulan por el decreto legislativo 1275 el mismo que requiere ser modificado a fin de poder delimitar el endeudamiento de los gobiernos subnacionales que están exceptuados cuando presentan una calificación crediticia. Además se busca establecer que el ministerio de economía y finanzas brinde el apoyo técnico necesario a las municipalidades para mejorar su gestión fiscal.

[463] INFORME SOBRE MATERIAS ESPECÍFICAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, de fecha 1 de junio de 2024. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

Asimismo se ha verificado que los procedimientos y criterios y actividades relacionados a la distribución de recursos de los gobiernos regionales y locales no son claros. Debido a que el marco normativo que regula las transferencias de recursos determinados a los gobiernos subnacionales es muy disperso, hoy y esta situación complejiza su comprensión por parte de las autoridades subnacionales al momento de aplicarlos. Entre estos recursos se encuentra el fondo de compensación municipal (FONCOMUN).

Por otro lado se tiene que las municipalidades tienen un limitado acceso a tecnologías que permitan automatizar la gestión tributaria. De acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades, RENAMU, hoy solo el 45% cuentan con sistemas digitales para registrar sus ingresos tributarios, lo que impacta negativamente en la recaudación de sus tributos, el registro de deudas y la cobranza. Por ende para mejorar, la atención de sus ciudadanos con mejores servicios de otro lado el marco normativo.

Otro punto mencionado, es el correspondiente al marco normativo del catastro fiscal, que requiere establecer disposiciones que garanticen la articulación de actores y procesos relacionados a predios para su actualización.

En tal sentido con la medida se busca dotar de un marco normativo que regule el sistema de recaudación tributaria municipal por parte del MEF, a fin de que sea implementado de manera obligatoria en todas las municipalidades del país de forma gratuita lo que permitirá digitalizar la gestión de los ingresos locales. Asimismo se requiere establecer el esquema de gobernanza del catastro fiscal definiendo su articulación con los gobiernos locales lo que implica convertirlo en un sistema funcional.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes mencionadas en esta submateria, pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Como se puede apreciar, la medida propuesta por el poder ejecutivo engloba diferentes modificaciones que apuntan a distintos objetivos; algunas de las cuales requieren que se tome en consideración las opiniones de los gobiernos subnacionales, por lo que a criterio de esta comisión deberían ser canalizadas a través de un proyecto de ley.

Sin perjuicio de ello, se considera que la medida relativa a la optimización de la distribución del fondo de compensación municipal FONCOMUN, podría ser viable; puesto que esta medida está destinada ha mejorar la gestión de las finanzas de los gobiernos locales, hoy lo que tiene un impacto directo en el ciudadano a través de una mejor distribución de los recursos propios de los gobiernos subnacionales; hoy y esto podría traer como consecuencia mejora en la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

Del mismo modo, se ha verificado que la medida propuesta no requiere financiamiento adicional ya que cuenta con recursos para su desarrollo e implementación en todo el país.

Adicionalmente, lo propuesto coincide con lo recomendado por Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, de fecha 1 de junio de 2024[464], que concluye que: "es importante adecuar el marco normativo para permitir una distribución más oportuna de los recursos determinados a los gobiernos regionales y locales [...] En ese sentido, la Comisión considera que sobre este numeral se podría delegar facultades parcialmente [...]"

Conclusión

[464] INFORME SOBRE MATERIAS ESPECÍFICAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, de fecha 1 de junio de 2024. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento, de manera parcial, de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar los Decretos Legislativos 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y, 955, Decreto Legislativo de Descentralización Fiscal; con la finalidad de establecer medidas orientadas a la optimización del proceso de distribución de recursos determinados respecto únicamente del FONCOMUN, a fin de fortalecer la gestión fiscal subnacional".

3.6.3 Modificar el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, a fin de consolidar la integración intersistémica y extrasistémica de los procesos de la Administración Financiera del Sector Público a través de una gestión centralizada del Sistema Integrado de la Administración Financiera de los Recursos Públicos.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo fundamenta en este extremo la delegación de facultades solicitada en que el Sistema Integrado de la Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) operativiza todos los procesos y procedimientos de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP), como son: Programación de Recursos Públicos, Gestión de Recursos Públicos y Evaluación de la Gestión de los Recursos Públicos, los cuales se rigen por los principios de responsabilidad fiscal y sostenibilidad fiscal, entre otros, conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; por lo que resulta necesario que se dote de autonomía a su gestión centralizada a través de una norma con rango de ley.

Asimismo, el Poder Ejecutivo esgrime que existe la necesidad y urgencia para la emisión del Decreto Legislativo, sustentando que, a la fecha, se encuentran en ejecución, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los proyectos de

inversión "Mejoramiento de la Administración Financiera del Sector Público a través de la Transformación Digital" y "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento Público de Bienes, Servicios y Obras", por lo que se requiere contar con el órgano de línea que pueda centralizar y desarrollar los requerimientos digitales y de tecnología de los procesos de la AFSP que se circunscriben a la administración pública, y que están directamente vinculados con el equilibrio fiscal.

De igual forma, indica que la OCDE recomienda fortalecer la interoperabilidad de los procesos de los conformantes de la AFSP; consolidando dichas funciones en un solo órgano o unidad orgánica del MEF, a fin de asegurar una gestión centralizada del SIAF-RP, compatibilizando ello con lo previsto en las leyes que regulan los sistemas administrativos.

Por todo lo expuesto, el Poder Ejecutivo justifica que requiere contar con un órgano de línea en el Ministerio de Economía y Finanzas en su calidad de rector de los conformantes de la AFSP, para la gestión centralizada del SIAF-RP, que permita la aplicabilidad de los estándares internacionales y generar la información que facilite la gestión y toma de decisiones de las entidades, en el marco del equilibrio fiscal, considerando, cuando corresponda los lineamientos del Sistema de Transformación Digital.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación del Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Publico puede ser delegable, siempre y cuando no modifique la Constitución Politica, las leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la Ley de Presupuesto o la Cuenta General de la República.
En ese sentido, y de la lectura tanto de la fórmula legal sobre este acápite y de la exposición de motivos, esta comisión verifica que se pretende modificar la Programación de Recursos Públicos, Gestión de Recursos Públicos y Evaluación de la Gestión de los Recursos Públicos, los que se rigen conforme a lo establecido al Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Esta propuesta planteada por el Poder Ejecutivo no modifica leyes orgánicas ni normas relacionadas al marco legal presupuestal, ni tampoco versan sobre tratados internacionales, siendo constitucional su delegación.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada
La comisión ha analizado las justificaciones que el Poder Ejecutivo ha alcanzado, así como el informe vertido por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas, e Inteligencia Financiera del Congreso, que en sus hojas numero 23 y 24 indican lo siguiente:

> "En ese sentido, se requiere contar con un órgano de línea en el Ministerio de Economía y Finanzas en su calidad de rector de los conformantes de la AFSP, para la gestión centralizada del SIAF-RP, que permita la aplicabilidad de los estándares internacionales y generar la información que facilite la gestión y toma de decisiones de las entidades, en el marco del equilibrio fiscal, considerando, cuando corresponda los lineamientos del Sistema de Transformación Digital. La Comisión considera que por ser una materia tan específica compete delegar facultades sobre el presente numeral."

De lo expuesto, esta colegiado hace suya la posición vertida por la comisión antes citada, encontrando viable la pertinencia de la delegación de facultades en este extremo.

Conclusión
Por las consideraciones antes expuestas, esta comisión encuentra justificado otorgar facultades legislativas sobre esta materia al Poder Ejecutivo en sus mismos términos.

3.6.4. Consolidar el marco normativo vigente a fin de fortalecer la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, así como regular sobre la asignación y utilización eficientes de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, la Planilla Única del Sector Público, la incorporación del proceso de Planificación de Recursos Humanos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos al ámbito de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público; y, otros aspectos relacionados con la gestión fiscal de los recursos humanos, en el marco de la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo fundamenta en este extremo la delegación de facultades legislativa solicitada en que la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, en el marco de la administración financiera del sector público, regula: (i) los ingresos correspondientes a los recursos humanos, (ii) la Planilla Única del Sector Público, entre otros; sin embargo, no cuenta con una norma de carácter permanente, consolidada e integrada que permita gestionar de manera eficiente, intersistémica y bajo los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público.

También señala que, considerando que el gasto público en personal se ha incrementado de manera importante en los últimos 10 años, se deben emitir disposiciones sobre la planificación de recursos humanos en el sector público. En consecuencia, se requiere una norma con rango de ley que permita consolidar en un único cuerpo normativo, con las adecuaciones que resulten necesarias, las disposiciones referidas a la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público contenidas en otras normas con rango de ley.

Como información adicional, El Poder Ejecutivo esgrime que el gasto público en materia de ingresos correspondiente a los recursos humanos del Sector Público representa una fracción importante en la estructura del gasto total del Estado, el mismo que en los últimos 10 años se ha visto incrementado en un 87,7% pasando de S/ 50 796 millones a S/ 95 360 millones, para las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional.

Asimismo, en el caso de los ingresos de personal activo y CAS, en los últimos 5 años, desde el 2018 al 2023, su gasto se ha incrementado en S/ 19 303 millones, monto que en un 70% responde al pago de mayores ingresos, y un 30% a la contratación de 87 957 nuevos trabajadores (0,8% PBI).

En ese contexto, el Poder Ejecutivo sustenta que la medida propuesta contribuiría en la implementación real y efectiva del sistema administrativo de gestión de recursos humanos a través del fortalecimiento de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público; siendo el principal beneficiario el Estado, dado que, a partir de la implementación del proceso de planificación de recursos humanos, se podrá conocer el número de servidores necesarios en el sector público, permitiendo identificar y cubrir la brecha de personal, de modo progresivo, garantizando la sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación del marco jurídico relacionado a la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, así como regular sobre la asignación y utilización eficientes de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, la Planilla Única del Sector Público, la incorporación del proceso de Planificación de Recurso Humanos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos al ámbito de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector, puede ser delegable, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, las leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la Ley de Presupuesto o la Cuenta General de la República.

En ese sentido, y de la lectura tanto de la fórmula legal y de la exposición de motivos, esta comisión verifica que no se trata de leyes orgánicas, ni normas relacionadas al marco legal presupuestal, ni tampoco versa sobre tratados internacionales, siendo constitucional su delegación.

Por tanto, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada
La comisión ha analizado las justificaciones que el Poder Ejecutivo ha alcanzado, así como el informe vertido por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas, e Inteligencia Financiera del Congreso, que en su hoja número 24 indica lo siguiente:

> "[...] La solicitud de facultades permitirá consolidar en un único cuerpo normativo, con las adecuaciones que resulten necesarias, las disposiciones referidas a la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público contenidas en otras normas con rango de ley. En ese sentido, La Comisión considera que por ser una materia tan específica compete delegar facultades sobre el presente numeral [...]."

De lo expuesto, este colegiado hace suya la posición vertida por la comisión antes citada, encontrando viable la pertinencia de la delegación de facultades en este extremo; siempre y cuando no se modifique las disposiciones sobre las materias contenidas en la Ley de Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento Público vigentes.

Conclusión
Por las consideraciones antes expuestas, esta comisión encuentra justificado otorgar facultades legislativas sobre esta materia al Poder Ejecutivo. Es así, que sugiere el siguiente texto sustitutorio para mejor su redacción:

"Consolidar el marco normativo vigente para fortalecer la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, así como regular sobre la asignación y utilización eficientes de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes de los recursos humanos del sector público, la planilla única del sector público, la incorporación del proceso de planificación de recursos humanos del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos al ámbito de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público; y otros aspectos relacionados con la gestión fiscal de los recursos humanos, en el marco de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Ello sin modificar las disposiciones sobre las materias contenidas en la Ley de Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento Público vigentes".

3.6.5	**Establecer disposiciones para la negociación colectiva en el Sector Público, que considere la capacidad financiera del Estado y garantice un manejo fiscal sostenible; así como, asegure que las medidas que se aprueben en los diversos niveles de negociación sean transversales a todos los trabajadores del respectivo ámbito, evitando diferencias entre trabajadores de un mismo régimen de contratación, debiendo aplicarse también en la emisión de laudos arbitrales de índole laboral.**

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El artículo 4 de la Ley N° 31188, conocida como Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, establece que las entidades del sector público pueden negociar colectivamente todo tipo de condiciones laborales y de empleo. Esto incluye salarios y otras condiciones laborales con impacto económico, así como todos los aspectos relacionados con las relaciones entre empleadores y trabajadores, y entre las

organizaciones de empleadores y trabajadores. La ley contempla dos niveles de negociación colectiva en el sector público: uno a nivel centralizado y otro a nivel descentralizado.[465]

En el nivel descentralizado, se han firmado varios convenios colectivos con acuerdos económicos durante los procesos de negociación colectiva de 2022 y 2023 en el ámbito de la entidad pública. Estos acuerdos han tenido un impacto fiscal significativo. De hecho, los acuerdos económicos de los procesos de negociación colectiva de 2022-2023 ascendieron a S/ 1 926 millones anuales, de los cuales solo el 3,2% estaba financiado de acuerdo con el espacio fiscal asignado. En los procesos de 2023-2024, los acuerdos económicos ascendieron a S/ 1 178 millones anuales, de los cuales solo el 2,2% estaba financiado. Esto significa que estos convenios colectivos están desfinanciados en un 97%.[466]

Además, se descubrió que en los convenios colectivos a nivel descentralizado por entidad pública, se acordaron condiciones laborales o de empleo con impacto económico que corresponden a montos con pagos mensuales, periódicos y únicos. El monto de los acuerdos de naturaleza permanente es mayor, generando un impacto fiscal multianual (incluso más allá de 2027), lo que reduce el espacio para aumentos de este tipo de gasto. En tres años o más, llega a un monto de S/ 524 millones anuales. De la misma manera, en 2023, se acordaron condiciones laborales o de empleo con impacto económico, con montos permanentes que se aplican durante un periodo de 3 años o más, ascendiendo a S/ 567 millones anuales; lo que en total asciende a S/ 1 091 millones anuales.[467]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia económica y laboral pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

---

[465] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.6.5. del proyecto de ley 7752/2023-PE
[466] Ibidem
[467] Ibidem

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La necesidad de intervención regulatoria en este caso surge de la problemática identificada en los procesos de negociación colectiva en el sector público. Según la Ley N° 31188, la negociación colectiva puede abarcar todas las condiciones de trabajo y empleo, incluyendo las remuneraciones y otras condiciones con impacto económico. Sin embargo, se ha observado que los convenios colectivos suscritos durante los años 2022 y 2023 han generado un impacto fiscal significativo, con acuerdos económicos que superan los S/ 1 926 millones anuales, de los cuales solo el 3,2% cuenta con financiamiento.[468]

La urgencia de la regulación radica en la necesidad de garantizar un manejo fiscal sostenible y considerar la capacidad financiera del Estado. Los acuerdos económicos de los procesos de negociación colectiva 2023-2024 ascienden a S/ 1 178 millones anuales, de los cuales solo el 2,2% tiene financiamiento. Esto implica que estos convenios colectivos están desfinanciados en un 97%, lo que representa un riesgo para la estabilidad fiscal del Estado.[469]

El impacto de esta regulación en el sector correspondiente sería significativo. Permitiría establecer disposiciones para la negociación colectiva que sean transversales a todos los trabajadores del respectivo ámbito, evitando diferencias entre trabajadores de un mismo régimen de contratación. Además, se aplicaría también en la emisión de laudos arbitrales de índole laboral.[470]

---

[468] Del anexo 2 del punto 3.6.5 suscrito por Rossana Portocarrero Méndez Directora de la Dirección de Personal Activo del MEF. En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk2/pdf

[469] Del anexo 2 del punto 3.6.5 suscrito por Rossana Portocarrero Méndez Directora de la Dirección de Personal Activo del MEF En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk2/pdf

[470] Del anexo 2 del punto 3.6.5 suscrito por Rossana Portocarrero Méndez Directora de la Dirección de Personal Activo del MEF En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk2/pdf

Por último, se identificó que en los convenios colectivos a nivel descentralizado, se pactaron condiciones de trabajo o de empleo con incidencia económica que corresponden a montos con pagos mensuales, periódicos y únicos. El monto de acuerdos de naturaleza permanente es mayor, generando un impacto fiscal multianual, lo que resta espacio para incrementos de este tipo de gasto. En tres años o más, llega a un monto de S/ 524 millones anuales. En 2023, se pactaron condiciones con montos permanentes que se aplican durante un período de 3 años o más, ascendiendo a S/ 567 millones anuales; lo que en total asciende a S/ 1 091 millones anuales. Esta situación subraya la necesidad de una intervención regulatoria para garantizar un manejo fiscal sostenible.[471]

Por Carta de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú – CITE de fecha 17 de mayo de 2024 suscrita por Winston Huamán Henriquez y otros Secretarios Generales colegiados manifiestan que el proyecto de ley en el punto materia de análisis modificaría la Ley 31188 norma que costo a la clase trabajadora 45 años de perseverante lucha y gestión para su promulgación e implementación, por lo que se estaria vulnerando su derecho de negociación colectiva. Por lo que solicitan que el Poder Ejecutivo no vulnere su derecho fundamental de negociación colectiva.

Por Oficio 2033-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas, e Inteligencia Financiera de fecha 6 de junio de 2024 suscrito por Cesar Manuel Revilla Villanueva presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera expresa que en los procesos de negociación colectiva 2022-2023, se evidenciaron acuerdos con incidencia económica por S/.1926 millones anuales, de los cuales solo el 3.2% cuenta con financiamiento conforme al espacio fiscal asignado. Mientras que en los procesos 2023-2024, se evidencia acuerdos con incidencia económica por 1178 millones anuales, de los cuales solo el 2.2% tiene financiamiento. Lo que implica que dichos convenios colectivos se encuentran desfinanciados en un 97%. En ese sentido, es necesario considerar la capacidad financiera del Estado y garantizar un manejo fiscal sostenible por lo que la Comisión

[471] Del anexo 2 del punto 3.6.5 suscrito por Rossana Portocarrero Méndez Directora de la Dirección de Personal Activo del MEF En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk2/pdf

considera que por ser una materia tan especifica compete delegar facultades sobre el presente numeral.

Esta Comisión recomienda aprobar este aspecto asi solicitado en el punto de la materia para la delegación de facultades porque permitirá que se respete el principio de equilibrio presupuestario , se considere la capacidad financiera del Estado y se garantice un manejo fiscal sostenible, a través de la emisión del Informe Final de Estado Situacional de la Administración Financiera del Sector Público y el informe de viabilidad presupuestaria. Además orientará que las medidas con incidencia económica que se aprueben en al negociación colectiva sean transversales a todos los trabajadores del respectivo ámbito, evitando diferencias entre trabajadores de un mismo régimen de contratación.

Conclusión

Este aspecto solicitado se encuentra justificado, aunque debe ser acotado para la delegación de facultades, por lo que se propone el siguiente texto sustitutorio:[472]

"Establecer y modificar disposiciones sobre negociación colectiva en el Sector Público, que apliquen los principios de previsión y provisión presupuestal, que consideren la capacidad financiera del Estado y garanticen un manejo fiscal sostenible; y que asegure que las medidas que se aprueben en los diversos niveles de negociación sean transversales a todos los trabajadores del respectivo ámbito, evitando diferencias entre trabajadores de un mismo régimen de contratación, estas disposiciones deben aplicarse también en la emisión de laudos arbitrales de índole laboral".

[472] En la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2024, producto del debate y aporte de los congresistas de la República, se consideró retira el punto 3.6.5 del proyecto de ley 7752/2023-PE sobre delegación de facultades, por cuanto el propio Estado vulnero inconstitucionalmente el ejercicio de derecho a la negociación colectiva a través de medidas arbitrarias como en la ley SERVIR. En el mismo sentido señala que el Tribunal Constitucional Peruano desde el año 2015 ha señalado como inconstitucionales varias medidas que restringen el ejercicio de negociación colectiva tanto a la Ley de Presupuesto como la Ley Servir. Asimismo, ratifica el retiro de este punto de esta delegación de facultades por cuanto atenta contra los derechos laborales de los trabajadores del sector público.

3.6.6. Establecer disposiciones para la implementación progresiva del tránsito al régimen del servicio civil en coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme a los principios de equilibrio y programación presupuestaria, a las reglas macrofiscales y a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal de la Administración Financiera del Sector Público.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Decreto Legislativo N° 1602 busca facilitar la transición de las entidades y sus servidores al régimen del Servicio Civil, que se rige por la Ley N° 30057. Esta norma tiene como objetivo que los puestos de los servidores de confianza y de los directivos públicos sean los primeros en pasar al nuevo régimen, prohibiendo la contratación de estos servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057 una vez aprobado el CPE. No obstante, esta norma no ha tenido en cuenta que su implementación implica un gasto en el presupuesto institucional de las entidades públicas, que no ha sido programado en el ejercicio fiscal actual, generando así una demanda de recursos adicionales al Tesoro Público.[473]

La transición al régimen del Servicio Civil en las entidades del Poder Ejecutivo, bajo las disposiciones del Dec. Leg. 1602, conlleva un costo diferencial estimado de hasta S/ 375 millones anuales para los directivos públicos y un costo diferencial de hasta S/ 2 523 millones anuales para financiar la transición de los servidores civiles de carrera y de actividades complementarias.[474]

La propuesta normativa ayuda a la implementación efectiva y sostenible del régimen del servicio civil regulado por la Ley N° 30057, y también establece un marco legal que permite a las entidades públicas continuar su gestión. Esto se logra autorizando la contratación de servidores de confianza y de directivos públicos en el régimen laboral

[473] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.6.6. del proyecto de ley 7752/2023-PE
[474] Ibidem

que corresponda a la entidad (Dec. Leg. 276, Dec. Leg. 728, Dec. Leg. 1057 y Ley 30057) hasta que la entidad disponga de los recursos suficientes, según su programación multianual de presupuesto, para la transición de dichos puestos al régimen del servicio civil.[475]

Además, la propuesta busca permitir el movimiento de los servidores civiles entre entidades que han implementado el régimen del servicio civil y aquellas que aún no lo han implementado o que no implementan dicho régimen. Esto permitirá superar la limitación actual que enfrentan las entidades para gestionar sus recursos humanos. Asimismo, la propuesta busca establecer el efecto suspensivo de los recursos de apelación contra los resultados finales o los resultados que impiden continuar con los concursos públicos de méritos bajo el régimen del servicio civil. Con esta medida, la vinculación debe materializarse una vez que los resultados se hayan convertido en cosa decidida, evitando complicaciones en la operatividad de la ejecución de los resultados de dichos concursos.[476]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia económica y laboral pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

[475] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.6.6. del proyecto de ley 7752/2023-PE

[476] Del anexo 2 del punto 3.6.5 suscrito por Rossana Portocarrero Méndez Directora de la Dirección de Personal Activo del MEF En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk2/pdf

El análisis de la necesidad de intervención regulatoria se centra en la problemática de la transición al régimen del servicio civil, regulado por la Ley N° 30057. Esta transición, promovida por el Decreto Legislativo N° 1602, implica un gasto significativo en el presupuesto institucional de las entidades públicas, generando una demanda de recursos adicionales al Tesoro Público.[477]

La implementación de esta transición en las entidades del Poder Ejecutivo, bajo las disposiciones del Dec Leg 1602, conlleva un costo diferencial aproximado de hasta S/ 375 millones anuales para directivos públicos y un costo diferencial de hasta S/ 2 523 millones anuales para financiar el tránsito de los servidores civiles de carrera y de actividades complementarias.[478]

La propuesta normativa busca contribuir a una implementación real y sostenible del régimen del servicio civil, estableciendo un marco legal que permita a las entidades públicas continuar su gestión mientras se realiza la transición. Esto se logra autorizando la contratación de servidores de confianza y de directivos públicos en el régimen laboral que corresponda a la entidad (Dec. Leg. 276, Dec. Leg. 728, Dec. Leg. 1057 y Ley 30057) hasta que la entidad cuente con los recursos suficientes para el tránsito al régimen del servicio civil.[479]

Además, la propuesta busca autorizar el desplazamiento de los servidores civiles entre entidades que han implementado el régimen del servicio civil y las que aún no lo han hecho, superando así la limitación actual que enfrentan las entidades para gestionar sus recursos humanos. También se propone establecer el efecto suspensivo de los recursos de apelación contra los resultados finales de los concursos públicos de méritos bajo el régimen del servicio civil, evitando complicaciones en la ejecución de los resultados de estos concursos.[480]

---

[477] Del anexo 2 del punto 3.6.5 suscrito por Rossana Portocarrero Méndez Directora de la Dirección de Personal Activo del MEF En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk2/pdf

[478] Del anexo 2 del punto 3.6.5 suscrito por Rossana Portocarrero Méndez Directora de la Dirección de Personal Activo del MEF En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk2/pdf

[479] Del anexo 2 del punto 3.6.5 suscrito por Rossana Portocarrero Méndez Directora de la Dirección de Personal Activo del MEF En: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Njk2/pdf

[480] Ibidem

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

Por Oficio 2033-2023-2024-CMRV-CEBFIF-CR de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas, e Inteligencia Financiera de fecha 6 de junio de 2024 suscrito por Cesar Manuel Revilla Villanueva presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera expresa que el proyecto de ley 7752/2023-PE señala que el Decreto Legislativo 1602 tiene como objeto promover el tránsito de entidades y de los servidores al régimen del Servicio Civil regulado por Ley 30057. Sin embargo, dicha norma no ha considerado que su implementación conlleva un gasto en el presupuesto institucional de las entidades públicas que no ha sido programado en el presente ejercicio fiscal, generando así demanda de recursos adicionales al tesoro público. Asimismo, el Proyecto de Ley señala que, implementar el transito al régimen del servicio civil, en las entidades del Poder Ejecutivo, bajo las disposiciones del Decreto Legislativo 1602, implica un costo diferencial aproximado de hasta 375 millones anuales para directivos públicos, y un costo diferencial de hasta 2523 millones anuales para financiar el transito de los servidores civiles de carrera y de actividades complementarias.

En atención a estos argumentos, que pretendería que de manera desordenada se desplacen servidores civiles sin los regímenes debidamente autorizados, es que esta Comisión considera que no corresponde que el Congreso de la República delegue las facultades solicitadas en este punto, asimismo, al tratarse de un tema especializado que, implica el debate social de diversos actores sociales, sectores y niveles de gobierno; esta Comisión considera que lo más adecuado es que esta propuesta sea canalizada a través de un proyecto de ley que implique un estudio y debate más profundo al interior del Congreso de la República escuchando especialistas tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Por lo tanto, no es pertinente que sea tramitado a través de una delegación de facultades.

Conclusión

Por lo expuesto esta Comisión recomienda no otorgar facultades en este extremo. Esta solicitud debe ser canalizada a través de un proyecto de ley y debe ser determinada de una forma más precisa, para permitir un amplio debate con diversos actores sociales, sectores, y niveles de gobierno en el Pleno del Congreso de la República.

3.6.7 Actualizar el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y el Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público para: (i) dotar de autonomía a la Gestión de Riesgos Fiscales; (ii) actualizar los aspectos operativos y reglas para la Gestión de Tesorería, la homogenización de conceptos relacionados con la constitución de fondos y/o fideicomisos, entre otras mejoras; y, (iii) optimizar la gestión de la recuperación de las honras de aval, a través de la implementación de mecanismos para la recuperación de créditos u obligaciones impagas, honradas por el Gobierno Nacional, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y otras normas con rango de Ley

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Ejecutivo solicita delegación de facultades sobre el presente punto sosteniendo que se requiere fortalecer el marco regulatorio de la gestión de los Recursos Públicos de Administración Financiera del Sector Público, impulsar acciones orientadas a una mayor eficiencia en la gestión de los Fondos Públicos, lo cual a su vez contribuirá a mejorar la implementación de políticas públicas; y a la optimización en la gestión de la recuperación de las honras de aval[481].

Para lo cual planeta modificar el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, a fin de fortalecer la legislación del proceso de Gestión de los Recursos Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, en cuanto a aspectos relativos a la Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público y de la Gestión de Tesorería, excluyendo la Gestión de Riesgos Fiscales de las atribuciones de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), las cuales serán asumidas por un nuevo órgano de línea en el MEF.

También propone actualizar el Decreto Legislativo N° 1441, en lo relacionado con los aspectos operativos y reglas para la Gestión de Tesorería, la homogenización de conceptos

[481] P.L. 07752-2024-PE, p. 134. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

relacionados con la constitución de fondos y/o fideicomisos, entre otras mejoras para una mejor consistencia de la regulación.

Así como modificar el Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, con la finalidad de optimizar la gestión de la recuperación de las honras de aval, a través de la implementación de mecanismos para la recuperación de créditos u obligaciones impagas, honradas por el Gobierno Nacional, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y otras normas con rango de Ley.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, la modificación de leyes relativas a la presente submateria puede ser delegada, y advirtiéndose que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta submateria.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Con relación al presente punto sostiene el Ejecutivo para pedir delegación de facultades que requieren fortalecer la regulación de la gestión de los Recursos Públicos de Administración Financiera del Sector Público, así como implementar acciones para darle mayor eficiencia a la gestión de los Fondos Públicos. A fin de contribuir con mejorar la implementación de políticas públicas; y a la optimización en la gestión de la recuperación de las honras de aval.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que las regulaciones del Sistema Nacional de Tesorería y del Sistema Nacional de Endeudamiento Público se encuentran contenidas en el Decreto Legislativo N° 1441 y en el Decreto Legislativo N° 1437, respectivamente, por lo tanto, cualquier variación en dichos extremos debe efectuarse mediante norma con rango de Ley. Asimismo, la necesidad y urgencia para la emisión del Decreto Legislativo se sustenta en fortalecer el marco regulatorio de la gestión de los Recursos Públicos de Administración Financiera del Sector Público y, de tal manera, impulsar acciones orientadas a una mayor

eficiencia en la gestión de los Fondos Públicos, lo cual a su vez contribuirá a mejorar la implementación de políticas públicas; y a la optimización en la gestión de la recuperación de las honras de aval. Por lo que la Comisión considera que por ser una materia tan específica compete delegar facultades sobre el presente numeral.

Con la presente solicitud de delegación de facultades el Ejecutivo pretende alcanzar mejor asignación de fondos públicos para atender las necesidades sociales, asimismo viabilizará las recomendaciones de la OCDE sobre la creación de una unidad independiente responsable de la gestión de riesgos fiscales. En suma, con la presente medida buscan impulsar la eficiencia de la gestión de los fondos públicos, recuperación de obligaciones honradas por el tesoro público. En esta dirección, la submateria solicitada es idónea para el equilibrio fiscal y es específica.

Conclusión

Con relación al presente punto corresponde se otorgue la delegación solicitada con el siguiente texto sustitutorio:[482]

"Actualizar el Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y el Decreto Legislativo 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público para: (i) dotar de autonomía a la Gestión de Riesgos Fiscales; (ii) actualizar los aspectos operativos y reglas para la Gestión de Tesorería, la homogenización de conceptos relacionados con la constitución de fondos y/o fideicomisos; y, (iii) optimizar la gestión de la recuperación de las honras de aval, a través de la implementación de mecanismos para la recuperación de créditos u obligaciones impagas, honradas por el Gobierno Nacional, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento Público".

Pedido de facultades en materia tributaria

[482] En la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria del 11 de junio de 2024, se recogió el aporte de la congresista María del Carmen Alva Prieto, respecto a incluir en el marco normativo de la materia delegada recaída en el punto 2.6.4 del texto sustitutorio del presente predictamen, al Decreto Legislativo 1455, Decreto que crea el Programa "Reactiva Perú" para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del Covid-19.

3.7.1. Regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, para lo cual se propone:

a) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a fin de:

a.1) Establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda, lo que incluye principalmente modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad, y las reglas sobre el lugar de imposición en el país, conforme con el principio de destino, siguiendo entre otros criterios las recomendaciones establecidas por la OCDE.

a.2) Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.

b) Modificar la Ley N° 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, a fin de:

b.1) Establecer que el titular de una autorización para la explotación de plataformas tecnológicas de los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia puede entregar bonificaciones de bienvenida o similares, siempre que no se permita su cambio por dinero hasta el cumplimiento de una condición o vencimiento establecido por el titular, las cuales deben ser utilizadas para apostar en los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia.

b.2) Señalar que la información contable registrada en las plataformas para la determinación de la base imponible debe ser acorde a las normas contables oficializadas o aprobadas por el órgano competente del país del sujeto que explote las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

b.3) Perfeccionar el mecanismo de recaudación del impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia.

b.4) Establecer las reglas de tipo de cambio y de huso horario de las operaciones y obligaciones tributarias, respectivamente.

b.5) Establecer, para el caso personas jurídicas constituidas en el exterior, las reglas de imposición en el país.

b.6) Regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior que exploten las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

c) Modificar la Ley N° 29774, Ley que complementa la normativa sobre la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, a fin de reducir el monto aplicable a la importación de bienes de bajo valor, así como dictar las disposiciones necesarias que permitan su adecuada recaudación y control.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La solicitud de delegación de facultades del Ejecutivo en la presente submateria se engloba en el marco de la economía digital, la que ha configurado los modelos de negocio para la comercialización de bienes y la prestación de servicios mediante el intangible tecnológico, por el cual proveedores y consumidores interactúan en el mercado global sin presencia física, por medio digitales, plataformas digitales, de modo directo (marketplaces)[483].

El Ejecutivo plantea la solicitud de facultades para modernizar el sistema tributario en el contexto de la economía digital. Uno de los impuestos que se solicita que se adecue a la economía digital es el IGV a operaciones transfronterizas que se vincula a entidades no domiciliadas en el país con actividad empresarial, las mismas que, a diferencias de las domiciliadas en el Perú, no se encuentran obligadas a aplicar el IGV. El Ejecutivo reconoce

[483] P.L. 07752-2024-PE, p. 135. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

que las operaciones comerciales transfronterizas que se realizan por intermedio de internet se encuentran dentro del ámbito de aplicación de impuesto, la normatividad vigente no permite recaudar la tributación efectiva de estas operaciones, específicamente el bien o servicio digital se comercializa por un sujeto no domiciliado, de modo directo o por intermedio de plataformas digitales, para lo cual, solicita facultades el Ejecutivo a fin de contar con un mecanismo que permita la tributación del IGV para la prestación de servicios y para la venta de bienes. Asimismo, afirma el Ejecutivo que la propuesta se enmarca dentro de las medidas tributarias que se deben cumplir para ser miembro de la OCDE[484].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, y la interpretación vinculante establecida en materia financiera y tributaria del Tribunal Constitucional, la modificación de leyes relativas a temas tributarios puede ser delegado, y advirtiéndose que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta submateria.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En este contexto, el Ejecutivo presenta diversas medidas dentro de la presente submateria, que a continuación se pasa a analizar la pertinencia de cada una de ellas.

a) **Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a fin de:**
   a.1) **Establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda, lo que incluye principalmente modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad, y las reglas sobre el lugar de imposición en el país, conforme con el principio de destino, siguiendo entre otros criterios las recomendaciones establecidas por la OCDE.**

---

[484] P.L. 07752-2024-PE, p. 136. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

El Ejecutivo sostiene para solicitar la delegación de potestades que la masificación de las importaciones de bienes digitales y prestación de servicios mediante Internet obstaculiza el rol de recaudación y control, en tanto las nuevas tecnologías es el principal medio de estas operaciones. El IGV es un impuesto de consumo final de bienes y servicios recaudado mediante las entidades que realizan actividades empresariales, sin que, en principio, la carga tributaria recaiga en estos, por lo que agrega, por la neutralidad, el IGV debe aplicarse a todos los consumos que se hacen en el país, según el principio de destino, de lo contrario se estaría ante hechos diferentes para entidades domiciliadas en el país que están obligadas a aplicar el IGV frente a las no domiciliadas, las extranjeras, que no estarían obligadas, por razón de falta de legislación nacional. Indica el Ejecutivo, que las reglas actuales no permiten establecer un mecanismo de recaudación efectiva específicamente cuando el bien o servicio digital es comercializado por un sujeto no domiciliado en el país, ya sea de manera directa o a través de otras plataformas digitales, y el consumidor final es una persona natural. Y la presente normativa integra las medidas que deben adoptarse para el proceso de adhesión del Perú a la OCDE[485].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con la presente submateria señala el Poder Ejecutivo busca modificar la normativa del IGV, para contar con un mecanismo que permita una adecuada tributación de la prestación de servicios y venta de bienes, ya sea de modo directo o por plataformas digitales intermediarias, eliminando un tratamiento, específicamente, cuando se trata de un consumidor final que tiene la naturaleza de persona natural y sin que ello implique desincentivar ni afectar estas actividades económicas. Agrega, la Comisión de Economía, que el Ejecutivo busca crear condiciones de igualdad para la competencia en el mercado peruano, eliminando factores que favorecen a las empresas en el extranjero en desmedro de las nacionales que sí pagan IGV. En tan sentido, concluye la Comisión de Economía, en

[485] P.L. 07752-2024-PE, p. 136. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

el marco de la reactivación económica, la Comisión considera que compete delegar facultades sobre el presente numeral[486].

En esta dirección en la delegación de facultades debe quedar claro temas que han sido objeto de problemas en la economía digital, cuando no se ha seguido lo indicado por la OCDE, como por ejemplo, problemas de falta de información; problemas donde no se tiene información sobre cuándo un consumo se ha realizado en el territorio nacional; problemas para determinar el monto a retener en el caso de plataformas que tienen como función conectar a consumidores con terceros ofertantes, que son los que proveen el servicio finalmente, como es el caso de servicios de hospedaje, donde del monto que paga el consumidor por el servicio, solo una fracción va a la plataforma, el resto es la contraprestación del servicio, sin embargo, la retención se haría sobre el monto final que paga el consumidor, lo que incluye la contraprestación a la plataforma y la contraprestación al prestador del servicio, generando un cobro en exceso, ya que lo que está grabando con el IGV es solo la porción que recibe la plataforma no domiciliada. Así como también fijar el cronograma de implementación y los problemas en la demora de implementación. En esta dirección, a fin de evitar estos problemas y similares, se debe cumplir con los lineamientos de la OCDE para evitar, por ejemplo, las dificultades que surgieron en otros países a partir del apartamiento de las medidas de la OCDE[487]. En tal sentido, a fin de dar condiciones de igualdad en la competencia del mercado y eliminar factores que favorecen a los no domiciliados, el punto solicitado corresponde se otorgue las facultades.

Conclusión
En el presente punto corresponde se otorgue las facultades solicitadas en sus términos.

---

[486] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 27. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

[487] ASBANC. C0151-2022-GG-ASBANC, de fecha 27 de diciembre de 2022. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjgyMDQ=/pdf

a.2) Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.

Sobre el presente punto el Ejecutivo sostiene que la Ley N° 31557 omite aspectos esenciales que hacen inaplicable el Impuesto Selectivo al Consumo (en adelante ISC) como la incorporación de actividades dentro del ámbito de aplicación del impuesto, tasa y parámetros para determinar el ISC, el cumplimiento y control de empresas extranjeras que realizan actividad fuera del país. El Ejecutivo pretende perfeccionar el ISC de juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, para uniformizar el ISC en esta actividad, contribuyendo a la coherencia y homogenización de la tributación específica de consumo[488]. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación a la presente submateria, señala que la solicitud de facultades busca perfeccionar la regulación del ISC de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia uniformizando el tratamiento tributario del ISC, coadyuvando a la coherencia y homogeneización de la tributación especifica al consumo; para ello se tomarán en cuenta la regulación sectorial de dicha actividad. En tal sentido concluye la Comisión de Economía que en el marco de la reactivación económica, la Comisión considera que compete delegar facultades sobre el presente numeral[489].

La Ley N° 31557 regula el impuesto explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia y en su artículo 63 establece los mecanismos aplicables para las empresas no domiciliadas, sin embargo, la citada ley requiere de una actualización, por ejemplo, resuelva las diferencias en la forma de prestación cuando se realice de modo presencial o a distancia, sin distorsionar el mercado, en esta línea corresponde otorgar la facultades solicitadas.

---

[488] P.L. 07752-2024-PE, p. 136. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[489] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 27. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

Conclusión

En el presente punto corresponde se otorgue las facultades solicitadas en sus términos.

b) Modificar la Ley N° 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, a fin de:

b.1) Establecer que el titular de una autorización para la explotación de plataformas tecnológicas de los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia puede entregar bonificaciones de bienvenida o similares, siempre que no se permita su cambio por dinero hasta el cumplimiento de una condición o vencimiento establecido por el titular, las cuales deben ser utilizadas para apostar en los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia.

b.2) Señalar que la información contable registrada en las plataformas para la determinación de la base imponible debe ser acorde a las normas contables oficializadas o aprobadas por el órgano competente del país del sujeto que explote las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

b.3) Perfeccionar el mecanismo de recaudación del impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia.

b.4) Establecer las reglas de tipo de cambio y de huso horario de las operaciones y obligaciones tributarias, respectivamente.

b.5) Establecer, para el caso personas jurídicas constituidas en el exterior, las reglas de imposición en el país.

b.6) Regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior que exploten las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

El Ejecutivo con relación al presente punto sostiene que solicita delegación de facultades porque la Ley N° 31557 requiere ser modificada para incluir disposiciones que permitan la

adecuada aplicación del impuesto a juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, para lo cual señala las siguientes medidas[490]:

- Establecer que el titular de una autorización para la explotación de plataformas tecnológicas de los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia puede entregar bonificaciones de bienvenida o similares, siempre que no se permita su cambio por dinero hasta el cumplimiento de una condición o vencimiento establecido por el titular, las cuales deben ser utilizadas para apostar en los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia.
- Señalar que la información contable registrada en las plataformas para la determinación de la base imponible debe ser acorde a las normas contables oficializadas o aprobadas por el órgano competente del país del sujeto que explote las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.
- Perfeccionar el mecanismo de recaudación del impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia.
- Establecer las reglas de tipo de cambio y de huso horario de las operaciones y obligaciones tributarias, respectivamente.
- Establecer, para el caso personas jurídicas constituidas en el exterior, las reglas de imposición en el país.
- Regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior que exploten las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

Sostiene el Ejecutivo que requieren complementar la regulación sobre la determinación de la base imponible del impuesto a los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia y su respectivo mecanismo de recaudación. Agregan, que la propuesta se basa por deficiencia normativa y la delegación permitirá la aplicación adecuada del impuesto,

---

[490] P.L. 07752-2024-PE, p. 137. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

facilitando su recaudación, con una estimación de recaudación potencial de 140 millones anuales[491].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto señala que el Ejecutivo solicita materias específicas identificadas claramente, en tal sentido, en el marco de la reactivación económica considere que compete delegar facultades sobre el presente numeral[492].

Considerando la solicitud de delegación de facultades especificadas en el presente punto, los mismos que buscan perfeccionar la Ley N° 31557 sobre la aplicación del ISC al impuesto a los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia, referentes a precisar el titular de una autorización de explotación, señalar la información contable registrada en las plataformas para determinar la base imponible, fijar reglas de tipo de cambio y uso horario, corresponde que se otorgue las facultades solicitadas.

Conclusión
En el presente punto corresponde se otorgue las facultades solicitadas en sus términos.

c) Modificar la Ley N° 29774, Ley que complementa la normativa sobre la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, a fin de reducir el monto aplicable a la importación de bienes de bajo valor, así como dictar las disposiciones necesarias que permitan su adecuada recaudación y control.

[491] Anexo 2, submateria 3.7.1-b), p. 22, Ministerio de Economía y Finanzas. En https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2023/Constitucion/files/anexo_dia_21.pdf

[492] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 28. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

El Ejecutivo señala en la exposición de motivos que la solicitud de delegación de facultades en este punto que la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes no se encuentra gravado con el IGV realizados en condiciones de normalidad de mercancías hasta un valor de U$200, mecanismo que aplica también a los envíos efectuados mediante Servicios Postales del Perú Sociedad Anónima (SERPOST)[493].

Agregan, que el envío de bienes de bajo valor se ha incrementado por el volumen de ventas que cuentan con una franquicia, con un monto mínimo sin el pago de impuestos para ingresar al país, los mismo que ingresan por regímenes aduaneros especiales de envíos de entrega rápida y de envíos postales, y es usado por cualquier persona natural o jurídica, cuando este régimen aduanero especial se hizo para el ingreso de cartas, documentos, publicaciones o bienes pequeños que requieren de un ingreso rápido. Sin embargo, afirma el Ejecutivo, este mecanismo está desplazando la tributación del IGV que se recauda mediante importaciones del régimen aduanero de importación que se tributa por el valor total de los bienes ingresados, generando competencia desigual para empresas peruanas que sí están afectas al pago del IGV, y la compra por medio de internet u otras plataformas digitales genera pérdida de recaudación porque no se puede aplicar el IGV a la importación de bienes de bajo valor. Y, asimismo, señala el Ejecutivo que la OCDE recomienda reducir las franquicias (minimis) a fin de no afectar los ingresos de países con IVA, como se da los minimis en Ecuador y Chile en US$ 10 y US$ 30, respectivamente[494].

Para imponer carga tributaria a las importaciones de menor valor el Ejecutivo propone reducir el monto de las mercancías que constituyen envío de entrega rápida o envíos postales, con el fin de prevenir competencia desleal, así como disminuir la evasión tributaria con el ingreso de estos bienes sin el pago de impuestos destinados a actividades comerciales[495].

---

[493] P.L. 07752-2024-PE, p. 138. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[494] P.L. 07752-2024-PE, p. 138. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[495] P.L. 07752-2024-PE, p. 139. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto señala, según la información proporcionada por el Proyecto de Ley se busca disminuir el monto del valor de las mercancías que comprenden envíos de entrega rápida o envíos postales para efectos de la inafectación del IGV a la importación, agrega la Comisión de Economía, Ecuador y Chile los valores del monto aplicable son de US$ 10 y US$ 30, respectivamente, sin embargo no se menciona cuánto implicaría sobre la reducción del comercio digital, tampoco se menciona cuánto implicaría de recaudación de ingresos, en tal sentido, las modificaciones deber ser debatidas en el Congreso de la República, por lo que no correspondería delegar las facultades en esta materia[496].

En la exposición de motivos, en las mesas técnicas como en los documentos presentados sobre el presente punto no se precisa el monto aplicable al cual se pretende reducir para gravar con el IGV la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, así como tampoco se hace una proyección de la probable reducción de las conductas de evasión tributaria y de la competencia desleal, en tal sentido, con el incremento de las importaciones promovido por el uso de internet y de las plataformas digitales, se recomienda que se realice un debate más abierto sobre las posibles consecuencias que se pueden generar en la economía del país, considerando aún más que se busca de la reactivación económica, por lo que en relación al presente punto, conforme indica la Comisión de Economía, corresponde que la medida solicitada se tramite vía Proyecto de Ley y el Parlamento decida lo más pertinente.

Conclusión

En el presente punto no corresponde se otorgue las facultades solicitadas.

---

[496] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 28. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

3.7.2. Perfeccionar el tratamiento tributario de las empresas de menor tamaño a través de:

a) Crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, denominado Régimen Emprendedor que, entre otros, prevea la declaración de los ingresos y egresos acumulados del mes, a fin de determinar el pago a cuenta, regularizando el monto final en diciembre; incentive la declaración de egresos por medio de sus deducciones; así como adecuar las normas del Código Tributario y demás normativa tributaria a fin de aludir a este régimen.

b) Modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado respecto de los sujetos no comprendidos, reglas de acogimiento, categorización, cuota mensuales, forma de pago, inclusión en el Régimen General, cambios de régimen, comprobantes de pago, presunciones, obligaciones formales, definiciones y aplicación de percepciones y retenciones del IGV; derogar el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE Tributario — RMT; así como, adecuar el Código Tributario y demás normativa tributaria a las modificaciones indicadas; incluyendo la regulación del acompañamiento tributario.

c) Regular una deducción adicional y temporal por la contratación de nuevos trabajadores y modificar la Ley N° 31940, Ley que amplía el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y el pago del Impuesto a la Renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

De la exposición de motivos del proyecto de ley para que se le delegue facultades, el Ejecutivo busca perfeccionar el régimen tributario de empresas de menor tamaño, para lo cual propone tres medidas, que se analizan en los siguientes párrafos. Primero, analicemos la constitucionalidad de la materia solicitada.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, y la interpretación vinculante establecida en materia financiera y tributaria del Tribunal Constitucional, la modificación de leyes relativas a temas tributarios puede ser

delegado, y advirtiéndose que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta submateria.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El Ejecutivo en la presente submateria presenta diversas medidas , que a continuación se pasan a analizar.

a) **Crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, denominado Régimen Emprendedor que, entre otros, prevea la declaración de los ingresos y egresos acumulados del mes, a fin de determinar el pago a cuenta, regularizando el monto final en diciembre; incentive la declaración de egresos por medio de sus deducciones; así como adecuar las normas del Código Tributario y demás normativa tributaria a fin de aludir a este régimen.**

En el presente punto, el Ejecutivo describe que existen 3 regímenes, el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT), regímenes que no han estado exento de problemas. En dichos regímenes se han presentado problemas como el no incentivo en NRUS y RER a los sujetos que declaren costos y gastos, las tasas y cargas diferenciadas del impuesto a la renta motivan a los sujetos del NRUS, RER y RMT a manipular sus ingresos a fin de no migrar a otro régimen con mayor carga tributaria y no sinceran sus gastos, y el RMT incluye empresas que tienen ventas hasta S/ 8 755 000 que no ameritan ser sujetos de un régimen simplificado[497].

Para lo cual, el Ejecutivo propone crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para contribuyentes generadores de rentas empresariales de menor tamaño, denominado Régimen Emprendedor. El régimen emprendedor, para el Ejecutivo, establecerá una fácil determinación de la base imponible y del impuesto a pagar; incentivará la declaración de

[497] P.L. 07752-2024-PE, p. 139. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

egresos por medio de sus deducciones; y facilitará el uso de herramientas tecnológicas para la declaración y pago[498].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto señala, que la Ley 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., se delegó la facultad de legislar, en materia de reactivación económica y formalización, otorgando al Ejecutivo a instituir un régimen jurídico-tributario especial para las micro y pequeñas empresas, con tasas progresivas aplicadas a la utilidad o los ingresos, a elección de cada contribuyente[499].

Agrega la Comisión de Economía, que el Ejecutivo, en el marco de la delegación otorgada, promulgó el Decreto Legislativo 1269, Decreto Legislativo que crea el Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, en tal sentido, considerando la coyuntura y probable afectación a las MYPE, requeriría que esta materia sea discutida con mayor detenimiento en el Congreso de la República. En ese sentido, concluye la Comisión de Economía, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[500].

Por la presente submateria que se solicita delegación de facultades su busca incentivar declaración de costos y gastos en los regímenes del NRUS y RER, el impacto que tendrá estas medidas requieren la participación de los sujetos involucrados, así como aperturar el

---

[498] P.L. 07752-2024-PE, p. 140. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[499] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 29. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

[500] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 29. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

debate a los distintos especialistas y representantes de los sectores involucrados. Aún más si se propone crear un nuevo régimen denominado Régimen Emprendedor, estableciéndose una nueva base imponible y del impuesto a pagar, lo que impactará en los regímenes existentes.

Considerando que se trata de una reforma de cambio de régimen tributario sustituyendo los vigentes por uno nuevo, esta facultad requiere de la participación de los sujetos involucrados, del debate en el Congreso y de la opinión de los especialistas, por lo que esta delegación deberá tramitarse vía proyecto de ley

Conclusión
Con relación al presente punto no corresponde se otorgue la delegación solicitada.

b) **Modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado respecto de los sujetos no comprendidos, reglas de acogimiento, categorización, cuota mensuales, forma de pago, inclusión en el Régimen General, cambios de régimen, comprobantes de pago, presunciones, obligaciones formales, definiciones y aplicación de percepciones y retenciones del IGV; derogar el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE Tributario — RMT; así como, adecuar el Código Tributario y demás normativa tributaria a las modificaciones indicadas; incluyendo la regulación del acompañamiento tributario.**

El Ejecutivo en la exposición de motivos de la solicitud de delegación de facultades en el presente punto señala que el Régimen Especial del Impuesto a la Renta regula supuestos de exclusión que han resultado insuficientes para evitar que sujetos se ubiquen en umbrales máximos del monto de ingresos y se sitúan en un régimen que no les corresponde, reducen carga impositiva. El RER impide deducción de gastos para determinar el impuesto, por lo que existen menores incentivos para que soliciten comprobantes de pago a sus proveedores en la adquisición de bienes o servicios o declaren en la planilla al personal afectado con la actividad, promoviendo la informalidad[501].

[501] P.L. 07752-2024-PE, p. 140. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

Asimismo, agrega el Ejecutivo que el RMT regula una escala progresiva acumulativa y las empresas se agencian para evitar superar el tope de 15 UIT de su renta anual a fin de permanecer en el régimen, aplicando la tas más baja. También, agrega el Ejecutivo, que los generadores de renta de tercera categoría optan por regímenes más convenientes y realizan prácticas de arbitraje, elusión, fragmentación de ingresos, enanismo, erosionando la recaudación del impuesto a la renta[502].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto señala, el propio Ejecutivo ha presentado el Proyecto de Ley 6768/2023-PE, que propone la Ley que modifica el texto del nuevo régimen único simplificado y el Código Tributario. Dicho proyecto viene siendo materia de estudio en la Comisión de Economía por lo cual no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[503].

Considerando que existe un proyecto de ley referido a la materia del presente numeral, corresponde que el análisis, discusión y debate se realice en el Congreso de la República, por lo que no corresponde que se otorgue la facultad solicitada.

Conclusión
En el presente punto no corresponde se otorgue las facultades solicitadas.

c) Regular una deducción adicional y temporal por la contratación de nuevos trabajadores y modificar la Ley N° 31940, Ley que amplía el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y el pago del Impuesto a la Renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas.

---

[502] P.L. 07752-2024-PE, p. 140. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[503] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 30. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

El Ejecutivo en el presente punto solicita delegación de facultades a fin de establecer que el contribuyente del Régimen General que contrate trabajadores, a fin de determina impuesto a la renta de los ejercicios gravables 2025, 2026 y 2027, aplique la deducción adicional correspondiente al 20% de la remuneración básica que pague a dichos trabajadores, si la relación laboral se inició a partir del 1 de enero del 2025, al margen de su jornada de trabajo y su modalidad contractual, si se cumplen además las siguientes condiciones si los ingresos netos del contribuyente no supera las ciento cincuenta (150) UIT en el ejercicio gravable anterior y la remuneración básica del trabajador no supera los S/ 1700 (Un Mil Setecientos Soles) al mes, así como declarar y pagar la renta hasta junio del año siguiente para los contribuyentes que no superan las 150 UIT[504].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias especificas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto señala el 22 de noviembre de 2023 se promulgó la Ley 31940, Ley que amplía el plazo para la presentación de declaración jurada anual y pago del Impuesto a la Renta (IR) de las personas naturales y de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE), dicha aprobación es bastante reciente por lo cual no ameritaría modificación. En ese sentido, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[505].

Considerando lo señalado por la Comisión de Economía, que la Ley 31940 amplió el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y el pago del Impuesto a la Renta, materias que están referidas a las solicitadas por el Ejecutivo en el presente punto, no corresponde que se otorgue las facultades, en tanto si ha habilitado recientemente la diferencia para la declaración y pago del impuesto a la renta y luego hacer otras modificaciones en dicho sentido, no estamos respetando que la norma despliegue sus efectos jurídicos y precisar el impacto que tiene en la recaudación y la economía.

---

[504] P.L. 07752-2024-PE, p. 141. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[505] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias especificas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 30. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

Conclusión
El presente punto de la submateria solicitada no corresponde se otorgue las facultades.

3.7.3. Perfeccionamiento del Sistema Tributario:

a) **Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para:**
   - a.1) **Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a las soluciones líquidas que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares sin nicotina, así como perfeccionar la determinación de la base imponible en el sistema del precio de venta al público (PVP), y los rangos mínimos y máximos de las tasas y/o montos fijos que se podrán fijar para el sistema al valor, específico o PVP para los bienes y servicios sujetos al impuesto.**
   - a.2) **Perfeccionar la regulación sobre el Registro de Compras teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas, así como adecuar las disposiciones contenidas en la Ley N° 29215 en lo relacionado a la anotación de operaciones en el Registro de Compras; asi como, modificar el Código Tributario y demás normativa tributaria implicadas en las modificaciones antes indicadas, que permitan que la SUNAT desarrolle la propuesta de registro y declaración.**

b) **Establecer la obligatoriedad de todas las entidades del Poder Ejecutivo a aplicar la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.**

c) **Modificar el alcance de la Ley N° 31903, Ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MYPE, a fin de circunscribir su ámbito de aplicación a las empresas de menor tamaño, estableciendo asimismo condiciones mínimas para que los**

titulares de las cuentas puedan acceder de oficio a la liberación de los fondos de sus cuentas de detracciones.

d) Modificar el Código Tributario para:

d.1) Regular los intereses aplicables en las devoluciones de pagos indebidos o en exceso, los intereses y la forma de su cómputo respecto de las multas tributarias, así como los componentes de la deuda tributaria; con el fin de que estos incentiven el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, lo que incluye modificar el artículo 5 de la Ley N° 28053, Ley que establece disposiciones con relación a percepciones y retenciones y modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

d.2) Adecuar el alcance de la reserva tributaria a efectos de contar con información suficiente para el análisis de datos para la formulación de políticas tributarias.

d.3) Agilizar el cobro de la deuda tributaria y evitar actuaciones procedimentales ineficientes, estableciendo, entre otros, un procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria; regular supuestos objetivos que puede utilizar la Administración Tributaria para sustentar la existencia de razones que puedan permitir presumir que la cobranza será infructuosa a efectos de dictar medidas cautelares previas; establecer expresamente excepciones a la reserva tributaria de acuerdo con el nivel y estado de la deuda a efectos que la SUNAT pueda hacer publicaciones; adecuar los requisitos para formular la apelación conforme al riesgo del deudor y cautelar el cobro de la deuda tributaria; perfeccionar las reglas de la contracautela en los procesos judiciales sobre materia tributaria; modificar los plazos y las reglas que rigen en los procedimientos contenciosos tributarios para la atención oportuna de estos; modificar la conformación y funcionamiento del Tribunal Fiscal; así como delimitar los alcances de las sentencias casatorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia.

d.4) Perfeccionar las Tablas de Infracciones y Sanciones del Código Tributario, en función del principio de proporcionalidad considerando el nivel de ingresos de los contribuyentes; asi como perfeccionar lo dispuesto en el artículo 168 del Código Tributario.

e) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta para:

e.1) Modificar las reglas sobre la deducción de gastos por concepto de remuneraciones que correspondan a los directores de sociedades anónimas.

e.2) Modificar la tasa y señalar reglas para la determinación de los pagos a cuenta, así como la retención con carácter de pago a cuenta tratándose de los contribuyentes que perciben rentas de cuarta categoría.

e.3) Modificar las disposiciones relativas a la condición de habitualidad en la enajenación de inmuebles efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal; así como modificar las disposiciones sobre los documentos que debe presentarse ante el notario público por la enajenación de inmuebles derechos sobre los mismos; y las normas relativas a la responsabilidad solidaria de los notarios públicos en el caso de enajenación de inmuebles.

e.4) Establecer la obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a cargo de la persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por las enajenaciones indirectas a que se refiere el inciso e) del artículo 10 de Ley del Impuesto a la Renta, no sujetas a retención, lo que incluye establecer reglas necesarias para su determinación.

e.5) Modificar la regulación de intereses. Comprende: Regular la definición de intereses de deuda, así como aquellos supuestos vinculados a las operaciones de financiamiento y gastos incurridos en relación con la obtención de financiación, así como el tratamiento de las fluctuaciones

cambiarias vinculadas a las operaciones de financiamiento. Ajustar la regla del umbral mínimo establecida como excepción a la aplicación de la regla del EBITDA; e, incorporar precisiones legislativas que resultan necesarias para la adecuada aplicación de la regla del EBITDA.

e.6) Perfeccionar las normas que regulan los acuerdos anticipados de precios.

e.7) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta en lo referente a otros métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y garantizar el principio de reserva de ley, entre otros.

f) Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a fin de regular el acceso a información financiera para la función recaudadora de la SUNAT, observando el marco constitucional.

g) Modificar el marco normativo que regula el intercambio automático de información de cuentas financieras, a fin de incorporar, entre otros, las siguientes disposiciones:

g.1) Norma antielusiva para contrarrestar los esquemas implementados para eludir los procedimientos de debida diligencia y la obligación de reporte; y

g.2) Establecimiento de una sanción para los titulares de las cuentas y para las personas que ejercen el control de los mismos cuando presenten una declaración jurada falsa sobre su residencia fiscal u otra información requerida por las entidades financieras sujetas a reportar.

h) Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país.

i) Aprobar un fraccionamiento especial para deudas administradas por la SUNAT que constituyan ingresos del Tesoro Público

exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023 incentivando el pago de las deudas mediante el otorgamiento de un bono de descuento en función del nivel de deuda y condicionado al cumplimiento del pago, sin incluir descuento sobre insoluto ni anticipo.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos
En la presente submateria el Ejecutivo solicita delegación de facultades para perfeccionar herramientas legales y administrativas a fin de tornar eficaz la recaudación, fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria, disminuir riesgos de controversias futuras relacionadas a la aplicación de normas de transferencia, mejorar el Tribunal Fiscal y agilizar procedimientos para la inmediata solución de controversias y dictar medidas de recupero de deudas administrativas por la SUNAT[506].

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada
Conforme a los parámetros materiales establecidos en los artículos 101 y 104 de la Constitución, y la interpretación vinculante establecida en materia financiera y tributaria del Tribunal Constitucional, la modificación de leyes relativas a temas tributarios puede ser delegado, y advirtiéndose que en el extremo solicitado no modifican leyes orgánicas, no existe impedimento constitucional para el otorgamiento de facultades en esta submateria.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada
Debido a que la presente submateria tiene varios puntos a analizar, a continuación, se procederá a analizar cada uno a fin de determinar su pertinencia.

a) **Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para:**
   a.1) **Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a las soluciones líquidas que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares sin nicotina, así como perfeccionar la determinación de la base imponible en el sistema del precio de venta al público (PVP), y los rangos mínimos y**

[506] P.L. 07752-2024-PE, p. 135. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

máximos de las tasas y/o montos fijos que se podrán fijar para el sistema al valor, específico o PVP para los bienes y servicios sujetos al impuesto.

El Ejecutivo justifica la solicitud de delegación de facultades en el presente punto enes importante, dada la coyuntura actual, asegurar la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo referido a los vaporizadores electrónicos, soluciones líquidas que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares. Agrega el Ejecutivo, grabar el caso de los vapeadores electrónicos se asimila con otros productos que se encuentran con el ISC como el tabaco y sucedáneos de tabaco, según las recomendaciones de la OMS, en los países que no están prohibidos debe ser regulados y gravados como forma de desincentivar su consumo. Adiciona el Ejecutivo, que con la delegación pretenden modificar rangos mínimos y máximos de las tasas y los montos fijos para los bienes y servicios sujetos al ámbito de aplicación del ISC, así como aclarar la metodología para determinar la base imponible en el sistema de venta al público[507].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que se viene debatiendo en el Pleno del Congreso de la República el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 3412/2022-CR, 3732/2022-CR, 4178/2022-CR y 4717/2022-CR, que propone la "Ley del control del consume de productos de Tabaco, de Nicotina o de sucedáneos de ambos para la protección de la vida y la salud". En ese sentido, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[508].
Considerando que en el Congreso viene debatiendo la materia objeto de pedido de delegación de facultades, no corresponde se otorgue la misma.

Conclusión
El presente punto de la submateria solicitada no corresponde se otorgue las facultades.

---

[507] P.L. 07752-2024-PE, p. 142. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[508] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 31. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

a.2) Perfeccionar la regulación sobre el Registro de Compras teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas, así como adecuar las disposiciones contenidas en la Ley N° 29215 en lo relacionado a la anotación de operaciones en el Registro de Compras; así como, modificar el Código Tributario y demás normativa tributaria implicadas en las modificaciones antes indicadas, que permitan que la SUNAT desarrolle la propuesta de registro y declaración.

El pedido de delegación de facultades para el Ejecutivo en el presente numeral se sustenta en la masificación de comprobantes de pago, por lo que se debe alentar y simplificar el llevado de los libros contables, la declaración y pago de impuestos por medio de las plataformas digitales. La masificación del uso de comprobantes de pago electrónico permite a la SUNAT disponer en sus plataformas electrónicas los comprobantes de pago emitidos por los proveedores, para que los clientes usen de modo inmediato el crédito fiscal del IGV. Los beneficios que pretenden alcanzar es ampliar el Registro de compras simplificando a los contribuyentes cumplir con la obligación formal de llevar el Registro por intermedio del uso de herramientas tecnológicos, de tal forma que la SUNAT ponga a disposición una propuesta del Registro de Compras Electrónico[509].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que si la generación del Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras se realiza de manera conjunta, resulta conveniente que las modificaciones sobre el Registro de Ventas e Ingresos y órdenes de pago efectuadas mediante los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1540 entren en vigor en la misma fecha de las modificaciones que se proponen respecto del Registro de Compras. En ese sentido, en el marco de la reactivación económica y la mejora de regulación y herramientas

[509] P.L. 07752-2024-PE, p. 143. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

tecnológicas, la Comisión considera que compete delegar facultades sobre el presente numeral[510].

Simplificar para cumplir con sus obligaciones el contribuyente mediante el uso de las herramientas tecnológicas facilita que este acate sus obligaciones formales, ayudado por las herramientas tecnológicas que pone a su disposición la SUNAT. Además, con el uso de estas herramientas tecnológicas ayudará a mermar los costos de cumplimiento tributario, de tal modo, se contribuirá con llevar los libros contables, la declaración y pago de impuestos por medio de las plataformas digitales, permitiendo que el contribuyente cumpla con su obligación formal al tener a su disposición el Registro de Compras electrónico. Por estas consideraciones, se estima viable la solicitud de delegación.

Conclusión
Con relación al presente punto de la submateria solicitada corresponde se otorgue las facultades en sus términos.

b) Establecer la obligatoriedad de todas las entidades del Poder Ejecutivo a aplicar la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

El Ejecutivo para solicitar la delegación de facultades en el presente punto señala que las tasas por derechos de tramitación deben ser establecidos conforme a la metodología vigente, y consignados en el TUPA, y para las entidades del Poder Ejecutivo contar con el refrendo del MEF. Sin embargo, agrega que existen instituciones como Registros Públicos que cobran tasas diferentes por sus servicios registrales[511].

De tal modo, afirma el Ejecutivo que la falta de adecuación a la metodología vigente para fijar tasas genera que cada entidad pública fije sus tasas en función de criterios distintos a

[510] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 32. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

[511] P.L. 07752-2024-PE, p. 144. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

los señalados en el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, lo que implica que el pago sea diferente y mayor al costo del servicio prestado[512].

De tal modo, para el Ejecutivo no es suficiente que su obligación se fije en la Ley, como actualmente se prevé, sino debe existir consecuencias en caso estas no cumplan con su adecuación. Para lo que propone que las entidades públicas que no se adecuen a la metodología de cálculo de determinación de tasas al 31.12.2024, ya no podrán seguir cobrando dicho tributo por los servicios que brinden a partir del 01.01.2025[513].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, con cuyos argumentos esta Comisión coincide.

De la exposición de motivos del proyecto de ley se evidencia la necesidad de la aplicación de la metodología para la determinación de las tasas por parte de todas las entidades públicas, no siendo suficiente que su obligatoriedad esté fijada en la Ley, como actualmente se prevé, sino que además deben existir consecuencias en caso estas no cumplan con su adecuación. En ese sentido, en el marco de las mejoras en materia tributaria, la Comisión considera que compete delegar facultades sobre el presente numeral[514].

Conclusión
Con relación al presente punto de la submateria solicitada corresponde se otorgue las facultades en sus términos.

---

[512] P.L. 07752-2024-PE, p. 144. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[513] P.L. 07752-2024-PE, p. 144. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[514] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias especificas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 32. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

c) Modificar el alcance de la Ley N° 31903, Ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MYPE, a fin de circunscribir su ámbito de aplicación a las empresas de menor tamaño, estableciendo asimismo condiciones mínimas para que los titulares de las cuentas puedan acceder de oficio a la liberación de los fondos de sus cuentas de detracciones.

En el presente punto el Ejecutivo señala para solicitar delegación de facultades que mediante la Ley N° 31903 se estableció un tratamiento especial para las micro y pequeñas empresas (MYPE) sobre la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), para fortalecer la capacidad financiera y apoyar la reactivación económica de este sector. Sin embargo, agrega que dichas disposiciones de la Ley N° 31903 eliminan condiciones y requisitos del SPOT para todas las MYPE, lo que ha generado prácticamente que se aplique al 99% de empresas del país, haciendo ineficaz el sistema[515].

En función de ello, propone el Ejecutivo modificar la Ley N° 31903 revirtiendo los efectos negativos, limitando el ámbito de su aplicación a empresas de menor tamaño y manteniendo las condiciones mínimas para que los titulares de las cuentas puedan acceder de oficio a la liberación de los fondos de sus cuentas de detracciones[516].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoria el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que la Ley 31903, Ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MYPE, fue publicada el 21 de octubre de 2023 con amplia votación del Pleno del Congreso de la

[515] P.L. 07752-2024-PE, p. 145. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[516] P.L. 07752-2024-PE, p. 145. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

República. Dado que es una norma reciente, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[517].

Considerando que el Parlamento, con fecha octubre del 2023 ha emitido la Ley 31903 referida a la materia de delegación solicitada, corresponde que no se otorgue la delegación.

Conclusión
En atención lo expuesto, corresponde que no se otorgue la delegación solicitada.

d) Modificar el Código Tributario para:

d.1) Regular los intereses aplicables en las devoluciones de pagos indebidos o en exceso, los intereses y la forma de su cómputo respecto de las multas tributarias, así como los componentes de la deuda tributaria; con el fin de que estos incentiven el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, lo que incluye modificar el artículo 5 de la Ley N° 28053, Ley que establece disposiciones con relación a percepciones y retenciones y modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

Con relación al presente punto la solicitud de delegación de facultades del Ejecutivo señala que las multas tributarias han disminuido su capacidad para incentivar su cumplimiento por i) reducción de tasa interés aplicable y ii) postergación del inicio del cómputo de la tasa la notificación de la comisión de la infracción[518].

Asimismo, afirma el Ejecutivo, las devoluciones causadas por el error del contribuyente en la declaración se remunera con una tasa de interés mayor al sistema financiero. Para lo

[517] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 32. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

[518] P.L. 07752-2024-PE, p. 146. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

cual propone el Ejecutivo modificar el Código Tributario sobre los intereses que se aplican en la devolución y a las multas[519].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala el 19 de diciembre de 2003 el Congreso de la República publicó la Ley 31962, Ley que sincera los intereses por devoluciones de pago de tributos en exceso o indebidos, por retenciones o percepciones no aplicadas del Impuesto General a las Ventas y actualización de multas. Dado que es una norma reciente, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[520].

En esta dirección, considerando que el Parlamento mediante Ley 31962 ha regulado lo referido al presente punto materia de solicitud de delegación de facultades, corresponde no otorgar la delegación

Conclusión
Con relación al presente punto no corresponde se otorgue la delegación solicitada.

d.2) Adecuar el alcance de la reserva tributaria a efectos de contar con información suficiente para el análisis de datos para la formulación de políticas tributarias.

Para la solicitud de delegación de facultades sobre el presente punto, el Ejecutivo afirma que la regulación actual sobre reserva tributaria contenida en el artículo 85 del Código

[519] P.L. 07752-2024-PE, p. 146. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[520] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 32. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

Tributario no les permite acceder a la información adecuada para la formulación de políticas sobre la realidad que busca perfeccionar[521].

Plantea el Ejecutivo adecuar el alcance de la reserva tributaria permitiendo el acceso del Ministerio de Economía y Finanzas a la información suficiente, modificando el artículo 85 del Código Tributario para adecuar el alcance de la reserva tributaria a efectos del análisis de datos para la formulación de políticas tributarias, manteniendo el contenido esencial del derecho protegido a nivel constitucional en línea con el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional[522].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que la reserva tributaria es un tema constitucional sensible. Asimismo, se ha podido identificar que se busca ampliar la reserva tributaria para la difusión de deuda impugnada afectando a los contribuyentes. Dicho esto, se requiere que esta materia sea discutida con mayor detenimiento en el Congreso de la República. En ese sentido, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[523].

El Tribunal Constitucional en su uniforme jurisprudencia ha interpretado que la reserva tributaria "constituye un límite a la utilización de los datos e informaciones por parte de la Administración Tributaria, y garantiza que en dicho ámbito, esos datos e informaciones de los contribuyentes, relativos a la situación económica y fiscal, sean conservadas en reserva y confidencialidad, no brindándosele otro uso que el que no sea para el cumplimiento

---

[521] P.L. 07752-2024-PE, p. 146. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[522] P.L. 07752-2024-PE, p. 146. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[523] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 33. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

estricto de sus fines, salvo en los casos señalados en el último párrafo del inciso 5) del artículo 2° de la Constitución y con respeto del principio de proporcionalidad"[524].

Considerando que se busca legislar sobre la reserva tributaria a fin de ampliarla para la difusión de deuda impugnada, la misma puede terminar afectando a los contribuyentes, en tanto no se está ante una información consolidada, ya que por el transcurso del procedimiento administrativo la misma puede cambiar, así como se presenta como un límite al acceso de información pública, referido a que se debe conservar en reserva y en confidencialidad, no brindándosele otro uso que el que no sea para el cumplimiento estricto de sus fines. En tal sentido, este punto requiere un mayor debate en el Parlamento

Conclusión
Con relación al presente punto no corresponde se otorgue la delegación solicitada.

d.3) Agilizar el cobro de la deuda tributaria y evitar actuaciones procedimentales ineficientes, estableciendo, entre otros, un procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria; regular supuestos objetivos que puede utilizar la Administración Tributaria para sustentar la existencia de razones que puedan permitir presumir que la cobranza será infructuosa a efectos de dictar medidas cautelares previas; establecer expresamente excepciones a la reserva tributaria de acuerdo con el nivel y estado de la deuda a efectos que la SUNAT pueda hacer publicaciones; adecuar los requisitos para formular la apelación conforme al riesgo del deudor y cautelar el cobro de la deuda tributaria; perfeccionar las reglas de la contracautela en los procesos judiciales sobre materia tributaria; modificar los plazos y las reglas que rigen en los procedimientos contenciosos tributarios para la atención oportuna de estos; modificar la conformación y funcionamiento del Tribunal Fiscal; así como delimitar los alcances de las sentencias casatorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia.

[524] Exp. 009-2001-AI/TC, de fecha 29 de enero del 2022, Fj. 11. En https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00009-2001-AI.html

En el presente punto el Ejecutivo solicita delegación de facultades señalando que tienen un gran volumen de deuda tributaria en apelación en el Tribunal Fiscal; no permitiendo su cobro, así como, han detectado reglas en el Código Tributario que se pueden optimizar para recuperar la deuda tributaria[525].

Afirma el Ejecutivo que requieren reglas que agilicen la cobranza de la deuda tributaria para facilitar la recaudación de la Administración Tributaria, evitar las actuaciones procedimentales ineficientes y así satisfacer las necesidades de la población[526].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala si bien la Comisión de Economía considera importante la optimización de la recuperación de la deuda tributaria, el análisis requiere de más información y debate para resolver en el marco de la delegación de facultades, por lo cual solo consideramos que podría brindarse sobre lo referido al "Fortalecimiento del Tribunal Fiscal para resolver en los plazos establecidos los procedimientos a su cargo. En tal sentido, se plantea efectuar modificaciones en su conformación y funcionamiento, a efectos de atender rápidamente las materias bajo su competencia"[527].

En el presente punto el Ejecutivo solicita delegación de facultades con diverso contenido, si bien están referidos a agilizar el cobro de la deuda tributaria, sin embargo cada ítem del presente punto es una delegación autónoma una de las otras, por lo que para evaluar su pertinencia y necesidad se requiere mayor información en cada uno de los ítems, ya que no se tiene en claro en que consiste la propuesta de modificación normativa en cada uno

---

[525] P.L. 07752-2024-PE, p. 147. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[526] P.L. 07752-2024-PE, p. 147. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[527] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 34. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

de ellos, así por ejemplo, se puede citar el último ítem, referido a la Casación, la misma a pesar de haber sido consultada al ministro de Economía en la mesa de invitación a los ministros del día martes 28 de mayo del 2024, la misma quedo sin contestar, así como tampoco se entregó información con mayor detalle. Sin embargo, de los ítems ahí indicados, el referido a la composición del Tribunal Fiscal es la medida que cumple con la pertinencia del pedido de delegación de facultades, dado que se ha indicado que se busca modificar la conformación y funcionamiento del Tribunal Fiscal, por lo que únicamente en este ítem se otorgará facultades.

Conclusión

Con relación al presente punto corresponde se otorgue las facultades solicitadas con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el artículo 98 del Código Tributario referido a la composición del Tribunal Fiscal".

d.4) Perfeccionar las Tablas de Infracciones y Sanciones del Código Tributario, en función del principio de proporcionalidad considerando el nivel de ingresos de los contribuyentes; así como perfeccionar lo dispuesto en el artículo 168 del Código Tributario.

Sobre el presente punto el Ejecutivo solicita delegación de facultades sosteniendo que la sanción establecida por comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, consistente en no presentar la declaración que contenga la determinación de la deuda tributaria en los plazos establecidos, es un porcentaje de la UIT, este monto en el caso de algunos contribuyentes infractores no cumple el objetivo de desincentivar la conducta infractora e incentivar el cumplimiento tributario[528].

[528] P.L. 07752-2024-PE, p. 148. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

Por lo que propone el Ejecutivo modificar el cálculo de la multa en base a los ingresos netos a fin de generar un mayor riesgo en los grandes contribuyentes, así como también modificar el artículo 180 del Código Tributario[529].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, la Comisión de Economía considera que esta propuesta requiere de mayor análisis de impacto sobre los contribuyentes dada que la coyuntura económica ya viene impactando sobre los ingresos de la población. Dada la actual coyuntura y posible afectación a las personas, se requiere que esta materia sea discutida con mayor detenimiento en el Congreso de la República. En ese sentido, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[530].

Considerando el informe de la Comisión de Economía que señala que por el efecto que puede tener en los contribuyentes la tabla de infracción y sanciones en base a la proporcionalidad de los ingresos de los contribuyentes, el mismo que va impactar directamente en su patrimonio, corresponde la medida se analice con la mayor participación posible, con la opinión de los especialistas y se someta a debate y discusión en el Parlamento, en atención a ello, no corresponde de delegue facultades sobre el presente punto.

Conclusión
Con relación al presente punto no corresponde se otorgue la delegación solicitada.

---

[529] P.L. 07752-2024-PE, p. 148. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTqxNTE2/pdf

[530] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 34. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

e) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta para:

e.1) Modificar las reglas sobre la deducción de gastos por concepto de remuneraciones que correspondan a los directores de sociedades anónimas.

Con relación al presente punto, el pedido de delegación de facultades sostiene que las remuneraciones al directorio se provisionan hasta por el importe límite que señala la Ley del Impuesto a la Renta (6% de la utilidad comercial de la empresa) y se procede a la deducción; sin embargo, no se pagan las dietas a los directores. Por ello proponen modificar la Ley del Impuesto a la Renta para fijar como requisito a cumplir, para la deducción de las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los directores de sociedades anónimas, la exigencia de su pago, de tal modo que las remuneraciones del directorio se deduzcan en el ejercicio gravable a que correspondan cuando han sido pagadas en el plazo establecido para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio; manteniéndose como límite de dicha deducción el 6% de la utilidad comercial[531].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que de conformidad al INFORME N° 305-2002-SUNAT/K00000, la deducibilidad de las dietas cuando estas hayan sido pagadas ya se encuentra normado. En ese sentido, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[532].

En esta dirección, conforme señala el numeral 2 del precitado informe de la SUNAT, el inciso m) del artículo 37° del TUO LIR dispone que son deducibles como gastos las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los directores de las

---

[531] P.L. 07752-2024-PE, p. 149. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[532] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 35. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

sociedades anónimas, en la parte que en conjunto no exceda del seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio antes del Impuesto a la Renta. En tal sentido, concluye dicho informe, que las dietas de directorio son rentas de cuarta categoría para sus perceptores, serán deducibles para determinar la renta neta en el ejercicio gravable al que correspondan si son pagadas a los directores dentro del plazo de presentación de la declaración anual del Impuesto a la Renta[533], por lo que al estar regulado lo solicitado, no corresponde la delegación en este punto.

Conclusión
Con relación al presente punto no corresponde se otorgue la delegación solicitada.

e.2) Modificar la tasa y señalar reglas para la determinación de los pagos a cuenta, así como la retención con carácter de pago a cuenta tratándose de los contribuyentes que perciben rentas de cuarta categoría.

El Ejecutivo en el presente punto para solicitar delegación de facultades sostiene que el modelo de retenciones con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta de los contribuyentes perceptores de rentas de cuarta categoría, genera acumulación de saldos por regularizar al final del ejercicio que podrían generar riesgo de incumplimiento en el pago y/o mayor carga administrativa para la Administración Tributaria por la atención de solicitudes de devolución o saldos a favor del contribuyente originados por pagos a cuenta y retenciones en exceso; por lo que, el actual diseño de retención del 8% no ha cumplido su objetivo[534].

---

[533] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 35. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

[534] P.L. 07752-2024-PE, p. 149. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

Para tal efecto proponen modificar la tasa y señalar reglas para determinar los pagos a cuenta, así como la retención con carácter de pago a cuenta tratándose de los contribuyentes que perciben rentas de cuarta categoría[535].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que lo peticionado por el Ejecutivo carece de análisis en relación en cuánto impactaría en los contribuyentes bajo esta modalidad, sobre la formalidad y el incremento de la recaudación. Agrega la Comisión de Economía, si bien se identifica la problemática, sin embargo, no se cuantifica. De la misma manera, en el contexto económico vigente, pretender elevar la tasa sobre pagos a cuenta resultaría en menores ingresos disponibles para los contribuyentes resultando perjudicial. Esta materia requiere mayor análisis y debate con detenimiento en el Congreso de la República. En ese sentido, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[536].

El modelo de pago a cuenta de los contribuyentes perceptores de rentas de cuarta categoría, si bien generan acumulación de saldos por regularizar al final del ejercicio, no justifica que por esta razón se eleve la tasa sobre pagos a cuenta. La SUNAT tiene otros mecanismos menos gravosos y que no inciden en el patrimonio de los contribuyentes para resolver la problemática que plantea referido al incumplimiento en el pago, carga administrativa para atender solicitudes de devolución o saldos a favor del contribuyente por pagos a cuenta y retenciones en exceso. En tal sentido, tratándose de una modificación de la tasa sobre pagos a cuenta, la misma que afecta directamente al patrimonio de los contribuyentes, exige un mayor debate, discusión, participación de los sujetos involucrados y especialistas sobre la materia, por lo que la presente solicitud debe de tramitarse vía proyecto de ley.

---

[535] P.L. 07752-2024-PE, p. 149. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[536] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 36. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

Conclusión
Con relación al presente punto no corresponde se otorgue la delegación solicitada.

e.3) Modificar las disposiciones relativas a la condición de habitualidad en la enajenación de inmuebles efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal; así como modificar las disposiciones sobre los documentos que debe presentarse ante el notario público por la enajenación de inmuebles derechos sobre los mismos; y las normas relativas a la responsabilidad solidaria de los notarios públicos en el caso de enajenación de inmuebles.

Para la delegación de facultades sobre el presente punto el Ejecutivo se basa en que existe un grupo de contribuyentes que de modo frecuente realizan enajenaciones de inmuebles de un ejercicio a otro inmediato, lo que demuestra que existe la posibilidad que estén difiriendo aquellas enajenaciones a fin de no incurrir en habitualidad y así no tener que pagar por dichas operaciones como renta de tercera categoría (tasa del impuesto a la renta de 29,5%), sino como ganancia de capital como renta de segunda categoría (tasa del impuesto a la renta de 5%)[537].

Para ello propone el Ejecutivo modificar las disposiciones referidas a la habitualidad en la enajenación de inmuebles, sobre documentos que deben presentarse al notario público en la enajenación de inmuebles y normas sobre responsabilidad solidaria de los notarios sobre enajenación de inmuebles[538].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con

---

[537] P.L. 07752-2024-PE, p. 150. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[538] P.L. 07752-2024-PE, p. 150. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

el presente punto, señala que la información presentada por el Ejecutivo no indica el número de contribuyentes que se estarían beneficiando de esta condición, así como la magnitud de pérdida que representa para la SUNAT. Se requiere que esta materia específica sea discutida con mayor detenimiento en el Congreso de la República. En ese sentido, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[539].

De conformidad a lo señalado por la Comisión de Economía, las medidas referidas a mejorar y garantizar el cumplimiento tributario, de tal modo que se combata eficazmente las prácticas elusivas de sujetos que rehúyen del gravamen correspondiente, realizando la enajenación de inmuebles en un ejercicio gravable a fin de posponerlo para el siguiente ejercicio y no incurrir en habitualidad, requieren de mayor información a la brindada en la exposición de motivos, referente a precisar el porcentaje de contribuyentes que realizan estas prácticas y el impacto que tiene en la recaudación, por lo que tratándose de una práctica que difiere la enajenación de inmuebles para no caer en habitualidad requiere el acopio de mayor información, de la identificación de los sujetos y de las prácticas realizadas, además de ser analizado y debatido en el Parlamento en un diálogo abierto con los sectores involucrados y los especialistas.

Conclusión
Con relación al presente punto no corresponde se otorgue la delegación solicitada.

e.4) Establecer la obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a cargo de la persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por las enajenaciones indirectas a que se refiere el inciso e) del artículo 10 de Ley del Impuesto a la Renta, no sujetas a retención, lo que incluye establecer reglas necesarias para su determinación.

[539] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 36. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

Con relación al presente punto para la delegación de facultades el Ejecutivo sostiene en el caso de rentas de segunda categoria por las enajenaciones indirectas de valores, no sujetas a retención, existe riesgo de incumplimiento tributario por diferimiento del pago del impuesto hasta la determinación final del ejercicio al no existir la obligación de realizar pagos a cuenta, en el caso de las personas naturales, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal[540].

Para tal efecto, propone el Ejecutivo, regular la obligación de realizar pagos a cuenta del impuesto a la renta de estos contribuyentes, así como establecer el procedimiento para que puedan calcular dicho pago a cuenta[541].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoria el Informe sobre materias especificas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que el Ejecutivo propone regular la obligación de realizar pagos a cuenta del impuesto a la renta, asi como establecer el procedimiento para que las personas naturales, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, que perciban rentas de segunda categoria generadas por enajenaciones indirectas de valores, puedan calcular dicho pago a cuenta. En ese sentido, en el marco de las mejoras en materia tributaria, la Comisión de Economía considera que compete delegar facultades sobre el presente numeral[542].

En tal sentido, a fin de evitar el riesgo de incumplimiento tributario diferido del pago del impuesto a la renta hasta la determinación final del ejercicio en el caso de las personas naturales, sucesión indivisa o sociedad conyuga por rentas de segunda categoria, las medidas que propone el Ejecutivo consiste en regular la obligación de realizar pagos a cuenta del impuesto a la renta y calcular dicho pago, cumplirían con el fin de disminuir el

---

[540] P.L. 07752-2024-PE, p. 150. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[541] P.L. 07752-2024-PE, p. 150. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[542] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias especificas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 37. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

riesgo de incumplimiento tributario, por lo que corresponde se otorgue la delegación solicitada.

Conclusión

Con relación al presente punto corresponde se otorgue la delegación solicitada con el siguiente texto sustitutorio:[543]

"Modificar el inciso e) del artículo 10 de Ley del Impuesto a la Renta a fin de establecer la obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a cargo de la persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por las enajenaciones indirectas a que se refiere, no sujetas a retención, lo que incluye establecer reglas necesarias para su determinación".

e.5) Modificar la regulación de intereses. Comprende: Regular la definición de intereses de deuda, así como aquellos supuestos vinculados a las operaciones de financiamiento y gastos incurridos en relación con la obtención de financiación, así como el tratamiento de las fluctuaciones cambiarias vinculadas a las operaciones de financiamiento. Ajustar la regla del umbral mínimo establecida como excepción a la aplicación de la regla del EBITDA; e, incorporar precisiones legislativas que resultan necesarias para la adecuada aplicación de la regla del EBITDA.

El Ejecutivo para solicitar la delegación de facultades con relación al presente punto señala que existe riesgo de incumplimiento tributario respecto de la deducción de los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, debido a que determinadas cargas financieras no han sido consideradas para efectos del límite establecido en la Ley, por lo que propone modificar la Ley del Impuesto a la Renta

[543] Para mayor precisión en el objetivo de la propuesta, se regresa a la fórmula inicial del pedido de facultades contenido en el numeral 2.7.2, e.4) del proyecto de ley 7752/2023-PE

para definir "intereses de deuda", entre otros, y ajustar el umbral mínimo establecido como excepción a la regla del EBITDA[544].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que requiere que esta materia específica sea discutida con mayor detenimiento en el Congreso de la República. En ese sentido, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[545].

Las medidas que propone el Ejecutivo que consisten en definir "intereses de deuda", ajustar el umbral mínimo e incorporar precisiones legislativas para la aplicación de la regla del EBITDA, para reducir el riesgo de incumplimiento tributario referido a la deducción de intereses de deudas y gastos por constitución, renovación o cancelación de las mismas, son medidas que exigen un análisis que comprenda a todos los sectores involucrados, a especialistas sobre la materia y ser debatido en el Parlamento vía proyecto de ley.

Conclusión

Con relación al presente punto no corresponde se otorgue la delegación solicitada.

e.6) Perfeccionar las normas que regulan los acuerdos anticipados de precios.

Sobre el presente punto la solicitud de delegación de facultades del Ejecutivo se basa en que actualmente la Ley del Impuesto a la Renta regula los Acuerdos Anticipados de Precios (APA), no se permite que la metodología de valoración y el precio acordado en un APA, pueda aplicarse a transacciones realizadas en ejercicios anteriores no prescritos cuando los hechos y las circunstancias coincidan (aplicación retroactiva). Agrega el Ejecutivo que

---

[544] P.L. 07752-2024-PE, p. 150. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[545] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 37. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

la aplicación retroactiva del APA cuando un país tenga un programa de APA bilateral, constituye una de las medidas del estándar mínimo de la acción 14 de BEPS referido a hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias previstos en los CDI, por lo tanto, el Perú tiene el compromiso de implementar dicha medida al ser miembro del Marco Inclusivo de BEPS de la OCDE. En atención a ello, se propone modificar la Ley del Impuesto a la Renta para perfeccionar el tratamiento de los APA[546].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que si bien la Ley del Impuesto a la Renta los regula, no se permite que la metodología de valoración y el precio acordado en un APA, pueda aplicarse a transacciones realizadas en ejercicios anteriores no prescritos cuando los hechos y las circunstancias coincidan (aplicación retroactiva). Asimismo, agrega la Comisión de Economía, existen otros aspectos de la regulación del APA que requieren ser modificados a través de la Ley del Impuesto a la Renta para facilitar y promover la celebración de estos acuerdos. En ese sentido, en el marco de las mejoras en materia tributaria, la Comisión considera que compete delegar facultades sobre el presente numeral[547].

En esta dirección, a fin de implementar las medidas que son parte del estándar mínimo de la acción 14 de BEPS (erosión de bases imponibles y traslado de beneficios) de la OCDE, por la que se busca evitar que las empresas multinacionales saquen ventaja de los vacíos y divergencias en las normas tributarias internacionales para trasladar beneficios intencionalmente a países de baja o nula tributación, a la par que eluden el pago de cuota de impuestos[548], las medidas que propone el Ejecutivo contribuirán a reducir los riesgos de

---

[546] P.L. 07752-2024-PE, p. 151. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[547] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 38. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

[548] OECD.org. "Acabar con el traslado de beneficios al extranjero". En https://www.oecd.org/acerca/impacto/con-el-traslado-de-beneficios-al-

futuras controversias sobre la aplicación de normas de precios de transferencia en los contribuyentes y la administración tributaria, así como ayudará a la adhesión de la OCDE.

Conclusión
Con relación al presente punto corresponde se otorgue la delegación solicitada con el siguiente texto sustitutorio:

"Perfeccionar las normas que regulan los acuerdos anticipados de precios, de conformidad al estándar mínimo de la acción 14 del proyecto BEPS de la OCDE".

e.7) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta en lo referente a otros métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y garantizar el principio de reserva de ley, entre otros.

Con relación al presente punto la solicitud de delegación de facultades del Ejecutivo se basa en que a efectos de garantizar la eficiencia de la Ley del Impuesto a la Renta sobre los precios de transacciones sujetos a precios de transferencia, conforme lo regula el artículo 32-A, sobre los otros métodos que se refiere el numeral 7) del inciso e), se ve en la necesidad de regular parámetros exigidos por el principio de reserva de ley, requiere perfeccionarla y que reflejen de mejor medida de la realidad económica de operaciones, entre otras, como enajenaciones de acciones o participaciones representativas de capital que no cotizan en Bolsa, enajenación de intangibles, etc.[549].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que respecto de la regulación de los otros métodos a que se

---

extranjero.htm#:~:text=La%20larga%20expresi%C3%B3n%20%C2%ABerosi%C3%B3n%20de,tributarias%20internacionales%20para%20trasladar%20beneficios

[549] P.L. 07752-2024-PE, p. 152. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

refiere el numeral 7) del inciso e) del artículo 32-A de la LIR, se ve necesario regular parámetros exigidos por el principio de reserva de ley; por lo que, a efectos de garantizar la eficiencia de la norma se requiere perfeccionarla y que reflejen de mejor medida de la realidad económica de operaciones, entre otras, como enajenaciones de acciones o participaciones representativas de capital que no cotizan en Bolsa, enajenación de intangibles, etc. En ese sentido, la Comisión de Economía, en el marco de las mejoras en materia tributaria, considera que compete delegar facultades sobre el presente numeral[550]. A fin de alcanzar un valor que refleje la realidad económica de las operaciones se requiere que los métodos de valoración vigente cuenten con métodos específicos para transacciones cuando los métodos regulados en los numerales del 1 al 6 del inciso e) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta no resulten apropiados, por lo que las medidas que propone el Ejecutivo son idóneas.

Conclusión

Con relación al presente punto corresponde se otorgue la delegación solicitada con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar el numeral 7) del inciso e) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta referido a otros métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y garantizar el principio de reserva de ley".[551]

f) Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a fin de regular el acceso a información financiera para la función recaudadora de la SUNAT, observando el marco constitucional.

---

[550] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias especificas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 38. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

[551] Para mayor precisión en el objetivo de la propuesta, se regresa a la fórmula inicial del pedido de facultades contenido en el numeral 2.7.2, e.7) del proyecto de ley 7752/2023-PE

Para la solicitud de delegación de facultades en el presente punto el Ejecutivo sostiene que es necesario ampliar el uso de la información financiera a que se refiere el artículo 143-A de la Ley N° 26702, para que la información suministrada por las entidades del sistema financiero se use por la SUNAT para su función recaudatoria[552].
Propone el Ejecutivo modificar el artículo 143-A de la Ley N° 26702 para que la información financiera que se reporta a la SUNAT pueda ser utilizada a efectos de sus acciones de cobranza, y hacer más eficiente la cautela de la deuda tributaria determinada y las acciones de cobro como son las medidas de embargo de cuentas del sistema financiero[553].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que actualmente la información financiera tiene dos fines, el cumplimiento de tratados internacionales o Decisiones de la CAN y el combate de la evasión y elusión tributaria. De tal modo, la Comisión de Economía, agrega, desde el punto de vista económico la ampliación de los fines con motivo recaudatorio podría reducir la formalidad de los servicios financieros; sin embargo, hacer uso de este tipo de información para una función recaudatoria debería ser evaluado desde el punto de vista legal con mayor abundamiento. En ese sentido, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[554].

El fin que persigue el Ejecutivo con la presente solicitud de delegación de facultades, que se expresa en que busca que las acciones de cobra sean más eficientes con el uso de información a la que tiene acceso, con fines de recaudación, se ve confrontada en primer lugar con los propios fines que la ley N° 26702, artículo 143-A, habilitando solo para cumplimiento de tratados o decisiones del CAN y la función fiscalizadora para evitar la

---

[552] P.L. 07752-2024-PE, p. 152. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[553] P.L. 07752-2024-PE, p. 152. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf
[554] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 39. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

evasión y elusión tributaria, por lo que, en la ley no se ha contemplado para fines de recaudación que ahora solicita la SUNAT. Y tratándose de ampliar los fines que se hará uso de información que tiene acceso, corresponde al Parlamento debatir estos alcances, en un contexto de debate plural, abierto, con convocatoria de los sujetos involucrados y de especialistas en la materia.

Conclusión
Con relación al presente punto no corresponde se otorgue la delegación solicitada.

g) Modificar el marco normativo que regula el intercambio automático de información de cuentas financieras, a fin de incorporar, entre otros, las siguientes disposiciones:

g.1) Norma antielusiva para contrarrestar los esquemas implementados para eludir los procedimientos de debida diligencia y la obligación de reporte; y

g.2) Establecimiento de una sanción para los titulares de las cuentas y para las personas que ejercen el control de los mismos cuando presenten una declaración jurada falsa sobre su residencia fiscal u otra información requerida por las entidades financieras sujetas a reportar.

Con relación al presente punto, la solicitud de delegación de facultades señala que el Perú se encuentra adherido al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de información con Fines Fiscales de la OCDE desde el año 2014, y habiendo asumido el compromiso de implementar el estándar internacional de intercambio automático de información de cuentas financieras, así como a sujetarse al proceso de monitoreo y revisión de su implementación efectiva (revisión de pares) y efectuar intercambios automáticos de dicha información a partir del año 2020, en el año 2022 se concluyó la revisión de pares del marco normativo que regula el intercambio automático de información de cuentas financieras en el Perú, se le hicieron recomendaciones. Y en el marco del proceso de adhesión del Perú a la OCDE, se está solicitando la pronta implementación de dichas recomendaciones[555].

[555] P.L. 07752-2024-PE, p. 152. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias especificas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que sobre el presente numeral cabe resaltar que, si bien es una solicitud en el marco del proceso de adhesión del Perú a la OCDE, la Comisión de Economía considera que el pedido no se encuentra en el marco de la urgencia por la reactivación económica y podría ser tratado con mayor debate a través del envío de un Proyecto de Ley de parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no podrían brindarse facultades sobre la materia del presente numeral[556].

Considerando el informe de la Comisión de Economía, la solicitud del Ejecutivo sobre el intercambio automático de información de cuentas financieras para incorporar normas antielusivas y sanción para los titulares de las cuentas, no se advierte su vinculación directa con la reactivación económica, por lo que, este punto se debería tramita vía proyecto de ley.

Conclusión
Con relación al presente punto no corresponde se otorgue la delegación solicitada.

h) Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país.

[556] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias especificas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 39. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

Las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero tienen la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país. Para ello requieren contar con un número de RUC. En tal sentido, propone el Ejecutivo simplificar los requisitos exigidos para su inscripción en el RUC tales como el vinculado al domicilio fiscal a fin de facilitar el cumplimiento de dicha obligación formal[557].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con el presente punto, señala que las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero tienen la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país. Para ello requieren contar con un número de RUC. Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo propone simplificar los requisitos exigidos para su inscripción en el RUC tales como el vinculado al domicilio fiscal a fin de facilitar el cumplimiento de dicha obligación formal. La Comisión considera pertinente delegar facultades en la materia del presente numeral en el contexto de mejoras al marco tributario[558].

Para tales efectos, la simplificación de los requisitos para la inscripción del RUC de las personas no domiciliadas tenga la obligación de presentar la declaración del beneficiario cuando cuente con una sucursal, agencia o establecimiento, es una materia especifica, está vinculada a la reactivación económica, es una materia delegable y está vinculada al perfeccionamiento tributario.

Conclusión

Con relación al presente punto corresponde se otorgue la delegación solicitada con el siguiente texto sustitutorio:

---

[557] P.L. 07752-2024-PE, p. 152. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[558] Comisión de Economia, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias especificas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 34. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

"Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país, con fines de información".

i) **Aprobar un fraccionamiento especial para deudas administradas por la SUNAT que constituyan ingresos del Tesoro Público exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023 incentivando el pago de las deudas mediante el otorgamiento de un bono de descuento en función del nivel de deuda y condicionado al cumplimiento del pago, sin incluir descuento sobre insoluto ni anticipo.**

Para el presente punto el Ejecutivo sostiene para la solicitud de delegación de facultades que existe un gran volumen de deuda que no puede ser cobrada debido a que se encuentra pendiente de resolución en las diversas instancias del procedimiento administrativo o judicial (en especial en el Tribunal Fiscal).

Y, considerando que la SUNAT tiene recursos limitados, no le es posible auditar a la totalidad de los contribuyentes; por lo que, se requiere permitir a estos a regularizar voluntariamente su adeudo, así como la subsanación de declaración y pagos respectivos[559]. Para lo cual plantea el Ejecutivo regular el Fraccionamiento Especial para permitir el pago de las deudas administradas por la SUNAT que constituyen ingresos al Tesos Público a través del fraccionamiento y/o aplazamiento[560].

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (en adelante Comisión de Economía), reunida en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, acordó por mayoría el Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023- 2024, en relación con

---

[559] P.L. 07752-2024-PE, p. 154. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

[560] P.L. 07752-2024-PE, p. 154. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxNTE2/pdf

el presente punto, señala que el Ejecutivo propone regular el Fraccionamiento Especial para permitir el pago de las deudas administradas por la SUNAT que constituyen ingresos del Tesoro Público, a través del fraccionamiento y/o aplazamiento tomando en consideración criterios específicos. La Comisión considera pertinente delegar facultades en la materia del presente numeral en el contexto de mejoras al marco tributario[561].

Con la presente medida se busca generar facilidades extraordinarias para pagar deudas ante la SUNAT, complementarias a las ya reguladas en el Código Tributario bajo el concepto de fraccionamiento general. Esta solicitud también es efectiva para el pago de adeudo, tiene un impacto directo en la reactivación económica, en tanto se busca sanear las deudas ante la SUNAT, disminuir los litigios y acelerar la recaudación tributaria, por lo que este punto corresponde otorgar facultades.

Conclusión
Con relación al presente punto corresponde se otorgue la delegación solicitada en sus términos.

Pedido de facultades en materia criminológica y penitenciaria

3.8.1 Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, con la finalidad de optimizar el marco legal que tipifica la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual y el chantaje sexual, considerando en estas conductas al uso de la tecnología digital.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

[561] Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Informe sobre materias específicas consideradas en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, periodo anual de sesiones 2023-2024, adoptado en la décimo octava sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de 2024, p. 34. En https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTkzNDU1/pdf

La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar constituye una problemática social muy grave, que se desarrolla en diversos ámbitos, de diversas maneras y en espacios públicos como privados.

El Estado peruano sostiene su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, manifestado a través de la suscripción, ratificación, adhesión e implementación de tratados internacionales, la adopción de normas internas y la elaboración e implementación de políticas públicas e intervenciones orientadas a la erradicación de dicho problema. La presente norma se orienta a continuar con el objetivo mencionado a través de la sanción de la difusión no autorizada o amenaza de difusión de material con contenido sexual elaborado o modificado con tecnologías digitales.

En ese sentido, la solicitud de facultades legislativas respecto a esta submateria pretende:

a. Sancionar la difusión no autorizada o amenaza de difusión de material con contenido sexual elaborado o modificado con tecnologías digitales.

b. Modificar el tipo penal de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual contenido en el artículo 154-B del Código Penal a fin de introducir como agravante el haber obtenido dicho material audiovisual con anuencia de la persona.

En ese sentido señalan que es importante la regulación penal de dichas conductas pues como informa la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en 2015, informó que el 73% de mujeres habian vivido alguna forma de violencia de género en línea y que, en el 61% de estas situaciones, los atacantes eran hombres; esto en consonancia con lo señalado por el Programa Nacional AURORA, que informa que de enero a diciembre del 2023 a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 71 casos de violencia a través del uso de la TIC, de los cuales el 98.6% son mujeres. Ello sumado a las 566 alertas de acoso virtual reportadas en el año 2022 de acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, siendo el 90% de víctimas mujeres.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

A la luz de los parámetros materiales constitucionales podemos afirmar que, el pedido de delegación respecto a esta submateria cumple con el marco constitucional respecto de la delegación de facultades toda vez que no versa sobre materias indelegables, se cumple con la especificidad exigida sobre la materia a delegar, la que es solicitada por un plazo específico.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El marco explicativo de la medida solicitada nos contextualiza la necesidad de penalizar las nuevas formas de violencia hacia la mujer en entornos virtuales, quienes tienen derecho a vivir una vida sin violencia, ello en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano como es el caso específico de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la convención Belém do Pará, y que fue aprobada por el Perú mediante la Resolución Legislativa 26583 del 22 de marzo de 1996, la misma que fue ratificada el 2 de abril de 1996.

En ese sentido, es necesario reforzar el marco normativo penal, optimizando sus tipos penales a las nuevas formas o manifestaciones de la violencia contra la mujer como es el llamado *deepfake*, el que según el diccionario de la Fundación del Español Urgente — FundéuRAE, alude a:

> *"[...] los sistemas informáticos que permiten, mediante técnicas de inteligencia artificial, desarrollar vídeos manipulados extremadamente realistas, aunque también es frecuente que se aplique a los vídeos así creados. El realismo es tal que puede ser imposible saber que ha sido falseado, lo que sirve, por ejemplo, para propagar noticias falsas y como pornovenganza. Este es su uso original, pero en ocasiones se utiliza para manipulaciones similares, como en audio."*[562]

[562] FUNDEU RAE. Disponible en: https://www.fundeu.es/recomendacion/ultrafalso-alternativa-a-deep-fake/

No obstante, además de las formas de manifestación de estas falsificaciones, una de esta cobra especial relevancia. Es precisamente los deepfakes cuya finalidad es la de simular imágenes, videos o audios con contenido sexual; por lo que, esta Comisión considera adecuada la decisión de otorgar facultades legislativas para penalizar tal conducta, contribuyendo así con la erradicación de la violencia contra la mujer en todos los espacios de la vida social, incluyendo los espacios virtuales, compartiendo en ese sentido la opinión de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República que considera viable el otorgamiento de facultades legislativas en ese extremo, posición formulada mediante la opinión consultiva 02-2023-2024-CMF/CR aprobada en la décima octava sesión extraordinaria del 29 de mayo de 2024.

Del mismo modo, y pese a que la fenomenología del problema y su fundamentación se centra exclusivamente en la mujer, consideramos acertado que el tipo penal no se limite únicamente al género pese a que exista una prevalencia mayoritaria de las mujeres como víctimas de esta conducta antisocial; no obstante, y en mérito a consideraciones puramente técnicas, esta Comisión considera que el bien jurídico vulnerado con la generación de estos contenidos audiovisuales de contenido sexual no es estrictamente la intimidad, como es el bien jurídico tutelado por el artículo 154-B del Código Penal, artículo que pena la violación de la intimidad.

Actualmente, no existe consenso respecto si estas nuevas conductas antisociales materializadas a través de la tecnología de inteligencia artificial generativa vulneran el derecho a la intimidad -*el cual debe ser reinterpretado a la luz de la nueva configuración social*- o por el contrario vulnera el derecho al honor, imagen, voz, puesto que no expone una intimidad real, o si es un hecho pluriofensivo; inquietudes compartidas por Lloria García[563] y Trujillo Cabrera[564], entre otros.

---

[563] LLORIA GARCÍA, «Delitos y redes sociales: los nuevos atentados a la intimidad, el honor y la integridad moral (especial referencia al sexting). Disponible en: https://producciocientifica.uv.es/documentos/5eb09dbe2999527641130aa4

[564] Cfr. Trujillo Cabrera, Carlos. El derecho a la propia imagen (y a la voz) frente a la inteligencia artificial. Revista InDred. 1 (2024). Disponible en: https://indret.com/wp-content/uploads/2024/01/1841.pdf

Finalmente, respecto de la ubicación del mencionado tipo penal, coincidimos con lo opinado por el profesor Oré Guardia, miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento en materia penal, quien en su informe opina que:

> "[...] las modificaciones que han sido propuestas claramente están orientadas a la criminalización de comportamientos que impliquen el empleo de la tecnología asociada a la información o comunicaciones (TICs), por lo que una mejor ubicación para la tipificación de tales actos le ofrece la Ley 30096 (Ley de delitos informáticos), específicamente, en el capítulo que comprende los ilícitos que afectan la intimidad y el secreto de las comunicaciones."

En ese sentido, la misma suerte corre la propuesta modificatoria del artículo 176-C del Código Penal que tipifica el chantaje sexual, debiendo ser incorporado dicho supuesto en la Ley 30096, Ley de delitos informáticos.

Conclusión

La submateria solicitada cumple con el parámetro de constitucionalidad, no obstante, consideramos pertinente que las modificaciones pretendidas por cuestiones técnicas se realicen respectivamente en el Código Penal y en la Ley 30096, Ley de delitos informáticos, por lo que se propone el siguiente texto sustitutorio:

> "3.8.1 Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635 con la finalidad de optimizar el tipo penal de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual, así como tipificar en la Ley de delitos informáticos, Ley 30096, la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, generados empleando tecnología digital, así como el chantaje sexual derivado de estos."

3.8.2 Fortalecer la seguridad en el ámbito penitenciario, regulando las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones e Internet en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales desde el interior de establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El proyecto normativo respecto a la solicitud de facultades con el objeto de fortalecer la seguridad de las telecomunicaciones en el ámbito penitenciario se fundamenta en un aumento de las actividades delictivas relacionadas con las comunicaciones ilegales desde los centros penitenciarios, pese a los cortes de servicio y bloqueo de terminales móviles realizados por las empresas operadoras de telecomunicaciones entre 2021 y 2024, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo 006-2011-JUSM.

En ese sentido, también señala que en tal lapso de tiempo se han reportado un total de 44,594 bloqueos en los sesenta y ocho establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Por ejemplo, el EP Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho, ha registrado la mayor cantidad de casos reportados por las empresas operadoras, con un total de 4502 casos. Le siguen el EP de Tarapoto con 4036 casos y el EP de Lurigancho, también ubicado en San Juan de Lurigancho, con 3587 casos, entre otros; cifras que no se condicen con la cantidad de terminales móviles incautados por el INPE, citando como ejemplo el caso del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, que en el periodo de 2015 a 2023 han registrado 3277 celulares.

Del mismo modo señala que se han implementado diversas acciones y medidas, entre las cuales se encuentra la instalación de bloqueadores o inhibidores de señal, conforme al Decreto Supremo 012-2012-MTC; no obstante, estas medidas han resultado insuficientes por diversas razones, entre las que se encuentran la presencia de antenas ilegales cuyo objeto es evadir los bloqueadores, así como la corrupción del personal penitenciario, quienes facilitan la elusión de los bloqueadores.

En ese sentido, concluyen como necesaria la participación de todos los actores, lo que incluye a los proveedores del servicio de telefonía móvil, pues a pesar de las normas

vigentes que imponen obligaciones a las empresas operadoras de telecomunicaciones para prevenir las comunicaciones ilegales desde los establecimientos penitenciarios, aún no se han establecido sanciones civiles y administrativas por su incumplimiento. Además, no se ha considerado la imposición de obligaciones y sanciones a los operadores de servicios de Internet, que no siempre son las mismas empresas de telecomunicaciones que brindan estos servicios.

Por lo que, es fundamental establecer nuevas obligaciones, como proporcionar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Instituto Nacional Penitenciario acceso a la localización o geolocalización de los dispositivos que utilicen su red dentro de los establecimientos penitenciarios, entre otras medidas que serán materia de sustento en la propuesta normativa; propuesta que consolide todas las obligaciones y sanciones aplicables a los operadores de telecomunicaciones en un único marco normativo y evitar la dispersión de disposiciones de similar naturaleza, resulta imperativo promulgar una norma con rango de ley al respecto.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Estando a los parámetros constitucionales establecidos en los artículos 101, 104 de la Constitución, la propuesta del Poder Ejecutivo sobre el presente punto cumple con los requisitos de constitucionalidad al ser una materia delegable, cumpliendo con el principio de especificidad y plazo de delegación.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Debemos partir por entender que el problema que se busca solventar se halla vinculado íntimamente con asuntos de seguridad ciudadana, pues es innegable como los centros penitenciarios hoy en día se han convertido en reductos en los que facilitados por una gestión ineficiente o por la corrupción, permiten a los delincuentes seguir cometiendo delitos tanto directamente como a través de terceros, ordenando así homicidios, secuestros, y extorsiones, entre otros ilícitos, por lo que, como sociedad no podemos dar la espalda a una problemática como la descrita que incide de manera directa en los derechos fundamentales de la ciudadanía.

En ese sentido, la posición del Poder Ejecutivo tiene como fundamento la necesidad de optimizar el marco normativo existente el que se halla muy disperso y atomizado en diversos cuerpos normativos como son:

a. El Decreto Supremo 006-2011-JUS el que establece la obligación a las operadoras a cortar el servicio y bloquear celulares por uso prohibido en establecimientos penitenciarios, conforme al artículo 37 Código de Ejecución Penal.

b. El Decreto Legislativo 1182, mediante el que se penaliza el ingreso indebido de equipos de comunicación en centros penitenciarios y establece la obligación a las operadoras de telefonía móvil de advertir al destinatario de una comunicación proveniente de una prisión.

c. El Decreto Legislativo 1229, a través del que se prohíbe a las operadoras emitir señales hacia el interior y sobre los establecimientos penitenciarios, además de declarar una zona de intangible de doscientos metros alrededor de las cárceles.

d. El Decreto Legislativo 1338, mediante el que se obliga a las operadoras de servicios telefónicos móviles dar de baja y bloquear equipos terminales móviles vinculados a delitos, por requerimiento del INPE.

e. Decreto Supremo 012-2012-MTC, que regula la operación de equipos bloqueadores o inhibidores de señales radioeléctricas en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación y cautela el derecho de las personas a usar y prestar servicios de telecomunicaciones en los exteriores de estos establecimientos penitenciarios.

f. La Resolución de Consejo Directivo 112 -2011-CD/OSIPTEL, que regula el procedimiento de bloqueo de celulares empleados en los penales.

Es así como la fragmentación normativa puede incidir de manera negativa en la coherencia y sistematicidad de las mencionadas disposiciones normativas, por lo que, es razonable y adecuada la emisión de un decreto legislativo que consolide, sistematice e integre de manera adecuada las mencionadas normas, las que en su mayoría son de orden legal, por lo que, esta comisión Considera pertinente la emisión de una norma única que contenga en

un solo cuerpo único todas las obligaciones y sanciones aplicables a los operadores de telefonía celular, más aún cuando las actuales no contienen sanciones civiles y/o administrativas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas precitadas.

No obstante, no es menos relevante señalar que dicha normación debe considerar de manera adecuada la salvaguarda del derecho de acceso a las telecomunicaciones y el internet, regulado en los artículos 2.4 y 14-A de la Constitución de las poblaciones aledañas quienes podrían ver menoscabado su derecho si esta normación se realizada de manera inadecuada, lo que podría acentuar posiciones o estados de vulnerabilidad, pues en dichas comunidades ciudadanas existen mujeres, niños y ancianos que se encuentran beneficiados con la prestación del servicio de telecomunicaciones y concretan derechos como la comunicación, educación y el trabajo, carencias que se visibilizaron con el inicio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, pues estas poblaciones al no poder acceder al internet o la telefonía celular, no podían trabar de manera remota o asistir a clases virtuales.

Conclusión

La submateria solicitada cumple con el parámetro de constitucionalidad, no obstante, consideramos pertinente acotar el dispositivo normativo a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía potencialmente afectada, por lo que se propone el siguiente texto sustitutorio:

> "3.8.2 Unificar y sistematizar el marco legal sobre las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones e Internet en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales desde el interior de establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, salvaguardando los derechos de acceso a las telecomunicaciones e internet de las poblaciones aledañas".

3.8.3 Modificar la Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), con la finalidad de optimizar su funcionamiento en relación con la gestión de las políticas públicas que buscan comprender, prevenir, controlar, reducir y sancionar la criminalidad.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Después de 12 años y tras 25 sesiones celebradas a la fecha, se elaboró un balance del funcionamiento del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), dentro del cual se advirtió las siguientes dificultades: i) Dificultades técnicas en materia de intervención político criminal relacionada con la distinción entre seguridad ciudadana y política criminal, lo cual repercute en los alcances funcionales del CONAPOC; ii) Necesidad de organicidad y posicionamiento del CONAPOC para ampliar su capacidad de coordinación y acción sobre todas las instituciones estatales involucradas en temas de prevención y control de los fenómenos criminales a nivel nacional; y, iii) Importancia de incluir herramientas de monitoreo y evaluación de las políticas, estrategias y acciones implementadas para la prevención y control de la criminalidad; así como herramientas de gestión del conocimiento criminológico, a fin de brindarle eficacia al cumplimiento de todas las políticas del Estado en esta materia.

Esta medida no irrogará gastos adicionales al Estado, en tanto las medidas que se proponen serán implementadas con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que, a través de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, la cual ejerce la Secretaría Técnica de dicho colegiado.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, el presente acápite supera el control de constitucionalidad al ser materia delegable y contar con el análisis de especificidad respectivo.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

En la actualidad, a nivel del Estado existen dos organismos transversales dedicados a la gestión de programas de política criminal: a) el Consejo Nacional de politica Criminal (CONAPOC); y, b) el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), los que se encuentran regulados de manera heterogénea, pues sus integrantes, no son los mismos ni cuentan con las mismas facultades.

Es así como, el CONASEC se encuentra presidido por el presidente del Consejo de ministros, mientras que el CONAPOC, es dirigido por el ministro de Justicia, pudiendo este último a diferencia del CONASEC poder invitar a otras autoridades del Estado y/o representantes del sector privado y/o representantes de la sociedad civil organizada, las universidades, centros de investigación, comités de autodefensa, entre otros que considere conveniente. Es así como, las decisiones tomadas al interior del CONAPOC que requieran la intervención del Consejo de ministros deberán ser sometidas a aprobación de este a diferencia del CONASEC pues la conformación de este incluye a los representantes de los ministerios como de la presidencia del Consejo de ministros, por lo que sus decisiones son mucho más fácilmente implementadas.

Por lo que, es necesaria la equiparación horizontal y complementaria de estos organismos el establecimiento de herramientas de monitoreo y evaluación de las políticas, estrategias y acciones implementadas para la prevención y control de la criminalidad; así como herramientas de gestión del conocimiento criminológico, a fin de brindarle eficacia al cumplimiento de todas las políticas del Estado en esta materia.

Conclusión

En cuanto a esta submateria solicitada se encuentra justificado el pedido de delegación de facultades. Por tanto, se mantiene en sus términos el texto presentado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley estudiado.

3.8.4 Modificar el Decreto Legislativo N° 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de dotar de mayor celeridad la conducción y toma de decisiones vinculadas a la gestión e implementación de la política criminológica y penitenciaria

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El Poder Ejecutivo fundamenta el pedido de facultades de la presente submateria en la falta de ejecución de los dispuesto por el Decreto Legislativo 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del 6 de enero de 2017, mediante el que se dictaron medidas que buscaban fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional, entre las que se encuentran la modificación de su estructura orgánica, reemplazando el Consejo Nacional, *-máximo órgano de dicha institución-*, por un Consejo Directivo, integrado por representantes de diversos sectores.

No obstante, y luego de trascurridos siete años desde dicha modificación no ha obrado realmente el reemplazo del Consejo Nacional por el Consejo Directivo. En ese sentido, el presente pedido de facultades normativas delegadas busca modificar dicho modelo corporativo de gobierno institucional por una jefatura, con la finalidad de que la toma de decisiones sea célere, ello coadyuvado por una ejecución expedita en materia de gestión e implementación de políticas criminológicas y penitenciarias.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, el presente acápite supera el control de constitucionalidad al ser materia delegable y contar con el análisis de especificidad respectivo.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Es menester del presente acápite una vez superado el análisis de constitucionalidad el analizar la pertinencia de la medida solicitada toda vez que el otorgamiento de facultades es una liberalidad que tiene el Congreso de la Republica para lo que tiene que juzgar la

pertinencia de la concesión o delegación normativa solicitada, en ese sentido, se debe tener en cuenta los siguientes puntos.

Tal y como ha sido señalado por el Poder Ejecutivo en efecto en el año 2017 el congreso de a republica emitió la Ley 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., por lo que, el 6 de enero de 2017, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario; decreto legislativo que tenía como objeto la organización del mencionado sistema así como del INPE.

En tal sentido, la organización del INPE pasó por el reemplazo del otrora Consejo Nacional por un Consejo Directivo, el que por mandato del artículo 11 del referido decreto legislativo, se encuentra compuesto por cinco miembros: a) presidente ejecutivo del INPE; b) Un representante del ministro de Justicia y Derechos Humanos; c) Un representante del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo; d) Un representante del ministro de Educación; y, e) Un representante del ministro de Salud.

Dicho consejo directivo por mandato del artículo 15, tiene por funciones: a) Establecer y aprobar los lineamientos, planes y la política general de la institución; b) Proponer al Sector la aprobación de políticas públicas en materias del ámbito del INPE; c) Asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de las entidades del Estado, a nivel intersectorial, intergubernamental, poderes del Estado, y de los organismos constitucionalmente autónomos, en materia penitenciaria. d) Articular y armonizar la gestión de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos en materia penitenciaria. e) Aprobar los lineamientos para el desarrollo de actividades productivas en los establecimientos penitenciarios y de medio libre; f) Aprobar lineamientos para la articulación de la asistencia post penitenciaria. g) Aprobar la memoria anual; y h) Otras inherentes a su función directiva.

En ese sentido, y atendiendo a lo argumentado por la parte solicitante, consideramos adecuada la implementación de un nuevo modelo de gobernanza institucional del INPE de un consejo a jefatura, toda vez que dicho modelo es compatible con los objetivos buscados por el ejecutivo, el cual es optimizar el tiempo de toma de decisiones y ejecución de estas en el interior de INPE.

Conclusión

En cuanto a esta submateria solicitada se encuentra justificado el pedido de delegación de facultades. Por tanto, se mantiene en sus términos el texto presentado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley estudiado.

3.8.5 Modificar los artículos 108, 108-C y 200 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, con el fin de introducir circunstancias agravantes, en caso la víctima sea una persona defensora indígena.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La fundamentación proveída por el poder ejecutivo respecto al presente punto se basa en la urgencia y necesidad de regular la materia, ello debido a la condición de especial vulnerabilidad del sujeto pasivo, pues actualmente en el ordenamiento jurídico penal no se observa ninguna protección especial a los defensores indígenas, es decir no existe tipo penal especifico o agravante que se vincule a dicha condición, lo que conllevaría un estado de desprotección que permitiría la concreción de atentados contra la vida e integridad de los defensores indígenas al ser considerados delitos comunes.

En ese sentido, conforme a lo señalado en articulo 2, literal b de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Estados tiene el deber de adoptar medidas legislativas que aseguren el goce efectivo de los derechos y libertades de las personas defensoras, esto último debido a la especial situación de vulnerabilidad de dichas personas ostentan, debido en gran medida a su labor de defensa y protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, labor que muchas veces colisionaría con intereses económicos de agentes vinculados con actividades ilícitas e informales como la minería ilegal, tala ilegal o el narcotráfico, presentes mayoritariamente en territorios indígenas, es así como la Defensoría del Pueblo en su Cartilla Informativa sobre los Mecanismos de Protección para personas defensoras indígenas y ambientales de la Amazonía de 2022 informó que durante el estado de

emergencia sanitaria causado por la pandemia de COVID-19, al menos diez defensores indígenas fueron víctimas de han sido víctimas homicidios por su condición de defensor.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 104 de la Constitución, así como los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad al ser materia delegable.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Conforme se tiene de la propuesta lo que se buscaría es la modificación de los tipos penales de homicidio, sicariato y extorción contenidos en el código penal, introduciendo así una circunstancia agravante vinculada a la condición del sujeto pasivo, lo que no es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico pues con anterioridad la ley penal ya ha recogido agravantes por razón a la mayor vulnerabilidad de la víctima y a la función pública que realiza como el agravante regulado en el artículo 108-A del Código Penal que sanciona con una pena agravada a quien matea a un miembro de las fuerzas armadas, policía nacional, poder judicial o ministerio público, así como miembro del tribunal constitucional, así como autoridades elegidas por mandato popular toda vez que su actividad podría ponerlos en riesgo con lo que no solo se defiende como bien jurídico la vida sino también su función.

La mencionada necesidad, de conformidad con lo opinado en su informe por el profesor Oré Guardia, miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento en materia penal, también se manifiesta en el caso de los defensores indígenas, pues:

> *"[...] la labor que realizan muchas veces puede colisionar con los intereses económicos vinculados con las actividades ilícitas e informales como la minería ilegal, tala ilegal o el narcotráfico.*
> *[...]*
> *En tal sentido, es razonable establecer tal agravante conforme a la propuesta realizada, sin embargo, una mejor ubicación para esta sinsustancia sería,*

precisamente, el artículo 109-A. Además, si ello fuera así ya se recogería también dicha agravante en el delito de sicariato, ta que en el numeral 5 del tercer párrafo del art. 108.C del Código Penal se establece que la pena será de cadena perpetua si las víctimas están comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A y 108-B primer párrafo-

Respecto a incorporar dicha circunstancia agravante en el precepto penal que regular el delito de extorción, sería conveniente que, en todo caso, esta se ubique junto a las establecidas en el quinto párrafo, en vista de que da cuenta de un mayor reproche basado en que la violencia o amenaza recae en defensores indígenas en el ejercicio de sus funciones, de forma que en este supuesto no solo sea protegería la libertad, sino también la función que ejercen tales personas."

Finalmente, cabe anotar que, si bien se encuentra justificada dicha materia, actualmente en el Congreso de la Republica se vienen debatiendo el Proyecto de Ley 01106-2021-CR, Ley que incorpora en el código penal como agravante de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves cuando la víctima tenga la condición de guardaparque, líder y/o defensor ambiental, que conforme se tiene del seguimiento al expediente legislativo virtual, se encuentra agendada en el Pleno del Congreso para su debate y votación.[565]

Del mismo modo, se encuentran respectivamente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como la Comisión de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología, los Proyectos de ley 02069/2021-PE, Ley para la protección y asistencia a dirigentes comunales y/o indígenas u originarios en riesgo[566] y el PL 4686/2022-CR, Ley que reconoce y protege a los defensores de derechos ambientales, los que aunados a la iniciativa de ley 01106-2021-CR podrían otorgar a dicha población vulnerable un tratamiento legal integral, por lo que, consideramos que dicha facultado no debe ser otorgada, priorizando su debate en el interior del parlamento.

---

[565] Proyecto de Ley 01106-2021-CR, Ley que incorpora en el código penal como agravante de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves cuando la víctima tenga la condición de guardaparque, líder y/o defensor ambiental. Disponible en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1106

[566] Proyecto de Ley 02069/2021-PE, Ley para la protección y asistencia a dirigentes comunales y/o indígenas u originarios en riesgo. Disponible en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2069

Conclusión

De todo lo expuesto se advierte que, no es necesario el otorgamiento de facultades en esta materia, por cuanto ya existe un Proyecto de Ley 01106-2021-CR, que constituye una vía igualmente satisfactoria, esta Comisión concluye que no se debe brindar las facultades solicitadas en este extremo.

3.8.6 Modificar el Decreto Legislativo N° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a efectos de adoptar enfoques, mecanismos, medidas y recursos legales que optimicen la intervención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, además de establecer medidas para asegurar la efectiva y progresiva implementación del Código a nivel nacional.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

En la exposición de motivos presentada por el Poder Ejecutivo en su solicitud de facultades respecto de la presente submateria se sustenta en el incremento en la participación e involucramiento de adolescentes en actividades delictivas, lo cual a su vez representa un serio problema para la sociedad peruana, aunado al actual contexto del alza de los niveles de violencia y criminalidad.

Por lo que, se pretende modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA) de 2017 a fin de incrementar la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, e impactar positivamente en la reducción de la incidencia delictiva de aquellos que han incurrido en infracciones de alta lesividad y presentan perfiles de alta complejidad.

Del mismo modo, se busca establecer medidas legislativas que aseguren la efectiva y progresiva implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes a nivel nacional, el que a la fecha solo se ha implementado en la parte relativa a la ejecución de las medidas socioeducativas, quedando pendiente la parte procesal, situación que impide brindar una respuesta integral y efectiva a la delincuencia juvenil.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a esta materia pueden ser delegables, por tanto, este aspecto del análisis supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Conforme se señaló en el acápite precedente respecto de los fundamentos que justificarían la submateria solicitada, las modificaciones pretendidas por el Poder Ejecutivo respecto del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado mediante. Decreto Legislativo 1348 el 07 de enero de 2017, pueden ser clasificadas en dos tipos: a) las vinculadas a la mejora de la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, que impacten positivamente en la reducción de la incidencia delictiva de aquellos que han incurrido en infracciones de alta lesividad y presentan perfiles de alta complejidad; así como b) aquellas medidas legislativas que aseguren la efectiva y progresiva implementación del Código a nivel nacional

Respecto de las primeras medidas, si bien su invocación es genérica y no permitiría evaluar de manera adecuada la pertinencia de la delegación de facultades solicitadas respecto de la materia especificada, se tiene de la información complementada en la mesa de trabajo realizada el jueves 22 de mayo de 2024 con los funcionarios del Ministerio de Justicia, se tiene que la modificación del Decreto Legislativo 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes giraría en torno a:

a. Incorporar el enfoque terapéutico al CRPA, para lo cual se requiere la modificación del art XIII del Título Preliminar del mencionado cuerpo normativo a fin de incorporar el enfoque terapéutico, el que se halla orientado a brindar una respuesta adecuada a adolescentes infractores que tiene consumo problemático de drogas.

b. Optimizar la regulación de la figura de la mediación penal juvenil, ello a través de la modificación del artículo 42 del CRPA, estableciendo un orden de prelación adecuado para la aplicación del mecanismo restaurativo, donde la mediación es la primera opción a utilizar por los operadores de justicia, así como regular la figura

jurídica de la mediación penal juvenil como una herramienta idónea para la solución de conflictos en casos de infracción a la ley penal.

c. Normar la continuación de la ejecución de la medida socioeducativa de los adolescentes en conflicto con la ley penal en un Establecimiento penitenciario ordinario para lo que se pretende incorporar el artículo 164 al mencionado texto para establecer la variación de la internación aplicada a adolescentes que, durante el cumplimiento de medidas socioeducativas por infracciones muy graves, cumplan los 18 de años.

d. Establecer medidas legislativas que aseguren la efectiva y progresiva implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes a nivel nacional a través de la modificación de la Tercera Disposición Complementaria Final, a fin de establecer la participación de un representante del MEF en la Comisión Multisectorial Permanente de Implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, así como la modificación de la Cuarta Disposición Complementaria Final optimizando el financiamiento para la implementación del CRPA.

En ese orden de ideas esta Comisión comparte la opinión de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República expresada en la opinión consultiva 02-2023-2024-CMF/CR aprobada en la décima octava sesión extraordinaria del 29 de mayo de 2024, que considera viable el otorgamiento de facultades legislativas en este extremo.

Conclusión

Habiéndose realizado el análisis de constitucionalidad pertinente, así como encontrándose debidamente justificado el otorgamiento de la facultad normativa solicitada en la submateria de estudio, se determinar la pertinencia de dicha delegación, la que concedida en sus términos.

3.8.7 Modificar la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, y normas conexas, con el propósito de ampliar su alcance para abarcar todas las formas de delincuencia organizada, incluyendo las modalidades emergentes, que operan en nuestro

territorio nacional, así como para establecer agravantes especiales y fortalecer el Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO) y demás herramientas que permitan hacer frente de manera más efectiva a la amenaza que representan este fenómeno criminal para la seguridad pública.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, publicado el 20 de agosto de 2013 significó un gran avance en la lucha contra el crimen organizado puesto que la referida norma incorporo a la normativa procesal penal peruana diversas técnicas especiales de investigación, medidas limitativas de derechos, así como la figura de la cooperación judicial internacional. Es así como, la Ley 30077 dispuso en su Primera Disposición Complementaria Transitoria: *"la entrada en vigencia del Código Procesal Penal para todos los delitos previstos en el artículo 3 o cometidos por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma".*

Del mismo modo, señalan como elemento a considerar, el contexto histórico en el que se emitió dicha ley, esto es, antes de la implementación total a nivel nacional del Nuevo Código Procesal Penal, no existiendo en tal fecha en el Código Penal regulación alguna que tipifique el delito de "organización criminal" *-actualmente regulado en el artículo 317 del Código Penal-*, sino respecto del delito de "asociación ilícita para delinquir", tipo penal reemplazado por el delito de organización criminal mediante el Decreto Legislativo 1244, publicado el 29 octubre 2016, incorporando además el artículo 317-B, creando el tipo penal de "Banda Criminal".

En ese sentido, consideran que, debido a tal contexto temporal, actualmente existen algunos elementos del tipo penal de organización criminal contenidos en el artículo 317 del Código Penal que colisionarían con la definición de organización criminal comprendida en el artículo 2 de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, con lo cual se hace necesario modificar la Ley 30077, Ley de Crimen Organizado en sus artículos 1 y 2.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 104 de la Constitución, así como los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad al ser materia delegable.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Si bien la problemática que abordada por la exposición de motivo del proyecto de ley sobre la presente submateria parece ser adecuada para justificar el otorgamiento de las facultades solicitadas, además de haber superado el test de constitucionalidad de dicha delegación, es menester de esta Comisión, advertir la existencia del Proyecto de Ley que pretende la modificación de los artículos 317 del Código Penal y 2 de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado; artículos que también se pretenden modificar en la presente materia.

Es así como, el Proyecto de ley 5981/2023-CR, proyecto de ley que propone la Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado; y la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, cuenta a la fecha con una primera votación aprobatoria, estando pendiente su segunda votación, por lo que, esta comisión no considera pertinente se autorice la normación respecto de artículos que a la fecha se encuentran en proceso de modificación por parte del Congreso de la República, más aún cuando las pretendidas modificaciones no serían materia de debate público al interior del Poder Ejecutivo, por lo que no resulta conveniente tal delegación, más cuando socialmente dicha materia es altamente sensible y de relevancia para el ejercicio y resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Conclusión

De todo los argumentos expuestos se advierte que la materia a delegar cuenta con un dictamen en el Congreso de la Republica aprobado en primera votación, que modifica los artículos que se pretenden también modificar vía delegación de facultades, lo que aparte generar un riesgo de contradicciones o antinomias en la ley penal, el procedimiento de

normación ejecutado por parte del Poder Ejecutivo vía facultades delegadas no garantiza de manera debida un debate público y plural como si lo hace el procedimiento legislativo ordinario al interior del parlamento nacional, por lo que dicha submateria no debe ser delegada.

3.8.8 Dotar de mayor protección a los titulares del derecho de autor en relación a la reproducción, distribución, comunicación pública o difusión no autorizada de las obras, y sus formas agravadas.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El sustento expresado en la exposición de motivos de la solicitud de facultades delegadas resude en la importancia de la tutela de los derechos de autor y los conexos a este, debido a su función generadora de riqueza; no obstante, esta industria para generar el beneficio esperado invierten tiempo y dinero en el desarrollo de los productos que ponen en el mercado, entre los que se encuentran la literatura, las obras musicales o audiovisuales así como el software, obras multimedia, fílmicas o teatrales, entre otras especies, las que contribuyen no solo al desarrollo económico de la nación sino también contribuyen a su desarrollo cultural y educacional.

Es así como, debido a la importancia de la mencionada actividad, esta es cubierta a nivel internación por la legislación especializada en materia de derechos de autor, el que concede el derecho de explotación o utilización exclusiva de la creación a favor del titular del derecho por un periodo determinado, como la forma idónea para promover e incentivar a los autores y las industrias relacionadas a la creatividad a seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevas obras, no obstante dichas medidas por su solas no son eficientes si no se complementan con un marco de protección penal con fines tanto punitivos como disuasivos.

Es así como la piratería se convierte en una de las conductas más lesivas y perjudiciales a los intereses de los titulares del derecho de autor pues desincentiva la generación de dichas obras, desalentando la inversión en el sector debido a la pérdida del valor económico de la obra; es así como la piratería es alentada por la ausencia o defecto en la regulación que permitan generar impunidad a los sujetos que violen los derechos de autor. Si bien, toda la

industria creativa basada en los derechos de autor puede ser vulnerada mediante la piratería, uno de los mercados que más se ve afectado con esta conducta antisocial es la industria audiovisual, particularmente la cinematográfica, pues cuando las obras son estrenadas, son también reproducidas (fijadas) durante su exhibición en las salas de cine sin contar para ello con la autorización correspondiente del titular de la obra, práctica comúnmente conocida como "camcording'.

Dicha actividad permite al sujeto activo poseer una copia que posteriormente puede ser distribuida por diversos medios como las copias físicas o el streeming, redes sociales o demás plataformas, lo que resta valor económico al producto generalmente recién estrenado.

Actualmente, la reproducción o fijación no autorizada de las obras cinematográficas, generalmente las recién estrenadas, es una actividad sancionable administrativa como penalmente, es así como el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el derecho de autor, considera como infracción sancionable cualquier acto de reproducción, distribución y comunicación al público no autorizada por el titular del derecho, siendo la responsabilidad de carácter objetivo, mientras que el artículo 218 del Código Penal, sanciona el acto de reproducción con fines comerciales, lo que como se alega es difícil de acreditar, pues el fin lucrativo es un elemento subjetivo de difícil probanza.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

A la luz de los parámetros materiales constitucionales podemos afirmar que, el pedido de delegación respecto a esta submateria cumple con el marco constitucional respecto de la delegación de facultades toda vez que no versa sobre materias indelegables, se cumple con la especificidad exigida sobre la materia a delegar, la que es solicitada por un plazo especifico.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Debemos partir el presente análisis, asumiendo que el sustento presentado por el Poder Ejecutivo en la presente submateria es incrementar el nivel resguardo legal a los derechos de autor de las obras filmicas, específicamente a través del derecho penal, es necesario acotar la facultad solicitada al objeto de la misma, toda vez que conforme se halla redactado

el precepto normativo, se abarcarían materias no solo vinculadas al derecho penal, sino también administrativo, por lo que, es pertinente su reconducción a través de un texto más acotado que permita cubrir de manera adecuada la necesidad normativa expresada por el Poder Ejecutivo, reconducción que es gravitante para salvaguardar técnicamente el ámbito de libertad de las personas, ello en mérito a los siguientes argumentos:

Si bien el objetivo que se pretende con la penalización del camcording es el de salvaguardar los derechos de autor vinculados a las obras fílmicas, la redacción tan amplia y genérica podría conllevar a la vulneración de diversos principios y bienes jurídicos legítimos, pues el fundamento para la modificación del artículo 217 que contiene el tipo base del delito de "|" y sus formas agravadas contenidas en el articulo 218, es la dificultosa probanza del elemento subjetivo del tipo penal, es decir, que tal actividad se realice con fines comerciales u otro tipo de ventaja económica.

En ese sentido, la eliminación del elemento subjetivo, de la finalidad de la grabación convertiría al delito de reproducción, difusión, distribución y circulación de la obra sin la autorización del autor, en un delito de mera actividad o delito de peligro abstracto en el que no se exige el cumplimiento del fin dañoso sino la mera ejecución de los actos tipificados sin que siquiera exista materialización de menoscabo alguno, vulnerando así el principio de lesividad, principio rector del derecho penal, pues se podría penar la mera actividad de grabar una canción en un concierto o tomar una fotografía en una galería de arte, actividad que usualmente realizan los ciudadanos en su vida cotidiana sin fines de lucro o beneficio alguno, con lo que se reduciría el ámbito de libertad existente, pues justamente el aprovechamiento económico de los derechos de autor ajenos es la circunstancia que habilita la intervención del derecho penal.

En ese orden de ideas, y en consonancia con los argumentos previamente señalados, esta comisión comparte la opinión de profesor Oré Guardia, miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento en materia penal, quien opina que:

> *"[...] la dificultad probatoria de este elemento subjetivo especifico (un elemento de tendencia interna) no es suficiente motivo para su exclusión de la descripción del tipo penal, pues si fuere así, otras figuras de nuestro catalogo punitivo deberían también correr la misma suerte: en el delito de falsificación de documentos del art.*

427 CP tendria que excluirse el propósito de utilizar el documento; en el child grooming del art. 5 de la Ley de delitos informáticos tendría que eliminarse el propósito de solicitar u obtener material pornográfico, o de proponer un acto de connotación sexual; mientras que en el delito de rebelión del art. 346 del CP debería prescindirse de la finalidad de variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido, o suprimir o modificar el régimen constitucional.

En la acreditación de este elemento subjetivo, como en otros casos, existe la mas amplia libertad probatoria (art. 157, 1 CPP), sin que deba perderse de vista que al respecto nuestra legislación ha establecido algunas reglas que tiene un amplio respaldo doctrinal y jurisprudencial, como la prevista en el art. 156.2 CPP que dispone que no son objeto de prueba, entre otros, las máximas de la experiencia, las leyes naturales, lo imposible y lo notorio; o la que reconoce la prueba por indicios, en las que las máximas de la experiencia juegan un papal fundamental (art. 158 CPP). La concurrencia y acreditación de estos datos objetivos o circunstanciales serán precisamente los que permitan inferir que el agente ha obrado con el propósito o finalidad exigido por el tipo penal. No parece oportuno, así pues, flexibilizar la norma penal."

Es así como la preocupación expresada por el miembro del consejo Consultivo es legitima, pues regular de manera tan amplia la facultad solicitada podría ampliar de manera avasallante e injusta el espectro de sanción del derecho penal sobre conductas socialmente comunes como las previamente descritas (grabaciones de conciertos o fotografías de obras de arte como pinturas, esculturas, o canciones en ambientes públicos), por lo que, a fin de compatibilizar, el principio de lesividad con la necesaria regulación en materia de derechos de autor, esta Comisión considera pertinente acotar la facultad solicitada a la penalización únicamente del llamado "camcording", el que podría ser configurado con un delito de peligro abstracto sin mayores riesgos que los previamente detallados.

Conclusión

La submateria solicitada cumple con el parámetro de constitucionalidad, no obstante, consideramos pertinente acotar el ámbito de intervención pues como se deprende de la exposición de motivos y la documentación complementaria posteriormente hecha legar a esta Comisión, la presente materia comprende únicamente la por lo que, se propone el siguiente texto sustitutorio:

"3.8.6 Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635 con la finalidad de tipificar el delito de camcording o filmación no autorizada de películas dentro de salas de cine o análogos."

Pedido de facultades en materia de desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay

3.9.1. Modificar la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, con el fin de impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados, así como la implementación de los instrumentos de gestión del suelo, impulsando el cierre de brechas en vivienda e infraestructura urbana para fortalecer la planificación de las ciudades y centros poblados, en especial de los centros poblados rurales, así como impulsar los instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento urbano como ejes del desarrollo sostenible de las ciudades.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La propuesta es reformar la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, con el objetivo de promover la planificación urbana y rural, así como la aplicación de herramientas de gestión del suelo. Esta reforma busca cerrar las brechas existentes en vivienda e infraestructura urbana, fortaleciendo la planificación en ciudades y poblados, especialmente en áreas rurales. Además, se busca potenciar las herramientas de gestión del suelo y financiamiento urbano como pilares del desarrollo sostenible.[567]

La normativa actual no incluye una herramienta de planificación para los centros poblados rurales que permita un desarrollo sostenible y eficiente. Estas áreas a menudo enfrentan desafíos únicos en términos de acceso a servicios básicos, oportunidades económicas y desarrollo de infraestructura. Por lo tanto, es esencial contar con una herramienta de

[567] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.9.1. del proyecto de ley 7752/2023-PE

planificación que aborde estas necesidades específicas de acuerdo a su realidad. Además, es necesario clarificar varias herramientas de gestión del suelo y financiamiento urbano incluidas en la norma, las cuales actualmente generan más cargas urbanísticas que beneficios, lo cual puede ser percibido de manera negativa.[568]

En este sentido, la propuesta normativa aclara y fortalece varias herramientas de gestión del suelo, como el reajuste del suelo, integración inmobiliaria, zonas especiales de interés social, zonificación inclusiva, carga de conservación, entre otros, con el fin de hacerlos más eficientes y atractivos tanto para el sector público como para el privado para el desarrollo de proyectos urbanísticos. En el caso de la captura del incremento del valor del suelo, se han modificado los hechos generadores y la exigibilidad del pago, el cual incluye no solo el pago en efectivo sino el aporte o permuta de terreno con igual o mayor valor comercial al porcentaje determinado para no limitar las opciones de captura; además, se han ampliado los fines de esta captura al desarrollo de Viviendas de Interés Social, financiamiento de obras de agua y saneamiento, espacios públicos e infraestructura de movilidad.[569]

Por lo tanto, la propuesta de modificación es necesaria para fortalecer las herramientas de planificación urbana y rural, de gestión del suelo y de financiamiento urbano necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país.[570]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia de ordenamiento del territorio y planificación urbana pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

---

[568] Ibidem
[569] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.9.1. del proyecto de ley 7752/2023-PE
[570] Ibidem

La necesidad de intervención regulatoria surge de la urgencia de modificar la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. El objetivo es promover una planificación más efectiva de las ciudades y centros poblados, y mejorar la implementación de los instrumentos de gestión del suelo. Esto ayudará a cerrar las brechas en vivienda e infraestructura urbana, fortaleciendo la planificación en áreas urbanas y rurales, y promoviendo la gestión del suelo y el financiamiento urbano como pilares del desarrollo sostenible.[571]

La problemática que se pretende solucionar radica en que la norma actual no proporciona un instrumento de planificación para los centros poblados rurales que permita un desarrollo sostenible y eficiente. Estas áreas enfrentan desafíos únicos en términos de acceso a servicios básicos, oportunidades económicas y desarrollo de infraestructura. Por lo tanto, es esencial tener un instrumento de planificación que aborde estas necesidades específicas.[572]

Además, es necesario aclarar varios instrumentos de gestión del suelo y financiamiento urbano incluidos en la norma, que actualmente generan más cargas urbanísticas que beneficios, lo cual puede ser percibido de manera negativa.[573]

La propuesta normativa busca precisar y fortalecer varios instrumentos de gestión del suelo, como el reajuste del suelo, integración inmobiliaria, zonas especiales de interés social, zonificación inclusiva, carga de conservación, entre otros. Esto los hará más eficientes y atractivos tanto para el sector público como para el privado para el desarrollo de proyectos urbanísticos.[574]

En el caso de la captura del incremento del valor del suelo, se han modificado los hechos generadores y la exigibilidad del pago, lo cual incluye no solo el pago en efectivo sino el aporte o permuta de terreno con igual o mayor valor comercial al porcentaje determinado. Además, se han ampliado los fines de esta captura al desarrollo de Viviendas de Interés

---

[571] Del Anexo 2 suscrito por José Cerrón Valdivia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
[572] Ibidem
[573] Ibidem
[574] Del Anexo 2 suscrito por José Cerrón Valdivia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Social, financiamiento de obras de agua y saneamiento, espacios públicos e infraestructura de movilidad.[575]

Por lo tanto, la propuesta de modificación es necesaria para fortalecer los instrumentos de planificación urbana y rural, de gestión del suelo y de financiamiento urbano necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país. Esta intervención regulatoria tendrá un impacto significativo en el sector, promoviendo un desarrollo más sostenible y eficiente.[576]

La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú – ASEI por Carta N°141-2024/INSITITUCIONAL -ASEI suscrita por su presidente Jose Espantoso Salem señala que, respaldan el otorgamiento de facultades legislativas para modificar la Ley 31313, toda vez que existe la necesidad de establecer reformas normativas para la aplicación de dicha ley y lograr sus objetivos. Son necesarias estas mejoras para la aplicación de los instrumentos de planificación urbana para la gestión del suelo como el reajuste del suelo, integración inmobiliaria, zonas especiales de interés social, zonificación inclusiva, carga de conservación, entre otros. De la misma forma están de acuerdo con que estas reformas permitirán impulsar el financiamiento urbano necesario para alcanzar el desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología hace llegar su opinión aprobada en la vigésima cuarta sesión ordinaria semipresencial de fecha 4 de junio de 2024 y suscrita por su presidenta Ruth Luque Ibarra, en la que expresa sobre este punto materia de análisis manifiesta que el Poder Ejecutivo al plantear las modificaciones sobre la Ley 31313, Ley de Desarrollo Sostenible, debe tomar en cuenta el enfoque intercultural y la planificación y gestión de los centros poblados rurales. Por lo que en este punto podría delegarse facultades legislativas considerando las limitaciones expresadas en el informe citado.

Este aspecto solicitado se encuentra justificado el pedido solicitado para la delegación de facultades legislativas porque es necesario para fortalecer los instrumentos de planificación urbana y rural, de gestión del suelo y de financiamiento urbano necesarios para alcanzar el

[575] Ibidem
[576] Ibidem

desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país. Esta intervención regulatoria tendrá un impacto significativo en el sector, promoviendo un desarrollo más sostenible y eficiente

Conclusión
Esta Comisión recomienda aprobar este aspecto así solicitado en el punto de la materia de análisis con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, para impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados implementando:

a) En el ámbito urbano:

a.1.) El fortalecimiento y la armonización de los instrumentos de gestión del suelo.

a.2.) Los instrumentos del financiamiento urbano como ejes del desarrollo sostenible de las ciudades, reduciendo y simplificando las cargas urbanísticas.

b) En el ámbito rural:

b.1.) El marco normativo y los instrumentos de planificación que aborden el desarrollo sostenible y eficiente de los centros rurales del país

b.2) El equipamiento, los servicios básicos, y una accesibilidad eficiente."

3.9.2. Autorizar que se establezca disposiciones sobre la declaración de necesidad

pública e interés nacional la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay, y establecer disposiciones especiales por su construcción y funcionamiento, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos priorizados en los instrumentos de planificación territorial y urbana, entre otros.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El objetivo del proyecto normativo es llevar a cabo una intervención completa y coordinada entre todos los sectores implicados, centralizando los recursos y promoviendo el avance de proyectos que se priorizan en las herramientas de planificación territorial y urbana, así como otros proyectos de interés público. Esto surge como respuesta a la insuficiente planificación urbana que restringe el desarrollo y la implementación de proyectos de inversión tanto públicos como privados en este ámbito.[577]

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas en materia de ordenamiento del territorio y planificación urbana pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto a la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, la Comisión considera que este aspecto del análisis se supera efectivamente el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La necesidad de intervención regulatoria se basa en la urgencia de realizar una intervención integral y coordinada entre todos los sectores involucrados en el desarrollo urbano. El proyecto normativo busca centralizar los recursos y facilitar el desarrollo de proyectos que se priorizan en los instrumentos de planificación territorial y urbana, así como otros proyectos de interés público.

La problemática que se pretende solucionar es la deficiente planificación urbana que actualmente limita el desarrollo e implementación de los proyectos de inversión pública y privada. Esta situación crea un obstáculo para el crecimiento y desarrollo sostenible de las áreas urbanas.

En este contexto, la propuesta normativa autoriza la declaración de necesidad pública e interés nacional para la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del

[577] De acuerdo a la exposición de motivos del punto 3.9.2. del proyecto de ley 7752/2023-PE

Terminal Portuario de Chancay. Además, establece disposiciones especiales para su construcción y funcionamiento, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos priorizados en los instrumentos de planificación territorial y urbana, entre otros.

Por lo tanto, la regulación es urgente y necesaria para mejorar la planificación urbana y facilitar el desarrollo de proyectos de inversión. Esta intervención regulatoria tendrá un impacto significativo en el sector, promoviendo un desarrollo más eficiente y sostenible de las áreas urbanas.

La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú – ASEI por Carta N°141-2024/INSITITUCIONAL -ASEI suscrita por su presidente José Espantoso Salem señala que, respalda la delegación solicitada para establecer disposiciones especiales en la construcción y funcionamiento del Terminal Portuario de Chancay, tomando en cuenta el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos priorizados en los instrumentos de planificación territorial y urbana, que permitan superar la deficiente planificación urbana que limita el desarrollo e implementación de los proyectos de inversión pública y privada de dicho ámbito, deficiencia que sirve de cultivo para las apropiaciones y el tráfico ilícito de terrenos de cultivo para las apropiaciones y el tráfico ilícito de terrenos que se viene produciendo en la zona, impidiendo el desarrollo de la vivienda formal y asequible.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología hace llegar su opinión aprobada en la vigésima cuarta sesión ordinaria semipresencial de fecha 4 de junio de 2024 y suscrita por su presidenta Ruth Luque Ibarra, en la que expresa sobre este punto materia de análisis que el Poder Ejecutivo debe adoptar las siguientes salvaguardas:

- Garantizar la implementación de un sistema riguroso de evaluación y monitoreo de los impactos ambientales para mitigar los efectos negativos en el aire, agua y suelo, lo que implica la realización de Estudios de Impacto Ambiental previos a la aprobación de cualquier proyecto de infraestructura.
- Establecer medidas integrales para la conservación del Humedal Santa Rosa y otras áreas naturales cerca del megapuerto de Chancay.
- Desarrollar programas de compensación justa para las poblaciones afectadas por la actividad de construcción.

- Implementar estrategias que apoyen la pesca artesanal, como áreas de pesca protegida y programas de fortalecimiento de capacidades para los pescadores.

Por lo que en este punto podría delegarse facultades legislativas considerando las limitaciones expresadas en el informe citado.

Este aspecto solicitado se encuentra justificado el pedido solicitado para la delegación de facultades legislativas porque es necesario mejorar la planificación urbana y facilitar el desarrollo de proyectos de inversión. Esta intervención regulatoria tendrá un impacto significativo en el sector, promoviendo un desarrollo más eficiente y sostenible de las áreas urbanas.

Conclusión
Esta Comisión recomienda aprobar este aspecto así solicitado, en el punto de la materia de análisis en sus términos.

Pedido de facultades en materia de seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital

3.10.1. Modificar el Decreto Legislativo N° 1095, a efectos de regular la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La problemática advertida consiste en que, en la actualidad, el Decreto Legislativo N° 1095 no regula de manera muy precisa algunas cuestiones jurídicas relevantes en materia de acciones y operaciones militares. Por ende, el Poder Ejecutivo, en específico, el Sector Defensa ha considerado que resulta necesario modificar el referido D.L. N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno cumplimiento de la finalidad constitucional de las Fuerzas Armadas, previsto en el artículo 165 de la

Constitución Política[578]; de esta forma, se evitará que éstas realicen acciones que resultan inherentes a la Policía Nacional del Perú, y que, en todo caso, tales acciones resulten absolutamente excepcionales.

Del mismo modo, se ha señalado que, es problemática la aplicación del Título III del D.L. N° 1095, dado que los ámbitos de actuación de dicho título (señalados taxativamente en Con la modificación del contenido y alcance del Decreto Legislativo N° 1095, se garantizaria que dicho marco jurídico resulte plenamente conforme con los estándares internacionales y nacionales del uso de la fuerza pública -incluyendo lo previsto en el Art. 165 de la Constitución respecto a la finalidad de las FFAA. Por lo que, consideran necesario efectuar modificaciones al Decreto Legislativo 1095, para que los supuestos de actuación de las Fuerzas Armadas sean más precisos.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relacionadas a temas de orden interno, e intervención de las Fuerzas Armadas, pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como a la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Para analizar este punto, se debe considerar que el Decreto Legislativo N° 1095, no incluye expresamente ámbitos constitucionalmente garantizados para la participación de las Fuerzas Armadas, como el referido al mantenimiento del orden durante comicios o en los que se requiera su intervención, sin que medie la declaratoria de un estado de excepción,

[578] Constitución Política d 1993. Artículo 165.- Finalidad de las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución

situación considerada como constitucional por el Tribunal Constitucional, en las sentencias N° 0002-2008-PI/TC y N° 00022-2011-PI/TC. Así, tenemos que el Tribunal Constitucional[579] ha señalado que:

> "395. De otro lado, cabe resaltar que el Decreto Legislativo 1095 establece al Presidente de la República como la autoridad competente para permitir la actuación FFAA en cualquiera de las situaciones referidas supra. Éste procede mediante resolución suprema -debidamente motivada, refrendada por los Ministros de Defensa e Interior y a pedido de este último, previa solicitud de la autoridad política o policial del lugar en que se producen los hechos.
>
> Asimismo, y siguiendo la lógica de la excepcionalidad de la intervención de las FFAA en estos supuestos, se reconoce como principios que rigen el uso de la fuerza a los antes reseñados principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad".

En esa misma sentencia, el Tribunal Constitucional señaló que: "del artículo 4.3 del Decreto Legislativo N°. 1095 que están referidos a aquellos casos extremos en los que se ponga en peligro la vida, integridad, seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población".

El D.L. N° 1095 no define cuando la "capacidad de la Policía [resulta] sobrepasada en su capacidad de control de orden interno, sea previsible o existiera peligro de que ello ocurriera" (Arts. 4.3 y 23.d). La necesidad de una definición concreta de este apartado fue resaltada por el Tribunal Constitucional en las sentencias N° 0002-2008-PI/TC y N° 00022-2011-PI/TC, a efectos de evitar una posible aplicación arbitraria y/o meramente discrecional por parte de la autoridad.

Esta Comisión estima que, con la modificación del contenido y alcance del D.L. N° 1095, se garantizaría que dicho marco jurídico resulte plenamente conforme con los estándares internacionales y nacionales del uso de la fuerza pública; por lo que se estima, que es pertinente la delegación de facultades en este extremo.

Conclusión

[579] Tribunal Constitucional. Sentencia N° 00022-2011-PI/TC. F.J. 395

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"Modificar los artículos 4.3 y 23.d) del Decreto Legislativo 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, a efectos de señalar taxativamente las circunstancias en las que resulta aplicable el uso y empleo de la fuerza pública por parte del personal militar y especificar en qué casos se entiende que la capacidad de la policía nacional ha sido sobrepasada".

3.10.2. Establecer el marco normativo para la implementación de la interoperabilidad entre las entidades competentes en materia migratoria, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad y defensa nacional.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Hoy la problemática que se pretende solucionar está relacionada con el contexto migratorio complejo que afronta el Perú debido a la diversificación e incremento de los flujos migratorios hacia desde y a través de nuestro territorio nacional.

La dinámica migratoria enfrenta desafíos muy importantes que impactan en la seguridad nacional el control fronterizo y la prevención de delitos transnacionales asociados a la migración irregular tales como la trata de personas el tráfico ilícito de drogas, entre otros.

Me marco normativo vigente en materia migratoria está conformado principalmente por la ley de migraciones aprobada mediante decreto legislativo 1350 y su respectivo reglamento, estas normas si bien establecen disposiciones generales para el control migratorio y la seguridad fronteriza, adolecen de algunos defectos como la falta de regulación específica de los mecanismos de evaluación del riesgo migratorio, tampoco se ha previsto la implementación de sistemas de interoperabilidad entre las entidades competentes.

Estas falencias han determinado que actualmente existan limitaciones en los procesos de evaluación de riesgo migratorio, tales como:

a) la dispersión y falta de integración de la información relevante entre las entidades
b) la ausencia de protocolos y criterios estandarizados de análisis de riesgo
c) la limitada capacidad de generación de alertas tempranas e inteligencia migratoria, entre otros.

En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha venido trabajando en la formulación de un proyecto de decreto legislativo que establece la interoperabilidad para la evaluación del riesgo migratorio, con la finalidad de fortalecer la seguridad nacional y mejorar la eficiencia de la gestión migratoria a través de la implementación de un "sistema integrado de evaluación del riesgo migratorio" basado en la inter operatividad entre las entidades competentes. En ese sentido se busca fortalecer la cooperación y coordinación entre el ministerio de relaciones exteriores la superintendencia nacional de migraciones y los órganos nacionales de inteligencia contrainteligencia y seguridad del estado para el intercambio de información relevante en materia de riesgo migratorio.

La interoperabilidad permitirá integrar actualizar y analizar información clave para la evaluación del riesgo migratorio tales como antecedentes penales migratorios facilitando la detección temprana de amenazas y asegurando un adecuado proceso de toma de decisiones oportunas en esta materia.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relacionadas a las materias solicitadas pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como a la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

La iniciativa analizada pretende cubrir un vacío normativo que reportará beneficios como:

a) El fortalecimiento de la seguridad nacional, al mejorar la capacidad del estado para identificar y prevenir amenazas asociadas a flujos migratorios irregulares, tales como el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas entre otros.

b) La elevación de estándares de control migratorio y seguridad fronteriza, realizando una evaluación integral y permanente del riesgo migratorio utilizando para ello información oportuna y eficaz.

c) Se incrementará la eficiencia y eficacia de la gestión migratoria gracias a la automatización de procesos, la eliminación de duplicidades y la generación de inteligencia accionable para la toma de decisiones estratégicas.

d) El fortalecimiento de la prevención y lucha contra los delitos asociados a la migración irregular, en especial las redes de tráfico de migrantes, la trata de personas, entre otros gracias a una mejor identificación de patrones, rutas y perfiles de riesgo.

e) Se promoverá una cultura de cooperación e intercambio de información entre las entidades nacionales competentes en materia migratoria, así como las autoridades de otros países en el marco de los acuerdos y estándares internacionales vigentes.

Cabe destacar, que en la exposición de motivos y en las mesas de trabajo realizadas durante el estudio del presente proyecto de ley, se ha señalado que la iniciativa propuesta es una medida coordinada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el RENIEC y el Poder Judicial.

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que, el adecuado manejo de los flujos migratorios, es una recomendación, de la OIM, que promueve un modelo de gestión migratoria que aborda todas las dimensiones y aristas del fenómeno, incluyendo la

evaluación de riesgos asociados, desde una perspectiva de derechos humanos, sostenibilidad y cooperación internacional[580].

Por los considerandos expuestos esta comisión considera que este extremo de la delegación de facultades es viable y por lo tanto es pertinente su otorgamiento

Conclusión

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"Establecer el marco normativo para la creación e implementación del Sistema Integrado de Evaluación del Riesgo Migratorio como mecanismo de cooperación y coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Migraciones y los organismos nacionales de inteligencia, contrainteligencia y seguridad del Estado para el intercambio de información sobre flujos migratorios irregulares, redes de tráfico ilícito de migrantes y demás riesgos, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad y defensa nacional".

3.10.3. Dictar medidas orientadas a garantizar la intangibilidad de los predios e inmuebles de propiedad, afectados en uso, reservados para fines de Defensa Nacional y en posesión de las Instituciones Armadas, que han sido destinados para fines de Seguridad y Defensa Nacional y cumplimiento de sus fines institucionales, en todo el territorio nacional, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de independencia, soberanía e integridad territorial de la República, así como su participación en el desarrollo económico social y en la defensa civil.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

[580] Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas periodo anual de sesiones 2023-2024. Informe sobre la delegación de facultades solicitada por el poder ejecutivo, mediante el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, de fecha 3 de junio de 2024.

Con la iniciativa se pretende declarar la intangibilidad de los predios y bienes inmuebles a cargo de las instituciones armadas, incluidos aquellos que son de propiedad, afectados en uso, reservados y en posesión, destinados para fines de defensa y seguridad nacional y para el cumplimiento de sus fines institucionales, en todo el territorio nacional.

En la exposición de motivos se señaló, que en los últimos años se ha producido la transferencia de 47 predios a favor de otros sectores o de terceros, sin que medie contraprestación alguna, sin contar con terrenos a dónde reubicar las instalaciones de las fuerzas armadas, sin presupuesto para la reubicación o construcción de nuevas instalaciones, y sin que exista consentimiento previo. Por lo que se han generado perjuicios de carácter económico al sector defensa, lo que tendría un impacto en las capacidades operativas de las instituciones armadas.

En lo que respecta a la normativa especial del Sector Defensa, vinculada a la materia inmobiliaria, si bien se cuenta con el Decreto Supremo N° 024-DE-SG, que declara que los inmuebles afectados en uso o de propiedad de las Fuerzas Armadas son intangibles, inalienables e imprescriptibles y tienen el carácter de reservado; el Decreto Supremo N° 032-DE-SG2, que establece que los bienes inmuebles reservados para los Institutos Armados o para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con fines de seguridad y Defensa Nacional son intangibles, inalienables e imprescriptibles por su carácter estratégico; cabe anotar que a consecuencia de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, algunos predios de las Instituciones Armadas se vieron afectados[581].

Con tales argumentos, el Poder Ejecutivo sustenta que es necesario contar con una norma con rango de ley que garantice su condición de intangibles.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

[581] Exposición de motivos del PL 7752/2023-PE.

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relacionadas a las materias solicitadas pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como a la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Para analizar la pertinencia de la presente iniciativa legislativa, debemos reconocer que resulta necesario que la intangibilidad de los predios e inmuebles de las instituciones armadas sea declarada con una norma de rango de ley, ya que la actual normativa que declara la intangibilidad inalienabilidad e imprescriptibilidad de estos, tiene la calidad de decreto supremo norma que es inferior jerarquía.

Esta situación no permite contar con las herramientas legales necesarias para que la normativa especial del sector de defensa sea oponible a normas de superior jerarquía, para defender la intangibilidad y el cumplimiento de su mandato constitucional frente a terceros.

No obstante, esta problemática, ha sido abordada ya en proyectos de ley 5035/2022-CR y 7270/2023-CR; los que cuentan ya con dictamen favorable en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, aprobado en su cuarta Sesión Extraordinaria realizada el 11 de abril de 2024. Tal como se aprecia de la web del Congreso de la República[582].

[582] Página web del Congreso de la República. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/5035

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

— PROYECTO DE LEY N° 05035/2022-CR

Periodo Parlamentario	Legislatura	Fecha de Presentación	Proponente
2021-2026	Segunda Legislatura Ordinaria 2022	17/05/2023	Congreso-Actualización

Título
LEY QUE DECLARA LA INTANGIBILIDAD DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD, AFECTADOS EN USO Y EN POSESIÓN DE LOS INSTITUTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Sumilla
PROPONE DECLARAR LA INTANGIBILIDAD DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD, AFECTADOS EN USO Y EN POSESIÓN DE LOS INSTITUTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Observaciones
- -

Autor Principal	Coautores	Adherentes
- -	- -	- -

Grupo Parlamentario	Comisiones	Último Estado
- -	• Vivienda y Construcción • Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas	DICTAMEN (Seguimientos)

Cabe destacar que existe identidad entre la intervención normativa cuya delegación se solicita y lo dictaminado por el Congreso de la República en los proyectos de ley mencionados[583]:

[583] Página web del Congreso de la República. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTc0OTU5/pdf

En atención a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas recomienda la aprobación del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 5035/2022-CR y 7270/2023-CR, con la fórmula legal siguiente:

LEY QUE DECLARA LA INTANGIBILIDAD DE LOS BIENES INMUEBLES DEL SECTOR DEFENSA

Artículo único. Intangibilidad de los bienes inmuebles de propiedad del sector defensa y de los afectados en uso o en posesión a su favor
Se declara la intangibilidad de los bienes inmuebles de propiedad del sector defensa y de los afectados en uso o en posesión a su favor.

En tal sentido, al analizar la urgencia y necesidad de delegar esta materia en específico, se aprecia que no sería necesario hacerlo; por cuanto, existe un proyecto de ley, con dictamen favorable *ad portas* de ser debatido y votado en el pleno que cumpliría la misma finalidad que, la emisión de decretos legislativos por parte el Poder Ejecutivo y de una manera más célere.

En tal sentido, atendiendo a que se debe favorecer el procedimiento legislativo en el Congreso de la República, esta Comisión considera que no es pertinente la delegación de facultades en este extremo.

Conclusión

De todo lo expuesto se advierte que, no es necesario el otorgamiento de facultades en esta materia, por cuanto ya existen proyectos de ley con dictamen, que constituye una vía igualmente satisfactoria y más rápida para solucionar la problemática advertida. En

tal sentido, esta Comisión concluye que NO se debe brindar las facultades solicitadas en este extremo.

3.10.4. Crear la Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), como entidad pública encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de los componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) en todo el territorio nacional con autonomía administrativa, técnica, funcional, financiera y económica, a fin de fortalecer el Sistema en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La ausencia de la secretaría de seguridad y defensa nacional (SEDENA) generó la desestructuración del sistema de defensa nacional (SIDENA).

Se ha descrito que, no existe línea de autoridad directa con el ente rector, que le permita seguir el lineamiento de generar estrategias de protección a la población de amenazas y preocupaciones que afectan su seguridad, toda vez que mediante Decreto Supremo 61-2016-PCM, se dispuso que la SEDENA entidad adscrita a la PCM sea fusionada al Ministerio de Defensa.

La falta de institucionalidad y solidez del órgano gestor del SIDENA vulnera la reserva y confidencialidad de documentos clasificados que afectan a la seguridad nacional.
Las relaciones permanentes de coordinación y asesoramiento con las entidades conformantes del SIDENA se realizan con las limitaciones propias del nivel en el que se encuentra; tales como coordinación con las OSDENA en los tres niveles de gobierno.

En la exposición de motivos, se ha verificado que, el SIDENA requiere de una entidad pública para la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de sus componentes al interior del Sistema en todo el territorio nacional con la autonomía administrativa, técnica, funcional, financiera y económica.

La entidad gestora del SIDENA por disposición expresa del Decreto Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional, es la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), cumpliendo un rol esencial sobre el funcionamiento del COSEDENA. Si bien el Decreto Legislativo N° 1131, creó a la SEDENA como organismo público adscrito a PCM[584], posteriormente, se emitió el Decreto Supremo N° 061-2016-PCM[585], que dispuso la fusión por absorción de la SEDENA al Ministerio de Defensa, originando la extinción del mencionado organismo público. En la actualidad, como consecuencia de la fusión por absorción de la SEDENA al MINDEF, quien se encarga de la gestión del SIDENA es una Unidad Funcional (UGESIDENA), de naturaleza temporal y con limitaciones para cumplir los propósitos antes señalados, lo cual impacta desfavorablemente en la concepción, planeamiento, dirección, preparación, ejecución y supervisión de acciones en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional-[586]

Por tales motivos, el Poder Ejecutivo ha sustentado la solicitud de delegación de la presente submateria señalando que se requiere contar con una entidad que gestiona eficazmente el SIDENA y asesore en la toma de decisiones del más alto nivel a los miembros del COSEDENA y componentes del SIDENA en materia de seguridad y defensa nacional.

Por la naturaleza de las funciones de la SEDENA y el manejo de información clasificada que atañen a la seguridad y defensa nacionales, es necesario contar con un organismo público adscrito a la PCM, que tenga nivel de autonomía y competencia nacional, de conformidad a lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

---

[584] **Decreto Legislativo 1131, Decreto Legislativo que crea la Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional Artículo 3.- Creación y Naturaleza Jurídica**
Créase la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional - SEDENA como organismo público ejecutor, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía administrativa, funcional y económica. Tiene calidad de pliego presupuestal.

[585] Decreto Supremo N° 061-2016-PCM.
Artículo 2.- Fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros en diversos ministerios
Apruébese la fusión por absorción de las siguientes instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros:
c) Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional -SEDENA en el Ministerio de Defensa

[586] Argumentos contenidos en la Exposición de motivos PL 7752/2023-PE.

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relacionadas a las materias solicitadas pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como a la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

El SEDENA, como se indica en la exposición de motivos de la propuesta normativa, es hoy una Unidad Funcional (UGESIDENA), de naturaleza temporal y con limitaciones para cumplir los propósitos antes señalados, lo cual impacta desfavorablemente en la concepción, planeamiento, dirección, preparación, ejecución y supervisión de acciones en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional. A pesar de que el sector defensa señala la importancia del SEDENA, le ha dado el nivel de unidad funcional de naturaleza temporal lo que evidencia la poca o nula importancia que le ha dado no solo al SEDENA, sino también al Sistema de Defensa Nacional.

Por lo que resulta importante, atender la solicitud de facultades en este extremo. Entre los beneficios que reportará la creación de la SEDENA para fortalecer el SEDENA, tenemos hoy que se permitirá la coordinación transversal en los 3 niveles de gobierno, logrando así establecer y conducir las estrategias de protección a la población frente a las amenazas contra su seguridad y el adecuado funcionamiento del estado.

Además la modificatoria propuesta implicará un cambio en el enfoque tradicional de la seguridad a un nuevo enfoque de seguridad multidimensional con perspectiva humana en la que el estado no sólo protege la soberanía nacional, independencia e integridad territorial, sino que pone de centro de protección a la población ante todo tipo de amenazas y preocupaciones

Además se ha previsto que la presente medida no involucra presupuesto adicional al erario nacional sino que se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos del ministerio de defensa y la PCM.

Por tales consideraciones esta comisión estima pertinente el otorgamiento de facultades en la presente submateria.

Conclusión

En base a las consideraciones, esta Comisión considera que se encuentra justificado el otorgamiento de la facultad en el presente extremo, con el siguiente texto sustitutorio:

"Crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), como entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de los componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) en todo el territorio nacional con autonomia administrativa, técnica, funcional, financiera y económica, a fin de fortalecer el Sistema en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional".

3.10.5. Modificar las normas de organización de las Fuerzas Armadas con el objeto de incluir la competencia en ciberdefensa, así como precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional de cada una de ellas.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

El sustento de esta materia solicitada se basa en la existencia de la ciberdefensa al interior de las entidades de las Fuerzas Armadas. Es así que mediante la modificación e incorporaciones que se pretenden realizar en sus leyes especiales, se impactará en el cumplimento de la misión del Comando Operacional de Ciberdefensa del CCFFAA.

El objetivo de estas modificaciones es permitir el cumplimiento de la Ciberdefensa y protección en el ciberespacio de los activos críticos nacionales y recursos claves, cuando la capacidad de protección de sus operadores y/o del sector responsable de cada uno de ellos y/o de la Dirección Nacional de Inteligencia sea sobrepasada, a fin de mantener las

capacidades nacionales, en el ámbito de la seguridad nacional, así como actuar frente a amenazas o ataques realizados mediante el ciberespacio cuando estos afecten la seguridad nacional.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de las normas de la organización de las Fuerzas Armadas respecto a la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional de cada una de ellas que tendría la competencia en ciberdefensa, pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, las leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la Ley de Presupuesto o la Cuenta General de la República.

En ese sentido, y de la lectura tanto de la fórmula legal y de la exposición de motivos, esta comisión verifica que se pretende modificar las siguientes normas:

- Decreto Legislativo 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas.
- Decreto Legislativo 1137, Ley del Ejército del Perú.
- Decreto Legislativo 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú.

Las normas citadas no son leyes orgánicas ni normas relacionadas al marco legal presupuestal, ni tampoco versan sobre tratados internacionales, siendo constitucional su delegación.

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Esta comisión realizó del 20 al 24 de mayo del presente año una serie de mesas técnicas con diferentes especialistas de los distintos sectores del Poder Ejecutivo comprometidos con la delegación de facultades estudiada; es así, que el Ministerio de Defensa hizo su participación sobre la materia examinada, señalando, entre otras ideas, los siguiente:

- El artículo 44 del texto constitucional establece que son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la Nación.
- Que con fecha 12 de setiembre de 2018 se publicó el Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, el cual establece en su articulo 30 que la seguridad digital es el estado de confianza en el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las personas, la prosperidad económica y social, la seguridad nacional y los objetivos nacionales en dicho entorno.
- El artículo 3 del Decreto de Urgencia 007-2020, establece que la ciberseguridad es la capacidad tecnológica de preservar el adecuado funcionamiento de las redes, activos y sistemas informáticos y protegerlos ante amenazas y vulnerabilidad en el entorno digital.
- Que ha existido ciberataques ha activos críticos nacionales que momentáneamente han buscado vulnerar la ciberdefensa de entidades del Estado peruano, siendo necesario la optimización de la ciberdefensa nacional, para evitar futuros ataques.
- La Ley 30999, Ley de Ciberdefensa, publicada el 9 de agosto de 2019, tiene como finalidad defender y proteger la soberanía, los intereses nacionales, los activos críticos nacionales y recursos claves para mantener las capacidades nacionales. Esta ley establecía en sus disposiciones complementarias que el Ministerio de Defensa, en un plazo de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley en mención, presentaría las modificaciones, derogaciones e incorporaciones a las normas correspondientes a las Fuerzas Armadas en materia de ciberdefensa. Hasta la fecha no se ha hecho, siendo la oportunidad en esta delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo para las pertinentes modificaciones.
- Por estos motivos se requiere efectuar modificaciones a las leyes de las Fuerzas Armadas para la adecuación a la Ley 30999, Ley de Ciberdefensa.
- Las modificaciones comprenderían en cada ley de las fuerzas armadas sobre el ámbito de competencia, funciones, organización básica, un desarrollo sobre la función del órgano de línea y procesos de capacidades de ciberdefensa.
- Avances de ciberdefensa del 2018-2024:



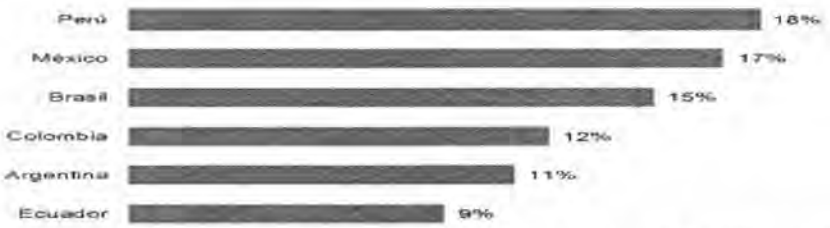
Parte de la exposición del especialista del Ministerio de Defensa en las mesas técnicas llevadas a cabo por la Comisión de Constitución y Reglamento.

De lo expuesto, esta comisión encuentra que, efectivamente, la segunda disposición complementaria final de la Ley 30999, Ley de Ciberdefensa, ordenó que el Ministerio de Defensa, en un plazo de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia la citada ley, presente las modificaciones, derogaciones e incorporaciones a las normas correspondientes de las Fuerzas Armadas respecto a ciberdefensa. No obstante, lamentablemente, esta obligación legal hasta la fecha no se ha cumplido, habiendo pasado casi cinco años desde que se originó dicha obligación.

En ese sentido, esta comisión considera pertinente que se faculte al Ministerio de Defensa ha actualizar las leyes de las Fuerzas Armadas, con el fin de dotar a las mismas del respaldo legal suficiente para implementar la ciberdefensa en cada una de las instituciones; así como también hacer cumplir lo establecido en la segunda disposición complementaria de la Ley 30999.

Finalmente, esta comisión considera importante acotar que la Revista de Ciencia e Investigación en Defensa -CAEN, señaló en un artículo del año 2023, escrito por el especialista Christian Rafael Quevedo Lezama, que en Latinoamérica el Perú encabeza el ranking de ciberataques. A continuación, el detalle:

Ranking de ciberataques en Latinoamérica



Fuente: "ciberdefensa y ciberseguridad en el Perú: realidad y retos en torno a la capacidad de las FF.AA. para neutralizar ciberataques que atenten contra la seguridad nacional".
Visto en: https://recide.caen.edu.pe/index.php/recide/article/view/99

De lo expuesto, se demuestra que el Estado peruano necesita fortalecer su ciberdefensa para proteger tanto sus activos críticos nacionales, así como a la población en general, siendo justificable en este extremo la delegación solicitada por el Poder Ejecutivo.

Conclusión

Esta comisión encuentra justificada el otorgamiento de facultades legislativas solicitada en el numeral 3.10.5, del inciso 3.10 del artículo 3 del Proyecto de Ley 7752/2023-PE. Para mejor detalle de la materia delegada, esta comisión propone el siguiente texto sustitutorio:

> "Modificar el Decreto Legislativo 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas; el Decreto Legislativo 1137, Ley del Ejército del Perú; y el Decreto Legislativo 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, con el objeto de incluir en cada una la competencia en ciberdefensa, así como precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional de cada institución militar."

3.10.6. Establecer reglas para el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en las redes de telecomunicaciones, así como en el otorgamiento de la numeración, a fin de que evitar comunicaciones fraudulentas contra los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

Mediante el numeral 3.10.6 del Proyecto de Ley, el Poder Ejecutivo propone establecer reglas para el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en las redes de telecomunicaciones, así como en el otorgamiento de la numeración, a fin de evitar comunicaciones fraudulentas contra los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

En el marco de esta disposición normativa, el Proyecto Ley, plantea que se establezca en la Ley de telecomunicaciones la prohibición de envío de mensajes y llamadas fraudulentas en las redes de telecomunicaciones y uso adecuado de la numeración, considerando los siguientes aspectos:

a) Las empresas que envían tráfico con origen nacional deberán garantizar la validez del "número origen" de la comunicación, a fin de que las comunicaciones sean trazables y permitan identificar al usuario que realiza la comunicación.
b) Constituye uso indebido del servicio el envío de mensajes o la realización de llamadas con contenido fraudulento. El uso indebido del servicio es causal de terminación de contrato, según las disposiciones que emita el Osiptel.
c) Los concesionarios de los servicios portadores locales, larga distancia nacional e internacional deben bloquear el tráfico destinado a las redes de los servicios fijos y móviles cuando se identifique el enmascaramiento, la supresión o modificación de la llamada entrante, en formatos distintos los establecidos en el plan técnico fundamental de numeración. Sobre el particular, corresponde señalar que el Osiptel ha propuesto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que modifique el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, con la finalidad de incluir la obligación de los concesionarios de los servicios portadores locales, de larga distancia nacional e internacional, de bloquear el tráfico de llamadas entrantes cuando se identifique el enmascaramiento, la supresión o modificación de la información de la llamada entrante, de tal forma que, no permita identificarse al

número de la parte llamante o su origen; siendo que dicha conducta implica una utilización indebida de la numeración[587].

En ese ámbito, se ha venido evaluando e identificando los mecanismos a través de los cuales se realizan llamadas y/o envían SMS con fines ilícitos, así como las vulnerabilidades técnicas y normativas existentes que son aprovechadas por los delincuentes. En tal sentido la propuesta normativa se resume en lo siguiente:

- Establecer mecanismos para evitar el progreso de llamadas que por sus características podrían ser consideradas como ilícitas: a) medidas preventivas para bloquear llamadas con fines ilícitos, b) medidas reactivas posterior al análisis de casos reportados por abonados usuarios u operadores, c) medidas para mitigar enmascaramiento del número llamante
- Establecer mecanismos para evitar el progreso de mensajes de texto que por sus características podrían ser consideradas ilícitas los cuales comprende lo siguiente: a) medidas preventivas para bloquear SMS con fines ilícitos, b) medidas reactivas posterior al análisis de casos reportados por abonados usuarios u operadores, c) medidas para mitigar el enmascaramiento del número llamante.
- Reporte de información sobre las investigaciones YO identificación de llamadas YO mensajes de texto con fines ilícitos
- Tipificación de infracciones y sanciones a las empresas operadoras que incumplan con las obligaciones establecidas en el decreto legislativos.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relacionadas a las materias solicitadas pueden ser delegables, siempre y cuando no modifiquen la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

[587] De acuerdo, a lo previsto en el Informe N° 000088-DPRC/2024 https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Nzcy/pdf

Por tanto, y luego de un análisis hecho tanto al inciso de la fórmula legal examinada, así como a la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis si se supera el control de constitucionalidad

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Conforme se desprende de la Exposición de Motivos la finalidad de esta disposición es reducir el tráfico de llamadas con contenido fraudulento[588] que involucran una indebida utilización de la numeración telefónica e incluso la apropiación de estos, tal es así que se ha advertido que algunos números utilizados para enmascarar este tipo de llamadas pertenecen a usuarios legítimos de dichos números[589].

Se destaca que, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sobre esta problema ha instado a sus miembros, entre los que se encuentra el Perú, a considerar implementar en sus marcos normativos los instrumentos que permitan aplicar lineamientos para enfrentar esta problemática.

Asimismo se tiene, la opinión del INDECOPI en el Informe N° 000101-2024-DPC/INDECOPI, de fecha 16 de mayo de 2024[590], ha advertido que:

> "la medida se enmarca en la seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital, siendo que, a través de la misma, como se advirtió en la exposición de motivos, se busca habilitar la posibilidad de regular respecto al adecuado uso de las redes de telecomunicaciones, así como el otorgamiento de numeración a fin de evitar las comunicaciones fraudulentas. Esto implica que las entidades administrativas involucradas buscarían establecer reglas para verificar el uso adecuado de las redes de telecomunicaciones y, de ser posible, instaurar mecanismos para identificar a quienes infrinjan estas disposiciones, lo cual desde un enfoque preventivo ayudaría a filtrar las llamadas que ingresan a los dispositivos móviles no solo de los consumidores sino de todos los ciudadanos en general. Asimismo, se pretendería reevaluar los mecanismos de otorgamientos y asignación de números de los diferentes actores que operan en el mercado

[588] Se hace referencia que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha desarrollado lineamientos en su Resolución N° 65 del año 2022, las cuales buscan hacer frente a estas prácticas lo que incluye medidas para identificar a la línea llamante e información sobre la identificación del origen de esta llamada.
[589] Informe N° 000101-2024-DPC/INDECOPI, de fecha 16 de mayo de 2024. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5Nzc2/pdf
[590] Idem.

(incluidos los agentes comerciales como proveedores o centros de contacto) a fin de que estos puedan ser plenamente identificados, lo que permitiría a los ciudadanos elegir si contestan o no una llamada sin correr el riesgo de que esta sea enmascarada"

Esta Comisión advierte que, existe una problemática por atender respecto a los ilícitos que se pueden cometer por llamadas enmascaradas, no obstante, como se tratará de la implementación de un marco normativo que regule conductas, estipule infracciones y establezca sanciones; se estima necesario que se canalice a través de un proyecto de Ley, de modo tal que se pueda escuchar a todos los sectores involucrados, incluyendo órganos reguladores y empresas operadoras.

Conclusión

De todo lo expuesto se advierte que, no es pertinente el otorgamiento de facultades en esta materia, por la problemática advertida y la solución propuesta requieren un debata más amplio y plural que debería ser canalizado a través de un proyecto de ley. En tal sentido, esta Comisión concluye que NO se debe brindar las facultades solicitadas en este extremo.

3.10.7 Regular el procedimiento de identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales a efectos de asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada entidad pública competente.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

En la exposición de motivos[591] se menciona que actualmente se encuentra vigente el Decreto Supremo N° 106-2017-PCM que aprobó el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales.

La norma establecerá las funciones que corresponde a cada entidad actora en el ámbito de los Activos Críticos Nacionales (ACN). En el cual se establecerá ciertas funciones a cumplir por diferentes instancias del Poder Ejecutivo que no se encuentran en sus respectivas leyes de creación o en su Reglamentos de Organización y Funciones. Por lo que se requiere una

[591] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 169

norma con rango de ley para que actualice, integre y precise dichas funciones sobre las bases del texto del precitado reglamento. Adicionalmente, se aprovechará para modificar el contenido de ciertas definiciones y otros vacíos encontrados en el reglamento.

El vigente Reglamento para la identificación, evaluación gestión de riesgos de los activos críticos nacionales, aprobado mediante DS 106-2017-PCM, solo comprende como sectores responsables únicamente a entidades del Poder Ejecutivo. No comprende por ejemplo al Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y organismos constitucionalmente autónomos. Esto es una modificación que se desea incorporar aprovechando la posibilidad de darse la delegación de facultades. Así RENIEC podría solicitar validar como ACN el registro de estado civil e identificación de personas. Actualmente se tienen cerca de 50 ACN validados, de los cuales cerca de 40 ya forman parte del Inventario Nacional. Sector Energía y Minas: 18 ACN validados. Sector Transportes y Comunicaciones: 16 validados. Sector Economia y Finanzas: 3 validados. Sector Defensa: 4 validados. Sector Interior: 2 validados. Sector Salud 1: validado. Sector Producción 1: validado. Sector Justicia 1: validado. Sector Vivienda 1: validado.

Cabe precisar que la DINI de oficio no valida la condición de ACN ni la retira. Es cada sector responsable quien propone a la DINI el ACN que considera debe validarse, para lo cual junto con el operador del ACN preparan la documentación sustentatoria y la presentan ante la DINI, quien evalúa la documentación y de encontrarla conforme le otorga la validación. Dicha validación estará vigente en tanto el sector responsable considere que debe continuar con ella. Si el sector considera que ya no corresponde continuar con ella, solicitara a la DINI que se deje sin efecto la misma.

Una vez validados los ACN por la DINI, se remite al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) para que apruebe su incorporación en el Inventario Nacional de ACN.

En lo cualitativo, se logrará que efectivamente se cumpla con las funciones asignadas. En lo cuantitativo no habría impacto ya que la medida no implica solicitar presupuesto adicional

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada

Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución

Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada

Al respecto, querer establecer una norma con rango de ley para actualizar, integrar y precisar las funciones que no se encuentran señaladas en las respectivos Reglamentos de Organización y Funciones asignadas a cada entidad pública, en el ámbito del Decreto Supremo N 106-2017-PCM que aprobó el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales[592], nos parece inviable, sobre todo, que con esta norma se pretende integrar o incorporar a los demás poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos[593], como al mismo parlamento nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público etc., para que estas instituciones puedan compartir sus Activos Críticos Nacionales (ACN) que son aquellos recursos, infraestructuras y sistemas esenciales e imprescindibles para el soporte de cada una de las instituciones; la norma vigente comprende únicamente a entidades del Poder Ejecutivo, entonces al querer incorporar al Poder Legislativo, Poder Judicial y a los organismos constitucionales autónomos para que el Ejecutivo pueda acceder a sus ACN, sin ser antes consultadas, estaríamos generando una visible interferencia que podría afectar la reserva de la información y la garantía institucional que tienen todas las instituciones públicas y demás poderes del Estado.

Por su parte, sobre la materia (3.10.7) la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, en su Vigesimoprimera Sesión Ordinaria realizada el 3 de junio de 2024, acordó por MAYORÍA, **aprobar el informe recaído en el Proyecto de Ley 7752/2023-PE**, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y defensa nacional, a solicitud de la Comisión de Constitución y Reglamento. Que a continuación citamos:

> *"Párrafo 3.10 En materia de seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia contrainteligencia y seguridad digital*

[592] Cfr. Activos Críticos Nacionales. https://www.gob.pe/10400-activos-criticos-nacionales-acn
[593] Cfr. Organismos Autónomos. https://www.gob.pe/estado/organismos-autonomos

3.10.7 Regular el procedimiento de identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales a efectos de asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada entidad pública competente.

En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa señala que:

[...]

Análisis

[...]

Lo extraño es que en la misma exposición de motivos se indica que: se aprovechará para modificar el contenido de ciertas definiciones y otros vacíos encontrados en el reglamento. [el resaltado es nuestro].

Por ello, este extremo de la solicitud de facultades no tiene consistencia y no se condice con lo dispuesto en el artículo 11 numeral 3, de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – LOPE, líneas arriba citado.

Por ello, la comisión considera que no es necesario delegar facultades sobre este extremo, ya que el mismo está regulado mediante un decreto supremo, cuya modificación corresponde al Poder Ejecutivo.

CONCLUSIÓN:

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas considera que la delegación de facultades solicitada en el artículo 3, párrafo 3.10 numeral 3.10.7 es inviable; por no corresponder modificar un decreto supremo con una norma con rango de ley."[594]

Conclusión:

Al tratarse de una materia que involucra a otros poderes del Estado y a organismos constitucionalmente autónomos, se considera que el Poder Ejecutivo en ejercicio de su

[594] Cfr. INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS, SOBRE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES SOLICITADA POR EL PODER EJECUTIVO, MEDIANTE EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE Páginas 29, 30 y 31

facultad de iniciativa legislativa conferida por el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, presente un proyecto de ley al respecto, a fin de que sea debatido ampliamente en el Congreso de la República con la participación plural de todos los señores congresistas y de los sectores involucrados con la presente temática.

En tal sentido, esta Comisión considera NO otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en la presente materia.

3.10.8 Modificar el Decreto Legislativo N° 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a efectos de permitir que el Sistema de Inteligencia Nacional en el ámbito de la seguridad y defensa nacional, también pueda acceder a la localización, geolocalización o rastreo de equipos de comunicación.

Resumen de los fundamentos desarrollados en la exposición de motivos

La exposición de motivos[595] señala que actualmente el Decreto Legislativo N° 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, sólo permite a la Policía Nacional del Perú el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. El Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) a través de sus componentes también requiere acceder a los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, los cuales le servirán de insumo para brindar la inteligencia necesaria para hacer frente a diferentes amenazas contra la seguridad nacional.

[595] Cfr. Proyecto de Ley 7752/2023-PE, página 170

Para hacer frente a las diferentes amenazas contempladas dentro del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) requiere contar con medios tecnológicos que le permitan acceder a información necesaria para la producción de inteligencia.

Análisis de constitucionalidad de la materia solicitada
Conforme a los parámetros materiales establecidos en la Constitución Política, artículos 101, 104, entre otros; y la jurisprudencia constitucional, la modificación de leyes relativas a temas específicos pueden ser delegables, siempre y cuando no modifique la Constitución Política, leyes orgánicas, tratados internacionales, ni la ley de presupuesto o la Cuenta General de la República.

Por tanto, luego de un análisis realizado a la fórmula legal, así como de la exposición de motivos que la sustenta, esta comisión considera que en este aspecto del análisis sí se supera el control de constitucionalidad.

Análisis de pertinencia de la materia solicitada
Si bien en la actualidad el Decreto Legislativo N° 1182, regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, esta medida sólo permite a la Policía Nacional del Perú, el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

En esa linea el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) a través de sus componentes, también requiere acceder a lo mismo para brindar la inteligencia necesaria para hacer frente a diferentes amenazas contra la seguridad nacional que están contempladas dentro del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) que requieren contar con medios tecnológicos que le permitan acceder a información necesaria para la producción de inteligencia.

En referencia a este pedido, debemos señalar que esta facultad podría afectar el derecho a la intimidad personal y la familia, al secreto de la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados, derechos fundamentales que son la línea

delgada frente a la necesidad de hacer frente a las diferentes amenazas contra la seguridad nacional, en tanto permitir acceder al gobierno a la identificación, localización y geolocalización o rastreo de equipos de comunicación; esta autorización de cuando traspasar estos límites frente a los derechos fundamentales solo sería posible con la autorización de un juez. El derecho a la privacidad o reserva de la vida íntima de las personas y a la inviolabilidad de sus comunicaciones están protegidos constitucionalmente en nuestro ordenamiento jurídico[596], por lo tanto, es obligación del legislador garantizar estos derechos y prevenir el abuso de poder que se pudiera cometer a través del mal uso de la información.

Asimismo, dentro de un Estado constitucional no puede existir ningún sector del mismo que escape al principio de legalidad, sometida siempre al respeto escrupuloso de los derechos fundamentales, tales como el debido proceso[597], tomando en cuenta siempre

---

[596] Cfr. Constitución Política del Perú:
"Capítulo I
Derechos fundamentales de la persona
[...]
Artículo 2. Toda persona tiene derecho:
[...]
5. [...]. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional [...].
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
7. ... [...], a la intimidad personal y familiar [...].
[...]
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen [...].
[...]
18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional."

[597] Cfr. Artículo 139, literal 2. El debido proceso es un derecho fundamental, natural o humano, que tiene toda persona que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente; pues el Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos.
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/pley/5C80BB8F67A05F4305256D25005

la presunción de inocencia[598]. Por lo tanto, el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana se convierte en el principio inalterable del sistema constitucional, por lo que todos los poderes públicos como también los ciudadanos están obligados a respetar y a garantizar que aquellos derechos que la Constitución reconoce como fundamentales se respeten y sean inviolables y, que sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley.

Por otro lado, mediante Carta N° 122-2024/DE/COMEXPERU La Sociedad de Comercio Exterior del Perú de fecha 29 de mayo de 2024, dirigida a la Congresista MARTHA MOYANO DELGADO Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento Congreso de la República, emitió su opinión Ref.: Proyecto de Ley N° 7752/2023-PE y puntualmente sobre este tema señalando lo siguiente:
"Consideramos que esta materia debe ser discutida y debatida técnicamente en el foro del Congreso, por la gravedad que implica.
La Constitución incluye el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. En ese contexto, el Decreto Legislativo N° 1182, aunque cuestionable, creó una figura excepcional solo para delitos graves.
Este derecho constitucional al secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales requiere mandato judicial para levantarlo. Sin embargo, en este pedido de facultades se plantea que el Sistema Nacional de Inteligencia acceda a dicha información de acuerdo a sus fines en temas de seguridad y defensa nacional.
En un régimen democrático no se puede normalizar la excepción de los derechos constitucionales. En todo caso, cabría la discusión constitucional sobre si se reforma ese derecho, más no corresponde tratar este tema a nivel de delegación de facultades."

Finalmente, esta comisión ha podido determinar que en la exposición de motivos no se encuentra la justificación jurídica del pedido, sobre todo que no existe un parámetro de control que garantiza sus actuaciones, si bien se hace referencia al interés nacional, estas rozan con la inconstitucionalidad al colocar a los ciudadanos, sin razón justificada en situación de sospechosos, claramente violando el derecho a la intimidad personal y

---

CB0B1?opendocument#:~:text=El%20debido%20proceso%20es%20un,cuando%20se%20ejercitan%20los%20derechos

[598] Cfr. Constitución Política del Perú, Articulo 2. Literal 24. Inciso e.

familiar, como al derecho a la inviolabilidad y reserva de las comunicaciones y documentos privados que tiene toda persona.

Conclusión:
Al tratarse de una materia que involucra derechos fundamentales, se considera que el Poder Ejecutivo en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa conferida por el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, presente un proyecto de ley al respecto, a fin de que sea debatido ampliamente en el Congreso de la República con la participación plural de todos los señores congresistas y de los sectores involucrados con la presente temática.

En tal sentido, esta Comisión considera NO otorgar facultades para legislar al Poder Ejecutivo en la presente materia.

RESUMEN DE MATERIAS DELEGADAS

Del análisis realizado a lo largo del desarrollo del presente dictamen se tiene que de las 10 materias y 105 submaterias solicitadas por el Poder Ejecutivo, esta Comisión ha considerado otorgarle facultades para legislara en las 10 materias solicitadas pero restringidas a 63 submamaterias, las cuales en algunos casos se confieren en sus propios términos y en otros con texto sustitutorio, conforme se muestra a continuación:

Materia Solicitada por el Poder Ejecutivo	¿Se otorga facultades? Si / No	Texto Propuesto por la Comisión
1. Fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos		
1.1. Simplificar procedimientos administrativos relacionados a las actividades productivas y la generación sostenible de empleos formales, a través de la aplicación del silencio administrativo positivo para promover	SI	En sus términos

la competitividad y el crecimiento sostenible.		
1.2. Modificar el Decreto Legislativo N° 1183, Decreto Legislativo que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera, para establecer competencias que le permitan a la SUNAT crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF).	SI	Modificar los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 1183, Decreto Legislativo que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera, para establecer competencias que le permitan a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF).
1.3. Establecer medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada, conforme a lo siguiente: a) Promover la estandarización y la simplificación administrativa, así como optimizar los plazos, requisitos y procedimientos de evaluación para la obtención de títulos habilitantes y demás requerimientos de cualquier naturaleza, cuya tramitación esté a cargo de entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, que resulten necesarios para el desarrollo de proyectos. Asimismo, optimizar plazos vinculados al seguimiento de proyectos. b) Mejorar la planificación, adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos y	SI	Establecer medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada, conforme a lo siguiente: a) Promover la estandarización y la simplificación administrativa, así como optimizar los plazos, requisitos y procedimientos de evaluación para la obtención de títulos habilitantes y demás requerimientos de cualquier naturaleza, cuya tramitación esté a cargo de entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, que resulten necesarios para el desarrollo de proyectos. Asimismo, optimizar plazos vinculados al seguimiento de proyectos. b) Mejorar la planificación, adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos y

liberación de interferencias, a través de la incorporación de programas de resarcimiento complementario para mitigar los aspectos sociales; exoneración de responsabilidad a los funcionarios y servidores públicos que participan en los procedimientos de adquisición anticipada y/o expropiación de predios; aprovechamiento de la plusvalía inmobiliaria; adquisición y expropiación de predios en bloque; habilitación para realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio en áreas de uso público; así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos. c) Ampliar el plazo máximo de entrega en administración al sector privado establecido en la Ley del Sistema Portuario Nacional. d) Garantizar la seguridad y estabilidad jurídica para el fomento de la inversión privada.		liberación de interferencias, a través de la incorporación de programas de resarcimiento complementario para mitigar los aspectos sociales; aprovechamiento de la plusvalía inmobiliaria; adquisición y expropiación de predios en bloque; habilitación para realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio en áreas de uso público; así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos. c) Garantizar la seguridad y estabilidad jurídica para el fomento de la inversión privada.
1.4. Actualizar y sistematizar la normativa para la promoción de la inversión privada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos; a fin de regular su alcance, marco institucional y mejora de procesos, garantizando la eficiencia y la predictibilidad en el desarrollo de cada una de las fases; e incorporar actividades de alto interés social o para la prevención y atención de	NO	No aplica

emergencias, que atiendan necesidades de la población, que actualmente no se consideran inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.		
1.5. Establecer medidas de simplificación y mejora de los procesos de promoción de la inversión que impulsen y dinamicen el desarrollo de proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) en sus diferentes fases, con la finalidad de promover las inversiones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Dichas medidas comprenden los siguientes temas: a) Fortalecer el rol de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, durante las fases del desarrollo de las APP, comprendiendo, pero sin limitarse, a la emisión de opinión sobre aspectos de ejecución contractual o frente a controversias, constituirse en sujeto activo para la tramitación de los procesos de adquisición y expropiación de terrenos, así como para la liberación de interferencias y otras que resulten necesarias para optimizar su participación. b) Regular medidas de mejora y simplificación de procesos y competencias para asegurar la	SI	En sus términos

oportuna adjudicación, desarrollo y ejecución de proyectos. c) Incorporar disposiciones para la implementación del modelo de gestión integral de proyectos a través de los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP), así como medidas complementarias para garantizar y promover su adecuado funcionamiento y operativización.		
1.6. Establecer un marco normativo especial para la atención de los recursos administrativos presentados en los procedimientos administrativos sancionadores de la Superintendencia del Mercado de Valores que disponga la fijación de plazos distintos a los de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en función al grado de complejidad de la materia.	SI	Establecer un marco normativo especial para la atención de los recursos administrativos presentados en los procedimientos administrativos sancionadores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que disponga la fijación de plazos distintos a los de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para la atención de los recursos interpuestos ante la SMV, en función al grado de complejidad de la materia, respetando el principio de razonabilidad y proporcionalidad así como el debido proceso en la atención de los recursos.
1.7. Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, con principal incidencia en la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.	NO	No aplica
1.8. Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de	NO	No aplica

inversión, con principal incidencia en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.		
1.9. Fortalecer el marco normativo en materia migratoria, con especial incidencia en el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, a efectos de complementar las atribuciones en materia migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando la seguridad jurídica y el acceso al procedimiento de regularización migratoria de las calidades migratorias bajo su competencia.	SI	Modificar el Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, a fin de complementar las atribuciones en materia migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando la seguridad jurídica y el acceso al procedimiento de regularización migratoria de las calidades migratorias bajo su competencia.
1.10. Establecer disposiciones en materia de selección, ratificación, funciones y potestad sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, a fin de fortalecer la gestión del servicio de traducciones oficiales.	SI	En sus términos
1.11. Modificar los plazos de los procedimientos administrativos de licencias, autorizaciones y derechos de uso de vía y área acuática para la ejecución de proyectos, estableciendo disposiciones para disminuir los plazos para el pronunciamiento, en el caso de expedientes reingresados.	SI	En sus términos
1.12. Modificar el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, a efectos de fortalecer el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (RENACE).	SI	Modificar el Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, a efectos de fortalecer el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (RENACE), disponiendo con fines de acreditación

		e información pública la obligatoriedad de la inscripción de los Cetros de arbitraje y árbitros en el RENACE sin costo alguno y sin generar mayores requisitos para la prestación del servicio arbitral.
1.13. Aprobar mejoras regulatorias en la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica con el objetivo de incrementar la competencia en la actividad de generación de energía eléctrica y promover una mayor inversión en nuevas fuentes de generación de energía eléctrica para el suministro de los usuarios regulados, a fin de contar con energía eléctrica a menor costo y menos contaminante, lo que contribuirá a reducir las tarifas eléctricas de los usuarios regulados.	NO	No aplica
1.14. Modificar el artículo 2 de la Ley N°31992, Ley de Fomento del Hidrógeno Verde para promover el desarrollo del hidrógeno verde.	SI	En sus términos
1.15. Promover el desarrollo de la infraestructura petroquímica nacional para la implementación y operación de Plantas Petroquimicas que incluyan la producción de urea y fertilizantes.	SI	En sus términos
1.16. Modificar los artículos 8, 9, 14, 15, y 18 de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural, y artículos conexos para acelerar la ejecución de proyectos de electrificación rural.	SI	En sus términos
1.17. Fortalecimiento de la masificación del gas natural, creando un mecanismo	NO	No aplica

de compensación para el acceso descentralizado que nivele los precios finales para los usuarios regulados del servicio de distribución por red de ductos a nivel nacional.		
1.18. Fortalecimiento del proceso de masificación de gas natural en las regiones que no son parte de una concesión, para que más hogares puedan acceder al gas natural.	SI	Modificar el numeral 5.5. del artículo 5 de la Ley 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, para promover el fortalecimiento del proceso de masificación de gas natural en las regiones que no son parte de una concesión, para que más hogares puedan acceder al gas natural.
1.19. Modificar la Ley N° 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, para optimizar la remediación de pasivos ambientales mineros a cargo del Estado.	SI	Modificar los artículos 5, 10 y 13 de la Ley N° 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, para optimizar la remediación de pasivos ambientales mineros a cargo del Estado.
1.20. Ordenar y fortalecer el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, reestructurando el proceso de formalización a través del fortalecimiento y mejora de la calidad regulatoria.	NO	No aplica
1.21. Derogar la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N°28588 Ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura arquitectónica y no arquitectónica de	SI	En sus términos

los centros educativos a cargo del Ministerio de Educación.		
1.22. Derogar la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N°29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud.	NO	No aplica
1.23. Modificar el literal d.4) del artículo 7 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en el extremo de la autorización del Ministerio de Cultura como requisito para la expedición de licencias de funcionamiento en monumentos históricos.	SI	En sus términos
1.24. Establecer el Diagnóstico Arqueológico de Superficie como una medida opcional al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que facilite la inversión pública y privada.	SI	En sus términos
1.25. Facultar al Ministerio de Cultura para crear una nómina de especialistas encargados de realizar acciones de identificación de pueblos indígenas u originarios, en el marco de la promoción de las inversiones, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.	NO	No aplica
1.26. Establecer un marco normativo que permita la prestación de servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles de gobierno, contemplando acciones de garantía, respeto y valoración de la	NO	No aplica

diversidad cultural que permita construir una ciudadanía intercultural.		
1.27. Autorizar al Ministerio de Cultura la aprobación de tarifas diferenciadas para promover la visita a bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y museos públicos. La promoción de la visita tendrá especial énfasis en los Sitios del Patrimonio Mundial que por sus características únicas son gestionadas exclusivamente por el Ministerio de Cultura.	SI	En sus términos
1.28. Regular el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, a efectos de facilitar la inversión público o privada, y facilitar la conservación, restauración y su puesta en valor.	SI	Regular el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, a efectos de facilitar la inversión pública o privada, así como la conservación, restauración y su puesta en valor. No incluye la modificación o distorsión de competencia municipal alguna.
1.29. Reforzar las acciones y establecer medidas especiales para la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad, administración o competencia del Ministerio de Cultura a nivel nacional.	NO	No aplica
1.30. Establecer un marco normativo para promover que la atención de las entidades públicas se brinde en el idioma local para los hablantes de lenguas indígenas u originarias, en ámbitos con predominancia lingüística.	NO	No aplica
1.31. Establecer estímulos económicos para incentivar la investigación en arqueología y otros ámbitos culturales	NO	No aplica

relacionados a bienes de patrimonio cultural inmueble o y mueble; y, la investigación sobre las artes, sobre la industria audiovisual y cinematográfica, y, sobre el libro y la lectura; con cargo a los estímulos económicos aprobados por Decreto de Urgencia 022-2019.		
1.32. Regular el marco normativo para promover el sector artístico y creativo, considerando mecanismos de promoción y posicionamiento de los artistas y creadores.	NO	No aplica
1.33. Establecer medidas para promover el despliegue de los servicios públicos de telecomunicaciones que utilicen tecnología de quinta generación (5G) o superior, a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establezca un mecanismo especial para el otorgamiento de concesiones con asignación de espectro radioeléctrico sujeto al cumplimiento de compromisos de inversión en atención al valor de dicho recurso natural.	SI	En sus términos
1.34. Modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 98, Ley de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A., a fin de permitir que la Junta General de Accionistas, máximo órgano de la empresa, pueda establecer el domicilio legal de ésta; así como, eliminar la necesidad de promulgar una Ley expresa para su disolución.	SI	Modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 98, Ley de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A., a fin de permitir que la Junta General de Accionistas, máximo órgano de la empresa, pueda establecer el domicilio legal de ésta.
1.35. Garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los	SI	Garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los

corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.		corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, sin afectar términos contractuales, salvo acuerdo de partes.
1.36. Establecer disposiciones especiales en materia de habilitaciones urbanas y de edificación para optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos sobre la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y otros actos administrativos que las complementen, de manera simplificada, ágil, eficaz y eficiente.	SI	Establecer disposiciones especiales en materia de habilitaciones urbanas y de edificación para optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos sobre la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y otros actos administrativos que las complementen. Queda prohibido derogar, sustituir o modificar la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como regular materias de exclusiva competencia de los gobiernos locales.
1.37. Optimizar el marco normativo para la adecuación progresiva de los prestadores de servicios de saneamiento, precisando las condiciones a cumplir en relación al plazo máximo de adecuación establecido, predictibilidad respecto al instrumento de gestión ambiental aplicable y medidas complementarias de simplificación, promoción e impulso integral de la adecuación progresiva.	SI	Modificar el artículo 4 del Decreto Legislativo 1285, Decreto que modifica el artículo 79 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos de Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos a los instrumentos de gestión ambiental; para realizar precisiones respecto a la aplicación del plazo límite para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y la autorización de vertimiento, ante la autoridad competente.
1.38. Establecer disposiciones para promover el desarrollo de la construcción, a través de tecnologías constructivas no convencionales.	SI	Modificar el artículo 8 de la Ley 30156, Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de otorgar a este

		sector la función de establecer disposiciones para promover el desarrollo de la construcción, a través de tecnologías constructivas no convencionales.
1.39. Fortalecer y modernizar la gestión del Instituto del Mar del Perú — IMARPE.	NO	No aplica
1.40. Modificar la Ley N°30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), a fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura.	SI	En sus términos
1.41. Modificar los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 13 e incorporar la Quinta Disposición Complementaria Final en el Decreto Legislativo N° 1199, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales, a fin de establecer las condiciones habilitantes para el impulso de la inversión privada y pública en infraestructura productiva industrial.	NO	No aplica
1.42. Derogar la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, a fin de unificar los requisitos para que las empresas accedan y permanezcan en el	SI	En sus términos

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).		
1.43. Modificar el artículo 24-A de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, a fin de modificar las etapas del procedimiento de licenciamiento e incorporar la etapa de evaluación de requisitos de admisibilidad, previo a la etapa de evaluación integral; así como modificar el plazo del procedimiento de licenciamiento.	SI	Modificar el artículo 24-A de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, a fin de modificar las etapas del procedimiento de licenciamiento e incorporar la etapa de evaluación de requisitos de admisibilidad, previo a la etapa de evaluación integral; así como modificar el plazo del procedimiento de licenciamiento, hasta por un plazo máximo de 200 días hábiles.
1.44. Establecer medidas de simplificación administrativa al marco normativo de saneamiento físico legal de inmuebles del sector educación destinados a instituciones educativas públicas, a fin que se mejore y agilice el procedimiento actual.	SI	Modificar los artículos 3, 7, 9 e incluir una única Disposición Complementaria Final en la Ley 31318, Ley que regula el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles del Sector Educación destinados a instituciones públicas, para establecer medidas de simplificación administrativa que mejoren y agilicen el procedimiento actual del marco normativo de saneamiento físico legal de inmuebles del sector educación en relación a las instituciones educativas públicas.
1.45. Aprobar la Nueva Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y derogación de la Ley N° 28036, a fin de fortalecer el marco regulatorio del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) y promover la mejora de la prestación de los servicios públicos para la práctica del deporte en beneficio de la población en general.	SI	Modificar los artículos 6, 8, 29 y 30 y derogar los artículos 31 y 32 de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la Organización de las Naciones Unidades para la Educación,

		la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Código Mundial Antidopaje vigente de la Agencia Mundial Antidopaje – World Antidopoing Agency (WADA-AMA).
1.46. Modificar el artículo 3 de la Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período de 10 años, con la finalidad de permitir la investigación y producción de OVM, la edición génica y otras técnicas modernas de biotecnología, lo cual contribuirá a la sostenibilidad de la agricultura y lograr mejores resultados ante los efectos del cambio climático.	SI	En sus términos
1.47. Disponer la prórroga del mandato de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua, de sus Comités de Administración Temporal y de los otros órganos de similar denominación establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, hasta el 31 de diciembre de 2025.	SI	En sus términos
1.48. Establecer el marco normativo para fortalecer la gestión de los servicios públicos de protección social ante emergencias, mediante su adaptación, de manera preventiva, para garantizar su continuidad operativa, a través de la identificación de las acciones a cargo de las entidades públicas prestadoras de servicios de protección social y de las entidades rectoras y/o conductoras de emergencias; acciones de colaboración	SI	En sus términos

intersectorial e intergubernamental; habilitación de acciones orientadas al rediseño de modelos operacionales de los servicios, el diseño de nuevos servicios o intervenciones, el diseño o rediseño de servicios e intervenciones dirigidas a la atención temporal extraordinaria de nuevos usuarios, incluyendo a la población migrante y refugiada; el adelanto en la entrega de bienes o servicios, la exoneración temporal de condicionalidades, la ampliación de beneficios dirigidos a poblaciones vulnerables; el intercambio de información nominal y el acceso a plataformas de información; la habilitación para que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de sus competencias, determine la instancia que se encargue de gestionar la entrega de transferencias monetarias en situaciones de emergencia, y su alcance; así como modificar el artículo 8 de la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para precisar su función en el marco de la adaptación de los servicios públicos de protección social.		
1.49. Modificar el numeral 4.6 del artículo 4 y la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible,	NO	No aplica

referidos a la nómina de especialistas para ejercer las funciones de revisión de estudios de impacto ambiental y supervisión y/o acompañamiento de la línea base y opiniones técnicas, según corresponda, a fin de fortalecer, agilizar y reducir los tiempos de evaluación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión.		
1.50. Permitir afiliar a la IAFAS SIS, bajo el Régimen de Financiamiento Subsidiado, independientemente de la clasificación socioeconómica, a todas las personas residentes en el Perú y a todos los peruanos residentes en el exterior que se encuentren en el territorio nacional y, que no cuenten con ningún seguro de salud, brindándoles la cobertura gratuita del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud — PEAS y Planes Complementarios a cargo de la IAFAS SIS, así como la cobertura del listado de enfermedades de alto costo, el listado de enfermedades raras y huérfanas y procedimientos de alto costo a cargo de la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento de Salud Fondo Intangible Solidario de Salud — IAFAS FISSAL.	NO	No aplica
1.51. Fortalecer la regulación sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en el Perú.	NO	No aplica
1.52. Modificar la Segunda Disposición Complementaria Final y Transitoria del	NO	No aplica

Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas para incorporar la obligatoriedad de la opinión previa de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como condición, para obtener la autorización para que las entidades del Poder Ejecutivo puedan interponer la demanda contenciosa administrativa ante resoluciones que emita la Sala en materia de eliminación de barreras burocráticas del INDECOPI, así como eliminar el requisito de que dicha autorización sea aprobada en el Consejo de Ministros.		
1.53. Modificar la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para i) establecer las definiciones y alcance de los mecanismos de participación de la ciudadanía como parte de los derechos inherentes a la persona; ii) establecer el marco normativo que regule la gestión integral de los mecanismos de participación de la ciudadanía; así como, iii) precisar la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para establecer los mecanismos de participación de la ciudadanía, los roles y responsabilidades de las entidades involucradas y el procedimiento para su ejercicio; a fin de contribuir con la mejora de la calidad de los bienes y servicios que brinda el Estado,	NO	No aplica

asegurando la participación de las entidades y empresas públicas y privadas que forman parte de la cadena de valor desde la mirada de las personas en el territorio.		
1.54. Establecer el marco normativo para la mejora del servicio público, garantizando el correcto funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración Pública — ENAP, a través del fortalecimiento de las capacidades de las personas que prestan servicios al Estado, estableciendo las disposiciones necesarias para cumplir con su misión institucional y permitiendo la mejora del servicio público prestado por los servidores capacitados.	SI	Establecer, regular y modificar el marco normativo que habilite, garantice y autorice el correcto funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP ampliando su ámbito de alcance para el fortalecimiento de las capacidades de las personas que prestan servicios al Estado y la ciudadanía dentro del marco de competencias de ENAP, estableciendo las disposiciones necesarias para cumplir con su misión institucional y permitiendo la mejora del servicio público prestado por los servidores capacitados.
1.55. Establecer el marco normativo para la mejora del servicio público, a través de la optimización del régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, garantizando la idoneidad y la actuación independiente e imparcial de la secretaría técnica del procedimiento administrativo disciplinario, el debido procedimiento y la predictibilidad en la aplicación de las medidas disciplinarias.	NO	No aplica
1.56. Modificar el Decreto Legislativo N°1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria para: i) Precisar los efectos ante el incumplimiento de no	NO	No aplica

haber efectuado un ACR, ii) Fortalecer el rol de los actores y su articulación con el ecosistema de calidad regulatoria, iii) Restringir los supuestos de excepciones para la aplicación de los instrumentos de calidad regulatoria, iv) Fortalecer los mecanismos de trasparencia de la información que se genera en el ciclo regulatorio; y, v) Fortalecer el rol de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria.		
1.57. Facultar al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) para el uso de herramientas tecnológicas en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras y acceso a información de datos personales y metadata, a fin de garantizar que los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones puedan contar con la prestación continua del servicio contratado.	NO	No aplica
1.58. Modificar el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el objetivo de ampliar el plazo de 15 días hábiles con el que cuentan los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado a un plazo de 30 días hábiles, como una excepción al plazo general establecido	SI	**Modificar el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el objetivo de ampliar el plazo de 15 días hábiles hasta 30 días hábiles, para que los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado, como una excepción al plazo general**

en dicha norma para la resolución de los recursos de reconsideración.		**establecido en dicha norma para la resolución de los recursos de reconsideración.**
1.59. Modificar la Ley No. 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, para establecer medidas de articulación y coordinación de los organismos reguladores, orientada a la mejora de la gestión regulatoria.	NO	No aplica
2. Mejora de la calidad de la inversión pública		
2.1. Fortalecer el diseño del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) para garantizar su finalidad y asegurar mejores niveles de calidad en la inversión pública.	NO	No aplica
2.2. Regular las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones para su alineamiento al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.	SI	**Regular las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones (IRI) que estuvieron comprendidas en el PIRCC hasta la fecha de publicación de la Ley N° 31953 (6 de diciembre de 2023), Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024 y que no hayan contado con registro Formato Único de Reconstrucción (FUR), para su alineamiento al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y cumplan con las fases del ciclo de inversión del referido sistema nacional.**
2.3. Ampliar el plazo de los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica.	SI	**Modificar los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación**

		económica, a fin de ampliar los plazos previstos en los referidos artículos.
2.4. Modificar el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de orientar estratégicamente a las entidades para el desarrollo de sus inversiones, así como optimizar la gestión de la inversión pública.	SI	**Modificar el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sobre: a) Lineamientos de una Política Nacional de Inversión Pública, - Modificaciones en el Ciclo de Inversión y, b) Inclusión de órganos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; con la finalidad de orientar estratégicamente a las entidades para el desarrollo de sus inversiones, así como optimizar la gestión de la inversión pública.**
2.5. Establecer medidas para agilizar la reactivación de obras públicas paralizadas mediante la modificación de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, a fin de optimizar sus disposiciones y facultar a las entidades a utilizar un Procedimiento Especial de Selección para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas.	SI	**Modificar la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, a efectos de establecer y facultar a las entidades a utilizar un procedimiento especial de selección, con plazos reducidos, para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas.**
2.6. Modificar el artículo 17 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), referido a la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en la Gestión del Riesgo de Desastres.	SI	**Modificar el artículo 17 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), referido a la participación de las Fuerzas Armadas en la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo correspondiente a la preparación, respuesta y**

		rehabilitación ante situaciones de desastre, de acuerdo con sus competencias y en coordinación y apoyo a las autoridades competentes, conforme a las normas del SINAGERD.
2.7. Modificar el Decreto Legislativo N° 1274, Decreto Legislativo que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país - "AGUA +", a fin de permitir la aprobación y ejecución de inversiones de optimización, ampliación Marginal, rehabilitación y reposición en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.	SI	En sus términos
2.8. Se autoriza a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay, utilizando el procedimiento establecido en la Ley N° 31841 y su Reglamento, para la generación de una cartera de inversiones estratégicas, que incluya inversiones con montos menores a 200 millones de soles.	SI	Autorizar a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay, utilizando el procedimiento establecido en la Ley 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y su Reglamento, para la generación de una cartera de inversiones estratégicas que incluya inversiones con montos menores a 200 millones de soles.
3. fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado		
3.1. Modificar el Decreto Legislativo N° 206 y el Decreto Ley N° 25694, con la finalidad de fortalecer institucionalmente a COFIDE, a través del fomento de la participación de inversionistas institucionales en su capital	SI	Modificar el Decreto Legislativo N° 206, Ley del sistema de fomento y apoyo financiero al desarrollo empresarial, y el Decreto Ley N° 25694, Adicionan al objeto social de

social y la optimización de su gobierno corporativo.		COFIDE la realización de actividades de financiamiento en favor de pequeños empresarios y agricultores, con la finalidad de fortalecer institucionalmente a COFIDE, a través del fomento de la participación de inversionistas institucionales con participaciones minoritarias en su capital social y la optimización de su gobierno corporativo.
3.2. Aprobar medidas que permitan cumplir con el rol subsidiario del Estado y mejorar la eficiencia de las empresas públicas mediante una supervisión y monitore estratégico, alinear la regulación a las buenas prácticas de gobierno corporativo de la OCDE, así como ordenar y sistematizar las normas de la actividad empresarial del Estado.	SI	Crear un nuevo marco jurídico que ordene, sistematice y optimice la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, fortaleciendo la estructura y gestión del FONAFE, orientado a una supervisión y monitoreo estratégico, con un enfoque de riesgos; permitiendo incorporar las buenas prácticas de gobierno corporativo de la OCDE, bajo los límites que establece la Constitución Política del Perú para la empresa pública.
4. Reducción de costos de transacción		
4.1. Establecer medidas para facilitar la suscripción de los contratos en materia de contratación pública.	NO	No aplica
4.2. Modificar el literal a) del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, a fin de fomentar las compras corporativas obligatorias que gestiona dicha entidad.	NO	No aplica
4.3. Modificar el artículo 2014 del Código Civil, a efectos de brindar protección al tercero registral que contrata confiando en	NO	No aplica

la información publicitada en los asientos registrales.		
4.4. Modificar los artículos 2033, 2037,2038, 2040 y 2042 del Código Civil, a efectos de simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional.	SI	Modificar los artículos 2033, 2037, 2038, 2040 y 2042 del Código Civil, a efectos de simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional, considerando la implementación progresiva para el caso del Registro de Mandatos y Poderes.
5. Acceso y competencia en servicios financieros		
5.1. Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para autorizar la reducción del capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN) que prestan servicios a las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y con ello fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero de valores; y en lo referente a límites operativos de concentración, con la finalidad de fomentar el otorgamiento de financiamientos por parte de las empresas del sistema financiero a través de límites operativos de concentración alineados a los estándares internacionales y particularidades del sistema financiero nacional.	SI	**Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en los siguientes extremos:** **a) Artículo 17, para autorizar la reducción del capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN) que prestan servicios a las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y con ello fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero de valores.** **b) Capítulo II del Título II. Límites y prohibiciones, en específico, en lo referente a límites operativos de concentración, con la finalidad de**

		fomentar el otorgamiento de financiamientos por parte de las empresas del sistema financiero a través de límites operativos de concentración alineados a los estándares internacionales y particularidades del sistema financiero nacional.
5.2. Modificar el Decreto Legislativo N° 862, Ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras, con la finalidad de fortalecer la regulación y supervisión de los fondos de inversión y de las sociedades que los administran.	SI	**Modificar el Decreto Legislativo N° 862, Ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras, con la finalidad de incorporar medidas y procedimientos de regulación y supervisión de los fondos de inversión públicos y privados y de las sociedades que los administran.**
5.3. Modificar la Ley N° 29440, Ley de los Sistemas de Pago y de Liquidación de Valores, con el objetivo de fomentar la competencia y la innovación en el sistema nacional de pagos, así como de fortalecer las atribuciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para regular los servicios e instrumentos de pago, incluyendo a los Acuerdos y Proveedores de Servicios de Pagos, con la finalidad de mejorar las condiciones y oportunidades para la interoperabilidad de los pagos inmediatos, incluyendo aspectos como las comisiones y tarifas de estos servicios, y facultades adicionales del BCRP para la administración y regulación de plataformas de servicios de pagos minoristas; y modificar el Decreto Legislativo N° 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa "Reactiva Perú", con la finalidad de asegurar la continuidad en la	SI	**a) Modificar, la Ley N° 29440, Ley de los Sistemas de pagos y de Liquidación de Valores, a fin de: a.1) Ampliar la definición de los sistemas de pagos y de Liquidación de Valores para incorporar a entidades, proveedores, administradores tecnológicos, servicios e instrumentos de pagos así como a otros actores que puedan surgir en el proceso de innovación de servicios digitales y mejorar el acceso a estos servicios.** **a.2) Fortalecer las atribuciones Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para regular medidas orientadas a ampliar el acceso a servicios digitales a la población no bancarizada, reducir costos y mejorar la interoperabilidad.** **a.3) Facultar al BCRP para administrar y regular plataformas de pagos**

cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, para establecer los mecanismos de administración de cartera de créditos con garantía del Gobierno Nacional de una empresa del sistema financiero que ha sido sometida a un proceso de intervención, disolución y liquidación por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.		**minoristas con el fin de garantizar la liquidación segura y la interoperabilidad de los pagos de bajo valor.** **b) Modificar el Decreto Legislativo 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa "REACTIVA PERÚ" para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, a fin de establecer los mecanismos de administración de cartera de créditos con garantía del Gobierno Nacional de una empresa del sistema financiero que ha sido sometida a un proceso de intervención, disolución y liquidación por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP".**
5.4. Fortalecer el Fondo AGROPERÚ, mejorando las condiciones de acceso a los servicios financieros agrarios; de acuerdo con: 1. Modificación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, con el propósito de ampliar el alcance y finalidades del Fondo AGROPERÚ. Esta modificación permitirá al Fondo AGROPERÚ destinar sus recursos de manera más amplia en lo siguiente: i. Otorgar financiamiento directo. ii. Otorgar garantías. iii. Proporcionar servicios de extensión agraria; los cuales, formarán parte de la estructura del financiamiento	SI	En sus términos

obtenido por- el pequeño productor agrario organizado y serán asumidos por este. iv. Fomentar la adopción de seguros agrarios implementados por el FOGASA. Los recursos del Fondo AGROPERÚ podrán ser usados también en gastos operativos para el cumplimiento de sus fines. 2. Modificación del numeral 3.1 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, permitiendo que la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. — COFIDE, también pueda administrar los recursos del Fondo AGROPERÚ a través de fideicomisos, a fin de diversificar los operadores financieros para el cumplimiento de los fines del Fondo AGROPERÚ.		
6. Equilibrio Fiscal		
6.1. Establecer una reducción gradual del déficit fiscal y de la deuda pública, y un crecimiento prudente del gasto público, a través de la modificación de la Ley N° 31541.	NO	No aplica
6.2. Fortalecer la gestión fiscal subnacional modificando las disposiciones establecidas por el Decreto Legislativo N° 1275 y Decreto Legislativo N° 955; estableciendo disposiciones para la optimización del proceso de distribución de recursos determinados; y modificando las disposiciones que regulan el Catastro Fiscal,	SI	**Modificar los Decretos Legislativos N° 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y, N° 955, Decreto Legislativo de Descentralización Fiscal; con la finalidad de establecer**

regulados por el Decreto Legislativo N°1557 y su vinculación al Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM), a fin de mejorar la gestión de los ingresos locales.		**medidas orientadas a la optimización del proceso de distribución de recursos determinados respecto únicamente del FONCOMUN, a fin de fortalecer la gestión fiscal subnacional.**
6.3. Modificar el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, a fin de consolidar la integración intersistémica y extrasistémica de los procesos de la Administración Financiera del Sector Público a través de una gestión centralizada del Sistema Integrado de la Administración Financiera de los Recursos Públicos	SI	En sus términos
6.4. Consolidar el marco normativo vigente a fin de fortalecer la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público, así como regular sobre la asignación y utilización eficientes de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, la Planilla Única del Sector Público, la incorporación del proceso de Planificación de Recurso Humanos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos al ámbito de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público; y, otros aspectos relacionados con la gestión fiscal de los recursos humanos, en el marco de la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal.	SI	Consolidar el marco normativo vigente para fortalecer la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, así como regular sobre la asignación y utilización eficientes de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes de los recursos humanos del sector público, la planilla única del sector público, la incorporación del proceso de planificación de recursos humanos del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos al ámbito de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público; y otros aspectos relacionados con la gestión fiscal de los recursos humanos, en el marco de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Ello sin modificar las disposiciones sobre las materias contenidas en la Ley

		de Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento Público vigentes.
6.5. Establecer disposiciones para la negociación colectiva en el Sector Público, que considere la capacidad financiera del Estado y garantice un manejo fiscal sostenible; así como, asegure que las medidas que se aprueben en los diversos niveles de negociación sean transversales a todos los trabajadores del respectivo ámbito, evitando diferencias entre trabajadores de un mismo régimen de contratación, debiendo aplicarse también en la emisión de laudos arbitrales de índole laboral.	SI	Establecer y modificar disposiciones sobre negociación colectiva en el Sector Público, que apliquen los principios de previsión y provisión presupuestal, que consideren la capacidad financiera del Estado y garanticen un manejo fiscal sostenible; y que asegure que las medidas que se aprueben en los diversos niveles de negociación sean transversales a todos los trabajadores del respectivo ámbito, evitando diferencias entre trabajadores de un mismo régimen de contratación, estas disposiciones deben aplicarse también en la emisión de laudos arbitrales de índole laboral.
6.6. Establecer disposiciones para la implementación progresiva del tránsito al régimen del servicio civil en coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme a los principios de equilibrio y programación presupuestaria, a las reglas macrofiscales y a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal de la Administración Financiera del Sector Público.	NO	No aplica
6.7. Actualizar el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y el Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público para: (i) dotar de autonomía a la Gestión de Riesgos Fiscales; (ii) actualizar los	SI	Actualizar el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y el Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público para: (i) dotar de autonomía a la Gestión de Riesgos

aspectos operativos y reglas para la Gestión de Tesorería, la homogenización de conceptos relacionados con la constitución de fondos y/o fideicomisos, entre otras mejoras; y, (iii) optimizar la gestión de la recuperación de las honras de aval, a través de la implementación de mecanismos para la recuperación de créditos u obligaciones impagas, honradas por el Gobierno Nacional, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y otras normas con rango de Ley.		Fiscales; (ii) actualizar los aspectos operativos y reglas para la Gestión de Tesorería, la homogenización de conceptos relacionados con la constitución de fondos y/o fideicomisos; y, (iii) optimizar la gestión de la recuperación de las honras de aval, a través de la implementación de mecanismos para la recuperación de créditos u obligaciones impagas, honradas por el Gobierno Nacional, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
7. Tributaria		
7.1. Regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, para lo cual se propone:	-	Regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, para lo cual se propone:
a) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a fin de:	-	a) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a fin de:
a.1) Establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda, lo que incluye principalmente modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad, y las reglas sobre el lugar de imposición en el país, conforme con el principio de destino, siguiendo entre	SI	En sus términos

otros criterios las recomendaciones establecidas por la OCDE.		
a.2) Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.	SI	En sus términos
b) Modificar la Ley N° 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, a fin de: b.1) Establecer que el titular de una autorización para la explotación de plataformas tecnológicas de los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia puede entregar bonificaciones de bienvenida o similares, siempre que no se permita su cambio por dinero hasta el cumplimiento de una condición o vencimiento establecido por el titular, las cuales deben ser utilizadas para apostar en los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia. b.2) Señalar que la información contable registrada en las plataformas para la determinación de la base imponible debe ser acorde a las normas contables oficializadas o aprobadas por el órgano competente del país del sujeto que explote las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia. b.3) Perfeccionar el mecanismo de recaudación del impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia. b.4) Establecer las reglas de tipo de cambio y de huso horario de las	SI	En sus términos

operaciones y obligaciones tributarias, respectivamente. b.5) Establecer, para el caso personas jurídicas constituidas en el exterior, las reglas de imposición en el país. b.6) Regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior que exploten las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.		
c) Modificar la Ley N° 29774, Ley que complementa la normativa sobre la importación de los envíos de entrega rápida o equivalentes, a fin de reducir el monto aplicable a la importación de bienes de bajo valor, así como dictar las disposiciones necesarias que permitan su adecuada recaudación y control.	NO	No aplica
7.2. Perfeccionar el tratamiento tributario de las empresas de menor tamaño a través de:	-	
a) Crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, denominado Régimen Emprendedor que, entre otros, prevea la declaración de los ingresos y egresos acumulados del mes, a fin de determinar el pago a cuenta, regularizando el monto final en diciembre; incentive la declaración de egresos por medio de sus deducciones; así como adecuar las normas del Código	NO	No aplica

Tributario y demás normativa tributaria a fin de aludir a este régimen.		
b) Modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado respecto de los sujetos no comprendidos, reglas de acogimiento, categorización, cuotas mensuales, forma de pago, inclusión en el Régimen General, cambios de régimen, comprobantes de pago, presunciones, obligaciones formales, definiciones y aplicación de percepciones y retenciones del IGV; derogar el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE Tributario — RMT; así como, adecuar el Código Tributario y demás normativa tributaria a las modificaciones indicadas; incluyendo la regulación del acompañamiento tributario.	NO	No aplica
c) Regular una deducción adicional y temporal por la contratación de nuevos trabajadores y modificar la Ley N° 31940, Ley que amplía el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y el pago del Impuesto a la Renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas.	NO	No aplica
7.3. Perfeccionamiento del Sistema Tributario:	-	Perfeccionamiento del Sistema Tributario:
a) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para:	-	Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para:
a.1. Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a las soluciones líquidas que se usan para vaporizar en sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares sin nicotina, así	NO	No aplica

	como perfeccionar la determinación de la base imponible en el sistema del precio de venta al público (PVP), y los rangos mínimos y máximos de las tasas y/o montos fijos que se podrán fijar para el sistema al valor, específico o PVP para los bienes y servicios sujetos al impuesto.		
	a.2) Perfeccionar la regulación sobre el Registro de Compras teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas, así como adecuar las disposiciones contenidas en la Ley N° 29215 en lo relacionado a la anotación de operaciones en el Registro de Compras; así como, modificar el Código Tributario y demás normativa tributaria implicadas en las modificaciones antes indicadas, que permitan que la SUNAT desarrolle la propuesta de registro y declaración.	SI	En sus términos
b)	Establecer la obligatoriedad de todas las entidades del Poder Ejecutivo a aplicar la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.	SI	En sus términos
c)	Modificar el alcance de la Ley N° 31903, Ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MYPE, a fin de circunscribir su ámbito de aplicación a las empresas de menor tamaño, estableciendo asimismo condiciones mínimas para que los titulares de las	NO	No aplica

	cuentas puedan acceder de oficio a la liberación de los fondos de sus cuentas de detracciones.		
d)	Modificar el Código Tributario para:	-	Modificar el Código Tributario para:
	d.1) Regular los intereses aplicables en las devoluciones de pagos indebidos o en exceso, los intereses y la forma de su cómputo respecto de las multas tributarias, así como los componentes de la deuda tributaria; con el fin de que estos incentiven el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, lo que incluye modificar el artículo 5 de la Ley N° 28053, Ley que establece disposiciones con relación a percepciones y retenciones y modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.	NO	No aplica
	d.2) Adecuar el alcance de la reserva tributaria a efectos de contar con información suficiente para el análisis de datos para la formulación de políticas tributarias.	NO	No aplica
	d.3) Agilizar el cobro de la deuda tributaria y evitar actuaciones procedimentales ineficientes, estableciendo, entre otros, un procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria; regular supuestos objetivos que puede utilizar la Administración Tributaria para sustentar la existencia de razones que puedan permitir presumir que la cobranza será infructuosa a efectos de dictar medidas cautelares previas;	SI	Modificar el artículo 98 del Código Tributario referido a la composición del Tribunal Fiscal.

	establecer expresamente excepciones a la reserva tributaria de acuerdo con el nivel y estado de la deuda a efectos que la SUNAT pueda hacer publicaciones; adecuar los requisitos para formular la apelación conforme al riesgo del deudor y cautelar el cobro de la deuda tributaria; perfeccionar las reglas de la contracautela en los procesos judiciales sobre materia tributaria; modificar los plazos y las reglas que rigen en los procedimientos contenciosos tributarios para la atención oportuna de estos; modificar la conformación y funcionamiento del Tribunal Fiscal; así como delimitar los alcances de las sentencias casatorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia.		
	d.4) Perfeccionar las Tablas de Infracciones y Sanciones del Código Tributario, en función del principio de proporcionalidad considerando el nivel de ingresos de los contribuyentes; así como perfeccionar lo dispuesto en el artículo 168 del Código Tributario.	NO	No aplica
e)	Modificar la Ley del Impuesto a la Renta para:	-	Modificar la Ley del Impuesto a la Renta para:
	e.1) Modificar las reglas sobre la deducción de gastos por concepto de remuneraciones que correspondan a los directores de sociedades anónimas.	NO	No aplica
	e.2) Modificar la tasa y señalar reglas para la determinación de los pagos a cuenta, así como la retención con carácter de pago a cuenta tratándose	NO	No aplica

de los contribuyentes que perciben rentas de cuarta categoría.		
e.3) Modificar las disposiciones relativas a la condición de habitualidad en la enajenación de inmuebles efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal; así como modificar las disposiciones sobre los documentos que debe presentarse ante el notario público por la enajenación de inmuebles derechos sobre los mismos; y las normas relativas a la responsabilid solidaria de los notarios públicos en el caso de enajenación de inmuebles.	NO	No aplica
e.4) Establecer la obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a cargo de la persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por las enajenaciones indirectas a que se refiere el inciso e) del artículo 10 de Ley del Impuesto a la Renta, no sujetas a retención, lo que incluye establecer reglas necesarias para su determinación.	SI	En sus términos
e.5) Modificar la regulación de intereses. Comprende: Regular la definición de intereses de deuda, así como aquellos supuestos vinculados a las operaciones de financiamiento y gastos incurridos en relación con la obtención de financiación, así como el tratamiento de las fluctuaciones	NO	No aplica

	cambiarias vinculadas a las operaciones de financiamiento. Ajustar la regla del umbral mínimo establecida como excepción a la aplicación de la regla del EBITDA; e, incorporar precisiones legislativas que resultan necesarias para la adecuada aplicación de la regla del EBITDA.		
	e.6) Perfeccionar las normas que regulan los acuerdos anticipados de precios.	SI	Perfeccionar las normas que regulan los acuerdos anticipados de precios, de conformidad al estándar mínimo de la acción 14 del proyecto BEPS de la OCDE
	e.7) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta en lo referente a otros métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y garantizar el principio de reserva de ley, entre otros.	SI	Modificar el numeral 7) del inciso e) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta referido a otros métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y garantizar el principio de reserva de ley.
f)	Modificar la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a fin de regular el acceso a información financiera para la función recaudadora de la SUNAT, observando el marco constitucional.	NO	No aplica
g)	Modificar el marco normativo que regula el intercambio automático de información de cuentas financieras, a fin de incorporar, entre otros, las siguientes disposiciones:	NO	No aplica

	g.1) Norma antielusiva para contrarrestar los esquemas implementados para eludir los procedimientos de debida diligencia y la obligación de reporte; y g.2) Establecimiento de una sanción para los titulares de las cuentas y para las personas que ejercen el control de los mismos cuando presenten una declaración jurada falsa sobre su residencia fiscal u otra información requerida por las entidades financieras sujetas a reportar.		
h)	Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país.	SI	Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país, con fines de información.
i)	Aprobar un fraccionamiento especial para deudas administradas por la SUNAT que constituyan ingresos del Tesoro Público exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023 incentivando el pago de las deudas mediante el otorgamiento de un bono de descuento en función del nivel de deuda y condicionado al cumplimiento del pago, sin incluir descuento sobre insoluto ni anticipo.	SI	En sus términos
8. Política criminológica y penitenciaria			

8.1. Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, con la finalidad de optimizar el marco legal que tipifica la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual y el chantaje sexual, considerando en estas conductas al uso de la tecnología digital.	SI	Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635 con la finalidad de optimizar el tipo penal de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual, asi como tipificar en la Ley de delitos informáticos, Ley 30096, la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, generados empleando tecnología digital, así como el chantaje sexual derivado de estos.
8.2. Fortalecer la seguridad en el ámbito penitenciario, regulando las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones e Internet en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales desde el interior de establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.	SI	**Unificar y sistematizar el marco legal sobre las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones e Internet en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales desde el interior de establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, salvaguardando los derechos de acceso a las telecomunicaciones e internet de las poblaciones aledañas.**
8.3. Modificar la Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), con la finalidad de optimizar su funcionamiento en relación con la gestión de las políticas públicas que buscan comprender, prevenir, controlar, reducir y sancionar la criminalidad.	SI	En sus términos
8.4. Modificar el Decreto Legislativo N° 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de dotar de	SI	En sus términos

mayor celeridad la conducción y toma de decisiones vinculadas a la gestión e implementación de la política criminológica y penitenciaria.		
8.5. Modificar los artículos 108, 108-C y 200 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, con el fin de introducir circunstancias agravantes, en caso la víctima sea una persona defensora indígena.	NO	No aplica
8.6. Modificar el Decreto Legislativo N° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a efectos de adoptar enfoques, mecanismos, medidas y recursos legales que optimicen la intervención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, además de establecer medidas para asegurar la efectiva y progresiva implementación del Código a nivel nacional.	SI	En sus términos
8.7. Modificar la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, y normas conexas, con el propósito de ampliar su alcance para abarcar todas las formas de delincuencia organizada, incluyendo las modalidades emergentes, que operan en nuestro territorio nacional, así como para establecer agravantes especiales y fortalecer el Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO) y demás herramientas que permitan hacer frente de manera más efectiva a la amenaza que representan este fenómeno criminal para la seguridad pública.	NO	No aplica
8.8. Dotar de mayor protección a los titulares del derecho de autor en relación a la reproducción, distribución, comunicación	SI	Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635 con la finalidad de tipificar el delito de

pública o difusión no autorizada de las obras, y sus formas agravadas.		camcording o filmación no autorizada de películas dentro de salas de cine o análogos.
9. Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay		
9.1. Modificar la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, con el fin de impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados, así como la implementación de los instrumentos de gestión del suelo, impulsando el cierre de brechas en vivienda e infraestructura urbana para fortalecer la planificación de las ciudades y centros poblados, en especial de los centros poblados rurales, así como impulsar los instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento urbano como ejes del desarrollo sostenible de las ciudades.	SI	Modificar la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, para impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados implementando: a) En el ámbito urbano: a.1.) El fortalecimiento y la armonización de los instrumentos de gestión del suelo. a.2.) Los instrumentos del financiamiento urbano como ejes del desarrollo sostenible de las ciudades, reduciendo y simplificando las cargas urbanísticas. b) En el ámbito rural: b.1.) El marco normativo y los instrumentos de planificación que aborden el desarrollo sostenible y eficiente de los centros rurales del país. b.2) El equipamiento, los servicios básicos, y una accesibilidad eficiente.
9.2. Autorizar que se establezcan disposiciones sobre la declaración de necesidad pública e interés nacional la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay, y establecer disposiciones especiales por su construcción y funcionamiento, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos priorizados en los	SI	En sus términos

instrumentos de planificación territorial y urbana, entre otros.		
10. Seguridad y defensa nacional en el ámbito de Inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital		
10.1. Modificar el Decreto Legislativo N° 1095, a efectos de regular la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno.	SI	**Modificar los artículos 4.3 y 23.d) del Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, a efectos de señalar taxativamente las circunstancias en las que resulta aplicable el uso y empleo de la fuerza pública por parte del personal militar y especificar en qué casos se entiende que la capacidad de la policía nacional ha sido sobrepasada.**
10.2. Establecer el marco normativo para la implementación de la interoperabilidad entre las entidades competentes en materia migratoria, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad y defensa nacional.	SI	**Establecer el marco normativo para la creación e implementación del Sistema Integrado de Evaluación del Riesgo Migratorio como mecanismo de cooperación y coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Migraciones y los organismos nacionales de inteligencia, contrainteligencia y seguridad del Estado para el intercambio de información sobre flujos migratorios irregulares, redes de tráfico ilícito de migrantes y demás riesgos, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad y defensa nacional.**

10.3. Dictar medidas orientadas a garantizar la intangibilidad de los predios e inmuebles de propiedad, afectados en uso, reservados para fines de Defensa Nacional y en posesión de las Instituciones Armadas, que han sido destinados para fines de Seguridad y Defensa Nacional y cumplimiento de sus fines institucionales, en todo el territorio nacional, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de independencia, soberanía e integridad territorial de la República, así como su participación en el desarrollo económico social y en la defensa civil.	NO	**No aplica**
10.4. Crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), como entidad pública encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de los componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) en todo el territorio nacional con autonomía administrativa, técnica, funcional, financiera y económica, a fin de fortalecer el Sistema en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional.	SI	Crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), como entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de los componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) en todo el territorio nacional con autonomía administrativa, técnica, funcional, financiera y económica, a fin de fortalecer el Sistema en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional.
10.5. Modificar las normas de organización de las Fuerzas Armadas con el objeto de incluir la competencia en ciberdefensa, así como precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional de cada una de ellas.	SI	Modificar el Decreto Legislativo 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas; el Decreto Legislativo 1137, Ley del Ejército del Perú; y el Decreto Legislativo 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, con el objeto de incluir en cada una la competencia en

		ciberdefensa, así como precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional de cada institución militar.
10.6. Establecer reglas para el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en las redes de telecomunicaciones, así como en el otorgamiento de la numeración, a fin de que evitar comunicaciones fraudulentas contra los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.	NO	No aplica
10.7. Regular el procedimiento de identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales a efectos de asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada entidad pública competente.	NO	No aplica
10.8. Modificar el Decreto Legislativo N° 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a efectos de permitir que el Sistema de pueda Inteligencia Nacional en el ámbito de la seguridad y defensa nacional, también acceder a la localización, geolocalización o rastreo de equipos de comunicación.	NO	No aplica

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2023-2024

VIII. Sobre el plazo de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo

Conforme se ha señalado en oportunidades anteriores con ocasión de pedidos de delegaciones previos al presente, la delegación de facultades legislativas en cuanto significa trasladar -sin perder- la facultad normativa que ostenta el parlamento hacia el Poder Ejecutivo sobre respectiva materia se encuentra afecta a determinados límites constitucionales, tanto formales, materiales como temporales. En ese sentido, cobra especial relevancia la determinación temporal de dicha autorización, la que como se señaló en diversas oportunidades, no está regulada o limitada por la Constitución, y condiciona la validez de la legislación delegada emitida.

Como se ha mencionado, si bien la Constitución no establece parámetro temporal mínimo ni máximo, este se halla influenciado por los diversos principios que la Constitución consagra en su texto; en ese sentido, el límite temporal debe estar determinado de manera racional y proporcional con el cumplimiento del objeto de la delegación, es decir: a) la urgencia del cumplimiento que su finalidad constitucional reclama; y, b) así como la complejidad del proceso normativo delegado.

En ese sentido, en lo que va del periodo 2000-2024, se han otorgado al Poder Ejecutivo facultades para legislar en veinticuatro oportunidades, variando tanto el fundamento de cada una como el plazo para ejercer dicha delegación. Es así como,

Cuadro 20
Plazo de delegación de facultades (2000-2024)

Sumilla	Plazo
Ley 27426, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de inspecciones en el trabajo y de defensa del Trabajador	30 días calendario
Ley 2743, Ley que delega facultades legislativas en materia tributaria al Poder Ejecutivo al amparo del Artículo 104° de la Constitución Política del Perú.	60 días útiles
Ley 27913, Ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo para legislar en materia de terrorismo	30 días hábiles
Ley 28079. Ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria	90 días hábiles
Ley 28269, Ley que delega facultades legislativas en materia procesal penal al Poder Ejecutivo al amparo del artículo 104 de la Constitución	30 días útiles
Ley 28636, Ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo ara que dicte el nuevo Código de Justicia Militar Policial	35 días calendario

Ley 28932, Ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria	90 días calendario
Ley 29009, Ley que otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso	60 días hábiles
Ley 29157, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento	180 días calendario
Ley 29548. Ley que otorga facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia Militar-Policial, el uso de la fuerza y normas procesales y penitenciarias relacionadas a militares y policías procesados o condenados	60 días hábiles
Ley 29815. Deléguese en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de minería ilegal	120 días calendario
Ley 2988, Ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, aduanera y de delitos tributarios y aduaneros	45 días calendario
Ley 29915, Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional del Sector Interior y de Defensa Nacional	90 días calendario
Ley 30073, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud	120 días calendario
Ley 30335, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera	90 días calendario
Ley 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado	90 días calendario
Ley 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.	90 días calendario
Ley 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado	60 días calendario
Ley 30776, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios	60 días calendario
Ley 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19	45 días calendario
Ley 31020, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19	7 días calendario

Ley 31380, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales	90 días calendario
Ley 31696, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del estado	90 días calendario
Ley 31880, Ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-niño global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia.	90 días calendario

Fuente y elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2023-2024.

Conforme es de verse del cuadro que precede, los plazos de delegación de facultades legislativas han oscilado entre los exiguos siete días a los holgados ciento ochenta días calendarios, los que eran justificados en el primer caso por la crisis sanitaria causada por el COVID-19, mientras que el segundo caso era otorgado con el objeto de adecuar la normativa nacional para la implementación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica.

Mayoritariamente los plazos para el ejercicio de la delegación de facultades han oscilado entre los 60 a 90 días calendario, haciendo en promedio 72 días calendario; por lo que, atendiendo a la cantidad de materias solicitadas y la necesidad por parte del Estado de adoptar medidas en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional; esta comisión considera, razonable y proporcional otorgar el plazo solicitado por el Poder Ejecutivo, esto es 90 dias calendario contados a partir de la entrada en vigor de la ley autoritativa, lo que garantiza de alguna manera que con la propia proyección que ha realizado el Poder Ejecutivo, éste pueda cumplir y dictar las medidas que ha sustentado con ocasión de la presentación del proyecto de ley 7752/2023-PE.

IX. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La aprobación de la presente ley autoritativa implicará delegar temporalmente en el Poder Ejecutivo la facultad para legislar en las materias expresamente señaladas en el texto sustitutorio del presente dictamen por el plazo de 90 días calendario contados a partir de su entrada en vigencia, en mérito a lo cual el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos para crear, modificar o derogar normas directamente vinculadas

con las materias de delegación, las que luego serán sujetos a control político por parte del Congreso de la República.

Se enfatiza, que en el estudio y análisis del Proyecto de Ley N° 7752/2023-PE se han tenido en consideración las disposiciones contenidas en los artículos 101 y 104 de la Constitución Política del Estado así como los artículos 5, 72, 76 y 90 del Reglamento del Congreso de la República.

X. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Los beneficios del texto normativo que se propone aprobar se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 21

SUJETOS	BENEFICIOS
Poder Ejecutivo	En el corto plazo (90 días calendario) podrá legislar a través de decretos legislativos en materias específicas orientadas a la reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
Poder Legislativo	Al otorgársele la facultad de legislar al Poder Ejecutivo, éste podrá centrar sus esfuerzos y atención en atender prioritariamente los temas pendientes de su agenda legislativa, racionalizando sus recursos.
Población en General	Será beneficiada con los efectos e impacto que tendrán las modificaciones normativas en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional, lo que redundará en mejores servicios públicos, calidad de vida y bienestar general.

Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento

Entre los costos de la propuesta de ley podemos mencionar los siguientes elementos:

Cuadro 22

SUJETOS	COSTOS O DESVENTAJAS
Poder Ejecutivo	Recursos humanos y costos administrativos para la elaboración de los decretos legislativos, así como para la implementación de los mismos, los que

	de requerir recursos económicos serán asumidos con cargo al presupuesto de cada sector.
Poder Legislativo	Delega temporalmente su poder normativo respecto de materias específicas, transfiriendo en parte su facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres causados por el niño global, infraestructura social y calidad de proyectos.
Población en general	No se advierten costos.

Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento

XI. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución y Reglamento recomienda la aprobación del proyecto 7752/2023-PE, con el siguiente texto sustitutorio:

TEXTO SUSTITUTORIO

LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional, por el plazo de noventa días calendario (90), contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, dentro de los alcances de lo dispuesto por los artículos 101 y 104 de la Constitución Política del Perú y de los artículos 5, 72, 76 y 90 del Reglamento del Congreso de la República, y comprende las materias desarrolladas en el artículo 2.

Artículo 2. Materias de la delegación de facultades legislativas

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

El Congreso de la República delega facultades para legislar al Poder Ejecutivo por el plazo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, en las siguientes materias específicas:

2.1. Fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos

2.1.1. Simplificar procedimientos administrativos relacionados a las actividades productivas y la generación sostenible de empleos formales, a través de la aplicación del silencio administrativo positivo para promover la competitividad y el crecimiento sostenible.

2.1.2. Modificar los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 1183, Decreto Legislativo que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera, para establecer competencias que le permitan a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF).

2.1.3. Establecer medidas de impulso para promover el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada, conforme a lo siguiente:

a) Promover la estandarización y la simplificación administrativa, así como optimizar los plazos, rhidróequisitos y procedimientos de evaluación para la obtención de títulos habilitantes y demás requerimientos de cualquier naturaleza, cuya tramitación esté a cargo de entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, que resulten necesarios para el desarrollo de proyectos. Asimismo, optimizar plazos vinculados al seguimiento de proyectos.

b) Mejorar la planificación, adquisición, expropiación y saneamiento de terrenos y liberación de interferencias, a través de la incorporación de programas de resarcimiento complementario para mitigar los aspectos sociales; aprovechamiento de la plusvalía inmobiliaria; adquisición y expropiación de predios en bloque; habilitación para realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio en áreas de uso público; así como otras medidas de optimización y mejora de procesos y plazos.

c) Garantizar la seguridad y estabilidad jurídica para el fomento de la inversión privada.

2.1.4. Establecer medidas de simplificación y mejora de los procesos de promoción de la inversión que impulsen y dinamicen el desarrollo de proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) en sus diferentes fases, con la finalidad de promover las inversiones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Dichas medidas comprenden los siguientes temas:

a) Fortalecer el rol de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, durante las fases del desarrollo de las APP, comprendiendo, pero sin limitarse, a la emisión de opinión sobre aspectos de ejecución contractual o frente a controversias, constituirse en sujeto activo para la tramitación de los procesos de adquisición y expropiación de terrenos, así como para la liberación de interferencias y otras que resulten necesarias para optimizar su participación.

b) Regular medidas de mejora y simplificación de procesos y competencias para asegurar la oportuna adjudicación, desarrollo y ejecución de proyectos.

c) Incorporar disposiciones para la implementación del modelo de gestión integral de proyectos a través de los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP), así como medidas complementarias para garantizar y promover su adecuado funcionamiento y operativización.

2.1.5. Establecer un marco normativo especial para la atención de los recursos administrativos presentados en los procedimientos administrativos sancionadores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que disponga la fijación de plazos distintos a los de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para la atención de los recursos interpuestos ante la SMV, en función al grado de complejidad de la materia, respetando el principio de razonabilidad y proporcionalidad así como el debido proceso en la atención de los recursos.

2.1.6. Modificar el Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, a fin de complementar las atribuciones en materia migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando la seguridad jurídica y el acceso al procedimiento de regularización migratoria de las calidades migratorias bajo su competencia.

2.1.7. Establecer disposiciones en materia de selección, ratificación, funciones y potestad sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, a fin de fortalecer la gestión del servicio de traducciones oficiales.

2.1.8. Modificar los plazos de los procedimientos administrativos de licencias, autorizaciones y derechos de uso de vía y área acuática para la ejecución de proyectos, estableciendo disposiciones para disminuir los plazos para el pronunciamiento, en el caso de expedientes reingresados.

2.1.9. Modificar el Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, a efectos de fortalecer el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (RENACE), disponiendo con fines de acreditación e información pública la obligatoriedad de la inscripción de los Cetros de arbitraje y árbitros en el RENACE sin costo alguno y sin generar mayores requisitos para la prestación del servicio arbitral.

2.1.10. Modificar el artículo 2 de la Ley 31992, Ley de Fomento del Hidrógeno Verde para promover el desarrollo del hidrógeno verde.

2.1.11. Promover el desarrollo de la infraestructura petroquímica nacional para la implementación y operación de Plantas Petroquímicas que incluyan la producción de urea y fertilizantes.

2.1.12. Modificar los artículos 8, 9, 14, 15, y 18 de la Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, y artículos conexos para acelerar la ejecución de proyectos de electrificación rural.

2.1.13. Autorizar la modificación del numeral 5.5. del artículo 5 de la Ley 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, a fin de incluir el destino de los recursos del FISE para promover el fortalecimiento del uso del gas natural en las regiones que no son parte de una concesión a la fecha de vigencia de la presente Ley.

2.1.14. Modificar los artículos 5, 10 y 13 de la Ley 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, para optimizar la remediación de pasivos ambientales mineros a cargo del Estado.

2.1.15. Derogar la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N°28588 Ley que incorpora al Seguro Integral de Salud a la población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y pobreza y declara de prioritario interés la infraestructura arquitectónica y no arquitectónica de los centros educativos a cargo del Ministerio de Educación.

2.1.16. Modificar el literal d.4) del artículo 7 de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en el extremo de la autorización del Ministerio de Cultura como requisito para la expedición de licencias de funcionamiento en monumentos históricos.

2.1.17. Establecer el Diagnóstico Arqueológico de Superficie como una medida opcional al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que facilite la inversión pública y privada.

2.1.18. Autorizar al Ministerio de Cultura la aprobación de tarifas diferenciadas para promover la visita a bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y museos públicos. La promoción de la visita tendrá especial énfasis en los Sitios del Patrimonio Mundial que por sus características únicas son gestionadas exclusivamente por el Ministerio de Cultura.

2.1.19. Regular el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, a efectos de facilitar la inversión pública o privada, así como la conservación, restauración y su puesta en valor. No incluye la modificación o distorsión de competencia municipal alguna.

2.1.20. Establecer medidas para promover el despliegue de los servicios públicos de telecomunicaciones que utilicen tecnología de quinta generación (5G) o superior, a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establezca un mecanismo especial para el otorgamiento de concesiones con asignación de espectro radioeléctrico sujeto al cumplimiento de compromisos de inversión en atención al valor de dicho recurso natural.

2.1.21. Modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo 98, Ley de la Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A., a fin de permitir que la Junta

General de Accionistas, máximo órgano de la empresa, pueda establecer el domicilio legal de ésta.

2.1.22. Garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, sin afectar términos contractuales, salvo acuerdo de partes.

2.1.23. Establecer disposiciones especiales en materia de habilitaciones urbanas y de edificación para optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos sobre la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y otros actos administrativos que las complementen. Queda prohibido derogar, sustituir o modificar la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como regular materias de exclusiva competencia de los gobiernos locales.

2.1.24. Modificar el artículo 4 del Decreto Legislativo 1285, Decreto que modifica el artículo 79 de la Ley 29338, Ley de Recursos de Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos a los instrumentos de gestión ambiental; para realizar precisiones respecto a la aplicación del plazo límite para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y la autorización de vertimiento, ante la autoridad competente.

2.1.25. Modificar el artículo 8 de la Ley 30156, Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de otorgar a este sector la función de establecer disposiciones para promover el desarrollo de la construcción, a través de tecnologías constructivas no convencionales.

2.1.26. Modificar la Ley 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), a fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura.

2.1.27. Derogar la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, a fin de unificar los requisitos para que las empresas accedan y permanezcan en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

2.1.28. Modificar el artículo 24-A de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, a fin de modificar las etapas del procedimiento de licenciamiento e incorporar la etapa de evaluación de requisitos de admisibilidad, previo a la etapa de evaluación integral; así como modificar el plazo del procedimiento de licenciamiento, hasta por un plazo máximo de 200 días hábiles.

2.1.29. Modificar los artículos 3, 7, 9 e incluir una única Disposición Complementaria Final en la Ley 31318, Ley que regula el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles del Sector Educación destinados a instituciones públicas, para establecer medidas de simplificación administrativa que mejoren y agilicen el procedimiento actual del marco normativo de saneamiento físico legal de inmuebles del sector educación en relación con las instituciones educativas públicas.

2.1.30. Modificar los artículos 6, 8, 29 y 30 y derogar los artículos 31 y 32 de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Código Mundial Antidopaje vigente de la Agencia Mundial Antidopaje – World Antidopoing Agency (WADA-AMA).

2.1.31. Modificar el artículo 3 de la Ley 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional por un período de 10 años, con la finalidad de permitir la investigación y producción de OVM, la edición génica y otras técnicas modernas de biotecnología, lo cual contribuirá a la sostenibilidad de la agricultura y lograr mejores resultados ante los efectos del cambio climático.

2.1.32. Disponer la prórroga del mandato de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua, de sus Comités de Administración Temporal y de los otros órganos de similar denominación establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, hasta el 31 de diciembre de 2025.

2.1.33. Establecer el marco normativo para fortalecer la gestión de los servicios públicos de protección social ante emergencias, mediante su

adaptación, de manera preventiva, para garantizar su continuidad operativa, a través de la identificación de las acciones a cargo de las entidades públicas prestadoras de servicios de protección social y de las entidades rectoras y/o conductoras de emergencias; acciones de colaboración intersectorial e intergubernamental; habilitación de acciones orientadas al rediseño de modelos operacionales de los servicios, el diseño de nuevos servicios o intervenciones, el diseño o rediseño de servicios e intervenciones dirigidas a la atención temporal extraordinaria de nuevos usuarios, incluyendo a la población migrante y refugiada; el adelanto en la entrega de bienes o servicios, la exoneración temporal de condicionalidades, la ampliación de beneficios dirigidos a poblaciones vulnerables; el intercambio de información nominal y el acceso a plataformas de información; la habilitación para que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de sus competencias, determine la instancia que se encargue de gestionar la entrega de transferencias monetarias en situaciones de emergencia, y su alcance; así como modificar el artículo 8 de la Ley 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para precisar su función en el marco de la adaptación de los servicios públicos de protección social.

2.1.34. Establecer, regular y modificar el marco normativo que habilite, garantice y autorice el correcto funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP ampliando su ámbito de alcance para el fortalecimiento de las capacidades de las personas que prestan servicios al Estado y la ciudadanía dentro del marco de competencias de ENAP, estableciendo las disposiciones necesarias para cumplir con su misión institucional y permitiendo la mejora del servicio público prestado por los servidores capacitados.

2.1.35. Modificar el numeral 207.2 del artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, con el objetivo de ampliar el plazo de 15 días hábiles hasta 30 días hábiles, para que los consejos directivos y/u órganos colegiados de las entidades públicas que constituyan instancia única para resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado, como una excepción al plazo general

establecido en dicha norma para la resolución de los recursos de reconsideración.

2.2. Mejora de la calidad de la inversión pública

2.2.1. Regular las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones (IRI) que estuvieron comprendidas en el PIRCC hasta la fecha de publicación de la Ley 31953 (6 de diciembre de 2023), Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024 y que no hayan contado con registro Formato Único de Reconstrucción (FUR), para su alineamiento al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y cumplan con las fases del ciclo de inversión del referido sistema nacional.

2.2.2. Modificar los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica, a fin de ampliar los plazos previstos en los referidos artículos.

2.2.3. Modificar el Decreto Legislativo 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sobre: a) Lineamientos de una Política Nacional de Inversión Pública, - Modificaciones en el Ciclo de Inversión y, b) Inclusión de órganos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; con la finalidad de orientar estratégicamente a las entidades para el desarrollo de sus inversiones, así como optimizar la gestión de la inversión pública.

2.2.4. Modificar la Ley 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, a efectos de establecer y facultar a las entidades a utilizar un procedimiento especial de selección, con plazos reducidos, para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas.

2.2.5. Modificar el artículo 17 de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), referido a la participación de las Fuerzas Armadas en la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo correspondiente a la preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de desastre, de acuerdo con sus competencias y en coordinación y apoyo a las autoridades competentes, conforme a las normas del SINAGERD.

2.2.6. Modificar el Decreto Legislativo 1274, Decreto Legislativo que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y

mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país - "AGUA +", a fin de permitir la aprobación y ejecución de inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

2.2.7. Autorizar a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay, utilizando el procedimiento establecido en la Ley 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y su Reglamento, para la generación de una cartera de inversiones estratégicas que incluya inversiones con montos menores a 200 millones de soles.

2.3. Fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado

2.3.1. Modificar el Decreto Legislativo 206, Ley del sistema de fomento y apoyo financiero al desarrollo empresarial, y el Decreto Ley 25694, Adicionan al objeto social de COFIDE la realización de actividades de financiamiento en favor de pequeños empresarios y agricultores, con la finalidad de fortalecer institucionalmente a COFIDE, a través del fomento de la participación de inversionistas institucionales con participaciones minoritarias en su capital social y la optimización de su gobierno corporativo.

2.3.2. Crear un nuevo marco jurídico que ordene, sistematice y optimice la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, fortaleciendo la estructura y gestión del FONAFE, orientado a una supervisión y monitoreo estratégico, con un enfoque de riesgos; permitiendo incorporar las buenas prácticas de gobierno corporativo de la OCDE, bajo los límites que establece la Constitución Política del Perú para la empresa pública.

2.4. Reducción de costos de transacción

2.4.1. Modificar los artículos 2033, 2037, 2038, 2040 y 2042 del Código Civil, a efectos de simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional, considerando la implementación progresiva para el caso del Registro de Mandatos y Poderes.

2.5. Acceso y competencia en servicios financieros

2.5.1. Modificar la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en los siguientes extremos:

a) Artículo 17, para autorizar la reducción del capital mínimo requerido a las Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN) que prestan servicios a las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y con ello fomentar una mayor competencia en la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero de valores.

b) Capítulo II del Título II. Límites y prohibiciones, en específico, en lo referente a límites operativos de concentración, con la finalidad de fomentar el otorgamiento de financiamientos por parte de las empresas del sistema financiero a través de límites operativos de concentración alineados a los estándares internacionales y particularidades del sistema financiero nacional.

2.5.2. Modificar el Decreto Legislativo 862, Ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras, con la finalidad de incorporar medidas y procedimientos de regulación y supervisión de los fondos de inversión públicos y privados y de las sociedades que los administran.

2.5.3. Modificar la Ley 29440, Ley de los Sistemas de pagos y de Liquidación de Valores, a fin de:

a.1) Ampliar la definición de los sistemas de pagos y de Liquidación de Valores para incorporar a entidades, proveedores, administradores tecnológicos, servicios e instrumentos de pagos así como a otros actores que puedan surgir en el proceso de innovación de servicios digitales y mejorar el acceso a estos servicios.

a.2) Fortalecer las atribuciones Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para regular medidas orientadas a ampliar el acceso a servicios digitales a la población no bancarizada, reducir costos y mejorar la interoperabilidad.

a.3) Facultar al BCRP para administrar y regular plataformas de pagos minoristas con el fin de garantizar la liquidación segura y la interoperabilidad de los pagos de bajo valor.

b) Modificar el Decreto Legislativo 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa "REACTIVA PERÚ" para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, a fin de establecer los mecanismos de administración de cartera de créditos con garantía del Gobierno Nacional de una empresa del sistema financiero que ha sido sometida a un proceso de intervención, disolución y liquidación por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

2.5.4. Fortalecer el Fondo AGROPERÚ, mejorando las condiciones de acceso a los servicios financieros agrarios; de acuerdo con:

1. Modificación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 027- 2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, con el propósito de ampliar el alcance y finalidades del Fondo AGROPERÚ. Esta modificación permitirá al Fondo AGROPERÚ destinar sus recursos de manera más amplia en lo siguiente:

i. Otorgar financiamiento directo.
ii. Otorgar garantías.
iii. Proporcionar servicios de extensión agraria; los cuales, formarán parte de la estructura del financiamiento obtenido por- el pequeño productor agrario organizado y serán asumidos por este.
iv. Fomentar la adopción de seguros agrarios implementados por el FOGASA

Los recursos del Fondo AGROPERÚ podrán ser usados también en gastos operativos para el cumplimiento de sus fines.

2. Modificación del numeral 3.1 del Decreto de Urgencia N° 027-2009, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias en Beneficio de la Actividad Agraria, permitiendo que la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. — COFIDE, también pueda administrar los recursos del Fondo AGROPERÚ a través de

fideicomisos, a fin de diversificar los operadores financieros para el cumplimiento de los fines del Fondo AGROPERÚ.

2.6. Equilibrio fiscal

2.6.1. Modificar los Decretos Legislativos 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y, 955, Decreto Legislativo de Descentralización Fiscal; con la finalidad de establecer medidas orientadas a la optimización del proceso de distribución de recursos determinados respecto únicamente del FONCOMUN, a fin de fortalecer la gestión fiscal subnacional.

2.6.2. Modificar el Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, a fin de consolidar la integración intersistémica y extrasistémica de los procesos de la Administración Financiera del Sector Público a través de una gestión centralizada del Sistema Integrado de la Administración Financiera de los Recursos Públicos.

2.6.3. Consolidar el marco normativo vigente para fortalecer la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público, así como regular sobre la asignación y utilización eficientes de los fondos públicos destinados a los ingresos correspondientes de los recursos humanos del sector público, la planilla única del sector público, la incorporación del proceso de planificación de recursos humanos del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos al ámbito de la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público; y otros aspectos relacionados con la gestión fiscal de los recursos humanos, en el marco de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Ello sin modificar las disposiciones sobre las materias contenidas en la Ley de Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento Público vigentes.

2.6.4. Actualizar el Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y el Decreto Legislativo 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público para: (i) dotar de autonomía a la Gestión de Riesgos Fiscales; (ii) actualizar los aspectos operativos y reglas para la Gestión de Tesorería, la homogenización de conceptos relacionados con la constitución de

fondos y/o fideicomisos; y, (iii) optimizar la gestión de la recuperación de las honras de aval, a través de la implementación de mecanismos para la recuperación de créditos u obligaciones impagas, honradas por el Gobierno Nacional, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y el Decreto Legislativo 1455 que crea el Programa "Reactiva Perú" para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del Covid-19.

2.7. Tributaria

2.7.1. Regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, para lo cual se propone:

a) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo a fin de:

a.1. Establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda, lo que incluye principalmente modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad, y las reglas sobre el lugar de imposición en el país, conforme con el principio de destino, siguiendo entre otros criterios las recomendaciones establecidas por la OCDE.

a.2. Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.

b) Modificar la Ley 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, a fin de:

b.1. Establecer que el titular de una autorización para la explotación de plataformas tecnológicas de los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia puede entregar bonificaciones de bienvenida o similares, siempre que no se permita su cambio por dinero hasta el cumplimiento de una condición o vencimiento establecido por el titular, las cuales deben ser

utilizadas para apostar en los juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia.

b.2. Señalar que la información contable registrada en las plataformas para la determinación de la base imponible debe ser acorde a las normas contables oficializadas o aprobadas por el órgano competente del país del sujeto que explote las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

b.3. Perfeccionar el mecanismo de recaudación del impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia

b.4. Establecer las reglas de tipo de cambio y de huso horario de las operaciones y obligaciones tributarias, respectivamente.

b.5. Establecer, para el caso personas jurídicas constituidas en el exterior, las reglas de imposición en el país

b.6. Regular aspectos vinculados a la inscripción en el RUC, al pago de la deuda tributaria, al cumplimiento de obligaciones formales y notificación de acto administrativos a través de medios electrónicos, tratándose de personas jurídicas constituidas en el exterior que exploten las plataformas tecnológicas de los juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

2.7.2. Perfeccionamiento del Sistema Tributario:

a) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para perfeccionar la regulación sobre el Registro de Compras teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas, así como adecuar las disposiciones contenidas en la Ley 29215 en lo relacionado a la anotación de operaciones en el Registro de Compras; así como, modificar el Código Tributario y demás normativa tributaria implicadas en las modificaciones antes indicadas, que permitan que la SUNAT desarrolle la propuesta de registro y declaración.

b) Establecer la obligatoriedad de todas las entidades del Poder Ejecutivo a aplicar la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

c) Modificar el artículo 98 del Código Tributario referido a la composición del Tribunal Fiscal.
d) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta para:
   d.1. Establecer la obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a cargo de la persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por las enajenaciones indirectas a que se refiere el inciso e) del artículo 10 de Ley del Impuesto a la Renta, no sujetas a retención; lo que incluye establecer reglas necesarias para su determinación.
   d.2. Perfeccionar las normas que regulan los acuerdos anticipados de precios, de conformidad al estándar mínimo de la acción 14 del proyecto BEPS de la OCDE.
   d.3. Modificar la Ley del Impuesto a la Renta en lo referente a otros métodos de valoración para operaciones realizadas en el ámbito de aplicación de precios de transferencia con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y garantizar el principio de reserva de ley, entre otros.
e) Simplificar los requisitos para la inscripción en el RUC de las personas jurídicas no domiciliadas y los entes jurídicos constituidos en el extranjero que tengan la obligación de presentar la declaración del beneficiario final cuando cuenten con una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país, con fines de información.
f) Aprobar un fraccionamiento especial para deudas administradas por la SUNAT que constituyan ingresos del Tesoro Público exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023 incentivando el pago de las deudas mediante el otorgamiento de un bono de descuento en función del nivel de deuda y condicionado al cumplimiento del pago, sin incluir descuento sobre insoluto ni anticipo.

2.8. Política criminológica y penitenciaria

2.8.1. Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635 con la finalidad de optimizar el tipo penal de difusión de imágenes,

materiales audiovisuales o audios de contenido sexual, así como tipificar en la Ley de delitos informáticos, Ley 30096, la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, generados empleando tecnología digital, así como el chantaje sexual derivado de estos.

2.8.2. Unificar y sistematizar el marco legal sobre las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones e Internet en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales desde el interior de establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, salvaguardando los derechos de acceso a las telecomunicaciones e internet de las poblaciones aledañas.

2.8.3. Modificar la Ley 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), con la finalidad de optimizar su funcionamiento en relación con la gestión de las políticas públicas que buscan comprender, prevenir, controlar, reducir y sancionar la criminalidad.

2.8.4. Modificar el Decreto Legislativo 1328, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de dotar de mayor celeridad la conducción y toma de decisiones vinculadas a la gestión e implementación de la política criminológica y penitenciaria.

2.8.5. Modificar el Decreto Legislativo 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a efectos de adoptar enfoques, mecanismos, medidas y recursos legales que optimicen la intervención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, además de establecer medidas para asegurar la efectiva y progresiva implementación del Código a nivel nacional.

2.8.6. Modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635 con la finalidad de tipificar el delito de camcording o filmación no autorizada de peliculas dentro de salas de cine o análogos.

2.9. Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay

2.9.1. Modificar la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, para impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados implementando:

a) En el ámbito urbano:

a.1.) El fortalecimiento y la armonización de los instrumentos de gestión del suelo.

a.2.) Los instrumentos del financiamiento urbano como ejes del desarrollo sostenible de las ciudades, reduciendo y simplificando las cargas urbanísticas.

b) En el ámbito rural:

b.1.) El marco normativo y los instrumentos de planificación que aborden el desarrollo sostenible y eficiente de los centros rurales del país.

b.2) El equipamiento, los servicios básicos, y una accesibilidad eficiente.

2.9.2. Autorizar que se establezcan disposiciones sobre la declaración de necesidad pública e interés nacional la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay, y establecer disposiciones especiales por su construcción y funcionamiento, con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos priorizados en los instrumentos de planificación territorial y urbana, entre otros.

2.10. Seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital

2.10.1. Modificar los artículos 4.3 y 23.d) del Decreto Legislativo 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, a efectos de señalar taxativamente las circunstancias en las que resulta aplicable el uso y empleo de la fuerza pública por parte del personal militar y especificar en qué casos se entiende que la capacidad de la policía nacional ha sido sobrepasada.

2.10.2. Establecer el marco normativo para la creación e implementación del Sistema Integrado de Evaluación del Riesgo Migratorio como mecanismo de cooperación y coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Migraciones y los organismos nacionales de inteligencia, contrainteligencia y seguridad del Estado para el intercambio de información sobre flujos migratorios irregulares, redes de tráfico ilícito de migrantes y demás riesgos, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad y defensa nacional.

2.10.3. Crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA), como entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de los componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) en todo el territorio nacional con autonomía administrativa, técnica, funcional, financiera y económica, a fin de fortalecer el Sistema en todos los campos de la Defensa Nacional para garantizar la Seguridad Nacional.

2.10.4. Modificar el Decreto Legislativo 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas; el Decreto Legislativo 1137, Ley del Ejército del Perú; y el Decreto Legislativo 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, con el objeto de incluir en cada una la competencia en ciberdefensa, así como precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional de cada institución militar.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Las medidas que se emitan en el marco de lo dispuesto en la presente Ley no afectan la autonomía de gobiernos regionales y locales ni competencias de los organismos constitucionalmente autónomos que reconoce la Constitución Política del Perú. Tampoco vulneran derechos fundamentales ni procesos judiciales o administrativos en trámite. La inobservancia de lo dispuesto en la presente disposición genera responsabilidad política y/o funcional, según corresponda.

SEGUNDA. Todas las habilitaciones y modificaciones presupuestarias que requieran las materias delegadas se tramitan conforme a la Ley de Presupuesto, observando en todos los casos, bajo responsabilidad, lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 80 de la Constitución Política del Perú. Las medidas cuya implementación requiere de recursos económicos, se ejecutan con cargo al presupuesto aprobado para cada sector.

TERCERA. Las materias delegadas no se encuentran exentas del Sistema Nacional de Control conforme a lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política del Perú

CUARTA. Es deber del titular de cada sector informar a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República por escrito y dentro del plazo de noventa (90) días calendario contados desde la publicación de los decretos legislativos correspondientes, bajo responsabilidad, los avances del estado de implementación de las medidas legislativas que se emitan al amparo de la presente ley, de acuerdo con el siguiente detalle:

Sector Ministerial	Materias a informar
Presidencia del Consejo de Ministros	2.1.34, 2.1.35, 2.2.7
Ministerio de Economía y Finanzas	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.7.1, 2.7.2
Ministerio de Energía y Minas	2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	2.1.31, 2.1.32, 2.5.4

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	2.1.9, 2.4.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.10.1
Ministerio de Relaciones Exteriores	2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.10.2
Ministerio de Defensa	2.2.5, 2.10.3, 2.10.4
Ministerio de Educación	2.1.28, 2.1.29, 2.1.30
Ministerio de Salud	2.1.15
Ministerio de Producción	2.1.26, 2.1.27
Ministerio de Transportes y Comunicaciones	2.1.20, 2.1.21, 2.1.22
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	2.1.23, 2.1.24, 2.1.25, 2.9.1, 2.9.2
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	2.8.1
Ministerio de Cultura	2.1.16, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	2.1.33, 2.2.6

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MARTICORENA MENDOZA Jorge Alfonso FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 18:56:01-0500

Dese cuenta
Sala de Sesiones
Lima, 11 de junio de 2024.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MOYANO DELGADO Martha Lupe FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 17:04:58-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MARTICORENA MENDOZA Jorge Alfonso FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 18:17:01-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAMONES SORIANO Lady Mercedes FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 19:41:19-0500

MARTHA LUPE MOYANO DELGADO
Presidenta
Comisión de Constitución y Reglamento

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: AGUINAGA RECUENCO Alejandro Aurelio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 17:12:05-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JUAREZ GALLEGOS Carmen Patricia FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 17:21:23-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VENTURA ANGEL Hector Jose FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 17:37:17-0500

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GONZALES DELGADO Diana Carolina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 20:28:40-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALVA PRIETO Maria Del Carmen FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 19:23:11-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JOSE LUIS ELIAS AVALOS
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 19:56:29-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BURGOS OLIVEROS Juan Bartolome FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 22:16:10-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SALHUANA CAVIDES Eduardo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/06/2024 09:09:47-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MUÑANTE BARRIOS Alejandro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 20:44:46-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CASTILLO RIVAS Eduardo Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/06/2024 19:20:48-0500

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

MP Dictamenes

De: Notificacion Sistemas
Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2024 09:50
Para: Elsa Mirella Portugal Sanchez; MP interno
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: f01080e96178e5012fd9d2a42e6ecdbb.pdf

[Solicitante]: eportugal@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: SE REMITE DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 7752/2023-PE, LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD REGULATORIA, ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ACORDÓ LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL ACTA PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
[Fecha]: 2024-06-12 09:50:19
[IP]: 192.168.10.219

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.